HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI

la época del imperialismo

Europa 1885-1918

WOLFGANG
J. MOMMSEN

13a. edición



HISTORIA UNIVERSAL

SIGLO XXI

Volumen 28

EL AUTOR

Wolfgang J. Mommsen

Nació en 1930, estudió Historia, Filosofía, Ciencia política e Historia del Arte en las universidades de Marburgo y Colonia. Se licenció en 1958, en 1961 fue *visiting assistant professor* en la Cornell University, Ithaca, N. Y. De 1959 a 1966 fue ayudante de investigación en el seminario de Historia en la Universidad de Colonia y catedrático de Historia en la Universidad de Karlsruhe durante el curso 1967-1968. Desde junio de 1968 es profesor de Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Düsseldorf. Es miembro del Institute for Advanced Study, Princeton, N. J. Entre sus publicaciones destacamos: *Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920,* Tübingen, 1959; *Ägypten und der europäische Imperialismus; der Aufstieg der ägyptischen nationalen Bewegung,* München, 1961; *Universalgeschichtliches und politisches Denken bei Max Weber,* en: «Historische Zeitschrift», vol. 201, 1965; *Nationale und ökonomische Faktorem im britischen Imperialismus vor 1914,* en «Historische Zeitschrift», vol. 206, 1968; *Edmund Burke und die Französische Revolution,* en: *Politische Ideologien und nationalstaatliche Ordnung,* Festchrift für Theodor Schieder, a cargo de Kurt Kluxen y Wolfgang J. Mommsen, München, 1968.

TRADUCTORES

Genoveva y Antón Dieterich

DISEÑO DE LA CUBIERTA

Julio Silva

Historia Universal
Siglo veintiuno

Volumen 28

LA EPOCA DEL IMPERIALISMO

Wolfgang J. Mommsen





siglo veintiuno editores, sa de cv
CERRO DEL AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310 MÉXICO, D.F.

siglo veintiuno de españa editores, sa
C/PLAZA 5, MADRID 33, ESPAÑA

siglo veintiuno argentina editores, sa

siglo veintiuno de colombia, ltda
AV. 3a. 17-73 PRIMER PISO, BOGOTÁ, D.E. COLOMBIA

primera edición en español, 1971

decimotercera edición en español, 1987

ISBN 968-23-0009-6 (obra completa)
ISBN 968-23-0228-5 (volumen 28)

primera edición en alemán, 1969

título original: das zeitalter des imperialismus

impreso y hecho en méxico/printed and made in mexico

Indice

Prefacio

Este volumen considera un período de la historia de Europa en el cual las clases altas y las bajas están en estrecho contacto. En los años comprendidos entre el 1885 y el 1914, Europa había alcanzado el punto culminante de su predominio mundial tanto político y económico como cultural y civilizador. La carrera imperialista de los grandes pueblos europeos hacia la conquista de los últimos territorios todavía «libres» coincidía con la extraordinaria expansión de la influencia europea en el mundo. En las capitales de Europa, que incluía también la Rusia zarista, se tomaban decisiones políticas de alcance mundial, mientras que los Estados Unidos se mantenían aún al margen. También era indiscutible el predominio de Europa, antes de 1914, en el campo económico, si bien los Estados Unidos estaban a punto de tomar la iniciativa. La primera guerra mundial provocó el rápido resquebrajamiento de la hegemonía europea en el mundo, que se tradujo en el auge de las dos grandes potencias, los Estados Unidos de Norteamérica y la URSS. Así es como se reflejan en la historia de esta época las grandezas y miserias de la vieja Europa, objeto aún de las nostálgicas conversaciones de gentes de la vieja generación.

Pero el tema central de este libro no es sólo el papel político de Europa en el mundo, ya que la historia de los grandes imperios coloniales será tratada en un volumen independiente de esta colección [vol. 29: Los imperios coloniales desde el siglo XVIII]. La política imperialista de las potencias europeas, o la *Weltpolitik,* como se solía decir en la Alemania de entonces, constituye en verdad la parte central de esta exposición; la expresión «época del imperialismo» se ha convertido, a partir de Heinrich Friedjung, en la denominación corriente para este período. Pero en este volumen trataremos sobre todo de la historia interna de Europa, con todas sus vicisitudes y conflictos, y ello acentuado por el hecho de que la política imperialista de las grandes potencias europeas de la época se explica en buena parte por su peculiar situación interna. En la primera parte intentaremos describir las fuerzas que han servido de plataforma a los acontecimientos políticos, en el sentido más estricto. Junto al desarrollo de las ideologías políticas hay que situar el desarrollo económico, así como el de las estructuras sociales. El creciente proceso de industrialización

de las economías europeas cambió radicalmente las condiciones políticas y sociales de Europa. Al hacer la exposición de los hechos, hemos dedicado particular atención, dentro de ciertos límites, a cada una de las fases del progreso industrial en los distintos países europeos, pues es frecuente que los diferentes grados de desarrollo de cada economía particular lleve aparejadas diferencias políticas fundamentales. En el capítulo dedicado a estos problemas y en el siguiente, que trata del cambio de estructuras y de los respectivos problemas sociales, hemos intentado aclarar los acontecimientos políticos atendiendo a la historia social. Por otra parte, hasta el momento faltan en este campo, y desde otros puntos de vista, los estudios exhaustivos, y sobre todo las investigaciones globales que tomen en consideración no a países o regiones particulares, sino toda Europa en conjunto. Por lo que respecta a la documentación estadística, nuestra situación es particularmente grave. Por eso estos capítulos no pretenden ser más que un esbozo, a grandes rasgos, del desarrollo económico y social de la época, en espera de que la investigación histórica logre muy pronto resultados más completos.

A diferencia de lo que se ha hecho en numerosas publicaciones sobre esta época del imperialismo, los acontecimientos de política exterior que se estudian en la segunda parte del libro no son tratados con el alcance que el título parece insinuar. Las relaciones internacionales de las potencias europeas no serán tratadas simplemente dentro del cerrado ámbito de un sistema más o menos autosuficiente, como suele ser norma en las tradicionales historias sobre la diplomacia, sino que se enfocarán en función de las respectivas situaciones internas. Por razones de índole práctica se vio la necesidad de separar los dos temas, aunque nuestra intención ha sido anteponer en la exposición los desarrollos de la política interna a los respectivos de la política externa. Esperamos que al lector no se le pase inadvertido el hecho —si bien no quedará siempre subrayado *expressis verbis*— de que las desviaciones en el desarrollo constitucional y político-social, tan típicas en la historia europea de la época, han influido profundamente en las relaciones entre las potencias europeas.

Al hablar de la Primera Guerra Mundial nos hemos apartado un poco de este esquema expositivo. El dramático choque de los dos bloques, donde se fueron alineando poco a poco la mayoría de los pueblos de Europa, produjo, como consecuencia, cambios inevitables en las estructuras constitucionales y sociales en cada uno de los Estados europeos. Los inmensos esfuerzos de movilización de todas las fuerzas disponibles, así como el

aumento de la producción bélica en gran escala, junto con los efectos inmediatos de la guerra, aceleraron al máximo las evoluciones sociales iniciadas, y en particular el proceso de democratización. Además pusieron en movimiento las fuerzas revolucionarias que, finalmente, provocaron la reestructuración de toda la Europa oriental. Para ilustrar esta situación, pareció oportuno emplear un método expositivo que examinara los diversos aspectos del desarrollo social dentro del contexto general de los acontecimientos militares y políticos.

Al describir los acontecimientos relativos a la Primera Guerra Mundial, el autor se ha visto en la dolorosa obligación de afrontar los límites de espacio que se le imponían. Sólo ha sido posible tratar de modo marginal temas que hubieran exigido un análisis más detallado, dejando completamente de lado otros. Circunstancia lamentable, además, si se tiene en cuenta que precisamente el período de la Primera Guerra Mundial es objeto de las opiniones más divergentes dentro del ámbito de la investigación histórica contemporánea. Con todo, el autor confía haber expresado sus ideas con claridad, ideas que por otra parte merecerán una discusión más detallada en otra ocasión, en la medida en que difieren de la opinión más generalizada.

Para terminar, quiero expresar mi gratitud a cuantos han colaborado, con su valiosa aportación de ayuda y consejos, a la redacción de este original.

Mi agradecimiento a la señora Gertrud Stauffer que copió a máquina buena parte del manuscrito, y al doctor Blasius y al señor Wüstemeyer por su colaboración en la corrección de pruebas.

Wolfgang J. Mommsen.

A. Tendencias básicas y fuerzas dominantes de la época.

1. Las ideologías políticas

En 1854 Leopold von Ranke definió, en sus conversaciones con Maximiliano de Baviera, la pugna de los «principios de la monarquía y de la soberanía del pueblo» como la tendencia principal de su época, junto a la «enorme expansión de las fuerzas materiales y el amplio desarrollo de las ciencias naturales»[1]. En efecto, la lucha por un orden constitucional y social nuevo —si no democrático al menos liberal— dominaba la política europea en el siglo posterior a la Revolución Francesa. En todos los estados de Europa, si bien con fuerza e intensidad diversa, el liberalismo, apoyado por la burguesía ascendente, dirigía su ataque contra el orden monárquico establecido y con ello contra el predominio fosilizado tanto social como político de las clases aristocráticas. Su programa era amplio: la garantía de los derechos humanos y civiles, la participación de la nación en la vida política dentro del marco de un sistema constitucional, la libertad de acción de cada individuo en la economía y en la sociedad, la abolición de leyes anacrónicas y la máxima limitación de la intervención del Estado en favor de los ciudadanos, constituía el programa de una nueva era, que se proponía conducir a Europa a un futuro nuevo y mejor.

Aunque desde el principio esta ideología política, animada por un ilimitado optimismo progresista, chocó con la enconada resistencia de las clases dominantes y sufrió la crítica más acerba, tanto a la derecha como a la izquierda, su marcha victoriosa resultó incontenible, entre otras razones por haberse aliado al moderno concepto de nación. En los últimos decenios del siglo XIX el programa político esencial del liberalismo europeo se había impuesto en gran medida, al menos en Europa occidental y central. La doctrina liberal había alcanzado su máximo prestigio; el liberalismo era la fuerza progresista por excelencia de la política europea. Con cierta justificación, la burguesía liberal podía considerarse en su acción política como representante de la nación entera.

Mientras el liberalismo era atacado por los conservadores como una doctrina errónea y peligrosa, que tenía que conducir

a la desintegración del orden social, éste podía defenderse tachando a sus enemigos de atrasados y de reaccionarios estériles, a la vez que los remitía al desarrollo grandioso de las fuerzas de producción. Su posición era más difícil ante los ataques de los primeros socialistas y sobre todo, desde 1847, de Karl Marx. El argumento del liberalismo según el cual «la pobreza es fundamentalmente incurable» resultó insostenible frente a la crítica socialista, al crecer, con la industrialización progresiva, las masas proletarias de las nuevas grandes ciudades. Indudablemente Herbert Spencer dio nueva vida en los años 70 a la antigua doctrina liberal —según la cual el Estado no debe turbar las leyes de la vida económica con su intervención—, al crear las tesis pseudocientíficas de la teoría de la evolución, que tanto éxito tuvieron. Por más que el socialismo interesara a los principales espíritus de Europa, de momento se trataba sólo de un fantasma y no de un peligro político real. Lo mismo cabe decir, y con más razón, de la doctrina anarquista fundamentada teóricamente por primera vez en Bakunin, a pesar de que los atentados anarquistas movilizaran sistemáticamente la opinión pública europea, llamando la atención sobre los peligros que acechaban en los fondos de la sociedad. El problema se planteaba de modo distinto en el caso de otro rival del liberalismo: la democracia radical. Esta propugnaba la realización de los principios de la soberanía del pueblo y no se contentaba con la confortable solución del «Estado de derecho» y del constitucionalismo, que garantizaba, a través de un sistema electivo más o menos plutocrático, la hegemonía política de las capas superiores de la burguesía y con ellas de las antiguas fuerzas conservadoras. Pero los radicales aún eran demasiado débiles para hacer tambalearse la posición dominante de la ideología liberal en la conciencia política de Europa. El liberalismo seguía siendo el único movimiento político con posibilidades de disputar con éxito a los grupos aristocráticos tradicionales el poder en el Estado.

La situación cambió radicalmente durante los años 80 del siglo XIX. Antes de que se hubiera resuelto la batalla por la transformación del antiguo orden estatal y social monárquico de Europa, en el sentido de los principios del «Estado de derecho» y de la soberanía del pueblo, las fuerzas del liberalismo comenzaron a declinar. El movimiento liberal, que hasta entonces había sido incontestablemente el partido del progreso, cayó en un letargo político. Hacia 1885 se habían impuesto en gran medida, al menos en Europa occidental y central, los objetivos originales del liberalismo; es decir, conquistar, en el marco de un sistema constitucional, el derecho de partici-

pación para las clases burguesas y fijar constitucionalmente los derechos de libertad del ciudadano. Pero en el ascenso de la clase trabajadora se anunciaba una nueva fuerza política, que vehementemente ponía en tela de juicio la misión «natural» de la burguesía a la cabeza del Estado y de la sociedad, y tachaba de usurpación sus privilegios sociales. En consecuencia, el liberalismo concentró sus energías en la defensa de las posiciones políticas y sociales conquistadas, renunciando a la parte aún no realizada de su programa político. Bruce Smith escribió en 1887, en su escrito programático *Liberty and Liberalism,* lo siguiente: «La función agresiva del liberalismo se ha agotado; ahora sólo le queda, haciendo algunas excepciones, la tarea de vigilar sobre los derechos iguales de los ciudadanos y su conservación. Esta es en la actualidad la verdadera tarea del liberalismo» [2].

La debilitación del empuje liberal en los últimos decenios anteriores a 1914 se hizo patente en todos los países europeos, aunque, de acuerdo con las diferentes situaciones políticas, de forma muy diversa. En este proceso fue decisiva la creciente discordia en las propias filas sobre la cuestión de si era más oportuno limitarse a defender los principios de la formal igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el marco de un sistema constitucional de tipo más o menos oligárquico, o si, por el contrario, era necesario colocarse a la cabeza del movimiento «progresista», que propugnaba amplias reformas sociales y la completa democratización del Estado, como la realización máxima de la idea de un orden social y político liberal.

El fracaso del gobierno liberal de Gladstone al plantearse en 1885 la concesión del «Home Rule» a Irlanda, fue una consecuencia de la aguda discordia que existía entre el ala tradicionalista de los «Whigs», encabezada por Lord Hartington, y el ala social-reformista, dirigida por Charles Dilke y Joseph Chamberlain. Incluso después de la secesión del ala derecha, la disensión interna fue durante años la causa principal de la impotencia política del partido liberal inglés. El viejo programa de Gladstone «peace, retrenchment and reform», había perdido toda su fuerza de atracción. Dos decenios más tarde, sin embargo, el liberalismo inglés logró recobrarse, hasta el punto de poder asumir durante algunos años la dirección de los destinos de Gran Bretaña.

En Francia, el liberalismo sucumbió al triunfar. Los principios liberales esenciales habían sido realizados con la creación y la defensa eficaz de la Tercera República. Los motivos defensivos sustituyeron a los motivos ofensivos en la lucha

política cotidiana; sólo en la cuestión de la relación Iglesia-Estado se mantuvo una cierta unidad de las fuerzas liberales.

Este proceso de desintegración del liberalismo se refleja con mayor claridad aún en Italia. Después de la victoria absoluta del constitucionalismo liberal, surgió un sistema parlamentario de marcado carácter oligárquico, proceso que fue fomentado por la no-intervención de los católicos en la vida política de la joven nación italiana, impuesta por el Papa. Un pequeño grupo de políticos dominaba el gobierno y el Parlamento, mientras las masas del país permanecían en la apatía. En estas circunstancias la palabra «liberal» perdió todo su sentido en la vida pública italiana. Con razón el diputado liberal Prezzolini pudo escribir en 1904: «Desde la *Unità Cattolica* a Enrico Testi, desde el *Giornale d'Italia* a los republicanos, todos somos liberales» [3].

En Alemania la situación del liberalismo en los últimos decenios del siglo XIX era mucho más compleja. Bajo los golpes de la política de Bismarck el movimiento liberal se escindió en dos grupos: los nacional-liberales, que aceptaban en principio la constitución bismarckiana y se convirtieron en dóciles aliados del canciller en su lucha contra el catolicismo y la clase obrera, y por el otro lado los progresistas, que se consumían en su oposición intransigente, cayendo en un doctrinarismo de principios. Ambas tendencias se debilitaron por constantes secesiones, lo que constituye un claro síntoma de la impotencia del liberalismo en la Alemania guillermina.

El desarrollo del liberalismo en Europa oriental y en Rusia fue todavía más desfavorable. El liberalismo ruso, a pesar de encontrarse en franca minoría frente a las masas populares, pudo apuntarse en la revolución de 1905 una victoria de prestigio frente al régimen autoritario zarista, pero no fue lo suficientemente sólido como para influir en el curso de los acontecimientos. Desde 1907 su actividad política se limitó a protestas impotentes en los *zemstvos* y en la *Duma.*

El hecho de que hacia 1890 su rival histórico, el conservadurismo, se viera empujado también a posiciones defensivas constituía una débil satisfacción para el liberalismo europeo. Indudablemente, las fuerzas conservadoras aún ocupaban importantes posiciones de poder en la mayoría de los Estados europeos, y en algunos casos incluso poseían el poder absoluto, como en el caso de Rusia y Austria-Hungría. Sin embargo, los argumentos tradicionales de la ideología conservadora, especialmente su insistencia sobre el origen divino del orden social y político establecido y la legitimidad exclusiva del derecho tradicional, estaban perdiendo su fuerza de con-

vicción en una época de secularización de todas las relaciones vitales y de creciente legislación estatal. Aún en los años 50 Friedrich Julius Stahl había desarrollado todo un sistema conservador de filosofía del Estado sobre bases cristianas, y diez años más tarde W. E. H. Lecky glorificaría a la aristocracia terrateniente como la élite gobernante natural de la nación inglesa. A partir de 1885 se buscarán en vano teorías políticas y sociales de carácter conservador que merezcan este nombre. Un conservador apasionado y sentimental como W. H. Mallock se quejaba en 1894 en su libro *Social Equality* de que el conservadurismo no tenía a mano más que argumentos dogmáticos anticuados para combatir las nuevas ideas igualitarias[4]. El programa político de lord Cecil, *Conservatism* (1911), que constituye uno de los pocos ejemplos de escritos políticos del partido conservador con carácter fundamental redactado en estos años, no pasa de la mera repetición de las ideas de Burke y Disraeli. Ante el despertar político de las grandes masas se demostró que el «slogan» de lord Randolph Churchill por una *Tory Democracy* no resolvía el dilema del conservadurismo, así como tampoco en su momento lo había resuelto Bismarck con su especulación sobre los afectos conservadores del sufragio universal.

En tales circunstancias el conservadurismo europeo tuvo que optar por mantener rígidamente sus viejas tradiciones, aunque ello no fuera ventajoso desde el punto de vista político. En los últimos decenios anteriores a 1914, el conservadurismo encontró sus principales puntos de apoyo ideológico en la Iglesia: en el anglicanismo en Inglaterra, en el catolicismo en Francia y los demás países latinos, y en el protestantismo, fiel a la monarquía, en Alemania. En vista de las fuertes tendencias secularizadoras que aparecieron en toda Europa durante el proceso de industrialización, esta alianza era problemática y a la larga resultó poco ventajosa para las dos partes. Las viejas capas aristocráticas, aún fuertes en sus tradicionales posiciones de poder, se mantenían únicamente gracias a una hábil política de intereses, atrayendo a las élites burguesas y asegurándose el apoyo de gran parte del campesinado. Pero en fin de cuentas ninguno de estos dos métodos bastó para resistir el empuje de las fuerzas democráticas. En consecuencia, los conservadores tendieron en los años anteriores a 1914 a atrincherarse en las posiciones sociales y políticas que aún se hallaban en su poder, sobre todo en las fuerzas armadas. La marina en Inglaterra y el ejército en el continente, fueron el refugio donde se perpetuaron las tradiciones aristocráticas en una sociedad que iba democratizándose. Al final los conservadores se entregaron sin

reservas al nuevo nacionalismo agresivo, que surgió hacia principios de los años 80 en Europa, intentando vencer al rival liberal con una ideología nacionalista militante.

La idea de la nación como comunidad de acción de todos los ciudadanos políticamente maduros y pertenecientes a una misma lengua estuvo en principio estrechamente ligada a las ideas liberales y democráticas. Especialmente el liberalismo italiano y alemán habían concebido la unidad nacional y la libertad política como las dos caras de una misma moneda, mientras que los conservadores en general miraban con la más extrema desconfianza el advenimiento del orden nacional-estatal. Hombres de Estado conservadores como Disraeli, en Gran Bretaña, y Bismarck, en Prusia-Alemania, habían roto pronto con la tradición conservadora en este punto; el primero con la propagación de un imperialismo romántico, el segundo con su política fundadora del Reich. Pero desde 1885 en Inglaterra, 1890 en Francia e Italia y más tarde en Alemania y Rusia, las fuerzas conservadoras jugaron consecuentemente a la carta del nacionalismo patético, con la esperanza de frenar la pérdida de influencia sobre las masas favoreciendo una política decididamente nacionalista.

Jacob Burckhardt comprendió perfectamente la fuerza tremenda del nuevo nacionalismo que desde 1870 se preparaba para transformar radicalmente la estructura política de Europa. «En primer lugar la nación desea —real o aparentemente— poder. Se abomina de la existencia dentro del marco de un pequeño Estado como si fuera una vergüenza; la actividad en él no es satisfactoria para individuos dinámicos; se quiere pertenecer a una unidad grande y esto significa claramente que el primer objetivo es el poder, la cultura es en el mejor de los casos sólo un objeto secundario. Sobre todo, se desea hacer valer hacia el exterior la voluntad común, desafiando a los demás pueblos» [5]. Estas palabras se referían al recién fundado Reich alemán, pero son válidas sin duda para el desarrollo posterior. Ya durante las crisis diplomáticas de los años 80 se hizo patente la fuerza explosiva del nacionalismo. Para el desarrollo histórico de Europa fue decisivo que en pocos años éste se transformara en imperialismo. A los pueblos ya no les bastaba con jugar un papel dentro del sistema de Estados europeos; ambicionaban ser una potencia ultramarina. Los decenios siguientes trajeron la encarnizada lucha de las naciones europeas por territorios coloniales en ultramar. La penetración política y económica de los territorios por desarrollar se convirtió en la gran empresa nacional de la época.

Con este imperialismo nacionalista, que hay que distinguir

claramente del colonialismo europeo de siglos anteriores, surge un nuevo fenómeno en la política europea que determinará toda una época. Ya no se trataba, como hasta entonces, de adquirir territorios en ultramar para la explotación económica o para la colonización, sino de la expansión o apropiación de territorios ultramarinos con la intención declarada de abandonar el propio «status» de gran potencia europea y convertirse en gran potencia mundial, aprovechando las posibilidades económicas, las ventajas estratégicas, e, incluso, el «material humano» de las colonias, para fortalecer la propia posición de dominio nacional. En todo esto jugaba un importante papel la convicción de que sólo las naciones capaces de transformarse en imperios se impondrían en el futuro[6]. Max Weber formuló una opinión muy extendida en aquel tiempo al afirmar, en 1895, que una enérgica política de potencia mundial era la lógica consecuencia de la fundación del Reich por Bismarck[7].

Aunque interpretemos el imperialismo europeo de la época entre 1885 y 1914 como una forma extrema del pensamiento nacionalista, no negaremos que también intervinieron en su expansión otros factores de importancia. La doctrina pseudohumanitaria de Kipling del «white man's burden» (la responsabilidad del hombre blanco), del deber de las naciones blancas de transmitir a los pueblos subdesarrollados las conquistas de la civilización europea, no resultaba una ideología hueca para sus contemporáneos, aunque generalmente iba unida a la idea de que las razas blancas, y especialmente las naciones teutónicas, estaban llamadas a dominar a los pueblos de color gracias a su mayor vitalidad y a su mayor cultura. La conciencia de una misión religiosa por cumplir también formaba parte de la nueva ideología imperialista. La empresa de llevar el cristianismo a los pueblos de Africa y Asia justificó demasiadas veces la ocupación imperialista de territorios ultramarinos. Lo mismo cabría decir de la lucha contra el comercio de esclavos en los territorios de Africa interior. Sin embargo, estos factores son secundarios si se comparan con los motivos económicos que contribuyeron a desencadenar las grandes energías imperialistas que comenzaron a actuar en todo el mundo desde 1885. La agitación política de la época repite una y otra vez que hay que abrir en ultramar nuevos mercados y nuevos campos lucrativos de inversión a la propia economía y al propio capital, si se quiere evitar el estancamiento progresivo de toda la economía nacional. En los discursos de Joseph Chamberlain, Jules Ferry, Francesco Crispi, o en los escritos del «Alldeutscher Verband» (Unión Pangermánica), se repetía en mil variaciones este punto de

vista, y no cabe duda que encontraba un eco positivo en amplios sectores de la opinión pública.

Sin embargo, el análisis frío demostraba que los nuevos territorios, adquiridos con gran apresuramiento desde comienzos de los años 80, no producían de momento resultados económicos positivos, excepto en los casos de determinados grupos económicos restringidos, beneficiados por concesiones monopolistas del Estado. La teoría económica del imperialismo como fue formulada hacia 1900 por C. A. Conant y John Atkinson Hobson y más tarde desarrollada por Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo y Vladimir Ilitchi Lenin, se trasladó en consecuencia a la esfera más sutil de la argumentación capitalista-financiera. Según Hobson, la estructura plutocrática de la sociedad capitalista, en vista de que la demanda interior se ve frenada por los ingresos de la gran masa, mantenidos constantemente bajos, conduce crónicamente a una acumulación excesiva de capital por invertir. Por esta razón los capitalistas, para evitar el dilema del beneficio decreciente, se ven obligados a buscar lucrativas posibilidades de inversión en territorios ultramarinos, en vez de hacerlo en los mercados interiòres demasiado limitados. De acuerdo con estas ideas, las capas superiores de los Estados industriales europeos presionan al Estado con ayuda del chauvinismo[8] popular previamente fomentado, para que éste cree, a través de intervenciones políticas, posibilidades de inversión para el propio capital y la propia economía en regiones ultramarinas subdesarrolladas.

Las premisas de la teoría del imperialismo de Hobson se basaban en la situación económica inglesa de su época y, en efecto, podemos observar durante aquellos años un aumento considerable de las inversiones ultramarinas inglesas, al mismo tiempo que síntomas evidentes de estancamiento en el mercado interior. Sin embargo, sólo la mitad aproximada del capital británico fluía, como de costumbre, a los dominios y colonias, y sólo una pequeña fracción de éste era invertido en los territorios recientemente adquiridos; es decir, la realidad económica contradecía a la teoría económica del imperialismo. Incluso en un período del desarrollo económico mundial, en el que se imponían aranceles proteccionistas discriminatorios para proteger en la mayor medida posible la economía del país frente a la competencia económica del exterior, los inversionistas británicos en general preferían los mercados mundiales a los mercados del imperio británico.

No obstante, la idea de que el desarrollo económico capitalista tarde o temprano alcanzaría una barrera natural, en el momento en que se agotara la capacidad de absorción de los

mercados existentes, dominaba la conciencia de los contemporáneos. No sólo los marxistas, como Lenin o Rosa Luxemburgo, opinaban que un día la constante expansión de las fuerzas productivas y la demanda de productos industriales llegarían a un punto muerto. Era una opinión muy extendida, que había que prepararse a tiempo para esta eventualidad. En un futuro más o menos lejano las naciones industriales europeas tendrían que limitarse a su propio espacio económico nacional, por lo tanto una política previsora debía asegurar a la economía nacional territorios ultramarinos, o, según la fórmula de lord Rosebery, característica de la época: «to peg out claims for prosperity». Especulaciones de este tipo indujeron a Max Weber a reclamar en 1897, con ocasión del primer proyecto naval alemán, una decidida política imperialista: «Unicamente la falta absoluta de visión política y el optimismo ingenuo pueden desconocer que las inevitables tendencias expansionistas político-comerciales de los pueblos civilizados burgueses, conducen, tras un período de competencia aparentemente pacífica, de nuevo a la encrucijada en que sólo la fuerza decidirá el grado de participación de cada nación en el dominio de la tierra y con ello también el radio de acción de su población, especialmente de su clase trabajadora»[9]. La variante socialista del pensamiento imperialista, que tiñe débilmente las frases de Max Weber, une estrechamente el nivel de vida de las masas trabajadoras con el éxito o fracaso de la política expansionista de ultramar y fue un argumento predilecto de los políticos de la época. Cecil Rhodes y Joseph Chamberlain en Inglaterra, y Friedrich Naumann en Alemania —por citar sólo unos ejemplos— solían justificar su imperialismo nacional con la tesis de que sólo una política ultramarina poderosa garantizaría a la larga la seguridad económica de los trabajadores.

A pesar de todo, los motivos económicos, tanto los de carácter primario como los de carácter secundario, contribuyeron a la exacerbación de las pasiones imperialistas de la época, únicamente en la medida en que iban unidas a expectativas y ambiciones políticas de matiz nacionalista. Sólo en la encrucijada de las rivalidades nacionalistas, el capitalismo moderno empezó a desarrollar rasgos imperialistas. Las causas fundamentales del imperialismo se hallan precisamente en el nacionalismo de aquellas capas sociales que pasaron a un primer plano con el desarrollo de la sociedad industrial, y no en unas supuestas necesidades objetivas del capitalismo de apoderarse de mercados ultramarinos. Es fácil caer en error al enfocar este problema, como demuestra el caso del estadista francés Jules Ferry, que elogiaba ante una nación reacia las ventajas econó-

micas de las adquisiciones ultramarinas, cuando lo que le movía en el fondo era la convicción vitalista de que «las naciones sólo son grandes por la actividad que desarrollan»[10]. Las grandes adquisiciones coloniales debían, pues, inspirar grandes empresas a los franceses, es decir, funcionar como acicate para el despliegue de nuevas energías dinámicas. Motivos parecidos aparecen a su vez en el imperialismo italiano de aquellos años. El imperio colonial ultramarino constituía para los contemporáneos más bien la condición de la grandeza nacional, y no tanto la base de prosperidad futura.

El nuevo imperialismo militante, que a menudo iba aliado a los más bajos instintos de las masas y producía las formas más extravagantes de chauvinismo y de glorificación brutal del poder, encontró apoyo en los social-darwinistas, que trasladaron la doctrina de la «lucha por la existencia» a la vida de las naciones. K. Pearson y B. Kidd en Inglaterra interpretaron las rivalidades nacionales de su tiempo como lucha implacable entre razas superiores y razas inferiores. Ambos eran partidarios, además, de una política de reformas sociales que conservara la capacidad de rendimiento y las cualidades biológicas superiores de la raza inglesa o que incluso las incrementara sistemáticamente. Las ideas social-darwinistas encontraron gran eco entre los pensadores ingleses. Pero también en el continente tuvieron aceptación las ideas del determinismo racial, sobre todo en Alemania y en los escritos del «Alldeutscher Verband», aunque también entre publicistas de renombre como Friedrich Naumann y Friedrich von Bernhardi. Siguiendo las huellas del social-darwinismo pronto surgieron teorías racistas sobre la superioridad de los «pueblos nórdicos», como las formuladas por Houston Stewart Chamberlain, que en sus «Bases del siglo XIX» predicaba un primitivo odio a los eslavos.

El advenimiento de la idea imperialista provocó un cambio fundamental en la estructura de la conciencia política europea. El liberalismo fue el primero en acusar este cambio. El pensamiento clásico liberal, que pretendía reducir en la mayor medida posible la intervención del Estado y veía en las leyes «naturales» del librecambio la forma óptima del orden económico, se reconciliaba difícilmente con la idea de que el Estado, a través de una costosa política expansionista, abriera a la economía nacional el camino hacia los territorios ultramarinos. Pero el espíritu de la época era más fuerte y pronto los liberales descubrieron sus inclinaciones imperialistas.

Bajo la dirección de lord Rosebery se formó en Inglaterra, ya en los años 90, un imperialismo liberal que rompió abier-

tamente con las tradiciones de Gladstone, compitiendo con los conservadores en su afán por aumentar los territorios del imperio británico. El imperialismo liberal subrayaba los factores emocionales de la superioridad y de la unión de la nación británica en la metrópoli y en ultramar, siguiendo la antigua ideología imperialista formulada por Charles Dilke en *Greater Britain* (1868) y John Robert Seeley en *The Expansion of England* (1882). «What is Empire but the predominance of race?» (¿Qué es el imperio sino el predominio de la raza?), con esta frase lord Rosebery expresaba la actitud básica de los imperialistas liberales ante el imperio [11]. Al orgullo de las pasadas conquistas de los colonizadores ingleses se unía una conciencia mesiánica no desprovista de sentimientos patrióticos. «Somos responsables —dijo lord Rosebery en 1893— de que el mundo, en la medida en que aún está por moldear, reciba un carácter anglosajón y no otro» [12].

En Alemania la doctrina del Estado nacional fuerte, formulada por Heinrich von Treitschke, había preparado al liberalismo nacional para el giro hacia el imperialismo, o al menos hacia una política consecuentemente expansionista apoyada por un fuerte potencial militar. En contradicción con las ideas liberales tradicionales, sobre todo la doctrina del derecho natural que por sí había encontrado un eco muy débil en el liberalismo alemán, Treitschke definía el Estado como la organización de la nación en función del poderío y llegaba a la conclusión de que únicamente un gran Estado militar respondía a este ideal. En la era de transición de un sistema europeo de Estados a un sistema mundial, estos argumentos suponían la defensa de una ambiciosa política imperialista [13]. En efecto, en 1897 formuló abiertamente este pensamiento al afirmar: «En la repartición del mundo no-europeo entre las potencias europeas, Alemania siempre ha salido perjudicada. La cuestión de si podemos convertirnos en potencia más allá de los mares, decide nuestra existencia como potencia europea. Ante la terrible perspectiva de un mundo repartido entre Rusia e Inglaterra, verdaderamente no sabemos lo que sería más inmoral y espantoso, el 'knut' ruso o la bolsa de dinero inglesa» [14]. Las arengas a favor de una política mundial alemana decidida, encontraron amplio eco en todo el ámbito liberal alemán. Así, por ejemplo, Friedrich Naumann, cuyas convicciones políticas le situaban más cerca del ala izquierda del liberalismo que de los liberales nacionales, intentó en su libro *Demokratie und Kaisertum* (1900), que gozó de gran popularidad en su tiempo, poner las bases ideológicas de un imperialismo nacional sostenido por la izquierda democrática.

En Francia, por el contrario, la nueva doctrina imperialista en un principio encontró grandes obstáculos. Gran parte de la izquierda nacionalista, al igual que Clemenceau, miraba con gran desconfianza la política de expansión colonial, temiendo que la nación francesa se viera distraída por ella de su objetivo más importante: la recuperación de Alsacia-Lorena. Un pequeño grupo de políticos colonialistas encabezados por Eugène Étienne y apoyados desde 1890 por el «Comité d'Afrique Française», luchó denodadamente para convencer al pueblo francés de la necesidad de una costosa política colonial, hasta que, a principios de siglo, la idea imperialista comenzó a adquirir popularidad. La superación de la antigua tradición liberal, que prohibía al Estado la intervención en los asuntos sociales y económicos —tradición que por entonces fue renovada por François Dupont-White en su libro *L'individu et l'État*—, a favor de una política imperialista activa, fue más difícil en Francia que en Inglaterra o Alemania. Por esta razón, el nacionalismo emocional como motor de la política expansionista ultramarina actuó más en Francia que en cualquier otra nación. Sin embargo, el imperialismo francés seguía fiel a los ideales de la Revolución Francesa al conceder sistemáticamente los derechos de ciudadanía francesa a todos sus súbditos de color. «Expansión y mezcla de razas, son las condiciones imprescindibles de la vitalidad y la perduración de las naciones», escribió en 1897 Lavisseau en sus *Principes de colonisation* [15].

La idea imperialista constituía un elemento extraño dentro de la ideología liberal tradicional y, lógicamente, el liberalismo europeo durante la lucha en pro o en contra del imperialismo se escindió, al menos temporalmente, en facciones que se combatían encarnizadamente. Así, el liberalismo europeo pasó a través de una grave crisis, de la que nunca llegó a recobrarse por completo. Porque por muy elásticos que se formularan los ideales imperialistas, la contradicción interna entre una política fuerte de expansión y los ideales libertarios del liberalismo tradicional era difícilmente superable. El ala izquierda intentó, sobre todo en Inglaterra y Alemania, una «renovación del liberalismo» a partir de 1895. Hombres como Samuelson, Hobhouse y Hobson en Inglaterra y Friedrich Naumann y Theodor Barth en Alemania, propugnaron en numerosos escritos una apertura del liberalismo hacia la izquierda. La idea anticuada del «laissez-faire» debía ser sustituida por un vasto programa de reformas político-sociales El principio liberal de la libertad del individuo debía ser adaptado a las exigencias de la sociedad de masas de la era industrial y de este modo atraería de nuevo a amplias capas de la población. Al mismo tiempo había

de realizarse el principio de la soberanía del pueblo y había que acabar consecuentemente con los restos de la sociedad de privilegios aristocráticos del siglo XVIII. Este camino fue seguido en Inglaterra por Campbell-Bannerman y Lloyd George a partir de 1905, sin que por este motivo se frenara el auge del «Labour Party». Menos éxito aún tuvo Friedrich Naumann en su intento de socavar las posiciones políticas de la social-democracia alemana con la ayuda del «Nationalsozialer Verein» (Asociación nacional-social), fundado en 1898. Sus esfuerzos por crear un frente unificado del liberalismo contra las fuerzas conservadoras de la Alemania guillermina y conseguir al mismo tiempo una adaptación del programa político liberal a las necesidades de la sociedad industrial igualitaria, no fueron tampoco coronadas por el éxito. Especialmente su idea de democratizar la vida económica con la creación de una especie de parlamentarismo en las fábricas cayó, dadas las circunstancias, en el más absoluto vacío.

Los signos de la época —no sólo en Alemania— iban en la dirección opuesta. El movimiento liberal y su inspirador, la burguesía, temían precisamente que un exceso de democracia pudiera conducir irremediablemente al reino del terror de las masas. Los sentimientos de esta índole estaban muy extendidos, especialmente en Francia, donde se habían hecho amargas experiencias con el sistema formalmente democrático del cesarismo. Así, por ejemplo, Leroy-Beaulieu define la defensa de la libertad individual como la tarea del liberalismo frente a la alternativa amenazadora de la dictadura de las masas o el despotismo burgués o militar[16]. Aunque con la caída de Boulanger en 1889 el peligro de un nuevo cesarismo había desaparecido en Francia, comenzaba ya a formarse un nuevo conservadurismo revolucionario, diferente del antiguo, desprestigiado por completo, que se proponía el engrandecimiento de la nación francesa y del Estado francés. Los ideales individualistas del liberalismo y las ideas corporativas del conservadurismo tradicional fueron sustituidos por la entrega emocional al organismo colectivo de la «grande nation française». Maurice Barrès propagó en numerosos escritos el mensaje del nuevo nacionalismo «integral», y Edouard Drumont añadió con su libro *La France juive* (1886) el componente antisemita que llegaría a su cenit espectacular con el «affaire» Dreyfus. El nuevo conservadurismo radical, que se dirigía tanto contra la decadencia burguesa como contra el materialismo burgués, halló un caudillo indiscutible en Charles Maurras. Este fundó en 1899 la revista mensual «Action Française», que incluía la creación de un Estado corporativo de carácter autori-

tario entre los objetivos principales de su programa. Un nacionalismo extremo, casi mítico, elementos antisemitas y racistas y el rechazo, puramente negativo, del sistema social burgués, unidos a una idea monárquica de matiz clerical, crearon una ideología de fuerte atracción emocional, en la que no faltaba el factor militarista que oponía radicalmente las virtudes militares —valor, entrega al Estado y a la nación y obediencia absoluta— a los ideales liberales de la burguesía. La «Action Française», que en un principio sólo recibió el apoyo de un reducido grupo de intelectuales, se convirtió pronto en el eje de cristalización de todas las fuerzas políticas opuestas a los ideales de la Revolución Francesa, a los derechos humanos, al individualismo, al pacifismo y a los ideales materialistas de la época. La «Action Française» proclamaba con fanatismo irracional que el poder de la nación era el máximo valor, una actitud que ya durante el «affaire» Dreyfus le permitió declarar que el error de la justicia carecía de importancia si favorecía a los intereses nacionales.

La «Action Française» fue la vanguardia de una nueva forma de nacionalismo que halló su continuación —en proporciones gigantescas— en los movimientos fascistas de los años 20 y 30. Aunque durante los decenios anteriores a la Primera Guerra Mundial no aparecieron movimientos parecidos en el resto de Europa, ya existían numerosos fenómenos y tendencias de este tipo. Sobre todo el nacionalismo radical de los movimientos clandestinos irredentistas de Europa sud-oriental ofrecía en muchos aspectos rasgos muy parecidos. También el movimiento nacional alemán de Schöenerer y los partidos checos que rivalizaban con él, desarrollaron en el ambiente caldeado por las disputas nacionales, que caracterizaba a la monarquía austro-húngara, formas parecidas de nacionalismo radical y antisemita. De igual forma dentro del «Alldeutscher Verband», especialmente desde que Heinrich Class asumiera su dirección en 1894, se hizo notar la influencia de ideas nacionalistas y antisemitas. En general el antisemitismo empezó a extenderse por toda Europa desde mediados de 1880. Junto al postulado tradicional que reclamaba la asimilación de los judíos en las diversas naciones y la renuncia a sus peculiaridades religiosas y culturales —como había reclamado con gran patetismo Heinrich von Treitschke en Alemania— aparecieron voces que pedían la exclusión radical de los judíos de toda manifestación de la vida nacional e incluso llegaron a formular oscuras amenazas de un posible exterminio, si aquellos no se decidían a emigrar voluntariamente [17]. Indudablemente estas tendencias quedaban en general al margen de la vida social y tampoco faltaron

personalidades que atacaran públicamente los excesos del nacionalismo exacerbado. Pero la realidad es que las ideas nacionalistas de este tipo empezaban a admitirse en la sociedad, sobre todo cuando se presentaban envueltas en ropajes idealistas, como, por ejemplo, en el caso de las teorías del general Friedrich von Bernhardi, que justificaban el nacionalismo militante en nombre de las grandes tradiciones del espíritu alemán.

Fuera del ámbito propiamente político, la tendencia a modos de pensar irracionales se mostró aún más fuerte. La cáustica crítica que formuló George Sorel contra el racionalismo y el intelectualismo «abstracto» de la cultura burguesa de su tiempo, es un síntoma muy significativo de los cambios que se operaban en la conciencia intelectual y política de Europa a finales del siglo XIX. Según Sorel, el humanismo espontáneo y auténtico no puede realizarse dentro de las estructuras fosilizadas de la sociedad burguesa. Europa sólo puede librarse de su estado decadente y crear el espacio para el resurgimiento de una cultura nueva, más genuina —un «ricorso», en el sentido de la teoría histórica de Giambattista Vico— destruyendo por completo la cultura racionalista de Occidente. La crítica que Sorel hizo de la cultura europea se asemejaba en muchos puntos a la que hiciera Friedrich Nietzsche, aunque no buscaba la solución, como éste, en formas de organización social individualistas, sino en formas colectivistas. Un cuarto de siglo antes, Nietzsche había proclamado que la «subversión de todos los valores» y la renuncia a la «moral de rebaño» cristiana eran la única solución para salir del círculo vicioso en que se encontraba la cultura europea. Es muy característico que las obras de Nietzsche encontraran cada vez más eco a partir de los años 90. El individualismo profundamente aristocrático de Nietzsche, que consideraba infinitamente más importante que unas pocas personalidades grandes intensificaran su existencia, a que la masa mejorara su nivel de existencia físico y espiritual, conquistó pronto gran popularidad. Su polémica contra los «demasiados» de la moderna sociedad de masas igualitaria fue recibida positivamente en muchas partes. El gran éxito del libro de Julius Langbehn «Rembrandt als Erzieher» (1891), que movilizaba una confusa amalgama de teorías románticas, nacionalistas y antisemitas contra la cultura racionalista de su tiempo, constituye otra prueba de la irrupción de ideas antiracionalistas en la conciencia intelectual del fin de siglo. Dichas ideas aún se presentaban envueltas en un ropaje apolítico, de acuerdo con la actitud de los intelectuales europeos, los cuales se distanciaban de la vida política, que consideraban envilecedora. Sólo Italia constituía una excepción, pues muchos desta-

cados personajes del mundo intelectual italiano se dedicaban a los problemas políticos de actualidad, como, por ejemplo, Benedetto Croce o Gabriele d'Annunzio.

Sin embargo, tampoco en Italia faltaban los síntomas de un movimiento contrario a las tradiciones liberales. Las teorías sociológicas sobre la élite de Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto anunciaban nuevas formas del pensamiento político. La teoría de las aristocracias dominantes formuladas por Mosca en su obra *Sulla teoria dei governi e sul governo parlamentare* (1884) y más tarde desarrollada en *Elementi di scienza politica* (1896) era un reflejo fiel de la praxis política del parlamentarismo italiano de los años 80 y 90, que se había separado por completo de las bases ideológicas de la democracia liberal y transformado en un sistema oligárquico, en el que pequeños grupos de políticos profesionales se repartían los puestos principales del Estado. En franca oposición a los postulados de la doctrina democrática, Mosca define la esencia de toda política como la lucha constante de reducidas élites por el poder en el Estado. Todas las formas de gobierno, tanto el sistema parlamentario como la monarquía absoluta, son esencialmente oligarquías. Toda élite dominante crea una ideología de acuerdo con su posición y sus intereses, destinada a justificar moralmente su dominio ante la masas del pueblo. Incluso el parlamentarismo democrático es sólo un medio para camuflar la realidad de que el poder se encuentra en manos de una minoría. La desmitificación de la idea democrática iba unida en las teorías de Mosca a una acerba crítica del sistema parlamentario, que se definía como una forma degenerada de la democracia, en la que todas las situaciones del Estado se transformaban en gigantescas máquinas de propaganda electoral.

Mosca permanecía en sus ataques contra el parlamentarismo sobre el terreno de la doctrina liberal, rechazando enérgicamente todas las posibilidades de cesarismo formalmente democrático o de despotismo burocrático, pero Vilfredo Pareto fue mucho más allá con sus críticas de la democracia «plutocrática». En su *Trattato di sociologia generale* (1916) desarrollaba, apoyándose en una enorme cantidad de material histórico, la tesis de que toda política no sólo estaba determinada exclusivamente por las élites dominantes, sino que su modo de actuar se reducía esencialmente a dos tipos de comportamiento instintivo: el «instinto combinatorio» y el «instinto de formación y conservación de grupos». Al «instinto combinatorio» corresponde, en la teoría de Pareto, la astucia de los «zorros», nacidos para dominar, es decir, de las élites aristocráticas que ambicionan el poder. A estos se oponen los

«leones», que serían los grupos unidos por intereses materiales o ideológicos, que intentan con tesón defender sus posiciones de poder. La política es, pues, una constante lucha por el poder entablada entre grupos de uno y otro tipo. Según Pareto la política se mueve por motivos cuasi-biológicos, y no por principios racionales. Por lo tanto, todas las teorías políticas racionales, incluidos los ordenamientos jurídicos, carecen de validez objetiva, ya que son simplemente una superestructura ideológica para justificar el poder o las ambiciones de poder de las élites políticas. Se trata, en fin de cuentas, de simples «derivados» de los instintos políticos fundamentales, de los «residuos», como se expresa Pareto a falta de criterios positivos de descripción. Pareto despreciaba el orden social burgués y no lo disimulaba; veía en él el dominio corrupto de una élite interiormente degenerada, que se aferraba por todos los medios a sus posiciones de poder dentro del Estado. Solamente la aparición de nuevas élites solucionaría la crisis en que se hallaba la sociedad burguesa. No cabe duda de que esta teoría política, esencialmente irracional o al menos biologista, preparó la victoria posterior del fascismo en Italia, siquiera sólo por su manera de ridiculizar y despreciar los esfuerzos del liberalismo decimonónico por encontrar caminos y medios de resolver los conflictos políticos y sociales en forma legal, en vez de esperar su solución de la instancia irracional de la violencia.

Mientras se formaban en la derecha hacia fines del siglo XIX y durante los quince primeros años del siglo XX las tendencias ideológicas que después de la Primera Guerra Mundial constituirían la principal amenaza al liberalismo y a la democracia, en la izquierda se agrupaban contrincantes muy considerables por su número. En el curso de la industrialización los trabajadores fueron desligándose en Europa del sistema de tutela liberal todavía típicos a mediados del siglo XIX. Las direcciones ideológicas dentro del movimiento obrero, que se disponía a pasar a la lucha abierta contra su rival burgués, fueron en principio muy diversas, de acuerdo con las tradiciones políticas y la situación social de los diferentes países europeos. Anarquismo y socialismo, sindicalismo y reformismo discutían acalarodamente el camino que había que tomar para liberar a la clase obrera del yugo de la sociedad burguesa capitalista. La oposición profunda entre los anarquistas del grupo de Bakunin y los socialistas marxistas, que condujo a la disolución de la Primera Internacional Socialista, ocupó también el primer plano de las discusiones ideológicas socialistas durante los últimos decenios anteriores a la Guerra Mundial. La doctrina anarquista

de la «acción directa» que propugnaba la debilitación y la destrucción final del orden establecido a través de pequeños y constantes golpes, tuvo más adeptos entre los trabajadores de los países menos adelantados social y económicamente, como, por ejemplo, España e Italia, aunque también Rusia y Suiza, que el «socialismo científico» de Karl Marx y Friedrich Engels, los cuales profetizaban la victoria del proletariado como resultado final de un proceso histórico-económico. La imagen anarquista de una sociedad futura, descentralizada, con cooperativas y asociaciones autónomas agrícolas e industriales, parecía mucho más realista que la idea marxista del dominio futuro del proletariado sobre los «trusts» y el aparato administrativo de una sociedad altamente industrializada. Hay que tener en cuenta también que los trabajadores de estos países sentían una profunda desconfianza hacia los métodos de la lucha parlamentaria, que desde los años 70, y con el beneplácito de los padres del marxismo, había sido aceptada por los partidos socialistas. Especialmente en los países políticamente avanzados, como Italia y Francia, el sistema parlamentario parecía ser un instrumento en manos del enemigo de clase, es decir, de la burguesía liberal. La fragmentación interior del movimiento obrero europeo y la falta de claridad en la elección del camino a seguir se refleja con la mayor evidencia en el caso de Francia. Durante los años 80 contamos nada menos que seis grupos, opuestos entre sí: los *anarquistas;* los *blanquistas,* que pretendían continuar las tradiciones de Babeuf, el revolucionario ejecutado en 1797, y de la Comuna de 1871; el *Parti Ouvrier Français,* al que Jules Guesde y Paul Lafargue intentaban dar una dirección marxista; los *posibilistas,* dirigidos por el médico Paul Brousse, que propugnaban un socialismo evolutivo y la constitución de un sistema de comunas socialistas autónomas en colaboración con la izquierda burguesa; el *Parti Ouvrier* de Jean Allemane, que en oposición a los posibilistas adoptaba un riguroso programa de lucha de clases, y finalmente el *movimiento sindicalista,* que esperaba conseguir la emancipación de los trabajadores con métodos legales de la lucha obrera y por los medios sindicalistas de la huelga de masas y de la huelga general.

El hecho de que hacia 1890 el movimiento obrero no ofreciera, como en Francia, un aspecto tan fragmentado en los restantes países de Europa, se debe en parte a que las diferencias de táctica y objetivos no habían salido aún a relucir debido al estado aún rudimentario de las organizaciones. El movimiento obrero inglés constituye un caso aparte. Desde la derrota del cartismo en 1848 se había desarrollado un fuerte movimiento sindical acostumbrado a imponer sus exigencias políticas dentro

del sistema de partidos tradicional, apoyándose para ello en el ala radical del partido liberal. Naturalmente, sus objetivos nunca iban más allá de la discreta reforma social en el marco del sistema establecido. Los dos grandes partidos ingleses, sobre todo el partido liberal a partir de los años 90, consiguieron que algunos jefes de los sindicatos entraran en el «House of Commons» como representantes de los obreros. Los «Liblabs», como se les empezó a llamar, formaban un grupo propio en el «House of Commons», pero se sentían parte integrante del partido liberal y comprometidos con sus tradiciones. Este hecho y la fuerte componente religiosa de los obreros ingleses contribuyeron a que no cuajaran las tendencias radicales. Al mismo tiempo se aplazó durante años la creación de una representación política independiente de los trabajadores. La «Democratic Federation», fundada en 1884 por Henry Moyers Hyndman, que más tarde cambió su nombre por «Social Democratic Federation» en tributo a su tendencia marxista, se vio impotente ante el conservadurismo de los sindicatos, al igual que la «Socialist League», dirigida por el arquitecto y reformador social William Morris, que años más tarde se escindió de la «Social Democratic Federation». *England for All,* el popular libro de Hyndman fue la primera exposición de la doctrina marxista dedicada a los lectores ingleses, y *News from Nowhere* (1890), la sutil utopía de William Morris, que describe en brillantes colores la belleza del mundo futuro, después de la revolución socialista, puede incluirse entre las grandes de la literatura mundial socialista. Mayor importancia adquirió la «Fabian Society», fundada en 1883, que reclamaba, sobre todo en forma periodística, a través de los famosos «Fabian Essays» (1889), un programa amplio de reformas sociales. Los «Fabians» querían sustituir el liberalismo individualista de Bentham y Spencer por un sistema de control de la economía y la sociedad; el control debía ser ejercido por una élite intelectual de la nación, surgida de un orden democratizado a fondo y radicalmente. Sin embargo, los «Fabians», entre los que se contaban personalidades destacadas como George Bernard Shaw, Sidney y Beatrice Webb, H. G. Wells y Graham Welles, constituían un estado mayor sin ejército; su agitación no pretendía tanto crear un movimiento obrero inglés independiente, según el modelo continental, sino más bien impregnar a la sociedad de su tiempo con sus ideales de un socialismo democrático y conquistarla, de este modo, desde dentro. Con el manifiesto de George Bernard Shaw y Sidney Webb, *To Your Tents, O Israel,* de noviembre de 1893, los «Fabians» cambiaron su curso político y se unieron al movimiento en favor de una represen-

tación independiente de los trabajadores ingleses, como la había propugnado el líder minero escocés Keir Hardie desde mediados de los años 80, apoyado por el popular periódico de Robert Blatchford, *The Clarion,* que defendía la causa de los obreros por motivos principalmente éticos y humanitarios.

Tampoco el «Independent Labour Party», fundado en 1893 por Keir Hardie, tenía un carácter radical y aun menos marxista. Una religiosidad de extremo inconformismo jugaba un papel más importante que los ideales socialistas; desde un principio el partido tuvo carácter puramente social-reformista. Esta tendencia se reforzó al unirse en 1900 los diferentes grupos socialistas y los sindicatos, con su número mucho mayor de afiliados, en un «Labour Representation Committee», encargado de la representación independiente de los trabajadores en el Parlamento. Con esto quedaban establecidos el carácter y los objetivos del movimiento obrero inglés: política social-reformista en el marco del sistema parlamentario establecido y apoyo recíproco de partido y sindicatos. El pequeño grupo de la «Social Democratic Federation», que se había opuesto en vano a esta fusión, se mantuvo con vida a duras penas. El movimiento obrero inglés no esperaba nada de una política radical de lucha de clases, por el contrario lo esperaba todo de una política reformista continuada. «Con la misma seguridad que el radicalismo ha democratizado durante el pasado siglo el sistema político de gobierno, el socialismo realizará la democracia industrial en el siglo que comenzamos», profetizaba Keir Hardie en 1900 [18].

Los acontecimientos en el continente europeo tomaron un curso opuesto. El socialismo de tipo marxista se puso en todas partes a la cabeza y aunque no eliminara todas las variantes utópicas y social-reformistas del socialismo las relegó a un segundo plano. En este proceso la socialdemocracia alemana jugó un papel principal. Las leyes antisocialistas de Bismarck, promulgadas en 1878, no pudieron impedir la expansión del partido social-demócrata alemán como partido de clase, organizado y sustentado por amplias masas populares. Por el contrario, contribuyeron a que las tradiciones radical-democráticas, contenidas desde los comienzos en el movimiento social-demócrata, fueran eclipsadas por la doctrina marxista, como también lo fueron las ideas de un socialismo de Estado de Ferdinand Lassalle. Una vez abolidas las leyes antisocialistas, la socialdemocracia adoptó en el congreso del partido celebrado en 1891 en Erfurt, un nuevo programa que en su primera parte se declaraba conforme con los principios fundamentales de la doctrina marxista y declaraba que «la transformación de la propiedad

privada capitalista de los medios de producción, en propiedad colectiva, y la transformación de la producción de mercancías en producción socialista, para y por la sociedad» era la condición necesaria para la liberación «no sólo del proletariado, sino de toda la humanidad»[19]. Al mismo tiempo, el partido se distanciaba de los movimientos anarquista y sindicalista y proclamaba la «lucha política», que en primer lugar significaba «la revolución de las mentes», es decir: la preparación ideológica del proletariado para la revolución socialista, que gracias a la dinámica propia del desarrollo económico llegaría necesariamente. En segundo lugar, el partido se comprometía a emprender una política de reformas concretas, dentro del sistema establecido, para mejorar la situación social de los trabajadores.

Sin embargo, este programa marxista ortodoxo, formulado esencialmente por Karl Kautsky, el ideólogo más destacado del partido, no era más que revolucionario en sus apariencias. Precisamente los elementos de la doctrina socialista que incitaban a los obreros a la acción política inmediata, a la toma del poder político y a la subversión del orden establecido, pasaban en él a un segundo término, dando paso a una confianza ciega en el proceso histórico que concedería a la clase obrera, siempre que ésta mantuviera la unidad y la conciencia de clase, forzosa y casi automáticamente, el poder político y el poder económico. De acuerdo con estas convicciones, la socialdemocracia alemana concentró sus energías en organizar disciplinadamente a las masas populares dentro del partido y los sindicatos, bajo la bandera de un programa socialista de carácter casi fatalista. A pesar de todos los obstáculos que le opusieron las autoridades estatales, el partido iba realizando con éxito creciente sus objetivos.

El movimiento obrero alemán fue además el gran ejemplo para los obreros de casi todos los países europeos. Así, por ejemplo, la socialdemocracia austríaca, que se constituyó en 1886 bajo la dirección de Víktor Adler en el congreso del partido celebrado en Haynfeld, siguió en su organización y programa muy de cerca al partido alemán. El papel dirigente de la socialdemocracia alemana se volvió a hacer patente en el congreso fundacional de la *Segunda Internacional Socialista* celebrado en 1889 en París, y luego en los congresos de Bruselas en 1891, Zurich en 1893 y Londres en 1896. Tanto el programa marxista como la fórmula parlamentaria propugnada por la socialdemocracia alemana se impusieron en la Segunda Internacional. Gracias al fuerte apoyo de los socialdemócratas alemanes los socialistas de Jules Guesde vencieron a sus rivales «posibilistas», que habían convocado un congreso obrero internacional en París.

La *Segunda Internacional Socialista* fue aceptada unánimemente como la organización reconocida del movimiento obrero internacional, hecho que dio a los partidos socialdemócratas de tendencia marxista una gran ventaja frente a partidos de otro matiz. En 1896 los anarquistas y los enemigos del método de lucha parlamentaria fueron excluidos de los congresos futuros y con ello prácticamente anatematizados. La decisión del congreso de París del año 1889 al declarar el 1 de mayo «día de manifestación internacional del movimiento obrero a favor de la jornada de trabajo de ocho horas» se convirtió —a pesar de que fue aceptada con reservas por la socialdemocracia alemana, tan determinada por sus ideas legalistas— en la bandera bien visible del nuevo movimiento obrero socialista, decidido a la lucha de clases. El 1 de mayo fue considerado, sobre todo en Francia y Austria, como una declaración de guerra al orden establecido.

Hacia 1895 parecía segura la victoria del socialismo marxista sobre sus rivales ideológicos en Europa. En todos los países, por ejemplo, Italia, Suiza, Hungría, Polonia y Suecia surgieron durante los años 90 partidos socialistas, mientras que la influencia de los grupos anarquistas disminuía cada vez más. También en Rusia surgió en 1898, en la más absoluta ilegalidad, a pesar de la extrema represión ejercida por el Estado, el *Partido Obrero Socialdemócrata Ruso,* junto al viejo movimiento socialista-agrario de los populistas *(narodniki),* precursores del partido socialista-revolucionario. El nuevo partido adoptó, bajo la influencia de Plejanov y Axelrod, una dirección decidida de lucha de clases, más consecuente que la de los otros partidos europeos, que gozaban de una situación política mucho más favorable.

La paz ideológica dentro del movimiento socialista europeo no duró mucho tiempo. En pocos años volvió a desencadenarse la discusión entre los partidarios de una dirección marxista ortodoxa y los partidarios de una activa política de reformas en el marco del orden social establecido, que condujo a una enconada lucha de principios en los diferentes partidos europeos y en los congresos de la *Segunda Internacional Socialista.* También aquí el partido alemán jugaba un papel principal. En junio de 1891 el jefe del partido socialdemócrata bávaro, Georg von Vollmar, defendió en un discurso pronunciado en Munich sobre «Los objetivos inmediatos de la Socialdemocracia» la política reformista de los «pequeños pasos», que incluso no debía retroceder ante el compromiso ocasional con los partidos burgueses. August Bebel, en el congreso de Erfurt, criticó enérgicamente en nombre de la dirección del partido el «oportunismo de Vollmar»: posponer los objetivos fundamentales de la socialdemocracia a favor de objetivos próximos más asequibles

llevaría necesariamente a la corrupción del movimiento. En esta ocasión volvió a repetir enfáticamente las convicciones optimistas del ala marxista-ortodoxa de que el mismo curso de los acontecimientos llevaría a la victoria al movimiento obrero: «La sociedad burguesa trabaja tan esforzadamente en su destrucción que no tenemos más que esperar el momento en que recoger el poder que cae de sus manos (...) Es más, estoy tan convencido de que la realización de nuestros objetivos está tan cercana, que estoy seguro de que sólo unos pocos de los aquí presentes no llegarán a vivirla» [20]. Aunque en principio Bebel rechazaba toda política reformista que aceptase las estructuras existentes, encontró un camino para justificarla en la práctica: para nosotros la mejora de la situación material del proletariado dentro de la sociedad actual sólo sirve para organizar en la mayor medida posible nuestro terreno de lucha» [21]. A pesar de las posibilidades que esto daba al ala reformista para crear una política pragmática de actualidad, el profundo antagonismo entre reformismo y política revolucionaria salía constantemente a relucir en las cuestiones políticas cotidianas. Así, por ejemplo, fue objeto de graves discusiones el tema de la actitud que había de adoptar la socialdemocracia frente a los campesinos independientes, o el de si era o no lícito el pacto electoral con partidos burgueses, o si se podía votar positivamente el presupuesto del gobierno, en el caso de que pareciera oportuno para los intereses del proletariado, aunque con ello se aportara una ayuda al Estado en manos del enemigo de clase.

Estos problemas se plantearon de modo parecido a todos los demás partidos europeos. La discusión de los mismos alcanzó su punto culminante precisamente en Francia, el país más adelantado de Europa en cuestiones político-constitucionales, al entrar a formar parte del gobierno radical burgués Waldeck-Rousseau, el jefe del partido socialista Alexandre Millerand. Millerand pertenecía al ala reformista moderada del socialismo francés y había intentado con su programa de Saint Mandé unificar el fragmentado movimiento socialista francés sobre la base de una teoría que se proponía la superación paulatina del capitalismo a través de la constante ampliación de las funciones económicas y sociales del Estado. La inesperada decisión de Millerand de aceptar una cartera ministerial, que él intentó justificar argumentando que después del «affaire Dreyfus» era necesario defender a la república de sus enemigos de la derecha, fue tachada de traición a la clase obrera por los socialistas de Guesde, los blanquistas y los sindicalistas, mientras era celebrada vivamente por los seguidores de Brousse y el propio

grupo de Millerand, los «Socialistes Indépendants». La discusión enconada de estas cuestiones condujo en el otoño de 1901 a una radical transformación del movimiento obrero francés. El «Parti Socialiste de France» decidió continuar las tradiciones revolucionarias de Guesde y Blanqui, mientras que los partidarios de la dirección reformista se unieron en el «Parti Socialiste Français». A su cabeza surgió Jean Jaurès, una de las más destacadas personalidades del socialismo democrático, que no vacilaba en atacar duramente conceptos marxistas muy populares: «Una clase que habiendo nacido en la democracia llevara su dictadura hasta los primeros días de la revolución, en vez de someterse a las leyes de la democracia, no sería más que una partida de bandidos acampando sobre el territorio de la patria y malgastando sus recursos (...) Aquellos, entre nuestros socialistas actuales, que aún hablan de la 'dictadura impersonal del proletariado' o que imaginan la toma del poder como un acto de violencia contra el orden democrático retroceden a los tiempos en los que el proletariado era débil y le faltaban los medios políticos y de organización para triunfar» [22].

En 1905, el «Parti Socialiste de France» y el «Parti Socialiste Français», bajo la influencia de la *Segunda Internacional Socialista,* se fusionaron en un solo partido, el «Parti Socialiste Unifié», que de ahora en adelante dirige una vigorosa oposición; sin embargo, los contrastes entre las corrientes se mantuvieron inalterados, sobre todo cuando se trataba de sostener o combatir gobiernos burgueses inclinados a la izquierda.

Es característico de la estructura política más rudimentaria del Reich alemán que allí la lucha entre el socialismo revolucionario marxista y al socialismo democrático no llegara a plantearse abiertamente hasta 1914 y que nunca se llevara hasta las últimas consecuencias. Los representantes principales del ala derecha prefirieron tratar las cuestiones candentes de la política de actualidad como cuestiones de carácter puramente táctico que no tocaban a los principios fundamentales del partido. En lo posible querían evitar cualquier desliz ideológico. Desde 1898 intervino en el debate Eduard Bernstein, entonces residente en Londres, y formuló la base teórica del socialismo democrático-reformista en su obra *Die Voraussetzungen des Sozialismus und die nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie* (1899) («Premisas del socialismo y objetivos inmediatos de la socialdemocracia»). Sobre las bases de un neo-kantismo positivista, Bernstein abrió una profunda brecha en la doctrina marxista, discutiendo principalmente las teorías de la depauperación, de la concentración y de las crisis económicas. Bernstein sustituyó el camino dialéctico hacia el socialismo por el esquema de un desarrollo evolu-

cionista: gracias a la expansión paulatina de las funciones del Estado y de las comunas, el sistema capitalista daría paso, en un proceso ininterrumpido, a un sistema de economía socialista. Al igual que los fabianos y Jaurès, Bernstein abogaba por una política que llegara paso a paso al poder con ayuda de los métodos de la lucha parlamentaria. Y se basaba para ello en la introducción que Friedrich Engels escribiera para la reedición de *Klassenkämpfe in Frankreich* (1895) («La lucha de clases en Francia»), donde afirmaba que la socialdemocracia haría triunfar la revolución socialista por el camino parlamentario legal. Sin embargo, los congresos del partido socialdemócrata alemán celebrados en Hannover (1899) y Dresden (1903) supusieron la condena del «revisionismo», claro signo de que el ala reformista del partido temía la lucha abierta. Fueron decisivos en esta condena los esfuerzos de August Bebel por mantener a toda costa la unidad del partido y también la hábil táctica seguida por los partidarios de Bernstein, que prefirieron socavar las posiciones de los marxistas ortodoxos en el terreno político. En efecto, las numerosas resoluciones tomadas en los congresos celebrados en aquellos años, influyeron poco en la praxis reformista del partido socialdemócrata alemán. Especialmente los partidos del sur de Alemania demostraban tener pocos escrúpulos y siempre que les parecía necesario hacían caso omiso de las decisiones de principio tomadas por el partido, como por ejemplo la prohibición de votar el presupuesto del gobierno. El socialismo democrático-reformista derrotado en la teoría, demostró ser el vencedor en la práctica.

A pesar de todo, la socialdemocracia alemana impuso en el congreso de la Segunda Internacional convocado en Amsterdam en 1904 su punto de vista contra oponentes como Jaurès: el socialismo no debía participar en coaliciones burguesas, ni colocarse en el terreno de las simples reformas de la sociedad burguesa existente. La brillante defensa que hizo Jaurès de su punto de vista democrático culminó en un ataque abierto al inmovilismo y la esterilidad política de la socialdemocracia alemana: «En los momentos actuales lo que pesa sobre Europa y el mundo, sobre la seguridad de la paz, la garantía de las libertades políticas, el progreso del socialismo y de la clase trabajadora no son los supuestos compromisos, los valientes intentos de los socialistas franceses de aliarse a la democracia para salvar la libertad, el progreso y la paz del mundo, sino por el contrario, la impotencia de la socialdemocracia alemana»[23]. Pero el llamamiento de Jaurès no surtió efecto. Rompiendo la resistencia de la mayoría de los socialistas de países políticamente adelantados, la socialdemocracia alemana impuso

a los partidos de la Segunda Internacional su programa ideológico, que rechazaba cualquier compromiso con los partidos burgueses, aunque en realidad ni ella misma se atuviera estrictamente a él. La situación política de Europa aún no era lo suficientemente liberal como para poner seriamente a prueba la dirección rígida de lucha de clases propugnada por la *Segunda Internacional,* que iba entre otros en contra de la política de los partidos belga, italiano y escandinavos. Unicamente los socialistas suecos entraron a formar parte en 1914 de un gobierno burgués. Aunque la intransigencia marxista ortodoxa de Kautsky y Bebel fue en el terreno de la *praxis* política un freno para la libertad del movimiento obrero, aún no se quería renunciar al mito de la revolución socialista.

La combinación de entusiasmo revolucionario teórico y conservadurismo ideológico, unido al inmovilismo en el terreno de la política práctica, que sobre todo caracterizaba a la socialdemocracia alemana, también aparecía en la otra cuestión que en los años anteriores a 1914 preocupaba apasionadamente al movimiento obrero: el problema de la huelga política. En una serie de huelgas generales la socialdemocracia belga, que como el partido laborista inglés colaboraba estrechamente con las organizaciones sindicales obreras, consiguió con grandes sacrificios la reforma parcial de la ley electoral que favorecía unilateralmente a las clases poseedoras. El movimiento austríaco en pro de los derechos electorales conquistó, en el año 1906, a través de gigantescas manifestaciones de masas, el sufragio universal. Una huelga general en Finlandia en el año 1905 consiguió los mismos objetivos y ayudó al movimiento obrero finlandés a quitar los últimos obstáculos del campo de batalla parlamentario. Ya en 1904 tuvo lugar en Italia una huelga general política, que mantuvo en vilo a todo el país durante catorce días y cambió radicalmente el ambiente político, aunque sus resultados fueran de momento bastante desfavorables para el movimiento obrero.

En Francia, el método preferido era el de la «acción directa», sin esperar nada de los grupos socialistas integrados en el juego parlamentario y combatiéndose encarnizadamente. Con el apoyo creciente de las *Bourses de Travail,* los sindicatos franceses adoptaron desde 1902 cada vez más las formas de lucha sindicalistas. Por medio de la huelga, el sabotaje y el *boycot* y, en último extremo, por medio de la *extrema ratio* de la huelga general, la burguesía capitalista sería forzada a aceptar la ley de la acción y, por fin, sería despojada del poder. Con una fe irracional en la fuerza del proletariado unido, frente al que incluso el ejército se demostraría impotente, los sindicalistas

esperaban destruir con acciones sindicales ininterrumpidas el orden económico existente y convertirlo en un sistema descentralizado de núcleos de producción y organizaciones comerciales bajo la dirección de los sindicatos. En la *Charte d'Amiens* de 1906, la «Confédération Générale des Travailleurs Français» formuló claramente su programa de acción sindicalista: «En sus reivindicaciones cotidianas el movimiento sindicalista se propone coordinar la lucha de los trabajadores, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, consiguiendo ventajas inmediatas como la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salarios, etc. Estos objetivos constituyen sólo una parte del programa del movimiento sindicalista. Este trabaja para lograr la total emancipación de los obreros, que se conseguirá con la expropiación total de la clase capitalista. El movimiento aprueba la huelga general como el medio adecuado para lograr estos fines. El movimiento sindicalista opina que los sindicatos, que hoy son una organización de combate, serán en el futuro una organización para la producción y la distribución, y servirán como base a la reconstrucción social» [24].

La doctrina sindicalista era en esencia una doctrina de lucha nacida directamente de la profundidad de la oposición de clases, y no como el socialismo de tendencia marxista un sistema político elaborado. Por esta razón el sindicalismo ejercía una fuerte atracción sobre los trabajadores franceses. El mensaje sindicalista se dirigía directamente contra el enemigo de clase, tal y como se le presentaba al obrero en la vida cotidiana. La lucha política de los diferentes partidos socialistas, por el contrario, se planteaba en un terreno ajeno a los trabajadores, y sus intervenciones en el engranaje parlamentario les parecían al mismo tiempo incomprensibles y poco eficaces. Indudablemente fueron los intelectuales del movimiento los que hicieron de la doctrina del sindicalismo un culto a la violencia, convirtiéndola en un llamamiento irracional a las cualidades heroicas de los trabajadores. Según ellos, la acción directa de las masas trabajadoras provocaría la subversión del orden social existente gracias a su inmensa fuerza moral. Especialmente Georges Sorel propagó en su *Réflexions sur la violence* (1906) el «mito de la huelga general», que según él daría tal empuje a la clase trabajadora que toda resistencia de la sociedad burguesa resultaría inútil. Sorel perseguía objetivos más lejanos con sus teorías: para él, el movimiento sindicalista era el medio adecuado para destruir la cultura y el orden social racionalista en decadencia y liberar fuerzas históricas desconocidas y originales.

A pesar de estos importantes soportes ideológicos, el sindicalismo francés no tuvo gran influencia dentro del movimiento

obrero europeo, aunque durante algún tiempo aparecieran tendencias similares en Italia e incluso en Inglaterra. En Francia mismo el entusiasmo sindicalista disminuyó a raíz del fracaso de la gran huelga ferroviaria del año 1910. La doctrina sindicalista se mantuvo únicamente en los países ibéricos, relativamente poco desarrollados.

En Europa central y occidental, por el contrario, se extendía la tendencia opuesta. Sobre todo en Alemania disminuyeron las huelgas de masas y aún más la huelga general como medio de lucha política, gracias a la consolidación y expansión de los sindicatos. Hacia 1906 se impuso definitivamente la convicción del ala sindical de la socialdemocracia alemana que declaraba inadmisible que los frutos del trabajo sindical de muchos años fueran puestos en peligro por acciones políticas arriesgadas. Esta opinión se generalizó entre los demás partidos de la Segunda Internacional y encontró partidarios incluso en Francia.

A cambio, una minoría de extrema izquierda empezó a declararse partidaria de los métodos de la huelga general, sobre todo después de que la revolución rusa de 1905 había demostrado todo lo que, en circunstancias favorables, podían esperar los trabajadores de la huelga de masas espontánea. Rosa Luxemburgo fue el principal defensor de esta dirección. Descontenta con el curso político inmovilista de la dirección del partido socialista alemán, consideraba la huelga de masas como el medio más eficaz de preparar al proletariado para la lucha final revolucionaria. En su obra *Massenstreik, Partei und Gewerkschaften* (1906) *(Huelga de masas, partido y sindicatos)* Rosa Luxemburgo desarrollaba sobre la base de las experiencias rusas una nueva teoría revolucionaria de la toma del poder por el proletariado. En el momento en que los trabajadores reconocieran su verdadera situación organizarían una cadena de huelgas espontáneas, de amplitud e intensidad cada vez mayores, y provocarían el derrumbamiento de la sociedad de clases burguesas, erigiendo en nombre de la inmensa mayoría del pueblo «la dictadura del proletariado».

Aunque en principio para Rosa Luxemburgo la revolución socialista sería el resultado de la acción espontánea de las masas proletarias y no el producto de la conspiración de un grupo de revolucionarios profesionales, su teoría se aproximaba bastante a la teoría revolucionaria bolchevique, como unos años antes había sido formulada por Lenin durante su exilio en Suiza en su obra fundamental *¿Qué hacer?* (1902). A diferencia del movimiento obrero de casi todos los demás países de Europa, el movimiento socialista ruso tuvo que moverse hasta 1905 en la más estricta clandestinidad. Lenin sacó de esta situación

excepcional las conclusiones adecuadas con gran energía y extremo radicalismo: el movimiento socialista ruso debía transformarse, en vista de la implacable represión zarista, en una «organización de revolucionarios profesionales» dirigida autoritariamente. En el momento en que «todas las funciones conspirativas estuvieran concentradas en manos de un número restringido» de revolucionarios profesionales, el partido podría hacer frente eficazmente a la policía zarista. En el caso contrario, la idea socialista se vería comprometida gravemente por diletantismo[25]. Mientras hombres como Plejanov y Martov seguían viendo en los demás partidos socialistas europeos, sobre todo en la socialdemocracia alemana, el ejemplo a seguir, Lenin rompió radicalmente con estas ideas tradicionales. «En las tinieblas de la autocracia» la democratización general de la organización del partido, según el ejemplo occidental, «no sería más que un juego vacío y peligroso»[26]. Esto no quiere decir que las masas proletarias y sus representantes sindicales no participen en la lucha revolucionaria. Por el contrario, sus acciones espontáneas de huelga o lucha estarían dirigidas por un pequeño número de revolucionarios profesionales situados en puestos estratégicos y subordinados a las órdenes de la dirección del partido. El partido socialista no tenía el deber de organizar políticamente a las masas, sino más bien de constituirse en *vanguardia* de la clase proletaria revolucionaria. El objetivo principal de toda la labor del partido consistiría, en consecuencia, en formar revolucionarios profesionales capaces de «dirigir el combate del proletariado por su liberación»[27].

En el congreso del partido socialdemócrata ruso celebrado en Londres en 1903, Lenin impuso en líneas generales su estrategia revolucionaria. Sus oponentes, en parte, hubieron de resignarse; en parte, fueron vencidos en las votaciones. Este memorable cisma dentro del movimiento socialista ruso dio origen a la denominación de los partidarios de Lenin —*bolcheviques,* es decir, mayoritarios—, porque triunfaron sobre la minoría de los *mencheviques* (o minoritarios). En el mismo congreso Lenin promovió una resolución oficial que proclamaba la instauración de la «dictadura del proletariado» como la meta fundamental de toda lucha socialista, aunque de momento había que enfocar como objetivo inmediato la realización de la revolución burguesa. Lenin se atuvo desde entonces tajantemente a las líneas esenciales de este programa revolucionario, que concentraba el poder en manos de un grupo reducido de revolucionarios profesionales, a pesar de que a partir de 1905 mejoraran las condiciones de acción del partido socialista. Lenin aceptó, desde 1907 y por razones tácticas, la actividad par-

lamentaria del partido bolchevique, pero siguió siendo un enemigo irreconciliable de todos los intentos de conseguir la emancipación de la clase obrera por los métodos legales, sobre todo en colaboración con la democracia burguesa. El movimiento socialista debía apoyar por todos los medios la revolución burguesa, incluso por la misma insurrección armada, pero su verdadera meta era la instauración de «la dictadura del proletariado» en lucha abierta, pues «en la vida de los pueblos las grandes cuestiones se deciden exclusivamente por la fuerza»[28]. La primera empresa del proletariado sería «la destrucción de todos los restos de las viejas instituciones»; con otras palabras: la destrucción completa del aparato estatal tradicional, como proclamó el mismo Lenin más tarde en su «*El Estado y la revolución*» de 1917[29].

Después de romper definitivamente con el ala moderada de los mencheviques, Lenin fundó sobre las bases de este programa político de combate un partido bolchevique independiente en 1912. Este fue el centro de la labor conspirativa que debía dirigir la dinámica revolucionaria del proletariado ruso, cada vez más exasperado por la represión creciente del zarismo, sobre las vías de la dictadura revolucionaria de una minoría decidida de políticos bolcheviques. La «dictadura del proletariado», tras un período de transición de lucha de clases, daría paso a la sociedad sin clases del comunismo. Una vez eliminado el sistema capitalista de producción con sus contradicciones inmanentes y sus barreras, surgiría «un verdadero, rápido y real progreso de las masas en todos los sectores de la vida pública y privada». Entonces el Estado llegaría a ser superfluo y se extinguiría[30].

La decadencia de las ideologías políticas tradicionales —conservadurismo y liberalismo— y el desarrollo de una gran variedad de direcciones políticas desde la extrema derecha a la extrema izquierda demuestran que la sociedad europea se encontraba durante los últimos decenios antes de la Primera Guerra Mundial en un período de transformación. El cambio acelerado de las estructuras políticas y sociales planteó nuevos problemas que según la situación social o política de los grupos afectados encontraron las más diversas respuestas. Desde este punto de vista, el amplio caleidoscopio de las ideologías vigentes en este período ofrece un reflejo de las tensiones sociales que aparecieron en el seno de la sociedad industrial en expansión.

2. Europa en camino hacia la sociedad industrial

La primera gran oleada de la industrialización que tuvo lugar en Inglaterra ya a fines del siglo XVIII, un poco más tarde en Francia y hacia 1850 en Alemania, sólo transformó parcialmente las relaciones sociales existentes en Europa y exclusivamente en algunos puntos clave. Los efectos de las nuevas formas industriales de producción sobre la estratificación social y aún más en la política eran restringidos. La posición dirigente de las élites aristocráticas tradicionales era indiscutible, incluso en Inglaterra, que ya desde los años 60 del siglo XIX podía considerarse una sociedad industrial. Pero hacia 1895 la situación comenzó a cambiar en toda Europa. La industrialización, en una segunda oleada más potente, alcanzó a todos los países europeos, si bien con importantes diferencias básicas y provocó la transformación radical de las estructuras sociales y políticas. La creciente superposición del nuevo capitalismo industrial de producción intensiva sobre las formas tradicionales de producción se refleja con la mayor claridad en los cambios registrados en la relación agricultura/industria, aunque sean difíciles de precisar con exactitud debido a las estadísticas incompletas de la época. Gran Bretaña, naturalmente, iba a la cabeza de este proceso y de otros muchos. En 1871 el 35 % de la población inglesa vivía directa o indirectamente de la agricultura. Este porcentaje fue disminuyendo en los decenios siguientes. En 1881 la industria inglesa empleaba a 8 millones de trabajadores, el campo solamente millón y medio. La misma tendencia de desarrollo se refleja en la creciente concentración humana dentro de las grandes ciudades industriales inglesas en proceso de expansión. En 1910 sólo el 25 % de los habitantes de dicho país vivía en el campo. La agricultura había perdido desde el punto de vista económico nacional casi toda su importancia; hacia comienzos de los años 90, la agricultura constituía solamente el 8 % de la renta nacional inglesa [31]. A principios de nuestro siglo, Gran Bretaña era prácticamente una nación puramente industrial y comercial; su renta nacional provenía, en primer lugar, de su gran producción industrial, de la que dedicaba una quinta parte a la exportación; de sus grandes ingresos producidos por la navegación y el comercio; y, finalmente, de sus grandes inversiones en ultramar.

Gran Bretaña era el país industrial más avanzado de Europa y marcaba el camino a los demás países del continente. En Europa continental el paso a la fase de crecimiento ininterrumpido de la economía industrial tuvo lugar mucho más tarde, pero a cambio, el desarrollo industrial se produjo a un ritmo más rápido. No fue, sin embargo, éste el caso de Francia, país que acertó a alcanzar relativamente pronto el desarrollo tecnológico inglés. El proceso de industrialización fue marcadamente lento, pero extraordinariamente constante. Hasta los primeros decenios del siglo XX la industrialización se concentró en Francia en unos pocos núcleos, permitiendo la persistencia de formas económicas tradicionales, entre ellas la agricultura. En 1890 la población rural de Francia constituía el 64,1 % de la población total. Esta cifra disminuyó muy despacio en los decenios siguientes. En 1896 el 60,9 % de la población vivía de ocupaciones agrarias, en 1906, el 57,9 % y en 1911 el 55,9 %. En comparación con Inglaterra, la economía francesa mantenía un gran sector tradicional sin alteraciones esenciales. La agricultura francesa, sobre todo la viticultura, demostró ser, frente a la competencia del mercado mundial, relativamente resistente a las crisis, hecho que debe atribuirse principalmente a la estructura pequeño-burguesa de la propiedad. Sin embargo, hay que recordar que el mantenimiento de las estructuras sociales más antiguas se vio favorecido por medidas proteccionistas del Estado, especialmente la tarifa Méliné del año 1892, que cargaba las importaciones agrarias y artesanales con fuertes impuestos, protegiendo de este modo la agricultura y la pequeña industria francesas de la potentísima competencia extranjera. El hecho de que Francia prácticamente no participara en la explosión demográfica de los últimos decenios antes de 1914 —la población aumentaba a un promedio de 10 % por década— [32] contribuyó a que la estructura social tradicional no fuera de momento alterada profundamente por la industrialización.

En Alemania, por el contrario, la situación era completamente diferente. El rápido aumento de población —el número de habitantes del Reich alemán pasó de 40,2 millones en el año 1880, a 58,5 en el año 1910— fomentó enormemente el comercio y la industria, a costa de la agricultura. De las grandes regiones puramente agrarias de Alemania oriental emigraban millones de personas a Berlín, Hamburgo y a los nuevos centros industriales de Alemania occidental, sobre todo a la región del Ruhr. La emigración a ultramar, en cambio, cesó casi por completo. Mientras los trabajadores del campo abandonaban cada día en mayor número a los terratenientes del este del país, los

jornaleros de Polonia y Galitzia ocupaban sus puestos. A pesar de las severas restricciones legales, muchos consiguieron una situación estable. Antes de 1914 trabajaban cerca de 437.000 jornaleros de Polonia y Galitzia, los llamados «Sachsengänger», regularmente durante todo el verano en la agricultura alemana del este. También las regiones industriales occidentales atrajeron a un gran número de trabajadores polacos: en el Ruhr se formó un sector de población polaca con más de 300.000 personas. La intensa emigración interior principalmente proveniente de las regiones orientales y dirigida hacia el oeste alemán produjo transformaciones radicales en la estructura de las ciudades alemanas. Berlín en primer lugar y las ciudades de la región del Ruhr, e igualmente Colonia y Düsseldorf y otras ciudades, crecieron de golpe en unos decenios. Colonia, que en 1880 había contado 145.000 habitantes, tenía en 1900, 383.000 y diez años más tarde 588.000. El número de habitantes de Düsseldorf subió en el mismo espacio de tiempo de 95.000 a 358.000.

A este proceso de crecimiento de la población urbana corresponde estadísticamente un retroceso constante en el sector de los empleados en la agricultura y viticultura en relación con el sector de los empleados en la industria y las minas. En 1882 el número de personas ocupadas en el sector primario (42,7 %), superaba ligeramente el número de las ocupadas en el sector secundario (39,5 %). En 1895 la balanza se inclinaba ya claramente hacia el lado del sector secundario. Ahora ya sólo trabajaban el 35,7 % de la población activa en el campo y en el bosque, y el 43,6 % en la industria y minería. En 1907 quedaba establecida la victoria de las nuevas fuerzas capitalistas: con el 28,4 % de trabajadores del campo y el bosque, frente al 49,3 % de trabajadores industriales y mineros. Sin embargo, esta imagen, que refleja un clarísimo avance del sector industrial a costa del agrario, se difumina en el momento en que se consideran las cifras absolutas. Entre 1882 y 1907 se duplicó el número de personas ocupadas en la industria y profesiones artesanales; el número de trabajadores empleados en la agricultura, en cambio, disminuyó poco. La industria había absorbido el aumento de población; la agricultura había perdido cierta importancia en el marco total de la economía alemana, pero desde un punto de vista absoluto se hallaba en una situación similar. En 1907 —y gracias también a una fuerte protección arancelaria— la agricultura alemana se encontraba casi en la misma posición que en 1882.

Una evolución parecida puede observarse en los países escandinavos. La industrialización también echó raíces aquí, y

en consecuencia, la agricultura perdió importancia en el marco de la economía nacional. En Dinamarca el porcentaje de personas ocupadas en la agricultura descendió del 62 % en 1871, al 40 % en 1911; en Suecia del 61 % en 1891 al 48 % en 1911. Pero, a pesar de ello, la importancia de la agricultura se mantuvo en ambos países, especialmente en Dinamarca, donde, gracias al empleo de métodos de cultivo intensivo, fue posible hacer frente a la competencia agrícola en el marco de la sociedad industrial.

En el este y en el sur de Europa la industrialización hizo también grandes progresos. Sin embargo, de momento no tuvo efectos sobre grandes sectores; el carácter predominantemente agrario de la economía de estos países no sufrió una transformación radical en esta fase del desarrollo industrial. En Austria-Hungría se crearon núcleos industriales en la región de Bohemia-Moravia y en la capital, Viena, pero el resto del país quedó generalmente al margen de este desarrollo. Todavía en 1910, el 56,4 % de la población activa estaba constituido por campesinos. En Rusia, a partir de 1890, surgieron núcleos de concentración industrial en San Petersburgo, en la región de Moscú, en Ucrania, en los Urales y en las grandes ciudades bálticas; pero, aún en 1913, sobre una población total de 155 millones de habitantes, contaba sólo con 2,3 millones de trabajadores industriales.

A pesar de que entre 1885 y 1914 la industrialización se extendió entre las naciones europeas con grandes diferencias de intensidad y en formas muy diversas, es un hecho que todas ellas fueron arrastradas por el nuevo desarrollo. Las barreras aduaneras nacionales erigidas en aquellos años en casi todas partes, no pudieron evitar —por muy altas que fueran— que las diversas economías nacionales de Europa se insertaran en el sistema multilateral de la economía mundial, que surgía con fuerza irresistible en aquellos decenios, bajo la influencia principalmente de la expansión política y económica de Europa hacia ultramar. Los mercados mundiales empezaron a influir sobre el desarrollo económico e industrial de las naciones en un grado hasta entonces desconocido; las naciones se veían obligadas, quisiéranlo o no, a adaptar sus métodos tradicionales de trabajo y producción al progreso tecnológico y crear nuevas industrias, proceso que iba unido en muchos casos a grandes tensiones e injusticias sociales.

En relación con esto se fue acentuando, en un grado de importancia desconocida hasta entonces en la historia de Europa, la dependencia de las economías nacionales de las altas y bajas del desarrollo económico internacional. Las coyunturas

y las crisis, las situaciones inciertas de la economía internacional, intervenían profundamente en la economía de cada país. Al gran optimismo progresista de los contemporáneos se alió un sentimiento de inseguridad y riesgo económico y social. Si hasta entonces la burguesía se había sentido segura de su posición en la estructura social, garantizada en gran medida por el Estado, ahora se veía expuesta, sin apenas protección, a las oscilaciones de la economía que no podían ser calculadas racionalmente. Junto a los enormes éxitos económicos de la época surgió una intensa sensación de crisis. Así, por ejemplo, el especialista en derecho del Estado Rudolf von Gneist, de tendencia liberal, escribía en 1894: «A la sociedad industrial, a pesar de todo el brillo y la riqueza del desarrollo, le falta la estabilidad de la antigua. Por esa razón, las formaciones de partidos con fondo social van unidas a las profundas depresiones que aparecen periódicamente en el mercado mundial y sumen en la miseria pasajera a extensas capas de la sociedad (...). Generalmente, en las coyunturas desfavorables, surgen de todas partes voces de queja —la agricultura, la artesanía, el comercio, las compañías navieras, la industria, la clase media, el proletariado, se quejan en una disputa sin fin por ver quién es el que más sufre—. ¿Pero existe en verdad tal estado de crisis? Las listas de los impuestos sobre la renta no confirman la crisis (...). La supuesta crisis surge más bien del sentimiento de inseguridad con respecto a los beneficios, provocado por las oscilaciones de las coyunturas en nuestra época aún no concluida de la producción en masa»[33] Este factor subjetivo, que tuvo en sí la mayor importancia para el desenvolvimiento de la situación económica y social, en parte explica la inquietud y la falta de serenidad en los acontecimientos políticos de aquellos años y la fascinación de los pueblos por la idea imperialista.

El curso del desarrollo coyuntural de la época merece, sin embargo, ser tenido en cuenta también por razones objetivas. Desde 1873 la economía mundial, en su totalidad, había entrado en un período de expansión reducida, comparada sobre todo con la fase de apogeo del siglo precedente, que en Alemania había adquirido caracteres extraordinariamente intensos en los llamados «Gründerjahre». Los contemporáneos crearon para esta nueva fase el término de «The Great Depression». El matiz claramente subjetivo del término es indudable; expresa la preocupación del empresario ante las nuevas y graves recesiones económicas, ante una intensificación de la competencia y las reducciones sensibles de los ingresos. La edad de oro de la expansión industrial sin riesgos y con mercados ilimitados en su capacidad de absorción, según todos los indicios, había pa-

sado. Los precios volvieron a ser determinantes y las medidas racionalizadoras necesarias, si uno deseaba seguir imponiéndose en un mercado cada vez más reducido. El riesgo del empresario volvió a aumentar y los métodos casi exclusivos de autofinanciación, dominantes en la primera fase de la industrialización, resultaron ser insuficientes.

El «largo período» desde 1873 a 1896, para el que los historiadores de la economía utilizan el término contemporáneo «la gran depresión», no fue una crisis económica en el sentido estricto de la palabra, sino una fase de cambios estructurales unidos a una cierta reducción de la expansión económica. Se caracterizó sobre todo por una deflación persistente de precios tanto para los bienes industriales como para las materias primas y los productos alimenticios, unida a un aumento del volumen de los bienes producidos y de mercado, y por rendimientos decrecientes del capital, en relación con los primeros momentos del capitalismo. Aparte de todo esto tuvieron lugar

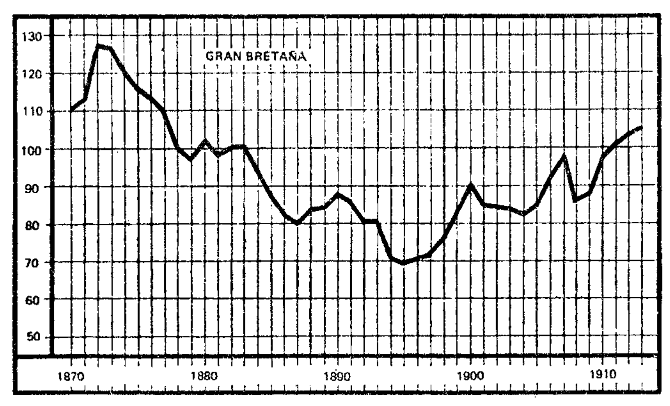


Fig. 1. Evolución de los precios en Gran Bretaña de 1870 a 1913; índice Rousseau-De Bir. Mitchell.

repetidamente crisis auténticas, que afectaron a la economía europea con mayor o menor intensidad, y provocaron incluso importantes recesiones en la producción; 1873 fue considerado como el año de cambio hacia tiempos peores; pero la depresión que le siguió directamente, no fue excesivamente grave comparada con las que iban a seguir. Unicamente en Alemania,

y por circunstancias especiales, tuvo consecuencias muy importantes. En contrapartida la economía alemana pasó la segunda crisis grave, la de 1885-86, sin mayores daños. En comparación con las precedentes, la tercera crisis internacional de aquel período, entre 1891 y 1894, fue la peor; afectó por igual a todos los sectores de la industria y provocó en los países industriales más avanzados el estancamiento y reducciones de la producción.

En 1896 se inició un movimiento ascendente que duró, con algunas oscilaciones, hasta 1913. La recesión que se hizo visible poco antes de la Primera Guerra Mundial fue transformada por medidas dirigistas en una formidable expansión, que servía a las necesidades de la producción intensiva de armamento. Esta nueva y larga fase de la evolución coyuntural entre 1896-1913 tuvo un desarrollo especialmente dinámico, favorecida por nuevos adelantos tecnológicos en el sector de la química y de la electricidad. Aún así, hubo depresiones económicas temporales, aunque no llegaron a alcanzar el volumen ni la extensión de las precedentes. Durante esta fase se equilibró el nivel de precios, si bien los precios anteriores a 1914 no alcanzaron nunca el nivel de los años setenta. Durante los veinticinco años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, Inglaterra era el centro del comercio mundial; en consecuencia podemos considerar la evolución inglesa de precios durante aquel período como representativa de la evolución de precios en Europa, máxime si se trata de establecer una tendencia general. El resultado de este análisis es el siguiente: después de un máximo absoluto en 1872 el nivel de precios descendió, con ciertas oscilaciones coyunturales, hasta 1895 a la mitad del nivel de 1872, para luego volver a ascender en un movimiento moderado a dos tercios del nivel original en el año 1913. Tras un breve período de estancamiento alcanzaron los precios durante la Primera Guerra Mundial y bajo las especiales condiciones de una economía de guerra, inflacionista, cimas astronómicas. La disminución de los precios en el período de 1872 a 1895 se debía principalmente a los progresos de la tecnología, a la transición a la producción en masa, a la creciente competencia entre los propios empresarios y, finalmente, a un abaratamiento de las materias primas, sobre todo cuando eran importadas de países de ultramar.

El mayor desarrollo económico de las colonias productoras de materias primas repercutía así sobre el mercado europeo. Estos descensos de los precios, por mucho que inquietasen al mundo de negocios contemporáneo, no eran tanto síntoma de crisis y de exceso de producción, como expresión del progreso

económico. A partir de 1896 empiezan a sentirse los impulsos procedentes principalmente de la industria química y eléctrica, así como de nuevos sectores, como el de la industria de automóviles. A esto hay que añadir que el aumento —aunque débil— del poder adquisitivo de las masas había creado mercados de mayor capacidad de absorción. Finalmente, no dejó de surtir un efecto estimulante sobre los precios la extraordinaria amplitud e intensidad de la expansión económica, principalmente de Alemania y de los hasta entonces retrasados países de Europa como Rusia e Italia. El favorable desarrollo del mercado y de los precios se impulsaron recíprocamente. Bajo aquellos auspicios avanzaba Europa en estas dos últimas décadas antes de la Primera Guerra Mundial a pasos agigantados hacia la sociedad industrial desarrollada.

La agricultura sólo pudo sacar un provecho limitado de esta expansión. Sin embargo, la coyuntura de la economía industrial entre 1896 y 1913 coincidió con una grave crisis económica. Esta alcanzó a toda Europa con gran violencia aunque en el continente pudo ser mitigada gracias a medidas proteccionistas frente a la competencia de los productores de trigo de ultramar. La enorme baja de los precios del trigo de ultramar que podía competir con éxito con los productos continentales gracias a los nuevos medios de comunicación, hizo que se vinieran abajo los precios del trigo en Europa. En Inglaterra fue donde esto se notó de forma más sensible. Con 22 chelines y 10 peniques, el precio del quarter de trigo, alcanzó en 1894 su índice más bajo: aproximadamente la tercera parte de su precio en 1868. En Alemania la situación no era mucho mejor, el quintal métrico de centeno, que en los años setenta del siglo XIX se había pagado a un promedio de 16,90 marcos, costaba en 1894 solamente 11,80 marcos. En Francia el panorama se mostraba ligeramente menos agobiante debido, por una parte, al establecimiento de altas tarifas aduaneras, y porque las empresas francesas, al ser en general relativamente pequeñas, eran menos vulnerables en los momentos de crisis. En conjunto la agricultura tenía que luchar con una seria caída de precios, cuyos efectos se agravaron por el hecho de que el nivel extremadamente bajo de los salarios agrícolas no podía ser mantenido ya ante el avance de la industria. Tampoco las considerables mejoras salariales pudieron evitar siempre el éxodo rural y la escasez de brazos, sobre todo en las grandes propiedades, que habían sido las más perjudicadas por la competencia del mercado mundial. En Prusia los temporeros, que ante la situación económica aún peor de los territorios fronterizos del imperio ruso tenían que contentarse con salarios ínfimos y alojamientos

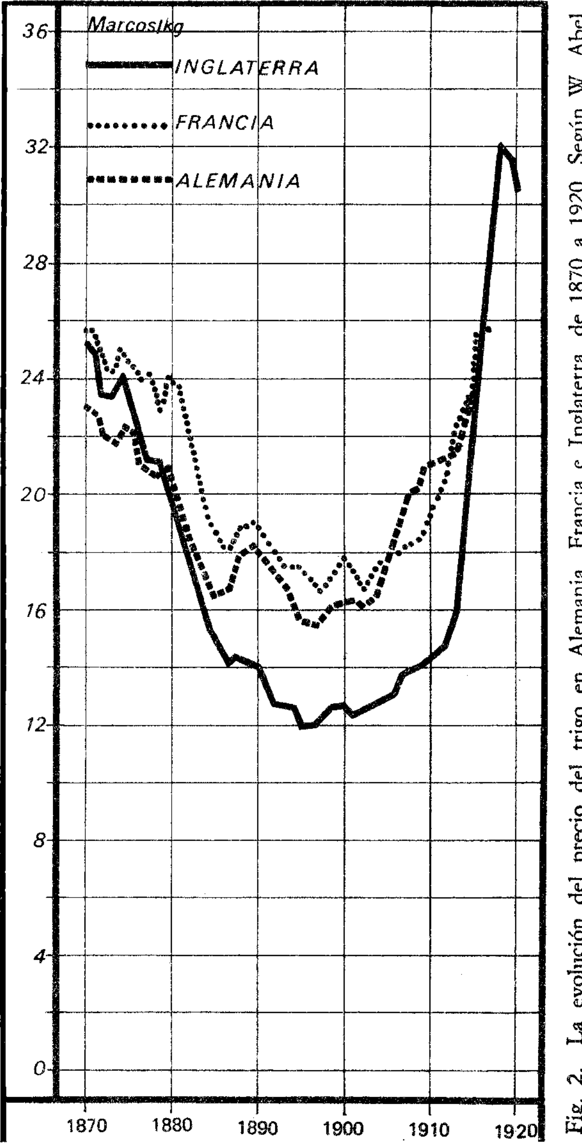


Fig. 2. La evolución del precio del trigo en Alemania, Francia e Inglaterra, de 1870 a 1920. Según W. Abel.

primitivos, aseguraron a la economía de las grandes propiedades una fase de respiro. Pero tampoco en los países donde no se habían sufrido aún seriamente las consecuencias del desarrollo industrial en la agricultura, como en Rusia, en Austria-Hungría y en el sur de Europa, era precisamente rosada la situación de las grandes propiedades. Debido al prestigio social, unido entonces a la propiedad de grandes tierras, los precios del suelo se movían a un nivel mucho más alto que el que hubiese estado justificado bajo un criterio puramente económico. Esto constituía una cierta compensación para los grandes propietarios pero por otro lado fomentaba más la tendencia al endeudamiento ya que los Bancos concedían altas hipotecas aun cuando era dudoso que con los beneficios corrientes se pudiese pagar el crédito.

Estos hechos constituyen el telón de fondo ante el que se desarrollan las enconadas luchas entre los partidarios de la agricultura y los del industrialismo y las de las masas de trabajadores, en favor de una política aduanera proteccionista, luchas que determinaron la política alemana y también, hasta cierto punto, la francesa de los años noventa. No obstante, la situación mejora a partir de 1899. Gracias al aumento de los aranceles, a mejores métodos de producción y, sobre todo, gracias a una nueva subida de los precios en el mercado mundial, pudo recuperarse hasta cierto punto la agricultura. La coyuntura económica condujo a un incremento, aunque modesto, del consumo de las masas, y las condiciones de venta volvieron a hacerse más tolerables. El período de crisis provocado por la guerra mundial aportó a la agricultura, a pesar de alguna dificultad externa, una vez más, tiempos de grandes beneficios. En los años veinte sobrevino por fin el amargo despertar. Antes de la guerra se habían podido paliar las graves consecuencias de la competencia de ultramar con medios políticos, gracias a la gran influencia que los grupos agrarios habían podido conservar aún en casi todos los países; sólo entonces se planteó definitivamente, al menos en Europa central y occidental, el difícil problema de producir en las condiciones impuestas por el mercado mundial.

Aunque la sociedad agraria pudo conservar una cierta hegemonía en las últimas décadas anteriores a 1914, no sólo en los países poco desarrollados, sino también, con la única excepción de Inglaterra, en aquellos países que ya habían entrado en la fase de madurez del desarrollo industrial, la victoria había de pertenecer, sin embargo, por fin, a las nuevas y dinámicas fuerzas del capitalismo industrial. En la primera fase de la industrialización ocupaban dos sectores de la economía el pri-

mer lugar: la construcción de ferrocarriles y la industria textil. Estos eran en todos los sitios los precursores del progreso económico y tecnológico. Con la construcción de ferrocarriles se abrían los países llanos a las nuevas fuerzas económicas; al mismo tiempo estos medios de transporte, relativamente baratos, permitieron la afluencia de grandes masas de trabajadores a los nuevos centros industriales; pero, sobre todo, crearon los amplios mercados que necesitaba la producción industrial en masa. Además, los ferrocarriles, que eran entonces empresas de enorme rentabilidad, desempeñaban un papel importante en la creación de nuevo capital de inversión. Gracias a su gran necesidad de material, la construcción de ferrocarriles constituyó un enorme estímulo para el desarrollo de la industria pesada. La industria textil, que producía bienes de primera necesidad en cantidades considerables y a precios relativamente bajos, halló, sobre todo en la primera época del desarrollo, mercados de una capacidad de consumo casi inagotable. Debido a su escasa necesidad de inversión y a la posibilidad de emplear en gran proporción mano de obra barata y poco especializada, fue un precursor ideal del desarrollo industrial. En Europa central y occidental la red de ferrocarril estaba concluida en su casi totalidad hacia 1890. Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, Francia y Alemania crearon también poderosas industrias textiles, que supieron imponerse a la poderosa competencia de Lancashire, en parte, produciendo mejores calidades. Otras industrias asumieron ahora la dirección. Junto a la construcción de máquinas surgen entonces, sobre todo, la industria química y eléctrica y también la industria de automóviles, que antes de 1914 sólo tuvo una importancia limitada. Estos cambios, provocados por nuevos descubrimientos y avances tecnológicos en el campo de la química inorgánica, pero sobre todo en el de la química orgánica, dieron nuevos y decisivos impulsos al desarrollo económico; no sería exagerado hablar incluso de una *Segunda Revolución Industrial.* Los nuevos sectores dirigentes —química, industria eléctrica y construcción de máquinas— llevaron a la economía europea, a partir de los años noventa, a una segunda gigantesca fase de crecimiento.

En este desarrollo participaron los diferentes países europeos en muy distinto grado. Inglaterra, primera potencia industrial del primer período de la industrialización, pierde en la segunda fase de la revolución, iniciada aproximadamente en 1890, la supremacía, que pasa a los EE. UU. y al imperio alemán. En general, disminuye, en el curso de las últimas décadas antes de la Primera Guerra Mundial, el gran retraso económico de los países del continente europeo frente a Inglaterra. La ventaja

estratégica de los llamados pueblos subdesarrollados, discutida recientemente por teóricos de la economía, tuvo en este proceso, como veremos con más detalle, un papel fundamental frente a sus rivales ya industrializados en gran medida. Pues los primeros podían utilizar los nuevos métodos tecnológicos en sus formas más avanzadas sin verse impedidos por el obstáculo de intereses económicos ya constituidos. La relativa recaída de Inglaterra en la lucha por la supremacía económica tenía causas específicas determinadas por su particular situación. La industria inglesa siguió hallando suficientes mercados para sus productos, que le habían asegurado durante la primera fase de la revolución industrial un papel dirigente. La industria textil de Lancashire, sobre todo, tuvo que someterse a considerables cambios en cuanto a sus mercados; pero hasta la Primera Guerra Mundial su producción fue rentable sin necesidad de cambios tecnológicos fundamentales ni medidas de modernización. Hasta 1914 siguió ocupando la producción de material para la construcción de ferrocarriles el primer lugar. Aún en 1913 se empleaban aproximadamente el 45 % de las enormes inversiones inglesas ultramarinas exclusivamente para la financiación de la construcción de ferrocarriles, y estos capitales significaron en general, aunque no siempre, encargos para la industria inglesa del acero. Que los empresarios ingleses continuaran dedicándose también en la segunda fase del desarrollo industrial a sus productos tradicionales no era disparatado visto a corto plazo, pero de esta manera se perdió indirectamente el contacto con el desarrollo llevado a cabo en el sector de la industria química y electrotécnica. En cierto modo, Inglaterra estaba pagando ahora por su anterior supremacía, si consideramos exclusivamente el sector industrial de la economía inglesa. A pesar de todo, supo mantener su posición de gran potencia. La corriente continua de empréstitos ingleses hacia ultramar, que aumentaron extraordinariamente sobre todo después de la guerra anglo-boer, hasta alcanzar en 1913 el límite de cuatro mil millones de libras, proporcionó un índice de exportación constante y elevado a los productos industriales ingleses. Los grandes beneficios procedentes de estas inversiones, que representaron la décima parte de la renta nacional inglesa, así como los enormes ingresos procedentes del comercio, la navegación y las transacciones de la City londinense, aportaron inmensas ganancias al país. La renta nacional *per capita* inglesa pasó, en el espacio de 1890 a 1913 de 37,48 libras a 52,47 libras[34]. La singular situación de la economía inglesa condujo, ya antes de 1914, a una ampliación del sector servicios a costa de la verdadera producción industrial, fenó-

meno típico de los sistemas capitalistas avanzados. No faltaron avisos de la extrema izquierda; en muchos casos, sin embargo, exageraron sus pronósticos, como, por ejemplo, la *Contemporary Review* del año 1899: «El capital inglés y el trabajo inglés saldrán del país cada vez en mayor medida; Inglaterra se convertirá en el parque de recreo de los nuevos imperialistas, los inversionistas extranjeros»[35]. Aunque las inversiones no disminuyeron en el mercado interior inglés desde finales del siglo XIX, como se ha llegado a suponer, se produjo un indiscutible debilitamiento en la voluntad de servirse del mercado nacional.

En Alemania se inicia la industrialización, con toda su fuerza, relativamente tarde; en realidad no antes de los años cincuenta. Luego, sin embargo, se lleva a cabo con mayor rapidez y con un dinamismo sin igual en la historia económica moderna. Aquí no se notó el largo período de crecimiento económico retardado de 1873 a 1896 en la misma medida que en otros países, si descontamos la gran crisis del progreso *(Gründerkrack)* de los años setenta. La primera ola de la revolución industrial fue seguida casi inmediatamente por una segunda ola determinada por los nuevos adelantos tecnológicos realizados en el campo de la química y la electricidad. Los descubrimientos del procedimiento Bessemer (1856) y del método de Martin para obtención del acero, desarrollado luego por Siemens (1861), crearon las premisas para la producción de acero de buena calidad. Más importante aún fue la introducción del procedimiento de Thomas, desarrollado en 1878 por Gilchrist y el propio Thomas, que permitió utilizar el mineral de hierro muy sulfuroso de la Lorena y de los yacimientos de Longwy-Briey, acelerando así el desarrollo de grandes industrias siderúrgicas en las zonas del Ruhr, del Saar y de Lorena. El desarrollo de la industria pesada alemana se llevó a cabo desde el final de los años ochenta a un ritmo realmente extraordinario. En las dos décadas entre 1890 y 1910 se triplicó la producción de hierro en el Reich alemán y la producción del acero incluso se cuadruplicó. La situación era parecida en el sector del carbón aunque la industria alemana comenzaba al mismo tiempo a importar grandes cantidades de carbón inglés. Pronto, la industria pesada alemana superó a la inglesa, quedando sólo detrás del desarrollo que experimentaron los EE. UU. Ya en 1893 rebasó el Reich a su rival inglés en el terreno de la producción del acero y en 1903 también lo logró en el campo de la producción del hierro. Fue decisivo que la industria alemana del acero pudiese producir más barato que la inglesa gracias a sus mayores empresas y en parte a sus métodos más modernos; hacia 1900 el acero alemán era el 20 % más barato que

el inglés en los mercados mundiales, e incluso, en el mercado interior británico, se alzaron voces contra las ofertas extraordinariamente ventajosas de acero alemán. En este sentido tuvieron un papel importante las condiciones de competencia desequilibradas por las aduanas proteccionistas y la creación de consorcios; la industria alemana podía dictar ampliamente los precios en el mercado alemán y de esta manera exportar a precios más bajos que las industrias de otros países.

La ventaja económica de Alemania con respecto a Gran Bretaña no residía sin embargo tanto en el progreso de la industria pesada alemana, como en los adelantos de la industria electrotécnica y química. En ambos sectores consiguió el Reich alemán hasta 1914 una amplia supremacía en los mercados mundiales. Apoyada en el capital de los grandes Bancos alemanes, creados en los años cincuenta, pudo la industria alemana aprovechar los nuevos inventos y descubrimientos en el terreno de la electrotécnica y de la química orgánica y asegurarse en algunos productos un monopolio casi universal. Los comienzos de este desarrollo se remontan en parte a épocas lejanas. Ya en el año 1847 había sido fundada la empresa Siemens & Halske, a la que se unió luego, en 1883, la Allgemeine Elektricitätsgesellschaft (AEG) y poco más tarde el grupo Felten & Guilleaume. Con la construcción del telégrafo eléctrico, del motor eléctrico, que revolucionaría el progreso industrial, de tranvías eléctricos y con el perfeccionamiento sistemático de los métodos de producción y transmisión de energía eléctrica a través de grandes distancias, se abrió un mercado de capacidad casi inagotable. Mientras Inglaterra y Francia quedaban atrás se formaron también en Suiza, bajo la dirección de la firma Brown, Boviere & Cie, y en los EE. UU. rápidamente poderosas industrias electrotécnicas. Sin embargo, la industria eléctrica alemana suministraba aún en 1913, gracias a su dinamismo y a su ventaja tecnológica, el 30 % de toda la producción mundial de productos electrotécnicos.

Más brillante aún fue la evolución en el sector de la química. Favorecida por los grandes descubrimientos de los años sesenta y setenta en el campo de la química orgánica, sobre todo de los colores sintéticos, surgió en Alemania una industria química importante, a cuya cabeza se encontraban algunas grandes empresas como la Badische Anilin & Soda Fabriken de Mannheim, la Bayer-Leverkussen y la Höchster Farbwerke, que producían en el año 1914 el 85 % del consumo mundial de colorantes sintéticos; además, empezó a fabricar una serie de nuevos productos a partir del alquitrán de hulla, como, por ejemplo, el celofán y la bakelita, precursores de los innu-

merables productos sintéticos que conocemos hoy. Como escribe David S. Landes, no existe un paralelo histórico de este virtuosismo técnico y de la actividad comercial que determinaron este asalto a la hegemonía tecnológica y económica [36]. Solamente un país pudo concurrir en esta carrera. Dirigida por dos grandes empresas de Basilea, la Ciba y la Geigy, Suiza pudo asegurarse una parte importante de la producción, especializándose en artículos químicos valiosos con el empleo de productos brutos e intermedios de la industria alemana. La producción suiza representaba la quinta parte de la producción química alemana y aproximadamente tanto como la de todos los demás Estados europeos juntos. Este hecho demuestra que incluso un país sin industria pesada propia podía lograr importantes triunfos durante la segunda ola de la industrialización.

El apogeo económico de Alemania, en el período de 1890 a 1914, se debió además a una organización financiera considerablemente mejorada con respecto a la de comienzos del siglo XIX. Fue la unión de los grandes Bancos con la industria, lo que permitió tal expansión. A diferencia de la primera fase de la industrialización, en la que había prevalecido la autofinanciación de los empresarios, son ahora los bancos en Alemania, como en todo el resto del continente, los que asumen parte importante del riesgo empresarial. A cambio exigieron amplios derechos de cogestión en las decisiones empresariales. Los grandes Bancos alemanes, sobre todo el Deutsche-Bank, el Dresdener Bank, el Darmstädter Bank, el Commerz-& Credit Bank y el Disconto-Gesellschaft, no podían estar naturalmente interesados en una competencia extrema y tal vez ruinosa de sus clientes entre sí y por ello favorecieron la creación de consorcios y combinaciones industriales, cuyo objetivo era limitar la competencia en el mercado interno y mantener los precios al nivel más alto posible. Por esta razón se llevaron a cabo en Alemania más que en otros países europeos uniones industriales; ejemplos son el Rheinisch-Westphälische Kohlensyndikat del año 1893, que dominaba casi la totalidad del mercado alemán del carbón, y el Stahlwerksverband del año 1904. La tendencia que se iba imponiendo fue observada por los contemporáneos con cierta inquietud pues la estructura económica tradicional amenazaba con favorecer cada vez más a un pequeño grupo de económicamente poderosos.

Los éxitos económicos de esta organización industrial, dirigida fundamentalmente por los grandes Bancos, eran sin duda extraordinarios. Aunque a partir de 1907 se pudo observar de nuevo una ligera disminución del crecimiento económico, el balance general fue brillante. Karl Helfferich, entonces director

del Deutsche Bank, manifestó más tarde que la economía alemana había triplicado durante el último cuarto de siglo su capacidad industrial[37]. Mientras que ésta supuso 124.842 millones de marcos en el año 1892, alcanzó, en 1914, 442.791 millones de marcos[38]. La renta nacional *per capita* ascendió de 438 marcos en el año 1890 a 739 marcos en el año 1913,

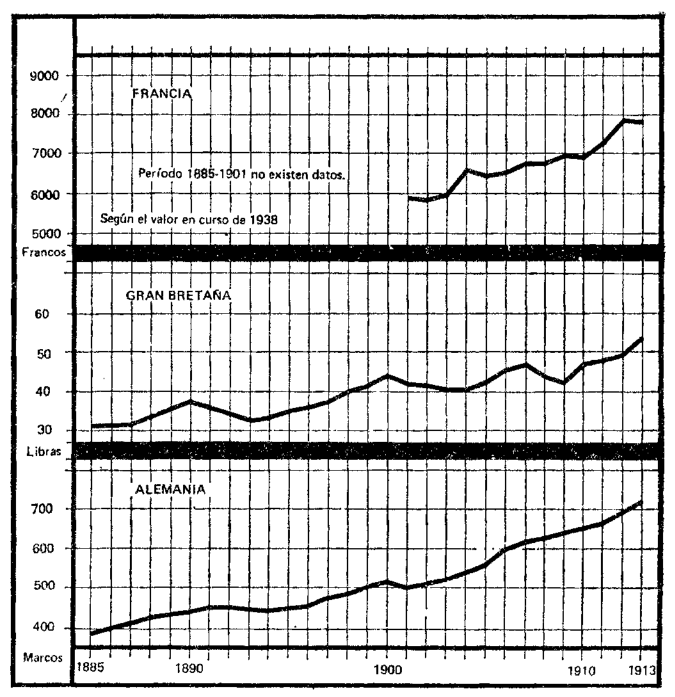


Fig. 3. Evolución de la renta nacional *per capita* en Francia de 1901 a 1913 y en Gran Bretaña de 1885 a 1913 (Ch. P. Kindleberger); en Alemania de 1885 a 1913 (W. G. Hoffmann y J. H. Müller).

un aumento que es tanto más notable si se tiene en cuenta que el número de población había crecido en el mismo período de 44,2 millones a cerca de 60 millones, es decir, que había aumentado en una cuarta parte.

Comparándolo con la situación de Alemania, el desarrollo industrial se retrasó considerablemente en los demás países de

Europa. Tal es el caso, sobre todo, de Austria-Hungría, donde hay que tener en cuenta como *handicap*, además, la falta de materias primas y la insuficiencia de las vías de comunicación existentes. El progreso industrial se limitó a los países alpinos alemanes y al espacio de Bohemia-Moravia, es decir, que en realidad sólo comprendía tres décimas partes del país, mientras que en las restantes continuaban imperando las antiguas formas económicas preindustriales. También aquí tuvieron los grandes Bancos vieneses, apoyados en parte por el capital alemán, un papel decisivo; sólo paulatinamente y de manera limitada, consiguieron liberarse los checos y húngaros de la hegemonía del capital financiero alemán.

En Europa occidental reinaba a su vez otra situación. Mientras que en Alemania se observaba desde los años ochenta un desarrollo económico extraordinariamente agresivo e irregular, en la vecina Francia este proceso se desarrolló más despacio, pero en cambio con una constancia notable. A diferencia de Alemania se concentró allí la creación de la industria en algunos puntos principales, entre los que hay que contar principalmente París, la Lorena, Marsella y Lyon, mientras que el resto del país quedaba de momento poco afectado por las nuevas evoluciones. El débil aumento de la población y el espíritu conservador del campesino francés, que, en general, seguía aferrado tenazmente a pequeñas parcelas, tuvo en este sentido tanta importancia como la preferencia de los inversionistas franceses por los seguros préstamos estatales extranjeros, frente a las inversiones interiores, supuesta o realmente arriesgadas, en la propia Francia. De todos modos Francia pudo adaptar con éxito su gran industria textil de la época preindustrial a los nuevos métodos de producción; y aunque el aumento de la producción francesa de acero de 1,4 millones de toneladas en el año 1890 a 2,8 millones de toneladas en el año 1910, resulta modesto comparado con el gigantesco incremento de la producción de Alemania en el mismo tiempo, representa, sin embargo, un importante progreso. Francia se convierte además en el principal exportador de hierro del mundo. Las industrias del Sarre y del Ruhr fundían en gran medida minerales franceses. Los auténticos progresos económicos de Francia no se llevaron a cabo tanto en el campo de la industria pesada, como en el de la industria de productos elaborados y productos de consumo. La supremacía de Francia en la construcción de automóviles y aviones demostró, de manera impresionante, la capacidad tecnológica de la industria francesa. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que Francia se hallaba entonces aún lejos de ser un Estado industrial en el sentido moderno de la palabra. Las formas

de economía y de producción agrarias preindustriales desempeñaban en la vida económica de antes de la Primera Guerra Mundial aún un papel dominante.

En el norte de Francia, la vecina Bélgica era, de todos los países europeos, la más cercana al modelo inglés, sobre todo si consideramos únicamente la parte valona de este país. Ya hacia 1900 el número de personas ocupadas en la industria era el doble que el de las ocupadas en la agricultura y esta proporción se desplazó en las siguientes décadas aún considerablemente en favor de la industria. En el año 1910, a 520 ocupados en la agricultura, correspondían 1.581 ocupados en la industria. Y tanto la explotación del carbón como la producción del hierro y del acero alcanzaron en Bélgica en el período de 1890 y 1914 un volumen y unas tasas de crecimiento muy satisfactorias teniendo en cuenta la extensión del país, que poseía, en el año 1890, 6,1 millones de habitantes.

Italia, considerada en su totalidad, quedaba bastante rezagada, comparándola incluso con los demás países industriales menores de Europa. El profundo contraste social y económico entre el norte y el sur del país, que constituye hasta nuestros días un problema serio en la política interior italiana, se vio acentuado al comenzar la industrialización. En Lombardía se desarrolló una industria muy activa con su centro en Milán, pero ésta no podía absorber las masas que abandonaban el campo y darles trabajo y pan. Mientras que la emigración alemana a ultramar concluía prácticamente, la italiana alcanzaba entonces uno de sus máximos. Sólo en los quince años entre 1886 y 1900 emigraron cuatro millones de italianos a ultramar y a países europeos vecinos; en la década siguiente fueron seis millones más. Entonces el trabajador italiano constituía una imagen habitual en la vida económica de Europa. Principalmente en Francia, en el Reich alemán y en Suiza, gran número de italianos encontraban trabajo como temporeros en la industria, en la construcción y en la agricultura.

Un caso aparte, de gran trascendencia, lo constituyó Rusia. A diferencia del resto de Europa, la industrialización, que había comenzado al principio de los años noventa a un ritmo considerable, dependía principalmente de la iniciativa estatal. Fue sobre todo el ministro de finanzas conde Sergei Witte el que trató de conseguir desde 1892 la incorporación de Rusia al mundo occidental en el campo económico y técnico, impulsando sistemáticamente el desarrollo económico. Ampliando la red de ferrocarriles, entre otras la línea de ferrocarril transiberiano a Vladivostok, que pudo concluirse en 1901, dio un importante impulso inicial para la creación de industrias propias

sobre una base amplia. Entre 1893 y 1900 el Estado ruso invirtió sólo en la construcción de ferrocarriles 22.266 millones de rublos, con la ayuda de grandes empréstitos del Estado que procedían principalmente del mercado de capital francés, pero también del inglés. En este período se construyó casi una tercera parte de la gigantesca red rusa de ferrocarril y con ello se crearon al mismo tiempo las premisas infraestructurales para la explotación de los importantes yacimientos de hierro, carbón y petróleo en los Urales y Ucrania y para la colonización del Este, sobre todo de Siberia. Junto a los antiguos centros industriales de San Petersburgo y de las capitales bálticas, se desarrollaron entonces rápidamente nuevas zonas industriales en Moscú y en sus alrededores, así como en el sur de Rusia y en los Urales. La adopción del «patrón oro» en el año 1897 supuso en el campo monetario la integración a la economía mundial. Pero de momento todo esto fue como una gota de agua en el mar. A pesar de estos comienzos tan esperanzadores, Rusia seguía siendo a principios de siglo un país industrialmente subdesarrollado, comparado con Europa central y occidental. Según los cálculos de Lenin, de 1900 a 1903 había, en cincuenta circunscripciones administrativas de la Rusia europea, aproximadamente 2.208.000 trabajadores industriales, incluyendo ferroviarios y mineros —una cifra bastante modesta para una población de más de 100 millones de habitantes [39]. Después de su rápida subida en los años noventa, la economía rusa cae, entre 1901 y 1903, en una grave crisis, y apenas repuesta, sufre un revés a raíz de la desgraciada guerra contra Japón en el lejano Oriente, y de la revolución del año 1905. Durante la revolución se puso por primera vez de manifiesto el peso político de los trabajadores industriales rusos, cuyo número era aún reducido comparado con la masa de la población, pero que se hallaban en cambio concentrados en los centros económicos y políticos. Después de una serie de años extremadamente inquietos desde el punto de vista interno, se produce a partir de 1909 un nuevo y fuerte apogeo, determinado en parte por grandes proyectos militares y semimilitares, como la ampliación de los ferrocarriles rusos del Oeste. Teniendo en cuenta la desfavorable base de la que partió la industrialización en Rusia, los logros conseguidos en las últimas dos décadas y media antes de la Primera Guerra Mundial por la economía rusa fueron realmente impresionantes. La extracción de carbón subió de 16,0 millones de toneladas en el año 1890 a 36,3 millones de toneladas en el año 1913; en el mismo período aumentó la producción de hierro bruto de 900.000 toneladas a 4,5 millones de toneladas y la producción de acero y de hierro

forjado de 800.000 toneladas y 4,3 millones de toneladas. Si por otro lado se tiene en cuenta que la población rusa, según cálculos aproximados, había crecido de 94,3 millones en el año 1897 a 155,4 en el año 1913, se verá que todo esto no era demasiado y que no podía influir apenas en la vida de la gran masa del pueblo ruso. Por otro lado el brusco crecimiento industrial, sobre todo de los últimos años antes de 1914, demostró que aún existían enormes posibilidades económicas sin aprovechar.

Precisamente este hecho atrajo el capital internacional a los grandes espacios rusos. Allí se podía contar con unas posibilidades de inversión lucrativas a gran escala, como ya no se encontraban fácilmente en otros lugares. Más aún que en Alemania, fueron aquí los grandes Bancos los que tomaron, junto con el Estado, la iniciativa para la creación de nuevas industrias. Su capital procedía, sin embargo, en su mayor parte, de otros países. También en las empresas rusas participaba en gran medida el capital extranjero; en el año 1890, más de un tercio del capital base de todas las empresas capitalistas rusas se encontraba en manos extranjeras y esta participación alcanzó hasta 1900 un 50 %, descendiendo luego hasta 1914 de nuevo a un tercio. En el desglose de las participaciones, una tercera parte correspondía a capitalistas franceses, una cuarta a ingleses, una quinta a alemanes y una séptima parte a belgas. En el aspecto económico la Rusia zarista era una dependencia colonialista del capital financiero europeo. La industrialización de Rusia fue por tanto, sólo en cierta medida, la obra de la burguesía individualista, al contrario que en Inglaterra y Francia y, en parte, también en Alemania. Desde el principio dominó la gran empresa y de esta manera se desarrolló allí un sector capitalista relativamente débil y no una burguesía de corte europeo occidental. Del mismo modo se formaron allí gran número de combinaciones industriales y consorcios que trataban de repartirse los mercados y de mantener el nivel de precios lo más alto posible, mediante acuerdos sobre precios y producción.

No cabe duda de que la tendencia a crear combinaciones industriales era un fenómeno internacional. Aunque Alemania y Rusia, dejando a los EE. UU. aparte, fueron en este sentido pioneros, también en Francia y en Inglaterra se pasó cada vez más a la creación de trusts y consorcios. La formación de consorcios tampoco se detuvo ante las fronteras nacionales. Aproximadamente desde la mitad de los años noventa comenzaron a crearse por encima de las fronteras de las distintas economías nacionales, consorcios internacionales y trusts y se

inició el reparto de los mercados mundiales. A pesar del extremado nacionalismo de la época, el capitalismo desarrolló, siguiendo su auténtico espíritu, formas de cooperación internacional, que, de no haber sobrevenido la Primera Guerra Mundial, hubiesen actuado como elemento moderador en las relaciones internacionales. Pero las fuerzas contrarias poseían aún el predominio. Las rivalidades económicas existentes, sobre todo el antagonismo germano-inglés, confirmaban a los pueblos europeos en sus prejuicios nacionalistas. De esta manera la irritación en Rusia por el supuesto, o realmente desfavorable, tratado comercial germano-ruso del año 1894, contribuyó considerablemente al empeoramiento de las relaciones germano-rusas. Y de igual forma el enorme apogeo económico de Alemania fomentó la ambición imperialista de la burguesía alemana. Cegados por el brillo de un creciente bienestar económico, los alemanes censuraban la desproporción reinante entre la posición política y la económica del Reich en el mundo y confiaban demasiado en la capacidad económica, al parecer inagotable, de la propia nación.

Sin duda, en Alemania se tendía demasiado a considerar únicamente el sector industrial de la economía nacional y a sobrevalorar, por tanto, la posición económica de Alemania en el mundo. Esto lo demuestra la lectura de las cifras de capital invertido en el extranjero, principalmente en ultramar, por las grandes naciones industriales europeas. Aquí Alemania se hallaba aún lejos de Inglaterra, de Francia; en el año 1914 habían invertido en el extranjero: Inglaterra, 4.004 millones de libras; Francia, 44.000 millones de francos; mientras que Alemania había invertido solamente 25.000 millones de marcos. Estos números demuestran que Alemania, teniendo en cuenta su renta nacional y su capital disponible, estaba aún lejos de Inglaterra, que anualmente invertía fuera de sus fronteras casi la mitad del capital creado.

No sería justo considerar el desarrollo económico de Europa, en el período del imperialismo, únicamente desde el punto de vista de las rivalidades nacionales. Las enormes inversiones de capital de los principales países industriales de Europa en ultramar, no sólo abrieron al comercio europeo y a la civilización técnica grandes espacios vírgenes, sino que además de esto iniciaron el camino hacia una economía mundial multilateral, de la que se beneficiaron todas las partes en igual medida. En los veinticinco años que siguieron a 1890 se triplicó el valor del comercio mundial. Al mismo tiempo empezó a disminuir la importancia de las fronteras nacionales para el desarrollo económico de las naciones. Cada vez un

mayor número de Estados europeos optaron por abrir en mayor grado las propias fronteras al comercio por medio de la firma de acuerdos, sin prescindir, sin embargo, por completo de las aduanas, en defensa de la agricultura y de determinadas industrias. De gran importancia para el desarrollo del comercio mundial fue el papel que desempeñó Gran Bretaña. Su supremacía en la conquista de nuevos mercados dentro y fuera del imperio británico favoreció en su resultado final a todas las grandes naciones industriales y comerciales. Aparte de esto el imperio actuaba como equilibrador de la balanza internacional de pagos, lo que beneficiaba en sumo grado las relaciones comerciales internacionales. Aún al principio de los años ochenta, Inglaterra controlaba aproximadamente el 50 % de todo el comercio mundial; en los años de 1911 a 1913 se redujo su parte a un 14 %. Alemania, junto a los EE. UU., el mayor rival económico de Inglaterra en los mercados del mundo, era al mismo tiempo uno de sus mejores clientes, un hecho que no supieron ver la mayoría de los contemporáneos.

Sin el amplio sistema de comercio mundial multilateral que había surgido en la lucha económica de los Estados industriales jóvenes de Europa contra los viejos, no hubiese sido nunca posible el tremendo crecimiento de la productividad económica que se alcanzó en el período de 1880 a 1914. Al mismo tiempo constituyó una importante base para un nuevo crecimiento económico. El hecho de que las grandes naciones industriales dirigiesen antes de 1914 sus miradas cada vez más hacia ultramar, tenía sin duda una razón económica. Obsesionados con la rivalidad de sus intereses, no se daban cuenta de que las conquistas políticas y económicas de un país en ultramar beneficiaban indirectamente también a todos los demás países. Los lemas nacionalistas presidían los conflictos. Sin embargo, los signos del desarrollo revelaban una nueva ampliación de la interrelación económica de las economías nacionales.

La recesión que se produjo poco antes de la Primera Guerra Mundial no fue tan grave como para haber podido cambiar fundamentalmente el curso del desarrollo. Sin embargo, la guerra mundial destruyó en gran medida el incipiente orden económico internacional de un comercio libre. Los círculos dirigentes de la economía, que hasta entonces habían sido más bien partidarios de la conservación de la paz europea, propugnaron ahora un anexionismo nacionalista desorbitado. Las necesidades de la economía de guerra provocaron profundas intervenciones en las diversas economías nacionales, intervenciones que perjudicaron considerablemente el equilibrio económico. Aparte de esto la guerra destruyó enormes valores económicos y las nacio-

nes europeas tuvieron que soportar el peso, más o menos grande, de las deudas. Los tratados de paz del año 1919-1920, que no tuvieron en cuenta las necesidades de un crecimiento económico equilibrado en Europa y en el mundo y que terminaron por descomponer la balanza de pagos internacional, reforzaron ulteriormente la tendencia del capitalismo europeo a crisis condicionadas por las fases de crecimiento. Las consecuencias de esta evolución llegan hasta nuestros días, pues el fascismo europeo puede entenderse en todas sus versiones como producto de estas crisis.

[Ver anexos 1 y 2, pp. 341-342.]

3. Las estructuras de la sociedad y los problemas sociales

Según la teoría de Walt Whitman Rostow sobre «los estadios de crecimiento económico», hacia 1910 las economías industriales de Alemania y Francia pasaron de la fase del «crecimiento económico constante» a la fase del desarrollo industrial pleno, caracterizado por la explotación intensiva del potencial económico y de todas las fuentes de materias primas. Inglaterra había encabezado el movimiento ya a mediados del siglo XIX, mientras que Austria-Hungría, Rusia y los países del sur de Europa seguían a gran distancia. Las diferencias en el grado de desarrollo de las economías nacionales europeas aún eran muy acusadas en los tres decenios que precedieron a la Primera Guerra Mundial. También en los diversos países la diferencia entre los centros de concentración industrial y las regiones predominantemente agrarias era muy grande e incluso aumentó con el avance progresivo de la industrialización. Mientras por un lado se encontraban en los comienzos de la sociedad industrial de masas, por otro permanecían aún a menudo en el terreno de una economía agraria de estructura patriarcal. Esta situación producía agudos contrastes políticos y sociales tanto en la relación de las naciones europeas entre sí, como en el interior de cada una de ellas, contrastes que influían considerablemente en la mentalidad de los pueblos. Que los alemanes antes de 1914 tendieran a menospreciar a los ingleses como una nación de «comerciantes materialistas» y que éstos, a su vez, vieran en el *junker* prusiano, autocrático y deshumanizado, la figura representativa de la nación alemana, no es más que el reflejo de dos estadios diferentes del desarrollo social.

Aun cuando las diferencias de estructura social en la Europa de 1885 a 1914 fueran muy importantes para el posterior curso de los acontecimientos, en todas partes —aunque en medida diferente— había una tendencia a la ruptura de las barreras tradicionales entre las clases y a la igualación, unida inevitablemente a la moderna sociedad industrial de consumo. La segunda oleada de la industrialización condujo a tan importantes cambios en los salarios e indirectamente en la posición social de las capas dirigentes, que a la larga fue inevitable un cambio también en los métodos de «selección de dirigentes», para uti-

lizar un término de Max Weber. Al mismo tiempo, el orden social tradicional encontró un contrincante poderoso, aunque todavía desorganizado, en la masa obrera industrial, que se desarrollaba al margen de la sociedad burguesa y estaba en gran medida desligada de los vínculos tradicionales.

A pesar de estas transformaciones, las viejas élites dirigentes, predominantemente aristocráticas, se mantuvieron en el poder en casi toda Europa, en algunos casos renunciando a una parte de sus privilegios. A los artífices del nuevo desarrollo industrial les quedó vedada, hasta 1914, la entrada en las capas dirigentes políticas, en muchos casos también porque no se esforzaban por entrar en ellas. El poder económico les parecía generalmente más atractivo que la influencia política. Unicamente, en casos excepcionales, hombres de la economía y de la industria llegaron a puestos políticos dirigentes. Hasta muy entrado el siglo XX, las capas aristocráticas defendieron con gran éxito su posición predominante en el Estado, aunque tenían que admitir en sus filas a un creciente número de representantes de la burguesía.

El fenómeno se dibuja con mayor claridad en Gran Bretaña. A pesar de la amplia democratización del derecho electoral en el año 1884, siguió dominando entre los dirigentes de los dos grandes partidos el tipo del «landed gentleman», para el que la política no era tanto una profesión como un deber resultante de su posición social. Entre los conservadores dominaban lógicamente los representantes de la alta aristocracia; pero también entre los liberales el panorama era parecido. Si lord Rosebery, uno de los grandes pares liberales, que a través de su matrimonio con una Rothschild regía un gigantesco imperio financiero, llegó a jugar un papel tan importante en el partido liberal al dimitir Gladstone, se lo debió en primer término a su nombre. El hecho de haber ganado varias veces el Derby contribuyó también a su prestigio político. Si lord Rosebery no hubiera fracasado en los años de la grave crisis interior del partido liberal durante la guerra de los boers, podría haber seguido a su cabeza aún un decenio. Su desaparición de la escena política a partir de 1903 anunció el final de una política dirigida por reducidas élites aristocráticas. Sin embargo, el carácter aristocrático de la capa dirigente liberal se mantuvo con hombres como Grey, Asquith y Haldane. La subida de Lloyd George, de origen galés humilde, al puesto de «Chancellor of the Exchequer» en el año 1908, supuso un cambio importante. Aunque únicamente la situación extrema de la Primera Guerra Mundial posibilitó su salto a «Downing Street» y con ello el relevo de la vieja élite aristocrática.

Ya en los años 80, un grupo importante de políticos radicales ingleses luchaba por una apertura del «establishment» político «hacia abajo». La «National Liberal Federation», fundada en 1878, trabajaba en este mismo sentido, con la intención de servir como nexo entre las masas electorales y los gremios directivos del Partido Liberal. Pero en vez de hacer valer la voz del pueblo ante los dirigentes del partido, pronto se convirtió en un instrumento en manos de éstos. Se podrían aducir otros ejemplos. Las fuerzas democráticas eran aún tan débiles y el prestigio de las élites tan fuerte, que estas últimas seguían fácilmente llevando la delantera; bastaba que se esforzaran en cierta medida por adaptarse a los tiempos. En el caso de Gran Bretaña este proceso se vio favorecido por determinadas características de las tradiciones sociales. A ellas pertenece el conocido hecho de que la aristocracia inglesa nunca fue tan exclusivista como la continental-europea Para las avanzadillas de la burguesía inglesa no era tan difícil insertarse en la aristocracia y prácticamente todo político destacado de origen burgués podía contar tarde o temprano con ser admitido en la aristocracia. No pocas veces el título de nobleza se conseguía por medio de generosos donativos a las cajas del partido gobernante. Sin embargo, todo esto no redujo el atractivo que ejercía el estilo de vida de la aristocracia inglesa; al contrario, su capacidad de imponer un estilo, fomentada por los grandes colegios privados y los «colleges» de Oxford y Cambridge permanece vigente hasta nuestros días.

Mayor importancia tiene indudablemente el hecho de que la nobleza inglesa participara totalmente en el enorme auge económico desencadenado por la industrialización, como propietaria de los terrenos en los que se erigían las nuevas industrias y los nuevos barrios obreros. Aun cuando la introducción del impuesto sobre la herencia en 1909 hizo difícil la conservación de las suntuosas mansiones señoriales con sus extensos parques, la situación económica de los aristócratas ingleses era incomparablemente mejor que la de sus primos continentales-europeos, que intentaban, a menudo en vano, conseguir los medios necesarios para un modo de vida acorde con su clase, explotando sus posesiones según los métodos capitalistas intensivos. Mientras en el continente la vieja élite aristocrática y la nueva élite industrial evolucionaban independientemente la una de la otra, en Gran Bretaña los puestos directivos de los Consejos de administración de las grandes sociedades y Bancos eran generalmente ocupados por miembros de la alta aristocracia. Aun cuando jugaran un cierto papel los motivos de prestigio, el hecho hace evidente la estrecha fusión de las viejas y de las nuevas capas

dirigentes. En el continente europeo, por el contrario, especialmente en las sociedades de Europa central y oriental, apenas influenciadas por las corrientes democráticas, se impuso en general la tendencia opuesta. Aquí seguía actuando el viejo prejuicio según el cual una actividad profesional es incompatible con la dignidad del «status» nobiliario. Indudablemente habían surgido en muchas de las grandes propiedades, industrias secundarias —serrerías, fábricas de cerveza, destilerías, fábricas de ladrillos, etc.— y en algunas ocasiones —como, por ejemplo, en Silesia— miembros de la alta aristocracia habían jugado un importante papel en la creación de nuevas industrias. Pero, en general, la nobleza, concentrada en la explotación de sus tierras, perdió la ocasión de conectar con el desarrollo industrial. A esto se añade el agravante de que la agricultura europea, desde fines de los años 80, sufría cada vez más bajo la competencia superior de los productores de cereales ultramarinos. En tales circunstancias surgieron en el seno de la aristocracia —por ejemplo, en la Prusia situada al este del Elba— tendencias francamente anti-industriales. El continuo descenso de precios para los productos agrarios fue atribuido a la especulación capitalista y hasta hubo oposición a la ampliación y construcción de las vías de comunicación, como, por ejemplo, el Mittellandkanal en Prusia. La nobleza hizo todo lo posible por inducir al Estado a tomar medidas proteccionistas para proteger la agricultura nacional. En Austria-Hungría la aristocracia aún fue más lejos, oponiéndose a los esfuerzos estatales por modernizar y aumentar la producción agraria, para que la mayor competencia no estropeara los precios.

En tales circunstancias la aristocracia era absolutamente incapaz de mantenerse exclusivamente de los ingresos que le proporcionaban sus tierras. Sobre todo en Rusia, Prusia, en los demás Estados federales alemanes y —en menor medida— en Austria-Hungría, la aristocracia entró a servir en el aparato estatal de la administración y el gobierno. En Rusia los altos puestos administrativos eran privilegio de la aristocracia; en los demás países ésta estaba al menos favorecida. En todos los países regía el principio de que a mayor importancia de los cargos, mayor número de ocupantes del cargo pertenecientes a la nobleza y, generalmente, a la alta nobleza. Los altos puestos del servicio diplomático estaban casi exclusivamente reservados a miembros de la aristocracia. En los servicios superiores de la administración no reinaba la misma situación: la extrema necesidad de funcionarios cualificados no permitía un favorecimiento de la aristocracia. A pesar de todo la nobleza seguía estando extraordinariamente representada en los puestos altos. Así, por

ejemplo, en Prusia los cargos de gobernador de provincia («Oberpräsident») y de presidente del gobierno («Regierungspräsident») estaban, hasta 1914, en manos de miembros de la nobleza. También en las capas administrativas inferiores se llegó a una estrecha interrelación de la administración estatal y la aristocracia terrateniente, como demuestran los «Landräte» en Prusia y los «zemstvos» en Rusia. Las viejas élites aristocráticas de Europa central y oriental tenían un seguro respaldo político, y en gran medida también material, en la burocracia estatal, que les permitía mantenerse en sus posiciones sociales heredadas a pesar de todas las tendencias adversas.

A esto se añade que en toda Europa las fuerzas armadas ofrecían un refugio a las clases conservadoras. En ellas era posible cultivar las propias tradiciones aristocráticas sin intervención de la opinión pública. En todos los países europeos servir algunos años como oficial en un regimiento de prestigio o en una unidad equivalente formaba parte de la carrera de un aristócrata antes de ponerse al frente de las posesiones familiares o iniciar la carrera de funcionario. Tanto más cuanto que el servicio militar originalmente había sido considerado un privilegio de la nobleza. Sin embargo, ya desde mediados del siglo XIX la nobleza, numéricamente, no estaba en condiciones de ocupar todos los puestos de alto rango militar. Con el advenimiento de los ejércitos de masas, que creaban problemas de mando cada vez más complejos, hubo que recurrir a oficiales de origen burgués, y hacia fines del siglo XIX éstos superaban ampliamente en número a los oficiales aristócratas. Pero también en las fuerzas armadas regía el principio de que la participación de la nobleza aumentaba en razón del rango: los cargos superiores normalmente estaban vedados a los burgueses. La Primera Guerra Mundial trajo consigo grandes transformaciones en este terreno, como demuestra el caso de Ludendorff. La importancia creciente de los estados mayores, que constantemente desarrollaban nuevos métodos para la dirección de los modernos ejércitos de masas y que necesitaban oficiales formados científicamente, así como la creciente tecnificación de la estrategia militar, fueron mucho antes de estallar la guerra desfavorables al ejercicio tácito del privilegio aristocrático.

Ante la penetración del elemento burgués en las fuerzas armadas, la aristocracia en muchas partes de Europa se distanció de los aspirantes burgueses al grado de oficial y se concentró en unas pocas y escogidas formaciones, generalmente de la caballería o de la Guardia. En Gran Bretaña, el «esprit de corps» de los oficiales de la flota fue un serio obstáculo para la modernización necesaria de la flota británica y no llegó a ser eliminado por

completo por las reformas que el almirante Fisher llevó a cabo desde 1905. Incluso en un país con tradiciones democráticas tan profundas como Francia el cuerpo de oficiales formaba una casta aristocrática opuesta a los principios básicos de la Tercera República y ligada únicamente a los ideales de la nación y de la razón de Estado.

En las monarquías conservadoras de Europa central y oriental estas tendencias militaristas lógicamente surgían con mayor fuerza. Precisamente en los países donde el poder estatal descansaba sobre una base relativamente inestable, como la Rusia zarista o el imperio austro-húngaro, el ejército y el cuerpo de oficiales tenían una gran influencia política y social como pilares tradicionales de la monarquía. En el Reich alemán Guillermo II, oponiéndose a las corrientes democráticas, se empeñaba en interpretar la prerrogativa imperial de mando supremo de manera extensiva y de este modo sustraer al ejército y a los oficiales a la influencia del *Reichstag* y de la opinión pública. Mientras más terreno perdían las fuerzas conservadoras entre el pueblo y en los cuerpos parlamentarios, mayor era la importancia de los militares en los círculos gubernativos. Incluso en Inglaterra y Francia generales insignes como los procónsules imperialistas lord Kitchener y Liautey gozaban de gran prestigio en los grupos dirigentes de la sociedad y estaban en condiciones de influir decisivamente sobre el curso político de sus gobiernos.

La posición de las élites aristocráticas se vio además fortalecida por la atracción que ejercían sobre parte de la gran burguesía los modos de vida aristocráticos. Antes de 1914 el objetivo secreto de la gran mayoría de los hombres de negocios y de los industriales ingleses era adquirir tierras y asimilarse al estilo de vida aristocrático. Esta tendencia era aún más acusada en Prusia, aunque allí había que superar mayores obstáculos para entrar en los círculos aceptados por la corte. Adquiriendo despachos de oficial de reserva en regimientos distinguidos e imitando el código de honor aristocrático, la burguesía intentaba participar, al menos indirectamente, en el esplendor feudal de la aristocracia. Todo el que podía, adquiría tierras —paso primero y necesario para asimilarse a las formas de vida aristocráticas, seguido en algunos casos por la adquisición de un título nobiliario. La aristocracia, por su parte, tampoco era tan reacia como pudiera suponerse a solucionar sus, a menudo acuciantes, problemas financieros a través de matrimonios burgueses. Si la antigua aristocracia prusiana, injustamente tachada de casta rígida, consiguió conservar su posición dominante en el Estado durante tanto tiempo, fue gracias a que supo absorber

y asimilar constantemente a la vanguardia de la burguesía ascendente. Esta estaba dispuesta a lanzarse en brazos de los *junker*, como ya entonces lamentaban hombres como Werner Sombart o Max Weber: «La meta más alta de nuestra burguesía es llegar a ser *junker*, es decir, adquirir un título nobiliario y con él los modos de pensar y los aires de nobleza. De este modo la clase feudal vive un constante proceso de rejuvenecimiento (...). Los burgueses enriquecidos (...) olvidan cuanto antes sus orígenes y se fusionan con la gran nobleza terrateniente o al menos con los propietarios feudales»[40]. Sólo en el ámbito del imperio austro-húngaro se observa la tendencia opuesta. Allí la aristocracia permanecía no sólo tajantemente aislada en la burguesía sino que tampoco mostraba un especial interés en entrar al servicio del Estado, dejando ese terreno a la nobleza cortesana, procedente en gran parte de Alemania, y más tarde, a la alta nobleza checa y magiar. El aislamiento de esta capa aristocrática internacional frente a los pueblos de la monarquía no podía ser mayor —exceptuando a la nobleza magiar— y por eso, en fin de cuentas, los movimientos burgueses que surgieron en el imperio austro-húngaro se volvieron todos contra la pervivencia de una monarquía a la que virtualmente nada les unía.

La situación era completamente diferente en los países en los que el liberalismo había triunfado, fundamentalmente en el segundo tercio del siglo XIX, como Bélgica, Francia e Italia. Aquí, la gran burguesía había tomado el mando del poder público y social. Sin embargo, también aquí la participación activa en la vida parlamentaria quedaba reducida a un círculo relativamente pequeño de la población, en el que la tradicional burguesía de notables marcaba la pauta. La élite política dirigente estaba constituida en estos países por juristas y por hombres unidos a la política y al Estado por una larga carrera administrativa, como por ejemplo Giovanni Giolitti en Italia o Joseph Caillaux en Francia. No pocas veces llegaban a las cimas dirigentes periodistas, como Théophile Delcassé. Hasta principios del siglo XX no se impuso con hombres como Georges Clemenceau y Aristide Briand un nuevo tipo de político democrático, no perteneciente exclusivamente al medio de la burguesía de notables pre-industrial y, por lo tanto, capaz de ejercer sobre las masas una atracción personal mayor que la de sus predecesores.

Podemos decir, no olvidando las grandes diferencias en las estructuras sociales y políticas de los Estados europeos, que el desarrollo industrial amenazaba en toda Europa la posición de predominio económico y social de las élites dirigentes tradicio-

nales. En Gran Bretaña la situación era menos crítica, ya que la gran elasticidad del sistema social garantizaba la continuidad en el cambio, aunque los métodos tradicionales por los que se había intentado integrar mal que bien a los obreros en el sistema de partidos establecido, se derrumbaran a principios del siglo XX. En los Estados de Europa continental gobernados parlamentariamente, el paso a la sociedad de masas estuvo en casi todas partes acompañado de graves crisis y enconadas controversias dentro de los grupos dirigentes. La situación adquirió gran explosividad en Alemania, Austria-Hungría y Rusia, ya que en aquellos días, la crisis general de la agricultura hizo tambalearse la base económica del predominio social y político de las élites aristocráticas. En consecuencia, éstas fueron degenerando más y más en simples grupos de intereses que en vez de ser los pilares del Estado y la monarquía necesitaban vitalmente de su protección.

Esta evolución es muy clara en Prusia, donde los grandes terratenientes de las regiones situadas al este del Elba no vacilaron en obligar al gobierno, en contra de toda la política conservadora tradicional, a tener en cuenta sus intereses económicos utilizando los métodos de la lucha parlamentaria y la agitación popular. Con ayuda del *Bund der Landwirte* (Liga de los agricultores), fundado en 1893, y que en pocos años se había convertido en una poderosa organización agraria, los latifundistas ganaron numerosos seguidores entre los campesinos. Esta abierta política de intereses, perseguida por una clase privilegiada por razones de tradición, que sin embargo se proclamaba primer pilar del «trono y del altar», despertó en las capas burguesas, habitualmente fieles a la monarquía, gran hostilidad y contribuyó al desprestigio del sistema político establecido. En Austria y sobre todo en Hungria, en cambio, la apertura de vías de comunicación y la industrialización no habían prosperado tanto como para conmocionar seriamente las bases económicas del poder de la aristocracia terrateniente. Este se mantenía intacto. La alta aristocracia, apoyada en sus extensas propiedades y en la posesión indiscutida de grandes privilegios políticos, impuso una política agraria de acuerdo con sus intereses económicos.

La situación de la nobleza terrateniente en Rusia era mucho más difícil. A pesar de que las medidas reformistas de los años 60, que habían abolido la servidumbre, sustituyéndola por un complicado sistema de obligaciones amortizadoras, escalonadas a lo largo de varios decenios, habían sido implantadas bajo la influencia de la aristocracia y favorecían a ésta a costa de los campesinos, la nobleza terrateniente se hallaba en una cri-

sis permanente. En su gran mayoría, la nobleza rusa se había demostrado incapaz de resolver la nueva situación y transformar en empresas rentables las tierras que le habían sido adjudicadas en la nueva ordenación de 1861. Generalmente prefirieron vender parcial o totalmente sus propiedades o arrendarlas en condiciones muy variables a los campesinos a cambio de una renta, de servicios o de ambas cosas. El campesinado se encontraba en una situación muy apurada, en parte por la acumulación de deudas provocada por las obligaciones amortizadoras, pero sobre todo por el extraordinario aumento demográfico de aquellos decenios, que condujo a una falta crónica de tierra cultivable, intensificada dramáticamente por el hambre de los años 1891 y 1892. Cada vez más, los campesinos tenían que labrar, además de sus tierras, las tierras de los grandes propietarios, a pesar de que a menudo los contratos de arrendamiento o de servicios a prestar revivían las viejas formas de la servidumbre. Los campesinos, en muchos casos, compraban tierra a los terratenientes para agrandar al menos un poco la superficie cultivable, insuficiente para alimentar a sus familias. Para ello utilizaban los servicios del Banco Agrario Campesino fundado por el Estado en 1883 y que les concedía hipotecas a gran escala. La aristocracia terrateniente, por su parte, estaba más dispuesta que nunca a vender a los campesinos tierras para resolver al menos momentáneamente sus problemas financieros. Esta evolución adquirió tal extensión que puso en serio peligro la posición de los latifundistas. En 1905, casi un tercio de la tierra adjudicada a la nobleza en 1861 había pasado a manos de los campesinos. El gobierno zarista había intentado frenar ese proceso de abandono del campo por la nobleza terrateniente, que por razones políticas no podía admitir, fundando un Banco Agrario especial para la nobleza, que cobraba a los latifundistas intereses considerablemente más bajos que a los campesinos. Pero esto no condujo más que al profundo endeudamiento de la aristocracia latifundista, sin que se pudiera evitar la penetración del elemento campesino y en menor número también de la clase media.

La necesidad de tierras de los campesinos no tenía límites. En 47 unidades administrativas de la Rusia europea la nobleza poseía en 1905, 50 millones de desiatinas, mientras los campesinos, en su mayoría organizados en la tradicional «comunidad rural» o «*Mir*», poseían 160 millones de desiatinas[41]. Hasta 1914 los campesinos adquirieron a costa de la nobleza 10 millones de desiatinas más, y de los 40 millones aún en manos de la nobleza, más de un tercio pasó en forma de hipoteca a la propiedad «de

facto» del Banco Agrario de la nobleza. La posición económica de la aristocracia rusa latifundista estaba gravemente comprometida.

Este desplazamiento en las relaciones de propiedad no resolvía el problema de los campesinos, que se enfrentaban a la superpoblación crónica de las tierras llanas. Estos exigían la expropiación sin indemnizaciones de los restantes terratenientes aún muy poderosos, y al no admitir o no conocer el concepto moderno de la propiedad del suelo, partían de la antigua idea de que la tierra pertenece al que la trabaja. Desde fines de los años 90 la cuestión de la reforma agraria preocupaba a todos los partidos políticos; apenas se discutía la necesidad de conceder más tierras a los campesinos, sólo había divergencias sobre la indemnización que debía ser pagada o no a los terratenientes. Desde 1906 el ministro ruso Stolypin inició un extenso programa de reforma agraria, por la que esperaba eliminar la intranquilidad creciente en el campo y mejorar la situación crítica del latifundio, al que se oponían encarnizadamente los campesinos. El objetivo más importante de Stolypin era disolver las antiguas comunidades rurales y convertir la propiedad colectiva campesina en propiedad hereditaria individual. De este modo fueron creadas hasta 1915, aproximadamente 7 millones de propiedades campesinas independientes que, sin embargo, eran en general demasiado pequeñas para permitir a sus dueños un modo de vida adecuado. La gran masa de campesinos rusos permanecía sumida en un estado crónico de pobreza y subempleo. El grupo de campesinos relativamente prósperos, que se formaba lentamente y que como mucho constituía un 15 % de la totalidad, no era un contrapeso suficiente como demostraría la evolución posterior, aunque el gobierno hubiera esperado precisamente de este grupo que ejerciera una influencia estabilizadora sobre la situación social de las tierras llanas.

La pervivencia del sistema zarista y con él de la posición privilegiada de la aristocracia en la sociedad rusa se vio favorecida por la falta de una burguesía comparable a la de Europa occidental. Mientras que en Europa central y occidental se había desarrollado en el curso de los siglos XVIII y XIX una amplia clase media que poseía una ética burguesa y formas de vida típicamente burguesas, y que además ofrecía en el terreno político un programa relativamente coherente —la ideología liberal—, en Europa oriental y centro-oriental nunca existió algo parecido. Unicamente en Bohemia y Moravia surgieron paralelamente una burguesía alemana y una burguesía checa con una fuerte conciencia nacional. Por lo demás, en ningún país de Europa oriental existía una burguesía en el sentido europeo occidental que hubiera reunido a los diferentes grupos medios

de la sociedad bajo un denominador común y que hubiera sido el motor de un movimiento de reforma social y política. En el ámbito europeo oriental existían únicamente fracciones de lo que solemos llamar burguesía: el cuerpo de funcionarios, los comerciantes, los escasos empresarios, pocos profesionales liberales y, finalmente, los intelectuales libres o *intelligentsia*, como se les llamaba en Rusia; este último grupo, que estaba bien al corriente del desarrollo espiritual y civil de Europa occidental, se encontraba descentrado en su propio país y desarraigado de todos los grupos. Especialmente en Rusia, pero también en todo el ámbito europeo centro-oriental y sud-oriental, la *intelligentsia* constituía un elemento dinámico dentro de las sociedades aún esencialmente estáticas y desconocedoras de las ideas liberales. De las filas de la *intelligentsia* procedían los jefes de los movimientos nacionalistas que propugnaban la emancipación cultural y política de las nacionalidades eslavas menores, pero también los precursores de las corrientes democráticas y constitucionales aún débiles. El núcleo de los numerosos y fragmentados grupos socialistas también pertenecía a la *intelligentsia*. La falta de definición política de que adolecía en un principio la *intelligentsia* se demuestra en los esfuerzos social-románticos de los *narodniki* (amigos del pueblo) por conservar el tradicional *mir* ruso y las formas de vida ligadas a él. Los *narodniki* combatían la introducción del capitalismo industrial en Rusia con el argumento no totalmente erróneo de que éste conduciría necesariamente al empobrecimiento y a la miseria del campesinado ruso. La gran mayoría de la *intelligentsia* rusa, sin embargo, estaba fascinada por los éxitos civilizadores de Europa occidental y se guiaba totalmente por el mundo ideológico del resto de Europa, ya sea en su variante liberal-individualista o socialista. Este simple hecho colocó a la *intelligentsia* frente a la autocracia dominante, que exigía obediencia, sumisión y en algunos casos conocimientos técnicos, pero rechazaba toda iniciativa individual y todo desarrollo libre de la personalidad. De este modo, la *intelligentsia*, profundamente descontenta con la estancada vida política y social del país, que contrastaba con su propio nivel cultural, necesariamente tenía que oponerse al régimen establecido. Las medidas represivas de la autocracia zarista no hicieron más que fomentar esta oposición. La *intelligentsia* rusa se convirtió en el motor de la actividad revolucionaria contra el régimen zarista. Se reunía en los numerosos y pequeños grupos socialistas que, a diferencia de los *narodniki*, defendían la industrialización, aunque buscando desde un principio soluciones antagónicas al capitalismo occidental.

En el curso de la rápida industrialización de Rusia desde comienzos de los años 90, surgió junto a la *intelligentsia* una burguesía numéricamente débil que, siguiendo el ejemplo occidental, propugnaba ideas liberales y constitucionales. A diferencia de Europa central y occidental, las profesiones libres y el reducido grupo de grandes empresarios jugaban un papel preponderante. Sin embargo, estos últimos pronto cayeron en la tentación de hacer causa común con las fuerzas conservadoras. El fracaso de la revolución rusa de 1905 ilumina las debilidades del liberalismo ruso, que pasó al ataque político contra la autocracia cuando ya era demasiado tarde para intentar, con alguna perspectiva de éxito, colocarse a la cabeza de toda la nación y forzar, en el terreno constitucional y político-social, la inserción del país en la evolución europea central y occidental.

También en Europa central y occidental se había pasado hacia 1890 con el comienzo de la segunda revolución industrial el «cénit del orden liberal»[42]. La era de la burguesía conquistadora tocaba a su fin. Como consecuencia de una formación de riqueza muy diferenciada, inevitable al surgir las grandes industrias y los grandes bancos, comenzó a romperse la capa relativamente homogénea de «cultura y propiedad». La entrada de las economías industriales europeas en la fase de apogeo de la evolución industrial coincide, pues, con la descomposición de la burguesía clásica. El tipo de burgués, emprendedor, independiente y extremadamente individualista que durante la primera oleada de la revolución industrial había jugado el primer papel, cedió el paso a las grandes entidades anónimas, que bajo la nueva forma jurídica de la sociedad por acciones —calificada aún por Jhering de «latrocinio organizado»—, se desarrollaban rápidamente en la industria, el comercio y la banca. Comenzaron a desaparecer los pequeños bancos privados. En lugar de las empresas pequeñas y medias predominantes en las primeras fases de la industrialización aparecieron las empresas gigantes. Los *trusts* que surgían por todas partes contribuyeron decisivamente a que el modelo clásico liberal de la libre competencia entre empresarios independientes se transformara en un recuerdo nostálgico. Ante estos acontecimientos muchos hombres de la época temieron que la burocratización creciente de la vida económica unida a la propagación de una mentalidad específicamente rentista paralizara el proceso económico. «Lo que el rentista deja, se lo lleva el burócrata. Porque en una gran empresa donde no sólo está mecanizado el racionalismo económico, sino también el espíritu de empresa, no hay sitio para el espíritu capitalista», opinaba por ejemplo Werner Sombart[43]. De modo parecido se quejaba Max Weber al decir que

las clases burguesas alemanas estaban perdiendo las típicas virtudes burguesas de responsabilidad, vida racional y ascetismo interior en beneficio de mayores rendimientos profesionales, que Weber, en su gran análisis sobre el «Protestantismo y el espíritu del capitalismo» («Protestantismus und der Geist des Kapitalismus») había deducido de una postura vital específicamente protestante-puritana. Aunque Max Weber admitía que el capital, una vez establecido, es capaz de existir sin necesidad de estímulos ideales, temía que éste, al paralizarse la iniciativa individual, creara en unión con la burocratización una «férrea jaula de servidumbre futura» en la que no habría espacio para el individualismo burgués del hombre occidental [44].

Estos pronósticos pesimistas, sin duda, se adelantaban a la evolución real de la sociedad europea. Pero Max Weber estaba en lo cierto cuando opinaba que el capitalismo desarrollado no tenía ninguna relación interna con los ideales de libertad y de derechos del individuo, sino que más bien empezaba a destruir el orden burgués clásico, antes de que éste se hubiera realizado totalmente [45]. Bajo los efectos de la segunda oleada de la industrialización, la burguesía, que aún en la mitad del siglo había sido el verdadero paladín de los ideales libertarios, se desintegró en una serie de grupos con intereses e ideas políticas muy diferentes. Podemos establecer, con un criterio simplista, al menos tres grupos: 1.º, la nueva aristocracia industrial, decidida a aliarse con las élites conservadoras dominantes frente a las reivindicaciones obreras y las exigencias de los reformadores sociales de la burguesía; 2.º, los funcionarios, los altos empleados cada vez más numerosos y los miembros de las profesiones libres, grupo favorable a la autoridad establecida y uno de los pilares principales del nacionalismo; 3.º, la llamada «clase media» en el sentido estricto de la palabra, especialmente los pequeños comerciantes y los artesanos, a la que se unía el ejército de pequeños funcionarios y empleados. Este último grupo era todo menos homogéneo, desarrollando las más diversas tendencias. Los pequeños comerciantes y los artesanos fueron arrancados de sus costumbres fuertemente tradicionales por el desarrollo de las grandes empresas y los grandes almacenes y su posición económica sufrió un grave golpe. De este modo la clase media artesana empezó a exigir al Estado una protección especial para hacer frente a la competencia todopoderosa del gran capital (p. ej., en forma de impuestos especiales a los grandes almacenes). Una gran parte de las empresas artesanales tradicionales sólo se mantuvo gracias a un radical cambio en su producción, otras desaparecieron por completo. Por otro lado, la industria creaba nuevos tipos de trabajo, que ofrecían nue-

vas perspectivas a los artesanos. Pero, a pesar de todo, estos grupos de la clase media, con sus numerosos representantes pequeño-burgueses, especialmente en el comercio y la hostelería, se encontraban en un estado de inquietud constante, muy propicio para la agitación anticapitalista y también antisemita. Los pequeños funcionarios y empleados no se diferenciaban ya demasiado de los obreros en su situación económica, pero sí en su mentalidad; generalmente se agarraban desesperadamente a su supuesto *status* social superior, actuando como freno que dificultaba la apertura a nuevos principios de ordenación social.

Karl Marx pronosticó en su *Manifiesto comunista* del año 1847, publicado por primera vez en Londres, en 1848, que el progresivo desarrollo capitalista traería consigo la polarización de la sociedad en burguesía por un lado y proletariado por el otro. «Toda la sociedad se divide cada vez más profundamente en dos grandes campos hostiles, en dos grandes clases que se oponen directamente: burguesía y proletariado»[46]. Este pronóstico no se cumplió, como demuestra el análisis de la situación a comienzos del siglo XX. Las antiguas clases dominantes recibieron el apoyo de nuevas fuerzas y la desintegración de la burguesía en una serie de grupos de intereses sociales y políticos muy diversos, favoreció la supervivencia de estructuras sociales pre-industriales. El clásico programa liberal del Estado de derecho y de los derechos humanos no constituía ya una base unificadora para la acción política y social de la burguesía. En el campo burgués se discutía enardecidamente la cuestión del librecambio o los pros y contras de la política social dirigida por el Estado. En vísperas de la Primera Guerra Mundial la burguesía, como clase determinada o capa social homogénea, no existía[47]. Tampoco se cumplieron en otro sentido los pronósticos de Karl Marx sobre la evolución de la sociedad europea. El proceso de concentración progresiva del capital no transcurrió como él había previsto. Tampoco el proletariado absorbió a las capas no burguesas de la burguesía como había vaticinado el *Manifiesto comunista.* Marx partía de que el número de capitalistas disminuiría con la creciente acumulación del capital. «Un capitalista mata a muchos capitalistas», había escrito explicando este proceso, en cuyo final se encontraría la autodisolución de la burguesía como clase social. Pero en realidad los capitalistas no eran menos, sino más, y a su lado había surgido una capa de *managers* y directivos, que sin pertenecer a la clase de los propietarios, iba desbancando a los empresarios de viejo cuño en la dirección de las empresas, como por ejemplo el caso de Kirdorff a la cabeza de la *Gelsenkirchener Bergwerks-A. G.,* o de Jencke, el director de Krupp. Las clases

medias bajas no habían disminuido ni en número ni en importancia. La opinión marxista de que amplias capas de la pequeña burguesía se fundirían con la clase de obreros desposeídos, de modo que la gran mayoría de la población se encontraría de su lado, resultó ser un autoengaño. Ya antes de 1914 se dibujaba claramente la tendencia contraria. Las clases medias no sólo aumentaban numéricamente, sino que atrajeron a los estratos superiores de la clase obrera. Indudablemente, las clases medias eran, en números absolutos, una minoría frente a la clase obrera, pero en números relativos crecían más rápidamente que ésta. El futuro de la clase media no era, pues, tan negro y desesperado como se pretendía en aquel tiempo, no sólo en el bando socialista.

En Gran Bretaña el proceso de crecimiento absoluto de la clase obrera a costa de las clases medias alcanzó su punto culminante a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ya en los años inmediatamente anteriores a 1914, creció el número de empleados en el sector servicios, en detrimento del sector industrial. En Francia, por el contrario, el proceso de transformación social desencadenado por el desarrollo industrial se notó menos. El porcentaje de pequeños campesinos, especialmente viticultores, en las clases medias era muy alto, mientras que el porcentaje de obreros industriales en la población total seguía siendo limitado. La Tercera República nunca perdió su impronta pequeñoburguesa.

La nueva estructuración de clases, que comenzaba a cristalizar bajo la influencia de la industrialización, se vio condicionada en los países de Europa oriental y del sur por la pervivencia de antiguas estructuras sociales agrarias. En los Balcanes, Italia y Península Ibérica existía una economía de latifundio más o menos feudal, frente a un proletariado rural en condiciones de vida pobrísimas. Los grupos burgueses de estos países, en la medida en que numéricamente tenían alguna importancia, jugaban generalmente un papel muy secundario en la vida social. Unicamente en Italia la burguesía tenía un peso social y político, pero incluso en este caso era grande la distancia que separaba al país de las naciones industriales, sobre todo de Europa occidental.

Desde comienzos de los años 70 la burguesía europea se encontró frente a un nuevo oponente, en principio completamente desorganizado: los obreros industriales. Gracias a la gran afluencia de población rural, pero también a la explosión demográfica, las masas obreras de los centros industriales crecieron con enorme rapidez. En general, encontraban trabajo, aunque en los primeros tiempos en condiciones difícilmente sopor-

tables. La miseria de las masas, aun cuando no faltaba trabajo, es uno de los rasgos típicos de la primera época del desarrollo industrial, sobre todo en los centros en los que la afluencia de gentes del campo mantenía constante el «ejército de reserva industrial» de obreros en busca de ocupación. De todos modos, la situación de los trabajadores en los países industriales europeos había mejorado considerablemente, si bien con grandes diferencias regionales y desigualdades en las diversas ramas industriales, desde la primera época del capitalismo que especialmente en Inglaterra había estado unida a la miseria más extrema. No se cumplieron ni la doctrina de Lassalle sobre «la ley férrea del salario» ni la teoría de Marx sobre el «empobrecimiento de las masas». A pesar de grandes altibajos en los salarios, el nivel de vida de los obreros en los grandes países industriales, después de sufrir un bajón en los años 1873 a 1879, subió lenta, pero en general constantemente, incluso durante la Gran Depresión. Esto se debió no tanto a una subida real de los salarios como a la deflación de precios hasta 1896, que hizo que los costos de vida se redujeran, aunque no de acuerdo con las crecientes necesidades sociales. Los trabajadores, por otro lado, se beneficiaron del auge económico iniciado desde mitad de los años 90, como demuestra la evolución de los salarios reales. Sin embargo, en la fase siguiente de 1900 a 1914, observamos paralelamente una subida, a menudo considerable de los salarios pagados, un estancamiento de los salarios reales y, en algunos países, como Inglaterra, un retroceso[48]. Los obreros, por tanto, mejoraban sólo relativamente su situación social. La necesidad de salarios más altos, que estuvieran de acuerdo con los costos de vida ascendentes, condujo a numerosas huelgas, muchas veces ineficaces. A pesar de que los salarios habían doblado su capacidad adquisitiva desde los años 20 del siglo XIX, la situación de los trabajadores en 1890 era precaria, especialmente en Rusia. Comparada con Europa occidental, Rusia estaba en los comienzos de la industrialización y la situación social reinante se podría comparar con los *hungry forties* ingleses descritos magistralmente por Engels. Los obreros rusos que en relación a la población total no eran muy numerosos, pero se concentraban en los centros industriales, llevaban una existencia de parias, prácticamente sin derechos, expuestos a la arbitrariedad de los empresarios y sin ninguna posibilidad jurídica de defenderse. Los salarios, sobre todo en la industria textil, eran bajísimos; el salario medio anual de un obrero en Rusia, trabajando de 11 a 15 horas diarias, era de 200 rublos[49]. Siendo esto posible únicamente porque el mercado del trabajo se encontraba bajo una constante pre-

sión, inundado por los compesinos que abandonaban el campo empujados por la miseria. A pesar de las pésimas condiciones laborales, éstos se veían obligados a buscar trabajo adicional. Como muchos trabajadores industriales seguían viviendo en las comunidades rurales y éstas contribuían a su sostenimiento, podían contentarse con salarios muy bajos, hecho que los empresarios supieron aprovechar.

Tampoco en Europa central y occidental la situación de los

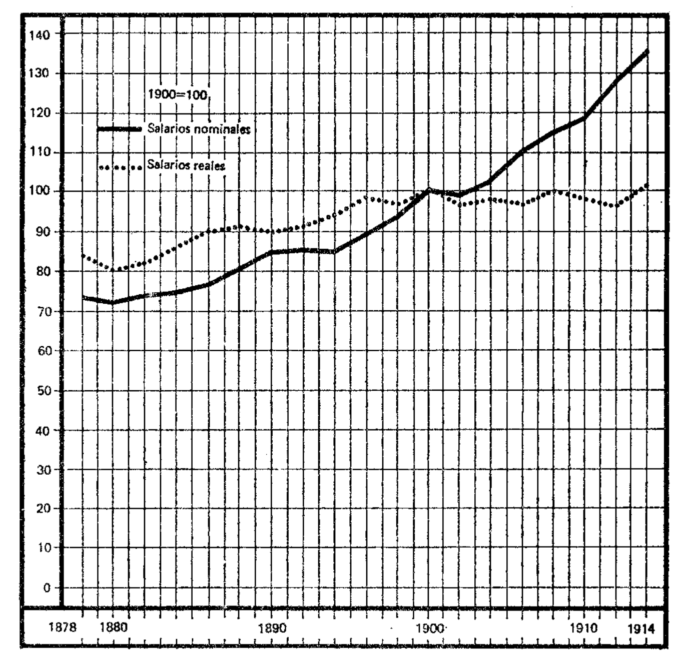


Fig. 4. Salarios nominales y salarios reales en Alemania de 1878 a 1914 (de J. Kuczynsky).

obreros era satisfactoria. La jornada laboral era larga: hacia 1890 aún se trabajaba de 10 a 12 horas diarias en casi todos los países, y sólo para el trabajo femenino e infantil existían limitaciones de la jornada laboral. En estas circunstancias la reivindicación de la jornada de ocho horas lanzada por la *Segunda Internacional Socialista* en su congreso fundacional de París en 1889, equivalía a una declaración de guerra a los empresarios

Fig. 5a. Evolución de los salarios en Francia de 1878 a 1914 (de J. Kuczynski).

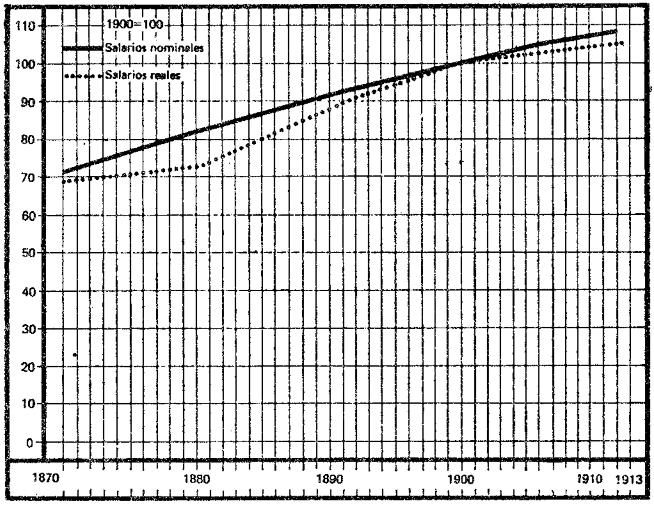


Fig. 5b. Salarios nominales y reales en Francia de 1870 a 1910 (de K. V. Tyzska y H. Sée).

y a la sociedad de clases burguesa. Sin embargo, las prolongadas jornadas de trabajo no eran lo más grave en la vida de los obreros industriales; algunas fábricas, más adelantadas tecnológicamente, empezaban a reducir la jornada laboral por razones puramente pragmáticas, aunque exigiendo al mismo tiempo una intensificación del rendimiento laboral. Más graves eran las catastróficas condiciones de vida en los barrios obreros de las nuevas sociedades industriales, que crecían sin planificación al-

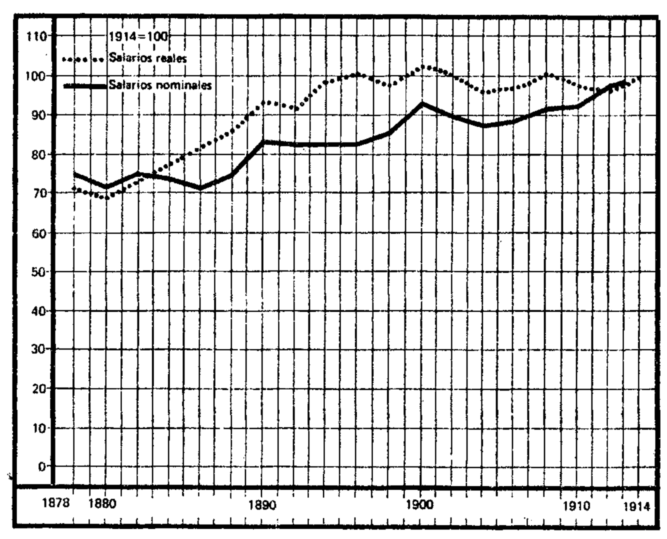


Fig. 6. Evolución de los salarios en Inglaterra de 1878 a 1914 (de A. Cairneross).

guna en las zonas suburbiales. En 1891 el sociólogo y político conservador Charles Booth sorprendió a la sociedad cultivada inglesa con el primer tomo de un profundo análisis sobre la vida y el trabajo de la gente de Londres *(The Life and Labour of the People in London)*, en el que sobre la base de numerosos datos empíricos demostraba que un tercio de la población del *East End*, el barrio obrero londinense, vivía en la más absoluta miseria, en unas condiciones sanitarias y de vivienda indescriptibles. Los estudios posteriores de Booth y de otros estudiosos de política social descubrieron a la opinión pública inglesa la extensión de la pobreza existente en casi todas las ciudades industriales del país y se demostró que la concentra-

ción de masas obreras en un espacio vital reducido era aún más grave en el norte del país —por ejemplo, Newcastle— que en Londres. En el continente europeo donde la industrialización se había iniciado más tarde y no había adquirido tal extensión; el problema de la vivienda no era tan agudo, pero no obstante también provocó la crítica de reformadores sociales como Adolf Damaschke y Friedrich Naumann. Los tantas veces descritos bloques de viviendas berlineses, con sus patios sórdidos y sus habitaciones estrechas y oscuras, provistas únicamente de las instalaciones sanitarias más elementales, eran un poco más confortables que las miserables *back-to-back houses* de las ciudades inglesas, pero también en Berlín las familias obreras vivían muy apretadas, agobiadas por los alquileres demasiado elevados para los presupuestos obreros. Los centros industriales franceses adolecían de los mismos males: según un cálculo de la época, el 60 % de todas las viviendas de Lyon estaban superpobladas. En Rusia la situación era peor; los obreros vivían con sus familias en barracas primitivas y estrechas, especialmente en los centros industriales en desarrollo.

¿Qué podían hacer los mismos obreros para mejorar su situación social? Las organizaciones sindicales obreras se hallaban en sus comienzos hacia 1890. En la gran mayoría de los países europeos no se discutía ya el derecho de los obreros a asociarse para conseguir mejores condiciones de trabajo y salarios más altos, aunque en muchos países existían aún limitaciones legales al derecho de huelga. Sólo en Rusia las asociaciones de trabajadores estaban aún prohibidas. El obrero se encontraba al margen de la sociedad y si faltaba al contrato estipulado estaba expuesto a demanda judicial. Por el contrario, si el patrono le retenía el salario, el obrero le podía demandar únicamente por vía privada, un sistema prácticamente imposible. En consecuencia, los patronos, en caso de irregularidades laborables, podían mantener a raya a sus obreros con un riguroso sistema de sanciones y reducciones de salario. Además, podían contar en caso de conflicto con el apoyo de la policía y, si éste no bastaba, con el del ejército. Los obreros, en su desesperación y su profunda hostilidad contra patronos, policía y autoridades sólo podían recurrir a la organización clandestina dentro de las mismas fábricas, cuyas gigantescas dimensiones creaban unas condiciones muy favorables.

Desde fines de los años 80 observamos en el resto de Europa un avance en la evolución de la representación sindical obrera. A la cabeza del movimiento se hallaba el sindicalismo inglés, apoyado en una larga tradición, que en 1894 fue descrita al gran público por Sidney y Beatrice Webb en su famoso libro

History of Trade Unions. Gracias a una serie de huelgas, entre las que descuella la gran huelga de los obreros portuarios londinenses dirigida en 1889 por John Burns y Tom Mann, los sindicatos se abrieron paso entre los obreros no cualificados. En consecuencia, el número de obreros organizados en sindicatos pasó de 750.000 en el año 1888 a millón y medio en el año 1892. Ya en 1890 el *Trade Unions Congress,* consciente de su creciente poder, reivindicó la jornada laboral de ocho horas. A pesar de algunos reveses durante las crisis económicas de los años 1892 a 1894, el número de afiliados, los fondos y el poder de los sindicatos ingleses fueron aumentando en los diez años siguientes. En 1900 estaban sindicados dos millones de trabajadores; esta cifra se dobló hasta 1914. La gran mayoría de los sindicatos organizados por industrias tenía en el congreso anual de los sindicatos *(Trade Unions Congress)* una potente organización central, que fue desde fines del siglo XIX la base política del nuevo movimiento obrero.

También en Francia se observa en los años 90 un fuerte impulso de los sindicatos, aunque en este caso la evolución fue desde el primer momento diferente. El movimiento sindical cristalizó en torno a las «Bourses de Travail», que desde los años 80 y con el apoyo de las autoridades comunales funcionaban para proporcionar trabajo a sus miembros. Esto explica la extrema fragmentación del movimiento sindical francés: en 1890, mil sindicatos diferentes encuadraban a 200.000 obreros, en 1895 el número había ascendido a 419.000 obreros repartidos en 2.163 sindicatos. Por lo tanto, cada sindicato abarcaba por término medio unos 200 miembros. Aunque pronto se intentó unificar las diversas organizaciones obreras francesas, la «Fédération des syndicats et groupes corporatifs», fundada en 1886, y la «Fédération des Bourses de Travail», fundada en 1892, encuadraba únicamente una pequeña parte de los obreros organizados. Lo mismo cabe decir de la «Confédération Générale du Travail», fundada en 1895 en Limoges, que igual que el «Trade Unions Congress» inglés debía funcionar como organización superior de los diversos sindicatos y bolsas de trabajadores; en 1902 la CGT no representaba más que la quinta parte de los 614.000 obreros organizados. El auge posterior fue vertiginoso, en 1912 la CGT representaba a 600.000 obreros de una totalidad de millón y medio de trabajadores organizados. Más grave que la fragmentación del movimiento sindical francés era su desacuerdo sobre la táctica que debía ser adoptada. Se admitía que el movimiento sindical actuara con absoluta independencia de los grupos políticos, pero la mayoría se negaba a llegar por ese camino hasta la *última ratio* de la huelga ge-

neral revolucionaria, constituida en programa por la «Fédération des Bourses de Travail» ya en 1892 y admitida por la CGT en 1895. A pesar de todo, hasta 1910 la línea sindicalista, mejor organizada y más fuerte, determinó la evolución político-social. En los últimos años antes de la Primera Guerra Mundial, tomó la delantera la mayoría, dispuesta a mantenerse en los límites de los métodos de lucha obrera en el sentido más estricto.

En el Reich alemán el desarrollo del movimiento sindical estuvo determinado, a diferencia de Inglaterra y Francia, por el desarrollo del partido social-demócrata. Los «Sindicatos Libres», a los que pertenecía la gran mayoría de los obreros organizados, se declaraban abiertamente socialistas y se consideraban parte integrante del movimiento obrero político. También en Alemania el éxito de las huelgas de masa impulsó enérgicamente al movimiento sindical. La gran huelga minera de 1889 en el Ruhr, que se propagó a la zona de Aachen, al Sarre y a la zona minera de Silesia superior, terminó con un importante éxito parcial gracias a la simpatía general por el movimiento obrero y a la intervención mediadora del gobierno prusiano. La «Generalkommission der Freien Gewerkschaften Deutschlands» (Comisión general de los sindicatos libres de Alemania), fundada en un momento favorable en el año 1890, dobló en el plazo de un año su número de afiliados a 277.000. Pero el auge no fue duradero. En la recesión económica de 1891 a 1894 las organizaciones sindicales, aún débiles, no pudieron apuntarse ningún éxito y su número de miembros descendió de nuevo. Hasta 1896 no lograron superar con 329.000 miembros la posición de 1891. A partir de ese momento se inició un ascenso constante. En 1904 el número de afiliados de los sindicatos asociados en la «Generalkommission der Freien Gewerkschaften» pasó el millón, para alcanzar en 1913 la cifra considerable de 2.573.000 con un patrimonio sindical de 80 millones de marcos. Frente a estas organizaciones los sindicatos no socialistas, como los «Hirsch-Dunkersche Gewerkvereine» de la época de Schulze Delitzsch, con tendencias liberales, no podían mantenerse. Su número de asociados oscilaba entre los 45.000 en 1891 y 122.000 en 1906. Los «Sindicatos Cristianos» (Christliche Gewerkschaften) tenía mayor importancia. Mientras las asociaciones obreras protestantes, de tradición más antigua, perdían influencia y numéricamente dejaban de tener importancia, las asociaciones cristianas católicas, que de acuerdo con la encíclica de León XIII *Rerum Novarum* de 1891 empezaron a desarrollarse hacia 1894, consiguieron hasta 1913 342.000 miembros. Los sindicatos católicos contaban con el apoyo decidido de la Iglesia y especialmente de la gran orga-

nización del catolicismo militante: el «Volksverein für das katholische Deutschland» (Unión popular para la Alemania católica).

El pluralismo de organizaciones sindicales de diverso contenido ideológico determinó, a su vez, la evolución del sindicalismo en los demás países de Europa central, por ejemplo en Suiza, donde se crearon, relativamente pronto, sindicatos pequeños pero fuertes, y en Austria-Hungría. Aquí el movimiento sindical socialista que siguiendo el modelo de los sindicatos libres alemanes, había creado en 1893 una organización central se dividió a los pocos años en sindicatos nacionales. En 1897 fue fundada una comisión sindical checa de carácter socialista que a fines de 1911 contaba 75.000 afiliados. La organización hermana alemana contaba, en cambio, con 422.000 miembros. En Austria-Hungría los sindicatos profesionales cristianos jugaban un papel más importante que en el Reich alemán e incluso conservaron su carácter internacional. Hasta 1912 llegaron a sumar 82.000 asociados, lo cual constituye una cifra respetable si consideramos el relativo atraso industrial de la monarquía austro-húngara.

En Italia la evolución del movimiento sindical es más difusa, ya que allí se cruzaron influencias alemanas, austríacas y francesas. Al igual que en Francia existían las «bolsas de trabajo» en numerosas ciudades industriales del norte italiano, que se alejaban igualmente de las formas de lucha política parlamentaria de tipo alemán y de los métodos de lucha a-políticos, manteniendo una línea muy favorable a las ideologías sindicalistas. Aparte existía una serie de asociaciones sindicales menores y organizaciones de trabajadores de carácter y dirección muy variados. Sólo después de 1902, una vez superada la repercusión de la reacción violenta de 1898 (revuelta de Milán, envuelta en sangre por el general Bava-Beccaris, y sucesiva legislación especial presentada por el ministro Luigi Pelloux), fue posible constituir un órgano central de los sindicatos italianos, el «Segretariato centrale per le camere del lavoro e per la resistenza», que como indica el término «resistenza» estaba muy influenciado por las ideas sindicalistas. En 1906 el «Segretariato centrale», se transformó en la «Confederazione Generale del Lavoro», que se distanció de la línea sindicalista seguida por el «Comitato nazionale della resistenza», fundado con escaso éxito al año siguiente. Estos cambios en la organización produjeron el triunfo de la línea moderada, cuyo objetivo principal estribaba en mejorar la situación material de los trabajadores siguiendo los métodos de la lucha laboral. El modelo alemán de organización sindical, apoyada en el partido socialista, se

impuso, pues, al tipo de organización francés. La «Confederazione generale» aumentó su número de miembros de 190.000 en 1907 a 383.000 en 1911, cifra modesta comparada con las europeas, pero considerable si se piensa en el relativo atraso económico de Italia. En los últimos años antes de la Primera Guerra Mundial el número de afiliados descendió relativamente.

Dentro de la evolución general de Europa, Rusia constituía la gran excepción. Cualquier organización de los trabajadores rusos debía permanecer en la más absoluta clandestinidad y mantenerse en un marco local restringido. El fuerte impulso asociacionista de los trabajadores rusos se hizo patente en una serie de enconadas huelgas, que en general no llegaron a tener éxito. El movimiento sindical ruso estaba sumergido desde un principio en la corriente política. La burocracia zarista, ante el cariz que tomaba el movimiento, fundó en 1901 las primeras organizaciones obreras dirigidas por el Estado. El inspirador de este proyecto, el jefe de la policía moscovita, coronel Zubatov, esperaba distraer a los obreros de las candentes cuestiones políticas y concentrar sus energías en el terreno menos peligroso de los problemas puramente económicos. El experimento tuvo que ser suspendido a los pocos años, ya que las nuevas organizaciones se sustraían más y más a la autoridad estatal y los empresarios reaccionaban hostilmente contra ellas. Después de la oleada de huelgas que culminó en la revolución de 1905, los trabajadores obtuvieron por fin el derecho de asociación en 1906, aunque al mismo tiempo se vieron sometidos a considerables limitaciones que impidieron el desarrollo libre de sindicatos fuertes. Quedó prohibida toda asociación a escala nacional, evitándose así desde un principio la creación de sindicatos profesionales de gran base. Pese a las condiciones desfavorables en 1907 estaban organizados 245.000 obreros, es decir, la séptima parte de todos los obreros rusos, en 652 sindicatos (ninguno de los cuales contaba más de 5.000 miembros, siendo algunos francamente pequeños). Al reanudarse la política de represión en los años siguientes, las cifras no pudieron ser mantenidas. Limitados en su actividad por los empresarios y la policía, los sindicatos rusos no llegaron a alcanzar una importancia decisiva; en su lugar surgieron los comités de fábrica o soviets elegidos espontáneamente y los comités de huelga creados *ad hoc* por los representantes de cada fábrica. Estos fueron la base de la lucha de los obreros contra los enemigos de clase y la autocracia zarista.

A pesar de su organización los sindicatos rusos no encuadraron hasta 1914 más que a una pequeña parte de la masa obrera. La formación de organismos centrales y superiores no garanti-

zaba, por otro lado, la necesaria unidad de acción. Si nos orientamos como lo estamos haciendo por el número de afiliados a los grandes sindicatos centrales, no tendremos una imagen precisa del sinnúmero de asociaciones menores, generalmente poco eficientes, y de la pluralidad y de la fragmentación del movimiento sindical. También hay que tener en cuenta las constantes subidas y bajadas, la fluctuación en el número de afiliados tan características de esta primera fase del movimiento sindical. La edificación del sindicalismo se llevó a cabo entre huelgas violentas que en muchos casos acabaron en graves derrotas para los obreros e hicieron tambalearse e incluso destruyeron por completo sindicatos enteros. Las reservas económicas de las organizaciones sindicales eran aún reducidas, como para asegurar a sus miembros una subvención prolongada en caso de huelga. Unicamente el espíritu de sacrificio más consecuente y la solidaridad más fuerte permitían llevar a buen fin una huelga en esta fase heroica del movimiento sindical.

En todos estos países los empresarios no permanecían inactivos. En parte pasaron al ataque preventivo, en parte a la ofensiva directa. Las formas y los métodos de lucha entre los patronos y los obreros organizados variaban de un país industrial a otro. Los empresarios estaban de acuerdo sobre el objetivo que había que perseguir: impedir por todos los medios el acceso de los sindicatos al poder y anular su influencia sobre los obreros. Hasta en Inglaterra, donde en algunas ramas de la industria se habían aceptado las negociaciones con representantes de los sindicatos, los empresarios intentaron de nuevo neutralizar las organizaciones sindicales. Se formaron equipos anti-huelgas y en 1893 se fundó una «National Free Labour Association» (Asociación nacional del trabajo libre) para evitar la influencia de los sindicatos sobre los trabajadores. En Alemania los llamados «sindicatos amarillos», financiados por los patronos, servían a fines parecidos.

Los empresarios crearon también asociaciones de patronos para las diversas ramas de la industria como por ejemplo la «Gesamtverband deutscher Metallindustrieller» (Unión de industriales alemanes del metal) (1891) o la «Shipowners Federation» (Federación de armadores) (1890) en Inglaterra, para enfrentarse colectivamente a las acciones reivindicativas de los sindicatos. De este modo respondían a la táctica seguida por los sindicatos que consistía en declarar la huelga en una fábrica determinada y no en todo el sector industrial, para así, con fuerzas concentradas, obligarla a capitular, pese a las pocas reservas económicas de las que disponía el sindicato. Los frentes de lucha entre empresarios y obreros se ampliaron cada vez

más, naturalmente en perjuicio de estos últimos, que siempre estaban en inferioridad de condiciones frente a los empresarios, tanto por la organización como por las reservas económicas. Los patronos no se contentaron con neutralizar la estrategia sindical del fraccionamiento del frente, sino que pasaron a provocar directamente huelgas y a responder con el *lock-out* general a huelgas locales para así agotar las reservas de los sindicatos. La nueva táctica exigía la creación de asociaciones de empresarios cada vez más grandes. En 1898 se creó la unión general de las asociaciones de empresarios ingleses con el objetivo explícito de prestarse mutuamente toda la ayuda necesaria en caso de huelga. La huelga de Crimmitschau en el invierno de 1903-1904 impulsó la asociación de todos los patronos alemanes. Respondiendo a una proclama del «Zentralverband deutscher Industrieller» (Unión central de industriales alemanes) todos los empresarios alemanes se comprometían a subvencionar económicamente a las fábricas textiles afectadas por la huelga de Crimmitschau, hasta que se dominara totalmente la huelga. Al año siguiente las dos organizaciones centrales de los empresarios alemanes —la «Hauptstelle deutscher Arbeitgeberverbände» (Central de las asociaciones de patronos alemanes) y el «Verein deutscher Arbeitgeberverbände» (Unión de las asociaciones de patronos alemanes)— acordaron que en caso de huelga había que prestarse mutuo apoyo [50]. Sobre una base de este calibre los empresarios declararon la guerra a los sindicatos.

La creciente concentración económica contribuyó a empeorar la posición de los obreros en la lucha laboral. Especialmente en el continente europeo, las grandes empresas eran fortalezas inexpugnables. Los empresarios empleaban una serie de métodos indirectos para encadenar a los trabajadores a sus fábricas, como por ejemplo la concesión de viviendas propiedad de la fábrica, de carbón, de servicios especiales, etc. En medio de la sociedad industrial igualitaria se mantenían de este modo islotes de dominio empresarial casi patriarcal, como por ejemplo el imperio industrial del magnate Stumm en el Sarre. Entre los trabajadores de estas empresas solían reclutarse los miembros de los llamados sindicatos «amantes de la paz económica» o «amarillos», que más o menos financiados por los patronos llevaban en Alemania una existencia poco brillante como organizaciones opuestas a los sindicatos libres. El nacionalismo patético sustituía en los sindicatos «amarillos» el espíritu de lucha de clases, encubriendo dificultosamente la falta de solidaridad con el resto de los trabajadores.

En resumen, la posición de los obreros organizados sindical-

mente, era todo menos buena, alrededor de 1900. Reformistas sociales de tipo liberal como Lujo Brentano y Max Weber se preguntaban seriamente si en la era de las grandes empresas y las poderosas asociaciones de empresarios los sindicatos podían tener éxito con los métodos tradicionales de la lucha obrera. En efecto, los signos de la época no iban en esa dirección. El número de huelgas perdidas o de huelgas cuyos resultados finales no correspondían a los sacrificios hechos aumentaba alarmantemente, pese a que desde fines de los años 90 los crecientes costos de vida obligaban a los obreros a luchar por la subida de salarios, si es que querían mantener el nivel social alcanzado. Desde abril a noviembre de 1898, 90.000 mineros de Gales del sur se declararon en huelga, hasta que el hambre les obligó a reanudar el trabajo en condiciones humillantes. En el mismo año, en Francia, una gran huelga de los obreros de la construcción y del ferrocarril tuvo que ser suspendida al intervenir el gobierno; la autoridad de la CGT quedó debilitada durante mucho tiempo. También Rusia estuvo conmovida a finales de los años 90 por importantes huelgas de masas, que paralizaron temporalmente toda la industria textil, sin que por eso mejorara decisivamente la situación de los trabajadores. El gobierno zarista, sin embargo, tuvo que reducir la jornada laboral a 11,5 horas, forzado por el movimiento violento de huelgas. Los empresarios se negaron, a pesar de todo, a subir los salarios, sabiendo que en caso de conflicto podían contar con el apoyo del Estado.

En estas condiciones el éxito o fracaso de las huelgas dependía en toda Europa fundamentalmente de la actitud de los diversos órganos gubernamentales y de la opinión pública. En vista de la posición fuerte del patrono, apoyado por poderosas asociaciones de empresarios, la victoria sólo era posible si la opinión pública acudía en ayuda de los huelguistas o si el Estado intervenía en su favor. La ya citada huelga de obreros portuarios de Londres en 1889 obtuvo resultados positivos porque la opinión pública tomó partido por los obreros. Lo mismo puede decirse de la huelga minera del Ruhr. A fines de los años 80 la opinión pública europea era en general relativamente favorable a las reivindicaciones obreras en el terreno político-social. Guillermo II, movido por un afán de popularidad quiso aprovechar esta corriente al prometer con sus decretos político-sociales de 1890 un era nueva de la política social. También el «Congreso Internacional de Sociopolítica», reunido bajo los auspicios de Bismarck en Ginebra en el año 1891, se declaró en favor de amplias reformas en ese sector. A mediados de los años 90 el movimiento obrero se enfrentó

a corrientes adversas en el Estado y en la sociedad. Por todas partes aparecían tendencias partidarias de restringir el derecho de los trabajadores a la huelga. En Alemania estas tendencias fueron muy fuertes. Sin embargo, la «ley para la protección de los que quieren trabajar», que, gracias a un discurso inoportuno de Guillermo II el 8 de septiembre en Bad Oeynhausen, fue tachado antes de su publicación de «propuesta de ley presidiaria», no obtuvo la mayoría en el *Reichstag*. Tampoco tuvieron consecuencias los esfuerzos por crear cámaras de trabajadores e introducir un procedimiento obligatorio de avenencia a fin de frenar el impulso del movimiento obrero. Por otro lado, la jurisdicción comenzó a utilizar extensivamente en contra de los sindicatos el artículo 153 de la ley sobre industria y artesanía que amenazaba con penas de hasta tres meses a todo aquel que intentara «por medio de fuerza física, amenaza, insulto o difamación» obligar a otros a tomar parte en coaliciones, y el artículo 253 del código penal[51] Mientras se castigaban severamente incluso ataques inofensivos de los piquetes de huelga, los procedimientos disciplinarios utilizados por los empresarios quedaban sin castigo. Otros países como, por ejemplo, Holanda y algunos cantones suizos intentaron frenar el movimiento huelguístico de aquellos años endureciendo las condiciones jurídicas de la lucha obrera. La situación fue más grave en Inglaterra, donde, sobre la base de sentencias pronunciadas por tribunales de primera instancia, se decidió por sentencia de los «Law Lords» del 22 de junio de 1901 que los sindicatos y sus jefes podían ser declarados responsables de las pérdidas materiales y económicas producidas por huelgas. La decisión fue catastrófica para los sindicatos. A raíz de esta sentencia que ponía en tela de juicio los mismos fundamentos del trabajo sindical hasta la fecha, los sindicatos pagaron hasta 1905 indemnizaciones por valor de cinco millones de libras a empresas donde se habían organizado huelgas. La «Trade Disputes Act» de 1906 reinstauró el estado jurídico anterior a la sentencia.

No puede asombrarnos la intranquilidad creciente de los obreros en los primeros años del nuevo siglo. El abismo entre proletariado y burguesía parecía hacerse mayor en vez de cerrarse; los grupos radicales entre los trabajadores registraron numerosa afluencia. En 1905 la oleada de huelgas alcanzaba un nuevo apogeo en toda Europa. El movimiento se inició en enero de 1905 con una impresionante huelga minera en el Ruhr en la que participaron nada menos que 190.000 mineros de una totalidad de 224.000. Casi al mismo tiempo se declaró en San Petersburgo una huelga general que en pocos días se convirtió

en un movimiento de masas de dimensiones desconocidas hasta el momento. El 9 de enero de 1905 —«el domingo sangriento»— una manifestación gigantesca se dirigió al Palacio de Invierno del zar para entregarle una petición relativamente mesurada con una lista de las reivindicaciones sociales más acuciantes de los trabajadores rusos. Cuando los manifestantes, como en una procesión religiosa, se habían concentrado ante el Palacio de Invierno, unidades militares abrieron fuego contra ellos y organizaron una masacre sangrienta entre la masa indefensa. Este increíble suceso trajo consigo una enorme oleada de huelgas de protesta en todo el país e impulsó el movimiento revolucionario que obligó al régimen zarista a pronunciar el manifiesto de octubre de 1905. El ejemplo ruso actuó de estímulo sobre los grupos radicales del movimiento obrero europeo. Particularmente en Francia resurgió el sindicalismo. Desde 1906, Clemenceau se vio obligado, como ministro del Interior de un gobierno burgués orientado hacia la izquierda, a frenar la oleada de huelgas, cada vez más sindicalistas, con medidas duras, ocasionalmente incluso con la intervención del ejército. Las huelgas sindicalistas alcanzaron su cenit con la gran huelga de ferroviarios de octubre de 1910, aplastada por Briand con la ayuda del ejército y la movilización de todos los ferroviarios en servicio militar. El gobierno inglés tuvo de momento más suerte con la oleada de huelgas que cubrió el país a partir de 1907, ya que Lloyd George resultó ser un eficaz mediador entre los dos grupos sociales. Pero tampoco Gran Bretaña quedó libre de huelgas sindicalistas; en 1911 y 1912 hubo una serie de huelgas de gran envergadura unidas a numerosos y desacostumbrados actos de violencia y a choques sangrientos entre los huelguistas, la policía y el ejército. También en Alemania el año 1912 fue un año de huelgas: más de millón y medio de trabajadores de las más diversas ramas industriales dejaron el trabajo. Pese a todas las medidas represivas también en Rusia estalló en 1912 la oleada de huelgas, dominada por el régimen zarista con la brutalidad más extrema. La magnitud del movimiento huelguístico de aquellos años y las pasiones desatadas en los dos campos antagónicos son un claro indicio de que la oposición de clases seguía siendo muy fuerte y que los obreros estaban —también en Europa occidental— muy lejos de la integración total en la sociedad establecida.

Por otro lado, el curso que tomaban los acontecimientos confirmaba a los gobiernos en su tendencia a resolver con reformas político-sociales las tensiones sociales. El movimiento social-reformista, apoyado fundamentalmente en la burguesía intelectual, ganó mucho terreno en los quince años anteriores

a 1914. Su ideología provenía, en Alemania, del «Verein für Sozialpolitik», aunque los problemas que se planteaba no eran exclusivamente alemanes. El principio que defendían social-reformistas liberales como Lujo Brentano, según el cual había que conceder a los sindicatos la libertad absoluta en su lucha por una justa participación de los obreros en el producto social y que incluso había que apoyarles con medidas legales para restablecer la igualdad de oportunidades entre obreros y empresarios, no se impuso totalmente, pero se empezó a comprender que había que contar con los sindicatos. En Francia un especial «code de travail» del año 1912 reguló de nuevo las condiciones de trabajo; en Inglaterra se restableció en 1913 el derecho de los sindicatos a utilizar una parte de las cuotas de sus miembros para fines políticos y en Alemania al menos se levantó la prohibición de asociación para las asociaciones políticas. En todas partes se introdujeron además sistemas de seguros sociales, como en Inglaterra con el «National Insurance Act» de 1911, o se ampliaron y modernizaron los seguros sociales existentes: en Alemania por la «Reichsversicherungsordnung» de 1911, en Francia con el establecimiento de un seguro general de vejez e invalidez en 1910. Las comunas, por su lado, en parte colaborando con los sindicatos, crearon oficinas municipales de adiestramiento en el trabajo para combatir el paro. El seguro contra el paro por el contrario siguió siendo un proyecto para el futuro; únicamente Inglaterra introdujo ya en 1911 un seguro obligatorio en algunas ramas industriales, que registraban por temporadas una fuerte fluctuación en el número de empleados. A pesar de todo lo insuficiente que era esta legislación social en general, no cabe duda de que Europa estaba a punto de dar el paso hacia la sociedad del bienestar. Con la Guerra Mundial se impuso esta tendencia bajo la presión de las fuerzas sociales desencadenadas.

No hay que olvidar, sin embargo, que, antes de 1914, se consideraba la miseria general reinante en los grandes centros industriales como un fenómeno natural que no podía evitarse; todo lo más mitigarse. La situación más grave correspondía a los grupos de la sociedad que aún no habían entrado en el proceso industrial, pero cuya base económica había sido atacada por éste. Entre ellos estaba el grupo numeroso y sin nombre de los trabajadores a domicilio, cuya miseria conmovió a la sociedad, con motivo de una gran exposición celebrada en Berlín en 1908. Y los trabajadores del campo, los pequeños campesinos y los jornaleros que no participaban en absoluto de los adelantos de la legislación social ni de la subida del nivel de vida. Su «status» social, ya de por sí bajo, empeoró

considerablemente con el desarrollo industrial y sus secuelas. Las investigaciones emprendidas por el «Verein für Sozialpolitik» (Sociedad para la política social) en 1892 sobre la situación social y las condiciones de alimentación y vivienda de los trabajadores del campo en las regiones prusianas situadas al este del Elba proporcionaron datos impresionantes. Es fácil imaginar que la miseria de este grupo social en las grandes zonas agrarias del sur y del sureste europeo, dominadas por el latifundio a gran escala, era aún mucho más terrible. Las posibilidades del proletariado rural para mejorar su situación social eran muy limitadas. A diferencia de los obreros industriales, los trabajadores del campo, en general, no tenían el derecho y aún menos la posibilidad concreta de formar coaliciones para conseguir mejores condiciones laborales; en muchos casos estaban sometidos a rígidas reglamentaciones que reducían fundamentalmente su libertad personal. Su única oportunidad era marchar a los nuevos centros industriales, si no encontraba en su propio ámbito trabajo en la industria. No siempre tenían esta ocasión. En Europa del sur, del este y del sureste se conservaron en amplias regiones las estructuras sociales pre-industriales, generalmente muy primitivas. Incluso en nuestros días aún no han sido sustituidas y absorbidas por el nuevo sistema industrial.

La coexistencia de formas de producción altamente industrializadas y feudales-patriarcales así como de estratos sociales heterogéneos, era ya de por sí un factor de crisis de primera magnitud. La inestabilidad de los sistemas políticos, de paso a formas de gobierno más democráticas, aumentaba con las fortísimas tensiones del cuerpo social. La rápida industrialización con sus consecuencias económicas y sociales parece que era superior a la capacidad de las capas dirigentes de la época. Se planteaban muchos problemas al mismo tiempo y no siempre había soluciones viables a mano. Ante la constante aceleración del proceso de transformación social que traía consigo un elemento de inseguridad hasta entonces desconocido, todos los grupos de la sociedad defendían tozudamente sus propiedades con todos los medios a su alcance, medios que muy a menudo eran inadecuados. Los obreros creían casi exclusivamente en la huelga general como solución y esperaban todo de una revolución social violenta. Pero poco a poco fue imponiéndose en Europa central y occidental la idea de que la emancipación de los obreros podía llevarse a cabo en un proceso paulatino y por etapas. Por su parte, las capas dirigentes fueron superando lentamente su pánico al «peligro rojo». En Rusia, en cambio, la evolución social había llegado a tal callejón sin salida, que sólo la violencia podía ser una solución. Los antagonismos entre los

grupos sociales que se combatían formando siempre nuevas coaliciones y que especulaban con el apoyo del Estado para mejorar o mantener sus posiciones sociales, forman el telón de fondo social para los graves conflictos y tensiones que conmovieron a los Estados europeos en el terreno de la política tanto interior como exterior y que alcanzaron su apogeo en la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. A ellos dedicaremos los siguientes capítulos.

B. Las formaciones políticas.

1. La evolución interna de los Estados europeos (1885-1906)

I. CONSERVADURISMO Y PROGRESO EN LOS ESTADOS DE EUROPA OCCIDENTAL

La evolución política interna de los distintos Estados de Europa en el período comprendido entre 1885 y 1906 ofrece todo menos una imagen homogénea. La diversidad de formas sociales y político-constitucionales no puede ser mayor, igual que las diferencias en el desarrollo económico y social. No obstante, se pueden hacer algunas observaciones de carácter general. Asistimos, por ejemplo, a la extensión desde el Oeste hacia el Este de formas democráticas de gobierno; esto puede relacionarse con la penetración simultánea en los diversos países de métodos de producción industriales y formas económicas capitalistas. Sin embargo, el carácter propio del punto de partida social y político resultó —a pesar del progreso económico— casi siempre decisivo para la orientación y el dinamismo de las correspondientes evoluciones políticas. En todos los países empezaron a agitarse los sistemas políticos tradicionales; las élites dominantes fueron presa de una extraña inquietud. Aunque las capas dirigentes conservadoras —de distinto carácter según las condiciones propias de los diversos países— pudieron mantenerse en el poder hasta los primeros años del nuevo siglo, se formaron al mismo tiempo poderosas fuerzas en la izquierda que propugnaban una transformación de la constitución y del Estado. En los países con una política constitucional más avanzada, éstos eran en primer lugar los radicales, con un programa de democracia social consecuente, y en los países más atrasados, en general, los socialistas y, en algunos casos, incluso, los grupos anarquistas. El centro liberal, siempre que existiese o pudiese desarrollarse, quedaba aplastado entre ambos grupos o estaba condenado a una escasa influencia política. A lo largo de estos conflictos los grupos de las derechas trataron de defender una y otra vez su amenazada hegemonía, propugnando reformas constitucionales en un sentido reaccionario o aferrándose a derechos ya caducos. Sin embargo, en todas partes quedó demostrado que estos medios no llevaban

muy lejos, pero también que las reformas democráticas, como la extensión del derecho de voto a capas populares más amplias, no favorecían exclusivamente a la izquierda y que con ello no estaba aún en absoluto garantizada una mayor estabilidad política.

Este fenómeno se ve confirmado especialmente a través de la evolución interna de Gran Bretaña y Francia, países en los que ya se habían cumplido en la mitad de los años ochenta los principales postulados de la democracia moderna. En Inglaterra la ampliación del derecho de voto en 1884 a todos los ciudadanos varones con una familia a su cargo —aunque conservando el voto plural, que concedía a los grandes terratenientes el derecho de votar donde tuviesen propiedades, y los colegios plurinominales que en las grandes ciudades industriales debían garantizar una representación adecuada de la minoría (que allí era, en general, conservadora)— no pudo impedir que los conservadores permaneciesen en la siguiente década y media casi ininterrumpidamente en el gobierno, mientras que el liberalismo, dividido y profundamente desorientado, quedaba condenado a la impotencia política. Las primeras elecciones, después de la ampliación del sufragio, habían conducido en 1885 a un triunfo liberal, pero habían llevado también a 82 diputados irlandeses al Parlamento. A este grupo de diputados irlandeses, dirigido por Parnell, le correspondió la función de equilibrar la balanza y por ello pudo paralizar ampliamente toda la maquinaria legislativa de Inglaterra y reforzar así sus reivindicaciones de independencia para Irlanda, o al menos el derecho a la autonomía bajo la soberanía de la Corona británica. El intento llevado a cabo por Gladstone, en el año 1885, de hacer desaparecer de la política interior británica esta antigua manzana de la discordia, con la concesión a Irlanda de la «Home Rule», condujo a una grave división en el campo liberal. Los «liberal unionistas», bajo el mando de Chamberlain, se negaron, influidos por la creciente marea del imperialismo, a ceder una parte de los derechos del Parlamento británico a una representación nacional irlandesa y se separaron de Gladstone y del partido liberal. La «Home Rule Bill» no fue aprobada en el Parlamento en 1886 y Gladstone se vio obligado a apelar a la nación.

Las nuevas elecciones de 1886 terminaron, sin embargo, con una catástrofe para el liberalismo. Lord Salisbury, jefe de los «tories», volvió a ocupar su cargo, apoyado por 316 conservadores y 78 «liberal unionistas», mientras que los seguidores de Gladstone se veían reducidos a 191 escaños. Más grave aún que la derrota numérica fue que, con Chamberlain, se

pasase al campo de los conservadores una parte considerable del mundo de los negocios, hasta entonces orientada hacia el liberalismo y, además, los antiguos *whighs* dirigidos por lord Hartington.

La concesión de la autonomía a Irlanda fue, en cierto modo, lo que provocó una reorganización de las fuerzas políticas en Gran Bretaña. Existían, sin embargo, problemas más fundamentales que la cuestión de hacer frente a la revolución permanente de los arrendatarios irlandeses contra sus amos, recurriendo a medios liberales o a la fuerza pública. En última instancia se trataba, por una parte, de determinar en qué medida era lícito utilizar los instrumentos de la fuerza pública en el campo social, y, por otra, se ponía en juego el porvenir del imperio británico. Gladstone y el antiguo liberalismo no deseaban ni un reforzamiento del poder estatal ni una política imperial ambiciosa. Los conservadores y con ellos los «liberal unionistas» querían ambas cosas y de esta manera Gladstone se vio empujado, muy en contra de sus inclinaciones, hacia la izquierda. Todo el «establishment» estaba en contra de él, y no dudó en manifestarlo públicamente en la Cámara de los Comunes, frente a sus adversarios: «No menospreciamos en absoluto las fuerzas que se enfrentan a nosotros. Yo las he descrito como las fuerzas de la clase dominante y de sus seguidores y esto puede considerarse, en general, exacto (...). Ellos tienen poder, ellos tienen riqueza, ellos tienen una categoría social, ellos tienen un «status» social, ellos tienen una organización. ¿Qué tenemos nosotros? Creemos que el corazón del pueblo está con nosotros (...). La marea que se retira está con ellos y la marea que avanza estará con nosotros» [52].

Sin embargo, por el momento era la marea baja más que la alta la que acompañaba al partido liberal. Este se convirtió entonces, como demuestra, por ejemplo, el *Newcastle Programme* de 1891, cada vez más en un partido radical, sin que con ello pudiera atraer suficientes electores. Los conservadores jugaron con fortuna la carta del imperialismo, popularizado y fomentado por los nuevos periódicos de gran tirada, como el *Daily Mail,* fundado en 1896, y tacharon a sus adversarios liberales de «little englanders». Cuando en 1892 los liberales suben de nuevo al poder por tres años, la Cámara de los Lores bloquea sistemáticamente la legislación liberal, sobre todo un nuevo proyecto de «Home Rule». Sin embargo, el gabinete liberal no quiso, en contra del consejo de Gladstone, decidirse por la lucha abierta contra los pares. Tampoco el imperialismo liberal de Rosebery, sin obstáculos desde la dimisión de Gladstone en abril de 1894, pudo cambiar la suerte de los liberales;

las elecciones de 1895 volvieron a significar para el partido liberal una completa derrota.

De esta manera determinó el panorama interno la legislación conservadora, que no se distinguía precisamente por su gran audacia y que únicamente afrontaba los problemas más acuciantes. Junto a una nueva organización de la autonomía, se creó en 1897 un seguro de accidentes para trabajadores. Por lo demás era la política exterior la que centraba toda la atención pública británica. El primer lugar lo ocupaba la cuestión boer, que tras el fracaso «Jameson Raid» (ver pág. 148), se había agravado considerablemente. A pesar de todas las maniobras de los jefes liberales, entre los que reinaba el más completo desacuerdo, como demostró la investigación parlamentaria sobre la participación de Chamberlain en el «Jameson Raid», la controversia acerca de la política británica frente a los boers se convirtió en 1901 en otra catástrofe para las fuerzas liberales. Los liberales, divididos por un lado en la corriente favorable a los boers de Campbell-Bannerman y por otro en los «liberal imperialists», bajo la dirección de Rosebery, Asquith y Grey, fueron arrollados por una ola nacionalista sin precedentes.

Por otra parte, empezaban a notarse cada vez más las consecuencias de quince años de estancamiento en la política interior, cuya responsabilidad recaía casi por completo sobre los conservadores. Esto se puso claramente de manifiesto en la actitud de los trabajadores. Bajo la influencia de la legislación antisindicalista seguida desde finales de los años noventa, los sindicatos abandonan ahora definitivamente los antiguos partidos tradicionales; en febrero de 1900 fue fundado el «Labour Representation Committee» con el fin de conseguir una representación parlamentaria independiente de los trabajadores en la Cámara de los Comunes. Aunque en las elecciones para la Cámara de los Comunes del año 1901 sólo salieron elegidos dos representantes del LRC, núcleo de el futuro «Labour Party», y esto únicamente gracias al apoyo de los liberales, se había dado ya el primer paso. Al concluir la guerra boer, cuyo desgraciado curso militar había descubierto muchas deficiencias en la organización política y militar de Gran Bretaña, se apoderó de la opinión pública un creciente descontento por la política de los conservadores, descontento que ni siquiera la «Education Act» de 1902, con su necesaria reforma fundamental del sistema de educación, pudo hacer desaparecer. La campaña de los liberales en favor de una mayor «efficiency» y de amplias reformas sociales destinadas a proporcionar una vida más digna a los vastos sectores de la «imperial race», halló en general un eco positivo. Pero el golpe de muerte se lo dio el propio

Chamberlain a los conservadores cuando empezó a propugnar en 1903 el proyecto de una unión aduanera imperial. La violación del principio sagrado del libre cambio distanció no sólo a grandes sectores del mundo de los negocios de los conservadores, sino también a la gran masa, a la que los liberales presentaban en los colores más oscuros: las consecuencias de las aduanas de preferencia propuestas por Chamberlain, anunciando un encarecimiento del pan y de los principales productos alimenticios. Los «unionists» trataron de ganarse en el último minuto una vez más a la clase trabajadora con la «Unemployed Workmen Act» de 1905. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. En 1906 los liberales suben al poder después de una victoria electoral arrolladora. El nuevo gobierno Campbell-Bannerman se dispone a cambiar profundamente la estructura política de Inglaterra mediante una serie de medidas legislativas, y a eliminar progresivamente los numerosos restos de privilegios aristocráticos. Con todo, estas medidas fueron tomadas bajo la presión del recién creado Partido Laborista, que en los cincuenta distritos electorales donde había presentado a sus candidatos había podido reunir el 37 % de todos los votos y que había mandado a 29 diputados a la Cámara de los Comunes con el apoyo de los liberales, lo que representaba un triunfo considerable en aquellas circunstancias. Se inicia una nueva etapa: Inglaterra se encontraba en el umbral de la democracia.

La evolución que sigue Francia ofrece a primera vista poca semejanza con la de Inglaterra; sin embargo, existen paralelos fundamentales. El punto de partida era para ambos países completamente distinto. Mientras que en Inglaterra la autoridad del Estado y la estabilidad del sistema constitucional nunca peligraron seriamente, gracias también a la fuerza integradora de la monarquía, la Tercera República sufrió desde finales de los años ochenta una serie de graves crisis y escándalos que la condujeron al borde de un completo desmoronamiento. La Tercera República era sobre todo la creación de la alta burguesía liberal. No existía un sólido sistema de partidos como en Inglaterra; los partidos carecían de una organización rigurosa y las fronteras entre ellos eran imprecisas. Los personajes y no los programas decidían el curso de los acontecimientos y entre los principales políticos el cambio de frente constituía un fenómeno habitual. Unicamente los radicales poseían un programa más o menos definido. Propugnaban éstos una reforma fundamental del sistema bicameral francés —de hecho bastante conservador con sus senadores vitalicios—, un sistema de educación laico, unas leyes tributarias igualitarias y, finalmente, amplias reformas sociales. Los enemigos más feroces del orden consti-

tucional existente se hallaban sin embargo en la derecha. Los conservadores, entre los que subsistían las antiguas tradiciones del legitimismo, del bonapartismo y del orleanismo, bajo formas más o menos adaptadas a los tiempos, rechazaban en su mayoría la república y el gobierno parlamentario, y propugnaban en parte la restauración de la monarquía, en parte un sistema bonapartista, pero también una combinación de ambas formas de gobierno. La derecha poseía en algunos círculos de la sociedad, sobre todo en la alta nobleza, un fuerte apoyo. Sus ambiciones se vieron además respaldadas por el cuerpo de oficiales, que achacaba a la Tercera República el infame resultado de la derrota de 1870-1871 y que como un Estado dentro del Estado seguía orientándose por los ideales del «Second Empire». Podía contar además con la ayuda incondicional del alto clero y de las numerosas congregaciones, que tenían una gran influencia por el hecho de controlar prácticamente todo el sistema de educación de Francia. Entre ambos grupos ocupaba el centro republicano una posición nada envidiable; llevado sobre todo por la burguesía acomodada que seguía fiel al ideal del «laissez faire», el lema de su política seguía siendo el principio del «juste milieu». En nombre de la estabilidad social y de la prosperidad económica, los republicanos defendían el sistema existente de los ataques de la derecha y de la izquierda, ganándose así el atributo de oportunistas. En el aspecto económico y social el centro republicano perseguía en general una política que correspondía a los intereses de la gran burguesía, sin prestar excesiva atención a las necesidades y deseos de los campesinos, de la pequeña burguesía y de la clase obrera.

El hecho de que el «boulangismo» pudiese convertirse en un serio peligro para la existencia del orden democrático demuestra que el sistema constitucional de la Tercera República estaba débilmente enraizado en la conciencia de la gran masa de la nación francesa. El movimiento boulangista era una coalición de grupos completamente heterogéneos, agrupados bajo la bandera común de un nacionalismo tan fanático y neurótico como superficial. El rápido ascenso del general Boulanger, oficial brillante, elegante y de buen aspecto, a la presidencia de este movimiento político que exigía una revisión de la Constitución en sentido bonapartista, era en parte la consecuencia de los graves errores de los propios políticos republicanos, sobre todo de Clemenceau, que en 1886 había introducido al popular general en el gabinete como ministro de la Guerra. Boulanger se había convertido en un nuevo héroe nacional en 1887 por su audaz política en el asunto Schaebele, que conjuró pasajeramente la amenaza de una guerra germano-francesa, así como por una

serie de medidas en favor del ejército, alzándose en un nuevo Bonaparte; o mejor dicho, habían sido los que le rodeaban, sobre todo Déroulède, los que habían logrado convertirle en ello. Alarmado por la evolución que tomaban las cosas, el gobierno depuso a Boulanger en 1889 como ministro de la Guerra y éste declaró la lucha abierta a la Tercera República. Boulanger se convirtió en el portavoz de todos los grupos descontentos de la sociedad y su polémica contra la corrupción y la codicia, unida a su apasionada exaltación de la grandeza nacional de Francia, tuvo mucho eco. La agitación de Boulanger encontró unas condiciones extremadamente favorables. El desmoronamiento de la «Société du Canal de Panama» en circunstancias aciagas, que habían costado a 400.000 pequeños ahorradores franceses toda su fortuna, y el escándalo del yerno del presidente Grevy, que había hecho grandes negocios con altos cargos, arrojaban de hecho una luz dudosa sobre los políticos republicanos. En la conciencia de los franceses la república democrática estaba unida estrechamente al ideal de la estricta integridad moral, mientras que la monarquía era considerada el baluarte de la corrupción y del derroche desorbitado. El descubrimiento de que tampoco los detentadores de los más altos cargos del Estado republicano estaban libres de la ambición de enriquecimiento personal a costa de la comunidad, fue un duro golpe e impulsó al boulangismo, que se alzó como cabeza de las masas populares en la lucha contra el capitalismo depredador de las capas dirigentes, sin desdeñar una alianza con los grupos de la extrema derecha. Apenas quedaba libre una circunscripción, Boulanger se hacía elegir con un número fabuloso de votos, aunque esto lo conseguía con el considerable apoyo del dinero y la prensa monárquicos. El peligro de que Boulanger presentase en las siguientes elecciones generales su candidatura simultáneamente en todos los distritos electorales, convirtiendo así esas en un plebiscito en su favor, se estaba convirtiendo en realidad. Pero en el momento decisivo, después de un nuevo triunfo colosal en las elecciones del VII *arrondissement* de París, que los políticos republicanos habían considerado también una prueba importante, renuncia el general a la lucha en junio de 1889. El gobierno modifica, sin embargo, el derecho electoral con el apoyo de la mayoría republicana de la Cámara, evitando de esta manera que Boulanger llegase «legalmente» al poder, a través de una candidatura presentada simultáneamente en todos los distritos electorales; además tomó medidas para proceder jurídicamente contra Boulanger y sus seguidores. Este, sin embargo, en lugar de marchar sobre el Eliseo, no hizo nada en absoluto y huyó finalmente a Bélgica. Privado de su

cabeza, el movimiento boulangista se desmoronó de la noche a la mañana y se deshizo de nuevo en sus partes heterogéneas. Las elecciones del verano de 1889 determinaron la completa derrota de los enemigos de la República. Cuando Boulanger se suicida en 1891 en Bruselas al borde de la tumba de su amante, el boulangismo deja de existir como peligro político y la existencia de la Tercera República queda definitivamente asegurada.

Bajo la presidencia de Sadi Carnot, que procedía del mundo de la alta burguesía comerciante y que había sido puesto al frente del Estado más por su nombre que por sus méritos personales, se llevó a cabo una cierta estabilización de la situación. También la Iglesia católica, que hasta entonces había mantenido una actitud irreconciliable hacia la Tercera República, terminó por ceder: la bula de León XIII *Inter multiples sollicitudines* del año 1892 hizo posible la reconciliación entre los católicos y la República. Sin embargo, el alto clero francés siguió rechazando obstinadamente el sistema y se adhirió a la agitación nacionalista y antisemita de la derecha en contra de la República, movimiento que ahora encontraba cada vez más partidarios también en los antiguos círculos estrictamente conservadores y legitimistas de la sociedad francesa. Cuando, en 1892, se descubren las causas de la quiebra de la «Sociedad del canal de Panamá», la Tercera República vuelve a sufrir una grave crisis; un número considerable de destacados políticos habían estado envueltos en los manejos fraudulentos de la Sociedad. Estos hechos crearon un clima favorable para las consignas nacionalistas y antisemitas de Barrès y Drumont. El periódico de Drumont, *La Libre Parole*, convirtió la liberación de Francia del gran capitalismo judío en su programa, y lanzó el lema de: «Francia para los franceses.»

Aunque las elecciones de 1893 constituyeron de nuevo un duro revés para la derecha, se acentuó en los siguientes años su oposición al sistema. También en el extremo opuesto arreciaron las corrientes dirigidas contra la Tercera República. El descontento iba apoderándose cada vez más de la clase obrera, debido a su precaria situación social. El número de diputados socialistas pasó de 12 a 15 en la Primera Cámara. También, al margen de las organizaciones parlamentarias, la clase trabajadora inicia una acción más decidida. Los atentados anarquistas y las huelgas generales agitan el mundo burgués.

La tensión acumulada se desencadena de repente en el llamado «caso Dreyfus». A finales de septiembre de 1894 había sido detenido el capitán de artillería francés Dreyfus, oficial de origen judío, acusado de alta traición. Al parecer había

revelado información secreta sobre la artillería francesa al agregado militar alemán Schwartzkoppen. Desde el día en que se conoció la detención de Dreyfus —por cierto con la ayuda del Estado Mayor, que había facilitado la correspondiente información a *La Libre Parole* de Drumont—, se desencadenó una tremenda campaña contra el «monopolio de los judíos» en la sociedad francesa. En la alta traición de Dreyfus la derecha francesa, y con ella los oficiales franceses, vieron la prueba evidente de la supuesta actividad de los judíos contraria a los intereses nacionales de Francia. El ejército, cuyo cuerpo de oficiales procedía de la época del «Second Empire» y que reclutaba las nuevas promociones por captación, tendía sobre todo a actitudes antisemitas. La mentalidad autoritaria de los oficiales franceses era diametralmente opuesta a los principios democráticos del país; se despreciaba a la Tercera República por considerarla el gobierno de una burguesía capitalista pendiente únicamente de los negocios, y del judaísmo, ya que los judíos poseían un alto número de puestos importantes dentro de la economía francesa. En este sentido la agitación antisemita dirigida contra el traidor judío Dreyfus estaba unida desde el principio a los problemas políticos y sociales de Francia.

La derecha utilizó el caso Dreyfus como trampolín para una ofensiva periodística de grandes dimensiones, y el Estado Mayor y el ministro de la Guerra no dudaron en considerar, bajo la influencia de esta ruidosa agitación, a Dreyfus como único responsable, aunque la acusación se basaba en argumentos poco consistentes. En contra de todas las reglas del derecho procesal militar, se facilitó a los jueces del tribunal militar un informe secreto, por supuestas razones de seguridad nacional, con documentos que agravaban la situación del imputado, y que más tarde se demostró eran falsos o no estaban relacionados con Dreyfus. Degradado y expulsado del ejército, este oficial fue deportado, a pesar de asegurar siempre su inocencia, a la Isla del Diablo.

Podía haber terminado así este caso. Sin embargo, un pequeño grupo de amigos del condenado no dejó de creer en su inocencia. Pusieron todo su empeño en conseguir una revisión del proceso y hallaron aliados en los círculos de la *intelligentsia* de izquierda, que por principio no tenía grandes simpatías al ejército. Empezaron a filtrarse además, poco a poco, nuevos datos que hacían dudar de la culpabilidad de Dreyfus. Fue decisivo que el nuevo jefe del contraespionaje francés, teniente coronel Picquart, descubriese en 1896 nuevos documentos que demostraban con seguridad que no había sido Dreyfus, sino

el comandante Esterhazy, el que había tenido contactos con Schwartzkoppen. El Estado Mayor francés prefirió no seguir estas nuevas informaciones y que estos asuntos cayesen en el olvido, en parte porque debido a la fuerte campaña dirigida contra Dreyfus se seguía creyendo todavía en su culpabilidad, y en parte porque se quería evitar el escándalo que hubiese significado para el ejército la nueva vista del proceso contra Dreyfus o su eventual absolución. Interpretando mal la razón de Estado, se antepuso el prestigio del ejército a la suerte personal de un oficial judío. Y lo que era más grave, se elaboraron rápidamente nuevos documentos, también falsos, de los que parecía deducirse ya definitivamente la culpabilidad de Dreyfus. Al mismo tiempo Picquart era alejado de su puesto y destinado a la lejana Argelia.

Contra esta conjuración del Estado Mayor, dispuesto a evitar una revisión del juicio contra Dreyfus, el pequeño grupo de «dreyfusards» no pudo hacer casi nada durante mucho tiempo. Todos los intentos de iniciar la revisión del proceso fracasaron. Con una carta abierta dirigida al presidente de la República, publicada el 14 de enero de 1898 en la revista parisina *L'Aurore,* Emile Zola pudo despertar por fin la opinión pública y poner el asunto en marcha. La carta de Zola causó enorme sensación; por fin trascendían a la opinión pública las circunstancias que habían rodeado la condena de Dreyfus. Una enorme expectación se apoderó del pueblo francés. Francia se dividió en dos campos: enemigos y defensores de la revisión. En esta atmósfera saturada de un nacionalismo tan extremo como susceptible, que presentaba todos los aspectos de una neurosis de masas, la cuestión de si existía o no error de justicia alcanzó unas dimensiones desorbitadas. Toda la derecha y con ella el ejército y la mayoría de los poderosos, consideraban una decisión en favor de la revisión incompatible con el honor del ejército y del país. En la mente de las élites dominantes no sólo se encontraba en juego el prestigio del ejército, sino también la autoridad del Estado y la validez del orden social existente. En toda la prensa de la derecha y del centro burgués se desató una campaña desenfrenada contra los «dreyfusards» en la que se desfogó un nacionalismo desmesurado. La izquierda, unida a su vez a los amigos de Dreyfus, reprochaba al gobierno el intento de entregar el país a la reacción. Se produjeron entonces enormes manifestaciones que en muchas ocasiones degeneraron en graves tumultos callejeros.

En esta atmósfera el valiente ataque de Zola no tuvo de momento ningún éxito. El gobierno, los oficiales y la justicia

declararon a los «dreyfusards» una batalla de dureza sin igual en la que hicieron uso de todos los medios de intimidación política y de manejos jurídicos. A pesar de contar con las simpatías de la opinión pública, Zola fue condenado en primera y segunda instancia por ofensas al ejército. En el curso de los debates fueron surgiendo sin embargo nuevos detalles que indujeron finalmente al ministro de la guerra, Cavaignac, a iniciar a su vez una revisión de los documentos acusadores. Esta demostró que el coronel Henry, sucesor de Picquart en el Estado Mayor, había falsificado tales documentos. El 30 de agosto de 1898 era detenido Henry; al día siguiente se suicidaba en la cárcel después de haberse declarado culpable.

El escándalo había estallado, el jefe del Estado Mayor dimitió y el ejército se vio expuesto a graves acusaciones. A pesar de todo no renunció a su táctica de defensa cerrada. Los ministros de la Guerra se sucedieron rápidamente, pues ninguno de ellos se atrevía, en vista del estado de ánimo del ejército, a extraer todas las consecuencias de la nueva situación. La agitación contra los «dreyfusards» alcanza a finales de otoño de 1898 un nuevo apogeo: la «Ligue des Patriotes» organiza grandes manifestaciones nacionalistas en la calle. Pero nada podía detener ya la revisión. El 14 de diciembre de 1898 le da vía libre el gobierno de Brisson y dos meses más tarde el tribunal de casación decidía acceder al recurso de revisión de madame Dreyfus. Con ello el «affaire» se acercaba a su fin —aunque creando ahora una situación revolucionaria. La hostilidad a la revisión seguía siendo aún tan fuerte en la derecha y en el seno del gobierno, que dos gobiernos fracasaron por la cuestión de reanudar el juicio y de apaciguar al ejército. La inesperada muerte, a mediados de febrero de 1899, del presidente Faure, que simpatizaba con la derecha y que había tratado de impedir la revisión, y la elección de un hombre del centro izquierda como sucesor suyo, llevaron la situación al extremo. Los boulangistas y bonapartistas se unieron en un último y desesperado ataque contra la República; el golpe de Estado que intentó llevar a cabo la «Ligue des Patriotes» de Déroulède fracasó sin embargo miserablemente. Las impresionantes manifestaciones de los nacionalistas y las no menos tremendas contramanifestaciones de los trabajadores crearon una situación crítica. Sólo el gobierno de concentración nacional de Waldeck-Rousseau, formado con hombres tan dispares como el general Gallifet y el socialista Millerand a finales de junio de 1899, pudo imponer de nuevo la autoridad del Estado. Autoridad tanto más necesaria cuanto que los franceses empezaban a temer por el

éxito de la proyectada Exposición Universal, que debía celebrarse el año 1900 en París.

Sin embargo, la situación seguía siendo tan compleja que todavía no había lugar para un examen objetivo. Aferrado a una actitud en la que la entrega incondicional a las tradiciones y la fidelidad a las autoridades militares se unían a un nacionalismo neurótico, el tribunal de guerra negó de nuevo a Dreyfus la absolución en el verano de 1899, aunque mientras tanto Esterhazy había reconocido desde su seguro exilio londinense la propia culpabilidad. Sólo el rápido indulto del presidente de la República puso definitivamente fin a este asunto.

La consecuencia más importante del «caso Dreyfus» fue la disolución del centro político existente. Mientras que las antiguas fuerzas conservadoras quedaban duramente afectadas y eran absorbidas por completo por el nuevo «nacionalismo integral», la izquierda no socialista se reorganizaba en el «Parti radical et radical-socialiste», formando junto con los socialistas un bloque de izquierdas que obtuvo en las elecciones de 1902 una fuerte mayoría. Ya el gabinete de Waldeck-Rousseau había iniciado un nuevo curso en la política interior que trataba de eliminar las causas profundas del movimiento contra Dreyfus. Se había propuesto eliminar la posición privilegiada del ejército dentro del Estado y romper la influencia de la Iglesia católica sobre el sistema de educación. El ministerio radical de Combes, que llegó al poder después de las elecciones, prosiguió este curso con la mayor dureza; las congregaciones tuvieron que abandonar la enseñanza y fueron disueltas en su mayoría.

La política anticlerical del gobierno francés provocó en 1905 la ruptura de relaciones con el Vaticano y finalmente la completa separación de Iglesia y Estado. Esta se realizó de manera oficial por la ley del 5 de diciembre de 1905. Las protestas del papa Pío X fueron inútiles. La izquierda republicana de Francia estaba decidida a romper por todos los medios con la influencia secular de la Iglesia católica sobre el pueblo, influencia que había tenido por lo general un sentido antidemocrático. Esperaba de esta manera abrir una vía a la política democrático-radical que convirtiese al Estado en un instrumento destinado a solucionar los problemas sociales y a realizar la idea de la solidaridad. A pesar de la tenaz oposición del Vaticano, que prohibió a los católicos franceses toda cooperación con las autoridades públicas en el momento de crear las nuevas congregaciones religiosas, pudo imponerse la izquierda republicana. En las elecciones de 1906 la izquierda radical socialista vuelve a obtener una gran mayoría. Fue el viejo Clemenceau el que constituyó ahora un gabinete lleno de nombres importantes que

rehabilitó definitivamente a Dreyfus y que inició una nueva fase en la política interior de Francia.

Comparado con Inglaterra y Francia, el desarrollo interno de Bélgica, el país más avanzado industrialmente de los Estados menores de Europa, tomó un rumbo completamente distinto. También aquí se podía observar un creciente aumento de las fuerzas democráticas, pero la gran burguesía católica conservadora, favorecida por la especial estructura social del país, se opuso durante largo tiempo con éxito a la participación de las masas en las decisiones políticas. Ya en 1884 el partido católico-conservador había sucedido en el poder a los liberales, que habían gobernado sin interrupción desde 1831. Su mayoría en la Primera Cámara y en el Senado demostró ser casi invencible en los veinte años siguientes, gracias a un sistema electoral censitario, que sólo otorgaba a 137.000 ciudadanos el derecho de voto, y al fuerte apoyo político que encontraba entre los campesinos flamencos católicos, políticamente pasivos en su mayoría. El partido católico conservador reinante se encargó, a pesar de las grandes protestas de los liberales, de que la Iglesia católica mantuviera una influencia decisiva sobre la instrucción pública. En el aspecto económico prosiguió, sin embargo, el liberalismo del «laissez-faire» de sus precursores.

De esta manera, Bélgica se convirtió en el país clásico de la lucha de clases. Ante la aplastante mayoría del partido que ocupaba el poder, no podía conseguirse nada con los métodos tradicionales de la lucha parlamentaria; por ello se concentraron todas las energías políticas en una reforma del sistema electoral vigente que era de un acusado carácter plutocrático. Como los grupos dominantes se oponían obstinadamente a cualquier modificación del mismo, quedó finalmente sólo el arma de la huelga general. Los socialistas supieron aprovecharla. En 1886 se produjeron por primera vez graves disturbios laborales que fueron aplastados gracias al empleo de tropas. La crisis del Estado clasista, controlado por la alta burguesía, era manifiesta. Pero sólo las nuevas y mejor organizadas manifestaciones masivas que se llevaron a cabo entre 1890 y 1892 contra el derecho electoral consiguieron que cediese el Parlamento. La reforma del derecho electoral que se llevó por fin a cabo en 1893 después de nuevas huelgas generales, tuvo unos resultados muy poco satisfactorios. El número de electores se había multiplicado por diez, pero al mismo tiempo se había cimentado la dominación del partido católico en todos los aspectos gracias a la introducción de un complicado sistema electoral basado en el voto plural. De esta manera las elecciones de 1894 llevaron a la Cámara 104 católicos, pero sólo 14 libe-

rales y 34 socialistas, estos últimos votados exclusivamente en los distritos industriales valones. Más grave fue que el partido católico aprovechase su predominio en las comunas para manipular sin escrúpulos el derecho electoral comunal. Así se apoderaron los católicos de las ciudades que se encontraban aún en la zona de influencia agraria, en perjuicio de los socialistas y los liberales. Con la ley de educación de 1895, los católicos lograron otra vez irritar al máximo a la izquierda laica.

Desde principios de siglo los socialistas y los liberales se unieron en una acción conjunta para romper este sistema realmente oligárquico. Su lucha se dirigió, sobre todo, contra el sistema electoral vigente que querían ver sustituido por el sufragio universal, igual y directo. Su éxito fue limitado; la mayoría dominante redujo ligeramente el efecto plutocrático del sistema electoral, introduciendo el escrutinio de listas. El gran movimiento huelguístico llevado a cabo desde 1901 por el partido socialista en favor del sufragio universal, igual y directo, no tenía ninguna posibilidad de éxito. En la evolución del movimiento obrero belga se produjo un cierto estancamiento; las reservas de electores socialistas, en un país que poseía un sector tradicionalista tan fuerte, se encontraban ya desde principios de siglo casi agotadas. Por el contrario, los liberales, favorecidos por las cada vez más fuertes exigencias democráticas, lograron ganar terreno desde 1906 frente al dominio conservador de la burguesía católica.

También en Holanda podemos observar la ascensión de partidos clericales que, uniendo sus fuerzas a partir de 1881, rompieron el predominio del liberalismo en el marco constitucional con un sufragio censitario semejante. Pero debido principalmente a la gran homogeneidad social del país aquí no se produjo el endurecimiento de los frentes que se pudo observar en Bélgica. En Holanda faltaban los grandes contrastes sociales y los liberales volvieron de nuevo al poder en los años 1891-1899. Consiguieron imponer un programa de reformas moderadas, entre ellas la introducción del impuesto progresivo sobre la renta y el patrimonio de 1892-1893; pero a continuación, los partidos clericales volvieron al poder sin llegar no obstante a provocar una resistencia tan enconada como en Bélgica. También en Holanda se reivindicaba el sufragio universal, igual y directo, pero nadie convirtió este postulado en la base de un programa de lucha extraparlamentaria.

II. CRISIS CONSTITUCIONALES PERMANENTES EN EL SUR DE EUROPA: ESPAÑA, PORTUGAL E ITALIA

Mientras que en Europa occidental se imponían progresivamente las formas parlamentarias de gobierno, que perdiendo su carácter originario ligado a la alta burguesía daban paso al escenario político a amplios sectores que hasta entonces habían observado una actitud política pasiva, en la Europa meridional no llegó a producirse este fenómeno en ningún país. España, Portugal e Italia habían adoptado relativamente temprano las formas y los métodos del sistema liberal constitucional. Sin embargo, éstos no llegaron a echar verdaderas raíces y no eran en general más que una fachada decorativa, cuando no se volvía de nuevo por completo a los métodos de la monarquía autoritaria, como en Portugal, por ejemplo. Existía un dominio más o menos oligárquico de grupos políticos relativamente pequeños que encontraban un cierto apoyo en los poderes tradicionales y en la débil capa de la burguesía mercantil. Debido al atraso social resultaba extremadamente difícil integrar a las grandes masas en este sistema. En España y Portugal fracasó por completo el intento de adaptar el sistema constitucional existente a las condiciones de la sociedad de masas; en Italia pudo llevarse a cabo superando enormes obstáculos pero tampoco tuvo éxito duradero, como demostraría su futura evolución.

España poseía en 1876 una Constitución muy progresista, pero la extremada pobreza y el atraso social del país condenaban al parlamentarismo de antemano a una lucha de clientelas políticas. Los gobiernos eran el resultado de sistemáticas manipulaciones electorales, y los grupos parlamentarios dominantes, conservadores y liberales, se sometieron dócilmente a las reglas de juego de este sistema, que prácticamente garantizaba el predominio de una reducida clase de propietarios. Hasta 1897 Cánovas del Castillo, apoyándose en los latifundistas y en la burguesía industrial, siguió una política conservadora liberal, aunque la constante agitación anarquista no facilitó precisamente su labor. Consiguió, incluso, introducir en 1890 el sufragio universal y un complejo aparato jurídico burgués. Detrás de esta fachada democrática se escondía, sin embargo, un sistema de acusado carácter oligárquico, en el que los distintos potentados locales o «caciques», y los gobernadores civiles y militares de las diversas regiones, podían manipular a su gusto todas las cuestiones políticas. La guerra de 1898, en la que España perdía los restos de su antiguo imperio colonial, puso de manifiesto toda la debilidad de este sistema político y provocó un movimiento de renovación, llevado sobre todo por los intelectuales, que de

momento no pudo cambiar la situación política y social del país. La guerra llevó a las fuerzas conservadoras al poder, apoyadas por la Iglesia católica, la Corona y grupos afines. Silvela y Maura trataron de realizar un programa de reformas ortodoxo y conservador; al mismo tiempo lanzaban una campaña contra la izquierda y los trabajadores sindicalistas. De esta manera los liberales, que se inspiraban en los sistemas de Europa occidental, sobre todo en el de Francia, fueron empujados hacia la izquierda y llevados finalmente a una alianza con los trabajadores sindicalistas. Tampoco Maura fue capaz de dominar la intranquilidad constante que reinaba en el país, ni la ola de disturbios y atentados anarquistas. Los extremos contrastes sociales y políticos existentes anunciaban un futuro poco tranquilizador.

En Portugal también existía un abismo profundo entre el derecho constitucional, que puede considerarse progresista en aquellas circunstancias, y la realidad constitucional. También aquí un pequeño grupo de políticos, de tendencia conservadora y pertenecientes a la alta burguesía, tenía las riendas en sus manos, un grupo que se mantuvo por la fuerza frente al radicalismo democrático y las corrientes anarquistas.

La evolución del sistema parlamentario siguió en Italia un curso algo más alentador. A diferencia de los países ibéricos, el Estado italiano se mantuvo desde el principio de su fundación irreconciliablemente opuesto a la Iglesia católica, con lo que se redujo aún más la ya estrecha base social del parlamentarismo italiano. Resulta muy característico de la naturaleza oligárquica del sistema parlamentario italiano de aquellas décadas, que en un país tan marcadamente católico no pudiese apenas participar en la formación del criterio político el sector consciente católico del pueblo, ya que el Papa había prohibido a los fieles la participación activa en el Estado laico. De hecho, el régimen constitucional que Cavour había dado en 1866 al recién fundado Estado nacional italiano, se había convertido en el curso de los años en un régimen oligárquico de pequeños grupos de políticos que, gracias al derecho electoral limitado y al atraso de las estructuras sociales, se alternaban en el poder político. La insuficiente raigambre de este sistema en el propio país halló su manifestación en periódicos disturbios sociales y en un profundo descontento entre la gran masa de los campesinos y del proletariado que se iba acumulando en las ciudades industriales del norte.

El régimen conservador de Crispi, que se mantuvo en el poder con algunas interrupciones de 1887 a 1896, trató de llevar a cabo una política de represión inspirada en Bismarck. Una

serie de atentados anarquistas fueron aprovechados por Crispi, en 1893, para ahogar el movimiento socialista que se hallaba en sus principios. En las «leyes de mayo» del año 1894 se prohibían todas las asociaciones y organizaciones socialistas. Fueron detenidos numerosos diputados socialistas; algunos sufrieron penas de prisión, otros fueron deportados a regiones apartadas, privándoles así de la posibilidad de actuar políticamente. Estas persecuciones no pudieron detener, sin embargo, el progreso del movimiento socialista en Italia. A pesar de las medidas represivas del gobierno, el Partido Socialista Italiano pudo aumentar el número de sus escaños de 5 a 20. Tampoco el seguro obligatorio de accidentes introducido también en 1898, siguiendo el modelo de Bismarck, ni el seguro estatal de vejez e invalidez, pudo hacer desaparecer la actitud hostil de la clase trabajadora respecto al orden social existente, tanto más cuanto que el gobierno aplastó numerosas huelgas con la fuerza de las armas.

En realidad, la ambiciosa política imperialista de expansión, iniciada por el gobierno de Crispi, fracasa en la batalla de Adua, en la que un ejército italiano sufre una grave derrota frente a las tropas del emperador de Abisinia; el gobierno cae así en 1896 en una grave crisis que favorece a la izquierda que no quería saber nada de estos costosos experimentos. También Rudini, sucesor de Crispi, probó fortuna con las aventuras imperialistas; su intento de conseguir para Italia un trozo del territorio chino fracasó igualmente. En 1898 se produjo, debido a una mala cosecha y a la guerra aduanera con Francia, un grave encarecimiento del pan que provocó una ola de desórdenes revolucionarios que, extendiéndose rápidamente desde el sur de Italia, culminaron en un auténtico levantamiento en Lombardía. Contra los trabajadores revolucionarios milaneses, que se hicieron con el poder de la metrópoli industrial del 3 al 9 de mayo de 1898, no pudo hacer nada la policía por el momento; sólo después de sangrientas luchas llegó a ser sometido el levantamiento por unidades del ejército regular a las órdenes del general Bava-Beccaris.

Aunque las ideas socialistas y anarquistas, de carácter poco diferenciado en muchos casos, habían contribuido a desencadenar el movimiento revolucionario, el joven partido socialista italiano no tenía nada que ver con ello. Este fue sorprendido, tanto como la burguesía y las autoridades estatales, por el movimiento revolucionario —que habiendo recibido su primer impulso con los disturbios del pan, luego se había extendido como un reguero de pólvora de un lugar a otro—. Se trataba de un típico movimiento espontáneo de masas, nacido de las manifestaciones contra la subida del precio de los alimentos

y que carecía de unos objetivos políticos claros y de una dirección organizada. Su impacto en las masas fue, sin embargo, inmenso. Fuerzas oscuras habían surgido de la profundidad de la sociedad y se habían alzado abiertamente contra la autoridad pública. Bajo la impresión de estos sucesos, el rey Umberto I puso al general Pelloux a la cabeza de un gobierno conservador que procedió con extrema dureza contra los verdaderos o supuestos dirigentes del levantamiento. En todas las grandes ciudades de la Italia septentrional se impuso el estado de sitio y los tribunales militares juzgaron con dureza draconiana a los que consideraron cabecillas de la revuelta. Centenares de políticos de la izquierda, sobre todo socialistas, pero también católicos notorios, a los que se acusaba de actividades subversivas contra el Estado, fueron arrojados a las cárceles. Una ola de reacción desatada por las fuerzas conservadoras, sobre todo por el ejército y la Corte real, se abatió sobre el país. El régimen militar —sólo en agosto de 1898 los tribunales militares cesaron en su actividad— suscitó una indignación siempre creciente en la población. Cuando en 1899 el ejército se dispuso a gobernar con la ayuda de leyes de excepción, que ponían en peligro los pilares de la libertad italiana, brotó un fuerte malestar no sólo en la izquierda política, sino también en la burguesía. Los partidos de la extrema izquierda, socialistas, republicanos y radicales, formaron una coalición conocida con el nombre de «Estrema Sinistra», que, empleando sistemáticamente la obstrucción parlamentaria, pudo impedir que fuesen aprobadas las leyes de excepción que preveían la reducción de toda una serie de derechos fundamentales, el control sobre la prensa y la disolución de las organizaciones políticas de la izquierda. Pelloux recurrió finalmente a un decreto real que declaraba las leyes de excepción derecho vigente; en febrero de 1900 tal decreto era declarado anticonstitucional. El asesinato del rey Umberto I por el anarquista Gaetano Bresci en julio de 1900 fue el último capítulo de este período de luchas internas, en el que la izquierda radical se ganó gracias a su enérgica y valiente defensa de los derechos constitucionales del ciudadano, la admiración de amplios sectores de la burguesía no comprometida directamente en la política.

Al caer Pelloux y ser sustituido en febrero de 1901 por el ministro moderado liberal Zanardelli comienza una nueva fase de la política interior italiana que se caracteriza por la supresión paulatina de los contrastes internos. El puesto clave en el gabinete Zanardelli, el ministerio del Interior, lo ocupó el hombre que había de determinar más que nadie el destino de Italia en la siguiente década, Giovanni Giolitti. Este político

es uno de los más grandes y discutidos hombres de la historia moderna italiana. De funcionario de la Administración, Giolitti había pasado a la política; su dedicación personal al Estado piamontés, que de modo casi hegeliano había elevado a valor guía de su quehacer político, dio un seguro punto de referencia a su sutilísima táctica parlamentaria. Ajeno en el fondo a las distintas ideologías políticas, el inventario de sus convicciones fundamentales no arroja precisamente un gran resultado, por lo que siempre se le ha considerado un oportunista, aunque genial. Giolitti era sobrio, pragmático y moderado en sus actuaciones; sus palabras siempre estaban calculadas tácticamente hasta su más mínimo detalle. El principio general que puede descubrirse detrás de sus manifestaciones, que siempre persiguen el detalle concreto, es el de atraer a la vida pública del país a las grandes masas del proletariado campesino e industrial en el marco de una monarquía social. La política de Giolitti fue siempre la de un pragmático que se dejaba guiar por el sentido de lo alcanzable, aprovechando en cada ocasión las diversas situaciones parlamentarias. No le gustaba luchar por grandes ideales políticos cuando la victoria estaba aún lejana; si en un momento no podía imponer sus objetivos, prefería pasar a un segundo plano, dejando a otros las riendas hasta que la situación hubiese madurado. En este sentido, no es uno de los más grandes de la política; pero era precisamente el hombre que Italia necesitaba entonces. Pues era capaz de formar mayorías sin detenerse ante límites de fracciones y de partidos, dentro del parlamento italiano, aún considerablemente oligárquico en su composición, y de llevar a cabo una política constructiva de compromiso entre conservadores y liberales; poco importaba que fuese primer ministro como de noviembre de 1903 a marzo de 1905, desde mayo de 1906 a diciembre de 1909 y de marzo de 1911 a marzo de 1914, o si se hallaba formalmente o de hecho fuera del gobierno.

Es difícil emitir un juicio justo sobre la política interior de Giolitti. Sus grandes logros hay que buscarlos en el campo de la economía y la administración. Tampoco Giolitti pudo dominar los profundos contrastes sociales y la agitación popular, que en septiembre de 1904 se puso de manifiesto en una huelga general extendida por toda Italia y que fue reprimida con la ayuda del ejército. La política de Giolitti era casi por necesidad una estrategia de constante equilibrio entre intereses opuestos en el marco de aquel sistema político. En 1903 resumió en una ocasión los principios de su política con la siguiente fórmula: «Libertad para todos dentro de los límites de las leyes existentes» [53]. Gracias a su intervención empezó a mejo-

rar la relación entre los católicos y el Estado nacional italiano; Pío X permite en su encíclica del 11 de junio de 1905 la participación en las elecciones a los católicos, pero no la creación de un partido político. Tampoco la extraordinaria habilidad de Giolitti pudo superar la imperfección fundamental del sistema parlamentario italiano, su insuficiente fuerza integradora, en un país en el que el analfabetismo estaba aún muy extendido y donde las masas campesinas del sur se hallaban sumidas en la más completa miseria, sometidas a condiciones de vida casi feudales.

III. EL IMPERIO ALEMAN DESPUES DE LA CAIDA DE BISMARCK

Con la caída del canciller Otto von Bismarck, en marzo de 1890, el imperio alemán inicia un nuevo período de su evolución interna, en el que salen a la superficie los profundos antagonismos de la propia nación y las tensiones en el seno del sistema constitucional. El «canciller de hierro» —como se empezaba a llamarle entonces— había dirigido el imperio con gran habilidad y en ocasiones con mucha energía. Siempre había sido sencillo para Bismarck tener en jaque o vencer a sus numerosos enemigos de los partidos y círculos gobernantes. Su imponente prestigio personal como fundador del imperio le confería una posición casi plebiscitaria que le aseguraba, más allá de los derechos extraordinarios que la constitución reunía en las manos del canciller y primer ministro prusiano, la adhesión absoluta de los funcionarios y la posibilidad de ahogar en su origen cualquier intento de oposición de los gobiernos federados. Su influencia en el imperio era enorme, aunque con los años se había ganado la enemistad de los trabajadores y de amplios sectores del catolicismo y del liberalismo de izquierdas. En marzo de 1890 todo se vino abajo. La caída del fundador del imperio fue interpretada por todo el mundo como la consecuencia de su antagonismo personal con Guillermo II, que había decidido tomar él mismo las riendas del gobierno. De hecho las diferencias personales desempeñaron un papel esencial. Desde un principio Bismarck se opuso al carácter impulsivo y deseoso de popularidad de Guillermo II, que a su vez se sentía cada vez más herido por la actitud rígida y autoritaria del canciller. En el fondo se trataba del enfrentamiento de dos personalidades que pugnaban por ocupar la dirección carismática del pueblo alemán. Por ello, la ruptura entre ambos hombres era un hecho inevitable desde un principio.

Sin embargo, Guillermo II no podía destituir al canciller sin

comprometer su propio prestigio, mientras éste tuviese una posición sólida. Las verdaderas causas de la caída de Bismarck hay que buscarlas en el fracaso de su política interior. De hecho, la crisis de la primavera de 1890, que precedió a la destitución de Bismarck, se había ido fraguando en las postrimerías de los años ochenta. La táctica astuta del canciller de anular a los partidos entre sí había corrompido a los nacional-liberales y creado un creciente malestar en todos los sectores políticos. El *Reichstag* ya no se mostraba tan dócil como antes a los deseos del gobierno. La fórmula acreditada de Bismarck de convertir los presupuestos del ejército en el objeto de una lucha electoral para enganchar de este modo el nacionalismo de la clase burguesa al carro del gobierno había deparado al canciller, en el año de crisis de la política exterior de 1887, una vez más, una mayoría de gobierno, el llamado «monopolio» de los partidos conservadores y nacional-liberales, mientras que los social-demócratas y los liberales sufrían graves pérdidas. Sin embargo, el apoyo de los partidos del «monopolio» no era ya tampoco incondicional. En enero de 1890 se opusieron a Bismarck, que deseaba convertir la ley contra los socialistas en una ley permanente que conservase el temido artículo de proscripción permitiendo imponer el destierro ilimitado a los políticos socialdemócratas no gratos. La ley contra los socialistas, en una versión más moderada, se podría haber salvado si Bismarck se hubiese declarado a tiempo dispuesto a hacer concesiones. Las intenciones del canciller iban en dirección opuesta; decidido a llevar las cosas al extremo antes de ceder, dio a entender que en caso de ser rechazado su proyecto emplearía la fuerza y limitaría los derechos del *Reichstag.* En amplios sectores, tanto dentro como fuera del gobierno, se esperaba entonces que la socialdemocracia emprendiese en seguida acciones revolucionarias, al quedar suprimidas las leyes contra los socialistas. Bismarck hubiese celebrado seguramente semejante evolución de los acontecimientos. El deseaba la agravación de la situación para hacer entrar en razón al obstinado *Reichstag* y para imponerle, a ser posible, una ley contra los socialistas aún más dura.

Guillermo II no estaba, en cambio, dispuesto a iniciar su reinado con un gran conflicto constitucional y social, cuyo final era incierto y que en todo caso no iba a redundar en beneficio de su prestigio personal. El emperador interviene y exige la supresión oficial del llamado artículo del destierro; además pide la intervención de la ley antisocialista con un programa serio y positivo de reformas sociales. Este debía comprender, sobre todo, amplias medidas en defensa del trabajador, algo que Bismarck había descuidado intencionadamente hasta entonces, ya que

consideraba perniciosa cualquier ingerencia del Estado en los asuntos de los trabajadores, que, según él, sólo provocaba el aumento de las reivindicaciones de éstos. En contra de su voluntad, el canciller se declaró dispuesto a iniciar un programa de seguridad social, anunciado más tarde en los decretos de política social del 4 de febrero de 1890, pero no cabe duda de que esto lo hizo únicamente para evitar una ruptura definitiva con Guillermo II. En la cuestión de suavizar la ley contra los socialistas se mostró, sin embargo, inflexible; en consecuencia, no fue aprobado el proyecto en el *Reichstag*. Bismarck no había esperado otra cosa, pero su intento de movilizar a la opinión pública contra la deslealtad de los partidos, que habían abierto las puertas a las tendencias subversivas de la socialdemocracia, fracasó por completo. Las elecciones para el *Reichstag* del 20 de febrero de 1890 constituyeron una catástrofe política para el gobierno. A pesar de que las leyes contra los socialistas estaban aún en vigor, la socialdemocracia pudo doblar su número de votos obteniendo 1,4 millones, es decir, el 19,7 % de los electores. Debido únicamente al carácter del sistema electoral, que favorecía a los sectores electorales campesinos —cuyo voto era en general conservador—, el número de escaños socialdemócratas quedó reducido a 35; en una repartición aritmética de los votos, la socialdemocracia se hubiese convertido en el partido más fuerte del *Reichstag*. También los liberales de izquierda aumentaron considerablemente su número de votos, mientras que los partidos del «monopolio» sufrían una devastadora derrota; un gobierno apoyado en el «monopolio» era ya imposible. En aquellas circunstancias el resultado electoral significaba una grave derrota personal para Bismarck y respaldaba a Guillermo II en su decisión de «cambiar los caballos». El hecho de que la política exterior de Bismark fuese sometida en los círculos militares y políticos próximos a la Corte imperial a una crítica cada vez más severa agravó aún más la situación.

El propio Bismarck no estaba dispuesto a marcharse aunque ahora se lo aconsejaba su propio hijo. Por el contrario, pensaba llegar hasta el final; expuso a Guillermo II un auténtico programa de lucha contra el parlamento y contra los partidos de izquierda. Había que presentar al nuevo *Reichstag* un proyecto de ley contra los socialistas mucho más duro y además una amplia ley complementaria para el ejército. Si el parlamento no se sometía a la voluntad del gobierno, se le enfrentarían todos los medios necesarios sin excluir la *ultima ratio* del golpe de Estado y la modificación del derecho electoral. En un momento en que su propia autoridad se hallaba seriamente comprometida, Bismarck trataba de volver a los métodos que le

habían llevado al poder en el conflicto constitucional prusiano. No cabe duda que Bismarck quería hacerse indispensable; al mismo tiempo, el canciller quería librar una última batalla para salvar su obra, aunque a costa de elementos fundamentales, ante el asalto de la democracia y del socialismo. Todo esto era demasiado para Guillermo II, que obligó el 16 de marzo a dimitir a Bismarck, después de unas últimas diferencias acerca de la política alemana respecto a Rusia. El argumento de que el Kaiser le había exigido tomar medidas militares contra Rusia constituyó un cómodo y valioso pretexto para justificar su dimisión y emprender más adelante su campaña de agitación.

Con gran amargura comprobó Bismarck que casi todos los ministros fantoches que había impuesto en el curso de los años permanecían imperturbables en sus puestos, dirigiendo sus ojos hacia el nuevo sol, Guillermo II. Tampoco en los partidos se alzaron apenas voces en favor del canciller. Todo el mundo parecía estar de acuerdo en que la era de Bismarck había concluido y que había que emprender nuevos caminos políticos. La famosa caricatura del desastre en la que el piloto había abandonado la nave imperial, que navegaba ahora sola hacia peligros desconocidos, no correspondía ni a la actitud del gobierno ni a la de los jefes de partido. Por el contrario, se experimentó en general un cierto alivio. Sólo algunos se dieron cuenta de la trascendencia del triunfo imperial sobre el viejo Bismarck. Durante los últimos años de su carrera política el canciller había aflojado las riendas de su gobierno en alguna ocasión, abandonando a sí mismos los diversos departamentos del Reich y de Prusia. Tras su dimisión surgen las tendencias centrífugas del sistema de gobierno pruso-alemán. El contraste entre la Prusia, dominada tradicionalmente por los conservadores, y el Reich se convertía ahora en un problema de primer orden. Bismarck había construido el complicado sistema dualista que debía garantizar la hegemonía de Prusia dentro del Reich para proporcionar un fuerte respaldo conservador al canciller en su lucha contra el *Reichstag* y para erigir, de una vez para siempre, una barrera infranqueable frente a los posibles deseos de democratización.

¿Qué sucedería, sin embargo, si Prusia emprendía caminos propios? En las circunstancias reinantes, desde 1890, este sistema se volvió contra los sucesores de Bismarck. El poder del *Reichstag* había aumentado considerablemente en los últimos años y esta evolución no podía detenerse ya aunque los políticos dirigentes especulasen con la posibilidad de realizar un golpe de Estado. Los cancilleres se vieron obligados a mantener un difícil equilibrio entre dos entidades parlamentarias de tan

opuesta composición política y a poner en juego su crédito. El monarca, que en teoría estaba obligado a mediar entre las tendencias opuestas dentro del mecanismo del gobierno, demostró no estar a la altura de este problema. Y lo que era más grave, estas divergencias dentro del propio gobierno permitieron que Guillermo II influyese en gran medida sobre las decisiones políticas, sin escoger el camino a través de sus consejeros responsables. Para el canciller fue cada vez más importante asegurarse la confianza del monarca y controlar hasta cierto punto sus impulsos juveniles. Eso constituía un problema casi insoluble, en vista de la arrogancia de Guillermo II después de su triunfo sobre Bismarck.

También en otro aspecto se manifestaron las consecuencias negativas de los veinte años que había durado el gobierno de Bismarck. El canciller no había pensado nunca en buscar a tiempo un sucesor idóneo. Personalidades como Theodor Barth y Max Weber le han reprochado, con bastante razón, que ahogase en su origen el desarrollo de dirigentes políticos. De hecho Guillermo II se vio obligado a nombrar como canciller a un verdadero desconocido, sin auténtica experiencia política, al general Leo von Caprivi. Su único mérito consistía en haber sabido orientarse rápidamente —después de una brillante carrera como oficial de infantería— en las cuestiones completamente nuevas de la marina imperial, tras de haberle sido confiada su dirección en 1888, y de haber hecho una buena figura en el *Reichstag*. Caprivi era un cabeza dura, cualidad que le atestiguó nada menos que el propio Bismarck. Poseía firmeza incluso ante el monarca, además no estaba políticamente comprometido ni pertenecía a la aristocracia prusiana. Su sentido pragmático estaba acompañado de una sinceridad fundamental hacia los argumentos y reivindicaciones de todos los grupos de la sociedad. Aunque Caprivi carecía tanto de la pasión del político nato como de toda ambición personal, demostró ser relativamente indicado para su misión de administrar el legado de Bismarck. No era capaz de hacer más, pero tampoco hubiera sido necesario.

Caprivi se dio cuenta desde el primer momento que la política interna llevada a cabo hasta entonces por Bismarck no podía continuar, que había aprovechado sistemáticamente las rivalidades de los partidos para anularlos mutuamente, que explotó sin consideraciones cualquier ventaja táctica del gobierno frente al *Reichstag* y que había guardado siempre una fría distancia frente a éste. El nuevo canciller trató de hacer desaparecer la desconfianza recíproca entre el gobierno y los partidos y de establecer un curso moderado y de concesiones re-

cíprocas entre los diversos grupos políticos, con el fin de conseguir el mayor equilibrio entre los fuertes antagonismos internos. Esta estrategia encontró al principio una acogida muy favorable en todos los sectores porque Caprivi parecía dispuesto a negociar con los partidos del *Reichstag* y sobre todo con el centro, que ahora poseía una posición clave en la política, y a complacer parcialmente sus objeciones y propuestas. De esta manera Caprivi consiguió que el *Reichstag* aprobase una serie de proyectos de ley y el presupuesto del ejército del año 1892. Sin embargo, a medida que su «política del nuevo curso» tendía a realizar medidas concretas, arreciaba la oposición de los conservadores y con ello el conflicto en el seno del propio gobierno. Prusia desempeñó un papel importante en esta evolución. Allí el gobierno presentó una serie de proyectos de reformas destinadas a eliminar en lo posible los extremos anacronismos existentes del sistema político y social con el acuerdo de los conservadores, para privar así a la mayoría del *Reichstag*, orientada a la izquierda, de sus argumentos más graves. La idea fundamental de Caprivi era suprimir paulatinamente las posiciones extremas y crear las condiciones para una «unificación de todas las fuerzas sobre las que se apoyaba el Estado», que también él consideraba absolutamente necesaria en vista del número creciente de votos socialdemócratas.

Caprivi, sin embargo, no tuvo en cuenta a Prusia. En Johannes von Miquel, nombrado en verano de 1890 ministro de finanzas por deseo expreso de Guillermo II, encontró un importante rival. La gran obra de Miquel fue la reforma radical del régimen tributario de Prusia, sobre todo la introducción de un impuesto sobre la renta escalonado progresivamente —aunque dentro de unos límites muy restringidos—, basado en la declaración tributaria. El nuevo sistema tributario tuvo un profundo efecto sobre el derecho electoral de las tres clases vigente en Prusia; de hecho reflejaba con mayor precisión la fuerte diferencia de rentas que había surgido a medida que avanzaba la industrialización y acusaba, además, los efectos plutocráticos de este sistema electoral que dividía a los electores según sus contribuciones en tres clases, que eran representadas por el mismo número de diputados. El peligro de que la aristocracia latifundista perdiese influencia política en favor de la burguesía capitalista fue neutralizado por Miquel por medio de generosas concesiones a los terratenientes. También hizo lo posible por anular los esfuerzos del ministro Herfurth de suprimir, a través de un moderno ordenamiento de las comunidades rurales, la anacrónica coexistencia de municipios rurales y distritos rurales autónomos en la Prusia del Elba oriental. Al

mismo tiempo, Miquel supo dar largas a una reforma del derecho electoral prusiano. Los bastiones de los conservadores de Prusia siguieron en pie, igual que el extremo desfase de la representación política del país, producto de ese anticuado derecho electoral.

Como consecuencia de esta evolución, aumentó el contraste entre Prusia y el imperio, de tal manera que terminó por provocar la caída del propio Caprivi. El canciller trató de eludir de momento el dilema, dimitiendo en 1892 de su puesto de primer ministro prusiano, dejando el territorio prusiano a Miquel y al ministro del interior prusiano y amigo personal de Guillermo II Botho von Eulenburg, que se convertía ahora en primer ministro de Prusia. No tardaría en demostrarse que esto había sido un grave error. Eulenburg y Miquel iniciaron en Prusia una política conservadora que dejaba socavada la posición de Caprivi en el *Reichstag*. Miquel inaugura a partir de 1894 una política de la «concentración de todas las clases productivas», es decir, una alianza de marcado signo reaccionario entre la gran industria y la aristocracia feudal dirigida contra la izquierda, sobre todo contra la socialdemocracia. Esta política significaba la unión de todas las fuerzas conservadoras opuestas a la dirección que había tomado la política del canciller dentro del Reich.

Esto era tanto más grave por el hecho de que Caprivi ya era combatido duramente por los conservadores por su política liberal en los tratados comerciales, que consistía sobre todo en la reducción de los impuestos sobre la importación de cereales. La firma de tratados comerciales con numerosos Estados europeos en los años 1892 y 1894 constituía un paso valiente en una dirección acertada. Caprivi no ignoraba que Alemania sólo podía esperar un futuro brillante si emprendía con decisión el camino que conducía al Estado industrial; éste pasaba, sin embargo, forzosamente por la integración de la economía alemana en el sistema de la economía mundial que estaba formándose. Sin embargo, Caprivi se ganó con esta política la enemistad acerba de los conservadores prusianos. Estos crearon con el *Bund der Landwirte* (Liga de los agricultores) una poderosa organización de intereses que combatía la política de los tratados comerciales con un formidable aparato de agitación y que auguraba el inminente colapso de la agricultura alemana.

En tales circunstancias, el primer ministro prusiano y por fin también el propio Guillermo II empezaron a negar cada vez más su apoyo a la política de mediación en todos los sentidos seguida por Caprivi, aunque en 1893 el canciller había obtenido una considerable victoria electoral sobre la hostil iz-

quierda. Desde hacía algún tiempo se fraguaban en el gobierno prusiano y en los ambientes monárquicos planes de golpes de Estado que perseguían una modificación del derecho electoral del *Reichstag* y su asimilación al derecho electoral prusiano de las tres clases. Además de esto, Guillermo II y Eulenburg, apoyados sobre todo por el general Alfred, conde de Waldersee, especulaban con la idea de una nueva ley contra los socialistas. El destino político de Caprivi quedó sellado cuando se negó a seguir una línea tan dura, opuesta a sus convicciones, que propugnaban una prudente política de equilibrio para el *Reichstag*, apoyada en los partidos del centro. Su dimisión a finales de octubre de 1894 abrió las puertas a una década de gobierno conservador en Prusia y en el Reich, que puede considerarse uno de los períodos políticos más estériles de la historia del Reich alemán.

Como sucesor de Caprivi fue nombrado el príncipe Hohenlohe-Schillingsfürst, que entonces contaba ya setenta y cinco años y que era un aristócrata alemán de cuño liberal-conservador, al que se había reservado el papel de cómodo mascarón de proa; detrás de su persona se llevó a cabo una política interior marcadamente reaccionaria, cuyos artífices fueron en el Reich el conde Posadowsky, y Miquel y von Köller en Prusia. No obstante, Hohenlohe se opuso a la medida más extrema: la repetida disolución del *Reichstag* como fase previa a una completa reforma del derecho electoral por el parlamento. Y así terminó esta política con toda una serie de fracasos espectaculares. El *Reichstag* rechazó en diciembre de 1894, con una mayoría aplastante, el «proyecto de ley sobre la subversión», una reedición enmascarada, de las leyes contra los socialistas de Bismarck y la cámara de diputados prusiana negó su aprobación a una ley de asociación pensada para sustituir la «ley de subversión» y que concedía amplios poderes a la policía frente a las asociaciones políticas. El último fruto de esta política tan estéril fue la ley de protección de los anti-huelguistas, el proyecto de ley de presidio, que el *Reichstag* rechazó también en 1899.

El gobierno conservador de la reacción del Reich y de Prusia, pero también de Sajonia, donde en 1896 se había introducido también el derecho electoral de las tres clases frente al movimiento socialista, sufrió una cierta debilitación con la aparición de dos nuevas figuras en la arena política en 1897: el contralmirante Alfred von Tirpitz, como jefe del nuevo ministerio de la Marina del Reich creado en 1881, y poco más tarde Bernhard von Bülow, que fue nombrado secretario del Estado del exterior y que gracias a su talento para halagar al monarca y para

ganarse su favor pudo reunir en pocos meses todos los hilos en su mano. En vano protestó Hohenlohe que no tenía ya ganas de seguir siendo utilizado como reclamo y de ser pasado por alto en los asuntos importantes[54].

Bülow y Tirpitz inauguraron la nueva era de la política mundial alemana apelando con éxito al nacionalismo de la clase media, mientras que los conservadores perdían terreno. Tirpitz consiguió en 1898 que fuese aceptada por el *Reichstag* la ley naval, que ponía las bases para la construcción de la futura escuadra alemana. Este proyecto sólo era el principio; ya el siguiente año le seguía una nueva ley, que descubría claramente el verdadero objetivo de la política naval de Tirpitz: la creación de una flota tan poderosa que incluso Inglaterra tendría que contar con ella política y militarmente.

El entusiasmo por la flota, que, dirigido y alentado por una propaganda hábil del Departamento de Información del Ministerio de Marina, dominó a Alemania entera y halló en Guillermo II a su exponente más distinguido, condujo indirectamente al abandono de la política conservadora en Prusia. Mientras que la burguesía nacionalista, apoyada por el comercio y la industria, defendía apasionadamente la idea de la flota, los conservadores contemplaban el proyecto naval con recelo y trataban de conseguir nuevas concesiones para la agricultura. Esta política de intereses de los conservadores irritó al máximo a las clases burguesas. Cuando aquéllos rechazaron por dos veces seguidas, en 1898 y 1901, el proyecto para la construcción de un canal continental, para mantener alejada la competencia de los productores de cereales de ultramar, del mercado continental, se produjo la ruptura espectacular entre el Kaiser, que se había interesado personalmente por el proyecto, y el partido conservador. También Miquel fue una víctima de esta marea conservadora, ya que no había sabido superar con su política de concentración los extremos contrastes de intereses entre la industria y la agricultura.

La dimisión de Miquel fue un triunfo personal de su gran antagonista Bernhard von Bülow, que desde principios de 1900 había asumido, también formalmente, la sucesión del anciano canciller Hohenlohe. La desaparición de Miquel del escenario político puso de momento fin a la posición especial de Prusia dentro del sistema político del Reich y permitió a Bülow proseguir tranquilamente sus hábiles maniobras por encima de los partidos, apoyado por una eficaz campaña de prensa. Con la renovación en 1902 de los tratados comerciales, que estaba unida a un aumento sustancial de los impuestos a los cereales, así como con la continuación de la política de colonización en

Prusia, dirigida en primera línea contra el avance de Polonia en el territorio prusiano del margen oriental del Elba, y que en realidad sólo hizo subir los precios de las mercancías, se ganó Bülow las simpatías de los conservadores, sin llegar a contrariar por completo a la industria. Los constantes malabarismos de Bülow requerían, sin embargo, concesiones incesantes al centro, cuyo acuerdo con esta política oportunista, que favorecía los intereses de las clases poseedoras, era imprescindible en aquellas circunstancias.

Este período de difícil equilibrio terminó bruscamente cuando en 1906 se produjo un grave conflicto entre el ministerio colonial y el centro por la cuestión de la administración de las colonias alemanas. Ante la actitud rígida del gobierno, el centro desaprobó en diciembre de 1906 directamente los créditos suplementarios que se habían hecho necesarios a raíz de un levantamiento de hotentotes en el Africa alemana del sudoeste. Bülow vio llegada la ocasión de lanzar una lucha electoral bajo el signo nacionalista contra el centro y la socialdemocracia, aprovechando la mentalidad de *Kulturkampf*, aún fuerte en la burguesía liberal. Las «elecciones de los hotentotes» de enero de 1907 significaron también un fortalecimiento moderado de los partidos de derecha y de los liberales de todas las tendencias, mientras que el número de escaños de la socialdemocracia se veía reducido de 81 a 43 y su porcentaje de votos de 31,7 % a 29 %. El centro, en cambio, supo mantener sus posiciones a pesar de todos los acosos.

No obstante, Bülow se decidió a gobernar fiel al lema de su campaña electoral contra el centro, aunque esto sólo era posible incluyendo al liberalismo de izquierda. Se produjo la formación de un bloque de los partidos liberales y conservadores, el llamado «bloque Bülow». Por primera vez en la historia del Reich alemán, un canciller se declaraba unido a una determinada coalición de partidos, un paso que se interpretaba entonces como un primer acercamiento al sistema parlamentario. El primer periódico del centro, *Germania,* calificó el nuevo curso político que tomaba el Reich de: «Parlamentarismo moderado por el absolutismo». Parecía que el Reich iniciaba una evolución progresista tras un período de política interior extremadamente reaccionaria. El curso que tomaron los acontecimientos demostrarían bien pronto que se trataba en realidad de una ilusión. Las profundas diferencias políticas y sociales del Reich habían sido superadas sólo de momento y no para siempre.

Los contrastes políticos y sociales eran neutralizados en la Alemania guillermina, en parte, por la fuerte acción unificadora del sentimiento nacional. Precisamente este factor integrador era el que faltaba en la monarquía austro-húngara. En ella se daba más bien el caso opuesto. Los movimientos nacionales de los diversos pueblos de la monarquía, que se desarrollaron a partir de la mitad del siglo XIX, se fueron convirtiendo cada vez más en un problema existencial, vital, de primer orden. Frente a este nuevo nacionalismo, el tradicional patriotismo austríaco era cada vez más débil, sobre todo teniendo en cuenta que éste estaba sostenido principalmente por la alta burguesía, cuya supremacía dentro del Estado y de la sociedad había dejado de ser indiscutible al avanzar el pensamiento democrático. El despertar de las nacionalidades y la propagación de las ideas democráticas iban en constante aumento. Con la aparición sobre el escenario político de sectores más amplios de la población, fue adquiriendo mayor fuerza la agitación de los nacionalistas y perdiendo cada vez más terreno aquellos grupos que tradicionalmente constituían el más precioso apoyo del Kaiser, es decir, la alta aristocracia de orientación internacionalista, los oficiales y la burocracia centralista. No cabe duda que el carácter complicado de las constituciones de los distintos países de la monarquía, contribuyó a acentuar los contrastes entre las diferentes nacionalidades y los grupos sociales y a debilitar la autoridad del gobierno.

En teoría la constitución de 1867 prometía a todos los pueblos de la monarquía la igualdad de derechos; la realidad social y política estaba aún bien lejos de ello. Para empezar, los húngaros disfrutaban, desde 1867, una posición especial dentro del imperio, que les permitía oprimir en la mitad transleithania de Reich (parte que se encontraba al otro lado del río Leithan y que comprendía, más allá de Hungría, fracciones de los actuales Estados yugoslavo, checoslovaco y rumano) a todas las nacionalidades no magiares. Unicamente las cuestiones de política exterior, las finanzas y los asuntos del ejército, y éstos solamente con algunas limitaciones, dependían de una dirección común a ambas mitades del imperio. Cada diez años tenía que renovarse el llamado *Ausgleich* (compromiso) —conjunto de disposiciones de carácter económico, financiero y político, que regulaban las relaciones de ambas mitades del Reich— que tenía que ser aprobado por la cámara húngara, dominada hasta 1918 por la alta aristocracia magiar, gracias a un derecho electoral plutocrático, y por el Consejo del Reich, el parlamento

común a los países cisleithanios de la monarquía. Esto constituía una fuente inagotable de crisis y conflictos internos, que hacían casi imposible seguir una política interior continua, sobre todo en la mitad cisleithania del imperio. Debido al afán de independencia de los húngaros no había un parlamento central para toda la monarquía. En cambio, unas delegaciones del Consejo imperial y de la asamblea del reino húngara, formadas por 40 miembros de la Cámara Baja y 20 miembros de la Cámara Alta, cumplían esta función, no tratando entre sí de otra manera que por escrito. Una anomalía de primer orden en derecho político, que fue en la práctica causa de las mayores dificultades. Pero también el Consejo del Reich, al que los 16 países de la mitad cisleithania del imperio enviaban diputados, era una entidad de composición muy complicada. Los diputados del Consejo del Reich eran elegidos en cuatro curias distintas: el latifundio, al que correspondían 85 escaños; las ciudades con 110 escaños, las cámaras de comercio e industria, a las que habían concedido 21 escaños y, finalmente, las comunidades rurales con 129 escaños. Se trataba, por lo tanto, de un sistema representativo puramente estamental, que a pesar de todo no pudo evitar que las pugnas de las nacionalidades penetrasen en el *Reichstag*. Al mismo tiempo, existían para los diversos países de la corona, parlamentos regionales de parecida composición conservadora. En este caduco marco político-constitucional adquirió el conflicto entre los diversos grupos nacionales, formas cada vez más violentas.

Una mirada a la estadística de nacionalidades puede ilustrar todo el peso de los problemas ante los que se halló Austria-Hungría en la creciente marea del nacionalismo. Los deseos de independencia de servios e italianos en la monarquía danubiana recibían un constante impulso con la existencia de Estados nacionales más allá de las fronteras. Sobre todo el irredentismo servio constituía para la monarquía un serio problema que se convirtió en un peligro de primer orden para el imperio de los Habsburgo cuando Austria-Hungría se anexionó formalmente en 1908 a Bosnia y Herzegovina, territorios con población puramente servio-croata. Por el contrario, la situación de los polacos en Galitzia fue más favorable; éstos gozaban de bastante independencia en el seno de la monarquía austro-húngara, comparado con sus compatriotas de Prusia y Rusia, y por esta razón tenían una actitud relativamente positiva con respecto a los Habsburgo. Pero aparte de las especiales dificultades que nacieron del hecho de que sólo partes de algunas naciones perteneciesen a la unión de Estados austro-húngaros, fue la amalgama de los diversos grupos nacionales la que impidió casi por

Fig. 7. La nacionalidad austro-húngara alrededor de 1900.

Ciudades con fuerte porcentaje de Hebreos

Alemanes

Magiares

Rumanos

Italianos

Eslavos

Ucranianos

Polacos

Checos

Eslovacos

Eslovenos

Servios Croatas Bosnios

completo cualquier solución satisfactoria del problema de las nacionalidades. Sobre todo en Bohemia y Moravia, pero también en Silesia y Galitzia y en todo el sudeste de la monarquía vivían los más heterogéneos grupos nacionales al mismo tiempo, lo que hacía casi imposible, salvo algunas excepciones, la creación de unidades de administración regionales uninacionales por pequeñas que fuesen. Los territorios en los que predominaba una nacionalidad eran, naturalmente, numerosos, pero siempre había enclaves de nacionalidad diversa de mayor o menor coherencia, que en muchos casos debían su existencia a hechos históricos y a evoluciones del pasado como, por ejemplo, el grupo nacional alemán de Transilvania o del Banato, o el grupo de los *szekler* magiares de la frontera militar de Transilvania. Con frecuencia existía además una coincidencia entre nacionalidad y estratificación social; la nacionalidad más avanzada culturalmente era, en general, también la dirigente desde el punto de vista económico y se concentraba generalmente en las ciudades en vías de desarrollo, mientras que la otra predominaba en el campo. En Bohemia y en Moravia, aunque aquí no en la misma medida, la minoría alemana y los judíos poseían la supremacía económica y cultural. En Galitzia eran los polacos los que tenían entre sus manos las riendas del poder económico, mientras que los rutenos quedaban marginados en la llanura. Las diferencias religiosas contribuían en muchas ocasiones a agravar la situación. En estas circunstancias no es de extrañar que las divergencias nacionales se agudizasen cuando el capitalismo industrial se dispuso a desmontar la organización relativamente estable de aquella sociedad preindustrial.

Las dificultades aumentaron al reivindicar los distintos pueblos de la monarquía dos formas completamente diferentes de derechos nacionales, fundamentalmente incompatibles. Por un lado la reivindicación de autonomía nacional para cualquier grupo étnica y culturalmente definido, planteada sobre todo por aquellos pueblos de la monarquía que, careciendo hasta entonces de una propia capa dirigente intelectual, acababan de irrumpir en el escenario histórico, como, por ejemplo, los eslovenos y los eslovacos. Por otro lado, se trataba de exigir la restitución de aquellos derechos históricos que una nación hubiese adquirido en el pasado, en teoría o de hecho. Esta actitud era la que adoptaban naturalmente las naciones «históricas» casi siempre políticamente privilegiadas. En cuanto a los húngaros, ya habían impuesto en 1867 este postulado en todos los puntos fundamentales y se habían asegurado un arma eficaz al convenir que cada diez años había que concertar un nuevo acuerdo, con lo que podían dirigir la evolución de los acontecimientos según

su deseo. También los checos trataron de alcanzar una posición jurídica semejante. La restauración de la antigua corona de Wenceslao, es decir, del reino de Bohemia bajo la exclusiva dirección checa, el llamado «derecho de Estado bohemio», fue el principal postulado del nacionalismo checo durante la monarquía danubiana. Con argumentos semejantes, los polacos defendieron su posición especial en la parte cisleithania del reino, y los croatas, su supremacía en la parte trasleithania. También el grupo étnico alemán luchaba en cierto modo en la misma línea, cuando destacaba el carácter alemán de la monarquía de Habsburgo y se consideraba a sí mismo el único Estado nacional legítimo en Austria-Hungría. De hecho, el grupo nacional alemán seguía poseyendo una considerable supremacía dentro de la administración estatal austro-húngara. Aunque los alemanes sólo representaban el 23,9 % de la población total de Austria-Hungría, ocupaban todavía en 1914, el 56 % de todos los puestos de la administración, y en la mitad cisleithania del imperio incluso el 81 %. Sólo poco a poco fueron manifestándose tendencias étnico-radicales, dirigidas contra el carácter supranacional del Estado austro-húngaro y que buscaban en el norte el apoyo del Reich alemán.

Sobre todo en el caso de Hungría, pero en realidad también en Bohemia y Galitzia, el derecho de Estado histórico trajo consigo una disminución de derechos y la sumisión de las diversas minorías nacionales. La implacable política de magiarización practicada en la mitad cisleithania del Reich y cuyos éxitos se manifiestan claramente a través de las estadísticas, constituye un ejemplo significativo de ello. Esta política fue llevada por una conciencia de superioridad nacional, que negaba a las nacionalidades no históricas la capacidad de ser o de llegar a ser una propia nación civil. Sobre todo los eslovacos habrían de padecer las consecuencias. Pero tampoco los polacos dudaron en hacer valer al máximo su relativa superioridad cultural y económica frente a los rutenos. En cambio, había pasado ya —por lo menos en el espacio bohemio-moravo— la época en que la nacionalidad alemana podía hacer ganancias político-demográficas a costa de las nacionalidades eslavas. Ante el ímpetu del nacionalismo eslavo se vio reducida a una actitud defensiva. Presa del nerviosismo, el grupo étnico alemán empezó a defender encarnizadamente sus privilegios tradicionales y sus bastiones en el territorio nacional, y esto con mayor ahínco, cuando se empezó a vislumbrar que el poder central no estaba ya dispuesto, como en otros tiempos, a ponerse incondicionalmente de su lado.

Mientras el poder político se encontraba en los diversos paí-

ses de la Corona aún en gran medida en poder de la aristocracia feudal, como en Hungría, Croacia, Galitzia y, finalmente también en Moravia —situación que se mantuvo en general hasta los años noventa—, las fuerzas centrífugas, nacidas de los contrastes nacionalistas, se mantuvieron dentro de unos límites soportables. Una administración centralista enérgica era capaz de neutralizarlas, llevando a cabo una dirección hábil, especialmente oponiendo cuidadosamente a las nacionalidades entre sí. Con estos métodos pudo mantenerse en el poder el conde Eduardo Taaffe durante casi década y media, de 1879 a 1893, un miembro de la aristocracia austríaca, que como amigo de la juventud del emperador Francisco José se sentía más como lugarteniente suyo que como primer ministro constitucional. Haciendo uso de los métodos policíacos y reprimiendo temporalmente la prensa pudo retrasar durante largo tiempo el desarrollo del liberalismo burgués, sobre todo en los países alemanes de la corona. Siguiendo el ejemplo de Bismarck, Taaffe dirigió en 1886 duras leyes de excepción contra el movimiento social-demócrata, lo que además de no poder evitar su progreso aumentó aún más el descontento de la clase trabajadora contra el orden existente. El gobierno autoritario y burocrático de Taaffe sólo pudo sostenerse durante tantos años porque había podido apoyar su política en los elementos conservadores de las nacionalidades eslavas, creando así un «cerco de hierro» alrededor de los países alemanes de inspiración liberal de la monarquía. Esto, sin embargo, no pudo llevarlo a cabo sin hacer concesiones a las nacionalidades eslavas, concesiones que socavaban la tradicional supremacía del elemento alemán en la parte cisleithania del reino.

Una prueba evidente del crecimiento de las corrientes democráticas, sobre todo en los países alemanes y checos de la monarquía, fue que esta estrategia política, que el propio Taaffe consideraba una «chapuza» más que una política constructiva y consecuente a largo plazo, no pudiera continuarse por más tiempo a partir del principio de los años noventa. Esto lo demuestra la suerte que corrió el acuerdo bohemio-moravo de 1890, ideado por Taaffe para resolver uno de los problemas fundamentales de Austria-Hungría, el grave contraste nacional existente entre alemanes y checos en este territorio. Según el método que ya otras veces se había revelado eficaz, Taaffe había elaborado el compromiso —que en cierta medida prestaba oídos a las exigencias de los checos, los cuales reivindicaban la igualdad de derechos de las lenguas checa y alemana— únicamente con los representantes del movimiento tradicional checo, de carácter conservador, dejando a un lado el recién fundado

movimiento democrático checo dirigido por Kramár, que era mucho más radical en las cuestiones nacionales. Este se volvió entonces contra el acuerdo y obtuvo un éxito indiscutible. Ya en las elecciones del año 1891 el movimiento de los jóvenes checos pudo conquistar tres cuartas partes de todos los escaños checos en el congreso bohemio. Con la aparición de estos movimientos radicales nacionalistas y democráticos se perdieron las condiciones para la alianza entre Taaffe y las nacionalidades eslavas; el gobierno del «cerco de hierro» se acercaba a su fin. Dos años más tarde caía Taaffe al intentar adelantarse a las fuerzas democráticas con una modesta reforma del anticuado derecho electoral de la curia para el consejo del Reich, ya que no pudo satisfacer ni a los adversarios ni a los defensores de una reforma. El sucesor de Taaffe, príncipe Windischgrätz, elaboró finalmente una reforma del derecho electoral, que dejaba todo en el aire. La tasa de impuesto para la curia de las ciudades y los municipios rurales fue reducida ligeramente y luego se añadió una quinta curia con un total de 72 diputados, es decir, ni siquiera la quinta parte de la totalidad de los miembros del consejo del Reich, que debían ser votados según los principios del sufragio universal e igual. El carácter absurdo de este sistema electoral representativo por curias, superado en el fondo por las profundas transformaciones sociales, que concedía en aquellas circunstancias posibilidades muy favorables a la pequeña burguesía nacionalista y que, por lo tanto, ya no respondía en realidad a los intereses objetivos del Estado habsbúrgico plurinacional, quedó al descubierto con esta reforma parcial.

La evolución de la política interna en la mitad cisleithania de la monarquía austro-húngara estaba dominada por las diferencias nacionales entre los partidos alemanes y checos; estas diferencias hacía tiempo que no se dirimían únicamente en los parlamentos, sino también y cada vez más en la calle. Ambos partidos defendían posturas irreconciliables. Mientras que los alemanes insistían no sólo en el mantenimiento de la tradicional supremacía de su idioma en el seno de la administración y en el Estado, sino también en la división en departamentos nacionales de Bohemia y Moravia —lo que les hubiera proporcionado, por lo menos en algunas regiones, la mayoría—, los checos reivindicaban el principio del «derecho al Estado checo»; aparte de esto podían demostrar fácilmente que en la práctica eran perjudicados en la administración. Como en 1897 había que renovar el acuerdo con Hungría, para el que era constitucionalmente imprescindible la aprobación del consejo del Reich y no había probabilidades de conseguir una mayoría sin

los votos de los checos, decidió el emperador Francisco José en 1895 solucionar la cuestión germano-checa y nombró con este fin como primer ministro al aristócrata polaco y experto de la administración conde Badeni. Este trató de llevar a cabo un arreglo de la cuestión lingüística favorable a los checos en Bohemia y Moravia. Las disposiciones de Badeni de la primavera de 1897, que preveían en todo el espacio bohemio y moravio sin excepción el bilingüismo para todos los funcionarios, demostraron ser la expresión de una política más miope y diletante que la de Taaffe. Con ello provocó una verdadera explosión de odio entre las nacionalidades. Por primera vez en la historia de Austria-Hungría se rompió con la tradición de reservar la lengua alemana como idioma oficial en la parte cisleithania del imperio. En aquellas circunstancias la puesta en marcha de las disposiciones hubiese equivalido a una amplia chequización de los funcionarios de Bohemia y Moravia, ya que los alemanes, como miembros, según convicción general, de una cultura más alta, se negaban a aprender el checo. De esta manera parecían esfumarse para siempre las esperanzas alemanas de conseguir una división del espacio bohemio en distritos nacionales que compensase el *status* minoritario del grupo nacional alemán en Bohemia. Por ello, el grupo nacional alemán vio en las leyes lingüísticas un auténtico desafío y una seria amenaza para su *status* político, aunque dadas las necesidades del gobierno había muchos factores que hablaban en su favor. En todas las áreas habitadas por alemanes se desató un impresionante movimiento popular con grandes manifestaciones y contramanifestaciones que las autoridades consiguieron dominar a duras penas. En Graz tuvieron lugar manifestaciones de estudiantes de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a emplear el ejército, resultando muertas dos personas en los choques con las tropas. Los checos respondieron a estas manifestaciones con otras acciones, que alcanzaron su máximo apogeo en noviembre de 1897 en Praga, donde se produjeron sucesos violentos de extrema gravedad. En el consejo del Reich los partidos alemanes, en minoría frente a los grupos eslavos, se dedicaron a una política de obstrucción sistemática que hacía imposible cualquier trabajo parlamentario. El partido social-demócrata, tratando de seguir con grandes esfuerzos un curso supranacional, permaneció de momento al margen. Cuando el gobierno de Badeni se decidió a romper el noviembre de 1897 la obstrucción parlamentaria con métodos autoritarios, sobre todo con la «lex Falkenstein» que hacía posible la exclusión temporal de los diputados de los partidos de la oposición, los socialdemócratas

se unieron a los partidos alemanes y empleando métodos violentos consiguieron la caída del gobierno Badeni.

Austria-Hungría atravesaba una grave crisis constitucional. Aunque el efímero gobierno de Gautsch y el gobierno de Thun, que le siguió en marzo de 1898, trataron de aplacar la oposición atenuando las disposiciones lingüísticas, los partidos alemanes prosiguieron durante todo el año su lucha contra ellas con la misma energía. Apoyados por los universitarios organizaron asambleas populares en todo el país, que se oponían apasionadamente a las limitaciones de las áreas de influencia de la lengua alemana; los estudiantes alemanes de la Universidad de Praga no dejaron pasar la ocasión de provocar a los checos llevando ostentosamente las banderas de sus asociaciones. Los alemanes continuaron sistemáticamente su obstrucción sobre todo en el Consejo del Reich; el 26 de febrero de 1898 los diputados alemanes abandonaban a su vez escandalosamente el Congreso bohemio. Los checos, como era de esperar, también pasaron a la acción y respondieron con las mismas armas. Al final del año 1898 se volvieron a producir de nuevo grandes manifestaciones contra el grupo nacional alemán, que degeneraron en graves disturbios haciendo necesaria la implantación del «estado de excepción». Por lo pronto, el orden constitucional se había derrumbado en la parte cisleithania del imperio. En ambos lados se formaron partidos nacionalistas radicales, cuyos objetivos no podían realizarse sin desmembrar la monarquía danubiana. Los checos fundaron un partido nacional-socialista que propugnaba la creación de un Estado checo independiente. Y el movimiento nacional alemán, dirigido por el antisemita Schönerer, era cada vez más partidario de un acercamiento o incluso de la integración del grupo nacional alemán al Reich alemán.

En vista de la incapacidad del Consejo del Reich, no pudo llevarse a cabo tampoco el acuerdo con Hungría, necesario desde el punto de vista constitucional. La crisis austro-húngara se había declarado abiertamente. «La vieja Austria —escribía entonces Viktor Adler, jefe de los socialdemócratas austríacos— está hecha pedazos, sus fragmentos ya no se pueden soldar; hay que encontrar nuevas formas de vida para los pueblos que habitan este país»[55]. El gobierno de Thun se negó a capitular sin más ante las exigencias de los partidos alemanes y a suprimir las disposiciones referentes al bilingüismo, temiendo además la violenta reacción de los checos, por lo que se acogió finalmente al artículo 14 de la Constitución austríaca de 1867, que disciplinaba el estado de emergencia. Al principio contaban los círculos de la oposición alemana con que un gobierno tan autoritario no iba a ser de larga duración; en realidad, Austria-

Hungría no volvió a ser gobernada de otra manera, salvo algunas excepciones contadas, hasta la Primera Guerra Mundial, ya que las diferencias entre las nacionalidades demostraban ser insalvables. El régimen burocrático-autoritario de los años siguientes desligó a todos los partidos de su responsabilidad con respecto al destino del Estado imperial y a los distintos países, con lo que fomentó indirectamente su mayor radicalización. En los países alemanes esta actitud favoreció sobre todo al partido nacionalista alemán, que creó un movimiento anticlerical, ya que el clero católico se había mostrado en las controversias acerca de las disposiciones de Badeni en su mayor parte pro-eslavo. A la larga, no le bastaba al gobierno de Thun el artículo 14 sobre la ley de emergencia para enfrentarse a la compacta oposición de los partidos alemanes, que en la primavera de 1899 habían elaborado un programa nacional que entre otras cosas exigía la conservación del alemán como idioma oficial de la burocracia, exceptuando los territorios polacos e italianos de la monarquía. De esta manera se volvía al final de 1899 a la antigua situación jurídica, lo que provocó que los checos recurriesen al arma de la obstrucción. La poderosa socialdemocracia austríaca, que hasta entonces había podido conservar con cierto esfuerzo su carácter internacional, se vio envuelta también en la vorágine de las rivalidades nacionales, aunque al principio trató de destacar que estas luchas eran un producto del orden social burgués y nada tenían que ver con la socialdemocracia internacional. En la asamblea general del partido, celebrada en Brünn en 1899, los socialdemócratas austríacos elaboraron un programa de nacionalidades en el que se proponía la transformación de Austria-Hungría «en una confederación democrática de Estados nacionales, sobre la base de entidades administrativas autónomas con circunscripción nacional, cuya legislación y administración dependiese de cámaras nacionales elegidas de acuerdo con el sufragio universal igual y directo» [56].

Karl Renner no había podido imponerse con sus planes mucho más ambiciosos de una reorganización de Austria-Hungría sobre la base del principio de personalidad. Aunque el programa de Brünn pasaba por alto o evitaba hábilmente algunas de las cuestiones discutidas en la política cotidiana de aquel momento —colegios, regulación de la lengua oficial— puede considerarse como el más constructivo para resolver el problema del Estado austríaco. Además, el programa de Brünn permitió a la socialdemocracia austríaca seguir luchando por la conservación del Estado austro-húngaro y ejercer, por así decir, el papel de partido del Estado. Sin embargo, desde principios de siglo fueron surgiendo cada vez mayores diferencias entre la

dirección del partido de Viena y el poder ejecutivo de Praga sobre todo acerca de la cuestión de los métodos de lucha a seguir para implantar el sufragio universal, igual y directo. Los socialdemócratas checos, que se hallaban bajo la presión del nuevo partido nacional-socialista checo, no querían seguir detrás de los partidos burgueses checos en las cuestiones nacionales y así se fueron distanciando cada vez más los partidos checo y alemán, aunque de momento pudo evitarse la ruptura formal.

Bajo el gobierno de Ernst von Korber, de 1899 a 1904, pudo superarse una vez más la crónica crisis institucional, en la que se hallaba sumida Austria-Hungría desde las luchas de Badeni, y conseguirse una cierta estabilización. Korber, que emprendió su misión como funcionario administrativo, logró tomar, valiéndose ampliamente del art. 14, una serie de medidas legislativas en materia económica y político-social, como la introducción de un seguro de vejez e invalidez, y la limitación de la jornada laboral para los mineros a nueve horas. En 1902 consiguió, incluso, dirigiendo hábilmente la opinión pública, realizar el presupuesto y las negociaciones con Hungría siguiendo la vía normal y parlamentaria. Una buena administración no podía, sin embargo, sustituir una política constructiva, que no estuviese determinada únicamente por las necesidades del momento. Ni en el terreno de las cuestiones de las nacionalidades, ni frente a las corrientes democráticas hizo Korber progresos. Los problemas sólo estaban aplazados, no habían sido resueltos y en el horizonte ya aparecían nuevas nubes de tormenta. [Ver anexo 3, p. 342.]

V. LA TRANSICION DE RUSIA AL SEUDO-CONSTITUCIONALISMO

No sólo a los ojos de los partidos socialistas, sino también a los del liberalismo europeo, el zarismo aparecía como el baluarte de todas las fuerzas reaccionarias de Europa y hay que reconocer que Alejandro III (1881-1894) y sobre todo Nicolás II (1894-1917), hicieron todo lo posible por justificar esta fama. Especialmente Nicolás II, influido por ideas religiosas ortodoxas, consideraba que su verdadera misión histórica era la conservación del despotismo, incluso con los medios más brutales. En general, no es aventurado afirmar que allí se mantuvieron hasta la Primera Guerra Mundial todas las tendencias conservadoras y reaccionarias que encontramos con frecuencia en Europa entre los años ochenta y noventa, y que significaban una represión de las corrientes liberales y socialistas y un fortalecimiento de las capas tradicionales dominantes. Esto, sin

embargo, sólo fue posible a costa de tensiones cada vez mayores dentro de la sociedad rusa y gracias a la ayuda de un poderoso aparato represivo policíaco.

Los años ochenta habían significado para Rusia el abandono de la política de reformas, iniciada por Alejandro II en los años sesenta con sus leyes reformistas. Si en el aspecto económico se buscaba lograr un acercamiento al occidente europeo desde 1891, en los aspectos políticos y sociales no existía en absoluto esa ambición, exceptuada la política de rusificación sistemática de los numerosos pueblos no rusos del imperio del zar, comparable con tendencias análogas en el resto de Europa. Por el contrario, fueron frenados rápidamente los débiles intentos de adoptar modelos políticos constitucionales europeos, como la creación de entidades administrativas regionales autónomas, los llamados «zemstvos», a nivel de los distritos y gobiernos y que estaban limitados a las principales provincias del imperio ruso; de la misma manera se frenó el desarrollo de un sistema escolar y universitario inspirado en el modelo occidental, y se limitó el acceso a los institutos con el pretexto de que se corría el peligro de crear aún más descontentos. Igualmente, se volvió a severos métodos de censura en el terreno de la prensa; el Derecho también sufrió una transformación en sentido reaccionario.

Mayor importancia revistió el hecho de que se volviesen a reducir los derechos de los «zemstvos». Siguiendo la tendencia general de la política zarista —tal como se había revelado ya en un manifiesto imperial de Alejandro III en el año 1885—, se centraron ahora los esfuerzos en fortalecer la inestable nobleza latifundista. Así, desde 1899, en lugar de los «jueces de paz», que hasta entonces habían sido nombrados por los «zemstvos» y que habían actuado a nivel local como principales autoridades administrativas y como mediadores entre los latifundistas y los campesinos, se introdujeron los llamados «comandantes de campo», que eran nombrados por los gobernadores, y que procedían de la nobleza autóctona. De esta manera se restituía a la nobleza indirectamente una parte de los derechos que habían podido ejercer anteriormente frente a sus siervos. Al mismo tiempo se modificaban las leyes electorales para los «zemstvos» de los gobiernos locales, de tal manera que los nobles y los funcionarios salían más fortalecidos, mientras que los representantes campesinos eran reducidos en número y su elección quedaba subordinada a la aprobación de los gobernadores. Las entidades administrativas comunales fueron intervenidas con parecido rigor. A través de una radical reforma del derecho de voto, en la que el censo

fue elevado considerablemente, se privó en gran medida del derecho electoral a la clase obrera y a toda la intelectualidad burguesa. Los representantes de las profesiones libres fueron eliminados por completo de las entidades administrativas autónomas.

Todas estas medidas no pudieron, sin embargo, impedir que los «zemstvos» se convirtiesen en portavoces de un liberalismo moderado, dirigido contra el despotismo de la burocracia zarista y comenzaran a propugnar la idea de un cuerpo representativo panruso de carácter constitucional. Parte de la baja nobleza terrateniente y los intelectuales burgueses encargados de la administración de los «zemstvos» —los «zemstvos» tenían que ocuparse también de la educación, sanidad y de las carreteras de su distrito y cubrían sus gastos con impuestos propios—, entraron en conflicto con la burocracia zarista, que oponía a sus proyectos y sugerencias una mezcla de incomprensión y animosidad. Numerosos miembros de los «zemstvos» empezaron entonces a reclamar una mayor participación del pueblo en la administración del Estado y su modernización según los modelos de Europa occidental.

A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades, el liberalismo «zemstvo» —un fenómeno específicamente ruso— se convirtió rápidamente en un importante factor político. Hasta los primeros años del siglo XX la burocracia zarista pudo imponerse en general a estos movimientos. Si bien en un principio el liberalismo «zemstvo» se había visto reducido a formas ilegales de organización, a partir de 1903 esta situación cambió. «La unión de Liberación», fundada en el verano de aquel año por algunos políticos liberales de los «zemstvos», encontró muchos seguidores entre la «intelligentsia» rusa y entre los profesionales liberales; el gobierno renunció en cambio a adoptar medidas duras de represión para evitar que este movimiento emprendiese sendas revolucionarias. De los círculos de la «Unión de Liberación» nació el primer proyecto de una nueva constitución liberal para Rusia. En el año 1904 el liberalismo «zemstvo» llegó a celebrar un auténtico congreso en San Petersburgo, que tuvo lugar en un marco privado a causa de una prohibición de la policía. Las reivindicaciones que se plantearon allí, de representación popular para toda Rusia y de creación de un Estado de derecho según el modelo europeo occidental, hallaron un amplio eco en la opinión pública rusa. El fracaso completo del sistema en la reciente guerra ruso-japonesa constituyó un telón de fondo oportuno a estas reivindicaciones y les proporcionó una extraordinaria fuerza política. Aunque la

vinculación de este programa a la clase burguesa era más que evidente, sus consecuencias habían de perdurar por algún tiempo.

El descontento general, que fue en aumento tras las noticias de las graves derrotas del ejército y de la flota rusa en el Extremo Oriente, se desencadenó de golpe después del «Domingo sangriento» del 9 de enero de 1905 (22 de enero según el calendario occidental; a partir de ahora los datos aparecen según el calendario ruso). Una ola de huelgas generales, que en un principio carecían de objetivos políticos, se adueñó de todo el país. Al mismo tiempo se pusieron en movimiento los intelectuales y, finalmente, toda la burguesía. La Universidad de San Petersburgo fue la primera; profesores y estudiantes se lanzaron a la huelga y exigieron reformas constitucionales. El 7 de febrero de 1905 los estudiantes de San Petersburgo exigían, a través de una resolución aprobada casi unánimemente, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, la libertad de prensa, el derecho de asociación y el derecho de huelga. Los intelectuales de todo el país les siguieron, fundando en muchas ocasiones asociaciones profesionales para utilizar sus congresos como plataforma política, desde donde proclamar la necesidad de una constitución. Aparte de esto se fundaron numerosas asociaciones políticas que actuaron en el mismo sentido. En el gobierno no existía acuerdo sobre las medidas que debían adoptarse; mientras que el gobernador de San Petersburgo era partidario de la línea dura, los demás ministros aconsejaban una tolerancia prudente, hasta que las noticias del Lejano Oriente permitiesen establecer una nueva situación en el interior. Fiel reflejo de este estado de cosas, fue la casi simultánea publicación, a mediados de febrero de 1905, de un manifiesto contra la revolución y de un «ukas» (Derecho del Zar) que prometía la constitución de una representación del pueblo con voto consultivo y que invitaba a las asociaciones políticas del país y a las organizaciones de los «zemstvos» a que presentasen a su vez proyectos al gobierno.

Sin embargo, no llegaron las esperadas noticias del escenario de guerra japonés; por el contrario, la contienda terminó por fin con una grave serie de derrotas que evidenciaron claramente las deficiencias internas del aparato estatal ruso. Impulsado por estos acontecimientos, el movimiento revolucionario fue cada vez más en aumento sin que el gobierno se atreviese a emplear la fuerza. El liberalismo «zemstvo» se colocó a la cabeza del movimiento. Sus representantes entregaron el 7 de julio una resolución al zar, en la que se le recordaba su promesa de marzo y en la que se exigía de nuevo una constitución. Un decreto del 6 de agosto, que anunciaba la convocatoria de una

Duma, o sea, de un Parlamento de base representativa, elegido sin embargo de forma bastante conservadora a través de un derecho de voto de planteamiento clasista, y que disponía de un ámbito de competencia muy reducido, suscitó una general repulsa. Las protestas fueron inútiles pues el gobierno, presionado por la situación interna de principios de septiembre, se había decidido a entablar negociaciones de paz con el Japón, confiando en recuperar rápidamente su antigua libertad de acción.

Pero el golpe definitivo lo recibió la autocracia zarista, no de las protestas de la burguesía, a la que se unían ahora también los empresarios, sino de los trabajadores y campesinos. Desde la primavera los campesinos habían pasado a la defensa de sus intereses y a la rebelión abierta contra los terratenientes; saqueando las residencias señoriales, destruyendo los registros de rentas, apoderándose en algunos casos hasta de las tierras de sus amos, sin que el Estado pudiese sofocar estos desmanes, ya que las tropas se hallaban comprometidas en el Lejano Oriente. Estas iniciativas violentas alcanzaron en octubre de 1905 su máximo apogeo. El factor decisivo fue una serie de huelgas masivas, sobre todo la gran huelga de ferroviarios, que se desencadenó el 8 de octubre de 1905 y que paralizó el tráfico y el abastecimiento de energía en todo el país y con ello también la maquinaria burocrática del gobierno. En el curso de este movimiento huelguista surgieron por primera vez los llamados «soviets», representaciones de trabajadores, constituidos según formas de democracia primitiva y directa, por los representantes de los trabajadores de las distintas fábricas. De todos estos «soviets» le correspondió el 13 de octubre de 1905 la dirección al soviet de San Petersburgo. Este se convirtió en pocos días en un cuerpo representativo de 250 miembros para cerca de 40.000 trabajadores de fábrica y a mediados de octubre de 1905 asumió prácticamente el poder en la capital, bajo la dirección de un intelectual de izquierda llamado Crustalev-Nosar. El soviet de San Petersburgo se convirtió, casi contra su voluntad, en el órgano dirigente del movimiento revolucionario.

Presionado por estos hechos, Nicolás II se decidió, aconsejado por el conde Witte, y muy a pesar suyo, a proclamar el 17 de octubre de 1905 un manifiesto que anunciaba una constitución y la creación de una representación del pueblo sobre la base del sufragio universal. Esta decisión del zar se debía principalmente a que nadie estaba dispuesto a colocarse al frente de una dictadura militar enérgica y decidida a llevar a cabo fusilamientos en masa, como lo había propuesto Witte y

como única alternativa. Al manifiesto del 17 de octubre siguieron semanas de inmenso entusiasmo y alivio; la promesa del zar de dar una constitución al país era interpretada, sobre todo por los liberales, como un completo triunfo de la revolución, como la realización de las reivindicaciones del liberalismo democrático. La clase trabajadora, como se demostraría más tarde, tuvo razón al ser más escéptica. El 18 de octubre el soviet de San Petersburgo tomó la siguiente resolución: «El proletariado revolucionario en lucha no puede deponer sus armas antes de que haya sido instaurada una república democrática, que constituye el mejor camino para la lucha del proletariado por el socialismo» [57].

Paralizados de momento, los órganos del poder estatal tuvieron que aceptar el predominio del soviet de San Petersburgo y tolerar que los campesinos continuasen saqueando las propiedades de los latifundistas. Pero la creciente división de las fuerzas revolucionarias en las semanas siguientes abrió de nuevo las puertas a la reacción. La clase obrera gastó sus energías en una lucha inútil por la jornada de trabajo de ocho horas y llevó de esta manera a los empresarios de nuevo al campo de la reacción. El partido «octubrista», que desde el momento de la proclamación del manifiesto de octubre, se había opuesto a la continuación de la revolución, abandonó el movimiento liberal. Esto privó de eficacia a la propuesta de una constituyente democrática como la pedían, sobre todo, los demócratas constitucionales, bajo la dirección de Miljukov. En la extrema derecha se formaron una serie de organizaciones que, como las «Centurias negras», llevaban a cabo, con la ayuda de la policía, persecuciones de judíos, con las que se trataba de desviar la furia del pueblo a otros objetivos. Pero también los intelectuales eran con frecuencia las víctimas del terror de estas hordas que estaban dirigidas casi siempre por los grandes terratenientes, sin que el gobierno interviniese en su defensa.

A finales de noviembre de 1905 el gobierno recupera el control al volver a disponer de mayores cantidades de tropas —el 5 de septiembre había sido firmada la paz con el Japón y a principios de noviembre contingentes de tropas del Lejano Oriente habían llegado hasta Moscú. El 27 de noviembre se lanza el primer golpe contra el Soviet de San Petersburgo con la detención de Crustalev-Nosar y cuando aquél dirige entonces una llamada al pueblo pidiendo una huelga contra los impuestos y la retirada de sus ahorros —una medida que hubiese hecho fracasar la firma del empréstito del Estado, que se negociaba precisamente en aquel momento en Francia—, Witte respondió el 3 de diciembre con la detención de 200 miembros

del soviet, entre ellos el comité ejecutivo, paralizando de esta manera su trabajo. No obstante, se produjeron en las siguientes semanas en Moscú y otras ciudades industriales de la provincia, grandes huelgas generales, que culminaron en un levantamiento armado. El gobierno reprimió con extrema dureza este movimiento con las tropas recién llegadas. Witte inició además una extensa campaña de pacificación con la que pudo restablecer el orden en el campo. Las expediciones de castigo, de extrema crueldad, seguidas de juicios sumarísimos que dictaban implacablemente penas de muerte, acabaron rompiendo la encarnizada resistencia de los campesinos. Al comenzar el año 1906 ya había pasado lo peor, la tranquilidad aparente se unía al profundo desaliento de la gran masa.

Sin embargo, se tenían grandes esperanzas en la *Duma* que había sido elegida en marzo/abril de 1906, según un sufragio indirecto y relativamente universal. La destitución de Witte —partidario de un curso moderado con la *Duma* y de cumplir la promesa de constitución—, poco antes de la reunión de la *Duma* del 27 de abril de 1906, demostró que la victoria de la reacción ya estaba decidida. A pesar del complicado sufragio indirecto que favorecía a los terratenientes y a los campesinos, las elecciones reportaron una mayoría aplastante a los partidos de la revolución. 179 cadetes, como se llamaba a los demócratas constitucionales, 94 representantes campesinos y 18 socialdemócratas de ambas tendencias se hallaban frente a sólo 17 octubristas y 15 representantes de la extrema derecha. Ante esta mayoría compacta en favor de una transformación fundamental del Estado inspirada en Europa occidental, se consideraron completamente insuficientes las leyes fundamentales del Estado de mayo de 1906, que reservaban a la *Duma* un papel muy moderado en la legislación. El abismo que se abría entre el gobierno y la *Duma* demostró ser insalvable ya en la primera ocasión; el zar se negó a aceptar un memorial aprobado por la Cámara y el gobierno se opuso abiertamente a las medidas de reforma que propugnaba. Tras algunos débiles intentos de negociación, Nicolás II se dispuso a disolver la *Duma* en la primera ocasión. Sobre las deliberaciones de la primera *Duma,* que emprendía valientemente la discusión de los importantes problemas constitucionales, sobre todo el de la situación legal de las nacionalidades, se cernían ya sombras amenazadoras.

En julio de 1906 había llegado el momento; la *Duma* fue disuelta con el pretexto de que había violado los límites impuestos. En vano los diputados de los cadetes y del partido campesino lanzaron desde Vyborg un llamamiento al pueblo ruso

para que se negase a pagar los impuestos y a prestar el servicio militar hasta que estuviesen restablecidos los derechos de la *Duma.* Stolypin, el nuevo primer ministro, aplastó con energía todos los movimientos de resistencia y decidió, después de medio año de rodeos, la celebración de nuevas elecciones. La nueva *Duma* votada en febrero de 1907 presentaba un considerable fortalecimiento de los grupos extremos a costa del centro. Stolypin también rechazó esa *Duma* quedando disuelta ya el 3 de julio de 1907. En oposición manifiesta a las leyes fundamentales del Estado proclamadas un año antes, se procedió a la transformación radical del derecho electoral. Gracias a un sistema de derecho electoral basado en un censo extremadamente alto se favoreció de tal manera al pequeño grupo de latifundistas y a la gran burguesía —reservando a las nacionalidades no rusas escasísimas posibilidades— que el 1 de septiembre de 1907 se obtenía el deseado resultado: una representación completamente dominada por la derecha, sobre todo por los octubristas, que no era sino una hoja de parra para el absolutismo zarista desatado. El intento de eliminar la autocracia del zar asesino y de acercar las formas constitucionales de Rusia a los modelos de Europa occidental había fracasado. Rusia seguía siendo la luz de cola de la evolución político-constitucional de Europa.

2. El delirio del imperialismo (1885-1906)

Hacia el fin de los años ochenta del siglo XIX se inicia una transformación profunda en las relaciones entre las potencias europeas. La fiebre del imperialismo se adueña de los gabinetes europeos progresivamente y sin que se den apenas cuenta los propios políticos. A pesar del conservadurismo de la diplomacia de todos los Estados europeos, que consideraba el clamor popular por colonias y nuevos mercados en ultramar, en general, como una desagradable intromisión en las sagradas tradiciones del arte diplomático, fueron atrayendo cada vez más el interés público los problemas coloniales y los problemas de la «Weltpolitik», para utilizar un término que empezaba a ponerse de moda en Alemania, mientras que los grandes problemas de la política europea pasaban a un segundo plano, sin perder por ello su peso y su importancia.

La escuela histórica alemana «neokantiana», que tampoco consiguió sustraerse a la influencia de las ideologías dominantes, describe este proceso como el paso del sistema de Estados europeos al sistema mundial, y concluye que también Alemania estaba llamada a llevar a cabo una vigorosa política internacional. Sin embargo, en los últimos decenios antes de 1914 no existía, aún, el sistema universal de Estados que hubiese podido garantizar una evolución pacífica en Europa y en el mundo a través de un equilibrio de fuerzas como el que había mantenido durante casi un siglo el sistema de Estados *europeo*. El sistema europeo de potencias en el que las grandes naciones como Inglaterra, Francia, el Reich alemán, Austria-Hungría y Rusia desempeñaban el papel principal siguió existiendo y con el los problemas tradicionales de la política europea sin resolver o mal resueltos. Entre estos, la cuestión del futuro del imperio otomano que había sido salvado durante el siglo XIX en varias ocasiones por las grandes potencias y que había sido conservado artificialmente; en segundo lugar, la discutida cuestión del cierre de los estrechos del Bósforo a los buques de guerra de todas las naciones, según lo habían acordado las naciones europeas después de la guerra de Crimea, así como el problema de la reorganización de los Balcanes, que desde el Congreso de Berlín del año 1878 no había dejado de preocupar a los Estados interesados. También los políticos de Europa se-

guían pensando según los conceptos tradicionales de la gran diplomacia clásica. Sus energías se centraban en primer lugar en el establecimiento de un equilibrio de poderes en la propia Europa, equilibrio que, sin embargo, intentaban modificar continuamente en beneficio del propio bloque de alianzas. Pero como consecuencia de la transición a una activa política de adquisiciones coloniales, generalmente llevada a cabo por las potencias europeas a partir de 1890, se proyectaron las tensiones existentes en Europa, en cierto modo, a los amplios territorios de ultramar. Y las disputas surgidas entre determinadas potencias por territorios de Africa o Asia, que con frecuencia eran además relativamente poco importantes, tuvieron repercusiones de extraordinaria trascendencia dentro del propio sistema europeo de potencias. La lucha febril de las potencias colonialistas por los territorios de ultramar dio a las relaciones de los Estados una dureza hasta entonces desconocida. Sin embargo, no eran únicamente las grandes potencias las que chocaban una y otra vez por cuestiones internacionales; también las potencias de segundo rango fueron dominadas por las tendencias imperialistas de la época y fueron aquéllas, sobre todo, las que provocaron el desmoronamiento del sistema de las potencias europeas en la Primera Guerra Mundial.

Algunos Estados europeos, como Inglaterra y Francia, ya hacía tiempo que llevaban a cabo una política de expansión colonial. Hacia 1885 este proceso de expansión de la civilización europea por todo el globo sufre una violenta aceleración; en pocos años se convirtió en una auténtica carrera de las potencias europeas tras los territorios de ultramar aún «libres», a la que, a partir de 1894, se sumaron también Japón y los Estados Unidos. Al mismo tiempo se transformaba el carácter de la dominación colonial europea; de la noche a la mañana se convertía el colonialismo en imperialismo. Hasta entonces las potencias europeas habían dejado toda la iniciativa a los grandes colonizadores y a las empresas coloniales y en general no dejaba de seguir la bandera nacional al comercio. En todo caso, se había tratado de reducir al mínimo la propia intervención política y militar. Ahora la situación se había convertido en lo contrario. Impulsadas por un nacionalismo que había desembocado en imperialismo, las potencias europeas empezaron a perseguir sistemáticamente la adquisición de nuevos territorios coloniales y a respaldar con capital propio la conquista y penetración económica en los países subdesarrollados, pero ya en la fase inicial y no, como hasta entonces, sólo cuando las cosas habían alcanzado un cierto grado de madurez. Al mismo tiempo la creciente rivalidad entre las grandes potencias supuso el aban-

dono de las formas tradicionales de dominación más o menos extensiva de los territorios coloniales, a partir de algunos puntos de la costa. Se desencadenó entonces una lucha encarnizada por la conquista del continente interior unida al afán de delimitar claramente las fronteras de los distintos territorios. La firma de tratados de protección con los jefes de numerosas tribus indígenas, tratados cuyo valor jurídico era frecuentemente de dudosa naturaleza, ya no bastaba ahora para fundar o ampliar imperios coloniales; a partir de este momento eran necesarias duras negociaciones con las respectivas potencias rivales para legitimar las propias pretensiones sobre territorios que muchas veces estaban aún sin explotar. A medida que iba disminuyendo el número de territorios «libres» de la tierra, se hacían más violentos los conflictos por estas cuestiones, llevando en varias ocasiones a Europa al borde de una guerra general.

Los comienzos de esta evolución se remontan al principio de los años ochenta. En 1881, Francia se establece en Túnez, dos años más tarde en Annam, el actual Vietnam, así como en el Congo y en Somalia, en el Golfo de Adén. En 1883 y 1884 adquiere Bismarck en una acción por sorpresa los protectorados de Africa del sudeste y sudoeste, así como Togo y Camerún. Una importancia mucho mayor tuvo, sin embargo, la ocupación de Egipto por Inglaterra en el año 1882. Esta había sido pensada en un principio por Gladstone como una expedición de castigo, que además había querido llevar a cabo junto con Francia, para asegurar los intereses de los acreedores europeos en Egipto, amenazados por el levantamiento nacionalista de Ahmed Arabi. La no intervención de Francia, impuesta por el Parlamento, dio a la ocupación de Egipto el carácter de una acción unilateral del imperialismo británico, algo que el propio Gladstone había tratado de evitar. En Francia se reaccionó con dureza e intransigencia ante este paso de Inglaterra que ponía en peligro la propia tradicional supremacía cultural en el Nilo y se exigió la inmediata retirada de los ingleses. Tampoco en Downing Street se había pretendido en un principio una ocupación permanente de Egipto y se proyectaba ya una pronta retirada para evitar que las potencias europeas tuviesen en adelante un cómodo pretexto para dificultar constantemente la política inglesa; ya que aquéllas poseían en la *Caisse de la Dette Publique* el instrumento adecuado para ejercer su influencia sobre los asuntos internos de Egipto. Inglaterra trataba de imponer dos condiciones a la retirada de sus tropas de Egipto: que los intereses de los acreedores europeos en el Estado egipcio continuasen siendo respetados y que, en caso de una nueva crisis, Gran Bretaña obtuviese de las otras grandes poten-

cias europeas el derecho de llevar a cabo una nueva intervención militar. El temor a que Francia pudiese instalarse en Egipto constituyó un factor decisivo. Sin embargo, al asesinar los derviches de Khartum en 1885 a Gordon, que había iniciado una campaña, no autorizada por Londres, contra el imperio del Mahdi, se vieron frustrados los planes de Gladstone; una ola de agitación nacionalista se apoderó de la opinión pública británica, que pedía la venganza y no la retirada. El abandono de Egipto, donde se había instalado confortablemente un protectorado inglés (aunque la dominación inglesa careciese del respaldo jurídico internacional), era cada vez menos probable, al tratar en vano Gladstone y su sucesor Salisbury de obtener del sultán —el soberano nominal del khedive egipcio—, y de las grandes potencias, aquellas garantías que la política imperial inglesa consideraba, por razones estratégicas, imprescindibles para abandonar Egipto.

La cuestión egipcia se convirtió en un conflicto permanente, sobre todo entre Inglaterra y Francia. Bismarck supo atizar con mucha habilidad el fuego egipcio. Desde 1885 Bismarck trató por todos los medios de fomentar las aspiraciones de las otras grandes potencias en el terreno político-colonial y de desviar de esta manera las tensiones del sistema europeo de potencias a la periferia. El que Bismarck contribuyese con todas sus fuerzas a que Francia e Inglaterra se enzarzasen en una lucha por las cuestiones coloniales, era una estrategia que había de volverse a la larga contra la propia Alemania.

El interés de las grandes potencias por los experimentos coloniales vuelve, sin embargo, a decaer una vez más a partir de 1885. En Inglaterra se volvió a la antigua práctica de dar preferencia a las *Chartered Companies* particulares, como la *Imperial British East Africa Company* (1889) y la *British South Africa Company* (1889), en la explotación de territorios coloniales y se trató también de llegar a un acuerdo con Rusia acerca de Afganistán. En Francia, después de la caída de Jules Ferry en 1885, subieron de momento al poder políticos que observaban con desconfianza cualquier política colonial que distrajese a la nación francesa del «agujero de los Vosgos». Tampoco Bismarck era ya partidario de proyectos político-coloniales y recomendaba al Reich alemán una política de sabia autolimitación ante su amenazada posición en centro Europa. Las grandes potencias europeas, por iniciativa de Bismarck, cedieron en el año 1885 el futuro Congo belga a Leopoldo II, rey de los belgas, para su explotación particular, un derecho del que había de abusar bien pronto el rey, a cambio de ciertas concesiones, como el mantenimiento de la «puerta abier-

ta», es decir, el paso libre al comercio de todas las naciones. Pero estos indicios de cooperación entre las grandes potencias en cuestiones coloniales sólo fueron hechos aislados, y pronto volvió de nuevo la feroz rivalidad.

En las cuestiones de política internacional entre los años 1885 y 1892, reinaba, por así decirlo, la calma que precede a la tempestad. Una vez más, los viejos problemas europeos acaparaban toda la atención: el problema de los Estrechos y la cuestión búlgara, que provocaría, a principios de 1887, una grave crisis en las relaciones germano-rusas. Políticos como Waldersee ya propugnaban entonces una guerra de prevención contra el vecino oriental. Sólo gracias a un artístico doble juego pudo Bismarck estabilizar diplomáticamente la amenazada hegemonía del Reich alemán. Con la ayuda del tratado de contraseguro del año 1887, que aseguraba a Rusia, a cambio de su neutralidad amistosa en caso de guerra, el apoyo diplomático del Reich alemán en las cuestiones de los Balcanes y en la cuestión de los Estrechos, pudo reparar una vez más las relaciones directas con San Petersburgo. Al mismo tiempo Bismarck empleó todo su arte diplomático para impedir desde un principio la posible realización política de las concesiones aseguradas en el tratado de contraseguro, por medio de una entente del Mediterráneo entre Austria-Hungría, Inglaterra e Italia, con el único fin de cerrar a Rusia el paso a los Estrechos. El tratado de contraseguro era, como ya sabía el propio Bismarck, un recurso extremo para estar siempre informado. Como el canciller tenía escasa confianza en la lealtad de los políticos rusos, quería conducirles a un callejón sin salida —una jugada táctica que difícilmente podía tener éxito a la larga, pero que satisfacía de momento las necesidades de la política alemana. La maestría diplomática de Bismarck había llegado al fin de sus posibilidades. Incapaz de mantener el carácter puramente defensivo de su sistema de alianzas original ante el desenfrenado imperialismo de las otras potencias, lo que ya se había puesto de manifiesto con motivo de la renovación del tratado de la Triple Alianza con Italia en febrero de 1887, Bismarck trató de enfrentar las energías imperialistas de las otras potencias y quedar al margen. Mientras las otras potencias no adivinaran las intenciones de este juego podía dar resultado, pero a largo plazo esta táctica estaba unida a grandes riesgos, ya que amenazaba con desacreditar la política alemana.

La dimisión de Bismarck en marzo de 1890 fue sin duda un acontecimiento de trascendencia europea; con Bismarck desaparecía del escenario diplomático de Europa un hombre de Estado que había tratado de conservar durante un cuarto de

siglo el clásico sistema de equilibrio entre las potencias europeas. La intención de Bismarck había sido evitar, por medio de una prudente política de alianza defensiva y al mismo tiempo conservadora, que la antigua Europa se hundiese en la vorágine de los nacionalismos rivales. Pero el sistema diplomático de Bismarck se basaba en que los políticos de Europa pudieran actuar según una razón de Estado audaz y calculada, sin preocuparse demasiado de la opinión de sus pueblos. Sin embargo, esto era cada vez menos posible. Precisamente los gobiernos de los Estados semiconstitucionales o incluso autocráticos de Europa, además de sus antagonistas democráticos, eran arrastrados cada vez más por una opinión pública cargada de nacionalismo. En aquellas circunstancias las relaciones personales entre los jefes de Estado, en las que había puesto tanto empeño Bismarck, fueron perdiendo su solidez. Un análisis objetivo de los hechos demuestra que los métodos de Bismarck en política exterior ya habían alcanzado los límites de sus posibilidades en el momento de su caída. Tampoco el complicado sistema de alianzas creado por Bismarck podía continuar indefinidamente, por el hecho de que la vigorosa dinámica de los imperialismos de las distintas potencias europeas se dejaba integrar cada vez menos en este orden cuidadosamente construido.

La no renovación del tratado de contraseguro por el sucesor de Bismarck, Leo von Caprivi, en el año 1890, ha sido interpretada siempre como un giro decisivo en el desarrollo de los sistemas europeos de alianzas antes de 1914, y de hecho lo fue, aunque en otro sentido que el que quisieron ver los contemporáneos y Bismarck más tarde. Tampoco la firma del tratado de contraseguro habría podido detener en realidad el empeoramiento de las relaciones germano-rusas producido por la cuestión búlgara. Caprivi y sus consejeros, sobre todo Holstein, Kiderlen-Wächter y Schleinitz, no eran partidarios de prorrogar este tratado, contrario al espíritu de la Triple Alianza, porque en caso de que fuese renovado, se temían consecuencias negativas en la actitud de Austria-Hungría, Italia e Inglaterra. Según su opinión, este tratado ponía en manos de Rusia la posibilidad de presionar a los alemanes continuamente en la política exterior. Caprivi admitía además que se sentía incapaz de jugar al mismo tiempo con cinco bolas, como había hecho Bismarck. Su intención era llevar a cabo en el futuro una política exterior recta, clara, que inspirase confianza y que, llegado el caso, no tuviese que temer la luz de la publicidad.

En realidad, ni para Caprivi, ni para Marschall —el nuevo secretario de Estado para asuntos Exteriores—, ni para Hol-

stein —que era entonces la personalidad más influyente en el ministerio del Exterior—, el problema estribaba en recortar un poco el ramificado árbol de la política exterior de Bismarck; por el contrario, pretendían continuar consecuentemente la política de la Triple Alianza, pero al mismo tiempo aspiraban atraer a ella a Inglaterra con más fuerza aún que Bismarck. Querían dejar en juego una parte de las cartas del sistema de alianzas de Bismarck y apartar las que no concordasen con

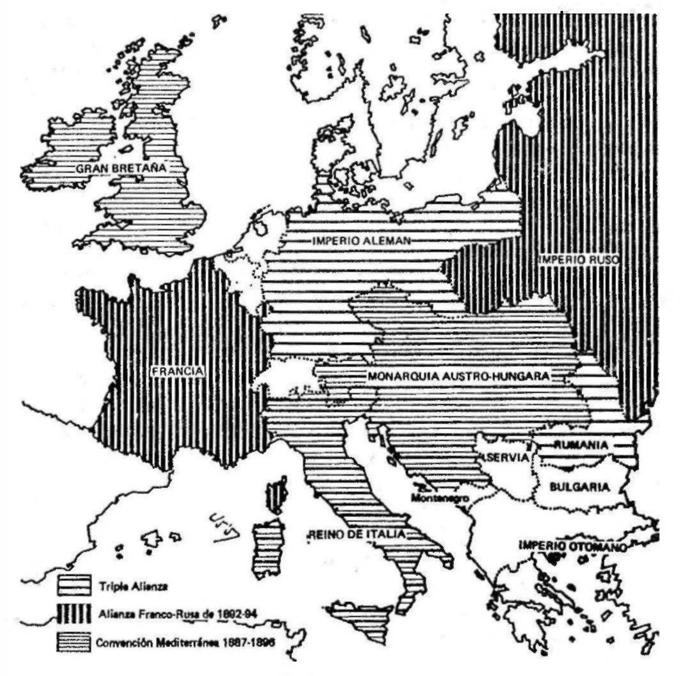


Fig. 8. El sistema de los Estados europeos en 1894.

él. Esta era la meta que perseguía el Tratado de Helgoland-Zanzíbar del otoño de 1890, por el que el Reich adquiría la isla de Helgoland a cambio de renunciar a importantes derechos en Africa del Sur —un acuerdo que sería atacado más tarde con dureza por la *Alldeutscher Verband* (Liga pangermana) y la *Kolonial Verband* (Unión Colonial), porque sig-

nificaba una renuncia a realizar nuevas adquisiciones coloniales. Poco después, en 1891, Caprivi concluía una nueva Triple Alianza con Italia, esperando que sería del máximo valor como puente hacia Inglaterra. En cambio el gobierno alemán se negó a prorrogar —siguiendo consecuentemente una orientación occidental— el tratado de contraseguro, a pesar de la versión considerablemente atenuada que presentaba el ministro del Exterior ruso Giers, empujando de esta manera a los rusos a los brazos de los franceses. Sin embargo, este proceso ya se había iniciado en 1887 cuando Bismarck se negó a conceder empréstitos al Estado ruso, obligando así a éste a acudir al mercado de capital francés. Los rusos mantuvieron al principio una actitud muy reservada ante la intensa solicitud de la diplomacia francesa. La política exterior oficial rusa, y sobre todo el zar, sentían una fuerte aversión hacia la Francia republicana, y no querían unirse incondicionalmente a ella porque temían ser arrastrados a una guerra general por Alsacia-Lorena. La política rusa estaba interesada en asegurar su propia frontera occidental desde 1890, año en el que se había iniciado sistemáticamente la colonización de los extensos territorios de Siberia y del Lejano Oriente. Francia tampoco podía prestar demasiado apoyo a la ambiciosa política rusa en los Balcanes y por otro lado tenía que contar con que el Reich respaldase la esperada resistencia de Austria-Hungría en caso de encontrarse en el campo adversario. Con poco entusiasmo se dispuso el gobierno ruso a firmar un acuerdo político con Francia para suplir la falta de un tratado con Alemania. A la convención militar del año 1892 siguió, después de una demostrativa visita de la flota rusa del Mediterráneo a Tolon, que provocó una ola de entusiasmo en la opinión pública francesa a comienzos de 1894, una alianza formal. Ambas partes perseguían con esta alianza distintos objetivos; mientras que Francia veía un arma dirigida exclusivamente contra Alemania, la diplomacia rusa esperaba que la alianza con Francia le proporcionase, por lo menos indirectamente, un respaldo frente a Inglaterra, el gran antagonista de Rusia.

Para la política exterior alemana la firma de la alianza franco-rusa, que en caso de guerra encerraba el inmediato peligro de una guerra en dos frentes, tuvo una importancia grave. Ciertamente, considerando la postura constantemente hostil de Rusia, la política alemana debía prever que de todas formas habría de tenerla como enemiga; pero, sin embargo, la salida de Francia del aislamiento en el que Bismarck había sabido mantener el país durante dos décadas, significó un considerable empeoramiento de la situación de las potencias centrales. Esto era espe-

cialmente grave ya que Caprivi veía defraudadas sus esperanzas de atraerse con más fuerza a Inglaterra a la Triple Alianza, sin comprometerse con Rusia y Francia de manera peligrosa. Los ingleses no se dejaban convencer para suscribir medidas concretas, sobre todo después de que en 1892 se había hecho lord Rosebery cargo del *Foreign Office*. De hecho la política alemana no podía estar interesada en hacer a Rusia concesiones más o menos directas en los Balcanes o en la cuestión de los Estrechos como lo pretendían los ingleses. Tal vez hubiese sido posible establecer finalmente una relación más estrecha entre Inglaterra y la Triple Alianza, si Holstein no hubiese estado obsesionado por la idea de que Inglaterra pretendía únicamente que el Reich le sacase las castañas del fuego.

Para el Reich resultaba fatal chocar con la política inglesa por cuestiones políticas de escasa importancia, a la vez que fracasaban todos los intentos de reparar la falta cometida socavando la Doble Alianza, estableciendo relaciones con Francia o Rusia. Esto estaba directamente relacionado con el nuevo brote de fiebre imperialista en las capitales de Europa. Ya a finales de los años ochenta había desechado lord Salisbury definitivamente la idea de abandonar de nuevo Egipto y había iniciado una política de ampliación y estabilización del *Empire*. Su sucesor liberal, Rosebery, siguió esta política, a pesar de la oposición de la mayoría de los ministros liberales, con mayor ahínco y de manera más impulsiva. La decisión, preparada en 1892 y llevada a cabo definitivamente en 1894, de asumir la herencia de la arruinada *Imperial British East Africa Company* y de anexionar Uganda, significaba el comienzo de una nueva fase en la política imperial británica de aquellas décadas. A partir de entonces el gobierno británico se dispuso *to peg out claims for posterity*, con otras palabras, trató de asegurarse territorios de futura importancia estratégica o económica apoderándose directamente de ellos o a través de acuerdos con otras potencias. El impulso principal del imperialismo inglés estaba dirigido a la región del Alto Nilo; de esta manera se esperaba estabilizar la dominación en Egipto. En 1895, sir Edward Grey proclama en la cámara baja británica al Sudán como territorio de interés inglés y advierte que cualquier intento, por parte de otras potencias, de instalarse allí sería considerado como un acto de hostilidad. Pero tampoco se olvidaban otras regiones; en 1894 trató Rosebery, en un tratado por separado con Leopoldo II, de asegurar a Inglaterra una estrecha faja de territorio en el interior del Africa oriental alemana, desde el lago Tanganica hacia el norte, que hubiese separado la colonia alemana del Congo belga, estableciendo a cambio un puente entre Uganda

y Sudáfrica británica —requisito indispensable para la construcción del ferrocarril del Cabo al Cairo, proyectado entonces por Cecil Rhodes.

Esta política chocó en primer lugar con la oposición de Francia, que desde 1890 y bajo la dirección del nuevo ministro de colonias Hanotaux, hacía grandes esfuerzos por ampliar sus posesiones en el Extremo Oriente y en Africa central y occidental. Ya en 1893 habían llegado ambas potencias al borde de una guerra por el futuro de Siam, que los franceses trataban de incluir, al menos en parte, a su imperio colonial del Extremo Oriente. También protestó Francia enérgicamente por el tratado por separado de Inglaterra con el Congo, en el que se adjudicaban amplios territorios de Africa ecuatorial a Leopoldo II. El Reich, por su parte, reaccionó en el mismo sentido, pues había sido pasado por alto en este tratado y, además, Berlín no podía aceptar que el Africa alemana del Este quedase rodeada de territorio británico. El gobierno alemán no estaba dispuesto a ceder ante los ingleses en esta cuestión, y mucho menos, después del violento enfrentamiento que había tenido lugar con los ingleses por una concesión para la construcción del ferrocarril de Bagdad y por la cuestión de Samoa. Francia y Alemania impusieron por ello la anulación de este acuerdo. El gobierno alemán aprovechó esta ocasión para tratar de convertir los intereses comunes de Alemania y Francia frente a Inglaterra en política colonial, en la base de una alianza continental que hubiese reducido considerablemente el peligro del tratado franco-ruso. Los franceses respondieron sin embargo con frialdad al gobierno alemán, como cuatro años más tarde con motivo de la cuestión boer. Fracasaba, pues, el intento de aprovechar las extremas diferencias entre Francia e Inglaterra en política colonial para mejorar la situación diplomática de Alemania. París conocía de sobra las verdaderas intenciones de la política alemana.

En el terreno de la política internacional el Reich se encontraba hacia la mitad de los años noventa peligrosamente aislado. Aunque Italia se había asegurado el apoyo diplomático de las potencias centrales para sus ambiciosos proyectos coloniales en el Mediterráneo, a raíz de la renovación del tratado de Triple Alianza de 1891, no estaba en absoluto dispuesta, aparte de ser demasiado débil, a prestar ayuda eficaz a su aliado alemán en las cuestiones de política internacional. Austria-Hungría estaba sumida en dificultades internas y en los problemas de los Balcanes y sólo podía guardar limitadamente la espalda del aliado alemán. El contacto con Rusia, con el que se podía haber impresionado tal vez a la política in-

glesa, se había roto. No cabe duda que los políticos alemanes carecían de programas coloniales concretos; sólo para satisfacer a la opinión pública alemana, habían intentado en 1894 adquirir Samoa para Alemania. Ante la decepcionante intransigencia de Inglaterra en cuestiones coloniales, los alemanes se dedicaron a obstruir la diplomacia inglesa siempre que esto fuese posible (y esto lo era sobre todo en la cuestión egipcia) para hacerla ver que no se podía pasar por encima de los legítimos intereses alemanes impunemente. Esta táctica consiguió en realidad lo contrario de lo que se había propuesto, sobre todo porque no era aplicada con la habilidad de Bismarck, sino con la torpeza de Holstein. Al margen de esto se trató por todos los medios de restablecer el contacto con San Petersburgo, ya que Guillermo II estaba muy interesado en mantener buenas relaciones con Rusia por razones dinásticas. El tratado comercial firmado con Rusia en 1894 estaba destinado a reanudar relaciones más estrechas; sin embargo, los rusos consideraron excesivamente duras las concesiones que habían tenido que hacer a los alemanes. De esta manera no se consiguió de momento prácticamente nada en Berlín en cuanto a una mejora de las relaciones con Rusia.

Respecto a las relaciones entre Alemania e Inglaterra, la arrogante e imprudente diplomacia de lord Rosebery, unida a la susceptibilidad obstinada de Holstein, consiguió que tanto Berlín como Londres estuviesen dominadas por una desconfianza cada vez más profunda hacia las intenciones de la otra parte. En Alemania empezaba a extenderse la idea de que Inglaterra boicoteaba constantemente los esfuerzos que realizaba Alemania en política exterior, y que solamente trataba de enganchar a Alemania al carro de su propia política. Esto lo pudo comprobar lord Salisbury cuando, a raíz de las masacres de armenios en Anatolia, presentó en 1895 a las grandes potencias un plan audaz de repartición de Turquía para hacer desaparecer radicalmente este constante foco de crisis de la política europea. La diplomacia alemana sospechaba que Salisbury trataba únicamente de excitar los ánimos de la Triple Alianza contra Rusia, por lo que hizo fracasar su iniciativa sin haberla estudiado seria y objetivamente. Por otro lado, el plan de repartición inglés no concordaba del todo con los intereses alemanes, que pretendían una penetración exclusivamente económica en Turquía, gracias al proyecto del ferrocarril de Bagdad, que se hallaba entonces aún en su principio.

Las relaciones germano-inglesas estaban ya bastante deterioradas, pero en 1896 alcanzaron su punto crítico. El motivo fue la cuestión boer, problema cada vez más importante para la

política imperial inglesa desde el descubrimiento de oro y diamantes en el Rand. En pocos años Johannesburgo se había convertido en el centro económico e industrial de toda Africa del sur. Para el imperio británico era ahora un problema acuciante incrementar de nuevo la influencia británica en el Transvaal e integrar a éste y a la república de Natal de nuevo en el imperio. Con este fin Cecil Rhodes, de común acuerdo con Joseph Chamberlain, llevó a cabo a finales de 1895 el «Jameson Raid», destinado a provocar un levantamiento de los ingleses, políticamente sin derechos, en Johannesburgo, y dar así a Gran Bretaña la deseada oportunidad de intervenir. En un telegrama oficial fechado el 3 de enero de 1896, Guillermo II felicitaba a Krüger por haber rechazado el «Raid». Aunque este telegrama era relativamente inofensivo comparado con las intenciones primitivas del Kaiser, desató en Inglaterra una ola de manifestaciones antialemanas, que habían de tener aún graves repercusiones, sobre todo porque la opinión pública alemana, llevada por su entusiasmo en favor de los boers, contestó en un tono aún más duro. Estas explosiones de odio nacionalista hacia Inglaterra se debían sin duda también a que, ante la actitud de ésta en Africa y Oriente, el Reich se veía reducido más o menos al papel de espectador, mientras que sus rivales desplegaban una actividad más intensa que nunca.

Italia salió mal parada en Adua, en 1896, al intentar anexionar una parte de Etiopía, y tuvo que abandonar de momento sus aspiraciones coloniales. Inglaterra y Francia desarrollaban en cambio una gran actividad. Desde 1895, la lucha de ambas potencias por la posesión del interior de sus respectivos territorios en Africa occidental se hallaba en pleno auge. En muchas ocasiones sólo en el último momento pudieron evitarse los encuentros militares entre tropas coloniales francesas y la *West Africa Frontier Force* de Chamberlain, hasta que, en la primavera de 1898, lord Salisbury se avino a celebrar negociaciones con París acerca de los límites de las posesiones de ambos países en Africa occidental, para dar una solución definitiva a estos problemas. La tensión entre las dos potencias alcanzó su punto crítico en la pugna por el Sudán. Mientras en 1896 el capitán francés Marchand avanzaba, con un pequeño ejército y pasando penurias indescriptibles, desde el Africa occidental francesa hacia Faschoda (situada en el Alto Nilo), con la intención de tomar posesión de aquella tierra para Francia en virtud del derecho de conquista, lord Kitchener, en calidad de jefe supremo del ejército egipcio, pero de hecho como exponente del imperio británico, se dirigía desde el norte hacia el Alto Nilo para hacer valer las antiguas pretensiones

de Egipto sobre Sudán y frustrar así la empresa de Marchand. Un conflicto grave con Francia era inminente. Al mismo tiempo se cernían oscuras nubes sobre Sudáfrica; un amenazador conflicto militar se fraguaba allí tras el fracaso de los intentos de forzar por vía indirecta la anexión del Transvaal al imperio británico.

En aquella situación, maduró entre los hombres de Estado ingleses la decisión de abandonar la política tradicional de la *splendid isolation,* y de buscar aliados adecuados. Portavoz de esta nueva orientación en política exterior fue, sobre todo, Joseph Chamberlain que, influenciado por la idea de que la raza anglosajona y la teutona estaban llamadas a dirigir juntas el mundo, presentó en marzo de 1898 un proyecto de alianza a los alemanes a pesar de no haber sido encargado de ello expresamente por su *premier.* El objetivo inmediato de esta oferta sorprendente debía ser el de reforzar la posición de Inglaterra en las negociaciones con Francia sobre las cuestiones de Africa occidental. Al mismo tiempo trataba de asegurarse la valiosa ayuda de Alemania con vistas al inminente conflicto por el Sudán y en las cuestiones relativas a Sudáfrica. Así, se le presentaba inesperadamente al gobierno alemán la posibilidad de paralizar eficazmente la entente franco-rusa, vinculando a Inglaterra a la Triple Alianza, y al mismo tiempo de realizar desde ahora una política colonial apoyándose en Inglaterra —dos objetivos que más tarde la diplomacia alemana en vano se esforzaría en alcanzar. Sin embargo, el gobierno alemán, siguiendo sustancialmente los deseos de Holstein, rechazó la oferta inglesa, y no sólo porque dudaba, no sin razón, de la sinceridad de la oferta, sino, sobre todo, porque pensaba que Inglaterra trataba únicamente de ganarse un aliado continental contra Rusia. Bülow, el nuevo secretario de Estado alemán de Asuntos Exteriores, partía de la funesta idea de que, a la larga, Inglaterra no podría evitar la «lucha por la supervivencia» con Rusia, y que por tanto no encontraría «otros aliados que Alemania, ni mejores amigos que Alemania»[58]. En consecuencia, ésta decidió dejar a Inglaterra aún en sus apuros, en lugar de ponerse ya abiertamente de su parte, con la esperanza de poder obtener de esta táctica mejores perspectivas para futuras conquistas en el campo colonial. Además, Guillermo II trató de utilizar la oferta inglesa como medio de presión sobre San Petersburgo, para llegar a una mejora en las relaciones germano-rusas, haciendo gestiones incluso para la renovación del tratado entre ambos imperios, tentativa fallida que comprometió, además, gravemente al gobierno alemán ante Londres. Sobrevalorando las fuerzas de Alemania, Holstein recomendó en cambio seguir una política

de libre acción en todas las direcciones, consolándose con el argumento de que «Alemania necesita menos que las otras potencias buscar apoyo fuera, ya que este apoyo le vendrá siempre por sí solo si la política alemana es dirigida correctamente, ya que las otras potencias tienen más necesidad de nosotros que nosotros de ellas»[59]. Aunque se había perdido por el momento la ocasión de llevar a cabo una mejora radical de las relaciones anglo-germanas, pudo Alemania concluir un acuerdo con Inglaterra que le garantizaba un derecho prioritario sobre parte de las posesiones coloniales de Portugal, en el caso de que éste (como se esperaba entonces en general), decidiera empeñar sus colonias a otras potencias a causa de las dificultades financieras en que se encontraba. El tratado de Angola del 30 de agosto de 1898 preveía, en tal caso, una repartición de Angola, Mozambique y Timor entre ambas potencias, excluyendo a todos los demás concurrentes. Para poder llevar a cabo el tratado, Alemania se había comprometido a abandonar a su suerte a los boer y a renunciar en el futuro a cualquier intervención en Sudáfrica. Este acuerdo con Inglaterra demostró ser, sin embargo, infructuoso. Portugal, en sus dificultades, se dirigió a Francia en vez de a Inglaterra o Alemania y, además, los propios ingleses no mostraron excesivo interés en que el tratado llegara a ser efectivo.

Mientras tanto en las relaciones anglo-francesas se había producido un cambio decisivo que indujo al gobierno inglés a tener menos consideraciones con Alemania. Pocas semanas después de la firma del tratado de Angola, había tenido lugar en el Sudán el esperado choque entre Francia e Inglaterra. El 10 de julio de 1809, Marchand izaba la bandera tricolor en Faschoda. Según el derecho de toma de posesión ejercido hasta entonces universalmente por las potencias coloniales europeas, la región del Alto Nilo pertenecía a Francia. El gobierno inglés se negó sin embargo a aceptar este hecho consumado; por el contrario, lord Kitchener, que estaba en marcha hacia Khartum, recibió la orden de avanzar, a su vez, lo más deprisa posible hacia Faschoda, con el fin de proclamar, a pesar de la presunta presencia de un cuerpo expedicionario francés (aún no habían llegado a Europa noticias definitivas sobre el triunfo de Marchand), un condominio británico-egipcio en el Sudán, en virtud del derecho de conquista. El 25 de septiembre de 1898 Kitchener llegó finalmente a Faschoda, e instó a Marchand y a su pequeña tropa a que se retiraran inmediatamente; Marchand se negó, declarando que sólo lo haría bajo la orden del gobierno francés. Había estallado la crisis. Una gran indignación se apoderó de toda la nación francesa ante la exigencia

británica de abandono inmediato del Sudán y de llamar a la patria a Marchand, el héroe nacional. Una guerra entre ambas potencias parecía inevitable. Pero Francia, mal preparada para la guerra y dividida en dos campos a raíz del «affaire Dreyfus», terminó por ceder, por consejo de Delcassé, después de cinco semanas de agitaciones. Aunque la grave humillación de Faschoda se había grabado profundamente en la conciencia de la nación francesa, en los años sucesivos Delcassé orientó sistemáticamente la política exterior de su país hacia una línea de completo acuerdo con Inglaterra en las cuestiones coloniales. El tratado del Sudán del año 1899 fue el primer fruto de esta política. En éste, Francia renunciaba a cualquier influencia política sobre Egipto y Sudán, obteniendo como compensación un total dominio sobre Africa occidental. Alemania se quedó con un palmo de narices. Ahora ya no era necesario respetar el tratado de Angola, que había sido concluido a desgana por parte de los ingleses. El 14 de octubre de 1899 lord Salisbury renovó las garantías inglesas que databan del siglo XVI, para las posesiones coloniales portuguesas, obteniendo así de los portugueses una benévola neutralidad en la guerra inminente contra el Transvaal.

Si la política que Alemania había perseguido en Africa, tal vez llevada con escaso entusiasmo, concluía con un completo fracaso, fueron coronadas con mayor fortuna sus tentativas en la otra gran área del colonialismo de la época: el Extremo Oriente. El problema más importante era el relativo al futuro de China. Allí estaba desde 1897 el Reich en primera línea. El arriendo forzoso, por parte de Alemania, de Tsingtao, obtenido por la fuerza a finales de 1897, dio la señal para la repartición del territorio chino entre las grandes potencias; al mismo tiempo, constituyó el preludio de la política colonial de Alemania, a la que Bülow en diciembre de 1897 daba en el *Reichstag* la siguiente orientación: «No queremos poner a nadie en la sombra, pero también nosotros queremos nuestro lugar bajo el sol»[60]. Ya en 1894-1895 Japón había arrebatado al débil imperio chino algunas presas, y desde hacía algunos años también Rusia hacía sus primeras tentativas de penetración económica en Corea. El avance alemán desencadenó, sin embargo, un asalto general sobre China, con el objetivo de conquistar bases comerciales, concesiones y esferas de intereses. Rusia tomó Port Arthur; Francia, Hainan, e Inglaterra, que seguía con inquietud la penetración de las otras potencias en China por los efectos que podía tener sobre la industria textil inglesa en Lancashire, se quedó con Wei-Haiwei. En este momento hicieron su aparición también los Estados Unidos; en la

guerra hispano-americana de 1898 destruyeron el imperio colonial español y se anexionaron Cuba, Puerto Rico, Hawai, Guam y, con gran desilusión del gobierno alemán (que ya les había puesto el ojo encima y enviado una unidad de la flota del Extremo Oriente), también las Filipinas. Sólo una parte de Samoa y las Carolinas pasaron a Alemania; un resultado bien pobre comparado con las importantes ganancias que habían obtenido sus rivales en la carrera de los últimos años por los escasos territorios aún colonizables.

La evolución en Extremo Oriente, especialmente el avance ruso en Manchuria, reavivó el contraste entre Rusia e Inglaterra, que Salisbury había tratado de hacer desaparecer. Al mismo tiempo estalló la guerra anglo-boer, una guerra que los ingleses habían preparado, desde luego, con refinamiento diplomático. El Reich alemán, que ya en 1898 había renunciado en gran medida a influir en la cuestión boer, decidió ahora, con la esperanza de que los ingleses se acordaran en un futuro del favor que recibían, mantenerse en una estricta neutralidad, aunque la opinión pública tomase apasionadamente partido por los boers. Además, en noviembre de 1899, Guillermo II, acompañado por Bülow, emprendió una visita oficial a Inglaterra, a pesar de la atmósfera claramente anti-inglesa que reinaba en Alemania. El Kaiser fue recibido con una cordialidad insólita. Las posibilidades de un acercamiento anglo-germano parecían de nuevo más cercanas.

Gran Bretaña se encontraba en aquel momento en una situación extremadamente crítica en política internacional. En Sudáfrica los boers oponían a las tropas inglesas, contra todo pronóstico, una resistencia tenaz y eficaz, y las operaciones empeñaban, más de lo previsto, las fuerzas militares de Gran Bretaña. Al mismo tiempo, en el Extremo Oriente, Inglaterra estuvo a punto de entrar en guerra contra Rusia, que con tenaz obstinación intentaba adueñarse de toda Manchuria. Y finalmente tampoco faltaban ahora voces en Francia que pedían «venganza por Faschoda», si bien el propio gobierno francés mostraba escaso interés en tomar partido por la causa de los boers. Por eso el Reich alemán parecía a muchos ingleses el aliado ideal de la política inglesa, aunque el primer ministro Salisbury no era muy propenso a dejarse atar las manos por acuerdos con otras potencias. Chamberlain renovó su propuesta de un pacto anglo-alemán, y poco más tarde trató de crear, en un significativo discurso en Leicester, un ambiente favorable en la opinión pública inglesa: Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos de América, pueblos de raza afín —así opinaba—, estaban llama-

dos a dirigir juntos el mundo, y por ello debían de colaborar en la situación política actual.

Aparte de que la diplomacia alemana tampoco podía creer ahora en la seriedad de la oferta inglesa de una alianza, que efectivamente no era aún definitiva, se temía —no sin razón— atraerse la ira de Rusia; y en efecto, en el caso de un conflicto armado, Alemania hubiese tenido que afrontar la primera el peso de un ataque ruso. Al mismo tiempo, se había convencido de que esperando aún un poco, la situación político-mundial de Alemania mejoraría y que, entonces, se podrían obtener de Inglaterra mayores concesiones. En cambio, fueron acogidas favorablemente las sugerencias de la diplomacia inglesa de concluir, de momento, acuerdos sobre cuestiones particulares, como por ejemplo sobre China, el ferrocarril de Bagdad y Marruecos. Pero las buenas relaciones anglo-alemanas se enturbiaron en enero de 1900 con la captura injustificada de algunos buques alemanes en aguas sudafricanas; a este incidente sobrevino un grave conflicto diplomático, y sobre todo una ola de protestas de la opinión pública alemana contra la actitud inglesa, que el gobierno del Reich supo aprovechar rápidamente haciendo aprobar por el parlamento un nuevo proyecto naval. La construcción acelerada de una gran flota alemana de guerra, claramente en función antibritánica, no alentaba precisamente a los ingleses a considerar los intereses políticos del Reich alemán en mayor medida que hasta entonces, aunque Tirpitz, con su «teoría del riesgo», sostuviese lo contrario. Antes bien, la construcción de la flota suscitó, sobre todo en la opinión pública inglesa, una desconfianza cada vez mayor hacia los objetivos de la política alemana, reduciendo la voluntad, ya de por sí no demasiado fuerte, de llegar con el Reich alemán a un acuerdo de gran alcance. De esta manera quedaron por ahora sin resultados concretos los prometedores comienzos de un acercamiento anglo-alemán, que ya habían encontrado una primera expresión en las conversaciones sobre una eventual repartición de Marruecos y sobre una participación del capital inglés en la construcción del ferrocarril de Bagdad. De cualquier modo, Alemania en aquel momento no tenía un deseo muy fuerte de instalarse políticamente en la parte meridional de Marruecos. Los alemanes sólo eran imperialistas a medias, y en el fondo deseaban únicamente dejar posibilidades abiertas para el futuro, en vez de aprovechar enérgicamente lo que entonces estaba al alcance de su mano. En marzo de 1900 las relaciones germano-inglesas se enfriaron aún más, ya que en Londres se sospechó que el gobierno alemán no sólo no había rechazado el proyecto de una intervención común en la guerra anglo-boer (proyecto propues-

to por los rusos a Alemania y a Francia), sino que lo había aceptado y desarrollado. Esta sospecha carecía de fundamentos y se debía a indiscreciones intencionadas francesas; pero ahora el gobierno inglés ya no estaba dispuesto a hacer concesiones de ningún género a Alemania como recompensa a su neutralidad en la cuestión boer.

La evolución de los acontecimientos en China obligó, sin embargo, a los ingleses a buscar de nuevo la amistad de Alemania. En el verano de 1900, China fue sacudida por graves agitaciones contra los invasores europeos —los contemporáneos hablaron, dogmatizando ingenuamente su punto de vista de ambos coloniales, de la «insurrección de los bóxers». Si bien el movimiento de los bóxers fue aplastado relativamente pronto por un ejército internacional, cuyo comandante en jefe, el alemán conde Waldersee, apareció demasiado tarde en el campo de batalla como para haber podido incidir, todavía decisivamente, en el curso de los acontecimientos, se produjeron aún considerables complicaciones internacionales. Rusia aprovechó la ocasión para reforzar su posición en Manchuria y manifestó claramente la tendencia de someter a su influencia política y económica toda la China septentrional. Esto irritó a la diplomacia inglesa, la cual quería evitar por todos los medios un ulterior desmembramiento de China, que habría determinado la progresiva eliminación del comercio internacional, y en particular del inglés. En aquellas circunstancias se estipuló, en octubre de 1900, entre Alemania e Inglaterra, el llamado tratado del Yangtse, por el cual ambas potencias se comprometían a respetar en sus respectivas esferas de influencia el principio de la «puerta abierta», y a «orientar su política hacia el total mantenimiento de la situación territorial del imperio chino»[61]. En caso de que otras potencias tratasen de obtener ventajas territoriales en China, Inglaterra y Alemania se pondrían antes de acuerdo sobre las iniciativas comunes a tomar con el fin de garantizar sus intereses.

Este tratado, que podía haberse convertido en una etapa importante en el camino hacia una convivencia entre Inglaterra y Alemania en las cuestiones de política internacional, se convirtió en fuente de nuevas discordias. Con este tratado la política inglesa perseguía, sobre todo, el objetivo de impedir el ulterior avance de Rusia en el Extremo Oriente. Pero Bülow se negó a aceptar esta interpretación, y así bastaron pocos meses para convertir el tratado en letra muerta. De parte alemana se tenía el exagerado temor de estar sacando las castañas del fuego a Inglaterra, y en las cuestiones relativas al Extremo Oriente no se querían tomar compromisos contra Rusia. Pero sobre todo no se quería renunciar a la ventaja estratégica de la «mano li-

bre» entre ambas potencias, con la esperanza de que esta línea política produjera abundantes frutos en el curso de pocos años. Holstein contaba ahora firmemente con una guerra anglo-rusa en la que Alemania hubiese representado el papel del espectador que ríe. Los ingleses, por su parte, estaban disgustados por la inestabilidad de la política alemana, que prometía amistad para echarse siempre atrás en el último momento.

A pesar de todo, volvieron a celebrarse en marzo de 1901 negociaciones para una alianza anglo-alemana, emprendidas por parte inglesa con la esperanza de alcanzar la neutralidad de Alemania, en previsión de la inminente guerra ruso-japonesa. El barón de Eckardstein, primer secretario de la embajada alemana en Londres, aprovechó la ocasión para intentar, por cuenta propia, llevar a cabo una alianza defensiva germano-inglesa. Este pretendió ante el ministerio de Asuntos Exteriores haber recibido una oferta formal de alianza por parte del ministro del Exterior inglés Landsdowne, mientras que en realidad había tomado él mismo esa iniciativa, no respetando las estrictas órdenes de sus superiores. Holstein creyó confirmada su tesis de que Alemania tenía la llave de la situación en sus manos y que no debía hacer otra cosa que esperar a que Inglaterra tomase la iniciativa, optando por una línea dilatoria en un grave error de apreciación. Los alemanes estaban convencidos de que, ante el inminente conflicto con Rusia, Inglaterra estaría obligada, tarde o temprano, a presentar a Alemania una oferta mucho más interesante, y en Berlín se sostenía que, en tal caso, una alianza defensiva entre Alemania e Inglaterra no sería suficiente; Inglaterra tenía que adherirse, con todas las consecuencias, a la Triple Alianza —una exigencia que el gobierno inglés no hubiese podido aceptar fácilmente. Cuando Landsdowne rechazó en diciembre de 1901 la idea de un acuerdo de carácter general, proponiendo a su vez acuerdos sobre cuestiones concretas, se reaccionó en Berlín con asombro y alivio. Ciertamente, la diplomacia alemana había cometido un grave error de cálculo. Bülow y Holstein sobrevaloraron de manera excesiva la fuerza de la posición alemana en el sistema de potencias. Ellos creían que, ante el agravamiento del contraste entre Inglaterra y Rusia, el tiempo trabajaba en favor de Alemania. De esta manera la política alemana siguió cabalgando por las nubes y rechazó fríamente, poco más tarde, cualquier tentativa de alianza de parte rusa, igual que análogas iniciativas de parte francesa. Para Alemania, en las actuales circunstancias «no había razón para abandonar la política de la mano libre». Así lo creía Holstein aún en marzo de 1902 [62]. Esta actitud se reveló pronto como fatal; tanto más por cuanto que

las otras potencias se sentían cada vez más ofendidas por el tono arrogante y con frecuencia brusco de la diplomacia alemana.

De esta manera las otras potencias comenzaron a ponerse de acuerdo entre sí, concluyendo en materia de política colonial toda una serie de acuerdos bilaterales en los que no se tenía en cuenta a Alemania, que solía ser la parte más perjudicada políticamente. Menos desventajoso para la posición de Alemania fue el pacto que firmó Inglaterra en 1902, después del fracaso de las negociaciones germano-inglesas con el Japón, en sustitución del respaldo alemán, irritada además por los discursos anglófobos que Bülow hacía en el *Reichstag,* los cuales estaban sin embargo destinados exclusivamente al consumo del mercado interno. Más preocupantes para Alemania fueron los contactos que Francia lograba ahora establecer tanto con Italia como con Inglaterra; estas relaciones estaban destinadas en un principio exclusivamente a la preparación diplomática de una gradual toma de posesión de Marruecos, pero en sus resultados finales terminaron por perjudicar también las posiciones de las potencias centrales dentro del sistema europeo. Ya en el año 1902 y aunque fuera del espíritu de la Triple Alianza, Italia había concluido con Francia un acuerdo secreto por el que obtenía mano libre para la futura conquista de Trípoli a cambio de libertad de acción para Francia respecto a Marruecos. Hacia el final del otoño de 1902, la diplomacia italiana llevaba su doble juego al extremo, renovando la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría, y asegurando al mismo tiempo a Francia, a través de un intercambio de notas diplomáticas, que Italia conservaría una estricta neutralidad en el caso de que Francia fuera atacada por una o más potencias, o que se viese obligada a declarar una guerra a raíz de una provocación o para defender su honor o su seguridad. Aunque estos dos acuerdos, si se tomaban al pie de la letra, no eran contradictorios, se había abierto en la Triple Alianza una primera brecha.

De manera menos directa, pero más duradera, la posición de Alemania quedó debilitada por la conclusión de la *Entente Cordiale,* en 1904, entre Inglaterra y Francia. En cuanto a su contenido ésta fue más bien una *détente,* ya que de parte inglesa estaba dirigida exclusivamente a la eliminación de los contrastes aún existentes en las cuestiones coloniales. En el fondo, la *Entente Cordiale* no hizo otra cosa que continuar el acuerdo de 1899. Inglaterra prometió apoyar diplomáticamente las aspiraciones que Francia tenía en Marruecos, a cambio del reconocimiento de su *status* político en Egipto. Aunque este acuerdo no hacía mención a las cuestiones de política europea y, por tanto, no podía considerarse de modo alguno como una ma-

niobra dirigida contra Alemania, significaba un duro golpe contra el Reich alemán, que sólo pocos años antes había pedido a Inglaterra el reconocimiento de su derecho de participación activa en una eventual reglamentación definitiva de la cuestión marroquí. Oficialmente el gobierno alemán se expresó en términos moderados, mientras que en el interior reaccionó, sobre todo Holstein, de manera extremadamente preocupada: «¡Buena la hemos armado! Será difícil que Inglaterra y Francia nos ataquen (...), pero no podemos hacer conquistas en ultramar. No soy yo el que pide tales conquistas, pero una gran masa del pueblo las pide a voces y se maravilla de que no quede nada para Alemania (...). Teniendo enfrente a Inglaterra y Francia, no se puede perseguir una política de Ultramar»[63]. El hecho de que, desde 1903 en adelante, al menos el proyecto del ferrocarril de Bagdad hubiese hecho notables progresos, constituía un escaso consuelo, aunque se chocaba cada vez más contra la resistencia de Rusia, aumentando de esta manera las dificultades políticas para Alemania.

La conclusión de la *Entente Cordiale* despertó bruscamente a la diplomacia alemana de la autocomplacencia que había ostentado hasta aquel momento. De pronto descubrió que la política de «manos libres» no había servido para nada, ni desde el punto de vista de la posición de poder de Alemania, ni desde el punto de vista de sus esperanzas en el plano de la política colonial. Por ello se esforzó ahora en romper el aislamiento que amenazaba a Alemania, ofreciendo una alianza a Rusia. En aquel momento las perspectivas eran favorables sobre todo porque el comienzo de la guerra ruso-japonesa en la primavera de 1904 había dado al Reich alemán una posición clave en el sistema de las potencias europeas. En Londres se observaba a Alemania con gran desconfianza; con indignación se comprobaba que aquélla prestaba ayuda técnica a la flota rusa en la guerra contra el Japón. Y en Alemania, en cambio, se extendió un descontento cada vez mayor por la política inglesa, a la que se reprochaba de pasar de nuevo por alto descaradamente los intereses de Alemania en las tierras de ultramar. En ambas partes crecía la irritación y se atribuía en cada ocasión a la nación rival la culpa principal de las propias dificultades. Los ingleses observaban la flota alemana con creciente preocupación y el propio almirante Fisher consideró la eventualidad de si no era mejor «to Copenhagen the German fleet» antes de que fuese demasiado tarde[64]. De ambas partes del Canal se difundió el miedo a un ataque por sorpresa, llegando incluso a preocupar a la política oficial. Así, era natural que el gobierno del Reich aprovechase las profundas tensiones existen-

tes entre Rusia e Inglaterra, para proponer al gobierno ruso la conclusión de una alianza continental entre Alemania, Rusia y Francia, con el objetivo principal de aislar el conflicto ruso-japonés y sucesivamente de privar a la alianza ruso-francesa de 1894 de su carácter amenazante. Después del incidente en el mar del Norte (en Dogger Bank) del 21 de octubre de 1904 (en la espesa niebla la flota rusa del Báltico, en ruta hacia el Extremo Oriente, había tomado a algunos pesqueros ingleses por unidades japonesas y los había hundido), las tensiones entre Rusia e Inglaterra habían desencadenado casi un conflicto mundial. Pero las negociaciones entre Alemania y Rusia no llevaron a ningún resultado concreto, ya que los rusos se negaron a imponer a Francia una alianza semejante, mientras que los franceses hacían todo lo posible por impedir su realización.

Rechazado en San Petersburgo y en París, el gobierno alemán se decidió a una ofensiva diplomática, con la que intentaba romper las alianzas dirigidas contra Alemania y al mismo tiempo demostrar que no se podía mantenerla al margen impunemente en las cuestiones de política mundial. Como punto de partida se eligió Marruecos, donde Francia, en virtud de sus tratados con Italia, y de un acuerdo suplementario con España, había comenzado a instalarse cómodamente, aunque no poseía ningún título jurídico (tampoco según el texto de la *Entente Cordiale)*, y además el sultán de Marruecos continuaba siendo considerado el único soberano del país. La combinación franco-inglesa debía ser atacada en su punto débil, y en un momento en que Rusia, aliada de Francia y gravemente comprometida por el desfavorable curso de la guerra contra el Japón, no podía prestar ayuda militar. No fue en realidad por motivos de política colonial, sino sobre todo por motivos de prestigio y de acuerdo con consideraciones de política de alianzas, por lo que Holstein y Bülow escenificaron el desembarco de Guillermo II en Tánger el 31 de marzo de 1905. Esta ostensible revalorización de la soberanía del Sultán de Marruecos pretendía desbaratar eficazmente los planes franceses. El gobierno del Reich alemán estaba firmemente decidido a no dejar recoger a Francia los frutos de la *Entente Cordiale.* Se contaba también con el hecho de que las relaciones franco-inglesas no habrían podido sobrevivir a esta prueba y que la unión franco-rusa sufriría una debilitación. Formalmente, la intervención de Alemania en favor del *statu quo* en Marruecos estaba bien justificada, ya sea en el plano diplomático o en el del derecho internacional, tanto más cuanto que Francia, al pasar por alto completamente la posición de Alemania en la cuestión marroquí, había quedado al descubierto. De esta manera Alemania, si bien sólo con la

amenaza de recurrir a medidas militares, pudo obtener de Francia concesiones parciales, y especialmente imponer por la fuerza la caída del ministro del Exterior francés, Delcassé, exponente en el Quai d'Orsay de una política filoinglesa.

En plena euforia, Alemania no se contentó con este triunfo parcial y quiso hacer total la humillación de Francia. La política marroquí de Francia debería someterse al juicio de una conferencia compuesta por todas las potencias que habían firmado el tratado de Madrid de 1880. Bülow confiaba con optimismo en que la gran mayoría de las potencias europeas, y sobre todo los Estados Unidos, apoyarían la tesis alemana según la cual todas las naciones europeas disfrutaban de los mismos derechos económicos y políticos en Marruecos, y la soberanía del Sultán no debía ser reducida en favor de una sola nación. Las exigencias alemanas fueron, sin embargo, consideradas poco sinceras por la mayoría de las otras potencias, y lo eran efectivamente, ya que la intervención en favor del Sultán no tenía otro fin que el de tener una puerta abierta para poder poner más adelante las manos sobre la presa marroquí. Sobre todo, Inglaterra reaccionó con gran hostilidad a la táctica mezquina y maquiavélica empleada por la diplomacia alemana. En lugar de hacer saltar la *Entente Cordiale,* como había esperado Holstein, la política alemana produjo el efecto contrario, transformándola en un acuerdo que abarcaba incluso las cuestiones de la política europea. Por primera vez tuvieron lugar acuerdos militares entre Francia e Inglaterra acerca de operaciones conjuntas en el caso de una guerra contra las potencias centrales. Sir Edward Grey, ministro del Exterior en el gabinete liberal de Campbell-Bannerman, apenas llegado al poder, dudó en llevar a cabo acuerdos políticos de manera oficial con Francia, pero, por otra parte, dirigió clara y sistemáticamente la política exterior inglesa en sentido profrancés. Ya entonces empezó a dibujarse la configuración política de las alianzas, que en 1914 habría de resultar fatal para las potencias centrales: la alianza de Inglaterra con Francia y —a través de París— también con Rusia.

En esta situación tan poco alentadora, Guillermo II en persona trató de concluir con Rusia una alianza defensiva. Con motivo de un encuentro con Nicolás II en la bahía de Björkö pudo obtener la firma del zar en un documento-tratado que tenía desde un principio un valor reducido, por estar su validez limitada al territorio europeo. Tanto la diplomacia rusa como la alemana hicieron en el futuro caso omiso del tratado de Björkö, como si éste no hubiese existido nunca, tanto más por cuanto que el gobierno francés se negó a adherirse a semejante acuerdo. Este ejemplo de diplomacia personal y autocrática, el

último en la historia de Europa, termina en un fracaso, dejando en una y otra parte un profundo descontento.

Que Alemania, por culpa de su diplomacia, oscilante entre los distintos campos e incapaz de darse un barniz de credibilidad, había terminado en un callejón sin salida, se puso de manifiesto con toda claridad con motivo de la conferencia internacional sobre Marruecos, que se celebró en enero de 1906 en Algeciras por deseo de Alemania. En completo contraste con las expectativas optimistas del príncipe Bülow, el Reich alemán se encontró finalmente en un aislamiento casi completo; solamente Austria-Hungría le dio su apoyo incondicional. Por el momento se pudo conservar formalmente el *statu quo* en Marruecos, pero la concesión de los derechos de policía a Francia y, en la esfera de influencia española, a España, dio a ambas potencias un instrumento eficaz para una gradual anexión política y económica del país.

El intento de Alemania de interferir los acuerdos entre las otras potencias en materia de política colonial, sin estar en condiciones ya, por razones económicas, de perseguir en aquel momento una política sistemática de conquistas coloniales, se concluye así con su exclusión del círculo de las otras grandes potencias. Cuando al año siguiente Inglaterra y Rusia se dividieron Persia en zonas de influencia, quedó bien claro lo ilusoria que había sido la previsión de Holstein de que, en vista de la insalvable hostilidad entre el león británico y el oso ruso, una política de la «mano libre» habría permitido prestar en el momento oportuno servicios preciosos a ambas partes, obteniendo así grandes recompensas. No fue, por lo tanto, una política imperialista declarada y sistemática la que provocó el aislamiento de las potencias centrales, sino una política de prestigio inestable y oscilante. La creciente desconfianza de las otras grandes potencias hacia la política alemana se fue convirtiendo cada vez más en una amenaza para la paz europea, ya que en todas partes se tendía ahora a oponerse a los deseos de Alemania, incluso cuando estaban justificados. Así se fomentó la tendencia de Alemania a imponer estos deseos a toda costa con una mayor presión militar y un aumento del potencial bélico, que necesariamente creaba un peligro de guerra cada vez mayor. No fue casualidad que la segunda conferencia de La Haya de 1907 concluyera sin ningún resultado concreto. El gobierno alemán se negó decididamente a considerar una reducción del armamento y una restricción de la soberanía nacional por un sistema de tribunales arbitrales o algo parecido, y además las otras potencias tampoco eran partidarias de ello. Sin embargo, la actitud del Reich no era tan injustificada, si se tiene en cuen-

ta que Alemania se habría visto más perjudicada que las otras potencias por una congelación del armamento en 1907 y por la consiguiente cristalización de las posiciones de poder de las grandes potencias.

Mientras las otras potencias trataban de consolidar sus imperios coloniales, renunciando a ampliarlos ulteriormente, para Alemania el paso a gran potencia colonial era abandonado al futuro.

El problema consistía en saber si esto sería posible empleando sólo medios pacíficos. En Berlín se era aún optimista en este sentido, pero el propio Bülow tenía que admitir que la situación política general se había desplazado alarmantemente en contra de Alemania, y por ello recomendó llegar a un acuerdo con Inglaterra sobre la reducción del armamento naval de ambos países, con el fin de eliminar, al menos, un elemento potencial de conflicto. Pero la desconfianza de las otras potencias con respecto a la política alemana había aumentado extraordinariamente y el área de acción para una política colonial de Alemania se había reducido al mínimo. Esta restricción de la libertad de movimiento afectaba naturalmente también, en cierta medida, a las otras grandes potencias. En el curso de dos decenios de lucha encarnizada por la adquisición de territorios de ultramar, las tensiones dentro del sistema de las potencias europeas y la presión que las clases medias ejercían sobre sus gobiernos, habían alcanzado un grado tan extremo que cualquier intento de modificar las relaciones de poder existentes entrañaba el riesgo de un conflicto europeo general. Pero aún existía la esperanza de que Europa se detuviese a tiempo en este camino antes de caer en el abismo.

3. Difusión del principio democrático en Europa (1906-1914)

I. EL TRIUNFO DEL LIBERALISMO RADICAL EN INGLATERRA

Ya hacía tiempo que en toda Europa las grandes masas habían hecho, gradualmente y en muchas ocasiones imperceptiblemente, su entrada en la escena política, pero en casi ningún país este estado de cosas se había traducido aún en normas constitucionales. Al contrario, las élites dominantes, que normalmente provenían de la nobleza y de la alta burguesía y que raramente negaban en la acción política su origen, habían revelado claramente la tendencia a hacer frente común contra las masas en ascenso. Con el apoyo de los poderes tradicionales del Estado habían podido en un principio cerrar el paso a las débiles y divididas fuerzas democráticas, en su marcha hacia la participación en el poder. Después de la revolución rusa de 1905, cuyos grandes triunfos iniciales fueron seguidos en toda Europa con esperanzas exageradas o con preocupación e inquietud, cambió súbitamente la situación. Hasta entonces se había llevado a cabo el proceso de democratización de las estructuras sociales en la sombra, y en cierto modo indirectamente, cuanto más que la atención de los sectores burgueses estaba completamente absorbida por la idea imperialista. Pero ahora las tendencias democráticas se manifestaban abiertamente, iniciándose un período de luchas por la destrucción progresiva de los bastiones tradicionalistas en el Estado y en la sociedad, así como por una participación directa de las masas populares en las decisiones políticas.

En Inglaterra los conservadores y los *Liberal Unionists*, bajo el signo de un imperialismo agresivo hacia afuera y de una política estática en el interior, habían condenado a la impotencia política al liberalismo durante dos decenios y habían conservado con éxito la supremacía de las élites tradicionales, en las que dominaban las antiguas grandes familias de la alta aristocracia, que, mientras tanto, se habían unido cada vez más estrechamente a la alta finanza y a la gran industria, si bien a cambio de una serie de concesiones a las grandes masas populares. En las elecciones de enero de 1906 los electores ingleses

retiraron ostensiblemente su apoyo a esta política. Ahora sólo 132 conservadores y 25 *Liberal Unionists* se encontraban frente a 377 liberales; el nuevo primer ministro, Campbell-Bannerman, que en la guerra contra los boers había tenido muchos enemigos encarnizados, disponía ahora en la Cámara de los Comunes (o cámara baja) de una grandísima mayoría y podía por ello poner en marcha sin dilaciones una política de amplias reformas en el sistema estatal y en la estructura social. La situación de la mayoría en la Cámara de los Comunes presentaba, sin embargo, dos defectos. Los nacionalistas irlandeses habían conseguido obtener no menos de 83 escaños en el Parlamento e insistían cada vez más decididamente en la realización de la independencia de Irlanda, que desde los tiempos de Gladstone había sido prometida repetidamente por los liberales. El problema era candente porque en Inglaterra el proyecto no había sido nunca popular. Pero mucho más importante era el hecho de que ahora no menos de 54 diputados laboristas ocuparan un escaño en la Cámara de los Comunes; 29 de ellos eran miembros del *Labour Representation Committee.* Si bien la mayor parte de los diputados laboristas habían entrado en el Parlamento sólo gracias a la estrecha colaboración con el *Liberal Party,* constituyeron pronto un grupo propio en la cámara baja y, con fines demostrativos, ocuparon, contrariamente a la costumbre tradicional, los bancos de la oposición. El *Labour Party* había nacido, y con él había surgido una nueva fuerza política que se disponía a iniciar con los liberales la lucha por el favor de las masas populares de los electores ingleses. Para el nuevo gobierno liberal ahora lo importante era, por una parte, acabar decididamente con dos decenios de hegemonía conservadora y, por otra, rebasar los objetivos del *Labour Party* mediante una generosa política de reformas sociales.

En lo que respecta a la política exterior, el resultado de las elecciones fue decididamente desfavorable al imperialismo de los últimos años, y al proyecto de una unión aduanera imperial elaborado por Chamberlain. Pero al confiar Campbell-Bannerman el *Foreign Office* al imperialista liberal Grey, el viraje no fue tan brusco como se había temido en muchos sectores. No obstante, Campbell-Bannerman, a pesar de las violentas protestas de los conservadores, decidió reparar la injusticia cometida contra los boers, concediendo la plena autonomía administrativa al Transvaal y a la Colonia de Orange River; una decisión realmente importante de cara al futuro, que los boers supieron apreciar. Sólo tres años más tarde se unieron las antiguas repúblicas boers con la Colonia del Cabo para formar la Unión Sudafricana, que había de ser uno de los dominios

más estrechamente ligados a la madre patria. Pero en primer plano se encontraban todavía los problemas de política interior, sobre todo la política social. Con el *Trade Disputes Act* de 1906 quedó anulada la decisión tan nefasta del Taff Vale de 1901 restituyéndose a los sindicatos su antiguo *status* jurídico. Se acometieron además una serie de pequeñas reformas de carácter político-social, como por ejemplo la creación de oficinas públicas de empleo en las grandes ciudades industriales. Se trató también de afrontar el problema del *sweating,* es decir, la ocupación de trabajadores con sueldos ínfimos en trabajos caseros o en pequeñas industrias. Fracasó en cambio, a causa del veto de la Cámara de los Lores, un amplio proyecto de ley que preveía una reforma radical del sistema escolar y que pretendía además eliminar la subordinación de las confesiones protestantes con respecto a la Iglesia anglicana, subordinación que era una consecuencia de la ley escolar conservadora de 1902. La misma suerte corrió una ley con la que se quería suprimir el sistema del *plural vote,* sistema que favorecía excesivamente a las clases poseedoras, ya que hasta entonces todo individuo podía emitir su voto en todas las circunscripciones en las que era propietario de posesiones o tierras. La Cámara de los Lores (o cámara alta), en la que tradicionalmente todos los pares hereditarios tenían derecho a un escaño, no representaba ya desde hacía mucho tiempo solamente a la aristocracia latifundista; también la alta finanza, la industria y la economía se encontraban fuertemente representadas en ella, en parte como consecuencia de la fusión cada vez más acentuada de la antigua élite aristocrática con la nueva élite industrial y en parte a causa de las numerosas concesiones de títulos nobiliarios. Y sin embargo ésta sólo contaba con un exiguo grupo de pares liberales; la inmensa mayoría hacía causa común con el partido conservador, tanto en el plano social como en el personal. Landsdowne y Balfour, los jefes del partido conservador, no dudaban en abusar, con fines de política de partido, de la posición de poder que la Cámara de los Lores poseía tradicionalmente en el ámbito de la no escrita *British Constitution* aunque esto no correspondía a las tradiciones políticas de Inglaterra. Así la cámara alta comenzó, análogamente a cuanto había ya hecho en los años 1893-1895, a bloquear sistemáticamente la legislación liberal, a excepción de los proyectos de ley de naturaleza político-social, cuya recusación hubiese sido muy poco popular. En efecto, las clases superiores, y con éstas los lores, veían seriamente amenazada la supremacía que habían podido mantener durante todo el siglo XIX dentro del régimen parlamentario existente, por la política del gabinete de Camp-

bell-Bannerman. El presupuesto de Asquith para el año 1907-1908 fue considerado simplemente como una muestra de lo que aún quedaba por venir; por primera vez la repartición del peso tributario se basaba en el principio de la justicia social; mientras que las rentas bajas eran tasadas en menor medida, Asquith apretó con más energía las tuercas a las grandes fortunas. Aunque los impuestos seguían siendo aún visiblemente bajos, las clases poseedoras veían en ello un primer paso en la vía hacia una legislación tributaria que no perseguía únicamente fines fiscales, sino que trataba de realizar una distribución igualitaria del patrimonio.

En aquella situación el contraste entre el gobierno y la Cámara de los Lores fue adquiriendo cada vez mayor dureza. Pero ahora se planteaba el problema fundamental consistente en ver si la cámara alta tenía verdaderamente derecho a bloquear la legislación de un gobierno liberal que disponía en la cámara baja de una fuerte mayoría, sin responsabilizarse políticamente frente a la nación. Difícilmente podía tolerar, a la larga, el gobierno liberal la política de obstrucción de los pares sin arruinarse políticamente. Ya en 1907 Campbell-Bannerman advierte la necesidad de limitar de alguna forma el derecho de veto de la Cámara de los Lores. El propuso, para el caso de que la cámara alta rechazara un proyecto de ley, nombrar una comisión compuesta por miembros de las dos Cámaras, que tendría la misión de elaborar un compromiso. En el caso de que también fuese rechazada esta decisión de compromiso por los pares, se repetiría de nuevo todo el procedimiento. Si tampoco este sistema llevaba a una solución, debería prevalecer la voluntad de los Comunes. Pero esta propuesta, extremadamente ponderada, de una restricción del derecho de veto de parte de la Cámara de los Lores, no encontró el apoyo de los conservadores. Por esta razón el problema de una modificación de la posición jurídico-constitucional, o al menos de la composición de la Cámara de los Lores, permaneció en el orden del día. Irritados por la continua política obstruccionista de los pares, los liberales empezaron a elaborar un proyecto de legislación que fuese apropiado para aventurarse en su lucha contra la Cámara de los Lores. Los conservadores fueron lo bastante inteligentes como para dejar aceptar el proyecto de seguro de vejez que Asquith (que había sucedido en abril de 1908 a Campbell-Bannerman) consiguió que fuese aprobado en agosto de 1908 por la cámara baja, después de largos y acalorados debates; oponiéndose a tal proyecto habrían ofrecido al gobierno un terreno favorable para darles la batalla. Este nuevo ordenamiento de previsión para la vejez, que a diferencia del alemán debía ser

financiado exclusivamente con fondos públicos, sin contribuciones por parte de los propios trabajadores o de los empresarios, requería aún un notable aumento de los impuestos. Lloyd George, ahora canciller del Tesoro (Chancellor of the Exchequer) e indudablemente la personalidad más destacada del gabinete de Asquith, decidió elaborar el siguiente presupuesto de forma tal que los pares lo interpretaran como un desafío, y no dudó en pronunciarse en términos provocativos con el fin de atraer a la Cámara de los Lores a la trampa de rechazar este proyecto. El 29 de abril de 1909 Lloyd George presentó a la Cámara de los Comunes el presupuesto para el año 1909-1910, justificándolo con un gran discurso de cuatro horas y media. Era, en efecto, un presupuesto revolucionario que abría caminos completamente nuevos. Mientras que para las rentas bajas Lloyd George preveía una disminución de las cargas tributarias, e introducía por primera vez una reducción proporcional al número de hijos, la progresión del impuesto sobre las rentas aumentaba notablemente. Además se imponía una sobretasa progresiva sobre las rentas superiores a las 5.000 libras. También se reforzó considerablemente la progresión del impuesto sobre las herencias y los donaciones. Lloyd George estableció igualmente un impuesto de plusvalía para las tierras y otro —aunque muy bajo— sobre los terrenos no cultivados. Aunque estos impuestos, comparados con la situación actual, seguían siendo muy bajos, afectaban de hecho sobre todo a las grandes fortunas, y especialmente a las grandes propiedades de las antiguas familias aristocráticas. Como consecuencia, exactamente como había previsto Lloyd George, se desencadenó por parte de los conservadores y del *establishment* una serie de protestas contra este presupuesto «socialista». Y después de que la Cámara de los Comunes hubiera aprobado el presupuesto el 11 de noviembre de 1909, los pares lo rechazaron a finales de noviembre; víctimas de una ola de pánico irracional, veían en peligro el sistema social de Inglaterra. Esta decisión de la Cámara de los Lores equivalía a una ruptura flagrante del viejo principio constitucional, si bien nunca fijado por escrito, según el cual la Cámara de los Lores no podía rechazar nunca leyes puramente financieras, paralizando así el mecanismo del Estado. Era también la situación que habían esperado hacía tanto tiempo los dirigentes del partido liberal, los cuales podían enfrentarse a los conservadores en un terreno extremadamente favorable. Ahora eran los liberales y no los lores los que podían presentarse como los verdaderos defensores del tradicional derecho constitucional de Inglaterra, y podían proponer una limitación de los derechos de la Cámara

de los Lores como necesaria para la salvaguardia de la Constitución. La Cámara de los Comunes aprobó de esta manera con una gran mayoría una resolución del primer ministro Asquith, la cual establecía que los lores, al rechazar el presupuesto, se habían hecho culpables de una «violación de la Constitución y de una usurpación de los derechos de los Comunes».

En vano el rey Eduardo VII había intentado evitar esta escalada en el conflicto entre los lores y el gobierno liberal. Ahora no le quedaba otra cosa que conceder a Asquith su consentimiento para disolver la cámara baja. El llamamiento que lanzó Asquith a los electores no tuvo, sin embargo, el eco que éste había deseado, pero a pesar de todo el resultado de las elecciones significó una derrota para la causa de los conservadores y la Cámara de los Lores: resultaron elegidos 275 liberales, 40 laboristas y 82 nacionalistas irlandeses, contra 273 conservadores. Asquith no se limitó a imponer la aprobación del presupuesto a la Cámara de los Lores, sino que pasó abiertamente a la ofensiva: presentó a la Cámara de los Comunes un *Parlamentary Bill,* en el que se establecía una vez más que la Cámara de los Lores no tenía el derecho de rechazar proyectos de ley puramente financieros. El *Parlamentary Bill* contenía, además, una disposición por la que el veto de la Cámara de los Lores sólo habría de tener desde entonces fuerza suspensiva; después de dos vetos sucesivos, los pares ya no podrían bloquear los proyectos de ley presentados por los Comunes. Los conservadores reaccionaron inmediatamente proponiendo una reforma radical de la Cámara de los Lores, cuya composición era demasiado anacrónica en vista de la situación social y las necesidades legislativas. Con esta propuesta ellos intentaron legitimar nuevamente el derecho de la cámara alta al veto absoluto. Pero por el momento no se llegó a ningún resultado concreto, ya que el gobierno no tenía un interés inmediato en este asunto.

Después se emprendieron tentativas, tanto en los órganos parlamentarios como entre bastidores, para llegar a un compromiso, tanto más por cuanto que la repentina muerte de Eduardo VII, el 6 de mayo de 1910, hacía necesaria una tregua temporal en la lucha política. Pero no fue posible llegar a un compromiso, ya que los conservadores querían salvaguardar a toda costa para la Cámara de los Lores el derecho a rechazar proyectos de ley de naturaleza fundamentalmente político-constitucional. Al no poder imponer esta propuesta, propusieron la poco conservadora idea de someter estos proyectos de ley, en caso de conflictos insuperables, a un referendum popular. También aquí tuvieron una importancia decisiva los

cálculos de interés político y de partido. De esta manera se quería disponer de un instrumento para poder hacer caer al menos el inminente proyecto de ley de la *Home Rule,* que los liberales, condicionados ahora por el apoyo del partido irlandés, no podían ya evitar por más tiempo. La miopía y el egoísmo de los conservadores, que carecían de una dirección decidida, no podían ser más grandes.

Después de una disolución ulterior de los Comunes en diciembre de 1910, que no había aportado ningún cambio en las relaciones de fuerza entre los partidos, en febrero de 1911 la Cámara de los Lores se vio obligada a ceder ante el peligro de que el gobierno, en caso contrario, recurriese a una destitución masiva de los pares. A pesar del gran malestar interno fue aceptado, por fin, el *Parlamentary Bill,* que establecía la abolición del derecho de veto absoluto en cualquier forma por parte de la cámara alta. Se había librado una gran batalla y el triunfo pertenecía a las fuerzas progresistas. Todos los partidos sobrevaloraron el precio de la lucha que durante más de dos años había dividido a Inglaterra en dos campos que se combatían encarnizadamente. El veto con fuerza suspensiva, que habían conservado los lores, había de revelarse como un arma extremadamente eficaz, con la que se podían abrir graves brechas en la legislación de los liberales. De hecho, un aplazamiento de dos años equivalía para muchos proyectos de ley a una anulación. Recurriendo al veto suspensivo se conseguía al menos impedir que la mayoría gubernamental actuase con rapidez y energía, lo que redundaba para los liberales en un daño sensible. Por otra parte, la restricción de los derechos de los lores tenía un sentido simbólico que rebasaba ampliamente sus efectos jurídico-constitucionales. El sistema político tradicional de Inglaterra, mediante el cual una élite aristocrática bastante homogénea había gobernado al país *in trust for the people,* pasaba así a la historia. Desde entonces no se podría impedir a las masas populares su participación activa en las grandes decisiones políticas.

El triunfo sobre la Cámara de los Lores fue una gran victoria para el gobierno liberal. Pero para el futuro no se había obtenido aún ningún resultado concreto; al contrario, había que resolver otros graves problemas, entre éstos y sobre todo la cuestión irlandesa, que durante medio siglo había envenenado la política interior inglesa. Se imponía además la necesidad de dar a los trabajadores condiciones de vida más humanas. Lloyd George coronó los enérgicos esfuerzos de los liberales por crear una legislación resuelta a mejorar las condiciones míseras de las masas trabajadoras, introduciendo en 1911 un sistema or-

gánico de seguros sociales que se inspiraba en gran parte en el modelo alemán. De esta manera el Partido Liberal pudo cavar la tierra bajo los pies al «Labour Party», al menos por el momento. A pesar de todo, la clase obrera siguió agitándose, especialmente a causa de la disminución de los salarios reales. A partir de 1911, Inglaterra fue sacudida por una serie de huelgas generales que revistieron en muchas ocasiones un carácter sindicalista, y Lloyd George tuvo que emplear todas sus energías en el difícil papel de hacer de mediador entre los trabajadores y los empresarios para impedir una catástrofe. En estas circunstancias, el gobierno de Asquith prosiguió sus esfuerzos, en estrecho contacto con los sindicatos, por ampliar la legislación social; en 1913 se concede, por ejemplo, a los sindicatos el derecho explícito de emplear una parte de las cuotas de los inscritos con fines políticos, restableciendo así la situación que en 1909 la jurisdicción había puesto en discusión. Sin embargo, no cesó el fermento de la clase obrera. Aún en julio de 1914 Lloyd George se temía lo peor en el caso de una revuelta simultánea de la clase obrera y del nacionalismo irlandés.

También en la cuestión irlandesa los liberales ingleses, que aspiraban a modernizar Inglaterra según los principios liberales, se vieron bien pronto enfrentados a una situación potencialmente revolucionaria. El *Government of Ireland Bill,* que Asquith había presentado a la Cámara baja en abril de 1911, no era combatido sólo por los conservadores y la Cámara de los Lores, sino también por aquella parte de la población irlandesa que vivía en el Ulster, región septentrional de Irlanda. Desde el siglo XVII había estado el Ulster particularmente expuesto a la influencia inglesa, y los habitantes de esta parte del país eran en su mayoría protestantes, a diferencia de sus compatriotas del sur, y no querían quedar a la merced del gobierno de la mayoría católica de Irlanda, sino que preferían integrarse en el británico. El *Government of Ireland Bill* preveía, en cambio, para toda Irlanda un gobierno y parlamento propios, cuya autonomía estaba sin embargo notablemente limitada. Especialmente en todas las cuestiones imperiales, serían tomadas las decisiones por la totalidad del país y por eso también en el futuro debería estar representada Irlanda en Westminster. En el Ulster se formó, sin embargo, bajo la dirección de sir Edward Carson, un movimiento de masas contra la *Home Rule* y cuando el gobierno, bajo la presión del partido irlandés de Redmond, se negó a excluir al Ulster del ordenamiento previsto, Carson comenzó a formar un ejército privado para dar mayor peso a sus peticiones. Los nacionalistas irlandeses del sur siguieron su ejemplo, y de esta manera

se creó en Irlanda una situación próxima a la guerra civil. Asquith trató en vano de tranquilizar los ánimos cediendo a compromisos parciales. Pero ambos partidos, tanto los nacionalistas irlandeses como los seguidores de Carson, se negaron a aceptar una *Home Rule* atenuada.

Todo esto habría sido aún soportable. Pero el enfrentamiento irlandés de las nacionalidades encontró una continuación en la política interna inglesa, ya que los conservadores se unieron por completo al Ulster y apoyaron abiertamente los planes de insurrección de Carson. En aquellas circunstancias la aprobación definitiva del *Government of Ireland Bill* por los Comunes en enero de 1914, una vez abolida la posibilidad del veto de la Cámara de los Lores, no fue sino una victoria pírrica para el gobierno. La oposición de los grupos radicales, tanto en Irlanda, donde no satisfacía la oferta presentada, como en Ulster, que seguía rechazando tenazmente la anexión al resto de Irlanda, se endureció de tal manera que no se podía excluir la eventualidad de una insurrección armada. Cuando finalmente, en marzo de 1914, el gobierno expresó claramente la intención de hacer respetar su voluntad incluso por la fuerza, numerosos oficiales del ejército británico estacionados en Irlanda se negaron a empuñar las armas contra Carson y sus seguidores. Aunque este comportamiento rayaba en la alta traición, encontró no sólo el aplauso de los conservadores sino también la aprobación de las más altas autoridades militares. Inglaterra estaba atravesando una grave crisis interna. En el curso de las negociaciones secretas Jorge V trató personalmente de dominar la situación, sin poder, sin embargo, impedir que el panorama en Irlanda se radicalizase cada vez más. Aún a mediados de julio de 1914 se buscaba en Londres desesperadamente una solución pacífica, hasta que el comienzo de la Guerra Mundial obligó a todas las partes a dejar de momento a un lado la cuestión irlandesa. Sólo la Guerra Mundial trajo finalmente la consecución del derecho de autodeterminación para los irlandeses, en contra de la voluntad del Parlamento y de la Corona inglesa.

II. TRIUNFO Y ESTANCAMIENTO DE LA IDEA DEL ESTADO DEMOCRATICO EN LA EUROPA OCCIDENTAL

A finales de otoño de 1906, Georges Clemenceau formó en Francia un gabinete con base en una amplia mayoría de radical-socialistas, que podía contar además con el apoyo de los socialistas. El solo nombre de Clemenceau era un programa. Desde los años 80 había luchado Clemenceau por una república de-

mocrática, hasta que en 1892 había perdido, a causa del escándalo del Canal de Panamá, temporalmente su influencia política, para reaparecer luego triunfal en el «affaire Dreyfus». La elección de Clemenceau como primer ministro era el símbolo de la victoria del radical-socialismo sobre sus adversarios de la derecha, y su actitud, netamente anticlerical, garantizaba una continuación consecuente del curso laico rígidamente seguido hasta entonces. La derecha se había derrumbado definitivamente y el clero católico estaba reducido a la defensiva. La consolidación de la Tercera República frente a sus adversarios del pasado estaba concluida y se habían creado todas las premisas para pasar, a través de una decidida política de reformas democráticas y sociales, del tradicional régimen de notables de la Tercera República, a una democracia social moderna. Esta transición era esperada, en general, con entusiasmo. El propio Anatole France escribía entonces a Clemenceau: «Los problemas que ha resuelto hasta ahora la República fueron un juego de niños comparados con los que le esperan en el momento actual. Nacerá un nuevo orden de cosas»[65]. Sobre todo, los problemas sociales habían sido descuidados injustamente en el pasado período de encarnizadas luchas ideológicas: ni el seguro contra accidentes de 1901, ni la asistencia médica y la vejez, introducida en 1905 por el gabinete Waldeck-Rousseau, se podían comparar con la evolución que había seguido la legislación social en el resto de Europa. Por ello, las declaraciones de Clemenceau del 5 de noviembre de 1906, al asumir su cargo, incluían, además de la exigencia de la completa laicización de la enseñanza, toda una serie de puntos de carácter social, como la introducción de una previsión de vejez para todos los trabajadores, la reducción de la jornada laboral a diez horas, la extensión del seguro contra accidentes incluso para los trabajadores agrícolas, cuya situación social era especialmente desfavorable, y, finalmente —según un viejo deseo radical-socialista—, la introducción de un impuesto progresivo sobre la renta que, en caso de necesidad, podía ser completado con un puro impuesto patrimonial. Con Briand como ministro de Instrucción Pública, Caillaux como ministro de las Finanzas, con León Bourgeois en el ministerio del Exterior, con Viviani a la cabeza del nuevo ministerio del Trabajo y Picquart, la antigua víctima del Estado Mayor en el «affaire Dreyfus», ahora ministro de la Guerra, Clemenceau, continuando él mismo en la dirección del ministerio del Interior, disponía de un equipo idóneo para llevar a cabo este programa de reformas. Sin embargo, pronto se vería que este homogéneo gobierno radical-socialista sólo poseía una escasa eficacia. Al contrario que en Inglaterra, en Francia se rechazaba la idea de

emplear consecuentemente los medios del Estado para elevar el nivel de vida de los trabajadores y para resolver los grandes problemas sociales. Los radical-socialistas, a pesar de su lema de que no debía de haber nadie a su izquierda, estaban todavía íntimamente ligados a las ideas tradicionales, individualistas y burguesas sobre la propiedad, características de las clases medias francesas, y sólo eran moderados partidarios de una política de extensión del poder del Estado más allá de los límites trazados por el liberalismo clásico. El principio de salvaguardar sin reservas la propiedad privada siguió siendo igualmente uno de los postulados más destacados de la izquierda burguesa francesa.

Significativo en esta situación fue el hecho de que Clemenceau, portavoz de los pequeños comerciantes y campesinos, se tornara en defensor sin escrúpulos del orden existente, en el momento en el que éste se vio amenazado por el movimiento sindicalista y por los tumultos de los viticultores del sur. El que había sido durante tantos años un político de la oposición se convirtió, casi de la noche a la mañana, en un defensor de la «razón de Estado». Con todos los medios a su disposición, Clemenceau, sin retroceder ante la detención de los líderes de la «Confédération Générale du Travail», ni ante el empleo del ejército, combatió la ola de huelgas sindicales que se apoderó de Francia entre los años 1907 y 1909, y que se vio acompañada de un creciente número de actos de sabotaje y de violencia. En algunas ocasiones se definió a sí mismo como el *premier flic de France* (el primer policía de Francia). También ante los funcionarios del Estado, que reclamaban una mejora de su situación social y jurídica, defendió Clemenceau consecuentemente el principio de la autoridad del Estado y se opuso a sus reivindicaciones de poder representar sus intereses a través de sindicatos: «Ningún gobierno aceptará jamás que los empleados en el servicio público sean equiparados a los trabajadores de las empresas privadas» [66]. Cuando en 1909 los empleados de Correos iniciaron una huelga masiva, Clemenceau la aplastó sin miramientos; el Estado, sostuvo, tiene que poder exigir de sus empleados la subordinación incondicional en todo momento.

Clemenceau adquirió de esta manera un gran prestigio entre la burguesía como promotor de la lucha en defensa del orden existente frente a la anarquía y a la revolución social, mientras que los socialistas empezaban a alejarse de él. En aquellas circunstancias el programa de reformas sociales proclamado por Clemenceau al principio de su gobierno, no obtuvo grandes resultados. Las pocas cosas que lograron superar los

agudos contrastes de intereses en la Cámara y la oposición del Senado, como la introducción de la jornada laboral de diez horas y el retiro de vejez para los ferroviarios, no hicieron ya efecto sobre la clase trabajadora. Así fue aumentando la agitación en los sectores laborales y fue ganando de nuevo terreno la idea de que no pudiendo esperar nada de los parlamentarios había que actuar por cuenta propia. Los sindicalistas, que buscaban una prueba de fuerza decisiva entre el proletariado organizado y el poder público que estaba aliado con la burguesía, sintieron llegada su hora.

Tampoco con la Iglesia católica obtuvo grandes resultados el gobierno de Clemenceau. Los hechos demostraron que en estos asuntos era más sencillo promulgar disposiciones jurídicas que imponerlas en la práctica. Ante la continua política de obstrucción del Vaticano contra la separación de la Iglesia del Estado, prevista en la ley del 5 de diciembre de 1905, Briand, en su función de ministro de la Enseñanza, se vio obligado a tolerar tácitamente la inobservancia de la legislación estatal por parte de una gran fracción del clero francés, ya que una intervención rigurosa habría conducido al cierre de muchas iglesias y provocado una resistencia imprevisible en el país. Con la ley del 2 de enero de 1907, mediante la que el Estado renunciaba de nuevo en gran medida al control de las manifestaciones religiosas, trató Briand de legalizar *a posteriori* la situación ilegal existente y de allanar el camino a la Iglesia católica. El Vaticano rechazó, sin embargo, esta oferta de un acuerdo sobre una base limitada, en perjuicio del clero y la Iglesia francesa, que había perdido ahora definitivamente gran parte de su fortuna. Para el gobierno fue un magro consuelo que poco a poco un número creciente del clero francés terminase por reconocer las ventajas de la nueva reglamentación haciendo suyo el principio de una «Iglesia libre en un Estado libre», para emplearlo en provecho de la Iglesia católica.

La actitud anticlerical era el único lazo que había unido estrechamente a la izquierda francesa, por lo demás extremadamente heterogénea. Ahora, sin embargo, el problema de la relación entre la Iglesia y el Estado había perdido cada vez más su antiguo carácter explosivo. Las cuestiones materiales surgieron nuevamente al primer plano, manifestándose en el seno de la izquierda divergencias cada vez mayores, como se observó sobre todo en la cuestión del impuesto progresivo sobre la renta. Caillaux, que provenía de los círculos de la alta finanza francesa y que en este campo podía ser considerado un especialista de primer orden, logró que fuese aprobado por la Cámara este proyecto de ley. El Senado, sin embargo, bloqueó

su realización, sin que el gobierno hubiese tenido la voluntad ni la posibilidad de evitarlo. De esta manera el gran proyecto de un sistema fiscal moderno quedó bloqueado por el mecanismo legislativo hasta julio de 1914, aunque la progresión prevista por Caillaux no superaba el 4 % para las rentas anuales de más de 100.000 francos, por lo que podía ser considerada realmente moderada. Una parte del radicalismo francés apoyó de buen grado la oposición de los sectores de la alta burguesía contra esta reforma fiscal, que gravaba sobre todo las grandes fortunas, aunque solamente de esta manera el Estado francés podía haber encontrado los fondos para realizar una eficaz previsión asistencial para la vejez. Así, Caillaux se convirtió en objeto de un odio irreductible por parte de la derecha y del «establishment».

En aquellas circunstancias se rompió la antigua alianza entre los radical-socialistas y los socialistas. La inmensa mayoría de que había podido disponer Clemenceau al principio, fue deshaciéndose progresivamente en sus diferentes partes. Pero las consecuencias más graves de esta evolución las sufrió Briand, que hacia el final del otoño de 1909 siguió a Clemenceau, que había caído en las Cámara por una cuestión secundaria, después de que sus métodos autoritarios habían encontrado la oposición más o menos de todas las partes. Tanto los socialistas como los republicanos moderados propusieron ahora una reforma del tradicional sistema electoral mayoritario que permitía a los intereses locales influir en gran medida sobre la vida de los partidos franceses y que había contribuido de manera decisiva a la provincialización de la vida parlamentaria. El sistema electoral proporcional era generalmente considerado más democrático que el mayoritario vigente. A pesar de todo, los radical-socialistas, que se habían beneficiado hasta ahora de este sistema, se oponían en gran parte a una reforma electoral; debido a que precisamente ellos representaban de modo más amplio a las fuerzas locales y regionales en la vida política francesa.

Las elecciones de 1910 tuvieron como tema principal la cuestión de la reforma del sistema electoral. Estas elecciones terminaron con un fracaso de los radical-socialistas y de la extrema derecha, y con la victoria de los socialistas y de los republicanos moderados de derecha. De esta manera el fin de la lucha por la existencia de la Tercera República, que había obligado a la izquierda a proceder de una manera homogénea, tuvo sus efectos incluso en los agrupamientos de los partidos en el Parlamento y de ahora en adelante se hizo cada vez más difícil constituir fuertes mayorías gubernamentales. Se inició un período de gobiernos inestables que se sucedían rápidamente,

aplazándose una y otra vez el proyecto del sistema electoral de representación proporcional, que tal vez hubiese podido conducir a una reducción más racional del número de partidos. Ante la estéril actividad de las instituciones parlamentarias, en las que los diversos grupos de intereses paralizaban cualquier acción, las fuerzas extraparlamentarias desarrollaron una actividad cada vez más grande, tanto en las filas de la derecha como en las de la izquierda. *L'Action Française,* que ya en 1908 se había transformado en un diario, no cesaba en sus ataques contra el sistema parlamentario. El considerable aumento de las dietas de los diputados en el año 1908 había suscitado gran indignación en el país, y lo que sucedía en la Cámara no contribuía tampoco a aumentar su prestigio. Fue, sin embargo, decisivo el hecho de que el movimiento sindicalista pasase a la ofensiva. En octubre de 1910 tuvo lugar una gran huelga de ferroviarios que paralizó el tráfico en todo el país y que marcó el comienzo de una huelga general. Briand aplastó la huelga de ferroviarios basándose en la necesidad y la seguridad nacional y movilizando a los ferroviarios que se hallaban en edad militar; y con esta política, que se movía en los límites de la legalidad, consiguió obtener una larga mayoría en la Cámara.

Sin embargo, el intento de Briand de formar un nuevo gabinete, más moderado, y de establecer, bajo el signo nacional, un nuevo acercamiento entre los republicanos radicales y los moderados, demostró ser prematuro. La fuerza del radicalismo tradicional era aún demasiado fuerte para poder consentir semejante línea política que trataba de silenciar los viejos contrastes de partido, y de esta manera se continuó adelante provisionalmente con gobiernos radicales insignificantes. Sólo cuando, en junio de 1911, Caillaux, un radical incondicional, pero al mismo tiempo un hombre político de extraordinaria prudencia, asumió el cargo de primer ministro, obtuvo Francia de nuevo «un gobierno que podía gobernar». Caillaux consiguió conducir airosamente al país a través de la segunda crisis marroquí, y esto fue en buena parte mérito personal suyo. Sin embargo, esta fue, precisamente, la causa de su ruina. Cuando se descubrió que Caillaux había iniciado, a espaldas de su propio ministro del Exterior, negociaciones con el embajador alemán von der Lancken, para llegar a toda costa a un acuerdo con Alemania con el fin de evitar la guerra, Clemenceau, en enero de 1912, aprovechó esta ocasión para hacer caer el gobierno de Caillaux. Consideraciones de política exterior relegaron ahora cada vez más a un segundo plano los problemas tradicionales de política interna; habiendo sido evitada a duras penas una

guerra con Alemania, eran ahora los problemas de la defensa nacional los que reclamaban la atención general. El desarrollo de este proceso condujo a un fuerte viraje hacia la derecha. Poincaré, hombre del centro, formó ahora un «gran» gabinete con hombres de la izquierda moderada, como Briand, Delcassé y Léon Bourgeois, que, aplazando para un momento más propicio las reformas sociales concretas, así como la cuestión de una reforma social general, prometía a cambio proporcionar al país «una sensación de seguridad».

De esta forma comenzaba en la evolución interna de Francia un período netamente caracterizado por un nacionalismo creciente y por un entusiasmo bélico cada vez más acentuado. Poincaré aprovechó hábilmente la nueva ola nacionalista para asegurarse la fidelidad de las fuerzas extremadamente fraccionadas de la burguesía; solamente los socialistas y los seguidores de Caillaux se le opusieron. Aunque la desconfianza de la izquierda radical hacia la política de Poincaré iba en constante aumento, debido a su completa pasividad en la cuestiones sociales, consiguió éste conquistar, en enero de 1913, la presidencia de la República, gracias sobre todo a su defensa del sistema electoral de representación proporcional, propugnado tanto desde las filas de la extrema izquierda como desde las de la derecha. A partir de entonces, Poincaré demostró ser un maestro en dirigir desde el Palacio del Elíseo lo que sucedía en el Palais Bourbon y en formar gobiernos de su agrado. No pudo, sin embargo, evitar la caída de Briand por la cuestión del sistema electoral de representación proporcional, que no había encontrado en el Senado la mayoría necesaria. Pero el gabinete Barthou, que siguió al de Briand, cumplió fielmente el principal deseo de Poincaré, de imponer a la Cámara la aprobación (en agosto de 1913) del servicio militar obligatorio trienal, contra la oposición de un gran número de radical-socialistas. Este problema fue discutido acaloradamente y enardeció los ánimos. Los socialistas y el ala izquierda de los radical-socialistas, que desde octubre de 1913 estaban bajo la dirección de Caillaux, no sólo se oponían a la imposición del servicio militar trienal, que estaba en neto contraste con las tradiciones pacifistas del radicalismo francés, sino también al nacionalismo militante que se ocultaba tras él. En vano se alzó Jaurés como portavoz de un régimen de milicia nacional que podría haber ocupado el lugar del ejército regular, propugnado por el Estado Mayor, como única fuerza capaz de realizar ataques de gran envergadura. No obstante la situación tensa en política exterior, la aversión de la Cámara al servicio militar obligatorio trienal

era tan fuerte que los gobiernos sucesivos tuvieron que recurrir a toda suerte de recursos para evitar que fuese anulado de nuevo.

En la primavera de 1914, ante la inminencia de nuevas elecciones, Briand recurrió a la fundación de una *Fédération des Gauches,* que habría sido más acertado llamar unión del centro-derecha —en la Francia de entonces todos los políticos tenían que llamarse al menos de «izquierda» si no querían fracasar—, para tratar de contener la creciente ola de la izquierda real, pero esto constituyó un fracaso catastrófico. Las elecciones de abril y de mayo de 1914 sancionaron un triunfo aplastante de los radical-socialistas y de los socialistas de ambas tendencias. Los adversarios del servicio militar obligatorio trienal y los partidos del impuesto progresivo sobre la renta, violentamente combatido por los sectores de la alta burguesía, se encontraron, ahora, definitivamente, en mayoría. A pesar de todo Poincaré, que sabía aprovechar hábilmente sus prerrogativas de presidente, consiguió, aunque ahora sólo con grandes esfuerzos, formar un gobierno dispuesto, al menos temporalmente, a mantener la ley del servicio militar obligatorio trienal. Después del fracaso del intento de Ribot de formar un gobierno sobre esta base, obtuvo Viviani en un segundo intento la mayoría en la Cámara. El gabinete de Viviani se movía aún sobre bases frágiles; de todas maneras parecía superado el período estéril, característico de la política interna de Francia desde 1906. Se emprendió al menos con energía el proyecto de un impuesto progresivo sobre la renta. El comienzo de la Guerra Mundial creó, sin embargo, una situación nueva, que no permitió a la extrema izquierda disfrutar plenamente su triunfo electoral. La ola de entusiasmo nacional que se apoderó en agosto de 1914 de todo el país, hizo olvidar de momento las graves omisiones de los últimos años en política interior y social. Sólo después de la guerra estos problemas volverían a imponerse, con renovada energía, a la atención del país.

En mayor medida aún que en Francia se entorpeció en Bélgica y en Holanda el triunfo de la idea del Estado democrático, debido a la obstinada resistencia de la alta burguesía contra el radicalismo y el socialismo. Mientras que en Francia la fuerza del catolicismo había quedado definitivamente destruida en cuanto movimiento político no más tarde de 1905, tanto en Bélgica como en Holanda, los partidos clericales pudieron mantener su supremacía indiscutible hasta 1913. En Bélgica los socialistas, apoyados por el partido liberal, habían llevado desde 1902 una lucha encarnizada, aunque esencialmente inútil, contra el vigente sistema electoral pluralista, que perpetuaba el

predominio de la burguesía católica. En la primavera de 1913 una nueva ola de huelgas generales, que parecía casi haber sido preparada por un estado mayor y que gracias a la organización ejemplar de los trabajadores pudo tener éxito, condujo a la consolidación de la idea del Estado democrático. Ya la introducción del sufragio universal era una realidad. El Parlamento trató de ganar tiempo pero tuvo que capitular finalmente. El comienzo de la Guerra Mundial privó, sin embargo, también a la izquierda belga la posibilidad de recoger los frutos de esta victoria.

De igual modo, en el pequeño Luxemburgo, correspondió en 1912 una victoria decisiva a la unión de las izquierdas, que hasta aquel momento se habían opuesto en vano al dominio de los partidos clericales. La oposición de la Gran Duquesa María Adelaida a las aspiraciones de la izquierda condujo a una crisis constitucional que puso seriamente en peligro la propia institución de la monarquía.

En los Países Bajos hallaba su fin, en 1913, un período de ininterrumpida hegemonía de los partidos clericales, que se apoyaban en un sistema censitario de base no demasiado estricta. Después de veinte años de inercia política la izquierda triunfaba finalmente, lo que correspondía a una tendencia general europea. En todas partes se caminaba ahora, de improviso, a grandes pasos hacia el sistema del Estado democrático, aunque el punto de partida político y las condiciones sociales de los distintos países presentasen grandes diferencias.

III. POLITICA DILATORIA EN EL REICH ALEMAN Y EN AUSTRIA-HUNGRIA

En la primavera de 1906, el canciller del Reich alemán, el príncipe Bülow, se declaró, por primera vez en la historia de Alemania, ligado a una determinada formación de partido, al bloque de los partidos conservadores y liberales. Ya sus contemporáneos interpretaron esta innovación política como un primer acercamiento al sistema parlamentario y se esperaba el comienzo de un período de política progresiva en el interior. Bülow prometió, de hecho, también a los liberales, una ley liberal de asociación y una reforma del sistema electoral de las tres clases en Prusia; seguía siendo, sin embargo, incierto hasta qué punto podría imponer ambos proyectos a los conservadores. La ley de asociación se llevó efectivamente a cabo, aunque con considerables imperfecciones, como el llamado artículo lingüístico que prohibía a los polacos el uso de su lengua materna

en actos públicos. La finalidad que se perseguía se puso pronto de manifiesto con una nueva ley, aprobada casi contemporáneamente en Prusia, que castigaba el asentamiento en las regiones polacas, previendo la posibilidad de expropiar las grandes propiedades de tierras polacas —disposición que contradecía los principios del Estado de derecho—. El nuevo experimento de Bülow demostró pronto ser tan efímero como todos los anteriores intentos de liquidar con palabras bonitas y pocas concesiones las fuerzas progresistas de Alemania, para seguir aplazando la reforma (que ya debía de haber sido realizada hacía tiempo) del sistema político y social y garantizar de esta manera la hegemonía más o menos ilimitada de los grupos conservadores del Estado.

Pero el liberalismo alemán estaba demasiado fraccionado y dependía de forma excesiva de varios grupos concurrentes de intereses materiales como para disponer de la fuerza precisa para asaltar los baluartes conservadores y formar una coalición de la izquierda «de Bassermann a Bebel», como la propugnada entonces por Friedrich Naumann. El temor de los sectores burgueses ante el énfasis revolucionario de la socialdemocracia les llevaba a buscar protección en las antiguas fuerzas conservadoras antes de arriesgarse a un conflicto abierto con ellas. Esta tendencia se manifestó claramente al final de 1908, cuando se abrió una grave crisis constitucional a causa de una entrevista de Guillermo II al *Daily Telegraph* publicada con el título: «The German Empire and England». La entrevista del *Daily Telegraph* contenía toda una serie de declaraciones de carácter extremadamente problemático y constituía una obra maestra de imprudencia e indiscreción política. Guillermo II afirmaba, por ejemplo, que, a diferencia del pueblo alemán, él abrigaba los más altos sentimientos hacia Inglaterra y como prueba de ello recordaba haber impedido, con motivo de la guerra anglo-boer, una intervención franco-rusa en favor de los boers y de haber enviado incluso a los ingleses un plan estratégico elaborado por él mismo. Esta entrevista, presentada antes de su publicación a Bülow, que se encontraba, por razones de salud, en la isla de Norderney, había sido aprobada por él sin haber sido leída. En las capitales europeas el artículo causó una sensación desagradable; en Alemania desencadenó, en cambio, una ola de indignación contra el régimen personal de Guillermo II, a la que no pudieron sustraerse los partidos, sin excluir a los conservadores.

Esta desafortunada entrevista sólo fue en realidad la chispa que caía en el barril de pólvora, ya que desde hacía años, la opinión pública alemana venía observando con creciente in-

quietud la ostentación y la impulsividad con las que intervenía el Kaiser en la vida política. Todos empezaron a darse cuenta de las repercusiones desfavorables que este comportamiento tenía sobre la situación de Alemania en política exterior. Lo que ignoraba la opinión pública era que Guillermo II había sido obligado en algunas ocasiones a actuar en contra de su voluntad por sus propios consejeros; como, por ejemplo, en 1905, cuando desembarcó de manera ostentativa en Tánger y dio al Sultán amplias garantías de su amistad. La preocupación general quedó expresada así en 1906 en una carta de Max Weber a Naumann: «El desprecio que, con razón —¡esto es lo importante!— se nos tributa en el extranjero como nación, porque toleramos el gobierno de este hombre, se ha convertido poco a poco en un factor de primera importancia política (...). Estamos quedando aislados, porque este hombre nos gobierna de esta manera y nosotros lo toleramos y encima encubrimos este estado de cosas» [67]. Ahora, después de Algeciras, habían aumentado estas preocupaciones, y así se comenzaba en el *Reichstag* a criticar duramente al Kaiser y su comportamiento político. Poco sincero y consciente de sus propias faltas (ya que en esta ocasión Guillermo II se había comportado correctamente, mientras que el canciller había incurrido en una grave omisión), Bülow no se atrevió a decir francamente la verdad a Guillermo II acerca de la fuerza de esta explosión de indignación en el país, y por ello Guillermo II no comprendió por qué todo el mundo estaba tan irritado contra él. En vista del frente unido de todos los partidos, incluidos los conservadores, se vio Bülow el 11 de noviembre de 1908 precisado a abandonar a Guillermo II a la crítica pública y a salvar su propia posición, poniéndose del lado de los críticos del gobierno personal del Kaiser y asegurando que esto no se repetiría más: «Señores, el hecho de que la publicación de esta entrevista en Inglaterra no haya producido los efectos deseados por Su Majestad el Kaiser, y que haya provocado en nuestro país profunda agitación y doloroso pesar (...) inducirá a Su Majestad el Kaiser a observar de ahora en adelante también en sus conversaciones particulares la discreción imprescindible tanto para los intereses de una política coherente, como para la salvaguardia de la autoridad de la Corona. En caso contrario ni yo ni mi sucesor podremos asumir alguna responsabilidad» [68]. Es comprensible que Guillermo II considerase esta declaración del canciller como una traición formal de su propio primer ministro. Por otra parte, ésta no resolvía en modo alguno los problemas reales. Sin embargo, los partidos del *Reichstag* terminaron por contentarse con esta promesa verbal. En vano advirtió Max Weber: «La culpa es de

la estructura política: nada, absolutamente nada, ha mejorado»[69]. La gran mayoría de los partidos exigía, sin embargo, garantías constitucionales, y reclamaba ahora una ley que realizase el artículo 14 de la Constitución del Reich, en la que debería concretarse el ámbito de responsabilidad del canciller. Pero los partidos estaban completamente divididos sin remedio por cuestiones de carácter formal. Mientras los conservadores seguían rechazando en principio cualquier restricción de las prerrogativas del emperador y rey de Prusia, los nacional-liberales luchaban por introducir la responsabilidad jurídica. Sólo el liberalismo de izquierda y la socialdemocracia (el primero en forma velada, la segunda abiertamente y siguiendo sus principios), pedían el paso al sistema parlamentario según el modelo de Europa occidental. El centro evitó hábilmente los problemas fundamentales de derecho constitucional, exigiendo que quedase determinada la responsabilidad del canciller, también para aquellos actos del Kaiser para los que la Constitución no preveía la obligación de la contrafirma, especialmente en el ámbito de las prerrogativas de coparticipación en el mando ejercidas por el Kaiser. Pero ninguna de estas propuestas obtuvo resultado. Tras la calma que sucedió a las primeras agitaciones, todo siguió como antes. El fracaso de estas tentativas de extraer consecuencias jurídico-constitucionales del «affaire» del *Daily Telegraph,* puso de relieve la debilidad política del *Reichstag,* que no era capaz de actuar por fuerza propia, y a la vez la fragilidad del sistema de Bülow, incapaz de formar mayorías gubernamentales eficaces. Naumann definió justamente el régimen de Bülow como «un sistema destinado a conservar el cargo del canciller del Reich sobre la base de la desconfianza recíproca»[70].

En la primavera de 1909 se vino abajo estrepitosamente el bloque de Bülow cuando los partidos conservadores y el liberalismo se enfrentaron por la cuestión de la reforma financiera del Reich, y el centro se ofreció hábilmente como el aliado idóneo de las derechas. Con la creación del bloque de los partidos conservadores y liberales, Bülow había intentado adoptar en cierto sentido la receta de Miquel sobre la concentración en torno al Reich aunque, en este caso, con la inevitable apertura hacia la izquierda. Pero ahora volvieron a surgir con toda su aspereza los contrastes de intereses existentes entre los agricultores, por una parte, y el comercio y la industria por la otra, por la cuestión de la extensión del impuesto sobre la herencia a los cónyuges y a los descendientes. Los conservadores veían en este impuesto un peligro vital para el latifundio, aunque en casos aislados el ministerio del Tesoro pudiese mostrarse complaciente ante sus exigencias. Como alternativa, ellos propusieron, a cam-

bio, la tasación del capital inmobiliario bajo la forma de un impuesto sobre la plusvalía. Además, desencadenaron, con la ayuda del *Bund der Landwirte* (Liga de los agricultores), una violenta agitación contra el impuesto sobre la herencia propuesto por el gobierno. Los nacional-liberales, por su parte, crearon con la Liga Hanseática (Hansabund) una nueva organización de intereses que se oponía a la tasación unilateral del patrimonio comercial e industrial propuesta por los conservadores. A pesar de la insignificación de los impuestos discutidos, esta controversia se convirtió en una lucha entre los defensores del principio del Estado industrial por un lado y los del Estado agrario por otro, lucha en la que los conservadores lograron atraerse a su lado al centro. El centro y los conservadores impusieron al *Reichstag* sus propias leyes tributarias. Fue una victoria de los conservadores, aliados al centro contra el gobierno, pero al mismo tiempo también una prueba del poder del *Reichstag,* aunque en un frente político extremadamente absurdo. La suerte política de Bülow estaba así irrevocablemente decidida, tanto más cuanto que desde la desgraciada entrevista del *Daily Telegraph,* Guillermo II había perdido su confianza en él. La dimisión de Bülow fue aplazada hasta finales de junio de 1909 para no dar la impresión de que el *Reichstag* había provocado por primera vez la caída de un canciller.

Para salvar la enmarañada situación política interna, y evitar que el país se deslizase hacia un régimen parlamentario, fue nombrado como nuevo canciller, después de algunas dudas, el que era entonces secretario de Estado del Interior, Theodor von Bethmann Hollweg, considerado un hábil político en materia de política interior, aunque carente de experiencia en asuntos de política exterior. Siguiendo el ejemplo de Bismarck, Bethmann Hollweg se decidió por una línea gubernamental «por encima de los partidos», con la que trataba sobre todo de afirmar y potenciar la autoridad del Estado y reducir al mínimo la influencia de las instituciones parlamentarias sobre la política del Reich. Ya en su primer discurso al *Reichstag* el nuevo canciller aseguró que no apoyaría su política en una determinada constelación de partidos: «Igual que los partidos se han opuesto siempre a ser partidos de gobierno (...) tampoco podrá ser jamás en Alemania el gobierno un gobierno de partido»[71]. Bethmann Hollweg se decidió por una política que buscaba su verdadera fuerza en el aparato burocrático del Estado; y para sus proyectos de ley prefería asegurarse en cada caso las mayorías necesarias en el Parlamento.

Esta orientación de Bethmann Hollweg no significaba automáticamente una opción por los partidos de la derecha. Por

el contrario, Bethmann Hollweg consideraba como misión personal llegar a una progresiva atenuación de los contrastes políticos existentes, haciendo prudentes concesiones a todas las tendencias, pero sin sujetar más de lo necesario el gobierno, en cuanto *pouvoir neutre,* a los deseos y a la voluntad de los partidos. En esta política suya «diagonal», como la había denominado el propio Bethmann Hollweg inspirándose en una expresión usada por Treitschke en su *Politik,* debía tener en cuenta, más allá de sus intenciones, los tradicionales apoyos del Estado germano-prusiano, es decir los funcionarios conservadores, los oficiales y finalmente el monarca y su Corte. De esta manera el canciller tenía, por ejemplo, que tolerar el papel importante, en las decisiones del gobierno, del almirante von Tirpitz. Sin embargo, Bethmann Hollweg confiaba en ganarse para su política burocrática y autoritaria de la línea media, el apoyo de los sectores de la clase media no comprometidos con un partido político, especialmente los de la burguesía culta, que eran tradicionalmente muy favorables a una política neutral por encima de las querellas de los partidos.

Los primeros pasos de esta «política de la diagonal» no aportaron sin embargo la deseada atenuación de los contrastes en la política interna. A pesar de las leyes de seguro del Reich de 1910, y de una cierta moderación del gobierno en la lucha contra la socialdemocracia, la clase obrera insistía en su completa oposición al orden estatal existente; y su descontento estalló en violentos disturbios de ira popular cuando en 1910 el gobierno presentó una reforma por completo insuficiente del sistema electoral prusiano de las tres clases. Sin embargo, los conservadores redujeron, a pesar de todo, estos proyectos de ley de tal manera que el propio Bethmann Hollweg terminó por perder todo el interés y no se llevaron a cabo. En cambio la reforma constitucional de Alsacia-Lorena de 1911, por la que se concedía a este territorio del Reich el sufragio universal, igual, directo y secreto, suscitó la más acerba hostilidad de los conservadores. Estos vieron en ella un peligroso precedente, a pesar de que el canciller había declarado explícitamente durante los debates sobre la reforma, que este proyecto no debía ser interpretado como un primer paso hacia la liberalización del sistema constitucional vigente en el imperio guillermino. Bethmann Hollweg creyó, sin embargo, que el gobierno había demostrado, una vez más, a pesar de todas las concesiones a los partidos del *Reichstag,* su independencia y autonomía, algo que «era absolutamente necesario ante el peligro de caer en el parlamentarismo» [72].

Como Bethmann Hollweg tampoco había tenido suerte en el

plano de la política exterior —sobre todo después de la fracasada intervención del *Panther* en Agadir en 1911, que había debilitado considerablemente su autoridad política— no pudo evitar un corrimiento hacia la izquierda en las elecciones parlamentarias de la primavera de 1912. Para los dirigentes conservadores de Prusia y de Alemania el resultado de las elecciones equivalía a una catástrofe. Los partidos conservadores, y en igual medida también los nacional-liberales, es decir los partidos de la propiedad, sufrieron pérdidas considerables; la misma suerte corrió, aunque en menor grado, también el centro, mientras que la socialdemocracia, con 110 diputados y el 34,8 % de todos los votos, se convirtió en el partido más fuerte de Alemania. Se había expresado así, de manera imprevisible, el general disgusto por la estrecha política de intereses de los conservadores, que habían encontrado siempre apoyo en el centro y en los nacional-liberales.

Bethmann Hollweg comprendió que, a raíz de los resultados de las elecciones para el *Reichstag*, había que girar algo más hacia la izquierda el timón de la política, pero tampoco ahora estaba dispuesto a apartarse lo más mínimo de la posición constitucionalmente independiente del gobierno imperial respecto al Parlamento: «Un canciller que dependa únicamente del emperador y rey de Prusia es el necesario contrapeso al amplísimo sufragio que el príncipe Bismarck había dado en su tiempo al pueblo alemán bajo condiciones bien determinadas» [73]. Y cuando, al principio de mayo de 1912, el *Reichstag* decidió admitir desde entonces, en el marco del reglamento interno del Parlamento, interpelaciones al gobierno, así como resoluciones sobre declaraciones del gobierno —innovación importante y llena de consecuencias— Bethmann Hollweg hizo constar expresamente que el gobierno no veía en ello una ampliación de las prerrogativas constitucionales del *Reichstag*. A pesar de la nueva situación, Bethmann Hollweg decidió atenerse firmemente a su «política de la diagonal», decisión que, dado el extremo fraccionamiento de los partidos políticos en el *Reichstag*, no le resultó difícil de llevar a cabo. Sin embargo, él había comprendido que una política que favoreciese unilateralmente los intereses de los conservadores tenía que conducir necesariamente a la catástrofe y que por ello había que realizar el intento de atraer a la vida del Estado a sectores más amplios de la población. Las probabilidades de éxito de esta política dependían de la ayuda que pudiera prestarle la fuerza integradora del nacionalismo, como se demostró con motivo de las discusiones sobre dos proyectos de ley relativos al ejército de 1912 y 1913. En estas circunstancias los conservadores no se atre-

vieron a oponerse abiertamente de nuevo al impuesto sobre la herencia y de esta forma se impusieron por primera vez los impuestos para financiar el fortalecimiento del ejército sobre todo a las clases poseedoras. Gracias al temor a la socialdemocracia, extendido más que nunca entre muchos sectores de la burguesía, podía el canciller seguir contando con el consenso de una gran mayoría cuando contestaba a los ataques de la socialdemocracia contra el gobierno, aparte de que actuando así no hacía sino aumentar su prestigio en la Corte. En estas ocasiones se revelaba con toda claridad la relativa impotencia de la socialdemocracia dentro del sistema político de entonces. Su fuerza numérica le servía de poco, ya que no tenía otro resultado que el de inducir a los partidos burgueses a buscar protección cerca de las fuerzas constituidas, mientras el gobierno, por su parte, trataba al grupo socialdemócrata como si no existiese, evitando siempre cuidadosamente la presentación de proyectos de ley que sólo pudiesen ser aprobados con la ayuda de los votos de la socialdemocracia.

Esta situación política tuvo, paradójicamente, como consecuencia un fortalecimiento de los factores tradicionales. Esto quedó demostrado claramente en el incidente de Zabern a finales del otoño de 1913. Este incidente tuvo lugar en la pequeña ciudad alsaciana a raíz de los abusos que había cometido el teniente von Forstner con los reclutas alsacianos. Algunos ciudadanos que habían tenido noticia de estos hechos, desfogaron su indignación con gritos e insultos a las tropas. Entonces Forstner, respaldado por el comandante en jefe del regimiento, el coronel von Reuter, mandó arrestar indiscriminadamente a un gran número de paseantes, en su mayoría ajenos a lo que había sucedido, y les hizo pasar la noche en prisión, sin dirigirse a las autoridades civiles que eran las únicas competentes. Estos arrestos ilegales exasperaron, haciéndoles explotar, los contrastes que ya hacía tiempo fermentaban entre la población de Alsacia-Lorena y los militares prusianos. Toda la prensa del Reich se unió unánimemente contra la actitud difícilmente justificable de los militares. Al mismo tiempo la administración civil de Alsacia-Lorena se vio gravemente comprometida frente a la población sujeta a su autoridad.

Con una rápida sanción pública de los oficiales responsables este incidente podía haber pasado sin consecuencias políticas. Pero las autoridades militares, pretendiendo salvaguardar de tal modo el prestigio del ejército, respaldaron el comportamiento de Forstner y Reuter, acusando a su vez a las autoridades civiles de no haber tomado a tiempo medidas para asegurar la tranquilidad y el orden. Esta actitud sólo puede explicarse por la ex-

trema susceptibilidad de los oficiales frente a cualquier crítica de la opinión pública. Ante las corrientes democráticas, los militares se encontraban impotentes y por eso creían tener que oponerse a ellas con firmeza. El espíritu de cuerpo y la convicción de que en el trato con los habitantes de Alsacia-Lorena, como en general con todas las fuerzas de la izquierda, convenía una actuación enérgica, triunfaron sobre la razón objetiva.

Guillermo II se puso desde un principio del lado de los militares sin escuchar siquiera las instancias políticas competentes. Aunque el incidente de Zabern ya había adquirido un carácter eminentemente político, el Kaiser lo trató como si fuese «estrictamente militar». Así, el incidente, en sí insignificante, se transformó en un conflicto de principio entre el poder civil y el militar, planteando al mismo tiempo la cuestión netamente política del ámbito de las prerrogativas de mando del Kaiser. Bethmann Hollweg tenía razones suficientes para estar furioso por los sucesos de Zabern; estos amenazaban no sólo con hacer naufragar la política liberalizante iniciada por el canciller en 1911, sino que además conducían a un inoportuno empeoramiento de las relaciones franco-alemanas. A pesar de todo, el canciller no se atrevió a distanciarse públicamente de la actuación de los militares. Aunque dentro del aparato del gobierno hizo todo lo posible por hallar un remedio y conseguir que fuesen sancionados los oficiales responsables, defendió en el *Reichstag* demostrativamente al ejército declarando: «El uniforme debe ser respetado en todas las circunstancias»[74]. El *Reichstag* respondió con una moción de desconfianza, que fue seguida con una mayoría aplastante de 293 contra 54 votos. Bethmann Hollweg no tomó, sin embargo, demasiado en serio esta moción de desconfianza, a la que los partidos de izquierda atribuían por primera vez el significado de una innovación constitucional. La confianza del monarca, así como la lealtad de los funcionarios y de los oficiales, tenían en sus cálculos políticos un peso mucho mayor que las deliberaciones de una ocasional mayoría en el *Reichstag*. Aunque la indignación de la opinión pública alemana por los sucesos de Zabern y sus consecuencias políticas había sido enorme, Bethmann Hollweg pudo salir relativamente airoso de este caso. Su argumento de que los partidos burgueses habían hecho causa común con la socialdemocracia, violando así los intereses nacionales, no dejó de producir sus efectos, especialmente entre los nacional-liberales y el centro, induciendo finalmente a ambos partidos a ceder. Los partidos burgueses se contentaron por fin con la promesa de que se someterían a una revisión las bases jurídicas de las intervenciones de los militares en las esferas de jurisdicción de las autori-

dades civiles; además, declararon no tener ninguna intención en poner en discusión el poder de mando del Kaiser. Alemania, como quedaba demostrado claramente, podía aún ser gobernada eficazmente con métodos autoritarios; quedaba así confirmada la existencia de un ámbito de prerrogativas de mando del Kaiser al margen de todo control y se consolidaba una vez más la posición de poder del Estado autoritario constitucional.

Sin embargo, la capitulación de Bethmann Hollweg ante la autoridad imperial en el incidente de Zabern estaba destinada a tener consecuencias gravísimas. Los militares salieron de la crisis con la seguridad de tener de su parte en un futuro conflicto no sólo al príncipe heredero, sino también al Kaiser. De esta manera era cada vez más difícil para el canciller influir en las decisiones de carácter militar, aunque estas fuesen en realidad de naturaleza política. Las bases políticas para la vía autoritaria de Bethmann Hollweg por encima de los partidos, se habían quedado más estrechas; él tenía que tener más en cuenta que nunca los tradicionales factores de poder del Estado, como la burocracia, el cuerpo de los oficiales, y, finalmente, los círculos de la Corte, sin poder sin embargo contar ya verdaderamente con el apoyo de éstos. Los conservadores empezaban entonces a contar con la inminente caída de Bethmann Hollweg, que hasta que no estalló la guerra no volvió a estar seguro de su posición. A pesar de todo supo vencer a sus adversarios con una táctica ágil y con alguna intervención enérgica. Con su «política de la diagonal» pudo cerrar o al menos encubrir las grietas y las brechas del sistema constitucional guillermino, tanto más cuanto que los partidos del *Reichstag* se mostraban indecisos. Pero en el fondo, de esta forma todo empeoraba. A la larga, el intento de Bethmann Hollweg de presentar a la opinión pública el régimen guillermino como sano y eficaz —aunque hacía tiempo que el fraccionamiento del poder entre el Kaiser, los militares y las diversas autoridades en el imperio, así como en Prusia y en los otros Estados federados, había hecho imposible una dirección política coherente, basada en claros conceptos políticos— resultó infructuoso.

La evolución de la monarquía danubiana en el último decenio antes de 1914 semejaba en varios aspectos a la del Reich alemán. En 1906 se inició también en Austria-Hungría una fase de política interna orientada hacia una liberalización de las estructuras constitucionales; pero al final se recurrió aquí también a un régimen burocrático por encima de los partidos, que trataba de evitar los grandes problemas políticos.

Tampoco en Austria-Hungría se podía detener la irrupción

de amplios sectores populares en la política, sino sólo aplazarla. En vista de las grandes desproporciones sociales y económicas en los diversos países de la monarquía, surgieron, en el curso del retroceso de las élites aristocráticas, filohabsbúrgicas en su mayoría, fuerzas centrífugas de considerables dimensiones. Estas fuerzas adquirieron un peso cada vez mayor en todo el Estado austro-húngaro. La crisis de política interna que Austria-Hungría atravesó a partir de la caída del gobierno Körber en 1904, se desencadenó en aquella parte de la monarquía en la que desde siempre había sido mayor la tendencia a separarse de Viena, es decir, en Hungría. Al contrario que en la mayor parte de los países de la monarquía, en la Transleithania la aristocracia magiar había conseguido defender su posición de poder gracias a un sistema electoral extremadamente restringido, que concedía el derecho de voto sólo a una cuarta parte de la población adulta masculina. El predominio de esta aristocracia garantizaba al mismo tiempo la opresión política de las nacionalidades no magiares, a excepción de los croatas, los cuales tenían un «status» especial que les permitía en cierta medida la autogestión. En 1905 alcanzó la supremacía dentro de la *gentry* magiar la tendencia radical nacionalista, que condujo a la minoría al partido «liberal» de Tisza (en realidad un partido *whiggisa),* en cuyas filas militaban esencialmente latifundistas aristocráticos y que podía considerarse incondicionalmente leal al Emperador. Una coalición de partidos favorables a la independencia nacional, dirigida por Ferenc Akos Kossuth (el hijo de Lajos), propugnó una amplia revisión del compromiso de 1867; a partir de este momento Hungría debía disfrutar, dentro del Estado imperial, de una mayor autonomía. Pero ahora se exigía sobre todo la creación de un ejército húngaro independiente con propio mando magiar, y el uso de la lengua húngara. A esta petición, que equivalía al abandono de uno de los más importantes vínculos que aún mantenían unido al Estado plurinacional, el emperador Francisco José respondió con la designación del general Fejérváry como primer ministro, el cual trató de someter a razones al Parlamento húngaro con medidas dictatoriales, anunciando la eventual introducción en Hungría del sufragio universal, directo y secreto. Esto hubiese tenido como consecuencia el desmoronamiento de la *gentry* magiar en la parte transleithania del imperio y el predominio absoluto de los húngaros sobre las minorías étnicas. Las restantes nacionalidades de Transleithania, que suponían no menos del 47 % de la población total, pero que hasta entonces sólo estaban representadas en el Parlamento por un puñado de diputados, hubiesen tenido entonces la oportunidad de una

representación adecuada. Para una monarquía reaccionaria como la austro-húngara era un juego peligroso expulsar al demonio por medio de Belzebú, pero la amenaza tuvo el efecto deseado. Los partidos húngaros cedieron y se pudo llegar una vez más a una solución satisfactoria para ambas partes.

Aunque el proyecto de introducir el sufragio universal en Hungría había sido abandonado bien pronto, era agua en los molinos del movimiento de reforma electoral organizado por la socialdemocracia y los partidos checos burgueses, que hacía años que ya propugnaban para el Consejo Imperial en el territorio cisleithanio del imperio el sufragio universal, directo y secreto. El triunfo de la revolución rusa de octubre dio a este movimiento un último y poderoso impulso. Bajo la presión de imponentes manifestaciones en todas las ciudades importantes del país, en particular en Viena y en Praga, el emperador Francisco José se vio, en noviembre de 1905, obligado a conceder una reforma electoral. El gobierno de Beck tuvo sin embargo la precaución de favorecer, trazando hábilmente los límites de las circunscripciones electorales, las nacionalidades «históricas», sobre todo a los alemanes, los rumanos y los italianos, a costa de las naciones jóvenes, para mitigar de esta manera las consecuencias del sufragio universal. Pero el nuevo sistema electoral, a pesar de las precauciones tomadas, significó un grave retroceso del grupo étnico alemán, mientras que a las naciones jóvenes se les ofrecía por primera vez la posibilidad de representar con alguna eficacia sus aspiraciones nacionales en el Consejo de la Corona. En el aspecto social el nuevo sistema electoral aportó una profunda transformación de todo el escenario político. Los grupos hasta entonces privilegiados de la aristocracia y de la gran burguesía desaparecieron de un día a otro casi por completo como entidades políticas. Con 86 escaños de un total de 516, la socialdemocracia entró en el Parlamento como el partido más fuerte; pero poco después fue superada por el partido cristiano-social que, después de su fusión con el partido popular católico, alcanzó el número de 90 diputados. Aunque los grandes partidos de masas habían obtenido en la nueva situación un resultado relativamente favorable, había en el nuevo Consejo Imperial no menos de 28 grupos distintos y no se podía por lo tanto pensar en formar con estos grupos mayorías capaces de gobernar. Con todo, fue en general bien recibida la reforma electoral, especialmente en los círculos de la socialdemocracia, como un primer y prometedor paso en el camino hacia la creación de un Estado democrático plurinacional. La gran esperanza de hombres como Viktor Adler, de que el sufragio universal e igual,

unido a una supresión progresiva del centralismo burocrático, conduciría a una atenuación de los contrastes de nacionalidad, no se cumplió. Aunque los partidos nacionalistas radicales habían tenido que sufrir graves pérdidas, el contraste de las nacionalidades volvió a surgir bien pronto. Sobre todo, la reforma del Consejo Imperial seguía siendo insuficiente, mientras no cambiase el anticuado sistema electoral de las «curias» para los Parlamentos de los distintos Estados, verdaderos focos de odio nacionalista, aunque sí es verdad que en algunas regiones de la monarquía se pudo llegar, en el cuadro de las condiciones constitucionales vigentes, a una atenuación de los contrastes entre las nacionalidades. Así, ya en otoño de 1905, cuando la lucha por la reforma electoral alcanzaba su punto culminante, se había conseguido en Moravia un equilibrio nacional. Allí todas las «curias» electorales, a excepción de la primera, estaban divididas en secciones nacionales y los escaños distribuidos en la proporción de 73 a 40 entre los dos grupos étnicos, disposición que garantizaba tanto a los alemanes como a los checos una representación adecuada en el Parlamento regional y, lo que era aún más importante, en la Junta. Soluciones análogas se adoptaron más tarde, en 1910, en Bukovina y en 1914 en Galitzia. Fracasaron, sin embargo, las tentativas del gobierno Beck de encontrar un *modus vivendi* también en Bohemia; en los países que constituían el núcleo de la monarquía los contrastes nacionales continuaron existiendo como antes. Pero los prometedores principios de una liberalización del Estado plurinacional, en el sentido de una mayor participación de las distintas nacionalidades, como la habían llevado a cabo a partir de 1905, Gautsch y después de él Beck, fueron bien pronto bruscamente suspendidas. Ya en noviembre de 1908 el gobierno Beck caía víctima de la oposición unificada de los ambientes conservadores y del pretendiente al trono, el archiduque Francisco Fernando, y fue sustituido por un régimen burocrático autoritario, con el que se volvía a las viejas tradiciones de un centralismo inspirado en el sistema alemán. De esta manera se desperdiciaron las escasas posibilidades existentes de transformar el imperio en una federación, reconociendo las legítimas reivindicaciones de los distintos pueblos; en realidad no se había emprendido una sola tentativa seria en esta dirección. El contraste de las nacionalidades prosiguió con su antigua dureza, haciendo imposible cualquier gobierno de tipo constitucional. El conde Stürgkh, que en noviembre de 1911 asumió el cargo de primer ministro en la parte cisleithania del imperio, era de todos modos un enemigo declarado del parlamentarismo. No dudó en aplicar el artículo de «estado de emergen-

cia», artículo 14 de la Constitución de 1867, válido en todos los Estados de la Corona, para realizar su programa de gobierno sin tener en cuenta las instituciones constitucionales. En 1913 decidió disolver la Dieta general de Bohemia, que ya hacía tiempo que no podía realizar su trabajo a causa de la política obstruccionista de los partidos alemanes, y administró en lo sucesivo desde Viena a los países de la Corona de Wenceslao. Cuando los checos respondieron con una obstrucción sistemática en el Consejo Imperial, Stürgkh suspendió también éste, en marzo de 1914, por tiempo indefinido; sólo en mayo de 1917 el Consejo había de volver a reunirse. También en Hungría volvieron a imponerse a partir de 1910 las fuerzas tradicionales. En 1913 el conde Tisza volvió de nuevo al gobierno y gobernó la parte cisleithania del imperio con mano fuerte y de manera autocrática.

De esta manera, el conflicto de las nacionalidades quedaba relegado cada vez más al espacio extraparlamentario; pasando a la calle y a la prensa y, finalmente, a la clandestinidad. De momento la cuestión croata siguió una evolución más peligrosa. Tras la decepción provocada por el desenlace de la crisis de 1905, de la que los partidos croatas habían esperado una ampliación de la independencia de Croacia, así como su unión con Dalmacia, se constituyó en la Dieta federal de Agram (Zagabria) una coalición servo-croata que aspiraba a la unificación de todos los eslavos meridionales dentro de la monarquía. La anexión de Bosnia y de Herzegovina en 1908 condujo a una ulterior radicalización de este movimiento, que era seguida con entusiasmo por la vecina Servia. Los intentos de desacreditar a los dirigentes del movimiento servo-croata por presunta alta traición, fracasaron rotundamente y sólo consiguieron echar nueva leña al fuego. Así se creó en Croacia y en Eslovenia una situación casi revolucionaria. Atentados y acciones terroristas se hicieron cada vez más frecuentes. Finalmente, el gobierno central no supo defenderse del movimiento nacional-revolucionario, más que instaurando en el país a un comisario que gobernase con métodos dictatoriales. Aún más grave fue la evolución en Bosnia y Herzegovina, donde la organización secreta «Mano negra», fundada en 1911, alentaba sistemáticamente desde la vecina Servia las tendencias nacional-revolucionarias, sobre todo entre la juventud y entre los estudiantes. Toda una serie de atentados contra altos funcionarios austríacos demostraba claramente el descontento de la población bosnia contra el dominio austríaco.

También los checos empezaron a agitarse cada vez más. Desde el Congreso de los eslavos de Praga en 1908, había tomado

el movimiento neoeslavo un poderoso impulso entre los checos. Sin embargo, de momento sólo algunos elementos radicales jugaban a la carta de Rusia, como, por ejemplo, Klofác, el líder del partido socialista nacional checo, que en enero de 1914 constituyó una organización clandestina que tendría que haber actuado a gran escala en pro de una solución de la cuestión eslava bajo la dirección de Rusia, y que en el caso de una guerra mundial, de la que ya entonces se hablaba, tendría que haber saboteado la movilización austríaca. La gran mayoría de los checos seguía, sin embargo, incondicionalmente fiel al principio del Estado austro-húngaro. El objetivo de Kramár era el de ver a Austria-Hungría gobernada por una mayoría eslava, pero no pensaba siquiera en la destrucción de la monarquía danubiana. También Masaryk y Benes consideraron entonces solamente la equiparación de los checos con las otras nacionalidades en el interior del Estado único. Ni siquiera los polacos galitzianos pensaban entonces seriamente en separarse del imperio habsbúrgico. Además, la monarquía podía contar en todos los países con la lealtad de los partidos clericales, numéricamente muy poderosos. También la socialdemocracia, aunque en 1911 había tenido lugar la constitución de un partido checo autónomo, estaba fundamentalmente dispuesta a conservar el Estado único, aunque combatiese enérgicamente las vigentes condiciones políticas y sociales.

En estas circunstancias, sólo de los círculos burocráticos y gubernamentales podía venir una reorganización fundamental que hubiese dado a la monarquía danubiana un nuevo plazo de vida. Aquí dominaba sin embargo la moderación; gobernaban hombres que veían su única posibilidad en el «ir tirando» y que carecían de decisión y previsión. El pretendiente al trono Francisco Fernando, cuyos proyectos de trialismo habrían podido aportar posiblemente una solución satisfactoria a los acuciantes problemas relativos a las nacionalidades, no era bien visto, y no sin razón, en todos los sectores políticos. Cuando, el 28 de junio de 1914, en gran parte por la increíble ligereza de los órganos encargados de la seguridad, fue asesinado con motivo de una solemne visita oficial a Sarajevo por las balas de un nacionalista bosnio, tampoco se vertieron muchas lágrimas en las más altas esferas de la monarquía. A causa de la rigidez de la clase dirigente tradicional, la monarquía danubiana se hallaba en estado de agonía, y cuando, en julio de 1914, se trató de superar esa situación por medio de una política exterior temeraria, triunfaron definitivamente las fuerzas centrífugas sobre el venerable patriotismo imperial austro-húngaro.

Mientras que en el corazón de Europa, en el último decenio antes de la gran Guerra Mundial, las fuerzas democráticas sólo lograron arrebatar gradualmente terreno a las élites conservadoras dominantes, en la Europa septentrional se habían impuesto ya de manera definitiva. Es verdad que en los países escandinavos, a excepción de Finlandia que estaba sometida casi sin defensa al yugo ruso, existían presupuestos particularmente favorables para la victoria de la democracia. Los Estados escandinavos habían recibido muy pronto constituciones considerablemente progresistas (Suecia en 1809, Noruega en 1814 y Dinamarca en 1848), que creaban las bases para una evolución política continua. También la notable homogeneidad social de los pueblos escandinavos favorecía un proceso evolutivo. Las grandes masas campesinas así como los obreros, inicialmente en número aún limitado, dejaron durante mucho tiempo y de buen grado el predominio político a la burguesía, favorecida por el censo que no era todavía demasiado rígido. En efecto, hasta el final del siglo el poder estatal es ejercido en general por gobiernos de funcionarios que, nombrados por el monarca de propio arbitrio y nunca sustituidos integralmente, se sentían más responsables frente al Estado que ante una determinada clase social. Estos gabinetes ministeriales demostraron tener una estabilidad sorprendente; en general estaban en estrecho contacto con las fuerzas democráticas, pero también sabían afirmarse contra mayorías hostiles. En aquellas circunstancias los partidos políticos no eran nada más que grupos políticos reclutados en la exigua clase superior, y representaban fundamentalmente los mismos intereses. No tenían el respaldo de las masas, ni se esforzaban en tenerlo. Como tanto los reyes de Suecia, que desde la unión sueco-noruega de 1814 reinaban también sobre Noruega, como los reyes de Dinamarca hacían un uso muy prudente de sus prerrogativas reales y trataban de gobernar de acuerdo con la clase superior de la burguesía, terminaron las estructuras políticas por acercarse en todos los países escandinavos cada vez más al modelo inglés. El país más avanzado en este sentido era Noruega, donde ya desde 1884 existía un régimen parlamentario puro.

Con el progreso de la industrialización se modificó también en los Estados escandinavos el pacífico panorama político. No sólo se constituyeron a partir del final de la década de los años ochenta por todos los lados partidos socialistas; también los grupos burgueses estaban dividiéndose en una derecha conservadora y en una izquierda radical y reformista, que hacía de

la idea democrática su bandera, tratando sistemáticamente de encontrar el apoyo de las masas. En Noruega la *Vänstre* (la izquierda) consiguió ya en 1897 imponer el sufragio universal para las elecciones al *Storting*. Sólo cuatro años más tarde, después de varias décadas de gobierno burocrático de corte conservador, subió al poder, también en Dinamarca, la izquierda radical, si bien no pudo mantenerse por mucho tiempo, ya que faltaba en la propia izquierda unanimidad sobre la política a seguir. En Suecia, en cambio, las fuerzas conservadoras estaban firmemente instaladas. Allí el sistema censatario vigente, que concedía el derecho de voto sólo al 8 % de la población total, impedía el desarrollo de una izquierda democrática. Por ello el conservador Boström, apoyado en sucesivas mayorías parlamentarias y contando con el fuerte respaldo de la Corona, pudo mantenerse en su cargo de 1892 a 1901, y luego, una vez más, de 1902 hasta la primavera de 1905. Pero también en Suecia el problema del derecho de voto se convirtió pronto en el eje de la evolución política interna. En 1901 la izquierda organizó en el país un movimiento popular masivo en favor de una «apertura democrática», pero no pudo de momento obligar a las fuerzas conservadoras a una reforma radical del derecho de voto. Para no ser arrollados por un cuerpo electoral demasiado vasto, los conservadores insistieron en la introducción al menos del sufragio proporcional, mientras que los partidos liberales rechazaron cualquier compromiso y siguieron reivindicando el sufragio universal sin ninguna discriminación.

La activación política de amplios sectores, que se expresaba del modo más inmediato en las luchas por la reforma electoral, estaba siempre acompañada por un creciente nacionalismo; la evolución de las relaciones entre Suecia y Noruega lo demostraba de manera bien clara. En la restringida clase superior, de inspiración por lo general conservadora, de la que habían surgido hasta los años noventa los gobiernos de Noruega, la idea de un Estado único tenía numerosos partidarios, tanto más por cuanto ésta estaba estrechamente ligada al pensamiento monárquico. Pero cuanto más tenían que compartir los grupos dirigentes tradicionales el poder con hombres políticos sostenidos por la voluntad de las grandes masas populares, tanto más un robusto nacionalismo estaba destinado a ganar terreno respecto a la idea del Estado monárquico unitario. El contraste entre las estructuras políticas más progresivas de Noruega y las conservadoras de Suecia contribuía a agravar la situación. Ya en 1885, cuando la Dieta sueca reclamó por primera vez el derecho de participar en las cuestiones de política exterior, que

hasta entonces formaba parte de las prerrogativas reales, se habían alzado en Noruega amplias protestas contra el predominio sueco en la política exterior. Los noruegos, que disponían de un comercio exterior extremadamente desarrollado con respecto a la extensión del país, reivindicaban sobre todo la instauración de un propio régimen consular independiente de la voluntad de la mayoría sueca. La importancia política y económica que la izquierda noruega atribuía a un sistema consular autónomo estaba muy lejos de la realidad. El problema de si debían de crearse consulados noruegos propios se convirtió pronto en un punto de programa sobre el que convergían las fuerzas y las tendencias más divergentes del nacionalismo noruego, que se alimentaba sobre todo de una oposición radical hacia las tradiciones políticas y culturales de la nación dominadora, Suecia. En el último decenio del siglo el gobierno sueco de Boström, con la ayuda de las fuerzas conservadoras de Noruega, había sabido encontrar un *modus vivendi,* consiguiendo así aplazar la ruptura inminente entre ambos países. Pero en 1903, después del gran triunfo electoral de la *Vänstre,* la izquierda radical, que se proponía una independencia absoluta del Estado respecto a la ex-potencia colonial, Suecia, cambió la situación radicalmente. La *Vänstre* no estaba dispuesta a conformarse de nuevo con compromisos, sino que aspiraba a la completa autonomía de Noruega, también en el plano de la política exterior. Además de la cuestión de los consulados noruegos, se planteó ahora también el problema insoluble de la responsabilidad del ministro del Exterior común, que hasta entonces había sido siempre un sueco, frente al *Storting* noruego. Se estaba ahora decidido a luchar hasta el fin sin reservas sobre estos problemas, aunque esto tuviese que significar la guerra entre Suecia y Noruega. Pero una vez más lograron imponerse los elementos más razonables. Durante dos años el gobierno conservador moderado Hagerup discutió con los suecos un proyecto de reorganización de la unión, sin llegar a un resultado satisfactorio. Finalmente se produjo la ruptura por el proyecto de una nueva ley concerniente a los consulados. El 7 de junio de 1905 el *Storting* noruego, en una nota dirigida al rey Oscar II, revocó la unión con Suecia. En Estocolmo se constituyó un gobierno de concentración nacional, que al principio proyectaba llevar a cabo contramedidas radicales. Pero finalmente se sometió a lo irrevocable, exigiendo únicamente un referéndum para legalizar la separación, propuesta que el gobierno noruego aceptó rápidamente. El 8 de agosto de 1905 la mayoría aplastante de los noruegos votó la separación, y en

octubre eligieron, en sustitución de Oscar II, al príncipe Carlos de Dinamarca, Hakon VII, como nuevo rey de Noruega.

Este triunfo del nacionalismo democrático sobre sus adversarios conservadores, tanto en Noruega como en Suecia, tuvo importantes repercusiones también más allá de Escandinavia. Sin embargo, la *Vänstre* no pudo mantener su compacta mayoría en Noruega en los años sucesivos a 1905. Una parte de la izquierda se volvió de nuevo hacia la derecha, haciendo así posible la formación de gobiernos de derecha moderada. A cambio adquirió cada vez mayor importancia la socialdemocracia. En 1908 ésta participó por primera vez en el gobierno burgués de izquierda del republicano Gunnar Knudsen, que al año siguiente presentaba su dimisión. Pero tampoco los gobiernos de la derecha moderada, que de 1909 a 1913 dirigían los destinos del país, fueron más afortunados; éstos se vieron expuestos a una oposición creciente que provenía de las filas de la clase trabajadora. En 1912 tuvo lugar en todo el país una huelga sindical general. En 1913 la izquierda radical asumió definitivamente el poder. Apoyado por los socialdemócratas, el gobierno Knudsen, que había de permanecer en su cargo siete años, abolió el derecho de veto del rey, así como las últimas restricciones al derecho de voto, que a partir de ahora era concedido también a las mujeres, y emprendió el camino hacia una política de extensas reformas sociales.

También en Dinamarca se impusieron las fuerzas democráticas definitivamente a partir de 1905. Después de la subida al trono de Federico VIII en 1906, el régimen parlamentario fue reconocido universalmente. Los gobiernos de la izquierda burguesa, que encontraron en el *Folketing* el apoyo de una mayoría amplia pero no compacta, tenían que contar con la oposición de la Primera Cámara *(Landsting)*, dominada por la derecha; así, junto a los problemas de política social y de defensa, adquirió una importancia cada vez mayor la cuestión de una modificación de la Constitución en sentido democrático. Un primer intento del partido radical (dirigido por Theodor Zahle y escindido en 1903 de la *Vänstre,* constituyéndose como partido de reforma radical demócrata), de dar una nueva Constitución al país con el apoyo socialdemócrata, fracasó en 1910 a causa de la oposición del *Landsting*. Después de tres años de gobierno de partidos conservadores moderados, subió nuevamente al poder en 1913 el líder radical Zahle, a la cabeza de una coalición formada por el partido radical y los socialdemócratas que ya le habían concedido su apoyo durante el intento de reforma de 1910. Después de superar considerables resistencias internas, Zahle impuso una reforma constitucional

que concedía tanto a los hombres como a las mujeres el sufragio general y que preveía la democratización del *Landsting*. El 5 de junio de 1915 el rey Cristián X ratificó la nueva Constitución. Con ello se había realizado un paso importante en el camino hacia la transformación de Dinamarca en una monarquía parlamentaria de carácter democrático y social.

En Suecia, en cambio, los conservadores opusieron una resistencia larga y tenaz al asalto de las fuerzas democráticas. Aunque ya en otoño de 1905 los liberales, bajo la dirección de Staaff, habían podido obtener una victoria electoral sobre sus adversarios conservadores, no consiguieron imponer, contra la oposición de la derecha que en la Primera Cámara disponía de la mayoría, una amplia reforma del derecho de voto. Sólo en 1907 se modificó, con el apoyo de todos los grandes partidos, el sistema electoral que en lo sucesivo apenas se distinguiría del sufragio universal. Las primeras elecciones según el nuevo sistema, que doblaba en Suecia el cuerpo electoral, condujeron en el año 1911 al cambio político. Con 102 diputados los liberales obtuvieron una imponente mayoría, que sin embargo no era suficiente para formar un gobierno monocolor. Los socialdemócratas, que con 64 diputados habían obtenido el mismo número de escaños que la derecha, ocupaban así una posición clave en la Dieta. De esta manera se produjo también en Suecia, a partir de 1911, la colaboración política entre los liberales y la clase obrera, colaboración que se expresó sobre todo en una vasta legislación social. En la primavera de 1914 se produjo un nuevo corrimiento hacia la derecha, provocado por enconadas polémicas sobre el volumen del armamento sueco. Cuando, el 6 de febrero de 1914, 30.000 campesinos reunidos delante del palacio real protestaron contra la política militar del gobierno libertal Staaff, que no protegía bastante los intereses nacionales, el rey Gustavo nombró, después de violentas controversias, un gobierno no parlamentario dirigido por Hjalmar Hammerskjöld que, siguiendo la voluntad del monarca, emprendió un aumento del armamento en contra de la mayoría liberal de la Dieta. El comienzo de la Primera Guerra Mundial permitió una solución pacífica del conflicto entre la Corona y el Parlamento. Sólo después de un nuevo gran triunfo electoral de los liberales y de los socialdemócratas en el verano de 1917, emprendió también Suecia definitivamente la vía de la democracia parlamentaria.

Desde el punto de vista de la política constitucional los Estados escandinavos constituían, antes de 1914, un ejemplo para el parlamentarismo democrático incipiente. En el sur europeo, sobre todo en la Península Ibérica, los sistemas cons-

titucionales tenían, a primera vista, un aspecto aún más avanzado. Pero allí faltaba completamente el grado de homogeneidad necesario para poder transformar los triunfos del movimiento democrático en conquistas duraderas. Por el contrario, los agudos contrastes sociales conducían una y otra vez a oscilaciones entre la extrema derecha y la izquierda radical. Dictaduras autoritarias y gobiernos republicanos extremistas se sucedían los unos a los otros sin aportar una solución satisfactoria a los apremiantes problemas sociales. En aquella situación el triunfo de la idea democrática en la Europa meridional afectaba sólo a la superficie de la vida política y social.

Como en Francia y en los Estados escandinavos, en España la izquierda burguesa, en vista de la política represiva del régimen conservador de Maura, fue arrastrada desde 1906 a la alianza con la clase obrera, la cual no seguía aquí, como en otras partes de Europa, doctrinas socialdemócratas, sino sindicalistas. En el país existían además tendencias nacionalistas, que en las distintas regiones tenían un carácter netamente separatista; estas tendencias daban a la oposición contra la Corona y a las minorías conservadoras dominantes una aspereza corrosiva. Las diferencias políticas alcanzaron su punto culminante en 1909 al estallar en Cataluña una insurrección organizada, en la que confluyeron tendencias sindicalistas, nacionalistas y democrático-radicales. Maura pudo ahogar en sangre la revuelta de Cataluña, pero los liberales consiguieron entonces obtener la dimisión del odiado dictador, cuyos intentos de suprimir la izquierda por todos los medios, legales o ilegales, habían creado un descontento general en muchos ambientes.

Pero tampoco los liberales pudieron establecer un orden estable en este país, continuamente sacudido por agitaciones caóticas. La línea política rígidamente anticlerical que ellos emprendieron en 1909, siguiendo el modelo francés, para debilitar uno de los apoyos más importantes de los conservadores, el clero católico, y para crear al mismo tiempo un frente único de las fuerzas progresistas, dio origen en todo el país a violentos conflictos, que condujeron finalmente a que se apartasen los elementos más moderados de la alta burguesía del partido liberal. El gobierno del liberal-radical Canalejas, que era un hombre de la casta de Lloyd George, intentó emprender una nueva ruta política. Canalejas, que subió al poder en 1910, trató, a través de una política de enérgicas reformas sociales, de ganarse de nuevo para la monarquía a los republicanos radicales y de reconstruir la unidad del centro burgués sobre la base de un programa de reformas políticas. Pero Canalejas, asesinado en 1912 por un anarquista, no pudo llevar a cabo su polí-

tica. Sólo la atenuación temporal de los agudos contrastes políticos y sociales del país, como consecuencia de la favorable coyuntura económica atravesada por España al comenzar la Primera Guerra Mundial, impidió el desmoronamiento total del sistema político existente, en el que gobernaban hombres políticos liberales, pero que eran incapaces de resolver los acuciantes problemas del momento (como la cuestión particularmente grave de Cataluña) o de realizar reformas sociales.

En Portugal existía un abismo aún más profundo entre el derecho constitucional vigente y la realidad política. Tampoco aquí los grupos dominantes veían otra alternativa que la de defenderse con métodos violentos del radicalismo democrático, que no se dirigía solamente contra el clero católico y las camarillas del gobierno, sino también contra la existencia de la propia monarquía. En 1906, Joao Franco recurrió a la medida extrema de una reducción radical del número de diputados en las Cortes, con el fin de crear así las condiciones para la instauración de una «dictadura burocrática», sin abolir formalmente la Constitución. Esta medida condujo a una encarnizada lucha constitucional entre la Corona y la izquierda republicana, lucha que alcanzó su punto culminante en enero de 1908 con el asesinato del rey Carlos I. Los autores del atentado fueron celebrados por las grandes masas como mártires y sus tumbas cubiertas de flores. Sólo dos años después era barrida definitivamente la monarquía. La revolución de 1910 llevó al poder a la izquierda republicana, que hasta entonces había estado siempre violentamente oprimida. Fue proclamada la república, y el nuevo gobierno dictó inmediatamente una serie de leyes de reforma democrática, que se inspiraron en general en el modelo francés. Pero tampoco los gobiernos democráticos que dirigían ahora los destinos de Portugal pudieron sobreponerse a los grandes problemas sociales del país, en donde siguieron produciéndose huelgas espontáneas; por ello tuvieron que recurrir también, tarde o temprano, a medidas más o menos dictatoriales para defenderse por una parte del movimiento huelguístico sindical, y de los *putsch* monárquicos, por la otra. De esta manera todo progreso político quedaba ahogado en un caos de desesperantes conflictos sociales.

También en Italia se hallaban los hombres políticos ante una empresa casi insoluble. La industrialización había acentuado, en lugar de atenuar, el contraste entre el norte y el sur, entre los sectores burgueses dominantes y la clase obrera, y sobre todo las masas de trabajadores agrícolas que vivían con el mínimo indispensable. En la era de la democracia de masas el sistema parlamentario llegó todavía a funcionar en Italia sin

graves crisis. El mérito principal correspondió a Giovanni Giolitti, que entre todos los políticos italianos de su tiempo era el más previsor y que, en virtud de su extraordinario conocimiento del terreno parlamentario, no se dejaba atrapar por la red de los intereses de la política cotidiana, sino que sabía aprovecharlos para imponer reformas radicales.

El objetivo primario de la política de Giolitti era el mantenimiento del orden estatal existente, cosa que —como comprendió claramente el gran piamontés— requería un mayor enraizamiento de la monarquía y de las instituciones parlamentarias en la población. Por ello los esfuerzos de Giolitti perseguían en primer lugar la reconciliación de la clase trabajadora con el Estado, en el marco de una monarquía social. El nuevo gobierno Giolitti, constituido en mayo de 1906, emprendió inmediatamente numerosos proyectos de reforma que pudo en general llevar a cabo, como, por ejemplo, una ley que garantizaba el descanso dominical, así como una mejora esencial de los seguros de vejez de los trabajadores. Sin embargo, Giolitti fracasó en diciembre de 1909 en el intento de coronar su obra de reformas con la introducción del impuesto progresivo sobre la renta, y así, siguiendo su conocida táctica, cedió el puesto por quince meses a gabinetes mediocres, presididos por Sonnino y Luzzatti. En marzo de 1911 Giolitti reapareció de nuevo, esta vez con proyectos legislativos de notable audacia. En el mismo año impuso la nacionalización de todo el sistema italiano de seguros; los beneficios debían favorecer a los seguros de vejez de los trabajadores. Pero mucho más importante aún fue la decisión de Giolitti de dar a Italia el sufragio universal, igual y directo (aunque todavía reservado para los individuos de sexo masculino). La situación en el campo social, y especialmente en el de la enseñanza escolar, no correspondía en efecto a las concepciones ideales de la sociedad democrática; sin embargo, Giolitti se arriesgó a cruzar el Rubicón. A sus adversarios de la derecha, que ponían en discusión la extensión del derecho de voto a causa del gran número de analfabetos, sobre todo en el sur, Giolitti les oponía la fe en la fuerza educadora del sufragio universal. Se opuso a todos los intentos de atenuar la plena eficacia del sufragio universal como, por ejemplo, a través de la introducción del sufragio proporcional. Accedió solamente al compromiso de elevar la edad electoral a treinta años para los que no sabían leer ni escribir.

Esta resuelta política de apertura a la izquierda del Estado nacional italiano, que hasta aquel momento había estado gobernado en general por una élite burguesa numéricamente débil, fue reconocida, al menos temporalmente, por los traba-

jadores socialistas. A partir de 1906 empezó a disminuir la ola de huelgas y la socialdemocracia emprendió, siguiendo el ejemplo alemán, el camino de la lucha legal parlamentaria. También los jefes del movimiento obrero italiano reconocieron que la suerte de los trabajadores había mejorado considerablemente. En el congreso de la socialdemocracia italiana de Módena, en el año 1911, Rinaldo Rigola, secretario de la «Confederazione Generale del Lavoro» admitió: «Ha pasado el tiempo en que Marx podía afirmar que los proletarios no tenían otra cosa que perder que sus cadenas, en sus luchas contra la burguesía. Hoy por hoy se puede decir, por el contrario, que tienen algo que defender y que no tienen la intención de ponerlo en juego con agitaciones imprudentes e intempestivas»[75].

Con la expedición a Libia de 1911, Giolitti provocó de nuevo las apasionadas protestas de los socialistas, desencadenando en el otro extremo una ola de nacionalismo que sólo pocos años más tarde pondría en serio peligro su obra política. En amplios círculos del pueblo italiano la conquista de Libia estaba muy bien vista. No sólo se celebraba el ingreso de Italia en el grupo de las grandes potencias, sino que también se esperaba poder transformar Libia en una colonia italiana, que pudiese absorber el gran número de emigrantes a los países de ultramar, y de esta manera seguir dentro de los límites del Estado italiano. Se esperaba además que Libia sería una válvula de escape para los problemas sociales y económicos de la madre patria, idea que en algunos casos fue acogida con simpatía por la clase trabajadora. Todo esto se reveló más tarde como un grave error de cálculo. La guerra italo-turca se prolongó más de lo esperado, convirtiéndose para el país en un gran peso económico. Pero aún más graves que las consecuencias materiales de esta guerra fueron las repercusiones políticas. Mientras que los socialistas volvían a radicalizarse, excluyendo oficialmente en 1912 incluso al grupo reformista, se constituyó una derecha nacionalista radical, nutrida por la llama imperialista de aquellos años, que D'Annunzio atizaba desde París con sus canciones nacionalistas. Esta derecha rechazaba el régimen democrático y en parte no retrocedía tampoco ante la idea de utilizar la violencia contra el centro burgués. No obstante las elecciones de 1913, en las que participaron por primera vez 8,6 millones de italianos en lugar de 3,3, supusieron una vez más un gran triunfo del centro burgués, gracias, sobre todo, al apoyo de los electores católicos. En vista del clima áspero en el plano de la política interior, el propio Giolitti juzgó necesario, antes de las elecciones, movilizar las fuerzas del «orden». En un pacto electoral secreto, el llamado Patto

Gentiloni, los católicos prometieron dar su voto a aquellos candidatos liberales que se habían comprometido, aunque no públicamente, a tomar benévolamente en consideración sus deseos. No menos de 228 diputados liberales sobre un total de 370, que formaban la mayoría de Giolitti, debieron su mandato a esta astuta jugada. Sin embargo, la alianza con los católicos rompía con las tradiciones anticlericales del Estado nacional italiano. Cuando pronto, después de las elecciones, la opinión pública tuvo conocimiento del Patto Gentiloni, quedó gravemente afectado el prestigio político de Giolitti. Se le acusaba de haber «hecho» las elecciones de 1913 igual que todas las precedentes; y el historiador florentino Salvemini, de orientación socialista, renovó sus ardientes acusaciones contra la política de Giolitti, que, según él, trataba en realidad de eternizar una dictadura personal, corrompiendo con este fin el parlamentarismo.

En aquella situación el poder de Giolitti, hasta entonces indiscutible, empezó a tambalearse a partir del verano de 1913, aunque seguía disponiendo de una gran mayoría en la Cámara. Los socialistas acentuaron la lucha contra el régimen de Giolitti y también la izquierda anticlerical le retiró su apoyo. Fue sin embargo decisivo que la derecha, que atacaba a Giolitti con consignas nacionalistas, obtuviese un apoyo cada vez mayor y que consiguiese movilizar fuerzas auxiliares en otros campos. Sobre todo, los católicos hacían ademán de unirse con las fuerzas del nacionalismo contra Giolitti. Cuando en marzo de 1914, con motivo de una nueva ley sobre el estado civil que preveía la obligatoriedad del matrimonio civil, y que fue por ello violentamente atacada por los católicos, se produjo una crisis de gobierno, Giolitti se retiró silenciosamente de la escena política sin haber sufrido en realidad una verdadera derrota parlamentaria. Las luchas políticas encarnizadas contra un frente compacto de adversarios políticos no entraban en sus cálculos y desde un principio renunció a una prueba de fuerza. Probablemente Giolitti esperaba que, gracias a la composición del parlamento, no le sería difícil recuperar pronto el poder. Con su retirada se concluye en efecto toda una era, y con ella el predominio del liberalismo en la política interna italiana.

El nombramiento del político conservador Salandra para el cargo de primer ministro equivalía a un brusco giro hacia la derecha, aunque de momento no afectase a la composición del parlamento. Salandra podía contar con el pleno apoyo de los católicos, que de ahora en adelante se orientaban, en su inmensa mayoría, hacia la derecha. En política exterior jugó la carta de un nacionalismo imperialista, mientras que en el interior le ur-

gía combatir sobre todo a la izquierda. En junio de 1914 una ola de disturbios anarquistas, que en muchas partes de Italia tuvieron en jaque a las autoridades estatales durante una semana «roja», aunque los socialistas y los sindicatos se declarasen oficialmente contrarios a este movimiento, proporcionó al gobierno Salandra la ocasión deseada de presentarse ante la asustada burguesía como la reencarnación del orden público. En adelante, Salandra siguió una línea política que tenía como objetivo principal el de impedir a toda costa un nuevo gobierno Giolitti, el cual podría haber abierto definitivamente las puertas a la evolución social y haber dado a la clase trabajadora una plena participación en la vida del Estado. Tanto en las filas de la izquierda como en las de la derecha, creció la influencia de los grupos extremistas, mientras que el centro burgués, aunque numéricamente siempre fuerte, estaba paralizado desde el punto de vista político.

También en los Balcanes la evolución política iba acompañada de un nacionalismo creciente. La situación de la política interna dependía en gran medida de los acontecimientos de la política exterior. La suerte de los pueblos balcánicos estaba estrechamente ligada al proceso de desintegración del imperio otomano, iniciada desde hacía tiempo, pero hasta entonces siempre frenada por las grandes potencias. Sólo el desmoronamiento del dominio feudal turco en los territorios europeos del imperio otomano abrió definitivamente las puertas al triunfo de la idea del Estado democrático.

En los Estados balcánicos ya consolidados, Grecia, Rumania, Servia y Bulgaria, existían ya desde la mitad del siglo XIX, siguiendo el espíritu del tiempo, ordenamientos constitucionales que en parte restringían notablemente el poder de los monarcas. Pero ante el atraso de las estructuras sociales, estas constituciones no eran, por lo general, nada más que fachadas, detrás de las que se ocultaba el dominio de pequeños grupos de hombres políticos pertenecientes en su mayoría a la alta burguesía, que de tiempo en tiempo se alternaban en el gobierno sin serias luchas políticas. Los partidos, escasamente organizados, tenían poco contacto con las masas campesinas que se hallaban sumidas en una pobreza extrema. Políticamente éstas carecían de influencia y se resignaban con apatía a las condiciones existentes. En la gran mayoría de los Estados balcánicos existían sistemas de bipartidismo, con partidos conservadores y liberales que se parecían formalmente al modelo inglés pero que en realidad tenían un carácter extremadamente oligárquico, especialmente en Grecia y en Rumania.

En Bulgaria la situación era más complicada, ya que jurídica-

mente el país dependía de la Puerta. Rumelia oriental era, incluso hasta su definitiva unión con Bulgaria en 1877, una provincia turca de cuya administración se encargó a partir de 1885 el rey Alejandro. También en Bulgaria, dentro del marco de la constitución liberal de 1879, se alternaron en el poder los partidos conservadores y liberales, que eran en realidad camarillas. Pero el régimen constitucional vigente sólo estaba débilmente anclado en el pueblo, como demostraron los acontecimientos de 1887, cuando el gobierno ruso organizó con poco esfuerzo un levantamiento contra el rey Alejandro, obteniendo de esta manera la dimisión del príncipe Battenberg. Tampoco bajo el gobierno del rey Fernando, que fue llevado al trono en el mismo año por una asamblea nacional búlgara, cambiaron mucho las cosas. Ciertamente de ahora en adelante sólo conservadores como Stambolov (1887-1895) y Stoilov (1895-1899) sujetaron firmemente las riendas del poder hasta los primeros años del nuevo siglo, impidiendo a las fuerzas liberales abrirse camino.

Desde el punto de vista social, la situación más atrasada era la de Rumania. En algunos aspectos ésta semejaba a la rusa. Una pequeña casta de latifundistas, aliada a la alta burguesía, gobernaba con dureza a las masas campesinas y sobre el proletariado rural, sin dar siquiera muestras de apreciar la miseria en la que éstos se encontraban. Sólo el gran levantamiento campesino de marzo de 1907 en Moldavia recordó a los dominadores que las condiciones en el campo eran inaguantables y que había que ponerle remedio lo más rápidamente posible. La represión pareció, sin embargo, más importante al gobierno que la reforma; la insurrección de los campesinos fue aplastada con increíble brutalidad, y hasta hombres moderados como el historiador Jorga fueron acusados de simpatizar con la revolución social. Las reformas agrarias, que el partido nacional-liberal, apenas fundado, realizó en los años sucesivos, fueron del todo insuficientes; pero esto no era sorprendente si se tiene en cuenta que la clase latifundista se identificaba en gran parte con los legisladores. La progresiva industrialización y el aumento de la producción petrolífera aportaron al país la prosperidad, sin que ésta mejorase las condiciones de los campesinos y de los trabajadores agrícolas. Para los trabajadores agrícolas se fijó legalmente un salario mínimo, con el fin de impedir al menos las formas más intolerables de la explotación. Pero las condiciones feudales en el campo continuaron inalterables.

También en Montenegro comenzó a moverse la política interior. En 1905 el príncipe Nicolás concedió una constitución; pero dada la extrema pobreza de este pequeño pueblo de mon-

tafieses, no se podía hablar de vida constitucional según los modelos de Europa occidental.

Las condiciones políticas de Servia eran las más parecidas a las de Europa occidental. En este país existía desde 1889 un ordenamiento constitucional muy progresivo. A pesar de ello, el rey Alejandro Obrenović consiguió hacerse de nuevo ampliamente con el poder. Desde 1893 siguió una línea política extremadamente conservadora, dirigida especialmente contra los partidos radicales del país, cuyo líder, Pašić, jugaba con éxito la carta de un nacionalismo democrático. En 1901 se demostró claramente que ya no era posible gobernar sin tener en cuenta la voluntad de los partidos radicales; por ello Alejandro promulgó una nueva constitución, que aun siendo en los aspectos particulares fuertemente conservadora, concedía nuevamente a las fuerzas de izquierda posibilidad de acción política. Esta concesión llegó, sin embargo, demasiado tarde para salvar el prestigio de Alejandro, cuya prodigalidad superaba en mucho los recursos del país; además, su matrimonio con una burguesa de dudosa reputación le había costado la fidelidad del cuerpo de los oficiales. A esto se añadieron diferencias en el campo de la política exterior, en cuanto que Alejandro tendía hacia Austria-Hungría, mientras que el partido radical era de tendencia filorusa. Cuando en 1903 Alejandro intentó un golpe de Estado con la finalidad de asegurar al partido monárquico el predominio político, había sobrepasado ya toda medida. La familia real fue asesinada por un grupo de oficiales conspiradores, acaudillados por Dimitrijević, extinguiéndose la dinastía Obrenović. Una asamblea constituyente puso de nuevo en vigor la antigua constitución de 1889 y eligió como nuevo rey de Servia a Pedro Karadjordjević. Este poseía el apoyo de los radicales y siguió desde entonces una política de orientación nacional servia. En el interior fueron, sin embargo, los partidos nacional-radical, bajo Pašić, y radical autónomo los que asumieron la dirección, bajo el signo de la conciencia nacional servia que estaba cada vez más fortalecida. Servia estaba preparada política y constitucionalmente para asumir el papel histórico del Piamonte, de la unificación de todos los eslavos meridionales en un único Estado nacional. Ya en la guerra contra Austria-Hungría, iniciada en 1906 a causa de los tratados aduaneros con Bulgaria, los hombres políticos servios dieron prueba de gran firmeza y prudencia. Cierto que en adelante tuvieron que contar no sólo con la hostilidad de la monarquía danubiana, sino también con el movimiento radical de los eslavos meridionales en el propio país, movimiento que estaba organizado en sociedades secretas, como la *Narodna Odbrana* (Defensa Nacional) y la *Ujedinjenje*

ili smrt (Unidad o muerte, fundada en 1911); estas sociedades trataron de imponer al gobierno el programa yugoeslavo, que preveía la unificación en un Estado único no sólo de todos los servios, sino también de todos los croatas y eslovenios.

El impulso decisivo para la transformación de las condiciones internas en los Balcanes fue dado, sin embargo, por la progresiva decadencia del dominio turco. También en el imperio otomano, en 1876, se había proclamado una especie de constitución, pero el sultán Abdul-Hamid la había vuelto a suspender bien pronto, para emprender de nuevo los métodos de gobierno autoritario. El régimen despótico de la clase dominante turca en la Turquía europea estaba atenuado no sólo por su corruptibilidad, sino también por el hecho de que el imperio otomano se hallaba desde principios de los años 80, bajo la tutela financiera de las grandes potencias a causa de su enorme deuda con los acreedores europeos. Esto permitió a estos últimos intervenir en favor de las nacionalidades europeas dentro del imperio otomano y exigir la eliminación de los abusos más graves. Pero ni siquiera las grandes potencias pudieron impedir las bárbaras masacres de armenios en los años 1894 y 1895, ni encontrar una solución satisfactoria a la cuestión macedónica. Después de la gran insurrección de los macedonios de 1903, que fue aplastada por los turcos con métodos extremadamente brutales, Rusia y Austria-Hungría trataron de imponer al sultán, en el tratado de Mürzsteg, un programa de reformas para Macedonia, pero los gobernadores provinciales turcos siempre supieron eludir las peticiones de las potencias. Tampoco la instauración de una gendarmería internacional en Macedonia dio resultado alguno. La oposición de la población del país al dominio turco se desahogaba en un número cada vez mayor de atentados terroristas. Sobre todo la ORIM (Organización Revolucionaria Macedónica Interna), fundada en 1906 en Sofía, incitaba sistemáticamente entre los macedonios de nacionalidad búlgara a la lucha revolucionaria nacional contra los opresores turcos, siguiendo el modelo de los *aiducos* búlgaros.

De las unidades del ejército turco estacionadas en Macedonia, que no estaban menos descontentas de la corrupción de los círculos dominantes de los propios macedonios, partió finalmente la revolución de los «Jóvenes Turcos».

Bajo el mando de los coroneles Enver y Niazi, marcharon el 23 de julio de 1908 las tropas macedonias sobre Constantinopla, poniendo fin al dominio autocrático del sultán Abdul-Hamid. La Constitución de 1876 volvió a ser puesta inmediatamente en vigor y fue convocado un nuevo parlamento, del que formaban parte también representantes de las nacionalidades europeas

hasta entonces oprimidas. Cuando, en abril de 1909, los círculos conservadores de la corte trataron de llevar a cabo una contrarevolución, fue inmediatamente destituido Abdul-Hamid y proclamado nuevo emperador del imperio otomano su hermano Reshad con el nombre de Mehmet V. Mehmet no era, sin embargo, nada más que un fantoche en las manos del comité de los «Jóvenes Turcos», *Unidad y Libertad,* en el que Enver Pascha había de asumir pronto un papel dirigente.

Al principio existían esperanzas bien fundadas de que el nuevo régimen de los «Jóvenes Turcos» adoptase una actitud liberal también frente a las nacionalidades europeas, ya que en su programa figuraba la liberación de los pueblos del imperio otomano del yugo autocrático del sultán. Pero bien pronto estas esperanzas se vieron frustradas. Los nuevos soberanos eran aún más intolerantes que sus predecesores corruptos, tendiendo a suprimir los privilegios y los derechos particulares de los grupos no musulmanes dentro del imperio otomano. El ciego nacionalismo del grupo dirigente joven turco provocó, inevitablemente, movimientos nacionalistas entre los grupos étnicos europeos del imperio otomano. El ejemplo más claro fue el de los albaneses, que simpatizaban en un principio con el dominio turco y que, a causa de una estúpida política represiva, terminaron en el campo de sus adversarios.

El año 1908 representaba el comienzo de una nueva era para la situación política de los Balcanes, no sólo a causa de los cambios acaecidos en Turquía, sino también porque Austria-Hungría, como respuesta a la revolución de los «Jóvenes Turcos», anexionó ahora formalmente las provincias de Bosnia y Herzegovina, que desde 1878 se hallaban bajo administración fiduciaria, pero que según el derecho internacional seguían perteneciendo al imperio otomano; ello tuvo lugar con gran pesar de los servios, que veían sustraerse definitivamente a su penetración una parte esencial del territorio servo-croata. Este paso provocó nuevos procesos revolucionarios de carácter nacionalista. Los pueblos balcánicos fueron sacudidos por una nueva ola de nacionalismo que pretendía completar la obra liberadora del siglo XIX y que comenzó a envolver también a amplios estratos de la población que políticamente habían permanecido hasta entonces más o menos pasivos. El rey Fernando de Bulgaria proclamó la independencia de su país, creando así en política exterior las premisas para una consolidación política de Bulgaria. Los acontecimientos en el imperio otomano tuvieron sin embargo sus repercusiones más fuertes en Grecia. El movimiento de independencia cretense, bajo el mando de Venizelos, se extendió de improviso al continente. Como en la cuestión

cretense la Grecia oficial no había intervenido, se produjo en otoño de 1908 un golpe de Estado. Una junta de oficiales, cuya llamada a la unidad nacional del pueblo griego fue acogida con entusiasmo por las masas que habían permanecido hasta entonces políticamente al margen, barrió llena de entusiasmo nacionalista el sistema político existente. El alma de este movimiento fue Venizelos, que en 1910, después de haber renunciado oficialmente a la ciudadanía cretense, fue nombrado primer ministro griego. Las primeras elecciones después del golpe de Estado constituyeron una confirmación triunfal de la política de Venizelos; sus partidarios obtuvieron en el parlamento 150 escaños de un total de 181. De un día a otro desaparecieron sin dejar rastro los antiguos partidos de la escena política. Venizelos inició inmediatamente una obra radical de reorganización de las estructuras tradicionales griegas dirigiendo al país hacia una monarquía democrática moderna. En esta obra él veía la premisa necesaria para la reconquista de los territorios griegos que se encontraban aún bajo el dominio turco.

Desde 1908, también en Rumania la política interior empezó a salir del inmovilismo. En 1909 «Jonel» Bratianu, de la izquierda liberal, que contaba con el apoyo de la creciente clase media, alcanzó el poder. Cuando, en el invierno de 1910, el rey Carol I, descontento por la difusión de las corrientes democráticas en el país, obtuvo por la fuerza un cambio de gobierno, asegurando, gracias a fraudes electorales de gran envergadura, la mayoría necesaria al gobierno conservador Carp, Bratianu jugó a la carta de una reforma radical del sistema electoral que se basaba en un censo rígido; este censo había asegurado hasta entonces una participación política exclusivamente a la clase superior de la población. Bratianu perseguía además una transformación radical de las estructuras constitucionales en Rumania, inspirándose en los modelos de la Europa occidental. En los años sucesivos lucharon encarnizadamente por el poder Bratianu, que tenía detrás a las masas, y el rey Carol I. Al estallar la Primera Guerra Mundial no estaba aún decidido el fin de estas luchas; sin embargo, ya estaba claro que el futuro pertenecía a las fuerzas democráticas. Contra la voluntad de Carol I, Bratianu obtuvo la neutralidad provisional de Rumania a cambio del tratado de alianza de 1883 con las potencias centrales, que por lo demás no era conocido por la opinión pública.

La primera guerra de los Balcanes del año 1912 coronó las aspiraciones de los Estados citados frente a Turquía. El gran triunfo de la Liga balcánica (Servia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, ver pág. 238) dio un gran impulso al nacionalismo fa-

nático de aquellos pueblos. Los egoísmos nacionales se volvían ahora contra Austria-Hungría, degenerando al mismo tiempo en una encarnizada guerra fratricida. La autodestrucción de los Estados balcánicos en la segunda guerra de 1913 dejó profundas heridas en la conciencia política de los pueblos interesados. Durante largos decenios se hizo así difícil una colaboración política entre las jóvenes naciones de la Europa sudoriental. Las grandes potencias tuvieron muchas ocasiones para aprovechar en su interés las diferencias existentes entre los diversos Estados balcánicos. También en política interna las guerras balcánicas dieron resultados ambiguos. Las reformas constitucionales y sociales logradas después de 1908 fueron privadas en su mayor parte de sus efectos positivos. En casi todos los sitios existía un equilibrio inestable entre el poder de los monarcas de un lado, y los gobiernos apoyados por los jóvenes partidos liberales-radicales de otro, por lo que no era previsible en el próximo futuro una estabilización de la situación política. De ahora en adelante un nacionalismo violento, aunque no libre de componentes imperialistas, comenzaba a dominar no sólo las relaciones entre los Estados de Europa sudoriental, sino también en la política interna de los distintos Estados balcánicos.

Cuanto se ha dicho vale también para Turquía. Después del asesinato en junio de 1913 del Gran Visir Mahmud Shevket, último representante del antiguo estrato dominante conservador dentro del estrecho grupo dirigente del imperio otomano, tuvieron vía libre los «Jóvenes Turcos». El triunvirato Talaat, Djemal y Enver Pascha, que de ahora en adelante tenía en sus manos el destino del imperio otomano, trató de realizar, según el modelo del Reich alemán, una reestructuración del ejército y de la burocracia. Estos tres hombres políticos querían restituir a Turquía un puesto destacado entre las grandes potencias europeas. Siguiendo esta orientación, ellos se vieron cada vez más obligados a recurrir a los métodos autocráticos empleados por sus predecesores. De esta manera las fuerzas nacionalistas terminaron por triunfar sobre los débiles inicios de liberalización del imperio otomano. En pleno período de transformación interna los «Jóvenes Turcos» tuvieron, en octubre de 1914, la audacia de hacer intervenir al país en la Primera Guerra Mundial, un salto al vacío que había de terminar con el desmoronamiento del imperio otomano.

La revolución rusa de 1905 fue considerada por los contemporáneos como el grandioso preludio de una nueva época de la historia rusa. Sin embargo, ésta concluyó con la derrota casi completa de las fuerzas del progreso. Los escasos residuos de la constitución liberal, único resultado de la revolución, no conseguían ocultar el carácter autocrático del régimen zarista. Un sistema electoral plutocrático convertía a la Duma en un instrumento dócil al gobierno; 230 grandes propietarios de tierras o 1.000 propietarios de la alta burguesía estaban representados en la Duma por un diputado; igualmente, estaban representados por un solo diputado 60.000 campesinos o 125.000 trabajadores. Basándose en este sistema de extremo pseudoconstitucionalismo, pudo el primer ministro Stolypin dominar también con poco esfuerzo los últimos restos del movimiento revolucionario. Los trabajadores, los campesinos y la intelectualidad burguesa se sometieron en un primer momento con resignación a lo inevitable. No sin razón pudo Stolypin declarar en agosto de 1907 al corresponsal del periódico francés *Le Matin:* «En Rusia no hay ninguna revolución»[76]. Pero también Stolypin sabía que no podía gobernar sin un mínimo apoyo popular. Por ello trató de crear, a través de una profunda reforma agraria, una nueva clase de propietarios campesinos que, a diferencia de los campesinos que vivían en cooperativas, habrían dado por propio interés su apoyo al orden existente. Además, jugaba sistemáticamente la carta del nacionalismo panruso, política que le garantizaba la aprobación del restringido estrato superior del pueblo ruso representado en la Duma. Las nacionalidades no rusas fueron sometidas a una política de rusificación sin escrúpulos. Cuando en 1911 se procedió a introducir en las provincias occidentales del imperio el estatuto de los «zemstvos», Stolypin trató de imponer un sistema electoral que favorecía a los campesinos y a los funcionarios rusos, rutenos o ucranianos, en perjuicio de los terratenientes, normalmente polacos, con el fin de disminuir así la influencia de la nacionalidad polaca. Contra esta disposición protestaron violentamente no sólo los polacos, sino también los círculos ultraconservadores en el Consejo de Estado y en la Corte, los cuales simpatizaban con los latifundistas polacos. Así, Stolypin sólo pudo llevar a cabo esta reforma por medio de un «ukas» del zar, violando de este modo abiertamente la Constitución. Su inminente caída fue acelerada el 1 de septiembre de 1911 por las balas de un terrorista, que estaba probablemente a sueldo de la policía zarista.

Con la muerte de Stolypin desaparecía el último hombre de

Estado de la Rusia zarista, al que no se podía negar una cierta capacidad política, por muy problemática que hubiese sido su línea ideológica. Ya hacía tiempo que el zar había sucumbido a la influencia del monje moscovita Rasputín, y no prestaba oídos a los consejos políticos de hombres razonables. De esta manera cayó el poder en manos de mediocres burócratas que continuamente expuestos al juego de las intrigas no podían imponerse a las tendencias de la Corte zarista. Mientras la maquinaria burocrática del Estado ruso terminaba por degenerar de esta manera cada vez más, se estaban formando debajo de la superficie, que el terrorismo policíaco mantenía relativamente en calma, nuevas fuerzas revolucionarias. Era enorme la agitación de los campesinos que se veían abocados en su mayoría a la más completa proletarización, como consecuencia de las reformas agrarias de Stolypin; y la exasperación de la clase trabajadora no conocía límites. Las imponentes huelgas de los años 1912 y 1913 constituían una anticipación de acontecimientos futuros. También la *intelligentsia* burguesa fue presa de un profundo pesimismo, y no pocos intelectuales terminaron en el campo socialista. Fue entonces cuando Lenin, después de haberse decidido a separar definitivamente a los bolcheviques de los mencheviques, pronunció estas palabras: «Sin revolución victoriosa no habrá libertad en Rusia. Sin la caída de la monarquía zarista a través de la insurrección de los proletarios y de los campesinos no habrá en Rusia una revolución victoriosa»[77]. Lenin sabía mejor que nadie que la desesperación de las grandes masas por el estúpido despotismo de la burocracia zarista creaba el terreno sobre el que podía extenderse la idea comunista. «Precisamente la falta de derechos que sufre en Rusia toda la población, la imposibilidad e inutilidad de combatir por derechos aislados, precisamente este carácter incorregible de la monarquía zarista y de todo su régimen habrían encendido el fuego revolucionario de las masas»[78] Tal era el comentario de Lenin ante los fusilamientos en masa con los que, en abril de 1912, la policía zarista había aplastado una huelga en los yacimientos de oro del Lena. Pero aún era demasiado pronto para una insurrección revolucionaria; el sistema zarista tenía que destruirse aún a sí mismo por completo.

4. Europa en la vorágine de los nacionalismos militantes (1906-1914)

En toda Europa se enfrían, a partir de 1906, las pasiones imperialistas. Si hasta entonces los pueblos habían seguido con febril excitación las grandes pruebas de fuerza por la conquista de territorios de ultramar, ahora los problemas de política interna vuelven a acaparar el máximo interés. En Inglaterra, el gobierno liberal de Campbell-Bannerman, que había llegado al poder en la primavera de 1906, se ocupó de los acuciantes problemas sociales e institucionales, que habían sido descuidados en el precedente período del imperialismo. El gobierno inglés estaba, por tanto, interesado en disminuir los graves gastos militares —consecuencia de dos decenios de política exterior ambiciosa— y en reducir en lo posible los compromisos internacionales de Inglaterra. La situación era análoga en Francia; a la izquierda republicana, tradicionalmente pacifista, le interesaba mucho más la eliminación de la influencia que la Iglesia católica ejercía sobre la sociedad que los problemas de política exterior y mundial. También el canciller del Reich alemán, el príncipe Bülow, después del fracaso con el que había concluido la acción alemana en Marruecos, desplazó el peso de su política sobre los problemas internos. Incluso Rusia moderó sus ambiciones imperialistas. La derrota sufrida en la guerra contra el Japón redujo considerablemente su afán expansionista hacia el Extremo Oriente. La revolución de 1905 y sus consecuencias habían conmovido el sistema estatal de tal manera que era absurdo, por el momento, pensar en la prosecución de una política expansionista. A pesar de todo esto no comenzaba para Europa un período tranquilo. Antes bien, al crecer las fuerzas democráticas se liberaron en mayor medida energías nacionalistas, que introdujeron en las relaciones internacionales de las potencias un nuevo factor de extrema agresividad.

Este nuevo elemento se puso claramente de manifiesto en la evolución de la rivalidad naval entre Alemania e Inglaterra de los años 1906 a 1909. Si el programa alemán de construcciones navales no podía considerarse hasta aquel momento una seria amenaza para el dominio inglés de los mares, la situación cambia en 1906. En febrero del mismo año fue botada en Inglaterra la *Dreadnought*, la primera de una serie de nuevas naves de guerra de dimensiones y potencia bélica hasta entonces des-

conocidas. Con el paso a la construcción de buques del tipo de la *Dreadnought,* superiores a todas las otras naves construidas en el pasado, se presentaba a las otras potencias marítimas la posibilidad de recuperar en breve tiempo la enorme ventaja de Inglaterra en el terreno naval. Tirpitz aprovechó la ocasión: el tercer proyecto naval alemán, que gracias a una vasta campaña publicitaria de la Liga naval (financiada por la industria pesada), fue aprobado a finales de marzo de 1906 en el *Reichstag* alemán, por una mayoría aplastante, preveía ya la construcción de buques de guerra del tipo *Dreadnought.* Por primera vez, el predominio de Inglaterra sobre los mares parecía seriamente amenazado. Inglaterra aceptó el desafío que suponía la construcción naval de Alemania. Se inició así una carrera por el armamento naval. El almirantazgo inglés estaba decidido a mantener, también en esta nueva situación, la superioridad de Inglaterra. Tirpitz, que se daba cuenta de que la flota alemana no era todavía bastante fuerte para poder hacer frente a un eventual ataque británico, quería acelerar al máximo los trabajos.

Al principio, el gobierno Campbell-Bannerman había tenido la esperanza de poder conseguir, con la ayuda de un acuerdo sobre la reducción de armamentos por parte de todos, una disminución de las construcciones navales inglesas, muy oportuna para la política interna del país, considerando las cargas financieras que comportaba la carrera armamentista. Sin embargo, las propuestas presentadas por el gobierno británico en la Conferencia de la Paz de La Haya del año 1907, así como sus tomas de contacto diplomáticas en Berlín, no condujeron a ningún resultado positivo. Ni Tirpitz ni Guillermo II estaban dispuestos a interrumpir a mitad de camino el programa alemán de construcciones navales para satisfacer los deseos de Inglaterra, ni siquiera a reducirlo, sobre todo porque ambos se encontraban bajo la presión de la propaganda, tan clamorosa como eficaz, de la *Flottenverein* (Liga naval), que había juzgado del todo insuficiente el proyecto de ley de 1906. A raíz del desafortunado final de la acción alemana en Marruecos, se había extendido en amplios círculos de Alemania la idea de que Inglaterra obstaculizaría siempre las iniciativas alemanas en el campo de la política mundial, si no se le inspiraba, con la construcción de una potente flota de guerra, el debido respeto hacia sus intereses. Tirpitz, por su parte, no dudó en aprovechar al máximo la actitud favorable de la opinión pública alemana para emprender nuevos programas de armamento naval. Su deseo principal era el de llevar a cabo una rápida sustitución de los barcos viejos, ya que de esta manera se podría reducir, sin llamar

excesivamente la atención, la aún enorme desventaja con respecto a Inglaterra. Por esta razón, ya a finales del verano de 1907 el ministerio de la Marina comenzó a preparar un nuevo proyecto naval, que preveía la reducción de la duración de servicio de las naves a veinte años, lo que significaba una aceleración de los ritmos de construcción, para alcanzar el número de cuatro grandes buques por año hasta 1912. En Inglaterra empezó a extenderse una cierta inquietud, no sólo en el almirantazgo, sino especialmente en la opinión pública. La prensa inglesa, en su mayoría, interpretó el nuevo proyecto naval de Alemania (que fue publicado el 18 de noviembre de 1907) como una señal de alarma; este proyecto de ley demostraba a sus ojos que Alemania aspiraba a romper el predominio inglés sobre los mares. La opinión pública exigía ahora un enérgico potenciamiento de la flota naval inglesa. William Th. Stead, el influyente editor de la *Pall Mall Gazette,* proporcionó a la agitación naval inglesa el *slogan* popular: «two keels to one»; por cada nave que Alemania botase, Inglaterra debía construir dos. Sin embargo, el gobierno inglés, a pesar de los graves conflictos con el jefe del almirantazgo, lord Fisher, se contentó en la primavera de 1908 con un modesto incremento de las *naval estimates.* La agitación de la opinión pública inglesa aumentó aún más cuando, el 18 de febrero de 1908, Guillermo II echó aceite al fuego con una carta tan estúpida como bien intencionada, dirigida a lord Tweedmouth, el *First Lord of the Admiralty.* Ante aquellas circunstancias lord Asquith, el primer ministro, se vio obligado a declarar en marzo de 1908, en nombre del gobierno, que también en el futuro se sentiría ligado al *two powers standard,* según el cual la flota inglesa tenía que ser siempre tan fuerte como las dos potencias navales sucesivas juntas; en caso de necesidad, se evitaría con nuevas construcciones que Alemania pudiese asumir el predominio en el campo de las naves de grandes dimensiones.

Esta declaración tranquilizó por el momento incluso a los más apasionados defensores de un radical refuerzo de la flota británica. La cuestión naval siguió, sin embargo, a la orden del día. Mientras el almirantazgo inglés elaboraba planes para acelerar en medida considerable las construcciones navales —Mc Kenna, el sucesor de lord Tweedmouth, al que había sido fatal la carta de Guillermo II, y Fisher pensaban en una producción de cuatro a seis buques al año—, el gobierno inglés trató de obtener de Alemania un acuerdo para la reducción recíproca del armamento naval, tentativa que fue rechazada naturalmente por Guillermo II. El Kaiser no estaba dispuesto a renunciar al fortalecimiento de la flota alemana, a cambio de establecer buenas

relaciones con Inglaterra, y rechazaba cualquier influencia de la política inglesa sobre la construcción naval de Alemania: «La flota alemana no está construida contra nadie, y tampoco contra Inglaterra. Sino que está construida según nuestras necesidades. Esto se ha dicho claramente en la ley sobre la flota (...). Esta ley se sigue fielmente hasta el último punto; que a los británicos les plazca o no, es igual. Si quieren la guerra, pueden comenzarla, nosotros no la tememos»[79]. Y cuando, el 10 de agosto de 1908, el embajador inglés extraordinario, sir Charles Hardinge, expuso al Kaiser con toda claridad el punto de vista inglés sobre la cuestión naval, el Kaiser negó con énfasis que alguien tuviese en Alemania la idea de la construcción naval en competencia con Inglaterra.

Todo esto no bastaba, sin embargo, para tranquilizar a la opinión pública inglesa. Al contrario, ahora se pensaba en general en lo peor. Basándose en informaciones erradas de parte interesada sobre la capacidad de los astilleros alemanes, el almirantazgo llegó a la conclusión de que Tirpitz estaba decidido a construir un número mayor de buques que los establecidos públicamente en la ley sobre la flota, de manera que Alemania podría tener a su disposición tal vez en 1912, más buques grandes del tipo *Dreadnought* que Inglaterra. En aquellas circunstancias el *two powers standard* perdía su sentido; ahora ya se trataba únicamente de mantener el *one power standard* frente a Alemania. Se llegó así en Inglaterra a un verdadero *navy scare,* que alcanzó en marzo de 1909 su punto culminante. Abandonando todo sentido de la realidad, no se temía ahora únicamente que Alemania, en el curso de pocos años, llegase a disponer de un número mayor de buques grandes y modernos —sólo éstos contaban en las mentes de los contemporáneos— sino que además se pensaba en un ataque por sorpresa. Bajo la presión de una agitación casi histérica: *We want eight, and we won't wait,* es decir, ocho buques al año, frente a los cuatro que estaban en construcción en Alemania; el gobierno liberal se encontró en una situación difícil. Para el caso de que las previsiones pesimistas del almirantazgo sobre proyectos de construcción alemanes, de los que se pensaba que rebasaban ampliamente el límite de la vigente ley sobre la flota, se revelasen fundadas, se preveía una notable ampliación del propio programa de construcciones navales.

Inglaterra se veía golpeada en su talón de Aquiles. Y el Reich alemán, con su entusiasmo por la flota y con sed de triunfos en el campo de la política mundial, no quería renunciar al ulterior fortalecimiento sistemático de la propia flota. Desde un punto de vista subjetivo, las afirmaciones de Gui-

llermo II de que la flota alemana no estaba dirigida contra Inglaterra, correspondían a la verdad; más que un instrumento político, ésta constituía para el Kaiser un soberbio juguete. También para la clase media alemana la flota era sobre todo un símbolo de prestigio mundial; y no se comprendía por qué los ingleses no estaban dispuestos a concedérselo. Pero de hecho, las construcciones navales de Alemania comenzaron a transformarse en un serio peligro para la situación política alemana general, sobre todo después del enfriamiento de las relaciones anglo-alemanas a raíz del *affaire* del *Daily Telegraph* de 1908 (v. pág. 179). En la primavera de 1909, Bülow trató por ello de ganarse a Tirpitz para un acuerdo con Inglaterra, sobre una recíproca reducción de los armamentos navales. Bülow quería, sin embargo, condicionar este pacto a una política más amistosa de Inglaterra en el futuro con respecto al Reich alemán. Al creador de la flota alemana de guerra, el canciller dirigió la pregunta, tan justificada como casi blasfema en aquella situación, de si para las exigencias políticas de Alemania no hubiese sido más conveniente una política naval de carácter defensivo, basada esencialmente en la construcción de acorazados más ligeros y de sumergibles, que no una gran flota de guerra. Tirpitz y Guillermo II no estaban, sin embargo, dispuestos a renunciar, ni ante los ingleses ni ante la diplomacia alemana, a lo que era su criatura predilecta. Pero Bülow no tenía la suficiente autoridad para arriesgar una prueba de fuerza ante la que la opinión pública se habría puesto probablemente del lado de sus adversarios.

En la Europa sudoriental se habían iniciado, entretanto, nuevos desarrollos, que atraían la atención de los círculos dirigentes del Reich alemán y de los gobiernos de todas las otras grandes potencias, desviando la atención de los problemas de la rivalidad naval anglo-alemana. Como ya vimos, al final de junio de 1908 había estallado en el imperio otomano una revolución. Descontentos del sultanato corrompido y siempre dócil a los deseos de las grandes potencias europeas, el movimiento de los «Jóvenes Turcos» obligó a Abdul-Hamid a proclamar una constitución más democrática y a poner al frente del gobierno a un hombre de su elección. Así el poder turco, que era extremadamente precario, sobre todo en los territorios europeos del imperio otomano, entró en crisis. ¿Qué futuro esperaba a los territorios europeos, en los que habían gobernado hasta ahora de manera extremadamente despótica los turcos? En un Estado nacional unitario de carácter moderno, como el que propugnaban los «Jóvenes Turcos», no había en realidad ya sitio para estos territorios que poseían cada uno un régimen jurídico par-

ticular. ¿Qué forma tendría que asumir la relación de vasallaje de Bulgaria hacia el sultán, si éste se había convertido en un monarca constitucional? ¿Y qué había de suceder con Bosnia, la Herzegovina y el sanjacato de Novibazar, administrados los tres por Austria-Hungría según el Congreso de Berlín de 1878, pero que según el derecho internacional seguían formando parte del imperio otomano? El movimiento subeslavo presentía que se avecinaban tiempos mejores; si en Constantinopla habían triunfado las fuerzas de un nacionalismo democrático, ¿podía esperarse que sucediese lo mismo en las provincias europeas del imperio otomano?

Por motivos opuestos se alarmó también Austria-Hungría; la cuestión sudeslava había entrado por fin en una fase crítica. Aun en el año precedente el gobierno austro-húngaro había promovido enérgicamente el proyecto de construcción de una línea de ferrocarril en el sanjacato de Novibazar, que debía haber creado las premisas técnicas para una penetración económica de Austria-Hungría en toda Macedonia; y se pensaba proseguir más tarde esta línea de ferrocarril hasta Salónica. En la persecución de estos ambiciosos planes de imperialismo financiero el gobierno de Viena no se había dejado impresionar ni por Italia y Rusia, ni por las violentas protestas de Servia, que estaba directamente interesada y que veía esfumarse sus esperanzas de unificar en un único Estado nacional todas las regiones habitadas por servo-croatas. De golpe, esta política quedaba puesta en duda. Aehrenthal, el ministro del Exterior austríaco, cambió decididamente el rumbo. Se tomó la decisión de restituir a Turquía el sanjacato y de anexionar lo antes posible Bosnia y Herzegovina, con el fin de deshacer de una vez para siempre las esperanzas de los servios de poder llegar a una unificación con sus compatriotas más allá del Drina. Del proyecto de un ferrocarril que atravesase el sanjacato no se volvió a hablar más.

Aehrenthal podía contar, con seguridad casi absoluta, con el apoyo de Alemania para su proyecto de anexión de Bosnia y de Herzegovina. En vista del resultado de la Conferencia de Algeciras y de las fuertes tensiones anglo-alemanas, Alemania no se podía permitir traicionar en esta cuestión a su único aliado fiel. Bülow era de la opinión de que había que conservar a todo trance la «fidelidad nibelúngica» a la monarquía danubiana en este punto, aunque la acción austro-húngara pudiese comprometer seriamente la influencia de Alemania en Constantinopla. Más delicada era la cuestión de la actitud que adoptarían Rusia e Italia. Según el acuerdo austro-ruso de los Balcanes de 1897, Austria-Hungría estaba obligada a ponerse

de acuerdo con Rusia antes de provocar un cambio del *status quo* en los Balcanes. También Italia, de acuerdo con la Triple Alianza, tenía derecho a ser consultada previamente en este caso, y a recibir entonces una compensación. La proyectada anexión de Bosnia y de Herzegovina debía además, según el derecho internacional, ser sancionada por todas las potencias que habían firmado el tratado de Berlín en 1878 y que habían confiado entonces la administración de estas provincias a la monarquía danubiana. Aehrenthal creía, sin embargo, poder alcanzar su objetivo de manera más sencilla. El 26 de septiembre de 1908 invitó a una conferencia en Buchlovice (Buchlau) al ministro del Exterior ruso, Iswolski, y obtuvo de éste la seguridad de que Rusia no se opondría a una declaración de anexión de Bosnia y de Herzegovina, simultánea a la renuncia al sanjacato de Novibazar, anexión que se llevaría a cabo en un futuro no lejano y en el momento oportuno. Aehrenthal prometía a cambio apoyo diplomático para la apertura de los estrechos a los buques de guerra rusos, apertura deseada entonces urgentemente en San Petersburgo, ya que, después de la pérdida de Port Arthur, se quería trasladar la mayor parte de la flota rusa al mar Negro. Iswolski había exigido, sin embargo, que una conferencia de las grandes potencias sancionase formalmente la decisión austríaca. Pero Aehrenthal había evitado hábilmente este punto, ya que la internacionalización del problema no le interésaba en absoluto. Iswolski prosiguió su viaje a Italia para encontrarse con el ministro del Exterior italiano Tittoni, e informarle de las decisiones tomadas en Buchlau por las grandes potencias con respecto al imperio otomano. El ministro del Exterior ruso pensaba, evidentemente, resolver el problema, desde hacía tiempo en discusión, de las posesiones europeas en Turquía, a través de una especie de acción concertada entre Rusia, Austria-Hungría e Italia; esta acción tendría que haber estado naturalmente precedida por un acuerdo con las otras grandes potencias. Pero mientras Iswolski estaba aún en Londres negociando para procurarse su parte del botín, pasó Austria-Hungría inesperadamente a la acción; y el príncipe Fernando de Bulgaria, que había sido informado por Viena de la inminente declaración de anexión, se le adelantó, anulando por propia iniciativa la relación de dependencia de la Puerta, y proclamando la plena soberanía del Estado búlgaro. Iswolski, que no había encontrado en Londres el apoyo deseado en la cuestión de los estrechos, se vio completamente burlado: de hecho, Rusia había quedado fuera de combate. En San Petersburgo, donde se estaba insuficientemente informado de los acuerdos entre Iswolski y Aehrenthal, se reaccionó con extrema dureza.

Al mismo tiempo se desencadenaba en Servia una violenta ola de protestas contra la anexión. En Belgrado se hicieron preparativos militares y se exigieron compensaciones territoriales para el caso de que las grandes potencias se decidieran en favor de Austria-Hungría. El movimiento nacional-revolucionario sudeslavo, que hasta entonces había visto en el imperio otomano a su más principal enemigo, se volvió ahora violentamente contra Austria-Hungría, la cual, como se decía, pisoteaba los intereses nacionales de los servios. Rusia, que se consideraba la protectora de los pueblos menores de los Balcanes, se veía en una situación crítica. En Buchlau, Iswolski había abandonado sin embargo desde el principio los intereses de los rusos en Servia. Pero un abandono total y público de Servia habría tenido como consecuencia una grave disminución de la influencia política rusa en los Balcanes. Por otro lado, en San Petersburgo el mal estado del propio armamento y la crítica situación interna no aconsejaban correr el riesgo de una gran guerra, tanto más cuanto que el Reich alemán se había puesto incondicionalmente al lado de Austria-Hungría, aunque en contra del consejo de Guillermo II. En Berlín se observaba con disgusto el acercamiento entre Rusia e Inglaterra, manifestado ostensiblemente el año anterior con la visita de Eduardo VII a Reval; se quería por ello hacer sentir claramente al vecino oriental el peso de la propia potencia. También Francia dio a entender que no deseaba verse envuelta en una guerra mundial por la cuestión bosnia. Así, no le quedó a la diplomacia rusa otra posibilidad que insistir en que el problema de la anexión no fuese decidido de manera unilateral por Austria-Hungría, sino que debía de ser resuelto conjuntamente por las grandes potencias. Sin embargo, no pudo imponer sus exigencias. Sometida a presiones fortísimas por parte de la diplomacia alemana, Rusia terminó por declararse de acuerdo con la anexión de Bosnia y de Herzegovina, aún antes de una conferencia internacional, induciendo también a Servia a ceder. Lo que indujo a los servios a reconocer, aunque muy a regañadientes, la anexión, y a prometer un buen comportamiento también en el futuro de la monarquía austro-húngara, fue la concreta amenaza de guerra, propugnada ya hacía tiempo por Aehrenthal, con el fin de «eliminar el foco revolucionario servio», y considerada inevitable, tarde o temprano, por el jefe de estado mayor austríaco, Conrad von Hötzendorff, en pleno acuerdo con su colega alemán Helmut von Moltke. A Turquía tampoco le quedó más remedio que contentarse con la nueva situación en los Balcanes.

Así concluyó la crisis de Bosnia con un notable triunfo diplomático de las potencias centrales y con una grave humilla-

ción de Rusia. Pero aunque por el momento en Viena y en Berlín se podía estar satisfecho por haber creado una fisura en la alianza franco-rusa y por haber reforzado una vez más el predominio austro-húngaro en los Balcanes, las consecuencias de la crisis fueron todo menos satisfactorias. En San Petersburgo quedó un profundo descontento hacia la diplomacia alemana, que en el momento crítico se había enfrentado a la diplomacia rusa con una dureza insólita, aunque los intereses alemanes no habían sido absolutamente puestos en juego. En los círculos dirigentes rusos se estableció entonces la convicción de que una activa política balcánica, tal como era propugnada cada vez con mayor insistencia por los círculos paneslavistas de la propia Rusia, tendría siempre a Alemania como adversario número uno. Nicolás II hablaba incluso de que «en un futuro sería inevitable un enfrentamiento con los alemanes y que había que prepararse» [80]. Austria-Hungría tenía que contar de ahora en adelante con la hostilidad irreconciliable del movimiento nacional-revolucionario radical en Servia, y sobre todo en Bosnia. Este movimiento ponía todas sus esperanzas en la caída del Estado unitario austríaco, y con este fin buscaba alianzas donde fuere; en el embajador ruso en Belgrado, Hartwig, halló pronto un intercesor influyente. La Triple Alianza sufrió además un nuevo revés. Italia, irritada por el hecho de que había sido olvidada por completo en la cuestión de Bosnia por Austria-Hungría y que sus deseos, centrados principalmente en el *status* jurídico de Montenegro, no habían sido tenidos en cuenta, concluyó en octubre de 1909 en Racconigi un tratado secreto con Rusia, dirigido directamente contra la política balcánica de Austria-Hungría. Ambas potencias se comprometieron a empeñar sus fuerzas en el mantenimiento del *status quo* político de los Balcanes. Pero si a pesar de todo se producían cambios políticos, ambas partes tenían que orientar su línea de acción siguiendo el principio nacionalista, excluyendo cualquier dominio de una nacionalidad sobre otra. Italia prometía además una actitud benévola en la cuestión de los estrechos; Rusia se comprometía, en cambio, a apoyar diplomáticamente una eventual adquisición de Trípoli y de Cirenaica. Se establecían así las premisas para una futura reapertura de la cuestión balcánica; tanto Rusia como Italia estaban decididas a minar el predominio de Austria-Hungría en los Balcanes, fomentando las aspiraciones nacionales de los pueblos sudeslavos, para acercarse, de esta manera, a la realización de sus propios objetivos imperialistas. Para la monarquía danubiana, que desde hacía tiempo debía resolver en el interior graves conflictos de nacionalidades, esta situación contenía graves peligros. Si se llega-

ba, entre el movimiento sudeslavo irredentista de una parte y Rusia e Italia de otra, a una alianza duradera, los días de la monarquía danubiana estaban contados.

Afortunadamente, hacia el final de 1909 las relaciones entre las grandes potencias europeas conocieron un período de cierta tranquilidad. Austria-Hungría logró restablecer de nuevo relaciones tolerables con Rusia, después de que Sasonov, un político tranquilo y prudente, sustituyó al desafortunado Iswolski. También las relaciones de las potencias centrales con Italia mejoraron nuevamente cuando, en la primavera de 1910, San Giuliano sucedió como ministro del Exterior a Tittoni. San Giuliano pensaba realizar mejor los objetivos imperialistas de Italia aliándose con las potencias centrales que con Francia y Rusia. La Triple Alianza se tenía que transformar, según el ministro del Exterior italiano, en una «sociedad de compras». Y en el Reich alemán había dimitido en junio de 1909 Bülow, cuya política exterior dirigida sólo a triunfos momentáneos, fáciles y destinados a ser aprovechados con fines propagandísticos, había irritado más de lo necesario a las otras potencias en contra de Alemania. Su sucesor, Bethmann Hollweg, aunque no tenía experiencia en el campo de la política exterior, se esforzó en ir eliminando gradualmente los contrastes entre las grandes potencias, valorando acertadamente la poco favorable situación general internacional de las potencias centrales. Siguiendo una política exterior honesta y recta, que evitaba todas las tretas y astucias bülowianas, esperaba poder recobrar para Alemania la confianza de las otras potencias, que en el curso de los últimos años había sufrido graves quebrantos.

En primer lugar se presentaba para Bethmann Hollweg el problema de disipar las densas nubes que oscurecían las relaciones anglo-alemanas, y de llegar a un acuerdo sobre la limitación del armamento naval, como había propuesto ya Bülow en los últimos meses de su mandato. Para Bethmann Hollweg el acercamiento político a Inglaterra era la única salida real de la comprometida situación en la que se hallaba el Reich alemán en política exterior, a causa de su incoherente política de «mano libre». Así, desde el primer día en que ocupó su cargo propugnó enérgicamente un acuerdo naval con Inglaterra, aunque sabía que tal política iba a ser todo menos popular: «Hay que contar con que el pangermanismo, la Liga naval, etc., provocarán un inmenso clamor. Pero esto no podrá impedirnos hacer lo que es justo»[81]. Ciertamente, también Bethmann Hollweg quería hacer depender un acuerdo sobre la cuestión naval de un sustancial cambio de dirección de la política inglesa; como contrapartida pedía de Inglaterra nada menos que un pacto

político que debía acercarse lo más posible a una promesa de neutralidad en el caso de una guerra continental. Tirpitz, en cambio, que para sorpresa del nuevo canciller se mostraba muy dispuesto a colaborar, deseaba que los ingleses se comprometiesen a no rebasar una relación de fuerzas de las dos flotas de 3 a 2, lo que hubiese permitido a Alemania durante largo tiempo un ulterior y tranquilo refuerzo de la flota sin correr riesgos, minando al mismo tiempo el principio inglés del *two keels to one*. Ambas propuestas se revelaron para el gobierno inglés del todo inaceptables, tanto más por cuanto que la contraoferta alemana de una simple desaceleración en el ritmo de las construcciones navales, respetando sin embargo la ley naval vigente, era absolutamente irrelevante. El *Foreign Office* sospechaba que detrás de las propuestas alemanas se escondía únicamente el intento de separar a Inglaterra de sus aliados y de dar mano libre a Alemania para una política agresiva en el continente. Así las negociaciones anglo-alemanas, que tuvieron lugar entre agosto de 1909 y el verano de 1911, quedaron sin resultados concretos. Solamente se llevó a cabo un acuerdo para un recíproco intercambio de informaciones sobre los problemas relativos a las construcciones navales, sugerido por los ingleses ya desde 1907. A pesar del momentáneo fracaso de acuerdos más amplios, se consiguió al menos disipar la desconfianza de la diplomacia inglesa hacia la sinceridad de la política alemana. Pero la flota alemana continuó siendo considerada en política exterior como un arma dirigida contra los ingleses y la profunda antipatía recíproca de los dos pueblos siguió produciendo en ambos lados del Canal los más extravagantes frutos de odio nacional.

También con respecto a Rusia la diplomacia alemana trató de eliminar, al menos en parte, las tensiones que había dejado la crisis bosnia. Con motivo del encuentro de Guillermo II y Nicolás II en Potsdam el 4 y 5 de noviembre de 1910, tuvieron lugar entre los hombres de Estado responsables largas conversaciones políticas, cuyos resultados llenaron a Bethmann Hollweg del máximo optimismo. Bethmann Hollweg dio al gobierno ruso la seguridad vinculante de que, en caso de eventuales proyectos expansionistas sobre los Balcanes, Austria-Hungría, no podría contar con el apoyo de Alemania; a cambio se obtuvo de Sasonov la declaración de que Rusia no apoyaría una política agresiva de Inglaterra contra Alemania. Además, se llegó a un acuerdo para salvaguardar la integridad territorial de Turquía frente a los Estados balcánicos menores, mediante una nivelación de los intereses de ambas potencias en el Próximo Oriente. Pero también aquí como en las negociaciones na-

vales con Inglaterra, se había esperado demasiado. A pesar de la insistencia del gobierno alemán, no se fijaron en un documento escrito los acuerdos convenidos —para gran disgusto del subsecretario alemán del Exterior, Kiderlen-Wächter, que deseaba indisponer con dicho pacto a Rusia y a Londres, obstaculizando así los preparativos de una entente anglo-rusa. Después de largas negociaciones, que no concluyeron hasta el año siguiente, se llegó a concretar un acuerdo sobre Persia y sobre el ferrocarril de Bagdad. De hecho, Rusia sólo deseaba encontrar durante algunos años un poco de tranquilidad en política exterior, con objeto de poder estabilizar la situación interna. Los hombres de Estado rusos estaban, sin embargo, lejos de pensar en una orientación fundamentalmente nueva de la política de las dobles alianzas. Así se esfumaron bien pronto las esperanzas de Bethmann Hollweg de un radical mejoramiento de las relaciones ruso-alemanas, que tal vez hubiesen inducido también a Inglaterra a demostrar una mayor eficacia hacia los deseos alemanes. Las relaciones ruso-alemanas siguieron siendo malas; ambas partes conservaban una profunda desconfianza sobre las intenciones de la otra parte.

La rusofobia de amplios sectores de la población alemana, así como las corrientes paneslavistas y antigermánicas dominantes en la alta burguesía rusa demostraron así ser más fuertes que los intentos llevados a cabo por los hombres de Estado pertenecientes a naciones que formaban parte de alianzas opuestas para establecer puntos de contacto sobre la base de cálculos políticos racionales. A raíz de la revolución de 1905, Rusia se hallaba demasiado débil como para aparecer de nuevo como un serio antagonista de la política de las potencias centrales, por más que se trataba febrilmente, con la ayuda de préstamos concedidos generosamente por el Estado francés, de impulsar la economía, y en particular de reforzar sistemáticamente su propio armamento. La diplomacia alemana, que desde junio de 1910 estaba dirigida de manera extremadamente autocrática por el nuevo secretario de Estado del Exterior, Kiderlen-Wächter —un hombre inteligente y decidido, pero extremadamente obstinado, cuyo carácter era una mezcla de astucia suaba y resolución prusiana—, aprovechó esta ocasión favorable para resolver un problema aún candente en las relaciones franco-alemanas (la cuestión marroquí) y adueñarse a la vez de «un buen trozo de territorio colonial en Africa central» [82].

Desde la conferencia de Algeciras, Francia había perseguido sistemáticamente su política de penetración en Marruecos, aunque conservando, al menos formalmente, la soberanía del sultán Abd al-Aziz; pero por problemas secundarios había chocado

más de una vez con Alemania. En febrero de 1909, en Berlín, se tomó la decisión de estipular un tratado con Francia, sobre todo porque Guillermo II consideraba insensato enemistarse continuamente con franceses y británicos a causa de un territorio relativamente insignificante. Este tratado concedía de hecho a Francia el predominio político y económico de Marruecos, mientras que el gobierno de París se declaraba dispuesto a garantizar a Alemania el libre ejercicio de sus intereses económicos y una buena participación en las concesiones y en los proyectos económicos del Estado marroquí. Sin embargo, no podía considerarse todavía resuelto el problema marroquí. En Alemania la Liga Panalemana, de pleno acuerdo con la única sociedad empeñada seriamente en Marruecos, los hermanos Mannesmann, desencadenó una violenta campaña de prensa contra el tratado franco-alemán de febrero de 1909, denunciándolo como una renuncia unilateral a los intereses de Alemania en Marruecos. Además, la cooperación prevista en aquel tratado, entre firmas alemanas y francesas para el aprovechamiento de los recursos económicos de Marruecos, se reveló ineficaz; al contrario, más de una vez surgieron graves controversias acerca, sobre todo, de una adecuada participación de las sociedades alemanas, que suscitaron considerable irritación en el lado alemán.

Tampoco desde el punto de vista francés aquel estado de cosas era del todo satisfactorio. La progresiva degradación de las disposiciones fijadas en el acuerdo de Algeciras había llegado ya a un punto tal que, tarde o temprano, no se podría evitar el reconocimiento internacional del predominio francés sobre Marruecos. El impulso fue dado por acontecimientos internos del propio Marruecos. Al final de abril de 1911 había estallado un levantamiento en Fez contra el sultán de Marruecos. Hasta entonces, aunque actuando siempre bajo fuertes presiones, Abd al-Aziz había legitimado y sancionado formalmente ante los ojos del Derecho Internacional el predominio francés sobre Marruecos. ¿Pero qué iba a suceder si el sultán era sustituido por un régimen de jefes de tribu?

Para evitar la caída de Abd al-Aziz y al mismo tiempo cubrir las apariencias legales de su poder real en el país, en abril de 1911, un ejército francés era conducido a Fez con la doble misión de aplastar el levantamiento y a la vez asegurar a Francia un control estable del país.

La ocupación de Fez, aunque impuesta a Francia por la política hasta ahora seguida y tolerada en silencio por las otras potencias, significaba desde el punto de vista del derecho internacional una violación del acuerdo de Algeciras y ofreció al

Reich alemán un pretexto para volver a plantear la cuestión marroquí. En Berlín no se dudaba de que había que actuar rápidamente si no se quería renunciar de una vez para siempre a Marruecos. Kiderlen-Wächter no dudó; ya a comienzos de mayo el gobierno alemán tomó la decisión de obligar a Francia a negociar, enviando un buque de guerra al puerto marroquí de Mogador y otro al de Agadir, con el pretexto de que iban a proteger los intereses alemanes. Aunque en un principio se dio por parte alemana la impresión de que se tendía a una partición de Marruecos, que le habría asegurado la parte meridional del país, las verdaderas intenciones de los gobernantes del Reich, perseguían desde un principio objetivos bien distintos. Con la amenaza de quererse instalar en el sur de Marruecos, se trataba de inducir a Francia a ceder todo el Congo francés, que habría de convertirse en el núcleo de una futura Africa central alemana. Esta intervención en la cuestión marroquí, que Kiderlen-Wächter se disponía a iniciar, era la única acción verdaderamente coherente de la política exterior alemana antes de 1914. Mientras Bülow y Holstein habían desarrollado una política exterior difusa sobre todo el planeta, sin plan y sin objetivos bien definidos, comprometiendo políticamente al Reich alemán en los más diversos puntos de la tierra, Kiderlen-Wächter esperaba poder crear las bases de un compacto imperio colonial en Africa central, que más tarde se habría podido ampliar con la adquisición de Angola y del Congo belga. De esta forma Africa oriental alemana, Africa sud-occidental alemana y el Camerún se convertían en los pilares de un imponente imperio colonial. En este aspecto la concepción política de Kiderlen-Wächter se diferenciaba positivamente de la incoherente política de prestigio de sus predecesores; sin embargo, de nuevo se volvió a repetir fielmente el experimento marroquí de Holstein de 1905, cometiendo incluso casi los mismos errores. Kiderlen-Wächter tenía la intención de restablecer, eliminando la manzana de la discordia marroquí, buenas relaciones entre Alemania y Francia y de establecer al mismo tiempo las premisas para una mejora de las relaciones anglo-alemanas, algo que había deseado especialmente Bethmann-Hollweg. Sin embargo, consiguió todo lo contrario: la consolidación de la entente anglo-francesa y un fatal empeoramiento de las relaciones con Inglaterra.

Ello fue, en buena parte, el resultado de la táctica enfática y al mismo tiempo extremadamente maquiavélica, que creyó oportuna seguir Kiderlen-Wächter, y para la que sólo con grandes esfuerzos había podido obtener la aprobación del Kaiser y del canciller. El Kaiser seguía sin querer saber nada de Ma-

rruecos y no tenía en absoluto la intención de correr el riesgo de complicaciones internacionales por este territorio. En el interior, Kinderlen-Wächter había preparado bien, incluso demasiado bien, cómo había de verse, la acción alemana. Con la mediación del doctor Regendanz, un agente de la Hamburg-Marokko-Gesellschaft de Max Warburg, había logrado que una serie de sociedades dirigiesen al ministerio del Exterior una solicitud para reivindicar la tutela de los importantes intereses económicos de las empresas alemanas en Marruecos. En realidad, estas sociedades habían firmado la solicitud sin conocer siquiera su contenido, únicamente porque lo deseaba el ministerio del Exterior; la única empresa seriamente comprometida en Marruecos que, sin embargo, no estaba de acuerdo con la política del gobierno alemán, los hermanos Mannesmann, había sido olvidada deliberadamente. El ministerio del Exterior había informado a la prensa de la inminente acción, animándola a convertirse, con todos los medios posibles, en portavoz de un Marruecos meridional alemán. Kiderlen-Wächter no había dudado, además, en ponerse en contacto con el presidente de la Liga Panalemana, Class, que en el momento crítico hizo publicar, con resultados extremadamente eficaces, un opúsculo titulado 'Westmarroko deutsch' (Marruecos occidental alemán). Kiderlen-Wächter había conseguido convencer a Class en el último momento de que suprimiese de las galeradas al menos las cosas más absurdas, como por ejemplo la demanda de anexionar Longwy-Briey en el caso de que se llegase a una guerra con Francia.

En Alemania se esperaba por lo tanto una acción alemana en Marruecos. Las otras potencias, sin embargo, fueron cogidas completamente por sorpresa ante el envío del acorazado *Panther* el 1 de julio de 1911, coincidiendo con una crisis gubernamental en Francia; este paso de Alemania fue considerado como un puñetazo sobre la mesa, inoportunamente brutal y además teatral. Nadie hizo caso de la justificación dada oficialmente por Alemania, según la cual se trataba de proteger, en Marruecos meridional, la vida de los ciudadanos alemanes amenazada por la agitación del país. Es verdad que Kiderlen-Wächter había insinuado ya el 20 y 22 de junio de 1911, en sus conversaciones con el embajador francés Cambon en Kissingen, que el gobierno alemán esperaba, en el caso de que Francia tuviese la intención de extender ulteriormente su dominio en Marruecos, una oferta francesa de compensación; pero el informe de Cambon acababa de llegar a París y no había encontrado aún respuesta, ya que en aquel momento toda la atención estaba ocupada en el problema de la formación de gobierno. Los ánimos

estaban poco propensos a pagar a Alemania un precio por la expansión de la propia influencia política en Marruecos, tanto más cuanto que ya en el tratado de la primavera de 1909 había dado Berlín mano libre a Francia. El envío del *Panther* advertía en la forma más explícita a los políticos franceses que esta vez Berlín iba en serio y que no se contentaba ya con negociaciones dilatorias y magras promesas. Kiderlen-Wächter no quería una guerra a causa de Marruecos meridional o de una adecuada compensación en Africa central, pero partía de la idea de que Francia sólo se avendría a una oferta, que hubiese parecido aceptable también por el pueblo alemán, si Alemania procedía con extrema firmeza: «Es la última ocasión de obtener algo útil de Africa sin combatir» [83]. Era un juego peligroso que hubiese podido provocar un gran conflicto europeo, pero la diplomacia alemana podía contar con el apoyo masivo de al opinión pública alemana. La llegada del *Panther* a Agadir fue celebrada en general en Alemania con entusiasmo; el *Rheinisch-Westphälische Zeitung,* un periódico de la industria pesada, escribió incluso: «Delante de Agadir se encuentra ahora un buque de guerra alemán. Los franceses son aún libres de ponerse con nosotros de acuerdo sobre la partición de Marruecos; si no quieren, entonces el *Panther* tendrá los efectos del despacho de Ems» [84].

La primera reacción de los franceses a esta iniciativa alemana fue extremadamente hostil: se consideró la posibilidad de enviar un buque a Agadir, medida, que probablemente habría hecho inevitable una guerra. Pero luego se esforzó Francia en ver las cosas con más calma, y decidió iniciar negociaciones con el gobierno alemán. Si Kiderlen-Wächter había abrigado la esperanza de que ahora la diplomacia francesa se presentaría con una oferta concreta con la que se pudiese concluir rápidamente aquel asunto, antes de que las otras potencias tuviesen la oportunidad de intervenir, había de sufrir una grave desilusión. Aunque la situación era todo menos favorable, la diplomacia francesa se comportó con la máxima reserva y reticencia. Desde un principio las negociaciones asumieron el carácter de una guerra de posiciones diplomáticas. Contrariamente a sus intenciones originales el propio Kiderlen-Wächter se vio finalmente obligado a plantear sus aspiraciones sobre todo el Congo francés, en lugar de esperar la oferta francesa. En París no estaban los ánimos como para atender a reclamaciones, y menos aún, renunciar, en favor de Alemania, a todo el Congo francés, y por ello se opuso la más decidida resistencia a las pretensiones alemanas. A mitad de julio de 1911 Kiderlen-Wächter afirmaba que «habría sido mejor actuar con mayor energía aún» [85], si

se quería inducir a Francia a ceder; expresión que fue comentada con la máxima indignación por Guillermo II que deseaba evitar absolutamente complicaciones internacionales y una posible guerra europea. En efecto, a medida que se prolongaban las negociaciones, aumentaba el peligro de una intervención de Inglaterra e incluso también de Rusia, en favor de su aliado de la entente. Como Kiderlen-Wächter no había sido nada explícito con el gobierno inglés sobre los verdaderos objetivos de la política alemana, con la intención de quemar prematuramente el cartucho de Marruecos meridional, en Londres creció rápidamente la inquietud. Se sospechaba que Alemania quería establecer una base naval en Agadir, idea considerada alarmante dentro y fuera del gobierno, aunque desde el punto de vista militar este puerto nunca tendría gran importancia. A esto se añadía el temor de que Alemania deseaba transformar su posición hegemónica en el continente europeo en un abierto predominio. Por ello, cuando el 18 de julio se hicieron públicas las reclamaciones alemanas en Londres, éstas fueron interpretadas como un intento por parte de Alemania de imponer a Francia condiciones humillantes, para hacer saltar así la *Entente Cordiale*. El 21 de julio de 1911 Lloyd George dio a entender, en un discurso pronunciado en la *Mansion House* de Londres, después de haberse puesto de acuerdo con Asquith y Grey, de manera velada pero inequívoca, que Inglaterra no se quedaría al margen en caso de guerra. Vanos fueron los intentos del gobierno alemán de minimizar en los periódicos simpatizantes del ministerio del Exterior el carácter amenazador del discurso de Lloyd George, considerado hasta entonces partidario de un acuerdo con Alemania; en el país se desencadenó una tempestad de indignación contra la actitud de Gran Bretaña, que había obstaculizado una vez más las legítimas aspiraciones germanas en el campo de la política mundial. Pero el gobierno francés, viendo cubiertas sus espaldas por Inglaterra, estaba menos dispuesto que nunca a ceder frente al Reich alemán y a avenirse a concesiones importantes, y más teniendo en cuenta que en conversaciones entre altos cargos de los dos Estados Mayores se discutía el envío y la utilización de una expedición militar anglo-francesa al continente europeo.

La opinión pública de los países interesados fue presa de una enorme excitación nacionalista, atizada con todas las fuerzas por las diversas asociaciones de agitación política. Esta hizo a los gobiernos más difícil el abandono de las posiciones iniciales y la búsqueda de un prudente compromiso. Los cautos intentos de Kinderlen-Wächter de crear un ambiente favorable a la idea de la adquisición del Congo a cambio de la renuncia de Ma-

rruecos fracasaron por completo. La prensa alemana insistía ahora unánimemente en que había que obtener si no el Marruecos meridional, al menos el territorio del río Sus. En los periódicos, las voces que se alzaban en favor de una acción en Marruecos, aun a riesgo de provocar un gran conflicto europeo, aumentaban de manera alarmante. Así, cuando a finales de julio el *Post* y el *Zukunft* de Harden reprochaban al Kaiser su actitud pacifista interpretaba como una cobarde retirada ante las otras potencias, en los círculos políticos más elevados comenzó a considerarse la posibilidad de correr el riesgo de una guerra. Por otra parte, también el gobierno francés se encontraba bajo la presión de su propia prensa nacionalista, que rechazaba con énfasis cualquier concesión en el campo colonial y que negaba a Alemania el derecho de interferir en los asuntos de Marruecos.

Así, a finales de julio se agravaba peligrosamente la situación. Ante la posibilidad de un ataque imprevisto de la flota alemana, se ordenó en Inglaterra la movilización parcial de la flota de altura; los estados mayores inglés y francés tomaron además acuerdos para el caso de guerra. Las negociaciones entre Francia y Alemania no se movían del sitio; ambas partes se acusaban de haber violado el carácter reservado de las negociaciones. El propio Kiderlen-Wächter estaba profundamente desmoralizado: «Nuestro prestigio se ha venido abajo, en caso extremo tendremos que batirnos» [86]. Tampoco él deseaba la guerra, pero no veía otra posibilidad para Alemania, si quería salir honrosamente de este asunto, que demostrar a los políticos franceses que ahora se estaba verdaderamente decidido a llevar las cosas al extremo. De esta manera se hallaba Europa a comienzos de 1911, y luego de nuevo a comienzos de septiembre, al borde de una gran guerra.

Sin embargo, ambas partes empezaron a ceder finalmente. La causa fue, en Alemania, un pánico en la bolsa, y en Francia, el comunicado del embajador ruso en París, Iswolski, según el cual Rusia deseaba una solución pacífica de la crisis, dado que la cuestión marroquí, motivo principal de esta crítica situación, no afectaba a sus «intereses vitales» [87]. A espaldas de su propio ministro del Exterior, el primer ministro francés Caillaux estableció contactos con el gobierno alemán y también Kiderlen-Wächter se avino a considerables concesiones. Tras largas negociaciones, en el curso de las que se luchó encarnizadamente, se llegó finalmente a un acuerdo que, cara al exterior (y sobre todo cara a la prensa de ambos países), parecía un cambio de territorios. Alemania recibía una parte del Congo francés, con un acceso directo al Congo belga, al que el gobierno alemán concedía gran importancia con vistas a futuras evoluciones;

pero tenía que ceder a cambio parte de la colonia alemana de Togo a Francia, con enorme indignación del ministerio de los asuntos coloniales del Reich, cuyo jefe, Lindequist, presentó demostrativamente su dimisión. El 4 de noviembre de 1911 se firmaron los tratados relativos al Congo y Marruecos. Una vez más la crisis se resolvía pacíficamente, aunque de una manera que no podía considerarse un gran triunfo para Alemania.

A ambos lados del Rin la opinión pública acogió los tratados

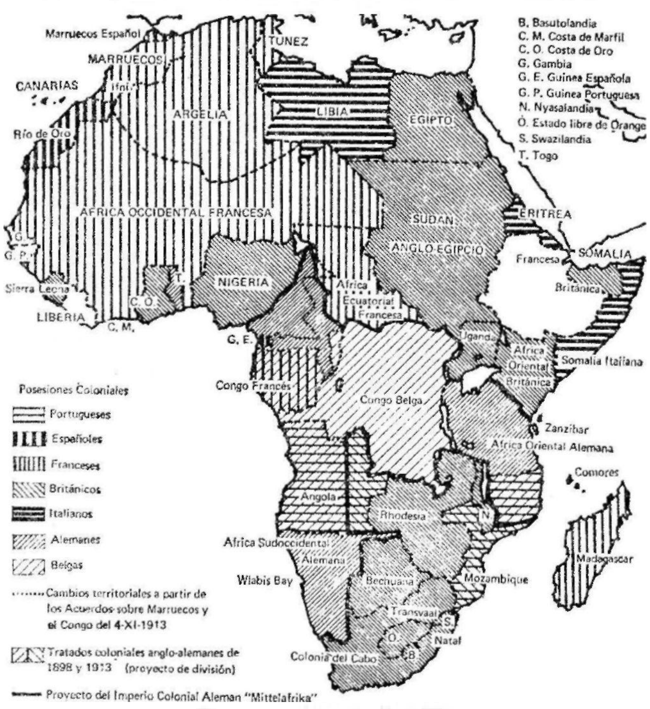


Fig. 9. Africa hacia 1914.

sobre Marruecos y sobre el Congo con gran descontento. Caillaux, al que correspondía el considerable mérito de llevar a cabo la solución pacífica a la que se había llegado finalmente, fue destituido en enero de 1912, cuando se dieron a conocer algunos detalles sobre sus negociaciones secretas a espaldas del Quay d'Orsay, acusado de filogermanismo. Le sucedió Poincaré, que formó un gabinete de concentración nacional, cuyo objetivo

principal fue preparar lo mejor posible a Francia para una eventual confrontación militar con las potencias centrales. También en Alemania se desencadenó una ola de indignación contra el gobierno de Bethmann-Hollweg, responsable de haber defendido insuficientemente los intereses nacionales del Reich. Ahora se pagaba la cuenta de las esperanzas que la Oficina de Prensa del Ministerio del Exterior había despertado con respecto a la adquisición de Marruecos meridional entre los alemanes; en el Parlamento, todos los partidos, a excepción de los socialdemócratas, desaprobaron la política del gobierno. El secretario del partido conservador, Heydebrandt von der Lasa, dio a sus declaraciones en el Parlamento un tono áspero antibritánico: «Ahora sabemos dónde se encuentra el enemigo» [89]. De nada servía que el canciller protestase formalmente contra discursos belicistas de este género. Gran parte del pueblo alemán estaba ahora convencido de que sólo Inglaterra había hecho fracasar la política de Alemania en la cuestión marroquí y de que únicamente una mayor potencia naval podría evitar futuras y humillantes derrotas a la política colonial del país.

La política colonial de Alemania había desembocado en realidad en un callejón sin salida. Contra la voluntad de Inglaterra y de Francia era imposible obtener con medios diplomáticos adquisiciones de cierto interés en los territorios de ultramar. Quedaba sólo esta alternativa: o se trataba, a pesar de todas las divergencias pasadas, de establecer relaciones amistosas con Inglaterra, con el fin de ganarse el apoyo para una política colonial moderada, o se optaba por imponer a las otras grandes potencias el respeto a los propios deseos en política colonial, a través de una mayor presión militar; en otras palabras, una política de guerra «fría» o, como decía entonces Hans Delbrück, de guerra «seca» [89]. La segunda alternativa adquirió extraordinaria popularidad en amplios círculos de la opinión pública alemana. Tirpitz aprovechó esta coyuntura para proponer al gobierno y al Parlamento un nuevo refuerzo de la flota alemana, perpetuando el ritmo de las cuatro naves por año convenido en 1908 para los años de 1909 hasta 1912. El sugirió esta medida con el argumento, extraordinariamente eficaz desde el punto de vista propagandístico, de que después del fracaso de la política marroquí de Alemania, se hacía absolutamente necesaria una marina más poderosa «para poder llevar a cabo una política mundial» [90].

Bethmann-Hollweg y Kiderlen-Wächter veían claramente los peligros que entrañaba en aquel momento una política de mayor presión militar. Sin renunciar del todo a una posterior ampliación del armamento alemán, sobre todo terrestre, ellos trataban

sin embargo de sacar gradualmente a Alemania de la situación tan poco favorable en la que había maniobrado en el pasado decenio. Por esta razón, desaprobaron con energía los nuevos proyectos navales de Tirpitz; y se decidieron de modo firme a llegar finalmente a un acuerdo con Inglaterra, aunque tal política no fuese muy popular ante la opinión pública. Las perspectivas de éxito no eran en sí desfavorables; de hecho, aunque en el *Foreign Office* seguía siendo profunda la desconfianza hacia la política exterior alemana, se reconocía también que no se podía cerrar completamente el camino en el campo de la política mundial a un Reich alemán en vías de desarrollo económico sin empujar a los grupos moderados a los brazos de las fuerzas nacionalistas militantes. También la diplomacia rusa era sensible a razonamientos de este género [91].

Tirpitz, sin embargo, no quería renunciar a sacar el máximo provecho de la amargura en la que se hallaba sumida la opinión pública alemana a causa del fracaso de la acción en Marruecos y llevar a cabo de esta forma una nueva ampliación de la flota; y habiendo encontrado en el Kaiser un apoyo entusiasta a sus proyectos, se llegó en el invierno 1911-1912 a una prueba de fuerza entre las altas esferas de la política y la marina. Bethmann Hollweg no pudo impedir la presentación de un nuevo proyecto de ley naval, pero con una audaz maniobra trató de hacerle caer, o por lo menos de quitarle su carácter peligroso para la política exterior. Después de haberle atenuado dando al ejército parte de los fondos destinados a aquél, se decidió a utilizar la nueva ley como pretexto para reanudar con Inglaterra negociaciones sobre la reducción de las construcciones navales y llegar a un acuerdo político. De esta manera, Bethmann-Hollweg esperaba poder imponer su propia concepción política contra la voluntad de la marina.

Gracias a la mediación del director de la sociedad de navegación HAPAG (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft), Ballin, y del banquero alemán von Casell, que tenía buenas relaciones con los círculos gubernamentales ingleses, se pudieron renovar a comienzos de 1912, inesperadamente pronto, las relaciones anglo-alemanas. En realidad, también el gobierno inglés estaba interesado en discutir con Alemania el problema de la reducción del armamento naval, con el fin de evitar un nuevo y drástico aumento del propio presupuesto naval, o al menos poder demostrar a la izquierda que se había intentado seriamente llegar a un acuerdo con los alemanes. Después de alguna indecisión, el gobierno británico se decidió a enviar a Berlín no a sir Edward Grey o a Winston Churchill, como había esperado Guillermo II, sino al ministro de la Guerra, lord

Haldane, para que éste indagase, a través de una serie de conversaciones privadas, la posibilidad de un pacto eventual con Alemania; este pacto debía abarcar no sólo un acuerdo sobre el problema del armamento naval, sino también sobre los problemas políticos y coloniales. En Berlín existían, sin embargo, profundas diferencias sobre las exigencias que deberían hacerse a Inglaterra, en el caso de una renuncia parcial a la ley naval.

Tirpitz, que sospechaba, con razón, que se trataba de una maniobra para hacer caer por fin la ley, exigió nada más y nada menos que un amplio acuerdo de neutralidad, así como la determinación de la relación de potencia entre las dos flotas en un 2 a 3, una relación que era considerada absolutamente inaceptable por el almirantazgo inglés. También Bethmann Hollweg partía de la idea de que una reducción de las construcciones navales de Alemania sólo era defendible, si la política inglesa adoptaba una actitud más amistosa con respecto a los alemanes. Sin embargo, se contentó con un precio más modesto y estaba dispuesto además a pagar más que Tirpitz y que el Kaiser. Para obtener un acuerdo de neutralidad condicionada, que habría significado implícitamente una nueva orientación de la política inglesa, hubiese renunciado de buena gana a toda la ley naval; pero tenía que guardarse de decirlo abiertamente, para no comprometer la propia posición política. Las conversaciones con Haldane tuvieron, sin embargo, comienzos prometedores. Haldane dio a entender que el gobierno inglés estaba dispuesto a tratar con generosidad las cuestiones coloniales, y también se llegó a un acercamiento de los puntos de vista sobre las líneas principales de una fórmula política que, si bien no contenía ningún compromiso de neutralidad de parte inglesa, era considerada por Bethmann Hollweg como una base aceptable para un acuerdo político. En las negociaciones con Tirpitz y Guillermo II sobre la cuestión naval, en las que los «civiles» significativamente no participaron, Haldane se mostró sorprendentemente conciliador. Después de tenaces discusiones aceptó una simple desaceleración del ritmo de construcción, mientras que la ley naval era conservada sustancialmente. Guillermo II y Tirpitz estaban extremadamente satisfechos; creían ya tener en el bolsillo la alianza política con Inglaterra, sin tener que reducir seriamente las construcciones navales.

En Londres no había tanta satisfacción por la táctica blanda de Haldane en las negociaciones de Berlín (el propio ministerio del Exterior alemán le había animado secretamente a ser más rígido en la cuestión naval y a exigir más de Tirpitz). La reacción del almirantazgo inglés al texto del proyecto naval ale-

mán que Bethmann Hollweg había dado al ministro de la Guerra británico fue extremadamente negativa. Churchill, nuevo ministro de la Marina, y el almirantazgo descubrieron en el proyecto naval alemán una insidia que Haldane había pasado por completo por alto y que ellos consideraban mucho más grave que las nuevas construcciones previstas en él: el plan de formar una tercera escuadra, con la que se habría aumentado notablemente la capacidad de la flota alemana para emprender inmediatamente acciones de guerra. En el caso de que este proyecto se llevara a cabo, tendrían que tomarse en Inglaterra medidas adecuadas y extremadamente caras, para garantizar la permanente disposición para la guerra de una gran parte de la flota inglesa y para estar a salvo de un ataque por sorpresa de parte de Alemania. Detrás de los deseos alemanes de llegar a un acuerdo político, que se acercaba a una promesa de neutralidad por parte inglesa en el caso de una guerra continental, el *Foreign Office* sospechaba el deseo de separar a Inglaterra de su Entente, sin obtener a cambio compensaciones adecuadas. Así la respuesta del gobierno inglés a las propuestas alemanas discutidas con Haldane y acogidas por éste, al parecer con relativa benevolencia, fue muy reservada, incluso negativa. De esta forma quedaba demostrado lo que desde un principio había estado claro para Bethmann Hollweg y Kiderlen-Wächter, esto es, que el gobierno inglés no estaba dispuesto a un acuerdo político de carácter amplio sin una reducción sustancial de la ley naval, tal vez incluso con la renuncia completa a ésta.

Tirpitz y Guillermo II, irritados por el hecho de que los ingleses habían sabido nuevamente evitar la trampa que se les había tendido con tanto arte, estaban fuera de sí e insistían en el respeto de las presuntas promesas hechas por Haldane; y cuando vieron que los ingleses no cedían, exigieron que la ley fuese anunciada inmediatamente. Bethmann Hollweg no estaba, sin embargo, dispuesto a romper el hilo apenas establecido con Inglaterra y que había aportado ofertas prometedoras en el campo de la política colonial. El continuó, por tanto, obstinadamente sus esfuerzos por llegar a un acuerdo que hubiese asegurado al Reich la neutralidad inglesa, al menos en el caso de un ataque no provocado de parte de terceros. También Kiderlen-Wächter seguía esperando con ansias una oferta inglesa de este género que les hubiese proporcionado el instrumento para hacer fracasar, si no del todo, al menos en parte, el proyecto naval. Sin embargo, el esperado paso del gobierno inglés no se produjo. Antes al contrario, se endureció la resistencia del Kaiser y del secretario de Estado de la Marina a una reducción de la ley naval. Además, a espaldas del

canciller, Tirpitz hizo divulgar la inminente ley por la prensa. La cancillería de Bethmann Hollweg se encontró así por el espacio de algunos días pendiente de un hilo. Sólo un pacto de neutralidad incondicional con Inglaterra habría podido dar la victoria a la causa del canciller contra la compacta oposición de la Marina, del Kaiser y de la opinión pública alemana. Sin embargo, para gran desilusión de Bethmann Hollweg, la oferta inglesa de neutralidad en caso de una guerra continental, como hubiese correspondido a la oferta original de Haldane, no llegó nunca. El texto que Grey transmitió el 17 de marzo de 1912 al gobierno alemán estaba redactado en términos demasiado generales para poder satisfacer al canciller y a Kiderlen-Wächter, quienes deseaban asegurarse la neutralidad inglesa, sobre todo en el caso de que una eventual guerra por la cuestión de los Balcanes hubiese comprometido a Alemania y a Austria-Hungría contra Rusia y Francia. De esta manera terminaron las negociaciones anglo-alemanas de la primavera de 1912 con un nuevo fracaso. Aunque por ambas partes quedaba abierta la puerta para futuras negociaciones, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones coloniales, reinaba en Berlín una desilusión profunda; no se había producido la esperada ruptura de la Triple Entente. Aunque Inglaterra estaba dispuesta a un acercamiento, no así a un acuerdo que pusiera en peligro el sistema de alianzas del que formaba parte.

La consecuencia de esta evolución fue que se reanudó la carrera del armamento. En abril de 1912 el *Reichstag* alemán aprobó no sólo el proyecto de ley naval, sino también un nuevo proyecto militar. Las otras potencias no se quedaron atrás. Francia y Rusia hicieron nuevos esfuerzos para mejorar su armamento marítimo y terrestre. Churchill, ministro inglés de la Marina, quería demostrar a los alemanes la inutilidad de sus construcciones navales; por cada nuevo buque alemán debían de construirse dos buques ingleses. Al mismo tiempo, se decidió llamar a aguas inglesas a la flota mediterránea con el fin de reforzar la potencia de la *Home Fleet.* En el caso de guerra entre la Triple Entente y la Triple Alianza se quería dejar la defensa del Mediterráneo a la flota francesa, mientras que Inglaterra se comprometía a asumir la defensa de la costa francesa de la Mancha. Sobre esta base, Francia e Inglaterra concluyeron en julio de 1912 un pacto naval que de hecho vinculaba ampliamente a Inglaterra en caso de guerra, aunque el gobierno inglés afirmase que no se sentía vinculado políticamente. El intercambio de notas diplomáticas entre Grey y Cambon en noviembre de 1912, que dio finalmente un fundamento político a la colaboración militar por tierra y por mar

entre Inglaterra y Francia, preveía en caso de guerra sólo consultas recíprocas sobre el tipo de medidas a tomar y no podía ser considerado una verdadera alianza; sin embargo, creó entre las dos potencias las bases para una estrecha colaboración política que en caso de guerra no podía tener otra alternativa que el apoyo aliado.

La política desarrollada por Alemania en Marruecos a lo largo de 1911 había provocado como resultado final la consolidación de la Entente contra las potencias centrales, en lugar de la esperada mayor libertad de movimiento (particularmente en las cuestiones de política mundial) para el Reich alemán. Las grandes potencias europeas, agrupadas en dos bloques de homogeneidad poco dudosa, se enfrentaban con las armas dispuestas. Se abría camino en los distintos pueblos europeos un nacionalismo exasperado, en ocasiones incluso fanático, que se dirigía cada vez más contra las particularidades nacionales y la existencia de los respectivos vecinos. En todos los países europeos los gobiernos se veían expuestos a la presión de agitaciones violentas que reclamaban una política exterior ambiciosa e inflexible. Y sin embargo, aparte de pequeños grupos marginales, nadie deseaba la guerra, y mucho menos los hombres de Estado, que podían, mejor que los grupos sociales que influenciaban la opinión pública, prever las consecuencias de una política exterior imprudente. Pero los distintos países estaban ya tan comprometidos entre sí que cualquier cambio del sistema de las potencias europeas habría podido provocar un conflicto general.

La situación se agravó peligrosamente cuando, como consecuencia de la segunda crisis marroquí, contaminó la fiebre imperialista también a Italia y a los Estados balcánicos. En otoño de 1911, después de haber instaurado los franceses un protectorado sobre Marruecos, vio Italia llegado el momento de instalarse en Trípoli y en Cirenaica, en la actual Libia. Como el sultán se oponía a la cesión de estos territorios, Italia declaró a finales de septiembre de 1911 la guerra al imperio otomano, disponiéndose a ocupar no sólo el Dodecaneso, sino también las posesiones europeas de Turquía. Inútiles fueron las advertencias de Austria-Hungría en el sentido de que tal acción podría conducir al desmoronamiento del débil equilibrio en los Balcanes y desencadenar una crisis detrás de otra de consecuencias imprevisibles. En el curso de esta operación quedó patente la debilidad militar del imperio otomano. En virtud de los acuerdos secretos con Italia, las grandes potencias se vieron atadas de manos y obligadas a quedar al margen. Esto era particularmente irritante para el Reich alemán, que estaba muy intere-

sado en el mantenimiento de la posición de poder de Turquía, y que además temía perder su prestigio militar y político ante este país, al que había prestado ayuda técnica para la formación del ejército. Pero las disposiciones secretas del tratado de la Triple Alianza no dejaron al gobierno alemán otra alternativa. Es verdad que ni en Berlín ni en las otras grandes capitales europeas existía una tendencia clara a defender activamente la conservación del imperio otomano. Al parecer, el gran enfermo del Bósforo había entrado en la fase de una agonía incurable.

Mientras las grandes potencias, temiendo complicaciones inextricables, se encontraban ya en estado de alarma, los Estados balcánicos vieron llegada su hora. La manifiesta impotencia del imperio otomano invitaba a apoderarse de los territorios europeos que aún le quedaban, concluyendo así en los Balcanes la obra de unificación del siglo XIX. Los Estados balcánicos consideraban además justificado su modo de actuar a causa del atroz mal gobierno y de las brutales medidas de represión en los territorios turcos de Europa que habían dado a las grandes potencias repetidas veces la ocasión de protestar en Constantinopla. Era además probable que los «Jóvenes Turcos», que querían transformar a Turquía en un Estado unitario moderno y centralizado, pusieran, tarde o temprano, fin a los privilegios de los grupos étnicos no turcos en la Turquía europea. Los Estados balcánicos, de manera particular Bulgaria y Servia, aunque también Grecia y Montenegro, estaban más decididos que nunca a no tolerar más la situación insostenible de estos territorios y a devolver a la patria a sus connacionales; y las noticias de las victorias italianas no hacían sino reforzar su voluntad.

Rusia, en cambio, se hallaba en una situación precaria por estos acontecimientos. Consecuentemente a su papel histórico de protectora de los cristianos de los Balcanes, Rusia tendría que haber apoyado plenamente la lucha de emancipación nacional de los pueblos menores de los Balcanes contra el imperio otomano, y más teniendo en cuenta que también la opinión pública del propio país apoyaba con insistencia esta política. Pero en San Petersburgo no se tenía el menor interés por una guerra de los países balcánicos contra Turquía; al contrario, se esperaba, incluso, después del fracaso de las negociaciones de Tscharikov con la Puerta en 1911, poder obtener una influencia determinante sobre los Estrechos mediante acuerdos pacíficos. Así los esfuerzos de la diplomacia rusa siguieron buscando el establecimiento de una alianza de los Estados balcánicos y Turquía contra Austria-Hungría, a la que se atribuía, con razón o sin ella, ambiciones expansionistas sobre Salónica.

Pero en aquellas circunstancias Rusia no se atrevió a oponerse abiertamente a las aspiraciones de los Estados balcánicos a liberar a sus connacionales del yugo turco, mas para no perder la propia influencia política aceptó un juego peligroso, prometiendo a los Estados balcánicos apoyo incondicional en la consecución de sus objetivos nacionales. Al mismo tiempo se hizo el intento de desviar las energías agresivas de la Liga balcánica contra Austria-Hungría, algo que era posible en cuanto que se contaba en general con que la monarquía danubiana aprovecharía la primera ocasión para intentar adueñarse de nuevo del sanjacato de Novibazar, introduciendo así una cuña entre Servia y Montenegro. El 13 de marzo de 1912, Servia y Bulgaria constituyeron, bajo el patronato ruso, la llamada Liga balcánica; alianza que, según el texto publicado, trataba sobre todo de prevenir una eventual reocupación del sanjacato de Novibazar por parte de Austria-Hungría, pero que en realidad equivalía a un pacto de agresión contra Turquía. En el mes de mayo se adhirió a la Liga también Grecia y, finalmente, en agosto, Montenegro. Desde el momento de la firma del tratado surgieron enconadas controversias sobre la repartición del futuro botín. Ya ahora se manifestó que ninguno de los Estados balcánicos estaba dispuesto a contentarse con las regiones habitadas por los propios connacionales. También aquí se hallaron en conflicto la idea imperialista y el principio de nacionalidad, aunque hay que reconocer que, a causa de la mezcolanza étnica y de la incierta situación de las nacionalidades en el sur balcánico —donde muchas veces la unión a una religión determinada era más importante que los factores étnicos y lingüísticos—, no era posible una delimitación exacta de los territorios según el principio de la nacionalidad. En este tratado de alianza, Rusia fue llamada a actuar como protectora de los Estados balcánicos y como árbitro entre las partes. De esta manera Rusia asumía un papel extremadamente ambiguo. La diplomacia rusa trató de disuadir, al menos por el momento, a los Estados balcánicos de una guerra contra Turquía, pero bien pronto el intento se demostró del todo vano. Cuando, en agosto de 1912, con motivo de una visita oficial a San Petersburgo, Poincaré fue puesto al corriente de la situación en los Balcanes por los hombres de Estado rusos, comprendió inmediatamente que la Liga balcánica no tenía carácter defensivo, como querían hacerle creer Sasonov e Iswolski, sino agresivo; él no se decidió sin embargo a negar abiertamente a Rusia el apoyo de Francia para el caso de un gran conflicto europeo. La opinión pública francesa —así se expresó Poincaré con Iswolski— no le permitiría al gobierno francés «decidir una intervención militar en asuntos

de exclusiva competencia de los pueblos balcánicos, a no ser que Alemania, creando con su iniciativa un *casus foederis,* estuviese envuelta en ellos»[92]. Como si Poincaré no hubiese conocido ya el texto de la Doble Alianza, publicado hacía tiempo, por el cual Alemania estaba comprometida, en un caso parecido, a prestar su ayuda a la monarquía danubiana. Con otras palabras, Poincaré dejó pasar tácitamente la reinterpretación agresiva de la Doble Alianza de 1894 entre Francia y Rusia, meramente defensiva en su origen, extendiendo así el pacto franco-ruso al caso de una guerra que pudiese surgir eventualmente por cuestiones balcánicas, de un encuentro entre Rusia y Austria-Hungría. Poincaré actuó de esta manera sobre todo para consolidar, a cualquier precio, la cohesión de la Triple Entente frente a la Triple Alianza. Por esta razón, puso a su colega ruso al corriente del acuerdo naval franco-inglés apenas concluido, cosa que no era precisamente una invitación a la cautela para los rusos. Con la actitud de Inglaterra no podía la diplomacia rusa estar tan satisfecha. Tanto Grey como Jorge V aseguraron al ministro del Exterior ruso, Sasonov, el 24 de septiembre de 1912, con motivo de una visita a Balmoral, que en el caso de que Alemania iniciase una guerra, Inglaterra acudiría en ayuda de Francia y de Rusia; pero en la cuestión balcánica Grey actuó con reservas.

De esta manera, el gobierno ruso entró en la inminente crisis que él mismo había contribuido a provocar, con bastante mala conciencia. Seguramente, para ganarse simpatías en las otras capitales europeas, sugirió en el último momento una gestión diplomática conjunta de las grandes potencias ante los Estados balcánicos con el fin de impedir su ataque. En una nota presentada en la primera semana de octubre de 1912 a los países balcánicos de parte de Rusia y de Austria-Hungría, por encargo de todas las grandes potencias, se decía que el *status quo* territorial de los Balcanes no debería sufrir ninguna modificación. No sin razón los países balcánicos desestimaron, sin embargo, esta declaración muy poco realista en aquel estado de cosas. Pocos días después, el 17 de octubre de 1912, iniciaron las operaciones militares contra Turquía, que precisamente se disponía a concluir la paz con Italia. Pronto las graves derrotas militares de Turquía, que se sucedieron a un ritmo muy rápido, no dejaron ninguna duda sobre la imposibilidad de una ulterior supervivencia del imperio otomano en Europa. El 4 de noviembre de 1912 el gobierno turco tenía que requerir la mediación de las grandes potencias para llegar a un tratado de paz con los países balcánicos. Los grandes triunfos, sobre todo de los búlgaros, que en pocas semanas habían conquistado

Adrianópoli y se disponían a tomar Constantinopla, indujeron al gobierno ruso a pensar si no convenía socorrer a los turcos y enviar tropas al Bósforo, ya que la idea de que los búlgaros pudiesen apoderarse de los Estrechos suscitaba en San Petersburgo los mayores temores. Pero finalmente pudieron evitar los propios turcos lo peor, conteniendo a los búlgaros en Tschadala. Las regiones europeas de Turquía se habían perdido irremediablemente, a excepción de una estrecha franja de tierra al norte de los Dardanelos.

De esta manera, la cuestión de los Balcanes, que en 1900 había sido solucionada una vez más con gran esfuerzo, pero sin provocar un conflicto europeo, volvía a surgir, y el sistema de los Estados europeos se había puesto en movimiento en uno de sus puntos desde siempre más delicados. El principal ganador, junto a los Estados balcánicos que habían alcanzado sus metas más ambiciosas, era Rusia, cuya influencia en los Balcanes se hallaba en aquel momento en su punto más alto y que además veía acercarse su objetivo: adquirir una influencia determinante sobre los Estrechos. Para Austria-Hungría, en cambio, esta evolución comportaba una grave pérdida de su poder en el sudeste. De ahora en adelante tendría que abandonar para siempre la idea de una política balcánica ofensiva, de carácter imperialista; el mantenimiento del *status quo* adquirió una importancia fundamental. El enorme auge de la conciencia nacional de los eslavos como consecuencia de la guerra victoriosa con Turquía tuvo como efecto inevitable un nuevo crecimiento de las corrientes irredentistas en las regiones sudeslavas de la monarquía. Era además de esperar que, sobre todo Servia y Montenegro, se revolvieran ahora con todas sus fuerzas contra Austria-Hungría.

En las capitales de Europa no había sorprendido, en aquella situación, que a finales de octubre de 1912, Austria-Hungría hubiese reocupado inmediatamente el sanjacato de Novibazar, asegurando así sus posesiones en los territorios sudeslavos, frente a las pretensiones de los servios y montenegrinos. En Viena, sin embargo, se había abandonado desde el principio esta posibilidad, en previsión de las grandes dificultades internas surgidas en Bosnia y Herzegovina. El gobierno austrohúngaro se había resistido al fuerte deseo de intervenir en las operaciones bélicas y de impedir a Servia recoger los frutos de su victoria, pero esto se debió sobre todo a las presiones diplomáticas del aliado alemán. En Viena se estaba firmemente decidido a cerrar a Servia la salida al Adriático y dar, con este fin, vida a una Albania independiente. Además se tenía la idea de obligar a Servia, como también a Montenegro, a la

dependencia económica de la monarquía danubiana para someterla así a un control indirecto.

Como Italia también se pronunció enérgicamente en favor de la creación de una Albania independiente, acogiendo incluso el gobierno inglés favorablemente tal propuesta, la diplomacia alemana concedió en este punto su apoyo incondicional a la monarquía danubiana, aunque ni Guillermo II ni Bethmann Hollweg veían «absolutamente ningún peligro para el prestigio de Austria» [93] en el hecho de que Servia tuviese un puerto en el Adriático. No era la «fidelidad nibelúngica» la que indujo a la diplomacia alemana a esta actitud, sino la fría consideración de que no se podía abandonar por completo a Austria-Hungría, si no se quería poner en peligro la alianza existente. Rusia, sin embargo, intervino con todo su peso en las negociaciones de las grandes potencias para que Servia obtuviese al menos una salida al Adriático. En este punto, la política balcánica de Rusia y la de Austria eran diametralmente opuestas, y así se produjo a comienzos de noviembre de 1912 una grave crisis internacional. En Viena se observaba con gran preocupación la afluencia cada vez más grande de tropas servias a Albania, en el curso de las operaciones contra el imperio otomano aún no concluidas, ya que se temía que la solución propuesta por Austria-Hungría fuese juzgada en sentido negativo; por esto crecieron las voces en favor de una inmediata intervención militar en la guerra. Un síntoma clarísimo lo constituía la reelección de Conrad von Hötzendorff como jefe de Estado Mayor. En Rusia se procedió a la movilización parcial, con lo que probablemente sólo se quería reforzar la propia posición, pero tal medida no dejaba de tener por ello un carácter amenazador. Austria-Hungría respondió con las respectivas contramedidas militares. El peligro de una guerra europea era ya manifiesto.

Durante la crisis, la diplomacia alemana había tratado de llegar a un compromiso pacífico, en estrecha colaboración con Inglaterra, que tampoco estaba interesada directamente en las cuestiones balcánicas, sin abandonar, sin embargo, al propio aliado. La táctica del gobierno alemán no estaba en absoluto libre de segundas intenciones; por el contrario, Kiderlen-Wächter trataba de llegar por esta vía al deseado mejoramiento de las relaciones con Londres: «Sin duda un acuerdo práctico con Inglaterra, en una importante cuestión de política general, tendría efectos más positivos sobre nuestras relaciones con los ingleses que todas las expresiones de fraternización y acuerdos sobre el papel» [94]. Así el gobierno alemán hizo lo posible por frenar las tendencias militaristas que habían surgido, sobre todo hacia el fin de noviembre, en Austria-Hungría. Pero esta po-

lítica tenía un límite bien preciso que Kiderlen-Wächter y Bethmann Hollweg no estaban dispuestos a rebasar: la posición de gran potencia de Austria-Hungría no debía de ser comprometida, porque esto hubiese equivalido a una debilitación del propio bloque político.

Bethmann Hollweg defendió, en su discurso al *Reichstag* del 2 de diciembre de 1912, este punto de vista con formulaciones tal vez demasiado belicosas. Grey calificó las declaraciones del canciller alemán, sobre todo, por su marcada tendencia antirusa como un «toque de trompeta»; y por eso hizo declarar oficialmente al embajador alemán en Londres que Inglaterra, en el caso de una guerra europea causada por una acción militar austríaca en Servia, difícilmente podría mantenerse en un papel de simple observadora, ya que por razones de equilibrio europeo no podría aceptar «en ningún caso una derrota de los franceses» [95]. Esta advertençia no era, en realidad, necesaria, y su contenido no sorprendió a los políticos alemanes; sin embargo, Guillermo II fue presa de un verdadero pánico. En Berlín se tenía, sin embargo, interés sincero en una solución de la crisis a través de negociaciones, para lo que se halló una base adecuada en la conferencia de los embajadores de Londres en diciembre de 1912. La diplomacia alemana, de pleno acuerdo con el gobierno inglés, llegó finalmente a encontrar una reglamentación pacífica de la crisis. Sobre todo gracias al consecuente apoyo de Alemania, la propuesta de Austria-Hungría de crear un Estado albanés autónomo y de negar a Servia un puerto en el Adriático, encontró finalmente la aprobación de todas las grandes potencias. De esta manera se alcanzaba el punto más importante de las exigencias austríacas: cerrar a Servia el acceso al Adriático.

La aplicación de las decisiones de la conferencia de los embajadores de Londres se reveló como extremadamente difícil a causa de la compacta oposición de Servia y de Montenegro, que naturalmente no querían dejarse arrebatar una parte de su botín de guerra. En los meses sucesivos la definición de los límites del nuevo principado de Albania fue motivo de violentas controversias diplomáticas, en cuyo centro se hallaba la suerte de la fortaleza turca de Scutari, que los montenegrinos asediaban aún con la ayuda de los servios, pero que tanto los austríacos como los italianos deseaban asignar, conforme a las conclusiones de la Conferencia de Londres, al nuevo Estado albanés. Tampoco el bloqueo de la costa montenegrina por la flota de las grandes potencias, con el fin de obligar a los montenegrinos y a los servios a respetar las conclusiones de la Conferencia de Londres, dio ningún resultado. Ni los montenegrinos querían

devolver Scutari (caída finalmente el 23 de abril de 1913) ni los servios estaban dispuestos a ceder el territorio albanés. En estas circunstancias, se consideró en Viena la posibilidad de llevar a cabo un golpe militar, bien contra Montenegro solo o contra Montenegro y Servia juntos, con el objeto de impedir que las decisiones concordadas en el círculo de las grandes potencias fuesen inútiles por los *'faits accomplis'* de los servios y de los montenegrinos y que Austria-Hungría apareciese como el engañado de turno. Afortunadamente esto no fue necesario, ya que a comienzos de mayo los Estados balcánicos terminaron por inclinarse a los deseos de las grandes potencias. El 30 de mayo de 1913 se concluyó en Londres, entre la Liga balcánica y Turquía, una paz preliminar que dejaba a las grandes potencias el poder de crear un Estado autónomo albanés y el de fijar sus fronteras.

La cuestión no podía considerarse, sin embargo, en absoluto resuelta, no sólo porque el principado de Albania sólo existía de momento sobre el mapa, sino también porque la unidad de los Estados balcánicos se había roto. En junio de 1913, Bulgaria atacó a Servia y Grecia, que hasta entonces habían sido sus aliadas. Sin embargo, había sobrevalorado sus propias fuerzas; la segunda guerra balcánica terminó para Bulgaria con una catástrofe, sobre todo porque también intervinieron en el conflicto Rumania y Turquía. La primera arrebató a Bulgaria la Dobrudia; la segunda reconquistó Adrianópolis; por su parte, Servia y Grecia quitaron a Bulgaria la mayoría de los territorios adquiridos en la primera guerra balcánica. Servia adelantó su frontera meridional profundamente en Macedonia y amplió su territorio hasta casi el doble, resultando así la verdadera vencedora de la segunda guerra balcánica.

El resultado de este conflicto fue considerado en Viena como una gran desgracia política, ya que a pesar de los benévolos consejos del gobierno alemán de tratar de llegar a un acuerdo pacífico con Servia, se veía en este país un peligro permanente para la monarquía danubiana. Sólo con grandes esfuerzos había podido la diplomacia alemana retener a Austria-Hungría de una intervención militar en la segunda guerra balcánica dirigida a limitar el crecimiento territorial de Servia. Al término del conflicto, Austria-Hungría solicitó de Alemania un apoyo para su intento de aportar ayuda, al menos ulteriormente, a Bulgaria. En una intervención común, las grandes potencias debían imponer la revisión de la Paz de Bucarest de agosto de 1912 en favor de Bulgaria. Pero ni el gobierno alemán ni el inglés estaban de acuerdo sobre este punto. La propuesta fue rechazada en Berlín y en Londres y la diplomacia austríaca tuvo

que aceptar, finalmente, muy a disgusto, la nueva situación en los Balcanes.

Ni Rusia ni Austria-Hungría creían que tal situación estuviese destinada a durar. Ambas potencias trataban ahora, más que nunca, de reforzar sus propias posiciones en los Balcanes y atraer a las potencias menores a su esfera de influencia. La lucha por la formación de un sistema de satélites adquirió en los meses sucesivos un carácter cada vez más agudo. Rusia ju-



Fig. 10. La situación de los Balcanes en 1912-1913.

gaba sobre todo la carta del movimiento nacional-revolucionario paneslavo, favoreciendo además la unificación de Servia y Montenegro, mientras que Austria-Hungría trataba de hacer de Bulgaria, el país derrotado de la segunda guerra balcánica, la piedra angular de una combinación que perseguía el aislamiento político de Servia. En este punto, sin embargo, el gobierno

vienés chocaba con una oposición cada vez más grande de la diplomacia alemana, que aspiraba en cambio a una coalición entre las monarquías conservadoras de Rumania, de Grecia y de Turquía «como baluarte contra los eslavos»[96]. Habida cuenta de las estrechas relaciones, sobre todo de Grecia, pero también de Rumania, con Servia, y en contrapartida, las pésimas entre Rumania y Bulgaria, tal combinación presuponía la renuncia a complicar a Bulgaria y la conveniencia de llegar a un acuerdo con Servia. Por esto, el gobierno alemán no dejaba de exhortar a Austria-Hungría a un compromiso con su vecino servio, sin obtener ningún resultado. Tanto la política balcánica de Alemania como la de Austria-Hungría eran en aquellos años igual de irreales. Los contrastes profundos entre los propios Estados balcánicos, así como entre éstos y Turquía, impedían que se llevasen a cabo las aspiraciones de Alemania; además, ya habían pasado los tiempos en los que la diplomacia negociaba con los monarcas y no con los pueblos. Por el contrario, las perspectivas de un aislamiento político de Servia, que hubiese permitido a Austria-Hungría «arreglar cuentas» con el Estado balcánico en el plano militar, sin correr el riesgo de una gran guerra, eran mínimas. Sin embargo, en el Ballhausplatz de Viena se seguía persiguiendo este objetivo principal de la política balcánica de Austria-Hungría.

El foco incandescente de los Balcanes estaba teniendo repercusiones nefastas sobre las relaciones entre las potencias europeas En las capitales europeas se contaba en general con una nueva explosión de la crisis balcánica, y en todas partes se trataba de prepararse lo mejor posible al inevitable conflicto. En vista del empeoramiento de la situación general de las potencias centrales como consecuencia de las guerras balcánicas, se aprobó, en la primavera de 1913, en Alemania una nueva e importante ampliación del ejército. Francia, a su vez, pasó a un servicio militar obligatorio de tres años; sus escasos recursos humanos no le permitían otra solución. Al mismo tiempo, la diplomacia francesa presionaba cada vez más sobre San Petersburgo para que intensificase la producción de armamento y se acelerase la ampliación de los ferrocarriles rusos occidentales, cuya importancia, en el caso de una guerra con las potencias centrales, era decisiva; en la primavera de 1914, Francia concedió con este fin a su aliado un nuevo gran empréstito.

Entre los pueblos europeos creció la tendencia a perseguir los propios objetivos de política de potencia incluso recurriendo, como *ultima ratio,* a la guerra. En Alemania, Friedrich von Bernhardi hablaba en su famoso libro *Deutschland und der nächste Krieg* (Alemania y la próxima guerra), no sólo del

«derecho a la guerra», sino, basándose en Lutero, Clausewitz y Treitschke, además, del «deber de hacer la guerra». Y en Francia, Lyautey, uno de los portavoces del imperialismo francés, declaró en una conferencia en la École des Sciences Politiques, entre los aplausos frenéticos de los estudiantes: «Lo que más estimo en la juventud de hoy es el hecho de que no teme la guerra, ni la palabra, ni el hecho»[97]. Junto a la glorificación idealista de la guerra, que arrancaba a los pueblos de su tranquila satisfacción, poniéndolos ante nuevas, grandes y heroicas misiones, apareció entre los espíritus más lúcidos un fatalismo paralizador. La idea de que, tarde o temprano, estallaría inevitablemente un gran conflicto europeo estaba muy extendida, y no pocos publicistas pensaban que tal vez era mejor atacar en la primera ocasión, en lugar de vivir en el continuo temor de una guerra y cargar con gastos cada vez mayores de armamento. En Rusia insistían círculos cada vez más amplios sobre la necesidad de enfrentarse pronto al «enemigo mortal» del eslavismo: Austria-Hungría y su aliado alemán. En Alemania, la idea popular del inminente y grandioso enfrentamiento entre el germanismo y el eslavismo fue acogida incluso en los círculos más altos con simpatía. En Francia volvió a surgir, a raíz del incidente de Zabern, la idea de la «revancha». La recíproca antipatía entre el pueblo alemán y el inglés fue fomentada tanto por la rivalidad económica como por el miedo que uno tenía del otro. Mientras que en Inglaterra se imputaba a Alemania el deseo de extender su hegemonía primero sobre Europa, y luego sobre todo el mundo, se soñaba en Alemania con romper, tarde o temprano, la supremacía inglesa sobre los mares, para poder ascender al rango de potencia mundial. Sectores cada vez más amplios de la población se mostraban partidarios de la idea de que, ante el fracaso de los esfuerzos de los años precedentes, era necesario imponer a los otros la debida consideración hacia los intereses de Alemania en los países de ultramar, usando todos los medios de la potencia militar del Reich alemán sin retroceder, en caso extremo, ante la eventualidad de un conflicto general.

En aquellas circunstancias no le quedaba al gobierno alemán mucho margen en política interna para intentar un acercamiento a Inglaterra, siguiendo la línea de la cooperación anglo-alemana iniciada durante la crisis balcánica de 1912-1913. En política exterior, sin embargo, las posibilidades de éxito de estos esfuerzos por encontrar un terreno adecuado de acercamiento con Inglaterra no eran despreciables. En Gran Bretaña se estaba dispuesto a complacer al Reich alemán, en el límite de lo posible, en cuestiones de política mundial Alemania se ofrecía

además a la diplomacia inglesa, como aliada natural, en las cuestiones del futuro del imperio otomano, ya que ambas potencias estaban, aunque por motivos diversos, fundamentalmente interesadas en el mantenimiento del *statu quo* político en el Próximo Oriente, mientras que Rusia tendía con cada vez mayor energía a obtener, de un modo u otro, el control de los Estrechos. Además, Inglaterra había chocado desde 1912, una y otra vez, violentamente con Rusia a causa de Persia, y Poincaré había tenido que realizar grandes esfuerzos para reconciliar entre sí a los aliados de la Entente. A pesar de la rivalidad naval entre Inglaterra y Alemania, a la que también los ingleses empezaban a habituarse, existía una posibilidad real de acercar a estos últimos a la Triple Alianza, y de hacer más elástica en un punto crucial las relaciones, ya bastante peligrosas, de los dos sistemas opuestos de alianzas de Europa. Sin embargo, como habían demostrado claramente las negociaciones anglo-alemanas de la primavera de 1912, sólo se podía esperar algún resultado a largo plazo. Todo intento de separar a los ingleses de sus aliados de la Entente, era inútil ante la desconfianza inglesa hacia las intenciones de la política alemana. Sólo una política a largo plazo que hubiese llevado a un acuerdo sobre las cuestiones de política internacional debatidas entre Alemania e Inglaterra podía producir un cambio en este sentido. Bethmann Hollweg estaba decidido a emprender este camino, aunque en realidad necesitaba rápidos y espectaculares éxitos internacionales para mantener a raya a los grupos que en Alemania propugnaban una solución militar. Bethmann Hollweg y sus colaboradores estaban convencidos de que la posición de potencia mundial de Alemania sólo podía mejorar con una política paciente y cauta que, renunciando a clamorosas declaraciones públicas persiguiese con tenacidad y firmeza las propias metas en el campo de la política mundial. Las continuas amenazas, recomendadas sobre todo por la Liga panalemana y el «Wehrverein» (Liga de defensa), sólo iban a tener el efecto de unir aún más estrechamente a las otras potencias contra Alemania. «En tiempos como estos, la victoria pertenece al trabajo lento, continuo y tenaz, que sabe obtener en silencio un pequeño triunfo detrás de otro y que no trata de cosechar un triunfo externo demasiado pronto, realizando sus movimientos con determinación pero sin violencia»[98]: así escribía entonces Riezler, secretario personal de Bethmann Hollweg, sobre las posibilidades de la política alemana.

Con esta táctica Bethmann Hollweg obtuvo de momento considerables triunfos. Así se pudo, por ejemplo, entablar negociaciones con Inglaterra para un nuevo acuerdo sobre la

suerte de las colonias portuguesas, que debía de sustituir al remoto tratado de Angola de 1898. El 20 de octubre de 1913, fue firmado provisionalmente el nuevo tratado; éste aseguraba a Alemania, en el caso de que Portugal se viese obligado a renunciar a sus colonias por razones financieras, una parte de las posesiones coloniales portuguesas mucho mayor que la convenida en el viejo tratado de Angola. Surgieron grandes divergencias, sin embargo, por la exigencia de Grey de publicar el nuevo tratado junto con el de 1898 y el de Windsor de 1899. El gobierno alemán arguyó, con razón, que las probabilidades de realizar este tratado, que en realidad sólo constituía una promesa de futuro incierto, disminuirían en este caso considerablemente. Pero, sobre todo, se temía en Berlín que, al darse a conocer las jugadas diplomáticas inglesas después de la firma del tratado de Angola de 1898, se desencadenase una nueva ola de protestas contra la «pérfida Albión». El gobierno alemán tendría que contar entonces con el reproche de haberse dejado engañar por los ingleses una segunda vez. Bethmann Hollweg prefirió por eso no ratificar por el momento el tratado de Portugal y no comunicar a la opinión pública alemana el contenido del tratado, aunque por diversos motivos este comportamiento no era precisamente aconsejable en política interior. De mayor secreto aún estuvieron rodeadas las negociaciones anglo-alemanas sobre una eventual adquisición futura del Congo belga por parte de Alemania, negociaciones iniciadas en abril de 1914 y que no habían conducido a ningún resultado definitivo hasta el momento de estallar la guerra. En ambos casos los ingleses arriesgaban ciertamente poco al prometer al Reich alemán territorios coloniales de países amigos, únicamente sobre el papel, sin comprometerse concretamente a la realización de tales tratados y sin renunciar a una parte, por pequeña que fuese, de sus posesiones coloniales. Por otro lado, el valor de estos acuerdos para el gobierno alemán era, por el momento, mínimo; ni siquiera se podían utilizar para satisfacer a los más feroces partidarios de adquisiciones de ultramar. Se pensaba, sin embargo, haber iniciado con Inglaterra relaciones que podían ser útiles también en otras cuestiones de política mundial, por ejemplo en las que concernían a China, y que permitirían finalmente al Reich alemán la adquisición de un gran patrimonio colonial.

De interés mucho más inmediato fueron las negociaciones anglo-alemana relativas al ferrocarril de Bagdad, que habían comenzado en febrero de 1913 y que concluían con éxito el 15 de julio de 1914, inmediatamente antes de que estallase

la Guerra Mundial. La sociedad alemana constructora del ferrocarril de Bagdad («Bagdad-Bahn-Gesellschaft»), renunció al derecho de construir el tramo final hasta Basora (en el Golfo Pérsico), así como puertos y establecimientos industriales. A cambio del reconocimiento de la supremacía británica sobre aquella zona, el gobierno inglés prometió no volver a obstaculizar los trabajos de construcción. Como en febrero de 1914 se había conseguido eliminar también la resistencia de Francia a la construcción del ferrocarril de Bagdad, se tenía por fin vía libre para el proyecto más grande del imperialismo alemán antes de 1914. También en otros aspectos el gobierno alemán se mostraba ahora extremadamente dócil a los deseos de Inglaterra en las cuestiones del Próximo Oriente. Así, el 19 de marzo de 1914, la *Deutsche Bank* dejaba, por consejo del ministerio del Exterior, a un grupo financiero protegido por el *Foreign Office,* la participación mayoritaria en las concesiones petrolíferas turcas del Golfo Pérsico, contentándose ella misma con sólo un 25 %, aunque tenía derecho al 50 %. Fue decisivo, también en este punto, el deseo de complacer en lo posible a los ingleses, con el fin de ganarse sus simpatías en las cuestiones de política general. Bethmann Hollweg esperaba así poder aflojar, si no romper, un anillo de la Triple Entente.

Existía, sin embargo, una razón concreta para esta actitud solícita con Inglaterra. Todos los hombres políticos estaban convencidos de que la crisis de Oriente había encontrado una solución provisional, no definitiva, y que había que contar con la posibilidad de un inminente desmoronamiento del imperio otomano. El problema de una eventual repartición de Turquía comenzaba a ocupar cada vez más a los gabinetes europeos. La solución de este problema dependía de que la política inglesa apoyase entonces a Rusia o a las potencias centrales. En realidad Alemania no estaba en aquel período interesada en una partición del imperio otomano. Por el contrario, se trataba de favorecer por todos los medios a Turquía para mantener su unidad el tiempo más largo posible y esto por dos motivos: para poder proseguir tranquilamente sus propios proyectos económicos y porque en aquel momento no existían los medios materiales para la creación de un protectorado alemán en Asia Menor y en la Mesopotamia anterior. Así, la política alemana y los deseos ingleses se encontraron en el común esfuerzo de salvaguardar el imperio otomano.

Para Rusia constituía ahora una necesidad imperativa asegurarse una influencia determinante sobre los Estrechos. En aquellas circunstancias el envío a Constantinopla, al término del otoño de 1913, de una misión militar alemana, dirigida por

el general Liman von Sanders, suscitó en San Petersburgo las más serias inquietudes. En Rusia se estaba dispuesto a consentir un refuerzo de Turquía sólo a condición de que ésta se sometiese a la influencia rusa, y por esta razón se protestó violentamente contra el rearme del ejército turco bajo la dirección de Alemania. Cuando, en febrero de 1914, Liman von Sanders fue nombrado comandante del primer cuerpo turco estacionado en Constantinopla, se produjeron vivas protestas por parte de los rusos. Detrás de esta medida los rusos sospechaban la intención de Alemania de asegurarse, por cualquier eventualidad, el control militar de los Estrechos, suposición que en realidad carecía de todo fundamento. Por esta cuestión se produjo una grave crisis internacional que condujo a Alemania y a Rusia al borde de una guerra. Finalmente, Alemania y Turquía lograron encontrar una solución que permitía a los alemanes guardar la cara y que eliminó, al menos en parte, las preocupaciones de Rusia. Liman von Sanders fue ascendido a mariscal turco y así, automáticamente, relevado de su puesto de comandante del cuerpo turco. Los rusos, por otra parte, también se vieron obligados a aceptar este compromiso porque las consultas realizadas el 21 de febrero de 1914 en todos los ministerios habían revelado que Rusia era en aquel momento aún demasiado débil, desde el punto de vista militar, para poder llevar a cabo por la fuerza la anexión de los Estrechos. En esta ocasión el ministro del Exterior ruso, Sasonov, declaró que probablemente la cuestión de los Estrechos sólo encontraría su solución en el curso de una guerra europea. A esta conclusión de la crisis Liman von Sanders correspondía un grave endurecimiento de la política rusa con respecto a las potencias centrales. Desde la primavera de 1914 se comenzó en Rusia sistemáticamente a preparar una guerra contra Alemania y Austria-Hungría, considerada ahora, tarde o temprano, inevitable. Sin embargo, se esperaba poder aplazar tal guerra aún por tres o cuatro años. Por eso se intensificaron no sólo las relaciones con los Estados balcánicos, que se hubiese preferido unir en una alianza dirigida contra Austria-Hungría, sino también los esfuerzos de incluir de manera concreta a Inglaterra en la alianza franco-rusa con el constante apoyo de la diplomacia francesa.

A esta evolución correspondía en política interior un rápido aumento del sentimiento antialemán en la opinión pública rusa. El grupo tradicionalmente filo-alemán de la Corte del zar se fue reduciendo cada vez más a una actitud defensiva, y el sucesor de Stolypin, el primer ministro Kokowzow, se vio expuesto a críticas cada vez más duras por su política «débil» y tímida. En Alemania no se pasó por alto esta actitud, y la

prensa alemana reaccionó con duras críticas contra Rusia. En los círculos militares se registraba atentamente el aumento de las tendencias militaristas en la opinión pública rusa. Sobre todo se observaba con creciente desconfianza la rápida ampliación de la red de ferrocarril en la Rusia occidental, cuya terminación hubiese invalidado la principal premisa para el éxito del Plan Schlieffen (ver pág. 297), esto es, la lentitud de una eventual movilización rusa. Esta preocupación se cristalizó finalmente en la sospecha de que había que contar para el año 1916-17 con una guerra de agresión rusa. La dirección política se oponía con energía a tales interpretaciones de la política rusa, pero en privado tampoco el canciller podía reprimir su inquietud sobre la evolución que seguían las cosas con Rusia: «Rusia da preocupaciones. Su política es completamente impenetrable, porque no se sabe quién ejerce en este momento la influencia decisiva, y porque tal influencia está sometida a cambios rápidos. Así, espero que la actual corriente agresiva, fuertemente paneslavista, ceda por fin a la razón. Pero no puedo liberarme de estas dudas» [99].

Un artículo del 2 de marzo de 1914 del corresponsal de la *Kölnische Zeitung* en San Petersburgo, un cierto teniente Ulrich, en el que se aseguraba, de manera bastante clara, que Rusia, apenas completado su programa actual de armamento, tenía la intención de declarar la guerra a Alemania, desencadenó una áspera polémica de prensa entre Alemania y Rusia. Generalmente se ha tendido a pensar que, como en la crisis de 1875 en la que era patente la inminencia de una guerra, el ministerio del Exterior trató de dar cuenta a la opinión pública alemana, a través de la prensa, de los preparativos militares y de las aspiraciones paneslavistas de los rusos para obligar a estos últimos a declarar las intenciones de su política; el hecho es que tanto Bethmann Hollweg, como su jefe de prensa Hammann negaron entonces con insistencia tener algo que ver con aquel artículo. Guillermo II, en todo caso, se identificó por completo con las conclusiones del corresponsal de la *Kölnische Zeitung*: «Como militar no dudo en absoluto, según las informaciones de que dispongo, que Rusia prepara la guerra sistemáticamente contra nosotros, y según esta convicción sigo mi política» [100].

La reacción del gobierno ruso no era lo más indicado para disipar las preocupaciones alemanas. Encontrándose también expuesto a la presión de una opinión pública frenéticamente agitada, aquél declaró en un artículo semioficial que Rusia estaba preparada para la guerra y que no temía las amenazas del exterior. Una especie de histeria colectiva se adueñó de la

opinión pública alemana. En los círculos militares se pensaba ya seriamente en una guerra preventiva contra Rusia y Francia, antes de que el imperio zarista pudiese concluir su rearme, en cuyo caso el Plan Schlieffen, con el que se esperaba poder derrotar a Francia en seis semanas, se podría llevar aún a cabo. Al final de mayo o al principio de junio de 1914, aún antes de que el atentado de Sarajevo despertase a los hombres de Estado europeos de su descanso veraniego, Helmut von Moltke, el jefe del Estado Mayor alemán, planteó al secretario de Estado del Exterior, von Jagow, la cuestión de si en vista de los enormes preparativos militares rusos, que se concluirían en dos o tres años, era oportuno «conducir una guerra preventiva con el fin de abatir al enemigo, mientras podamos aún vencer en la batalla»[101]. Y a finales de junio de 1914 también se ocupó Guillermo II de la cuestión de si «no era mejor atacar, en lugar de esperar» a que los rusos hubiesen concluido su programa de armamento[102]. Sin embargo, es seguro que Bethmann Hollweg y Jagow rechazaron decididamente la idea de una guerra preventiva. En la medida en que la escasez de fuentes permite una conclusión segura, se puede decir que el canciller se oponía a los partidarios de la guerra preventiva con el argumento de que era necesario soportar con la máxima cautela esta fase, sin duda real, de amenaza al poder alemán por parte de Rusia, hasta que las relaciones de amistad con Inglaterra, que estaban mejorando ya lentamente, hubiesen adquirido la suficiente solidez. Una vez conseguido esto, se podría evitar una guerra europea; y el Reich alemán podría además tomar parte confiadamente en las discusiones futuras, ya sea sobre el futuro ordenamiento de los Balcanes o sobre la suerte del imperio otomano.

En estas circunstancias la noticia de negociaciones secretas entre Inglaterra y Rusia sobre la firma de una convención naval, que llegó en mayo de 1914 al ministerio del Exterior a través de un agente empleado en la embajada rusa en Londres, significó para el plan político de Bethmann Hollweg una catástrofe. Su posición frente a los partidarios de una guerra preventiva quedaba decididamente debilitada; su argumentación principal de que pudiéndose contar con el apoyo de Inglaterra no se debía temer un ataque de parte rusa, se venía abajo. Al contrario, en Berlín se tenía la impresión de que la propia Inglaterra contribuía ahora a fomentar las tendencias belicistas de Rusia. El cerco alrededor de las potencias centrales parecía cerrarse definitivamente. No sólo parecía esfumarse para Alemania la perspectiva de una futura eficaz política mundial, de acuerdo con Inglaterra, sino que también la posición de hege-

monía del Reich alemán sobre el continente europeo estaba directamente amenazada.

Sir Edward Grey no atribuía a las conversaciones por un acuerdo naval con Rusia, que sólo había entablado ante la presión de Francia, un carácter agresivo y ni siquiera vinculante, y estaba dispuesto a interrumpir éstas inmediatamente, cuando la prensa alemana las denunció en una serie de artículos. En realidad Grey sólo había querido evitar que los rusos se irritasen al rechazarles, ya que el gobierno ruso estaba dispuesto a recompensar la buena disposición de llegar a un acuerdo naval de los ingleses con una actitud filo-inglesa en las cuestiones persas. Sin embargo, Grey no tenía en absoluto la intención de renunciar a su línea de la «mano libre»; pero se equivocó en cuanto al grado en que se había comprometido ya con Francia y Rusia y cometió un grave error al creer que Inglaterra podría evitar un choque entre los dos bloques, dejando a ambas partes en la incertidumbre sobre la actitud que asumiría.

El gobierno alemán se vio ante la alternativa de tratar de evitar con medios diplomáticos el inminente aislamiento de las potencias centrales, o de recurrir a una guerra preventiva, cuyo final victorioso creía poder garantizar en el momento dado el Estado Mayor alemán. Por eso se trató en Berlín de obtener claridad acerca de la actitud inglesa. A pesar de su gran desilusión sobre el comportamiento del gobierno inglés —sólo entonces se tenían en Berlín informaciones más precisas sobre los acuerdos estipulados entre Francia e Inglaterra— el 16 de junio de 1914 el canciller dirigió, a través del embajador alemán en Londres, Lichnowsky, una llamada urgente a sir Edward Grey. Bethmann Hollweg solicitaba una colaboración basada en la confianza mutua de ambas potencias, y propuso sobre todo una acción conjunta de Alemania e Inglaterra en el caso de que volviese a estallar la crisis balcánica. Apenas el informe de Lichnowsky sobre la respuesta más bien parca y, como se sabía en Berlín de fuentes seguras, no del todo sincera, hubo llegado a las manos de Bethmann Hollweg, cuando el atentado de Sarajevo puso al gobierno alemán delante de una situación completamente nueva, obligándola a tomar decisiones de gran alcance. El enturbiamiento de las relaciones anglo-alemanas sólo dejaba ya un escaso margen frente a aquellas fuerzas que no se detenían ante un gran conflicto general y que querían a todo precio movilizar el potencial militar alemán con el fin de aumentar el poder del Reich en Europa y en el mundo.

5. La Primera Guerra Mundial: La crisis mortal de la vieja Europa

I. LA CRISIS DE JULIO, ESTALLA LA GUERRA

El 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando y su mujer son asesinados por el estudiante bosnio Princip durante el solemne desfile por las calles de Sarajevo, capital de la provincia de Bosnia. El atentado de Sarajevo tuvo lugar en un clima político ya de por sí cargado de amenazas, haciendo explotar abiertamente el contraste latente entre Austria-Hungría y Servia. El atentado fue sólo el último eslabón de una cadena de acciones terroristas en los territorios sudeslavos de la monarquía, acciones con las que se quería demostrar ante todo el mundo la ilegitimidad del dominio de los Habsburgo en Bosnia y en Herzegovina. De hecho hacía ya bastante tiempo que la situación era insostenible en los países eslavos meridionales de Austria-Hungría. También en Viena se había llegado a la conclusión de que no era posible llegar a un acuerdo pacífico entre el irredentismo sudeslavo y el Estado supranacional austríaco. La diplomacia austro-húngara acababa de elaborar un amplio memorial en el que se solicitaba el apoyo del aliado alemán para un nuevo intento de aislar políticamente a Servia en los Balcanes, como primer paso hacia una represión más o menos violenta del irredentismo servio. Las balas de Princip ofrecieron inesperadamente la posibilidad de poner en práctica este programa sin rodeos.

En Viena existía desde el principio la convicción de que Servia había tenido parte en el atentado. Para desgracia de la monarquía danubiana no se pudieron presentar pruebas concretas de la participación de ciudadanos servios, en parte a causa de los graves errores cometidos por los órganos competentes de investigación. Princip y sus cómplices, en la medida en que pudieron ser identificados, eran todos bosnios; sólo sus armas —sin duda alguna— eran de origen servio. Hoy sabemos que el atentado fue obra esencialmente de una organización secreta nacionalista radical, la «Ujedinjenje ili smrt» (ver página 191); llamada generalmente «Mano negra», que a su vez estaba en contacto con un grupo de jóvenes nacionalistas bos-

nios. A pesar de la participación de oficiales del servicio secreto servio, se trataba de una corriente política, que se oponía violentamente a la línea del gobierno Pašić, en el poder en aquel momento, y que quería imponer a ésta un curso más duro en la cuestión nacional. Ya desde comienzos de junio Pašić tenía conocimiento del proyecto del atentado, y había realizado algunos intentos, aunque del todo insuficientes, para impedir que se llevase a cabo. *A posteriori* es preciso decir que este hecho, que durante mucho tiempo estuvo envuelto en una gran oscuridad, presenta el modo de actuar ulterior de Austria-Hungría bajo una luz menos desfavorable. Ya que si un gobierno no es capaz de impedir que su propia oposición nacional cometa actos ilegales de violencia en un Estado vecino, no se le puede negar por completo la facultad de intervenir con la fuerza, aún a costa de violar derechos de soberanía. Sin embargo, estos hechos no eran conocidos entonces, y los elementos que las autoridades austro-húngaras pretendieron presentar como prueba de la corresponsabilidad de la Servia oficial no eran demasiado convincentes.

En la prensa austríaca se desencadenó una violenta tempestad de indignación por las peligrosas intrigas de los nacionalistas servios. No bastaba ya con censurar sólo las aspiraciones subversivas y anticulturales del movimiento nacional revolucionario sudeslavo. La opinión pública, sobre todo en los países alemanes de la monarquía, exigía inmediatamente enérgicas medidas contra Servia. También el gobierno de Viena consideró ahora llegado el momento para una solución radical de la cuestión Servia, como la deseaba Austria-Hungría. En el Ballhausplatz se estaba plenamente convencido de que las potencias europeas no obstaculizarían el justo castigo de los regicidas.

El conde Berchtold, y con él la gran mayoría de los políticos y militantes más influyentes de la monarquía, con Conrad von Hötzendorff a su cabeza, estaban decididos a aprovechar la situación favorable para desencadenar aquella guerra contra Servia, en la que se había pensado desde 1908 constantemente, pero a la que se había tenido que renunciar siempre, sobre todo, por la actitud del Reich alemán. Sólo Tisza, el primer ministro húngaro, se opuso en un principio enérgicamente a una línea favorable a la guerra, temiendo con razón que ésta amenazase la posición privilegiada de Hungría desde un punto de vista constitucional y su precario dominio sobre las nacionalidades no magiares en la parte transleithania del imperio. En Viena no se tenían objetivos militares concretos, y de haberlos, no eran declarados por consideración hacia Hungría,

que se oponía a cualquier aumento del elemento eslavo dentro de la monarquía danubiana. Existía la convicción de que Austria-Hungría sólo podía restablecer su prestigio mediante una prueba de fuerza militar. Sobre la suerte reservada a Servia en caso de una victoriosa campaña militar, diferían las opiniones ampliamente. Berchtold pensaba en una reducción de Servia en favor de sus concurrentes en los Balcanes, Hötzendorff en una integración de toda Servia en la confederación de los Estados austro-húngaros.

En el caso de una acción militar contra Servia había que esperar las más graves contramedidas de parte de Rusia, y no se podía descartar la eventualidad de que éstas pudiesen desencadenar un conflicto europeo general. En Viena, sin embargo, se prefirió, con la ligereza de un grupo dirigente ya caduco, prescindir de una previsión realista de las posibles consecuencias de tal iniciativa. Desde un principio se daba por descontado que Rusia, en caso de que Alemania ejerciese sobre ella una presión suficiente, se contentaría, como ya lo había hecho en 1908, con adoptar una actitud amenazadora y que luego se calmaría.

Como en Viena se atribuía una importancia decisiva a la actitud del Reich alemán, el 5 de julio de 1914 se decidió enviar en misión especial al conde Hoyos a Berlín, con el fin de asegurarse el apoyo del gobierno alemán para la proyectada expedición de castigo contra Servia. La estrategia austro-húngara fue tan unívoca como miope: guerra contra Servia, con el respaldo alemán, aun a costa de desencadenar un gran conflicto europeo. Esta eventualidad fue pasada por alto en gran medida, y no se tuvo en cuenta tampoco en los planes de movilización. Aunque existía el acuerdo de tener a Italia al corriente, ofreciéndole tal vez compensaciones, se renunció desde un principio a la idea de comunicar los propios planes a Roma para asegurarse, en caso de necesidad, su apoyo. Se confiaba plenamente en que el aliado alemán sabría evitar cualquier desastre.

De esta manera se atribuyó al Reich alemán el poder de decidir sobre la guerra o la paz, aunque la diplomacia alemana protestase contra esta lógica de los hechos. En Berlín, desde el principio, no se hacían ilusiones de que un ataque de Austria-Hungría contra Servia no provocase un gran conflicto europeo; en el ministerio del Exterior se tendía, de acuerdo con la línea política seguida hasta entonces por Alemania en los Balcanes, a disuadir a Austria-Hungría de emprender pasos imprudentes. El embajador alemán en Viena, von Tschirschky, podía por tanto suponer con razón que actuaba según la

voluntad de su gobierno, cuando en los primeros días de julio aprovechaba cualquier ocasión para prevenir a Austria-Hungría contra «pasos precipitados» con respecto a Servia, aunque personalmente consideraba oportuna una acción enérgica de la monarquía danubiana. Pero precisamente por aquellos días se estaba iniciando un cambio radical en la actitud alemana hacia la cuestión servia. Ya el 3 de julio comentaba Guillermo II de manera extremadamente impulsiva un informe de Tschirschky: «Ahora o nunca (...). Hay que acabar con los servios, y, además, pronto» [103]. De hecho, en Berlín se había llegado mientras tanto a la convicción de que no había que obstaculizar una acción militar austro-húngara contra Servia, aunque se corriese el riesgo de provocar de esta manera una conflagración europea general. Las razones decisivas que indujeron a esta grave decisión no fueron ni la «fidelidad nibelúngica» ni siquiera la solidaridad dinástica, sino consideraciones extremadamente complicadas sobre la situación general política y militar de las potencias centrales. Bethmann Hollweg consideraba esta situación extremadamente crítica: mientras que el bloque de los propios aliados se debilitaba cada vez más, el de los enemigos, en cambio, iba adquiriendo nuevas fuerzas. Un papel decisivo tuvo en esta situación el temor a Rusia, que se estaba haciendo cada vez más potente. Bethmann Hollweg y sus consejeros no compartían ciertamente la opinión de los militares de que había que contar para 1916 ó 1917 con una guerra agresiva rusa, pero también ellos estaban preocupados por el creciente poderío de Rusia como demuestra una frase del canciller —no pronunciada sin embargo hasta el fin de julio de 1914—, que Riezler recogió en su diario: «En pocos años, de continuar el actual equilibrio de fuerzas europeo, no se podrá luchar ya contra las enormes pretensiones y la enorme fuerza explosiva de Rusia» [104]. Los militares estaban además preocupados por el hecho de que el progreso del armamento ruso y la ampliación de los ferrocarriles de Rusia occidental minaban cada vez más los presupuestos del Plan Schlieffen. En un momento en que todo el mundo en Europa presentía que se avecinaba un gran conflicto europeo, adquiría mayor peso su argumento de que si se quería hacer la guerra contra Rusia y Francia, había que hacerla rápidamente. La esperanza de Bethmann Hollweg de poderse oponer a la creciente presión que Rusia y Francia ejercían sobre las potencias centrales, a través de una política de acercamiento a Inglaterra, acababa de recibir un grave golpe. Como mostraban las negociaciones navales anglo-rusas, Inglaterra estaba dispuesta a pasarse al campo enemigo definitivamente.

En estas circunstancias aumentaban en Berlín los argumentos en favor de una guerra preventiva, tanto más cuanto que el Estado Mayor aseguraba que en aquel momento aún se podía salir airoso de una gran guerra europea. Bethmann Hollweg era decididamente contrario a una guerra preventiva y no quería embarcarse en una gran guerra sin una necesidad absoluta. Pero en aquella situación no podía ya atreverse a retener a Austria-Hungría de su peligrosa aventura servia. Si los militares tenían razón en su juicio sobre Rusia, entonces era irresponsable dejar pasar el momento oportuno. Así Bethmann Hollweg se decidió, «después de algunas dudas iniciales», por una opción intermedia: una guerra local entre Austria y Servia, que en Berlín se tendía a considerar inevitable, había de construir la piedra de toque en la actitud bélica de Rusia; en otras palabras, el canciller estaba dispuesto a correr el riesgo de una guerra europea, sin querer provocarla. Catorce días más tarde el secretario de Estado del Exterior alemán, von Jagow, expresó claramente esta actitud: «No quiero una guerra preventiva, pero si se presenta la lucha, no debemos de echarnos atrás» [105].

Austria-Hungría tenía que asumir el papel de *agent provocateur,* procediendo por propia iniciativa contra Servia. En este sentido Guillermo II aseguró, el 5 de julio de 1914, el apoyo de Alemania al gobierno austro-húngaro, también en el caso de que surgiesen ulteriores complicaciones de una guerra austro-servia. En cuanto a la acción contra Servia, se quería que decidiese la propia monarquía danubiana; en el caso de que se decidiese a atacar, debería hacerlo lo más pronto posible, para aprovechar la situación psicológica favorable creada con el atentado de Sarajevo. Si Rusia tomaba la «expedición de castigo» austríaca contra Servia como pretexto para desencadenar un gran conflicto europeo, se quería en Berlín que las cosas siguiesen su curso, convencidos de poder aún salir victoriosos de esa guerra. En la capital alemana se seguía creyendo que Rusia terminaría finalmente por ceder como en 1908, sobre todo porque su armamento no estaba aún a punto: por lo tanto bastaba con que Alemania apoyase plenamente a Austria-Hungría. Si, por el contrario, Rusia insistía en una intervención militar en favor de su protegida Servia, era de esperar que ni Francia ni Inglaterra, que no tenían intereses capitales en las cuestiones balcánicas, secundasen su actitud. En este caso se presentaba la ocasión deseada de mostrar a Rusia delante de la opinión pública mundial como responsable del desencadenamiento de la guerra. Además existían buenas probabilidades de conseguir localizar el conflicto austro-servio y de hacer, al mismo tiempo, «saltar la Entente con esta acción» [106]. Además,

el grupo partidario de la guerra en Rusia habría recibido un duro golpe, algo que tenía que parecer oportuno al canciller alemán para combatir con más posibilidades de éxito las tesis de los militares alemanes. Si se llegaba de todas maneras a una gran guerra, entonces mejor pronto que tarde. A esta estrategia política fue subordinada toda la política interna. El ministerio del Exterior se encargó de que la prensa alemana compartiese la agitación austro-húngara contra la «labor de zapa servia», tratando al mismo tiempo de evitar todo lo que hubiese podido ser interpretado como síntoma de voluntad de guerra de Alemania.

A posteriori es fácil indignarse moralmente por estos cálculos tan aventurados del gobierno alemán. Pero las posibilidades de que esta ofensiva diplomática, que comprendía la guerra local contra Servia y que se movía al borde de una gran guerra general, fuese coronada por el éxito, eran bastante grandes. Sin embargo, éstas se vieron desde el principio mermadas por el hecho de que Austria-Hungría aplazaba continuamente la acción contra Servia, en parte porque no existía aún unanimidad de opinión, y en parte también porque los preparativos militares no habían alcanzado aún el punto deseado. De esta manera el gobierno alemán se vio obligado, contrariamente a sus intenciones, a interpretar ante Viena el papel del que solicita la acción. Las grandes potencias, que probablemente habrían tolerado un golpe militar contra Servia una o dos semanas después del incidente de Sarajevo, no estaban dispuestas a aceptar una guerra preparada a largo plazo, después de que se había aplacado la primera excitación por el atentado. En Viena, sin embargo, se actuaba con calma; sólo el 14 de julio se decidió definitivamente recurrir a las armas. En Berlín no causó ninguna satisfacción oír que sólo a partir del 10 de agosto se podía contar con operaciones militares contra Servia.

¿Qué actitud adoptaban las otras grandes potencias ante la tormenta que se avecinaba? Desde el principio el gobierno ruso consideró como extremadamente grave la crisis provocada por el atentado de Sarajevo. El ministro del Exterior, Sasonov, comprendía perfectamente que la situación psicológica para una contramedida de Austria-Hungría en los Balcanes era extraordinariamente favorable; por esta razón aconsejó a Belgrado evitar por el momento cualquier iniciativa que pudiese ser considerada en cualquier modo provocadora por Austria-Hungría, y ordenó la suspensión de las negociaciones secretas sobre una unificación de Servia y Montenegro. Lo que con esto se proponía era no dar a Austria-Hungría nuevas razones para una reapertura de las cuestiones balcánicas. Por lo demás, en

San Petersburgo se estaba firmemente decidido desde un principio a no permitir en ningún caso una acción austríaca que violase la integridad y la soberanía de Servia. Ya a mediados de julio se consideró la utilidad de una movilización parcial, con el fin de poder ejercer, en caso de necesidad, presión sobre Austria-Hungría. En Rusia, de hecho, no se había concluido aún el programa de armamento, pero se pensaba estar en condiciones para afrontar una gran guerra. Sobre todo los ambientes militares se habían habituado, desde la primavera de 1914, a la idea de una guerra contra las potencias centrales, y por eso insistían, conociendo ya en líneas generales los planes de guerra de Alemania, en una rápida movilización general. A sus ojos el verdadero adversario no era Austria-Hungría, sino Alemania.

Francia, por el contrario, no obstante la fe ciega en la propia fuerza militar, en julio de 1914 no deseaba realmente la guerra. Las graves polémicas internas sobre la oportunidad de mantener en tres años el servicio militar, así como la reorganización en curso del ejército francés, eran motivos suficientes para evitar una guerra que habría creado graves problemas desde el punto de vista de la técnica militar. El gobierno francés estaba además políticamente paralizado en las semanas decisivas, dado que el presidente Poincaré y el primer ministro Viviani estaban ausentes realizando visitas oficiales en San Petersburgo, Estocolmo y Copenhague. Francia, sin embargo, tenía aún las manos atadas desde que Poincaré había extendido en secreto la validez de la Alianza en caso de una guerra desencadenada a causa de un conflicto en los Balcanes. Parece que además el presidente francés animó, durante su estancia en San Petersburgo del 14 al 23 de julio de 1914, a Sasonov a asumir una actitud intransigente frente a una eventual acción austro-húngara contra Servia; se cree, incluso, que aseguró *expresis verbis* al ministro del Exterior ruso la fidelidad de Francia en el caso de complicaciones militares. Aunque en Francia se deseaba evitar un gran conflicto europeo, no se estaba desde el principio dispuesto a poner en juego, por esta razón, la propia Alianza. Más aún: en la medida en que las escasas fuentes permiten una conclusión, se puede decir que al menos Poincaré consideraba intolerable una debilitación del propio grupo de alianza, incluso sólo una derrota diplomática de Rusia en la cuestión servia.

En Londres se estaba por completo ocupado con los problemas internos, especialmente con la guerra civil que amenazaba a Irlanda. Por eso se prestó en un principio sólo escasa atención al conflicto austro-servio, pero inicialmente se estaba

dispuesto a conceder a la monarquía danubiana el derecho a una cierta satisfacción, tanto más cuanto que no se sentía ninguna simpatía por los servios. La conformidad de la diplomacia inglesa con las contramedidas austro-húngaras, halló, sin embargo, su límite en el momento en que surgió el peligro de un conflicto europeo general; se trató entonces de frenar la acción austríaca para privar de sus bases a la intervención de Rusia. En el caso de que no se pudiese evitar una guerra general, el *Foreign Office* estaba decidido desde un principio a intervenir del lado de la Doble Alianza para evitar a toda costa una derrota de Francia, con la que no existía un compromiso vinculante formal, pero sí de hecho irrevocable. Sin embargo, no se sabía con certeza si esta línea política podía encontrar una mayoría en el Gabinete y en el Parlamento. En todo caso se evitó expresar desde el principio abiertamente la propia actitud, no sólo en previsión a la fuerte oposición interna, sino también porque de un lado no se quería incitar a Rusia y a Francia a la guerra, ni de otro empujar a Alemania a pasos desesperados. Cuando estalló finalmente la crisis, Inglaterra trató, aunque con escasa energía, de frenar a las respectivas máquinas bélicas y de hacer de mediadora entre las potencias.

A pesar de las claras advertencias de San Petersburgo en el sentido de que Rusia no toleraría bajo ningún concepto una acción militar austro-húngara contra Servia, la monarquía danubiana, confiando en el apoyo del gobierno aliado alemán, dirigió a Servia, el 23 de julio de 1914, un ultimátum extremadamente rígido con un plazo de cuarenta y ocho horas, exigiendo plena satisfacción por el atentado y medidas contra el movimiento de extrema derecha en Servia; las autoridades del estado austro-húngaro deberían participar en la realización de tales medidas. El texto, extremadamente brusco de la nota austríaca, causó una impresión muy desfavorable en las capitales europeas, incluso donde se estaba dispuesto a considerar con cierta comprensión la excitación austro-húngara por el asesinato de Sarajevo. El gobierno alemán aparecía de repente en una posición ambigua ya que, habiendo asegurado de antemano a Austria-Hungría su concreto apoyo diplomático para este paso, pretendía, sin embargo, no haber conocido la nota austríaca dirigida a Servia con antelación, cosa que, aunque formalmente cierta, de hecho no lo era. ¿Cómo era posible, y en este punto estaban de acuerdo todos los diplomáticos de las potencias de la Entente, que el Reich alemán hubiese podido firmar un cheque en blanco de tal importancia, si no perseguía con ello sus propios planes?

En cualquier caso, lo cierto es que las primeras reacciones de las otras grandes potencias, y particularmente de Inglaterra, parecían confirmar las esperanzas de Bethmann Hollweg basadas en que sería posible dividir la Entente por la cuestión de si convenía aceptar una guerra austro-servia, o si, por el contrario, se debía, como quería Rusia, evitarla con la fuerza militar. La hábil contrajugada de Servia, que con una nota del 25 de julio aceptaba, siguiendo el consejo de las potencias de la Entente, y sobre todo de Rusia, las exigencias de Austria, avanzando sólo algunas reservas sobre ciertos puntos, cambió radicalmente la situación. Hecho que no fue comprendido suficientemente ni en Viena ni el Berlín donde se perseguía obstinadamente la línea política ya predispuesta. El 28 de julio Austria-Hungría rompe sus relaciones con Servia; el gobierno alemán rechaza la propuesta de Inglaterra de confiar la solución de la cuestión servia a una conferencia de las grandes potencias, sea porque desde la conferencia de Algeciras se tenía una fundada antipatía a estos congresos, sea, sobre todo, porque no se estaba dispuesto a parar el brazo del aliado austríaco, al menos en aquel momento. En este caso no se hubiese podido llevar a cabo el doble objetivo de la ofensiva diplomática y militar de las potencias centrales: el de poner a Rusia ante la alternativa decisiva de guerra o paz, y de someter al mismo tiempo a la Entente a una prueba de resistencia, ante la que probablemente hubiese demostrado no estar a la altura. Resistir la crisis, ésta era por el momento la consigna de Alemania. El creciente descontento de las otras potencias por la actitud ambigua de la diplomacia alemana no se tuvo de momento muy en cuenta.

Sólo en la tarde del 27 de julio, Bethmann Hollweg tomó la decisión de cambiar la línea política de las potencias centrales, de un lado bajo la impresión de la favorable acogida que la nota de respuesta de Servia había tenido en la opinión pública de toda Europa, y de otro bajo la influencia de las presiones de Inglaterra. Acogiendo las recomendaciones inglesas, Bethmann Hollweg aconsejó a Austria-Hungría la moderación, sugiriendo con insistencia al gobierno austro-húngaro que iniciase inmediatamente negociaciones bilaterales con Rusia, que se pusiera de acuerdo con San Pertersburgo sobre los límites y sobre la finalidad de la inminente acción militar contra Servia, renunciando a operaciones de gran envergadura, y que declarase de nuevo solemnemente que Austria-Hungría no pensaba en una anexión de territorios servios. Este viraje de la táctica diplomática alemana fue apoyado enérgicamente también por Guillermo II en la mañana del 28 de julio. Ante la lectura de la nota de respuesta de Servia, el emperador exclamó: «De esta manera

desaparece todo motivo de guerra», y expresó la opinión de que Austria-Hungría debería limitarse a la ocupación de Belgrado así como de algunos puntos estratégicos. La posibilidad de considerar Belgrado como garantía, aseguraba a Austria-Hungría la deseada satisfacción militar, constituyendo al mismo tiempo una base para la plena realización de sus exigencias [107]. En los días sucesivos el gobierno alemán hizo todo lo posible por inducir a Viena a modificar su línea política. Pero estos esfuerzos no tuvieron de momento ningún éxito, ya sea porque Berlín se había comprometido en sentido contrario con declaraciones hechas en el pasado, ya sea, sobre todo, porque la diplomacia vienesa, lenta e intransigente, no estaba ya dispuesta a renunciar a la proyectada guerra contra Servia.

La táctica de Bethmann Hollweg, que al menos en parte correspondía a las propuestas del gobierno inglés, podría haber tenido éxito si la movilización parcial de Rusia contra Austria-Hungría y la movilización total que Austria-Hungría llevó a cabo a partir del 29 de julio no hubiesen hecho intervenir a los propios militares. Estos consideraban ya inútiles ulteriores negociaciones entre las potencias, y estaban dispuestos a poner en marcha inmediatamente el Plan Schlieffen, independientemente de lo que pudiesen decidir aún los diplomáticos. Desde el mediodía del 29 de julio, Bethmann Hollweg tuvo que luchar encarnizadamente con los militares de su país para ganar tiempo, viéndose obligado, durante ese debate, a hacer graves concesiones que comprometieron seriamente las perspectivas de éxito de la propia estrategia política. Tanto la *démarche* alemana a San Petersburgo del mediodía del 29 de julio, en la que se exigía la inmediata suspensión de los preparativos de movilización en Rusia, como la oferta de neutralidad dirigida a Inglaterra en la tarde del mismo día, fueron medidas que colocaron a la política alemana en una posición extremadamente desfavorable, y que, especialmente en Londres, fueron interpretadas como una prueba de la voluntad alemana de hacer la guerra. Sin embargo, el 29 y 30 de julio de 1914, Bethmann Hollweg continuó persiguiendo con la máxima tenacidad la realización de su plan original, que tenía como meta aislar la guerra austro-servia y comprometer a Rusia. Finalmente, la mañana del 31 de julio, algunos indicios hicieron pensar que los cálculos de los alemanes parecían poder realizarse, aunque en Viena se seguía sin prestar oídos a las propuestas de Alemania. Una oferta inglesa de mediación, en la misma línea de «garantía» adelantada por Guillermo II, parecía ofrecer finalmente la deseada solución a la crisis. Pero en el mismo momento llegó a Berlín la noticia de la movilización general de Rusia, a pesar de que el

día anterior una intervención personal de Guillermo II ante el zar había conseguido una vez más aplazar la movilización general del país. Los militares rusos habían declarado inmediatamente la imposibilidad de tal medida desde el punto de vista técnico, con lo que se iniciaba el fatal automatismo de las movilizaciones, que privaba a los políticos de las capitales de Europa de cualquier margen para ulteriores negociaciones, obligándoles a dejar que los acontecimientos siguiesen su curso. Sobre todo Francia podría haber inducido a su aliado a no emprender este paso fatal, hasta haber agotado todas las posibilidades diplomáticas. Paléologue, el embajador francés en San Petersburgo, hizo —al parecer por propia iniciativa— exactamente lo contrario. E Inglaterra, en la que Bethmann Hollweg había puesto, precisamente en este punto, algunas esperanzas, no quería intervenir en este sentido ante San Petersburgo, sea porque no sabía la importancia de la movilización, sea porque, preocupada por las aspiraciones de Alemania a la hegemonía mundial, no quería poner en juego las propias alianzas.

Desde la mañana del 31 de julio la política alemana, bajo la presión de las exigencias del Plan Schlieffen, estaba preparada a una guerra en el plazo más breve posible. El gobierno alemán presentó inmediatamente sendos ultimátum a Rusia y Francia, que tuvieron como consecuencia, en el mediodía del 1 de agosto, la declaración de guerra a Rusia. Al no producirse, sin embargo, la confirmación de la entrega de la correspondiente nota por el embajador en San Petersburgo, conde Pourtalés, se sospechó que ésta había sido interceptada por el correo ruso y que nc se había producido ninguna declaración de guerra; en Berlín se hizo por ello de necesidad vital, declarando abierta la guerra a causa de presuntas violaciones de frontera de parte rusa. A la opinión pública alemana se le ocultó que Alemania había sido la primera en declarar la guerra, atribuyendo toda la responsabilidad exclusivamente a Rusia, lo que era de cierta utilidad para poder contar con el apoyo de la socialdemocracia. A las cuatro de la tarde del 1 de agosto se extinguía la última esperanza de que Inglaterra permaneciese neutral si Alemania renunciaba a atacar a Francia. Al día siguiente la máquina bélica alemana se puso definitivamente en marcha, también en el Oeste.

La invasión de Bélgica por los alemanes dio a sir Edward Grey el deseado pretexto para hacer aprobar por el Gabinete y el Parlamento la entrada en la guerra de Inglaterra al lado de Francia y de Rusia. El 4 de agosto Inglaterra declaró la guerra al Reich alemán. Sólo en el curso de la semana sucesiva fue declarado el estado de guerra también entre Austria-Hun-

Fig. 11. Las potencias beligerantes en 1914.

L. Luxembrugo
B. Bélgica
M. Montenegro

IRLANDA
GRAN BRETAÑA
Londres
HOLANDA
DINAMARCA
Copenhague
SUECIA
Hamburgo
Elba
Berlín
ALEMANIA
Oder
Joenisberg
Amberes
Bruselas
Lieja
Frankfurt
Rhin
Estrasburgo
Praga
Danubio
Viena
Budapest
París
Loira
Sena
FRANCIA
Atacada por Alemania
en Agosto de 1914
Berna
SUIZA
Po
Trieste
AUSTRO-HUNGRIA
Sarajevo
RUMANIA
SERVIA
BULGARIA
Sofia 12-X-1915
Declaración de guerra a Servia
ITALIA
Roma
24-V-1915 Declaración de guerra
a Austria-Hungría
GRECIA
29-VI-1917 Declaración de guerra
a Bulgaria y Potencias Centrales
TURQUIA
Nov. de 1914 Declaración de guerra
de G. Bretaña a Turquía
Ebro
Madrid
Varsovia
Minsk
Esmolensko
Dvina
Moscú
Volga
RUSIA
Don
Kiev
Jarkov
Dnieper
Bug
Dniester
Prut

Frentes
Potencias Centrales en 1914
Aliados a las Potencias Centrales
La Entente en 1914
Aliados de la Entente
Estados neutrales a comienzos de la guerra
y después aliados de la Entente

gría y las potencias de la Entente; lo que demuestra hasta qué punto había pasado la iniciativa a Berlín en los últimos días de la crisis.

En Alemania surgió la leyenda, eficazmente preparada y dirigida por la propaganda oficial, del innoble ataque de las potencias de la Entente al pacífico Reich alemán. Las grandes masas, poseídas de entusiasmo nacionalista, no dudaron en creer dócilmente esta leyenda. En realidad había fracasado una ofensiva diplomática hábilmente calculada, que había querido utilizar la guerra local entre Austria y Servia como palanca para romper el «rígido sistema de coaliciones europeo», con el fin de evitar una vez más la gran guerra europea que parecía inevitable en un futuro próximo o lejano. Los factores que determinaron las consideraciones políticas de Alemania en la crisis de julio de 1914 no eran finalidades políticas de altas miras, sino el deseo de romper el aislamiento de las potencias centrales por medio de una «política de riesgo extremo», y de estabilizar su posición de poder tan comprometida en el continente y —lo que era algo extremadamente importante en vista a futuras adquisiciones en el campo de la política mundial— de procurarse una mayor libertad de movimiento. Si las otras potencias hubiesen estado más dispuestas a la conciliación, se podría haber evitado aún la Primera Guerra Mundial. De hecho, si enfrentamientos diplomáticos de dimensiones relativamente modestas, que en otras circunstancias podían haber sido dirimidos fácilmente sin una gran guerra, pusieron un mundo en llamas, fue porque desde hacía tiempo, en ambos lados, se esperaba la señal para el ataque.

II. LA FASE INICIAL DEL CONFLICTO: DESDE EL PRINCIPIO DE LA GUERRA HASTA DICIEMBRE DE 1914

En los primeros días de agosto de 1914, los pueblos europeos partieron a la guerra, en su inmensa mayoría con un entusiasmo casi religioso. La lucha por la patria parecía dar a la vida de repente un contenido nuevo e infinitamente más rico. Una ola de entusiasmo nacionalista se apoderó de las masas y arrolló en todos los sitios a los grupos que se habían opuesto a la guerra, o al menos los redujo en un primer momento al silencio. Esta irrupción de pasiones nacionalistas transformó radicalmente las formaciones políticas. No sólo en el Reich alemán, sino también en Francia se conjuró a partir de ahora el «espíritu del 4 de agosto», que había producido un movimiento de solidaridad nacional sin precedentes, por encima de

todos los partidos y clases sociales. El hecho más sorprendente lo constituyó en aquel momento la actitud de los socialistas, que en casi todos los países en guerra apoyaron lealmente la causa del propio gobierno, aunque habían dado clara prueba de su voluntad de paz en los últimos días de la crisis. Las resoluciones del Congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional del año 1907, según las cuales los partidos socialistas de todos los países deberían hacer frente común contra la guerra, sólo fueron, después de pobres tentativas de negociación entre la socialdemocracia alemana y francesa, un simple trozo de papel. En el momento del peligro ninguno de los partidos socialistas se atrevió a oponerse a la llamada de la propia patria.

Las clases burguesas, aún bajo la impresión de la propaganda antisocialista de los últimos decenios, se maravillaron de esta prueba de fidelidad nacional de parte de los socialistas; los gobiernos, sin embargo, no manifestaron ninguna sorpresa. En Francia se renunció a proceder al arresto de los líderes obreros socialistas y sindicalistas, previsto en caso de guerra por el así llamado Carnet B; en el Reich alemán, Bethmann Hollweg hizo lo necesario para que los correspondientes generales no adoptaran parecidas medidas. La hostilidad de la socialdemocracia hacia el zarismo, que puede seguirse hasta los padres del marxismo, Marx y Engels, facilitó a los partidos socialistas de las potencias centrales la grave decisión de unirse con los partidos burgueses en la común defensa de la patria. En Alemania se sumaba a los otros objetivos la esperanza de poder romper, a través de una prueba nacional, hombro con hombro con los otros estratos de la población, los muros del *ghetto* en los que se encontraba aún recluido el movimiento socialdemocrático. En Francia, el 31 de julio de 1914, un nacionalista exaltado asesinó a Jean Jaurès, el más ilustre líder del socialismo democrático y uno de los defensores más poderosos de la idea de la paz europea; pero este hecho no tuvo ninguna influencia sobre el curso de los acontecimientos. Junto a la tumba de Jaurès los socialistas franceses decidieron obedecer a la llamada de la propia nación. Gustave Hervé escribía el 1 de agosto en *La guerre sociale:* «Han asesinado a Jean Jaurès, nosotros no asesinaremos por ello a Francia»[108].

También los sindicatos, que aún poco antes de la guerra se habían mostrado en general extremadamente agresivos, confluyeron en todos los países en guerra, a excepción de Rusia, en el frente nacional único. Tuvo un papel importante en esta actitud la idea de que no se quería poner inútilmente en juego las organizaciones sindicales construidas con tanto esfuerzo.

Además se consideraba la huelga general un arma sin filo, porque se esperaba que después de la guerra cundiría una gran desocupación. Pero el hecho decisivo fue que la ola de entusiasmo nacionalista contagió también a la clase obrera, no dejando a los pocos adversarios decididos de la guerra ninguna posibilidad de conquistar una adhesión masiva para sus opiniones.

Gracias a la cuidadosa manipulación de los gobiernos alemán y austro-húngaro, existía tanto en el campo de las potencias centrales como en el campo de la Entente la conciencia de ser las víctimas de una agresión. Como consecuencia, en el momento de estallar la guerra se produjeron en todos los Estados beligerantes manifestaciones entusiastas de solidaridad con el gobierno de parte de la población, independientemente de la pertenencia a un determinado partido o a una determinada clase social. Los gobiernos supieron aprovechar este estado de ánimo para reforzar su autoridad; al mismo tiempo trataron de obtener un máximo de cohesión interna. En su discurso inaugural al *Reichstag* alemán, el 4 de agosto, Guillermo II declaró, volviendo sobre unas palabras ya pronunciadas dos días antes en forma ligeramente distinta desde el balcón del palacio de Berlín, delante de una masa inmensa: «No conozco ya ningún partido, sólo conozco alemanes.» Había nacido la idea de la tregua. Sólo un día más tarde proclamaba el presidente francés Raymond Poincaré la idea de la «unión sacrée», la unión sagrada de todos los partidos y clases sociales de Francia por la común defensa de la patria, encontrando un consenso entusiástico en todos los frentes políticos.

Más complicada era en cambio la situación en Inglaterra. Tanto el «Labour Party» como una fuerte ala del Partido Liberal estaban al principio decididamente en contra de una participación de Inglaterra en la guerra continental. Imponentes manifestaciones multitudinarias en Westminster, en los primeros días de agosto, intimaron al gobierno a seguir una política de paz; y tampoco la City quería saber nada de una intervención. La noticia de la violación de la neutralidad belga por Alemania llevó, sin embargo, el 3 de agosto a un cambio decisivo en la actitud del país; un día más tarde ni siquiera el «Labour Party» negaba ya su apoyo al gobierno. Con una rapidez insólita se alcanzó ahora también en Inglaterra una situación de completa unidad interna. Ya una semana antes de que estallase la guerra había exigido el primer ministro Asquith una tregua en política interna; ahora ningún partido se oponía a la llamada a la unidad. En aquel momento esto significaba

sobre todo la suspensión de la lucha violenta entre los partidos por la cuestión del Ulster. Aunque los *unionist* rechazaban apasionadamente la decisión de compromiso de Asquith, según la cual la *Home Rule* adquiría valor de ley, aplazándose su aplicación hasta después del fin de la guerra, todos los partidos apoyaron las medidas bélicas que se habían hecho ahora necesarias.

También en Austria-Hungría se llevó a cabo la movilización con mucha calma y orden. No se produjo la insurrección en ningún país eslavo de la monarquía, contrariamente a lo que se había esperado en algunos medios rusos. El ejército austrohúngaro que, a pesar de usar como lengua oficial el alemán, era el único órgano público de la monarquía danubiana constituido verdaderamente por elementos de todas las naciones, demostró ser, salvo algunas pocas excepciones, completamente seguro y leal. El gran problema era naturalmente saber cómo se comportarían los checos. El líder del partido socialnacional checo, Klofáč, que en un principio había querido organizar un movimiento de partisanos en las regiones checas de la monarquía, no tuvo ninguna influencia, y ya en septiembre de 1914 fue arrestado por alta traición. Kramář, líder de los Jóvenes Checos, se atrevió a presentar la guerra, con las palabras que había empleado el canciller alemán Bethmann Hollweg en 1913, como una lucha entre alemanes y eslavos, pero no tuvo el coraje de tomar abiertamente partido por Rusia. La gran mayoría de los partidos checos se mantuvo, sin embargo, leal. Los católicos porque tenían que desear por motivos religiosos la victoria del Estado austro-húngaro. Los socialistas porque, como sus camaradas alemanes, eran hostiles al régimen zarista y porque consideraban por el momento absurda la idea de la construcción del socialismo en un manojo de diversos Estados nacionales. El prestigio político y militar de las potencias centrales era aún demasiado grande como para considerar la idea de una separación de las regiones eslavas de la monarquía. Masaryk, el líder del partido de los realistas checos, no tuvo de momento ninguna influencia con su idea de la fundación de un Estado checoslovaco autónomo. Los polacos austríacos esperaban incluso una victoria de las potencias centrales sobre Rusia. Desde territorio austríaco Pilsudski organizó, de acuerdo con las potencias centrales, sus legiones polacas, que aspiraban a la liberación del yugo zarista de sus hermanos del otro lado de la frontera. Sólo la actitud de los eslavos meridionales dejó un poco que desear; aquí existía de hecho una minoría radical que aspiraba a la unificación de todos los yugoslavos en un Estado autónomo. En general no

hubo por el momento una oposición abierta de los pueblos eslavos contra la política de guerra de la monarquía danubiana, tanto más cuanto que ya desde marzo de 1914 no se había vuelto a convocar el Consejo Imperial y tampoco se pensaba ahora en su convocatoria.

Incluso en Rusia la guerra desencadenó una ola de nacionalismo que, lejos de limitarse a las clases políticamente privilegiadas de la alta burguesía, se apoderó también de las grandes masas de trabajadores y campesinos. Ya el 26 de julio de 1914 decidió la Duma, con una grandísima mayoría, que había que «estar dispuestos a la llamada del soberano para la defensa de la patria, de su honor y de sus posesiones». Sólo los pocos socialistas de ambas direcciones, así como una fracción del centro burgués, los llamados *trudoviks*, se mantuvieron al margen. Pero tampoco entre ellos reinaba unanimidad de criterio sobre la guerra; algunos eran partidarios de una guerra puramente defensiva. En cuanto a los mencheviques y bolcheviques, no tenían ninguna posibilidad real de realizar un movimiento de masas contra la guerra, habida cuenta de que la policía zarista procedió bien pronto a detener a todas las personas consideradas políticamente sospechosas y a enviarlas a Siberia. Una huelga general en Bakú se agotó por sí sola sin pena ni gloria, a causa del delirio nacionalista del principio de la guerra. En las grandes ciudades tuvieron lugar impresionantes manifestaciones de lealtad al zar. Una vez más el lema «una vida para el zar» ejerció su mágica atracción sobre las masas del pueblo ruso.

En un primer momento la guerra trajo en todas partes una estabilización de la situación interna. Sin dudarlo, los Parlamentos aprobaron los medios financieros necesarios para la contienda, retirándose luego a un segundo plano y dejando libre el campo al poder ejecutivo. En Francia la iniciativa pasó en gran medida al jefe del Estado Mayor, Joffre, especialmente teniendo en cuenta que la difícil situación en la que se hallaba el país a consecuencia de la ofensiva alemana le proporcionó rápidamente la ocasión de concentrar en sus manos las prerrogativas administrativas de una considerable parte de Francia. Los políticos franceses no se dejaron, sin embargo, desautorizar por completo. A finales de agosto la crítica situación militar indujo al primer ministro Viviani a alargar la base de su gobierno hacia la izquierda. Théophile Delcassé, el viejo adversario de Alemania, asumió el cargo de ministro del Exterior, y con Jules Guesde y Marcel Sembat entraron ahora en el gabinete, como evidente fortalecimiento de la *union sacrée*, también dos socialistas.

En Inglaterra pudo mantenerse por el momento el gobierno del partido liberal de Asquith, ya que ni siquiera los nacionalistas irlandeses le negaban entonces su apoyo. De todas formas, Asquith tuvo también en cuenta el estado de ánimo popular nombrando ministro de la Guerra al vencedor de la campaña egipcia de 1898, lord Kitchener, que simpatizaba con los *unionists*.

En Alemania, la renuncia de los partidos políticos en favor del poder ejecutivo, y particularmente de los militares, tuvo un carácter aún más acentuado. La ley sobre el estado de sitio transfirió en gran medida el poder ejecutivo a los vicecomandantes generales. Ellos, y no la dirección política, decidían sobre la censura, o si había que arrestar a los hombres de la extrema izquierda, o si era conveniente llamarles a filas —lo que políticamente tenía casi el mismo efecto—; en cualquier momento ellos podían intervenir en los procedimientos administrativos de las autoridades civiles. En aquellas circunstancias la actividad de los órganos y de los partidos políticos estaba limitada *a priori,* aunque no estuviesen establecidas en particular con precisión las competencias. Además, el 4 de agosto, el *Reichstag* aprobó por unanimidad los créditos de guerra y renunció voluntariamente a ejercer en vastos sectores el poder legislativo. El gobierno había querido ir aún más lejos «cerrando» sencillamente el *Reichstag;* pero, finalmente, sólo fue aplazada su convocatoria hasta el 2 de diciembre. Los parlamentarios cedieron dócilmente el campo al poder ejecutivo hasta que las armas hubiesen decidido sobre el ulterior desarrollo de la situación. El gobierno trató, sin embargo, de paralizar artificialmente toda la política interna durante la guerra. La censura prohibió no sólo cualquier crítica abierta o velada al gobierno, sino también fuertes ataques a otros partidos, que pudiesen comprometer la tregua interna.

En Austria-Hungría no se plantearon de momento todos estos problemas, porque la vida del Estado estaba ya ampliamente paralizada desde marzo de 1914. Las riendas del gobierno se encontraban aquí en manos del conde Stürgkh, que contaba con la colaboración de la burocracia centralista y que gobernaba sobre la base del artículo 14, el cual contenía disposiciones para casos de emergencia, sin mantener ningún contacto con las grandes masas del pueblo y sin tener ninguna comprensión por las necesidades y los estados de ánimo de éste. Stürgkh se consideraba a sí mismo como el ejecutor de las órdenes de las autoridades militares, incluso cuando éstas, debida a su gran desconfianza hacia la lealtad de la población eslava de los países periféricos de la monarquía, se dejaban arrastrar

a numerosos excesos absolutamente injustificables y a arbitrarias medidas punitivas.

En Rusia, en cambio, la burocracia zarista era ya de por sí omnipotente; no se requerían especiales medidas para garantizar la fidelidad incondicional de la exigua clase política superior que, en su pasión nacionalista por la guerra, superaba al propio gobierno. De parte de las masas no había que temer por el momento nada importante.

En cierto sentido era natural que los políticos cediesen en un principio el primer puesto a los militares, ya que la futura evolución política dependía en primer lugar del resultado de las operaciones militares, preparadas hacía tanto tiempo en uno y otro lado; así en los meses sucesivos, la atención de los pueblos europeos se dirigió casi exclusivamente a cuanto sucedía en los campos de batalla. En un primer momento la iniciativa perteneció a las potencias centrales. A pesar de que los contingentes del Reich alemán fueran en términos numéricos grandes, sin embargo eran muy inferiores a los del enemigo. Frente a un ejército de 3,8 millones de hombres se hallaban 5,7 millones de parte de la Entente, de los que sin embargo 400.000 no eran adecuados para tomar parte en las operaciones de campaña. De todas formas, reinaba un gran optimismo en el lado alemán. Se contaba firmemente con que Alemania, gracias a la extrema eficiencia de su organización militar, pudiese atacar más de prisa que sus enemigos y determinar el desenlace antes de que la masa principal de las fuerzas enemigas pudiese llegar al campo de batalla. Esta confianza se basaba sobre todo en el plan militar alemán, según el cual se esperaba infringir un golpe decisivo a Francia en seis semanas, aún antes de que la maquinaria bélica de Rusia pudiese alcanzar su pleno ritmo. El plan alemán para el frente occidental, que era prácticamente el Plan Schliffen, ligeramente modificado por Moltke *junior,* preveía una imponente ofensiva envolvente de los ejércitos alemanes, con su centro en el ala derecha, dirigida contra el norte de Francia, pasando por Bélgica y Luxemburgo. Después de un rápido avance hasta los ríos Somme y Oise, se pretendía converger, hacia el Sudeste, en un gran arco que habría incluido, al Oeste, París, rechazando a las unidades francesas al triángulo fortificado de Verdun, Metz y Belfort, y batirlas definitivamente en una nueva y aún más desastrosa Sedán. Ante la importancia de lo que estaba en juego, los militares alemanes consideraban la violación de la neutralidad de Bélgica y Luxemburgo como un mal necesario. Cualquier ofensiva limitada, que hubiese respetado la neutralidad de Bélgica y de Luxemburgo, se habría

quedado atascada en el terreno accidentado y difícilmente practicable de las Ardenas, y no habría ofrecido nunca la posibilidad de una rápida y definitiva batalla.

Después de la ocupación de Luxemburgo, efectuada con una especie de golpe de mano el 2 de agosto, dio comienzo el 3 de agosto el proyectado avance hacia el Oeste, habiendo dejado en la retaguardia pocas y exiguas unidades para garantizar la seguridad. Los belgas se negaron a aceptar, a cambio de una benévola neutralidad, la garantía de la integridad territorial después del fin de las operaciones militares. Su valiente resistencia no les sirvió sin embargo de mucho; ya el 16 de agosto caída Lieja, los belgas tampoco pudieron frenar el avance del I Ejército de Kluck. Francia no había esperado una operación envolvente de estas dimensiones; a pesar de lo cual se seguía confiando en el propio plan de guerra, que preveía una ofensiva en Lorena que, de haber triunfado, habría aislado a las fuerzas alemanas que operaban en Bélgica de sus líneas de retaguardia. En Lorena tuvieron lugar duras batallas, en el curso de las cuales los franceses consiguieron hacer notables conquistas territoriales, aunque no llegaron a romper el frente enemigo. Así, la suerte era aún incierta en los días sucesivos al 20 de agosto. Las batallas en el frente occidental se desenvolvieron en general de manera extremadamente satisfactoria para Alemania. El ejército alemán que operaba en Bélgica perseguía a los ejércitos franceses y al cuerpo expedicionario inglés. Parecía vislumbrarse la realización del gran plan de guerra.

Del Este llegaban, sin embargo, noticias inquietantes. La ofensiva austro-húngara contra la pequeña Servia había naufragado en el Drina. Pero, lo que era aún peor: un ejército ruso había penetrado en la Prusia oriental, y el comandante del VIII Ejército alemán, von Prittwitz, no había visto otra salida que la retirada detrás del Vístula. El *choc* en el cuartel general alemán fue grande; los rusos habían iniciado su ofensiva mucho antes, y mucho más enérgicamente de lo que se había esperado. El general Ludendorff, nombrado inmediatamente nuevo comandante de las fuerzas del frente oriental, y que formalmente seguía bajo el mando del general von Hindenburg, logró, sin embargo, infligir una grave derrota al ejército ruso de Narev en la batalla de Tannenberg, entre el 26 y el 30 de agosto de 1914. La apisonadora rusa quedaba detenida por el momento; el mito de Hindenburg había nacido.

Todo dependía sin embargo del ulterior desarrollo de los acontecimientos en el frente occidental. Aquí las tropas alemanas seguían avanzando rápidamente; el 27 de agosto el ala

derecha del ejército alemán se hallaba ya en el Oise. En todos los frentes se retiraban los franceses e ingleses, pero todavía no se había librado ninguna batalla decisiva. Ahora se ponía de manifiesto que el ejército alemán era demasiado débil para efectuar una operación envolvente, que rodease París al Oeste, como lo había previsto el Plan Schlieffen. Tampoco los dos cuerpos, que se habían tenido que enviar a Prusia oriental, hubiesen podido cambiar sustancialmente la situación. Sin haberse puesto previamente de acuerdo, Kluck, comandante del primer ejército, y Moltke, decidieron por ello el 27 de agosto un movimiento del ala derecha alemana hacia el Sudeste apuntando directamente hacia París, en lugar de esperar a que se la hubiese podido rodear en un amplio movimiento envolvente. Una decisión que significó el abandono del primitivo Plan Schlieffen. El objetivo estratégico era ahora el de perseguir y destruir el ejército en retirada, y no ya el de una gran batalla de aniquilamiento de dimensiones gigantescas. El propio Moltke esperaba ahora poder obtener la victoria definitiva por medio de una ofensiva simultánea en todo el frente, pero sobre todo partiendo de las posiciones alemanas en Lorena.

Prescindiendo de la modificación del primitivo plan alemán de guerra, al final de agosto de 1914 la situación de los ejércitos franceses era extremadamente crítica. La vanguardia del ala derecha alemana se encontraba a cuarenta kilómetros de París; el 2 de septiembre el gobierno francés consideró prudente abandonar la capital. Pero los franceses no permanecían pasivos; rápidamente se formó un nuevo ejército que trató de atacar el flanco del ala derecha alemana desde el Noroeste. El 4 de septiembre, Joffre, en una memorable orden del día, dio la señal de contraatacar en todo el frente. En los días sucesivos las cosas estuvieron pendientes de un hilo. Los ejércitos alemanes aún avanzaban victoriosamente; sin embargo, el ala derecha alemana quedó en una situación peligrosa. El I Ejército, a las órdenes de Kluck consiguió defenderse con éxito de los ataques de las fuerzas francesas, que se hallaban en sus flancos; sin embargo, en el ala derecha alemana, entre el I y II Ejército, se abrió una brecha de 40 kilómetros, por la que el cuerpo expedicionario inglés comenzó a penetrar con gran cautela. En esta crítica situación, el 4 de septiembre, Moltke, informado de manera completamente insuficiente sobre la situación real en el frente, dio orden al II Ejército de interrumpir el avance y de replegarse hacia el Este, y posteriormente, de retirarse. Esto significaba el cambio decisivo. La gran ofensiva del ejército alemán había sido rechazada: ya no se podía pensar en una rápida conquista de

París. Moltke, en el extremo de sus propias fuerzas psíquicas, preveía lleno de pesimismo el desmoronamiento de todo el ala derecha alemana; hasta tal punto que el 8 de septiembre aconsejó una retirada de todo el frente detrás del Aisne. La ejecución definitiva de esta orden se subordinó, sin embargo, a una inspección *in loco* a cargo del teniente coronel Hentsch, enviado con esta misión por el Gran Cuartel General. Aquél, sustancialmente bajo la influencia del estado de ánimo que reinaba en el ejército alemán, decidió la retirada. El propio Moltke perdió los nervios: «Las cosas van mal (...). El comienzo tan esperanzador de la guerra, se volverá en lo contrario (...). Nos ahogaremos en la lucha contra el Este y el Oeste»[109].

El fracaso del plan militar alemán, en el que se había confiado tanto, fue de importancia decisiva para el curso de la guerra. Que los grupos dirigentes del Reich eran conscientes de aquello, lo demuestra el hecho de que estos acontecimientos fuesen ocultados a la opinión pública alemana. Pero todavía no parecía todo perdido. El general von Falkenhayn, que después del desastre del Marne había sustituido a Moltke, hizo todo lo posible por cambiar la situación en el frente occidental, sobre todo teniendo en cuenta que Hindenburg y Ludendorff habían conseguido derrotar a los rusos en la batalla de los lagos Masurianos, alejándolos de las fronteras alemanas. Pero la ofensiva austríaca en Galitzia terminó en una catástrofe; los rusos consiguieron en el curso de un contraataque destruir completamente los ejércitos austríacos. El avance de los rusos no pudo ser detenido hasta los pasos de los Cárpatos.

En Occidente se inició una carrera hacia el mar, que gracias a la ventaja de la línea interna, fue ganada por los ingleses y los franceses. En octubre todo el frente occidental, desde los Vosgos hasta el mar del Norte, se convirtió en una guerra de posiciones. También las contraofensivas de Joffre rebotaban con grandes pérdidas en los frentes alemanes. En ambas partes se llegaba a la sorprendente conclusión de que en una guerra moderna la forma de estrategia más fuerte era la defensiva. Por primera vez surgía entre los militares alemanes la controversia de si no era mejor trasladar el centro de las operaciones al Este, donde aún era posible conducir una guerra abierta a través de amplios espacios. Falkenhayn se decidió por el Oeste, en la convicción de que contra Rusia no podía obtenerse nunca un triunfo decisivo para el resultado de la guerra. Con la ofensiva alemana de Ypres, emprendió Falkenhayn un último intento por alcanzar la victoria; con ataques repetidos, extremadamente sangrientos, sacrificó toda la reserva alemana, formada por

tropas muy jóvenes y en general insuficientemente adiestradas, en el intento de poner de nuevo el frente en movimiento. El 18 de noviembre quedaron los ataques alemanes definitivamente atascados en el barro; la empresa tenía que ser interrumpida.

A primera vista, la situación militar de las potencias centrales, a las que mientras tanto se había sumado Turquía, al final de 1914, era a pesar de todo óptima. Se había penetrado profundamente en territorio enemigo; toda Bélgica y el norte de Francia estaban en manos de los alemanes. Pero esta impresión engañaba. El primer ataque no había producido el resultado esperado y Austria-Hungría se encontraba incluso en una situación militar preocupante. Los militares no habían cumplido las promesas que habían hecho con tanta seguridad al principio de la guerra, y de esta manera volvía a pasar de nuevo la iniciativa a los políticos.

La diplomacia tampoco había permanecido, por otro lado, inactiva durante los primeros meses de guerra, cuando los ojos de todo el mundo se dirigían hacia la dramática situación de Francia. Inmediatamente después del comienzo de la guerra había comenzado un forcejeo encarnizado por ganarse a los neutrales. Las potencias centrales no se sorprendieron demasiado cuando, el 3 de agosto, tuvieron noticia de la declaración de neutralidad italiana; declaración que se remitía al texto del tratado de la Triple Alianza, el cual preveía el *casus foederis* sólo en el caso de una guerra defensiva no provocada. El gobierno alemán pudo, en cambio, conseguir un triunfo diplomático, en realidad inesperado, ante Turquía. Aunque inmediatamente antes de que estallase la guerra se había considerado inoportuna una alianza con Turquía, porque este Estado corrompido y desorganizado podía constituir probablemente más un peso que una ayuda, se concluyó el 2 de agosto de 1914 un tratado de alianza. No obstante, Turquía no intervino inmediatamente, aunque, con gran irritación de los ingleses, concedió asilo a los acorazados alemanes «Groeben» y «Breslau». Las potencias de la Entente, que confiaban en poder conservar la neutralidad de Turquía, llegaron demasiado tarde con su oferta de garantizar la integridad turca, es decir, de posponer de momento todos los planes de partición —decisión a la que San Petersburgo se había adherido sólo después de muchas dudas. El 31 de octubre de 1914 los acorazados «Groeben» y «Breslau», que combatían formalmente bajo bandera turca, provocaron con el bombardeo de Odessa la declaración de guerra de las potencias de la Entente a Turquía.

En los Balcanes, la situación era más complicada. Las fuertes

tensiones entre los Estados balcánicos plantearon difíciles problemas a las diplomacias de ambos grupos de potencias, en su esfuerzo de acapararlas. Ya en agosto el pequeño Montenegro se ponía al lado de Servia. En cambio, las tentativas de los aliados por inducir a Bulgaria, a través de un complicado trueque, a entrar en guerra contra las potencias centrales, fueron de momento infructuosas. Ni el primer ministro servio, Pašić, estaba particularmente dispuesto a restituir a Bulgaria los terri-

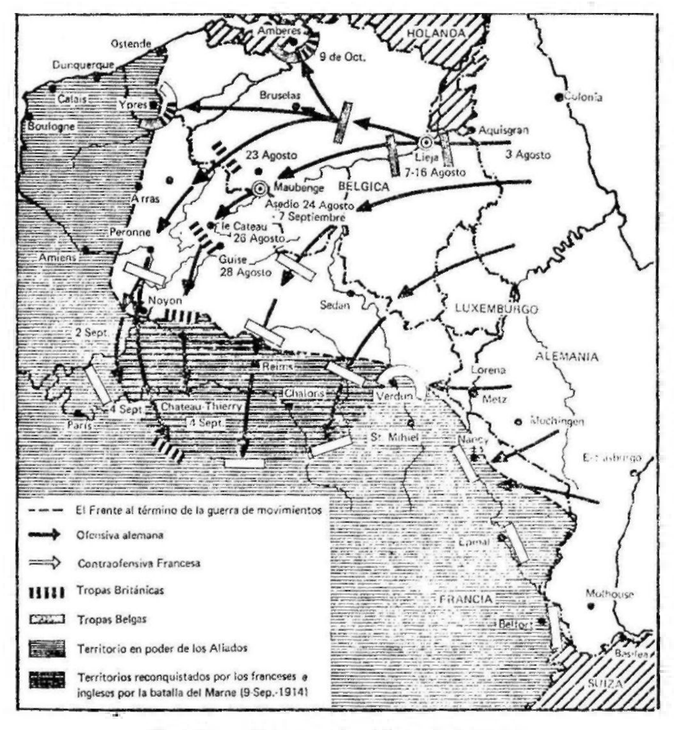


Fig. 12. El frente occidental de 1914.

torios macedonios adquiridos durante la segunda guerra balcánica a cambio de la adquisición de Bosnia y la Herzegovina, así como de la parte septentrional de Albania; ni en Sofía se era propenso a aceptar este funesto regalo de las manos de los aliados. El 6 de septiembre de 1914, Bulgaria concluyó una

alianza defensiva con Austria-Hungría, aunque de momento se cuidase muy bien de atacar a Servia.

Rumania constituía, sin embargo, el mayor factor de inseguridad en los Balcanes. Las esperanzas que se ponían en Berlín en el rey Carol I, emparentado con la Casa Hohenzollern, se revelaron infundadas; Rumania no mostraba ninguna predisposición a respetar el tratado de alianza de 1883 ni a entrar en la guerra al lado de las potencias centrales. Pero también las potencias de la Entente hicieron las cuentas sin contar con ella. El primer ministro rumano, Bratianu, se inclinaba, de acuerdo con la opinión pública, más por las potencias de la Entente que por las potencias centrales, y no estaba en absoluto dispuesto a complicar al propio país y a la Corona en un conflicto europeo cuyo final era todavía incierto, y menos aún en un momento en el que las potencias centrales eran los vencedores militares en todas las líneas, a cambio de la compensación que les ofrecía Rusia: la concesión, al final de la guerra, de Transilvania y de las partes austríacas de Bukovina. Finalmente, Bratianu, que desde el punto de vista táctico operaba con suma maestría, consiguió hacerse garantizar por la Entente todos los *desiderata* de Rumania, sin comprometerse a entrar en la guerra en un determinado momento. Ambas partes eran entretenidas de esta manera hasta que se supiese claramente cuál de los dos grupos de potencias iba a triunfar finalmente. En Berlín aumentaban, sin embargo, las preocupaciones por la futura actitud de Rumania, especialmente después de que se supo que ya el 23 de septiembre de 1914 Bratianu había acordado con Italia una acción común, en el caso de una entrada en la guerra al lado de la Entente. En adelante, ambos bloques emplearon ingentes sumas de dinero para influir en su favor a la opinión pública rumana, sin obtener, sin embargo, cambios esenciales en la actitud del país. Para las potencias centrales la cuestión rumana era de gran importancia, no sólo por el petróleo y el trigo rumanos, sino sobre todo por las vías de comunicación naval, a través del Danubio, a Constantinopla.

En Grecia la situación era parecida a la rumana. Mientras el rey Constantino I, casado con una hermana de Guillermo II, simpatizaba con las potencias centrales, el primer ministro Venizelos defendía la causa de la Entente. Pero debido a los profundos contrastes siempre existentes entre Grecia y Turquía, los dos bloques acordaron mantener de momento la neutralidad de su país. Sólo después de la entrada en la guerra de Turquía, el 1 de noviembre de 1914, la Entente sometió a Grecia a una fuerte presión para inducirla a ponerse a su lado, contra las potencias centrales; pero a pesar de emplear repre-

salias cada vez mayores, no consiguió por el momento alcanzar este objetivo.

En cambio, las potencias de la Entente habían centrado desde el principio de la guerra sus esfuerzos diplomáticos en aquella potencia de la que más se podía esperar que se volviera activamente contra las potencias centrales: Italia. No obstante su pertenencia a la Triple Alianza, ésta había mantenido desde hacía tiempo estrechas relaciones con las potencias occidentales. En Italia existía la determinación de aprovechar la posición clave que se ocupaba entre los grupos de potencias para obtener ganancias territoriales de Austria-Hungría o de los países balcánicos en el Adriático, ya fuese a través de una participación activa en la guerra, ya gracias a una benévola neutralidad frente a uno de los grupos. El conservador Salandra, entonces primer ministro, esperaba poder reforzar, por medio de esta política expansionista conducida bajo el signo del nacionalismo, las fuerzas conservadoras en el país y aproximar más la izquierda a la monarquía. Sin embargo, ni Salandra ni, sobre todo, el ministro del Exterior, San Giuliano sabían aún con seguridad de qué lado había que ponerse. San Giuliano esperaba, al principio, una rápida victoria de las potencias centrales, y parece que quería dejar el camino abierto para intervenir en el último momento a su lado y obtener, de esta forma, una parte del botín. Pero a pesar de todo no se dudó en emprender ya desde el 4 de agosto de 1914 intensivamente negociaciones con Rusia e Inglaterra sobre adquisiciones territoriales, en el caso de que Italia entrase en la guerra al lado de la Entente. Hay que decir que los italianos, desde el principio, fueron todo menos modestos en sus exigencias, y los aliados, a su vez, más bien generosos. Junto al Trentino, Trieste y la costa dálmata, figuraba ya entonces Tirol del sur en la lista de los deseos italianos. Pero finalmente las negociaciones fracasaron por el veto de Rusia, que no estaba dispuesta a aceptar las peticiones de los italianos en la península balcánica, tanto más cuanto que Italia se negaba a fijar ya entonces una fecha precisa para su intervención en la guerra. Por el momento la opinión pública italiana era aún en gran parte contraria a una participación de Italia en la guerra y tampoco los estrechos lazos económicos de Italia con Alemania y Austria-Hungría facilitaban en absoluto el llegar a un acuerdo sobre este aspecto. Sólo después del desafortunado final para Alemania de la batalla del Marne, empezó a inclinarse la balanza definitivamente en favor de una intervención al lado de los aliados. La súbita muerte de San Giuliano a fines de octubre de 1914 abrió el camino a una decidida política de intervención. El

gobierno Salandra-Sonnino, constituido el 10 de noviembre, se adscribió abiertamente al lema del «sacro egoísmo», y las negociaciones que inició Sonnino en diciembre de 1914 con el gobierno austro-húngaro sobre eventuales compensaciones fueron prácticamente el primer paso en la vía de la intervención. Pero como Italia no estaba aún bastante preparada, se optó, por el momento, continuar las negociaciones con ambas partes.

Al principio de la guerra las otras potencias europeas menores —en primer lugar Suiza, Holanda y los Estados nórdicos— se declararon neutrales. En Suecia se había dudado en un principio si era conveniente atacar, junto con Alemania, a Rusia, pero finalmente se optó por una política de neutralidad benévola hacia las potencias centrales. Sólo Portugal decidió durante la guerra intervenir a favor de la Entente, lo que no causó demasiado disgusto en Berlín, ya que hacía tiempo que se habían puesto los ojos sobre las colonias portuguesas.

En las negociaciones con los países neutrales, especialmente con Italia y los Estados balcánicos, las potencias de la Entente no habían dudado en disponer con generosidad de los territorios de los imperios centrales. Esta disposición a prometer a los distintos Estados neutrales regiones de uno u otro país enemigo, como estímulo para entrar en la guerra, podía hacer prever las divergencias que surgirían en el futuro en la división del botín. En 1914 ninguna de las grandes potencias europeas tenía deseos concretos de adquisiciones territoriales como para haber querido, o siquiera deseado, la guerra. Es cierto que en Austria-Hungría —aunque se había declarado explícitamente, al principio de la crisis de julio, que no se pensaba en una anexión de territorios servios— se jugaba con la idea de la anexión directa o indirecta de Servia así como de Albania y otros territorios balcánicos; pero el principal objetivo era el de contener el movimiento nacional-revolucionario sudeslavo, que, según se creía, encontraba en Belgrado su mayor apoyo. Tampoco hay razones para poner en duda la declaración hecha más tarde por Bethmann Hollweg, según la cual al estallar la guerra el Reich alemán no perseguía ningún objetivo que sólo se hubiese podido alcanzar a través de una guerra. Tal sospecha parece justificada, en cambio, por lo que respecta a Rusia puesto que la aspiración al dominio de los Estrechos había sido indudablemente uno de los motivos esenciales de la política rusa durante los últimos meses que habían precedido al comienzo de la guerra. Pero, en realidad, San Petersburgo no dio a este objetivo una importancia primaria, hasta el punto de que se prometió al imperio otomano la integridad territorial. La guerra mundial no fue en absoluto el resultado directo de la voluntad

de Alemania de incorporarse a la política mundial, o de la lucha competitiva entre los diversos imperialismos europeos; la guerra fue desencadenada más bien por un conflicto que hacía tiempo que estaba latente en el interior del sistema tradicional de las potencias europeas, aunque bien es verdad que los contrastes en el campo de la política mundial contribuyeron en el fondo a agudizar la situación. Pero, una vez desencadenada la guerra, las energías nacionalistas e imperialistas de los pueblos se abrieron paso en una explosión incontrolada. Así, desde el principio, la guerra desembocó en una lucha sin cuartel, cuyo único fin legítimo era la destrucción del enemigo. La propuesta de mediación presentada al final de agosto de 1914 a los gobiernos por orden de Wilson, a través del coronel americano House, fue rechazada por todos los beligerantes aproximadamente con el mismo argumento: que era demasiado pronto para tentativas de este género, y que de momento tenían que decidir las armas. El 4 de septiembre de 1914, Inglaterra, Francia y Rusia se comprometían a no concluir ninguna paz por separado en el curso de la guerra, y a no hacer ninguna declaración sobre las condiciones de paz sin previo acuerdo entre las partes. Este pacto estaba destinado a garantizar la cohesión de las potencias de la Entente y a crear los presupuestos para la consecución de los objetivos militares de los aliados. En Francia se contaba desde el principio con la posibilidad de reconquistar la Alsacia-Lorena; pero en ello se veía más una vuelta al *status quo ante*, que no un objetivo de guerra. La idea de garantizar la seguridad francesa ante una eventual nueva amenaza alemana dominó desde el principio todas las reflexiones de los políticos, los cuales veían como única garantía válida la total destrucción del poder militar alemán y en el desmembramiento del Reich. También en los debates ingleses ocupaba el primer plano, aparte de la completa restitución de Bélgica, la liquidación del militarismo alemán, bajo el eficaz lema: *the war to end war*. De hecho, ya al principio de agosto de 1914 se había decidido la anexión de las colonias alemanas. Por lo demás, sólo se estaba de momento de acuerdo en un punto, en la voluntad de continuar la guerra hasta que se pudiese crear en Europa un sistema de paz duradero. Los rusos, en cambio, eran mucho menos reservados al expresar sus ideas sobre el futuro orden de Europa. Ya al principio de septiembre de 1914 declaró Sasonov en sus *Doce puntos* «la destrucción de la supremacía alemana y el principio de las nacionalidades» como principios fundamentales de la política rusa de guerra. Polonia, a la que, después de estallar la guerra, se había prometido una autonomía limitada, había de obtener Posen, Pomerania y Sile-

sia, así como Galitzia occidental; Galitzia oriental, hasta el Niemen, había de pasar directamente a Rusia. Francia tenía que recibir ante todo Alsacia-Lorena, Bélgica la zona de Aquisgrán, Dinamarca el Schleswig-Holstein. Hannover se convertiría de nuevo en un reino independiente. Además se contaba con la desmembración de Austria-Hungría en tres Estados independientes: Austria, Bohemia y Hungría. El 17 de septiembre de 1914 el gran duque Nikolai, comandante supremo de las fuerzas armadas rusas, prometió en una solemne proclama a los pueblos de Austria-Hungría la liberación del yugo del Estado imperial. Y al final de noviembre de 1914, Nicolás II ampliaba considerablemente esta idea en una entrevista con el embajador francés Paléologue. No sólo pedía que los turcos fuesen expulsados totalmente del continente europeo, así como la internacionalización de Constantinopla, la frontera natural de los Cárpatos y un Estado amortiguador independiente, Hannover, sino que anticipaba su consenso a todos los objetivos de guerra que los ingleses y franceses hubiesen considerado necesarios, «tal vez incluso la anexión de Renania».

Estos eran, en efecto, objetivos de guerra grandiosos, aunque haya que reconocer que no habían adquirido aún la forma de planes concretos, por lo que no se les podía dar todavía excesivo valor. Sin una completa victoria sobre los imperios centrales, estos proyectos no se habrían podido llevar nunca a cabo. En aquel momento, sin embargo, las potencias de la Entente estaban aún bien lejos de una victoria, mientras que los imperios centrales contaban, por lo menos antes de la batalla del Marne, con una rápida solución del conflicto, que les hubiese ofrecido la posibilidad de una profunda transformación de la situación política de Europa, de acuerdo con sus aspiraciones.

En aquellas circunstancias surgieron en Alemania objetivos de guerra aún más grandiosos. Sin embargo, es interesante tener en cuenta que los objetivos del imperialismo alemán, bajo la presión del estado de sitio de 1914, sufrieron cambios radicales. Los objetivos en ultramar, y especialmente el proyecto de una Africa central alemana, pasaron ahora completamente a un segundo plano, aunque no cayeron en absoluto en olvido. Se trató, en cambio, febrilmente de encontrar el modo de hacer frente a las amenazas que se cernían sobre la posición central del Reich alemán en Europa. Las ambiciones políticas de Alemania abandonaron la idea de la supremacía mundial, para limitarse a la idea menos grandiosa de un dominio de Alemania sobre el continente europeo. A través de anexiones directas e indirectas, de dimensiones más o menos grandes, en el Este y

el Oeste, se quería asegurar de una vez para siempre la posición hegemónica del Reich alemán sobre el continente europeo, para poder luego, partiendo de esta base, participar con mejores perspectivas en la lucha por el dominio del mundo.

Bethmann Hollweg evitó cuidadosamente comprometerse públicamente en las cuestiones relativas a los objetivos de guerra, con lo que se ganó pronto la fama de querer una paz prematura y «floja» sin anexiones dignas de mención. De hecho, las ideas del canciller divergían notablemente de los numerosos proyectos concernientes a objetivos de guerra presentados en varias circunstancias por las más diversas personalidades y organizaciones; pero tampoco Bethmann Hollweg quería renunciar a los que consideraba alcanzables. Ya desde el final de agosto de 1914 las autoridades competentes se ocupaban de proyectos de guerra para todas las eventualidades que se pudiesen presentar. Estas consultas internas alcanzaron su primer punto culminante ya al principio de septiembre de 1914, con la *Vorläufige Aufzeichnung über die Richtlinien unserer Politik bei Friedensschlub* (Anotación provisional sobre las directrices de nuestra política en el momento de la conclusión de la paz), el llamado Programa de Septiembre. También este programa presentaba la «estabilización del Reich alemán hacia Oriente y Occidente por tiempo indefinido» como el verdadero objetivo de la guerra, pero se proponía alcanzarlo no sólo por medio de anexiones —además de la región minera de Longwy-Briey y la vertiente occidental de los Vosgos, Belfort comprendido, se pensaba en la costa flamenca de Dunkerque hasta Boulogne—, sino sobre todo a través de formas de dominio indirecto. Sobre todo Bélgica debía de quedar reducida a «Estado vasallo» del Reich. También se proyectaba la creación de una federación económica centro-europea bajo la hegemonía de Alemania, la cual habría de comprender Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria-Hungría, Polonia y eventualmente Italia, Suecia y Noruega, con el fin de «estabilizar el predominio económico de Alemania sobre Europa central»[110]. Este audaz proyecto, que en el fondo no concordaba con los objetivos precedentes, había sido propuesto por Bethmann Hollweg como alternativa a anexiones directas demasiado amplias, que hubiesen comprometido el carácter de Estado Nacional del Reich alemán. De todas formas, este proyecto reflejaba también la situación de asedio en que se encontraba el Reich que, cortado por la flota inglesa de sus mercados de ultramar, tenía que considerar la posibilidad de compensaciones económicas en el continente europeo.

El Programa de Septiembre partía de la premisa de que el

desmoronamiento de Francia era ya inminente y que la guerra podía proseguirse aún durante largo tiempo por los ingleses. En parte, esto era ya un verdadero plan de batalla contra Inglaterra. Pero el fracaso de la batalla del Marne puso un rápido fin a estos fogosos planes, conduciendo a los círculos responsables a consideraciones más realistas. Tampoco ahora se estaba dispuesto a limitar radicalmente los objetivos de guerra alemanes. Se seguía decidido a conservar el control político, militar y económico de Bélgica. En este contexto se hallaban también los esfuerzos por apoyar activamente al movimiento flamenco, con la esperanza de que la parte flamenca de la población buscase en el futuro el apoyo de Alemania. En el Este se planeaba la formación de una serie de Estados-amortiguadores más o menos dependientes de las potencias centrales, con el fin de tener a Rusia lejos de las fronteras de Alemania. Además, se tenía la esperanza de golpear con eficacia al imperio británico, provocando la revolución de los pueblos islámicos.

Después del fracaso, a fines de otoño, de la ofensiva alemana de Flandes, estos proyectos terminaron por carecer de todo fundamento; pero no se quería admitir esto, y mucho menos se quería decir francamente esta verdad a la opinión pública alemana. El 18 de noviembre de 1914 el Estado Mayor alemán llegó a la conclusión de que «había que excluir una completa derrota de nuestros enemigos (...) en una batalla decisiva»[111]. Una paz favorable para las potencias centrales sólo podía ser conseguida ya rompiendo la Entente. Como consecuencia, desde entonces los esfuerzos de la política alemana se dirigieron especialmente a inducir a una de las potencias enemigas a firmar una paz por separado.

III. GUERRA DE POSICIONES Y ESTANCAMIENTO POLITICO: DESARROLLO DE LA GUERRA Y POLITICA EXTERIOR DESDE EL PRINCIPIO DEL AÑO 1915 HASTA EL FINAL DEL OTOÑO DE 1916

La crisis de la estrategia alemana en noviembre de 1914, después del fracaso definitivo de todos los intentos de romper el frente en el Oeste, condujo a una profunda divergencia entre la dirección política y la dirección militar. Mientras Falkenhayn esparaba ingenuamente que la diplomacia le dejaría la espalda libre concluyendo una paz por separado con Rusia, Bethmann Hollweg exigía ahora un desplazamiento de las operaciones al Este, apoyado en este punto por Hindenburg y Ludendorff, que consideraban que una acción ofensiva en Polonia sería la solución ideal para los problemas estratégicos de las potencias

centrales. En Polonia las líneas del frente no se habían consolidado aún en la confusión de trincheras llenas de barro, de alambradas y de campos de minas; allí una guerra de movimientos parecía aún factible. Falkenhayn no creía, sin embargo, que fuese posible asestar a los ejércitos rusos en los inmensos espacios de la estepa un golpe que pudiese decidir la guerra; por el contrario, todo nuevo alcance en el Este europeo habría agotado las fuerzas de las potencias centrales, ya de por sí al límite de la resistencia. Aunque Falkenhayn quería volver lo más pronto posible al ataque en el frente occidental, urgentes motivos políticos le obligaron a ceder por el momento a las presiones de Bethmann Hollweg. Si se quería llegar alguna vez a una paz por separado con Rusia, la primera condición era quitarle toda esperanza de que Italia y Rumania se pasasen al campo de la Entente. Sólo una eficaz y rápida acción ofensiva en el frente oriental o sudoriental, que liberase a Austria-Hungría de su comprometida situación, parecía indicada para contener la creciente marea del intervencionismo en Italia y para disuadir a los rumanos de entrar en la guerra.

Al mismo tiempo, el gobierno alemán empleó todos los medios diplomáticos disponibles para sortear el peligro italiano. Mientras el conde Bülow era enviado en misión especial a Roma con el fin de promover la causa alemana, se exigía de Viena que asegurase la neutralidad de Italia, aunque esta maniobra requiriese la cesión del Trentino. Por el momento, los austríacos se opusieron tenazmente a las exigencias chantajistas de Italia. Cuando al principio de enero de 1915, el ministro del Exterior, conde Berchtold, pareció dispuesto a acceder, bajo la presión alemana, a los deseos italianos en la cuestión del Trentino, fue sustituido por el conde Burian. Para inducir a los austríacos a ceder, el gobierno alemán ofreció, en marzo de 1915, al aliado, como compensación por la pérdida del Trentino, el distrito carbonífero polaco de Sosnovice y en el caso de que esto no fuese bastante, se pensaba además en la cesión a Austria-Hungría de una parte de Silesia. Afortunadamente, el gobierno alemán no tuvo que recurrir a esta oferta extrema, que si hubiese llegado a oídos de la opinión pública alemana hubiese desencadenado una tormenta de indignación; el 9 de marzo de 1915, Viena se declaró dispuesta en principio a ceder el Trentino a Italia.

Pero también las potencias de la Entente cortejaban a Italia cada vez con más insistencia, tanto más cuanto que era ya evidente la imposibilidad de una victoria decisiva en el Oeste. La ofensiva de Joffre en Champagne en marzo de 1915 se agotó ante el fuego de las ametralladoras alemanas, igual que la si-

multánea ofensiva de los ingleses cerca de Neuve-Chapelle. Tampoco obtuvo mejores resultados la grandiosa ofensiva de mayo de 1915 en Arras, ofensiva que no logró desarticular las líneas alemanas. En Londres, a fines de 1914, ya se había llegado a la conclusión de que por el momento no se podía contar con un cambio decisivo de la situación en el frente occidental, y por ello se tomó la decisión de arrollar la posición de las potencias centrales por el flanco sudoriental, con un ataque contra los Dardalenos. El gobierno inglés confiaba, en el caso de una victoria sobre Turquía, poder atraer a Bulgaria al campo de la Entente, e inducir al mismo tiempo a Rumania e Italia a entrar en la guerra. Mientras los preparativos para el ataque en los Dardanelos estaban en pleno apogeo, se intensificaban las diligencias de la diplomacia de las potencias de la Entente con respecto a Rumania e Italia. Un solo día después del desembarco de un fuerte cuerpo expedicionario inglés en la península de Gallípoli, el 26 de abril de 1915, Francia, Inglaterra, Rusia e Italia firmaron el Tratado de Londres, que prometía un extraordinario botín de guerra a Italia en el caso en que se comprometiese de manera vinculante a intervenir activamente en la guerra en el plazo de un mes. Fueron prometidos a Italia no sólo el Trentino, Gorizia y Gradisca y la transformación de Trieste en «ciudad libre», cosa que también los austríacos habían ofrecido finalmente con gran pesar, sino también todo el Tirol del sur hasta la frontera del Brenner, Istria con las islas situadas delante de su costa, y finalmente gran parte de Dalmacia. Era un precio extremadamente alto, que la diplomacia italiana había conseguido aprovechando los antagonismos de Austria-Hungría y de las potencias de la Entente; pero en la situación crítica de entonces cualquier medio era bueno para la Entente, con tal de obtener el ingreso de Italia en el propio campo. Las potencias centrales que habían tenido inmediatamente noticia de la firma del tratado emprendieron un último y desesperado intento para evitar, en el último momento, que Italia entrase en la guerra. Todas sus esperanzas se hallaban puestas sobre todo en Giolitti, exponente de la corriente neutral, la cual, a pesar de la agitación nacionalista cada vez más fuerte, seguía siendo en el parlamento y en el país la corriente dominante; Giolitti, sin embargo, no hizo nada en el momento decisivo por defender su causa. El 24 de mayo de 1915 Italia declaraba la guerra a Austria-Hungría.

La intervención de Italia creó el peligro de un golpe decisivo en el flanco meridional de la monarquía danubiana, cuyas fuerzas estaban concentradas en el frente galitziano. Las potencias centrales pudieron evitar, sin embargo, lo peor. Decisivo

en aquella situación fue el inesperado gran triunfo de la ofensiva de Falkenhayn, iniciada el 2 de mayo cerca de Gorlice. Los rusos, como consecuencia de un imponente hundimiento de sus líneas, fueron obligados a la retirada en un frente largo. En el curso de duras batallas tuvieron que renunciar a Galitzia, a toda Polonia y además a Curlandia. Sólo en agosto el frente lograba estabilizarse definitivamente sobre la línea de Riga, Vilna, Leopoli, hasta la frontera rumana. Rusia no estaba aún vencida pero la temida apisonadora rusa estaba destruida y los ejércitos rusos rechazados al lejano Este. Ante esta evolución de los acontecimientos, Rumania no se decidía a entrar en la guerra. También Austria-Hungría consiguió, con fuerzas relativamente escasas, contener eficazmente los ataques de los italianos en el frente del Isonzo, iniciados en junio de 1915.

A partir del verano de 1915 las potencias centrales reanudaron sus tentativas de iniciar con Rusia negociaciones para una paz por separado. Pero prescindiendo del hecho de que en el caso de que las negociaciones se hubiesen llevado a cabo las exigencias de Alemania no hubiesen sido precisamente modestas, el zar y sus consejeros rechazaron enérgicamente cualquier idea de una paz por separado. No existía ninguna esperanza de poder transformar las operaciones victoriosas frente a Rusia en hechos decisivos para la guerra. Sólo quedaba la vía opuesta, es decir, favorecer una revolución en el gigantesco imperio ruso, el cual ya sufría notablemente bajo el peso de la guerra.

Pero también en el campo aliado el desconcierto era grande. Contrariamente a lo esperado, la ofensiva de Gallípoli había demostrado ser un fracaso; a pesar del empleo de fuerzas considerables y de un gran número de unidades navales, a las que los turcos no podían oponer nada serio, las líneas turcas resistieron a todos ataques. Y también el desembarco de un cuerpo expedicionario franco-británico en octubre de 1915 en Salónica llegaba demasiado tarde para poder modificar el curso de los acontecimientos en favor de la Entente; mientras tanto, había comenzado una ofensiva austro-alemana de gran envergadura contra Servia, y el 13 de octubre de 1915 se unía a la lucha también Bulgaria, que el 6 de septiembre de 1915 había concluido con las potencias centrales un tratado de alianza que le garantizaba la readquisición de las regiones macedónicas. Pocas semanas después casi toda Servia, Montenegro y Albania se encontraban en manos alemanas. La amenaza dirigida contra el flanco sudoriental del baluarte de las potencias centrales había sido superada eficazmente y había dejado abierta la vía a Constantinopla. En diciembre de 1915 el gobierno inglés se vio obligado a liquidar definitivamente la empresa de Gallípoli. En el

frente occidental, Joffre se decidió a probar suerte una vez más con una gran ofensiva, y los ingleses no se atrevieron a negarle su apoyo, aunque no tenían mucha fe en el intento. La gran ofensiva francesa de otoño (del 22 de septiembre al 6 de noviembre de 1915) en la Champagne, constituyó, sin embargo, un nuevo y gigantesco fracaso.

La ineficacia de todos los intentos de hacer vacilar los frentes de las potencias centrales en el Oeste, en el Isonzo, o en el Sudeste, no indujo a las potencias de la Entente a negociar una conclusión del conflicto, como se esperaba en el lado alemán, sino que reforzó su voluntad de continuar la lucha hasta la completa derrota de las potencias centrales. Al principio de diciembre de 1915, Inglaterra, Francia, Rusia e Italia acordaron romper definitivamente durante el verano del año siguiente la resistencia de las potencias centrales con ofensivas sincronizadas en los tres principales escenarios de la guerra, de manera que las potencias centrales no tuvieran la posibilidad de lanzar sus reservas de un frente al otro. En febrero de 1916, el mando supremo del ejército alemán se adelantaba a los planes de ataque de las potencias occidentales con una gran ofensiva contra Verdun, piedra angular del sistema fortificado francés. Según Falkenhayn, una ruptura decisiva de las líneas enemigas en el frente occidental era imposible hasta que no se hubiese quebrado la fuerza combativa sobre todo de los ejércitos franceses. Por eso él quería atacar a los franceses en un punto de su frente que ellos, tanto por motivos estratégicos como por motivos morales, se sintieran obligados a defender hasta la última gota de sangre, aunque desde un punto de vista táctico se encontraban en una posición de desventaja frente a los agresores. La intención de Falkenhayn era comprometer en Verdun a los franceses en una gran batalla de desgaste y «desangrarlos» hasta el punto de obligarles finalmente a iniciar negociaciones de paz. Al mismo tiempo, quería inducir a las fuerzas armadas francesas a llevar a cabo ofensivas de desahogo en otros puntos del frente, y atraer al cuerpo expedicionario inglés a un ataque anticipado, antes de que hubiese alcanzado su plena fuerza combativa. De esta manera, Falkenhayn esperaba conjurar a tiempo el peligro que se estaba fraguando en el Somme para el frente occidental alemán. Esperaba, además, que en el curso de una contraofensiva alemana se presentase la posibilidad de superar la rigidez del frente occidental y de provocar, a pesar de todo, con una lucha de movimiento, una decisión estratégica. Pero en primer plano estaba sin embargo la idea de que Francia, incluso sin una verdadera victoria definitiva en el campo de batalla, sería obligada a pedir la paz,

ya que la nación francesa, con un potencial demográfico inferior al de las potencias centrales, no podría soportar una sangría como la que había previsto Falkenhayn. Al mismo tiempo, el comandante del Estado Mayor alemán exigió que se pasase a la guerra submarina ilimitada, con la que esperaba poder afectar de manera decisiva no sólo el aprovisionamiento, sino sobre todo la moral de los combatientes de Inglaterra, y también de Francia.

El cálculo de Falkenhayn se habría de revelar como un grave error, tanto en el plano militar como en el político. A los pocos días el ataque alemán contra Verdun quedaba frenado y su prosecución costaba muchas más pérdidas de las que se había esperado jamás. A pesar de todo, Falkenhayn no desistía en su empeño; durante largos meses se luchó encarnizadamente por la explanada y los fortines externos de la fortaleza de Verdun, sin que las tropas alemanas pudiesen obtener una victoria definitiva. Y cuando, al principio del mes de julio de 1916, ante la presión de la evolución de los acontecimientos en otros frentes, Falkenhayn dio la orden de interrumpir definitivamente la ofensiva de Verdun, fueron los franceses los que trataron de reconquistar con repetidos ataques el terreno perdido. Hasta el final del otoño de 1916, los alemanes habían perdido en total, delante de Verdun, 337.000 hombres; Francia, a su vez, con 377.000 hombres, sólo había tenido pérdidas escasamente superiores. A pesar de estas cifras gigantescas que superan en mucho las sufridas por los alemanes y los rusos en la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado, no se consiguió alcanzar el objetivo deseado de «desangrar» Francia. Tampoco se había podido conseguir que los ingleses se lanzasen a un ataque prematuro.

Mientras que en el frente occidental se hacían preparativos para encajar lo mejor posible la inminente ofensiva inglesa, las potencias centrales sufrieron, en el Este, un nuevo revés grave. El 4 de junio de 1916 el general Brussilow inició cerca de Luck, en la Galitzia nordoriental, un ataque por sorpresa que, a causa de los fallos del mando local, hizo vacilar a todo el frente austríaco. En el curso de dos semanas Brussilow consiguió hacer más de 200.000 prisioneros; regimientos enteros se pasaron a las filas rusas, otros desaparecieron, sin dejar rastro, en los bosques galitzios. El frente austro-húngaro tenía que ser retirado hasta los pasos de los Cárpatos. Más grave aún que el revés militar, fue el moral: el prestigio de Austria-Hungría había recibido un duro golpe, no sólo ante los ojos de los enemigos y del aliado alemán, sino también ante los pueblos de la propia monarquía.

Casi al mismo tiempo se desencadenó el 1 de julio en el Oeste la gran ofensiva inglesa y francesa del Somme, después de una preparación de la artillería que duró una semana, con una concentración de fuego nunca vista. A pesar de las escasas ganancias territoriales obtenidas con enormes pérdidas humanas no se produjo la ruptura del frente esperada por Joffre y Haig. Por el contrario, la ofensiva del Somme se transformó, inesperadamente, en una segunda batalla de desgaste de dimensiones gigantescas. Cuando, finalmente, en noviembre de 1916, los ingleses interrumpieron sus continuos ataques, habían perdido más de 400.000 hombres y 200.000 los franceses; a cambio, no habían ganado más de 12 kilómetros sobre una anchura de 50, sin ninguna perspectiva de poder transformar estas ganancias en factores estratégicamente decisivos. Pero también el triunfo de sangre pagado por el ejército alemán era extremadamente alto. En total las pérdidas alemanas fueron de 455.000 hombres. En la batalla del Somme se había puesto por primera vez de manifiesto en toda su dimensión la superioridad material de los aliados. La idea de que el esfuerzo personal y los actos de valor individuales no podían, a la larga, hacer frente al empleo masivo de los medios materiales, tuvo efectos desmoralizadores en el espíritu combativo de los soldados alemanes.

Mientras en el Oeste los ejércitos alemanes se hallaban en una batalla defensiva de una dureza sin precedentes, en el Sudeste el frente austríaco volvía a tambalearse de nuevo bajo la presión de nuevos ataques rusos; sólo con la ayuda alemana pudo mantenerse finalmente la línea del frente. Ante la incapacidad de los austríacos, se multiplicaron las voces que deseaban confiar a Hindenburg y a Ludendorff el mando supremo de todo el frente oriental, inclusive los sectores austríacos. Bethmann Hollweg, que hacía ya tiempo que había perdido su fe en Falkenhayn y estaba cada vez más irritado por sus continuas interferencias en los problemas de política exterior, quería ir aún más allá, confiando el mando supremo del ejército a los vencedores de Tannenberg. El pensaba que la enorme popularidad de Hindenburg y Ludendorff no debía continuar sin ser aprovechada: «Con Hindenburg, el Kaiser podría concluir una paz decepcionante, sin él ni siquiera esto»[112]. En junio de 1916 se confió el mando supremo de todas las fuerzas armadas alemanas en el Este, así como una parte de las austro-húngaras, a los dos generales que ya habían seguido desde hacía tiempo con duras críticas las decisiones de Falkenhayn y no se habían abstenido siquiera de apelar directamente a Guillermo II. La posición del jefe del Estado Mayor alemán, que se

había opuesto en vano a estas tendencias, quedaba de esta manera completamente socavada. Cuando finalmente, el 27 de agosto de 1916, Rumania, cuya actitud había enjuiciado Falkenhayn de manera excesivamente optimista con motivo de informes descaminados de sus agentes, entró inesperadamente en la guerra, pudo el canciller imponer sus deseos. Al día siguiente el mando de las operaciones militares era asignado a Hindenburg y a Ludendorff.

Para Falkenhayn fue un débil consuelo conseguir, junto con Mackensen, arrollar, en los meses sucesivos a Rumania con una doble ofensiva desde Galitzia y Bulgaria, aunque las fuerzas armadas rumanas dispusieran inicialmente de una superioridad casi tres veces más grande que la suya. El 6 de diciembre de 1916 Falkenhayn y Mackensen pudieron coronar sus triunfos entrando en Bucarest. La derrota de Rumania tuvo una gran importancia no sólo desde el punto de vista militar, sino también porque posibilitaba el aprovisionamiento de las potencias centrales con víveres y combustible. Ahora las potencias centrales dominaban toda la península balcánica, a excepción de Grecia. Para las débiles fuerzas aliadas del frente macedónico ya no existía ninguna posibilidad de crear desde el sur situaciones verdaderamente peligrosas para las potencias centrales. Más importante fue aún el hecho de que, después de quedar detenida la ofensiva de Brussilow en agosto de 1916.con la pérdida de un millón de hombres, quedaba la fuerza combativa de Rusia definitivamente paralizada. La catastrófica situación económica del imperio zarista, pero sobre todo el progresivo desmoronamiento de las vías de comunicación, no permitían ya por más tiempo un suficiente aprovisionamiento de los ejércitos rusos, con lo que disminuía cada vez más su fuerza militar.

A pesar de los grandes triunfos de las potencias centrales en el Este, la situación seguía siendo crítica en el Oeste, y las reservas alemanas de tropas ya no podían ser renovadas. Aunque sobre el mapa su situación podía parecer positiva, las potencias centrales estaban, de hecho, más lejos que nunca de una victoria decisiva sobre las potencias occidentales. Los nuevos jefes de la máquina bélica alemana, Hindenburg y Lundendorff, tenían que reconocer que habían subestimado notablemente hasta entonces las terribles dimensiones de las batallas en el Oeste. Tampoco ellos consiguieron liberar las reservas estratégicas que habían exigido constantemente de Falkenhayn, para poder obtener en un punto cualquiera del frente un resultado decisivo; por ello se vieron obligados a trasladar continuamente divisiones de un lado a otro para taponar los huecos más peligrosos. En el campo aliado no existían tampoco motivos de jú-



Fig. 13. Las potencias beligerantes y la evolución de los frentes a finales de 1916.

bilo. La profunda desilusión por el fracaso de su ofensiva se mezclaba con la desmoralización causada por la rápida caída de Rumania, a la que no se había podido llevar ayuda a tiempo. En ambos campos se buscaban, con redoblado empeño, nuevos medios bélicos para vencer por fin al enemigo. Los aliados confiaban en que el bloqueo inglés conduciría al agotamiento de las potencias centrales. El mando supremo del ejército alemán descubría ahora, igual que Falkenhayn el año anterior, que la guerra submarina incondicionada era el arma apropiada para obtener en el mar la solución definitiva, que no parecía poderse obtener ya en la tierra.

IV. EL BLOQUEO NAVAL ALIADO, LA GUERRA SUBMARINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Desde apenas comenzada la guerra, la construcción de la flota de guerra alemana se había revelado, tanto en el plano político como en el militar, como una grandiosa inversión errada. Prescindiendo de algunas extraordinarias operaciones navales, la flota alemana no pudo evitar que Inglaterra hiciese desaparecer la bandera alemana de los mares mundiales y que erigiese lejos de las costas de Alemania un bloqueo compacto, que cortaba al Reich y a sus aliados el acceso a los mercados mundiales.

Bien es verdad que las normas internacionales para llevar a cabo un bloqueo efectivo de tipo moderno no estaban en absoluto especificadas suficientemente. En su momento los ingleses se habían negado a firmar la Convención del Derecho Marítimo de Londres de 1909, y cuando la diplomacia americana, al estallar la guerra, trató de obtener el reconocimiento de parte de todos los combatientes, Gran Bretaña se declaró dispuesta a ello sólo a cambio de importantes concesiones, mientras que el gobierno alemán prometía prudentemente respetar las normas, a condición de que también las otras potencias se comprometiesen a respetarlas. Las objeciones de los ingleses estaban dirigidas sobre todo contra la lista de contrabando absoluto y condicionado, contenido en la Declaración de Londres. Lista que estaba adaptada aún por completo a una guerra de viejo estilo, abarcando sólo insuficientemente las importantes materias primas necesarias para una guerra moderna. Según esta lista no eran considerados, por ejemplo, contrabando, productos alimenticios y materias primas. Además la Declaración no preveía la posibilidad de un bloqueo naval lejos de las costas, que valiese no sólo para algunos puertos, sino para toda la navegación

de un país, y tampoco se había considerado el problema, estrechamente ligado al primero, del tráfico marítimo neutral, ni siquiera en la medida en que no pretendiese tocar directamente los puertos del enemigo; mucho menos aún se había contado con la posibilidad de una guerra naval con submarinos.

En aquellas circunstancias, las dos principales partes interesadas, Gran Bretaña y el Reich alemán entraban casi inevitablemente en conflicto con las vigentes normas marítimas internacionales.

Los neutrales, sin embargo, sobre todo los Estados Unidos, insistían tenazmente en el respeto de los derechos de la navegación y del comercio neutrales también con los propios Estados beligerantes. El problema de cómo realizar una eficaz guerra de bloqueo contra el comercio enemigo, un comercio llevado a cabo en buena parte y casi exclusivamente en el caso de las potencias centrales, con barcos de países neutrales, sin entrar en graves conflictos con estos últimos, no tenía solución desde el punto de vista jurídico, y estuvo desde el principio estrechamente ligado a factores psicológicos, económicos y políticos. En este punto, Inglaterra se encontraba en la posición más ventajosa. Nadie era capaz de discutirle el dominio de los mares. Además, podía contar desde el principio con las simpatías sobre todo de los Estados Unidos, que desde el punto de vista sentimental estaban de parte de los aliados y que por esta razón no tenían ningún inconveniente en hacer la vista gorda de vez en cuando. También es verdad que en la cuestión del bloqueo la diplomacia inglesa dio pruebas de notable habilidad. En principio, los ingleses se atenían a la Convención londinense sobre el derecho marítimo, pero fueron recrudeciendo gradualmente las disposiciones sobre el contrabando, sin preocuparse excesivamente del derecho internacional. El 2 de noviembre de 1914 el almirantazgo inglés declaraba zona de guerra todo el mar del Norte, estableciendo para el tráfico marítimo neutral determinadas rutas que facilitaban notablemente a los ingleses el control de las naves contrabandistas. Desde el punto de vista del derecho internacional, tal medida no era legal, como tampoco lo era la práctica de obligar a los buques neutrales tocar puertos ingleses, con el fin de poder controlar más cómodamente su cargamento. Pero los ingleses lograron pasar por alto las numerosas protestas de los neutrales. Por un lado, porque tuvieron cuidado de que los propietarios de los barcos neutrales y los importadores no sufriesen directamente daños, y por otro, porque en un primer momento renunciaron a secuestrar mercancías que de hecho, aunque estuviesen dirigidas a destinatarios neutrales, después del control eran enviadas a Alema-

nia. Los ingleses elaboraron gradualmente un complejo sistema de control que les procuraba a los tribunales de presas ingleses las informaciones necesarias para poder incautar como contrabando también aquellas mercancías que estaban oficialmente dirigidas a destinatarios neutrales, pero que en realidad estaban destinadas a Alemania. De esta manera el bloqueo inglés, que por el momento era todavía bastante imperfecto, se fue haciendo poco a poco cada vez más agobiante.

Después de que los acorazados alemanes habían desaparecido de los mares mundiales y la flota alemana estaba inmovilizada en Wilhelmshaven, el único medio del que disponía Alemania para operar contra el bloqueo de los aliados era el arma submarina. Aunque el número de submarinos disponibles era entonces aún extremadamente reducido, el ministerio de Marina alemán, a raíz de los primeros espectaculares triunfos de algunos submarinos contra buques de guerra ingleses, insistió en someter a Inglaterra a un bloqueo submarino. Pero el carácter particular y la vulnerabilidad del arma submarina impidieron desde el principio a los alemanes llevar a cabo una guerra naval según los principios de la declaración de Londres, mientras que los ingleses la respetaban en principio, a pesar de violar algunas de las disposiciones. Según las normas del derecho internacional era ilegal no sólo el hundimiento sin previo aviso de naves neutrales, sino, a causa del consiguiente peligro para los pasajeros y la tripulación, también la práctica de hundir en alta mar barcos después de llevar a cabo la amonestación y la inspección. Los esfuerzos de la diplomacia alemana por suscitar la comprensión en el campo de los neutrales por las consecuencias del empleo de este nuevo medio bélico, no tuvieron en general ningún éxito. La actitud de los países neutrales, cada vez más desfavorables hacia las potencias centrales, confirmó a éstos en su idea de que el empleo del arma submarina tanto contra el tráfico comercial del enemigo como contra el de los neutrales, había de ser considerado inhumano y como neta violación del derecho internacional.

Para poder llevar a cabo un bloqueo efectivo contra Inglaterra el mando supremo de la marina alemana, a causa del exiguo número de submarinos a su disposición, recurrió al efecto de intimidación que tendría sobre los neutrales el desencadenamiento de la guerra submarina. Se confiaba en que el tráfico neutral a los puertos ingleses y franceses llegase a quedar completamente paralizado. Bajo la presión del ministerio de Marina, el 2 de febrero de 1915 el gobierno alemán declaraba zona de guerra las aguas internacionales en torno a las islas británicas; a partir del 18 de febrero cualquier buque mercante que

atravesase esta zona tenía que contar con un ataque, sin ninguna garantía para la tripulación y los pasajeros. Esta medida, sin embargo, no tuvo el efecto esperado; aún antes de que la guerra submarina hubiese comenzado, se acumulaban sobre el despacho de secretario de Estado del Exterior, von Jagow, las violentas protestas de los neutrales, entre éstas en primer plano una nota americana que no hacía ningún misterio de las propias intenciones y en la que la medida alemana era claramente condenada como flagrante violación del derecho internacional. Bethmann Hollweg decidió entonces dar inmediatamente marcha atrás, ya que en un momento en que se hacía todo lo posible por impedir la entrada en guerra de los italianos y de los rumanos, era absolutamente necesario evitar un conflicto serio con los Estados Unidos. El canciller se encontró, sin embargo, con la inflexible oposición del ministerio de la Marina, que —sin tener en cuenta las realidades— estaba completamente convencido de que la guerra submarina daría grandes triunfos a Alemania. Por otro lado, no se podía retirar la declaración del 2 de febrero de 1915 sin perder la cara, y así se trató de encontrar una solución de compromiso que respetase la navegación neutral sin tener que renunciar del todo a la guerra submarina contra Inglaterra. Los comandantes de los submarinos recibieron la orden de no atacar los barcos neutrales, especialmente los americanos: una medida que en la práctica era imposible de realizar. Pero al mismo tiempo el gobierno alemán declaró que se renunciaría a la guerra submarina, en cuanto Inglaterra se declarase dispuesta a consentir el suministro de víveres y materias primas a Alemania, según la Convención londinense sobre el derecho marítimo.

Poco tiempo después los americanos presentaron de hecho una propuesta de mediación que preveía, en el caso en que los alemanes renunciasen completamente a la guerra submarina, la garantía del libre ingreso de víveres. Los ingleses, sin embargo, no estaban dispuestos a aceptar tales pactos. El 1 de marzo de 1915, sir Edward Grey declaró oficialmente que a partir de aquel momento Inglaterra confiscaría todos los barcos que llevasen mercancías que estuviesen destinadas con alguna probabilidad al enemigo, que perteneciesen a éste o que procediesen de éste. El fundamento jurídico de la Convención londinense de derecho naval era así violado también formalmente, quedando extendido el bloqueo a todas las mercancías destinadas a los imperios centrales. Los ingleses empezaron además a someter sistemáticamente a su control todo el comercio neutral y a impedir cualquier comercio intermedio. Finalmente pasaron a la fijación del contingente de todo el comercio de importación de los Es-

tados neutrales colindantes con los imperios centrales, y con este fin concluyeron tratados especiales con Holanda, Dinamarca y Suecia. A medida que se prolongaba la guerra, Inglaterra se preocupaba cada vez menos de las bases jurídicas del bloqueo, pero trataba con el máximo cuidado de indemnizar financieramente, en los límites de lo posible, a los neutrales afectados. Finalmente, los ingleses desarrollaron un complicado sistema de controles previos que se efectuaba ya en los puertos de partida, y que hacían cada vez menos indispensable el método lento y dificultoso del secuestro de barcos.

En Alemania aumentaba comprensiblemente la exasperación por el bloqueo inglés; y con ello la idea de la guerra submarina ganaba cada vez más partidarios en la opinión pública y entre las autoridades militares, mientras que el gobierno temía que el hundimiento de barcos neutrales pudiese perjudicar aún más la posición de la diplomacia alemana. En un momento de extrema tensión en política exterior llegó entonces, el 7 de mayo de 1915, la noticia del hundimiento del transatlántico inglés «Lusitania». De un total de casi 2.000 personas entre tripulación y pasajeros habían sido arrastrados a la profundidad 1.198 entre ellos 120 ciudadanos americanos. El barco navegaba bajo la bandera inglesa y llevaba a bordo 170 toneladas de munición; su hundimiento estaba, por lo tanto, de acuerdo con las directrices dispuestas por el almirantazgo alemán. Este acontecimiento demostró, sin embargo, ser catastrófico para la causa de Alemania, aunque la prensa alemana asegurase lo contrario. El hundimiento del «Lusitania» fue considerado por los Estados neutrales, y sobre todo por los Estados Unidos, como una prueba concreta de la inhumanidad con la que los alemanes hacían la guerra; el gobierno americano exigió enérgicamente, bajo la amenaza de interrumpir las relaciones diplomáticas, nada más y nada menos que la suspensión de la guerra submarina total y la vuelta a la guerra de los acorazados.

Los puntos de vista alemán y americano sobre la cuestión de los submarinos eran fundamentalmente incompatibles. La propuesta de Wilson, según la cual Alemania tenía que garantizar a los ciudadanos americanos el tránsito seguro también en la zona de guerra, e incluso en barcos ingleses o franceses, no podía conciliarse de ninguna manera con los métodos de la guerra submarina. En la actitud americana tenían importancia fundamental aspectos humanos, cuya validez hoy, en la época de la bomba atómica, es difícilmente comprensible. Desde un punto de vista puramente formal, la manera de realizar la guerra submarina no era, en efecto, compatible con el vigente derecho internacional, ya que ponía continuamente en peligro

la vida de no-combatientes. Detrás de los aspectos humanos existía de parte americana el interés de mantener el comercio sin limitaciones con los beligerantes, y en particular con Inglaterra, tanto más cuanto que éste estaba adquiriendo una importancia cada vez mayor para la economía americana. Además se quería evitar que la guerra tomase un giro radical en contra de las potencias occidentales, hacia las que América se sentía moralmente comprometida, pero sin tener que intervenir en la guerra.

Estando así las cosas, cualquier concesión alemana en la cuestión submarina sólo eran medidas ambiguas que aplazaban, pero no hacían desaparecer, el conflicto con los Estados Unidos. Ningún gobierno alemán podía permitirse renunciar por completo a la guerra submarina, ya que la opinión pública, excitada por la agitación de los círculos extremistas anexionistas y de la industria pesada, exigía con un apasionamiento cada vez mayor la guerra submarina total, tachando de imperdonable debilidad cualquier concesión a los Estados Unidos. Pero Bethmann Holweg quería evitar a toda costa una ruptura con América; por esta razón, en septiembre de 1915 impuso la vuelta temporal a la guerra naval en la superficie de acuerdo con las disposiciones de la Convención de Londres; esta medida no llegó a ser aplicada por las autoridades de Marina, extremadamente irritadas ya que los riesgos de tal empleo de los submarinos no estaban en modo alguno en relación con los resultados que podían esperarse. De todas formas, la guerra submarina en el mar del Norte quedó prácticamente paralizada por el momento.

El gobierno alemán no podía, a la larga, conformarse con esta renuncia. Las negociaciones germano-americanas no se interrumpieron, pero se demostró que era cada vez más difícil encontrar un *modus vivendi* que permitiera a Alemania llevar a cabo una guerra submarina, incluso limitada, sin provocar la entrada de América en la guerra. Mientras tanto aumentaba en Alemania la presión de la opinión pública en favor de un empleo ilimitado, en el plazo más breve, del arma submarina. Cuando, al final de 1915, también Falkenhayn exigió el paso a la «guerra submarina ilimitada», Bethmann Hollweg optó por la vía del compromiso dilatorio mediante una «guerra submarina intensificada». El 11 de febrero de 1916 fue anunciado públicamente que desde entonces en adelante los barcos mercantes armados serían tratados igual que los barcos de guerra y, en consecuencia, atacados sin previo aviso; una medida de la que cabía esperar que sería aceptada por los neutrales, ya que la costumbre cada vez más empleada por los ingleses de armar los buques mercantes tenía que ser considerada discutible desde

el punto de vista del derecho internacional. La marina, que confiaba poder obligar a Inglaterra a la paz en cinco o seis meses en el caso de que fueran reprimidas todas las restricciones a las operaciones submarinas, no se conformó con tales decisiones de compromiso. En febrero-marzo de 1916 alcanzaron las discusiones sobre la «guerra submarina ilimitada» un nuevo y dramático punto culminante. A pesar de la violenta oposición no sólo de la marina, sino también del Estado Mayor y de la mayoría de los partidos, Bethmann Hollweg consiguió imponerse de nuevo al decisivo Consejo de la Corona del 4 de marzo de 1916; se decidió limitarse por el momento a una «guerra submarina intensificada». El Kaiser no pudo sustraerse al argumento del canciller de que la «guerra submarina ilimitada» «si terminaba con un fracaso significaría el *finis Germaniae*»[113]. Tirpitz, que había propugnado con tanto empeño la «guerra submarina ilimitada», se vio obligado a dimitir.

El triunfo del canciller fue, sin embargo, sólo momentáneo y había sido comprado con la promesa de dar vía libre, lo más pronto posible y con todos los medios diplomáticos disponibles, a la «guerra submarina ilimitada». Las perspectivas ya de por sí escasas de inducir por la vía diplomática a los neutrales a tolerar la guerra submarina ilimitada, se esfumaron completamente cuando, el 24 de marzo de 1916, se produjo una nueva y grave crisis en las relaciones germano-americanas a causa del hundimiento del trasatlántico francés *Sussex*. En una nota americana, que tenía el carácter de ultimátum, el presidente Wilson exigía, el 18 de abril de 1916, prácticamente la suspensión total de la guerra submarina. A pesar de las fuertes resistencias internas, Bethmann Hollweg se decidió a ceder de nuevo. El 24 de abril de 1916 se acordó por segunda vez la vuelta a la guerra de los acorazados. Además de ello el 4 de mayo de 1916 el gobierno alemán daba a los Estados Unidos la seguridad definitiva de que en el futuro se respetaría totalmente el tráfico marítimo neutral. Por otra parte, en esta nota se expresaba la esperanza de que los Estados Unidos ejerciesen ahora a su vez presiones sobre Gran Bretaña para que ésta aligerase su bloqueo. Esta reserva alemana, formulada de manera extremadamente cauta, no tuvo ningún efecto. Sin tener en cuenta esta condición, Wilson interpretó la nota alemana como una renuncia definitiva de parte de Alemania a la guerra submarina. El gobierno alemán reclamaba sin embargo plena libertad de acción en la cuestión submarina en el caso de que el presidente americano no lograse obtener de Londres una atenuación del bloqueo inglés. El margen de acción de la diplomacia de ambas partes se había quedado tan reducido que, en el caso de un cambio

en la actitud alemana, la ruptura con América habría sido casi inevitable.

A fines de mayo de 1916 el tema de la guerra submarina pasaba inesperadamente a un segundo plano. El 31 de mayo se produjo delante de Jutlandia el único encuentro directo de toda la Primera Guerra Mundial entre la escuadra de alta mar alemana y la inglesa. En el curso de la batalla naval en el Skagerak la flota alemana, mandada por el almirante Scheer con gran habilidad táctica y con mucha suerte, dio prueba de su alto nivel técnico. La flota alemana consiguió infligir a la inglesa pérdidas notablemente mayores que las propias y separarse, con la ayuda de la noche, del enemigo, muy superior en número y en capacidad de fuego, refugiándose en el Deutsche Bucht (Bahía de Helgoland). Los ingleses, en parte a causa de la táctica demasiado cauta empleada por Jellicoe, dejaron escapar la ocasión de aniquilar la flota alemana en una batalla naval abierta. Grande fue el júbilo alemán y el abatimiento inglés; pero en el fondo las relaciones de fuerza no habían cambiado. A pesar del triunfo obtenido, había quedado nuevamente demostrado que la flota de alta mar alemana no tenía ninguna posibilidad de romper la supremacía inglesa en los mares.

Por ello Alemania seguía confiando en el arma submarina, y ante las repercusiones cada vez más sensibles que el bloqueo inglés tenía principalmente sobre las condiciones materiales de vida de la población civil, que carecía ya de lo necesario, esta esperanza asumió formas cada vez más febriles. Con eficaces medidas americanas en favor de una atenuación del bloqueo no se podía contar; por el contrario, el 7 de junio de 1916, los aliados habían denunciado la Declaración londinense también desde el punto de vista formal, rechazando las últimas restricciones al bloqueo, sin que los neutrales se opusiesen a ello con alguna eficacia. En aquellas circunstancias no podía ya ser mantenida la actitud deferente de la que el gobierno alemán había dado hasta entonces pruebas. Si no se podía conseguir de alguna manera una salida de la crítica situación de los imperios centrales, sería inevitable la «guerra submarina ilimitada», como reconocía el propio Bethmann Hollweg. De esta manera a mediados de agosto de 1916 los alemanes hicieron presión sobre Wilson para que promoviese una acción de paz americana, que, en el caso más favorable, tendría que haber conducido a negociaciones de paz generales, y en el menos favorable, habría permitido tal vez el paso a la «guerra submarina ilimitada» sin llegar a una ruptura con los Estados Unidos.

Hasta aquel momento el gobierno alemán había acogido las tentativas americanas de mediación entre los beligerantes con el fin de llegar a una paz negociada casi con la misma desconfianza que los aliados. Los sondeos de paz llevados a cabo por el coronel House en febrero de 1916 habían sido acogidos en Berlín con las mismas reservas que en Londres y en París. También el gran discurso pronunciado por Wilson el 27 de mayo de 1916, en el que el presidente americano había lanzado por primera vez el lema de paz «sin vencedores ni vencidos», y había propuesto la fundación de una organización internacional con el fin de impedir nuevas guerras, había sido acogido en Berlín casi tan negativamente como en Londres, ya que se sospechaba —no del todo injustamente— que las intenciones de Wilson estaban dirigidas en última instancia a tomar partido por los aliados. Pero en aquel momento se esperaba aún poder derrotar pronto a Francia con la ayuda de la ofensiva de Verdun e incluso una paz por separado con Rusia parecía encontrarse en el ámbito de lo posible. Desde agosto de 1916 empezaba a manifestarse claramente el hecho de que Alemania no podía llevar a cabo en tierra un golpe decisivo para el curso de la guerra, a pesar de la eficaz resistencia a los ataques de los aliados en el Oeste, y a pesar también de los grandes triunfos en el Este; por esto empezaba a crecer la disposición a intentar el «último» medio, supuestamente infalible, del empleo ilimitado del arma submarina. La única posibilidad de evitar esta eventualidad, que el canciller consideraba un «acto político desesperado», consistía en llegar rápidamente a negociaciones de paz generales.

Sin embargo, el presidente americano tardaba en ponerse en acción, mientras que en Alemania la agitación en favor de la «guerra submarina ilimitada» asumía formas cada vez más violentas. En octubre de 1916 el canciller alemán pudo adelantarse a una iniciativa de los partidos de la mayoría en el *Reichstag*, sólo declarando que su oposición a la «guerra submarina ilimitada» era momentánea, y que en este punto estaba de acuerdo con el nuevo mando supremo del ejército. Los partidos replicaron presentando una decisión del *Reichstag* en la que se decía que la «guerra submarina ilimitada» se llevaría a cabo en el momento en que el mando supremo del ejército lo considerara necesario. La última posibilidad del canciller era apelar a Hindenburg y Ludendorff; él sabía mucho mejor que los partidos que este recurso no era demasiado válido ya que Ludendorff, el 9 de septiembre de 1916, había rechazado por el momento la «guerra submarina ilimitada», pero había declarado al mismo tiempo: «En cuanto estemos

consolidados militarmente, la haremos»[114]. Por ello en las semanas y en los meses sucesivos la diplomacia alemana trató, cada vez con más energía, de inducir a Wilson a una propuesta de mediación de paz, mediación que habría sentado a los combatientes directamente ante la mesa de negociaciones. Bajo la influencia de su consejero, el coronel House, que temía que las potencias occidentales reaccionaran negativamente a una iniciativa de paz de los Estados Unidos, Wilson seguía aplazando esta acción. El gobierno alemán proseguía sus gestiones ante Wilson, pero además decidió preparar por propia iniciativa una acción de paz, para tener así «dos hierros en el fuego» Sólo manifestando la propia disposición a la paz y tratando de establecer negociaciones entre las potencias beligerantes, Bethmann Hollweg podía esperar evitar el paso a la guerra submarina ilimitada y la entrada en la guerra de los Estados Unidos que seguramente seguiría a aquélla.

V. EL DESARROLLO INTERNO EN LOS ESTADOS EN GUERRA Y LA OFERTA DE PAZ DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1916 DE LOS IMPERIOS CENTRALES

En el verano de 1915 se habían desvanecido ya tanto las esperanzas de los imperios centrales en una victoria conseguida al primer golpe de las operaciones militares como las espectativas aliadas de romper en un contraataque la posición de fuerza de los imperios centrales. Como consecuencia de las experiencias habidas, ambas partes se preparaban para una guerra más larga y trataban de intensificar al máximo sus esfuerzos militares. La intensificación de las operaciones bélicas trajo consigo la necesidad de una mayor rigidez de las fuerzas políticas del gobierno. Al mismo tiempo las exigencias militares imponían una ampliación cada vez mayor de las atribuciones del Estado en el campo social. Paso a paso, pero de forma imposible de detener, el Estado asumía nuevas esferas de la vida social, que hasta entonces le habían estado vedadas. En general se justificaban estas ingerencias con la necesidad de aumentar la producción de municiones. Ninguna de las potencias en guerra estaba preparada a tal demanda de munición como la que había provocado la guerra de posiciones. Con monótona regularidad se acusaba a los gobiernos de todos los países en guerra de escasa previsión e insuficiente energía. De hecho, en principio, los gobiernos no se mostraron en absoluto a la altura de los enormes problemas que se les planteaban al prolongarse la guerra. De esta manera las exigencias

bélicas condujeron casi en todas partes a una reorganización más o menos radical de la vida pública.

En Inglaterra, un artículo de fondo aparecido en el *Times* del 14 de mayo de 1915, en el que se exponía la situación catastrófica del suministro de municiones y se atacaba violentamente al gobierno, dio el impulso para la formación de un gobierno de coalición del que formaban parte representantes de los dos grandes partidos ingleses. Lloyd George, que era considerado como hombre de gran energía, asumió el nuevo ministerio de la Munición, y en el curso de pocos meses consiguió crear centenares de nuevas empresas de armamento. También se tomaron medidas para garantizar una política unitaria, concentrando la dirección de las operaciones en un comité de guerra especial al que solamente pertenecían los ministros más importantes. La iniciativa para la intensificación de los esfuerzos militares no partía únicamente del gobierno, sino también de las propias clases burguesas. Así, el 2 de mayo de 1916 la Cámara de los Comunes imponía al primer ministro Asquith, que aún oponía resistencia, el servicio militar obligatorio. Este proceso alcanzó su punto culminante cuando, el 6 de diciembre de 1916, fue formado un nuevo gabinete de guerra bajo la dirección de Lloyd George. El gobierno de Lloyd George rompe completamente, no desde un punto de vista jurídico, pero sí de hecho, con las viejas tradiciones de la política inglesa. Los ingleses se sometieron dócilmente al poder plebiscitario de este hombre, grande aunque no siempre muy escrupuloso a la hora de escoger los medios. Lloyd George gobernó, sin ninguna consideración hacia la tradicional estructura inglesa de partidos, apoyado en la prensa nacionalista de masas y valiéndose de la colaboración de ministros de todos los partidos, así como de personalidades del mundo económico no ligadas a ningún partido, y creó un equipo dispuesto a seguirle ciegamente. También en las relaciones con las autoridades militares procuró que la política tuviese la prioridad.

En Francia, el Estado Mayor se había adueñado al principio de la guerra de amplias prerrogativas; a medida que se prolongaba la guerra, los políticos comenzaron a rebelarse contra la omnipotencia de los militares. Al mismo tiempo se exigía, sin embargo, una política más enérgica en el interior. Briand, que el 25 de octubre de 1915 había sucedido a Viviani, tenía que aceptar la acusación de no ser suficientemente duro y de dejar a las cosas seguir su curso. Después de los graves reveses que la Entente había tenido que soportar, se produjo al final de 1916 en Francia una crisis de gobierno. Briand consiguió mantenerse y formar un nuevo gabinete, pero,

análogamente a Lloyd George, se vio obligado a reducir notablemente el número de ministros, para conseguir la máxima concentración en las decisiones. Lyautey, el nuevo ministro de la Guerra, tenía que conferir al gabinete el necesario prestigio en política interna, y Nivelle, como sucesor de Joffre, iniciar una nueva fase de afortunadas operaciones bélicas. Ambos se vieron, sin embargo, cada vez más sujetos al desconfiado control de los parlamentarios.

En Alemania, por el contrario, la evolución, que en general tendía a la concentración del poder en pocas manos, siguió una dirección opuesta. El fraccionamiento del poder en una pluralidad de instancias, previsto en la Constitución del Imperio de Guillermo II, impedía, ante la total incapacidad del Kaiser, una dirección política rígida y unitaria. Sólo a duras penas y a través de muchos rodeos, el gobierno pudo imponer a las autoridades militares sus puntos de vista políticos, aunque aviniéndose continuamente a graves compromisos y concesiones. Ya entre Falkenhayn y Bethmann Hollweg se habían repetido graves conflictos acerca de la dirección de la política general. El nombramiento de Hindenburg y Ludendorff como jefes del mando supremo del ejército el 28 de agosto de 1916, trajo el triunfo definitivo de las autoridades militares sobre los políticos. Hindenburg y Ludendorff, descontentos con la débil dirección de los asuntos del Reich por Bethmann Hollweg, interferían cada vez más directamente tanto en la política interna como en la exterior, seguros de poder contar con la aprobación de la mayoría de los partidos en el *Reichstag*. Hindenburg y Ludendorff se proponían incrementar al máximo los esfuerzos bélicos de Alemania, y en la persecución de este objetivo no se preocupaban de otras consideraciones de política interna y externa. Así, en diciembre de 1916, impusieron al gobierno la llamada «ley del servicio auxiliar», con la que se pretendía hacer posible la movilización de toda la mano de obra existente para aumentar así a más del doble la producción bélica alemana. Este «programa Hindenburg» demostró ser en realidad un grave error, porque no había tenido en cuenta la difícil situación de las materias primas, y exigía demasiado de los servicios de transporte de que se disponía. Las tensiones cada vez más agudas entre la dirección política y el mando supremo del ejército hizo cada vez más difícil una política unitaria y llevaron a una creciente debilitación de la autoridad del gobierno Bethmann Hollweg.

En Austria-Hungría las cosas andaban aún peor. El régimen burocrático del conde Stürgkh consideraba su único deber hacer frente a las exigencias planteadas por la guerra, no preocu-

pándose casi en absoluto del estado de ánimo y de las tendencias políticas de las masas populares. La completa paralización de la vida constitucional del país fue aceptada de buen grado por los partidos alemanes, que no podían esperar nada positivo de una aventual convocatoria del Consejo Imperial, en el que los pueblos eslavos de la monarquía poseían la mayoría. Las otras nacionalidades, sin embargo, se vieron llevadas de esta manera a una oposición radical al imperio, una tendencia estimulada aún más por la poco razonable política represiva, sancionada por Stürgkh, llevada a cabo por las autoridades militares en las zonas fronterizas de la monarquía. Así se constituyeron, tanto en las regiones eslavas meridionales de Austria-Hungría, como en las checas, movimientos nacional-revolucionarios dirigidos contra la existencia del propio Estado plurinacional.

El *Comité Nacional Sudeslavo,* que había establecido desde 1915 estrechas relaciones con Servia y con los aliados, pudo ganar para su programa radical de crear un Estado nacional yugoslavo autónomo sólo a una pequeña parte de los eslavos meridionales de Austria-Hungría. La gran mayoría de los croatas exigía, en cambio, con energía la restauración de la Croacia histórica como Estado independiente dentro de la monarquía, apelando ahora también al principio de la nacionalidad. La realización de este programa hubiese requerido una radical reestructuración del sistema dual existente; sin embargo, era extremadamente dudoso que los magiares llegasen a dar su consentimiento a tal solución.

Mucho más amenazadora era la actividad de los nacionalistas radicales checos, que se organizaron bien pronto en una sociedad secreta, conocida más tarde bajo el nombre de *mafie.* Por otra parte, el movimiento nacional-revolucionario checo estaba dividido en una corriente paneslavista y en otra occidentalista. Mientras Kramár contaba con una rápida victoria rusa y quería conseguir la independencia de todos los pueblos balcánicos bajo la soberanía rusa, Benes y Masaryk perseguían un Estado checoslovaco autónomo según el modelo de los Estados de Europa occidental. Como la policía austríaca actuaba cada vez con mayor eficacia contra los nacional-revolucionarios checos, se fue desplazando progresivamente el peso de su actividad hacia los hombres políticos en el exilio. En la primavera de 1916, Masaryk y Benes fundaron en París un *Comité Nacional Checo,* que bien pronto desarrolló en los países de la Entente una propaganda masiva y eficaz contra Austria-Hungría, «cárcel de pueblos».

De momento estas aspiraciones no representaban un peligro

de muerte para la monarquía danubiana, aunque las deserciones en masa de regimientos eslavos en el frente ruso tenían que ser consideradas un síntoma preocupante. Mucho más grave fue la total incapacidad del gobierno de resolver de manera satisfactoria el grave problema del abastecimiento. Stürgkh consintió que el conde Tisza realizase en la parte transleithania del imperio una política de abastecimientos extremadamente egoísta, negándose incluso a contribuir de manera adecuada al aprovisionamiento de Viena y de las grandes ciudades de la parte cisleithania. El descontento general por la situación interna halló su expresión simbólica el 21 de octubre de 1916, con el asesinato del conde Stürgkh, por mano del socialista austríaco Friedrich Adler. Exactamente un mes más tarde, el 21 de noviembre de 1916, moría el viejo emperador Francisco José, al que, a pesar de todas las insuficiencias del Estado imperial, habían sido fieles amplios sectores de la población. Su sucesor, Carlos I, optó impulsivamente por un cambio radical de ruta. En la esperanza de poder resucitar una vez más la lealtad de los pueblos no alemanes a la monarquía, prometió volver a convocar el Consejo de la Corona, un intento que sin embargo demostró ser pronto inútil, además de que los partidos alemanes, que aspiraban a una total restauración de su antigua posición de supremacía en el Estado, protestaron enérgicamente en contra.

Más crítica aún era la situación en Rusia. Las grandes masas sufrían increíblemente bajo el gobierno tan imprudente como incapaz de una camarilla de políticos, que en fin de cuentas obedecían más a los deseos de Rasputín y de la zarina Alexandra Fjodorowna que a las necesidades objetivas del país. La desorganización de la economía nacional y el desmoronamiento del sistema de transportes alcanzaron desde el principio de 1916 formas cada vez más preocupantes, sobre todo porque el gobierno saboteó en gran medida los esfuerzos de la sociedad rusa de crear por propia iniciativa, a través de la formación de comités de guerra libres, un mínimo de organización económica. Nada demuestra mejor el fracaso de la burocracia zarista que el hecho de que incluso la archiconservadora Duma exigiese, al final del otoño de 1916, la instauración de un «gobierno de confianza» y la destitución, por motivos nacionalistas, del primer ministro Stürmer, acusado no sólo de absoluta incapacidad, sino también de tender a una paz por separado con Alemania. El nacionalismo de la exigua clase superior se volvía ahora contra el propio régimen zarista; en noviembre de 1916 la Duma obtenía por la fuerza la dimisión de Stürmer, sin que por eso mejorase la situación sustancialmente. El asesinato de

Rasputín, que era el principal responsable de la grotesca situación en la corte zarista, llevado a cabo el 17 (según el calendario occidental el 30) de diciembre de 1916 por el príncipe Felix Jussupow, fue considerado en aquellas circunstancias como un acto de liberación nacional. Estas desesperadas medidas de salvación llegaron, sin embargo, demasiado tarde. Ante la intransigencia del zar, incapaz de enjuiciar de manera realista la situación, Rusia se dirigía irremediablemente hacia la catástrofe.

De momento, en todos los Estados en guerra, los gobiernos eran aún amos de la situación. Pero no era posible ignorar el hecho de que el entusiasmo nacional de las grandes masas en los primeros meses del conflicto había dejado paso a un profundo cansancio, especialmente en Alemania, en Austria-Hungría y en Rusia, pero también en Italia y en Francia. Al principio del conflicto la actividad de la extrema izquierda contra la guerra y contra el apoyo que los partidos socialistas daban a los gobiernos había encontrado poco eco en la clase obrera. Desde el otoño de 1915 la situación empieza a cambiar. También es verdad que la extrema izquierda, en su lucha contra la guerra y contra la política de tregua civil de los partidos socialistas de los países beligerantes, se encontraba fuertemente fraccionada y completamente discorde sobre la táctica a seguir. En una primera conferencia celebrada del 5 al 8 de septiembre de 1915 en Zimmerwald (Suiza), Lenin quedaba en clara minoría con su propuesta de fundar una «Tercera Internacional Socialista» y de transformar la tregua civil en una guerra revolucionaria de las masas trabajadoras en todos los países contra las clases dominantes. En aquel momento retrocedía aun incluso la extrema izquierda ante la idea de llevar a cabo acciones revolucionarias. Las consignas contra la guerra dadas en Zimmerwald, repetidas en abril de 1916 en la Conferencia de Kienthal (Suiza), no quedaron sin repercusiones sobre la actitud de la clase obrera en los países en guerra y sobre todo en Alemania. En la primera mitad de diciembre de 1915, diecinueve socialdemócratas se declararon a favor de la táctica de Liebknecht —único dirigente que hasta aquel momento se había manifestado sin reservas en contra de la guerra— y votaron contra los créditos de guerra, rompiendo la disciplina del partido. Mientras el 1 de enero de 1916 el ala radical de la extrema izquierda, conocida más tarde con el nombre de «Espartaquistas», creaba un programa propio, distanciándose enérgicamente de la socialdemocracia, el grupo de Liebknecht trataba en vano conquistar desde dentro la organización del partido socialdemócrata. En marzo de 1916 —arres-

tado mientras tanto Liebknecht— Haase y sus seguidores quedaban excluidos del grupo parlamentario socialdemócrata y formaban un grupo socialista independiente, la «Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft» (Asociación socialdemócrata del trabajo). A partir de este momento la dirección del partido socialdemócrata no podía ya permitirse ceder en las cuestiones de los objetivos de guerra, ni conservar una actitud paciente respecto a las reformas internas.

En Francia, en cambio, en vista de la situación extremadamente difícil en que se encontraba el país, tampoco el ala radical de los socialistas estaba dispuesta a poner en duda la guerra defensiva en cuanto tal. Sin embargo, desde diciembre de 1915, cada vez ganaba más seguidores la corriente dirigida por Jean Longuet, que luchaba contra el apoyo incondicional al gobierno y que era partidario de una paz negociada. El éxito de esta corriente fue tal que, a principios de 1917, Sembat y Guesde prefirieron deponer sus cargos de ministros. Aún no se había roto la *union sacrée,* pero la confianza de las masas socialistas en el gobierno empezaba a vacilar.

El gobierno que menos tenía que temer a la izquierda era el inglés. En Gran Bretaña rechazaban sistemáticamente la guerra sólo «grupúsculos» insignificantes de socialistas. El *Labour Party* se atenía firmemente al programa de lealtad que había observado hasta entonces. Sin embargo, los defensores de una paz negociada ganaban cada vez más terreno entre las masas obreras.

En cuanto a Rusia, la policía había conseguido golpear duramente a las organizaciones de ambos partidos socialistas. El descontento de la clase trabajadora se expresaba, sin embargo, en una serie ininterrumpida de huelgas. Los bolcheviques no permanecieron inactivos. Desde el exilio organizaban una agitación cada vez más activa, y a partir de 1916 lograron crear de nuevo en el propio país una organización ilegal, y aprovechar para sus fines revolucionarios la desesperación de las grandes masas.

A pesar del creciente deseo de paz de las clases trabajadoras, que tenían que soportar el mayor peso de la guerra, y, sobre todo en el bloque de las potencias centrales, sufrían enormemente bajo la penuria de víveres, los gobiernos de todas las potencias en guerra estaban decididos a proseguir la guerra hasta la completa destrucción del enemigo. Bajo las duras condiciones creadas por la guerra, el abismo que separaba a las clases dominantes de las grandes masas de la población empezaba a hacerse cada vez más profundo. Las clases dominantes no estaban dispuestas a renunciar a parte de sus objetivos de guerra; al contrario, la consecución de una paz que cargase sobre el

enemigo los gastos de la guerra seguía siendo considerada como premisa para el mantenimiento del orden jurídico-social existente. Por ello, se seguían persiguiendo, sin tener en cuenta la situación militar, los antiguos objetivos militares.

Las potencias de la Entente habían avanzado notablemente por el camino —abierto con el tratado de Londres del 26 de abril de 1915— de la proyectada repartición del presumible botín de guerra mediante una serie de tratados secretos. En el acuerdo Sykes-Picot del 16 de mayo de 1916, Francia e Inglaterra se pusieron de acuerdo sobre la futura repartición del imperio otomano, y las negociaciones que siguieron con Rusia e Italia llevaron incluso a un proyecto que preveía la reducción del territorio de Turquía casi exclusivamente a la región anatólica. En Francia, desde julio de 1916, la exigencia de separar del Reich no sólo Alsacia-Lorena y el Saar, sino también todo el margen izquierdo del Rin, se discutía abiertamente y no sólo ya en los restringidos círculos del gobierno. Una «ocupación prolongada» de la Renania como fianza para el pago durante largos años de enormes reparaciones, parecía ahora lo mínimo que se podía exigir a Alemania, en caso de victoria. También los ingleses precisaron sus exigencias. En el seno del gobierno inglés existía una notable divergencia de opiniones sobre el problema de si convenía extinguir y fraccionar por completo el Reich alemán como gran potencia, o dejar subsistir un Estado nacional alemán, aunque debilitado, como contrapeso frente a Rusia. En cualquier caso no había ninguna duda sobre anexionar las colonias de Alemania y romper su posición en los mercados mundiales. Una conferencia económica interaliada, reunida en junio de 1916 en París, decidió negar también al Reich alemán después de la guerra la «cláusula de la nación más favorecida» durante un tiempo determinado, y de someter por muchos años el comercio alemán a discriminaciones. Los partidarios de una línea moderada, que, como lord Landsdowne, abogaban por una rápida paz negociada, se encontraron irremediablemente en minoría ante los que propugnaban una línea más rígida. El 28 de septiembre de 1916 Lloyd George expresaba, en una entrevista a la United Press, que fue muy bien acogida, el estado de ánimo de la grandísima mayoría de los ingleses declarando: «The fight must be to a finish — to a knockout»[115]. Asquith, a su vez, se apresuró, poco después, a declarar que en ningún caso estaría Inglaterra dispuesta a concluir una «deshonrosa paz de compromiso».

También en el campo de las potencias centrales se había reducido el margen para una paz negociada. Los esfuerzos de Bethmann Hollweg por impedir una discusión pública sobre

los objetivos de guerra, para garantizar al gobierno «mano libre» en el caso de negociaciones, habían sido inútiles; en octubre de 1916 se permitió finalmente la discusión sobre los objetivos de la guerra. Después de que en mayo de 1915, la fiebre por la determinación de los objetivos de guerra alcanzara su punto culminante, se había producido en Alemania un cierto enfriamiento de los ánimos. Pero a partir de la primavera de 1916 volvió a aumentar la agitación de la derecha en favor de objetivos extremistas, en parte también por motivos de política interior, ya que la derecha estaba irritada con Bethmann Hollweg por sus parciales concesiones a la socialdemocracia. El gobierno se mostró incapaz de resistir por más tiempo a tal presión, tanto más por cuanto que los anexionistas encontraban cada vez más apoyo en los círculos del gobierno. La situación se hizo insostenible cuando, a fines de 1916, los partidarios de ambiciosas anexiones en el Oeste y en el Este consiguieron atraer a su lado también a los héroes populares Hindenburg y Ludendorff.

Aunque las ideas de Bethmann Hollweg sobre los objetivos de guerra alcanzables por Alemania podían considerarse moderadas comparadas con las exigencias de la derecha, se movían también en un plano utópico. Cuando, en octubre de 1916, el gobierno alemán decidió presentar una propuesta propia de paz, no pensaba en absoluto en contentarse con el *statu quo ante*. En realidad, el canciller había querido evitar establecer en modo detallado las condiciones sobre las que se podía tratar eventualmente con las potencias de la Entente. Sin embargo, Hindenburg y Ludendorff insistieron en que los objetivos de guerra de las potencias centrales fuesen fijados anticipadamente para atar al canciller e impedir «a priori» una transigencia excesiva. Además querían que fuese garantizado previamente un esencial objetivo alemán de guerra, es decir, la constitución de un Estado polaco, formalmente autónomo, pero de hecho dependiente de las potencias centrales, ya que se confiaba en el reclutamiento de fuerzas polacas. Esta condición preliminar del mando supremo del ejército fue incluida luego en el llamado Manifiesto Polaco, proclamado por las potencias centrales del 5 de noviembre de 1916, en el que se preveía para un próximo futuro la constitución de un «Estado polaco autónomo» con una «monarquía hereditaria y un sistema constitucional». En el curso de largas negociaciones, primero entre los gobiernos de las potencias centrales y luego entre la dirección política y militar alemana se elaboró un programa de objetivos de guerra bastante detallado, que debía de servir de base a la oferta de paz de parte alemana. Este contenía entre

otros puntos la condición del reconocimiento del reino polaco y preveía adquisiciones territoriales de Alemania en Curlandia y Lituania, así como la creación de una franja fronteriza polaca al este de las fronteras de Prusia oriental. Otro punto fundamental era el reconocimiento del dominio indirecto del Reich alemán sobre Bélgica. Este dominio debía de llevarse a cabo con la ayuda de derechos especiales y privilegios en el campo económico, militar y político, un problema que se pensaba resolver en negociaciones especiales con el rey Alberto de Bélgica. De Francia se exigía la renuncia a la región metalúrgica de Longwy-Briey a cambio de pequeñas compensaciones territoriales en la Lorena, así como eventualmente, la cesión del Congo francés. También se había previsto, naturalmente, la reconquista de las colonias alemanas, éstas debían incluirse eventualmente en un intercambio global de territorios coloniales, con el que se hubiese podido superar el fraccionamiento del patrimonio colonial de Alemania. Tampoco las condiciones de los aliados eran demasiado modestas: Austria-Hungría reclamaba entre otros objetivos que Servia, Montenegro y Albania quedasen reducidos a Estados vasallos de la monarquía danubiana.

En vista del inmenso abismo entre los objetivos de guerra de ambos grupos de potencias, existían desde un principio muy pocas posibilidades de que se llevasen a cabo las negociaciones de paz; las potencias centrales se proponían la consolidación de su dominio sobre el continente europeo a través de la construcción de un cinturón protector de Estados satélites al Este y al Oeste, unido a una enérgica expansión ultramarina, mientras que los aliados perseguían el fraccionamiento del Reich alemán y de la monarquía danubiana, así como la repartición entre las potencias de la Entente, tanto del imperio otomano, como del patrimonio colonial alemán. Teniendo en cuenta el curso de las operaciones militares, al final de 1916 las potencias centrales se encontraban en una situación ventajosa para negociar. Disponiendo de numerosos triunfos, podían arriesgar, más que las potencias de la Entente, una conferencia general de paz. Naturalmente, tuvieron mucho cuidado en no comprometer la favorable posición de partida con una publicación prematura de sus condiciones de paz, y conforme a estas intenciones fue redactado el texto de oferta de paz que las potencias centrales presentaron el 12 de diciembre de 1916. La oferta presentaba un tono bastante arrogante, no mencionaba en modo alguno los objetivos de guerra, y remitía su discusión a una conferencia de las potencias en guerra.

Las potencias de la Entente se basaron en este punto para rechazar la oferta alemana como una mera jugada táctica poco seria, ya que no contenía ninguna declaración concreta de las condiciones propuestas por Alemania; sin embargo, esto no era más que un pretexto. En realidad, los aliados no estaban dispuestos a negociar en aquel momento una paz de compromiso, ni siquiera aunque los alemanes hubiesen ofrecido el *status quo ante*. Los esfuerzos llevados a cabo en los últimos meses para disuadir al presidente americano Wilson de iniciar una acción de paz son muy significativos en este sentido. La Entente estaba más bien decidida a provocar, por todos los medios disponibles, un cambio en la suerte de la guerra. Por consiguiente, en la nota de respuesta del 29 de diciembre de 1916, precedida de intensas consultas entre las potencias de la Entente, se pasó a la ofensiva moral. Los aliados se erigían como protectores de las pequeñas nacionalidades europeas exigiendo garantías efectivas, que hiciesen, de una vez para siempre, imposible una nueva agresión alemana. Las potencias de la Entente insistían además en la eliminación del brutal dominio del militarismo prusiano sobre Europa y la restitución de los derechos de libertad a los pueblos dominados por Alemania y Austria-Hungría.

En aquellas circunstancias no tenían ninguna posibilidad de éxito ni la oferta de paz de las potencias centrales, ni tampoco la propuesta americana de mediación, que Wilson presentó finalmente el 18 de diciembre de 1916. Las potencias centrales desperdiciaron la ocasión de llevar a cabo negociaciones de paz, al rechazar categóricamente la propuesta de Wilson de que las potencias en guerra hiciesen públicos sus propios objetivos, declarándose por fin dispuestas a comunicar tales objetivos al presidente americano, a título de información personal. Esta circunstancia permitió a las potencias de la Entente salir a su vez del atolladero recurriendo también a formulaciones de carácter general. En el fondo, la negativa de las potencias de la Entente estaba claramente motivada por el curso de la guerra: «Ellas [es decir, las potencias aliadas] creen en la imposibilidad de llegar, en el momento actual, a una paz que pueda ofrecerles reparaciones, restituciones y aquellas garantías que es lícito esperar frente a la agresión de las potencias centrales, cuyo principio es el de destruir la seguridad de Europa» [116].

Los Estados Unidos tenían en aquel momento la posibilidad de obligar a las potencias occidentales a acudir a la mesa de negociaciones, y el propio Wilson parecía dispuesto a hacerlo. En este sentido fue un error imperdonable la declara-

ción hecha el 9 de enero de 1917 por el gobierno alemán, bajo la presión conjunta del mando supremo del ejército y del de la marina, por la que se advertía que el 1 de febrero de 1917 se daba definitivamente vía libre a la «guerra submarina ilimitada». A partir de este momento los acontecimientos siguieron, en ambos lados del Atlántico, su curso inevitable. Wilson, que todavía estaba haciendo intentos en favor de la paz, se vio así irremisiblemente atraído al campo de la Entente; unas semanas más y la neutralidad armada, que el presidente americano había decidido declarar por el momento, se convertiría en participación activa de los Estados Unidos en la guerra. En Alemania, sin embargo, se confiaba en la «guerra submarina ilimitada» como «última, e infalible carta», al menos así lo aseguraba la Marina. Se esperaba poder poner de rodillas a los ingleses en el plazo de seis meses, aún antes de que las fuerzas armadas americanas pudiesen intervenir en la guerra de manera masiva. Con la inminente entrada en la guerra de los Estados Unidos la Primera Guerra Mundial se prestaba a asumir, según la expresión de Clausewitz, la forma de «guerra absoluta», que sólo permite la completa destrucción del enemigo. La situación entraba en una nueva fase. Las potencias centrales se encontraban ahora frente a la alternativa de una victoria completa o de una derrota total: habían dejado de existir las vías de compromiso.

VI. LAS PERIPECIAS DE LA GUERRA: EL AÑO 1917

Fracasada la oferta de paz de las potencias centrales y malogrado el intento de mediación del presidente Wilson, la Primera Guerra Mundial entraba en su fase decisiva. En ambas partes se estaba decidido a movilizar las últimas fuerzas disponibles para forzar una decisión que correspondiese a los objetivos previstos. Solamente Rusia se encontraba al borde del desmoronamiento. Las potencias occidentales se esforzaban por eso febrilmente en infundir al desfallecido aliado ruso nuevos ánimos para continuar la lucha. En una conferencia interaliada celebrada del 3 al 18 de febrero en San Petersburgo, que a causa de su nombre alemán había sido rebautizada al principio de la guerra con el nombre de Petrogrado, los aliados acordaron una estrategia común para el verano siguiente y se concedieron mutuamente objetivos de guerra más amplios que nunca. Claro que la confianza en una victoria por parte de la Entente había aumentado notablemente ante la perspectiva de la inminente entrada en la guerra de los Estados Uni-

dos, que ya el 3 de febrero de 1917 había roto las relaciones diplomáticas con el Reich alemán. En muchas partes se tendía ahora a aplazar cualquier acción ofensiva hasta que los Estados Unidos interviniesen activamente en el conflicto. Por otro lado, era peligroso dejar mientras tanto la iniciativa a las potencias centrales. Poincaré y Lloyd George decidieron, después de algunas vacilaciones, dar vía libre al general Nivelle, jefe de Estado Mayor francés, para la gran ofensiva franco-inglesa durante la primavera en el frente occidental; ofensiva destinada a llevar a cabo una desarticulación de las líneas alemanas que debería resultar decisiva.

Las potencias centrales confiaban, sin embargo, ahora por completo en la «guerra submarina ilimitada», sobre todo porque ya en febrero de 1917 los buques hundidos superaban en 181.000 toneladas totales de registro la cifra mensual de 600.000 toneladas fijada como objetivo por el almirantazgo, superando en abril incluso el millón. Mientras la marina, el mando supremo del ejército y grandes partes de la población contaban llenos de entusiasmo con poder obligar a Inglaterra, lo más tarde en agosto de 1917, a pedir la paz, la dirección política era más cauta. Pero también ella esperaba poder agravar, gracias a la «guerra submarina ilimitada», las dificultades de abastecimiento no sólo en Inglaterra, sino también en Francia e Italia, hasta el punto de inducir a la Entente a iniciar negociaciones de paz, en lugar de correr el riesgo de insurrecciones internas o de deserciones entre los propios aliados. El Alto Mando del ejército ya no contaba tampoco con una solución puramente militar del conflicto. En todos los frentes se limitó a la defensiva y, con el fin de ahorrar hombres y material, redujo, el 5 de febrero de 1917, el frente occidental a una línea defensiva más corta, cuidadosamente preparada, la llamada «línea Sigfrido», operación que estorbó sensiblemente los preparativos de ataque de Nivelle. El Alto Mando del ejército y la dirección política concordaban en la idea de que la victoria sería de aquella parte que tuviese los nervios más fuertes y que resistiese hasta que el enemigo hubiese llegado al final de sus fuerzas.

Con grandilocuencia nacionalista y consignas de resistir era cada vez más difícil colmar el profundo abismo, existente entre la voluntad exasperada de vencer de los grupos dominantes, que ahora perseguían objetivos de guerra más ambiciosos que nunca, y las grandes masas populares exhaustas. El descontento de la clase trabajadora hacia la dirección política fue avivado cuando, en febrero de 1917, en la Dieta prusiana los conservadores pasaron al ataque abierto contra los partidos demo-

cráticos del *Reichstag*, con el fin de impedir una reforma del sistema electoral prusiano de las tres clases. Pero lo que tuvo importancia decisiva fue la catastrófica situación de abastecimiento en las grandes ciudades industriales, que en febrero y marzo de 1917 asumía temporalmente formas extremadamente graves, debido a la excesiva carga del sistema de comunicaciones. El racionamiento de víveres, de por sí ya muy restringido, sufría nuevas reducciones drásticas; los nabos tenían que sustituir en gran parte al pan y a las patatas. En aquellas circunstancias era ilusorio esperar el desmoronamiento de las potencias de la Entente a causa de las crecientes dificultades de aprovisionamiento y de insurrecciones internas.

Las privaciones y por ello la oposición a la guerra de las grandes masas de la población aumentaban no sólo en Alemania y en Austria-Hungría, sino también en el campo de la Entente. En Italia la falta de carbón paralizó gravemente la economía y los transportes. En Francia la población civil no era la única en sufrir gravemente bajo los efectos de la guerra; también el aprovisionamiento de los soldados en el frente era extremadamente escaso, lo cual se unía a las inmensas penalidades a las que estaban expuestos. Comparados con sus aliados, los ingleses vivían al principio de 1917 aún en la abundancia; pero también en Gran Bretaña se hicieron sentir pronto de manera implacable los efectos de la «guerra submarina ilimitada», que imponían amplias restricciones a las importaciones y rígidas medidas de racionamiento.

En Rusia, el 7 de marzo (según el calendario ruso el 23 de febrero) de 1917, el desmoronamiento del abastecimiento de pan de Petrogrado dio el impulso definitivo al estallido de un gigantesco movimiento de huelga que, después de inútiles intentos de represión, desembocó el 11 de marzo (27 de febrero) en una insurrección abierta. Como los soldados se pasaban a las filas de las masas trabajadoras en huelga, había que descartar la idea de sofocar el movimiento insurreccional. En un abrir y cerrar de ojos la insurrección se extendió a Moscú y a casi todas las grandes ciudades del país. Según el modelo del soviet de San Petersburgo de 1905, se constituía de nuevo en Petrogrado un soviet de trabajadores y soldados que asumió la dirección del movimiento revolucionario. Cometiendo un grave error de valoración política, Nicolás II había creído ver en la Duma y no en la desesperación de las grandes masas populares, la fuente de todas las inquietudes, y había aplazado la convocatoria de la Duma, prevista para el 10 de marzo (26 de febrero). Sin embargo, la Duma, bajo la dirección de su presidente Rodzjanko, trató de salvar lo salvable. El 15 (2) de

marzo constituyó ésta, después de haberse puesto de acuerdo con el soviet de Petrogrado, reclutando sus miembros entre las propias filas, un «gobierno provisional» bajo la dirección del príncipe Lwow, mientras se preveía en breve plazo la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. El mismo día el zar abdicaba en favor de su hermano Miguel, el cual abdicó a su vez el día siguiente. El régimen zarista había sucumbido sin luchar.

Los esfuerzos del «gobierno provisional» por frenar el progresivo desmoronamiento del orden político-social ruso rompiendo radicalmente con el pasado zarista mediante el paso a una forma de gobierno democrático-liberal, fueron coronados por escaso éxito. También es verdad que el margen de acción que le había quedado al «gobierno provisional» era extremadamente limitado. Aunque derivaba su legitimidad de la voluntad de la Duma, en la que dominaban los grupos conservadores de la alta burguesía, y aunque su presidente, el príncipe Lwow, hubiese sido llamado a ocupar su cargo aún por el zar, el «gobierno provisional» dependía por completo de las decisiones del soviet de Petrogrado. Este había invitado a los trabajadores y a los soldados a que formasen en todo el país soviets de trabajadores y de soldados, y a que se procurasen sobre todo armas, y disponía por ello de una fuerza que el gobierno no se atrevía a tocar. El dualismo entre el «gobierno provisional», que pretendía proseguir con la máxima energía la guerra contra las potencias centrales, y el soviet de Petrogrado, en el que predominaba el deseo de una paz lo más rápida posible, impedía cualquier consolidación de la autoridad estatal. El soviet de Petrogrado, en el que los mencheviques y los nacional-revolucionarios poseían la gran mayoría, decidió tolerar al «gobierno provisional» a pesar de su carácter burgués, pero al mismo tiempo trató de seguir interpretando su papel de guardián del Santo Grial de la revolución. Ya el 27 (14) de marzo el soviet de Petrogrado hacía una llamada a los pueblos de todo el mundo, para que se rebelasen contra el yugo de los gobiernos capitalistas y pusiesen fin «con un esfuerzo común a la horrible masacre» de la Guerra Mundial[117]; un paso, muy poco grato a Miljukov, ministro del Exterior del nuevo gobierno, que recibió un sinnúmero de protestas formales de los aliados.

La progresiva descomposición del Estado ruso, que halló su característica expresión en escenas de fraternización entre las tropas rusas y las alemanas, abrió de improviso a las potencias centrales nuevas posibilidades de una victoria militar decisiva. Por otra parte, desde un punto de vista puramente ideológico, la caída del zarismo y el paso de Rusia a la de-

mocracia significaron para las potencias de la Entente un gran alivio. A partir de ese momento podía conducirse la guerra sin limitaciones, como una lucha contra la autocracia y la opresión. Los acontecimientos en Rusia eliminaron las últimas dudas de Wilson de entrar por fin activamente en la guerra contra el Reich alemán, aunque el desarrollo de la guerra submarina en las últimas semanas no le habían dejado otra alternativa. En su mensaje al Congreso, clamorosamente aplaudido, del 2 de abril de 1917, el presidente americano declaró que la intervención de los Estados Unidos en la guerra mundial se había hecho inevitable, si se quería «asegurar la instauración de la democracia en el mundo» [118]. Cuatro días más tarde, el 6 de abril de 1917, los Estados Unidos declaraban la guerra a Alemania. Sin embargo, Wilson evitó, desde el principio, identificarse con los objetivos de guerra de las potencias de la Entente, calificando a los Estados Unidos terminantemente como potencia «asociada», no «aliada». Con la intervención de los Estados Unidos la guerra adquirió nuevas dimensiones histórico-universales. Desde este momento no se trataba ya únicamente del triunfo de un bloque de potencias europeas sobre otro, ni de las rivalidades entre diversos imperialismos, sino de la futura configuración de Europa. El problema del futuro orden político interno dejaba en un segundo plano la vieja discusión sobre los objetivos de guerra en el campo territorial, económico y político.

La lucha de las democracias occidentales contra los sistemas de poder semiconstitucionales de las potencias centrales se transformó de repente, con la llegada del bolchevismo, en una lucha a tres, que encima se llevaba a cabo con un orden de batalla distorsionado; a esto contribuyó también la política alemana. Desde la revolución de febrero las potencias occidentales trataron de derribar el débil régimen liberal-burgués del «gobierno provisional» e intentaron que Rusia no abandonase el conflicto. El gobierno alemán, hizo, sin conocer plenamente las consecuencias de su acción, lo contrario, es decir favorecer con todos los medios el desarrollo progresivo de la revolución en Rusia. Al final de marzo de 1917, Lenin y todo un grupo de sus seguidores, de los que se sabía que propugnarían la inmediata conclusión de la guerra, fueron autorizados por los alemanes a trasladarse a Rusia viajando en vagones sellados vía Suecia. Aceptar el apoyo alemán era extremadamente arriesgado para Lenin, ya que se exponía a ser acusado de ser agente alemán y perder así su influencia. Pero en un momento en que los acontecimientos pendían en Rusia de un hilo, cualquier medio era bueno para escapar del exilio suizo

y poder intervenir directamente en el curso de los acontecimientos. El 16 (3) de abril de 1917 por la tarde llegaba Lenin a Petrogrado. En sus famosas tesis *Sobre los objetivos del proletariado en la Revolución actual* del 17 (4) de abril de 1917, dio inmediatamente la consigna de negar cualquier apoyo al «gobierno provisional», de desenmascarar el carácter imperialista de su política bélica y de dar todo el poder no a la próxima Constituyente, sino al soviet, como primer paso hacia la conquista del poder por parte de los bolcheviques. Por el momento las cosas salían como había esperado Alemania. Con la aparición de Lenin sobre la escena política rusa, la balanza se inclinaba decididamente en favor de un ulterior desarrollo revolucionario. Cuando Miljukov se atrevió al final de abril de 1917 a reconocer abiertamente, en contra de las disposiciones del soviet de Petrogrado, los compromisos que había asumido Rusia frente a los aliados, dando a entender que seguía considerando válidos los acuerdos interaliados sobre los objetivos de guerra, se desencadenó una violenta ola de protestas que provocó finalmente la caída del ministro del Exterior. El 15 (2) de mayo de 1917, el soviet de Petrogrado volvió a exigir, en una llamada a los socialistas de todos los países, una «paz sin anexiones ni reparaciones».

A pesar del fuerte deseo de paz de las grandes masas de trabajadores y de campesinos rusos, en las semanas y en los meses sucesivos, el «gobierno provisional» emprendió los últimos intentos por frenar el desmoronamiento del orden interno y la descomposición de los ejércitos rusos. Según el Alto Mando sólo pasar a la ofensiva podía salvar aún la situación; así se llevó a cabo en junio un último esfuerzo, con la llamada ofensiva Kerenski, que sin embargo fracasó después de algunos éxitos iniciales. Desde aquel momento el clamor por una paz a cualquier precio y lo más pronto posible comenzó a hacerse sentir entre los soldados rusos y Rusia dejó de ser, como consecuencia, un serio factor militar en la lucha de los pueblos. Las potencias de la Entente seguían la evolución de estos acontecimientos con creciente preocupación, tanto más cuanto que al Oeste la ofensiva de Nivelle, iniciada con tantas esperanzas, había fracasado a comienzos de mayo después de escasas ganancias territoriales y con pérdidas gigantescas. Por otro lado tampoco los gobiernos de las potencias centrales tenían motivos para mirar al futuro con optimismo. Los esperados efectos políticos de la «guerra submarina ilimitada» se hacían esperar, a pesar de los numerosos hundimientos conseguidos, y se podía prever fácilmente que las tropas americanas, que se estaban preparando para la guerra, desplazarían tarde o tem-

prano de manera decisiva el precario equilibrio de las fuerzas en el frente occidental en contra de las potencias centrales.

En estas circunstancias los acontecimientos de la revolución rusa de febrero provocaron en todos los países en guerra un notable fortalecimiento de las corrientes pacifistas en el seno de la clase obrera. Es cierto que la llamada del soviet de Petrogrado al proletariado de todos los países en guerra pidiéndole que se alzase contra sus gobiernos halló sólo en grupos poco importantes de la extrema izquierda una acogida favorable. Pero, habiéndose demostrado la posibilidad de llevar a cabo acciones eficaces revolucionarias contra la guerra, la crítica de las masas trabajadoras a la situación político-social existente, unida a la desesperación por la agravación progresiva de la crisis de alimentos, desembocó en un gran movimiento huelguístico. En abril de 1917 tuvieron lugar, en numerosas ciudades industriales de Alemania y de Austria-Hungría, huelgas de masas que principalmente pretendían hacer sentir la protesta de los trabajadores contra la catastrófica situación del abastecimiento, pero que al mismo tiempo daban una clara expresión del descontento de los trabajadores frente a la política bélica oficial. También las masas obreras inglesas empezaron a dar señales de descontento contra las rigurosas medidas de Lloyd George destinada a potenciar la producción bélica inglesa. Mucho peor era la situación en Francia, donde en abril y mayo no sólo estallaron grandes huelgas de masas, con las que los trabajadores querían protestar contra la prosecución de la guerra en nombre de ambiciosos objetivos militares, sino que también se produjeron graves motines en el frente, que no tuvieron consecuencias fatales sólo porque el Alto Mando del ejército alemán no tenía pleno conocimiento de ellos. En el curso de pocas semanas Pétain consiguió, sin embargo, con una combinación de conciliación y de dureza, dominar este movimiento dirigido principalmente contra la realización de nuevos y sangrientos ataques frente a las bien defendidas líneas alemanas, y restablecer la confianza del ejército francés en sus mandos.

Los partidos socialistas prestaron, en parte, una ayuda activa a los gobiernos al reprimir las numerosas huelgas espontáneas, que en su mayoría tenían lugar sin la participación de los sindicatos. No obstante, el giro hacia la izquierda que partía de Rusia se apoderó en igual medida de todas las corrientes del movimiento socialista. La propuesta, que en un principio había partido de los socialistas de Holanda y de los países escandinavos, de convocar un congreso socialista internacional para discutir la manera de restablecer la paz, era acogida ahora

de manera extremadamente positiva por los partidos socialistas de todos los países en guerra. Sólo Lenin era contrario, a experimentos de este género que, en caso de tener éxito, hubiesen favorecido únicamente a sus rivales los mencheviques. Los gobiernos alemán y austro-húngaro acogieron positivamente la idea de tal conferencia, ya que hasta cierto punto podían estar seguros de la lealtad de los líderes de la socialdemocracia. Naturalmente tampoco consideraban oportuno dar lugar a negociaciones de paz gracias a la mediación de los partidos socialistas; sin embargo, en aquel momento estaban bastante interesados en una difusión del movimiento pacifista en los países de la Entente. Por razones opuestas Francia y, después de algunas vacilaciones iniciales Inglaterra, negaron el pasaporte a los delegados de los partidos socialistas respectivos, condenando de esta manera la conferencia al fracaso.

Sea como fuere, desde la primavera de 1917 aumentó, no sólo entre las potencias centrales, sino también en el campo de la Entente, la voluntad de provocar un cambio de la situación por medio de negociaciones secretas entre los países en guerra. Esto era cierto particularmente para Austria-Hungría, donde Carlos I y su nuevo ministro del Exterior, Czernin, se daban cuenta de que sólo una rápida conclusión de la paz podría evitar la inminente desmembración del Estado plurinacional. Por otro lado, Lloyd George y Poincaré abrigaban las esperanzas de poder apartar con una paz por separado a la monarquía danubiana de su aliado alemán, para vencer luego definitivamente a este último. Pero Carlos I y Czernin no pensaban en absoluto en la conclusión de una verdadera paz por separado, sino, en todo caso, en una paz por separado como primer paso para una paz general. En aquellas circunstancias los sondeos que Carlos I hizo llevar a cabo cerca de Poincaré a su cuñado, el príncipe Sixto de Parma, que servía en el ejército belga, se hallaron desde un principio bajo una estrella adversa; igual suerte tuvieron los contactos simultáneos del conde Mensdorff con personalidades londinenses próximas al gobierno, y las del barón Musulin con Haguenin, un intermediario de Jules Cambon. A pesar de una considerable presión diplomática, Czernin no consiguió convencer al aliado alemán para una sustancial reducción de sus objetivos de guerra en el Oeste. Tampoco la oferta de los austríacos de desinteresarse de Polonia y de ceder Galitzia al nuevo Estado polaco pudo inducir a los hombres de Estado alemanes a acceder a la cesión de Alsacia-Lorena, que Francia había convertido en la primera condición para iniciar discusiones de paz. Estando así las cosas poco importaba la promesa de Carlos I, hecha en un

escrito personal dirigido a Poincaré, de apoyar «las legítimas aspiraciones de Francia con respecto a Alsacia-Lorena»[119]. Por otro lado, los aliados no consiguieron obtener, en la conferencia celebrada en abril de 1917 en St. Jean de Maurienne, el consentimiento de Italia a una paz por separado con Austria-Hungría. Italia persistía por el contrario inflexible en el cumplimiento total de las reivindicaciones que se habían formulado en el Tratado de Londres de 1915.

Tampoco los esfuerzos de Alemania por llegar a una paz por separado con Rusia, fomentados con la máxima insistencia por Austria-Hungría, tuvieron de momento ningún éxito, aunque Bethmann Hollweg se declaraba dispuesto, en un artículo oficial publicado el 15 de abril de 1917 en la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* con formulaciones extremadamente ambiguas, a conceder a Rusia una paz honorable sobre la base de la fórmula de paz rusa; en realidad en Berlín no se quería renunciar en absoluto a separar de Rusia los Estados limítrofes (Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Polonia y Ucrania) y anexionarlos a las potencias centrales. De esta manera los sondeos de paz efectuados a través de Suecia y Suiza no llegaron a prosperar.

Por el contrario, volvieron a predominar una vez más sobre el creciente número de políticos que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, los grupos que propugnaban una paz sobre la base de la victoria absoluta con las correspondientes anexiones e indemnizaciones, a pesar de que la situación política interna se agrava cada vez más. En Alemania, el Alto Mando Supremo del ejército acordó con los exponentes de la industria pesada imponer a la dirección política y al aliado austríaco objetivos de guerra cada vez más desmesurados. Cuando entonces, al principio de julio de 1917, en vista del claro fracaso de la «guerra submarina ilimitada», se constituyó en el *Reichstag* una mayoría dirigida por Matthias Erzberger que exigía un rápido fin de la guerra por medio de negociaciones y además una mayor participación del *Reichstag* en las decisiones políticas, Ludendorff y su ayudante político, el coronel Bauer, aprovecharon la ocasión para derribar a Bethmann Hollweg. El sucesor de éste, Michaelis, no se atrevió a oponerse con energía a las decisiones del mando supremo del ejército y así la famosa «resolución de julio», con la que el *Reichstag* se había pronunciado en favor de una rápida conclusión del conflicto a través de una paz negociada, no fue nada más que un trozo de papel sin ningún valor.

El nuevo secretario del Exterior, Richard von Kühlmann, que ya no consideraba posible una conclusión de la guerra pu-

ramente militar, inició una lucha casi sin esperanza por crearse el margen de acción necesario para tratar de alcanzar el fin del conflicto por vías diplomáticas. El fue el primer político alemán en un cargo de gran responsabilidad que se dio cuenta que no era posible llegar a una paz si no era restablecido en todos sus derechos el Estado belga. Pero ya sea por motivos de carácter técnico o por la resistencia que encontraba en la Corte y en los círculos militares, no se atrevió a hacer una declaración en este sentido, cuando a comienzos de agosto de 1917 el papa Benedicto XV presentó una propuesta de mediación de paz a las potencias beligerantes. Mientras los imperios centrales respondían con evasivas a los requerimientos del nuncio pontificio, Pacelli, que dirigía las negociaciones, a exponer abiertamente los objetivos de guerra de Alemania y pronunciarse de manera inequívoca sobre la cuestión belga, las potencias occidentales no se dignaron siquiera a contestar la nota papal; Wilson, en cambio, declaró que se negaba a negociar con los actuales representantes de Alemania.

Mientras que en Berlín se creía poder tener sobre la cuestión de la paz una actitud extremadamente cauta y rígida, en Viena las cosas eran bien distintas. La situación económica de la monarquía danubiana era catastrófica y el intento de comprometer una vez más a los pueblos no alemanes al ideal del Estado austro-húngaro había fracasado. Las declaraciones programáticas que los representantes de las distintas naciones habían hecho al final de mayo de 1917 con motivo de la nueva convocación del Consejo Imperial, no dejaban ninguna duda de que éstas sólo sostendrían la continuidad de la monarquía en el caso que les fuese concedida la plena autonomía en el marco del sistema federalista. Por eso, en agosto de 1917, Czernin emprendió un nuevo y desesperado intento de abrir un diálogo con la Entente. En Berlín no habrían sido nunca aceptadas las condiciones que transmitió el conde Armand por orden del ministro de la Guerra, Painlevé, que poco después se convertía en primer ministro; tales condiciones preveían, entre otras, la completa reintegración de Bélgica, la restitución de Alsacia-Lorena con las fronteras de 1812, así como la desmilitarización de la Renania. De hecho, los franceses aspiraban también a la conclusión de una paz por separado con Austria-Hungría. Pero en aquellas circunstancias las negociaciones secretas austro-francesas fracasaron igual que los contactos paralelos entre el diplomático alemán von der Lancken y Briand. La suposición de Kühlmann de que sería más fácil tratar con los ingleses, también demostró ser utópica. Sus tentativas de otoño de 1917 de iniciar negociaciones con el gobierno inglés, con la

ayuda del diplomático español Villalobar, fracasaron lamentablemente. En ambas partes no se podía, después de tres años de guerra, concebir una paz que solamente reportase el *status quo ante.*

En Francia se impuso entonces la tendencia de luchar hasta la victoria total sobre las potencias centrales. Una ola de polémicas desenfrenadas contra el ministro del Interior, Malvy, acusado de haber dejado mano libre a la propaganda derrotista de los grupos pacifistas, en modo particular del *Bonnet Rouge,* llevó al poder al viejo Clemenceau, que instauró prácticamente un poder personal, convirtiendo en exclusiva línea directriz de su política una guerra a ultranza, así como la represión de cualquier iniciativa pacifista. También en Italia, después del gran triunfo de la ofensiva austro-alemana en Caporetto, que sólo a duras penas pudo ser parada en el Piave, se formó en octubre de 1917 una coalición de todas las fuerzas nacionales. Incluso los socialistas moderados, que hasta aquel momento habían combatido apasionadamente la guerra, no se sustrajeron ya a la llamada del nuevo gobierno Orlando en favor de un esfuerzo común para la defensa de la patria en aquel momento de extremo peligro.

En Rusia, mientras tanto, se abría al final de otoño de 1917 una nueva fase de revolución. En las semanas y en los meses que siguieron a la ofensiva de julio se había debilitado cada vez más el poder del «gobierno provisional». En los primeros días de julio de 1917 asumió Kerenski el cargo de primer ministro y los miembros burgueses fueron sustituidos por representantes del soviet de Petrogrado. El gobierno de Kerenski, constituido ahora sólo por elementos socialistas, tampoco podía contener la progresiva radicalización de las masas. El fuerte deseo de paz del pueblo ruso no se dejaba apaciguar ya con consignas de resistir hasta el fin por la patria, y tampoco era posible impedir a los campesinos, hambrientos de tierras, que se adueñasen por su cuenta de las posesiones de la nobleza rural, tanto más cuanto que las elecciones para la Constituyente, que debían de haber decidido una gran reforma agraria, eran continuamente aplazadas. Los bolcheviques, que propugnaban sin reservas una rápida estipulación de la paz, ganaban cada vez más seguidores. En los soviets, éstos seguían en minoría frente a los mencheviques y los social-revolucionarios. Un intento de insurrección en Petrogrado, en realidad mal preparado, al principio de julio, fracasó por completo y desacreditó durante algún tiempo a los bolcheviques. El propio Lenin tuvo que huir a la vecina Finlandia para evitar ser detenido. Frente a los otros partidos de la izquierda, los bolcheviques poseían, sin embargo,

la ventaja de tener una decisión rigurosa, incondicional, y de estar rígidamente organizados. «Nos hallamos en la situación ventajosa de un partido —escribía Lenin entonces—, que en medio de la inaudita indecisión de todo el imperialismo y de todo el bloque de los mencheviques y de los social-revolucionarios conoce perfectamente su camino»[120]. En agosto de 1917 un intento del general Kornílov de reprimir en la capital el movimiento revolucionario y de adueñarse del poder, llevó a un cambio total de la situación en favor de los bolcheviques. El golpe de Estado, al que no se atrevió a adherirse Kerenski (aunque secretamente había favorecido el plan de Korníiov de aniquilar sin piedad los soviets, y sobre todo el movimiento bolchevique), fracasó ante la resistencia de los guardias rojos, un cuerpo formado por el soviet de Petrogrado, y por el hecho de que las tropas no estaban dispuestas a dejarse utilizar para objetivos de la política interna. Mientras el prestigio del «gobierno provisional» sufría un nuevo y grave golpe, los bolcheviques, los más decididos adversarios de la reacción, conseguían la mayoría en los soviets de Petrogrado, Moscú y de otras ciudades industriales. Aprovechando aquella favorable situación, que probablemente no iba a volver a presentarse de nuevo, Lenin decidió la insurrección armada. «Detrás de nosotros está la mayoría de la clase, la vanguardia de la revolución, la vanguardia del pueblo, capaz de arrastrar a las masas»[121], escribió de manera bastante eufemística al reacio comité central del partido, que finalmente el 23 (10) de octubre cedió a su voluntad, tomando el correspondiente acuerdo. Los soviets consiguieron utilizar el comité revolucionario militar del soviet de Petrogrado, que había sido creado en un principio en defensa de golpes de Estado, para adueñarse de la guarnición de Petrogrado, eliminando a las autoridades regulares. Era preciso actuar con la máxima urgencia, ya que el 7 de noviembre (25 de octubre) tenía que reunirse en Petrogrado el Segundo Congreso panruso de los soviets, y era previsible que los mencheviques y los social-revolucionarios fuesen a alcanzar una mayoría aplastante. A primeras horas de la mañana del 25 de octubre se lanzó al ataque el comité revolucionario militar dirigido por Trotski, ocupando todos los puntos estratégicos importantes de la capital, según un plan minuciosamente elaborado, rodeando el Palacio de invierno, donde se hallaba reunido el «gobierno provisional». Toda resistencia llegó demasiado tarde; sólo Kerenski logró ponerse a salvo de los bolcheviques.

El Segundo Congreso Panruso de los Soviets, reunido al anochecer del 7 de noviembre (25 de octubre), debió enfrentarse a los hechos consumados. Las violentas protestas de los

mencheviques, social-revolucionarios y federales contra el golpe de Estado bolchevique, que era considerado como una traición a la democracia proletaria, no pudieron ya cambiar las nuevas relaciones de poder. Los mencheviques y los social-revolucionarios de derecha decidieron, como protesta, abandonar el Congreso de los Soviets, en el que bajo la presión de los guardias rojos, ya no era posible llevar a cabo negociaciones abiertas. Esta actitud favoreció, sin embargo, a los bolcheviques: con la máxima lucidez aprovecharon el Congreso incompleto, en el que ahora disponían de la mayoría, para dar retroactivamente apariencia de legitimidad a la conquista del poder de los bolcheviques. El 8 de noviembre (26 de octubre) el Segundo Congreso Panruso de los Soviets aprobó por unanimidad tres decretos, redactados por el propio Lenin, en los que se ofrecía a los pueblos y gobiernos en guerra «una paz inmediata sin anexiones ni reparaciones» y en los que se decidía también la expropiación sin indemnización de la tierra en favor de las comunidades rurales, así como la constitución de un «Consejo de los Comisarios del pueblo» destinado a asumir todo el poder ejecutivo hasta la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Este consejo estaba compuesto casi exclusivamente por representantes bolcheviques, y el propio Lenin ocupaba la presidencia.

Así quedaba decidida en Rusia la victoria del bolchevismo. Un intento de Kerenski de arrebatar el poder a los bolcheviques en Petrogrado, con la ayuda de tropas retiradas del frente, fracasó, ya que la mayoría de los soldados se pasaron a las filas de los revolucionarios. Además, el fuerte deseo de paz de las tropas hizo imposible la organización de cualquier ofensiva contra las fuerzas revolucionarias. De esta forma los bolcheviques lograron en pocos días hacerse con el poder, sin gran derramamiento de sangre, también en Moscú y en la mayor parte de las otras ciudades rusas. Como los bolcheviques aseguraron que no querían obstaculizar la convocatoria de la Asamblea Constituyente, prevista para el 5 de enero de 1918, las grandes masas populares estaban por el momento dispuestas a reconocer su poder, mientras todas las iniciativas contrarias se perdían en el clamor general de paz. Lenin se dispuso inmediatamente a llevar a cabo su obra de organización del poder de los soviets y a neutralizar sistemáticamente a todos sus adversarios políticos.

La tarea más importante era, sin embargo, poner fin lo más pronto posible a la guerra, hasta que hubiese madurado también la revolución en los otros países en guerra. Después de que la oferta de paz general dirigida por Trotski a todos los

países en guerra no hubiera tenido ningún éxito, se concluyó el 15 (2) de diciembre en Brest-Litovsk un armisticio entre Rusia y los imperios centrales. La esperanza de Trotski de que las potencias occidentales, bajo la presión de las masas trabajadoras, se uniesen finalmente a las negociaciones, no se vio cumplida. Las potencias aliadas y asociadas no lograron siquiera ponerse de acuerdo sobre la respuesta común que debían dar al nuevo gobierno de Rusia. En el cuartel general de los aliados reinaba un ambiente sombrío; no se ignoraba el hecho de que con el definitivo abandono de Rusia, los imperios centrales volvían a tener una nueva posibilidad de cambiar la suerte del conflicto mundial en su favor, antes de que la supremacía de los Estados Unidos llegase a imponerse definitivamente. Ante las potencias centrales se abrían las perspectivas de poder oponerse con éxito al ataque de Inglaterra, Francia y de los Estados Unidos, aprovechando los grandes recursos económicos del enorme espacio ruso.

VII. LA CAIDA DE LOS IMPERIOS CENTRALES

El 22 de diciembre de 1917 se iniciaron en Brest-Litovsk negociaciones de paz entre la Rusia revolucionaria y los imperios centrales. Con la intención de despertar a los trabajadores de los países en guerra, y para ganarles como aliados contra el imperialismo, los bolcheviques habían insistido en que las negociaciones se llevasen a cabo en público. La delegación soviética inauguró la Conferencia con la propuesta de paz general sin anexiones ni reparaciones, sobre la base del «derecho de autodeterminación» de los pueblos, establecido ya en el *Decreto sobre la paz* del 8 de noviembre de 1917. La nueva diplomacia revolucionaria de los bolcheviques, dirigida más a los pueblos que a los gobiernos, colocaba a los hombres de Estado de las potencias en guerra ante nuevos problemas inesperados. La aceptación incondicional de la fórmula de paz rusa hubiese hecho ilusorios los planes y acuerdos relativos a los objetivos de guerra tanto de los imperios centrales como de la Entente, y la interpretación revolucionaria del derecho de «autodeterminación», de los bolcheviques, podía desquiciar no sólo el orden político existente en Europa central, sino también, al mismo tiempo, el imperio colonial de todas las grandes potencias. Según las ideas de Lenin, este derecho debía de aplicarse a todos los grupos nacionales que en el pasado o en el presente hubiesen carecido del derecho de libre y democrática decisión sobre su

pertenencia a una determinada federación de Estados. Esto se refería también a los pueblos coloniales.

No obstante las peligrosas consecuencias que el programa de paz ruso podía tener sobre la situación interna de los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía se unieron el 25 de diciembre de 1917 a la propuesta rusa de una conclusión de una paz inmediata y general «sin adquisiciones territoriales violentas, ni reparaciones», a condición de que en un determinado plazo también las potencias de la Entente hiciesen suyas estas condiciones [122]. Al mismo tiempo se trató cuidadosamente de limitar los principios propuestos por los bolcheviques, y en particular de excluir la aplicación del «derecho de la autodeterminación de los pueblos» a los territorios sometidos al dominio de las potencias centrales. Por el contrario, las potencias de la Entente no mostraron, como era de esperar, la más mínima inclinación a adherirse a las negociaciones de paz, aunque las negociaciones de Brest-Litovsk fueron suspendidas del 29 de diciembre de 1917 al 8 de enero de 1918 para facilitar su participación. Pero ya no era posible para los hombres de Estado de la Entente pasar por alto la llamada común a la paz desde dos partes tan distintas. El 5 de enero Lloyd George justificó en una conferencia de sindicatos en Londres los objetivos de guerra de los aliados remitiéndose a la fórmula del «derecho a la autodeterminación de los pueblos», evitando hábilmente la delicada cuestión de la renuncia a las anexiones y reparaciones. Lloyd George, cuyo discurso causó sensación, negó que la Entente hubiese pretendido alguna vez destrozar el Reich alemán o destruir Austria-Hungría. En nombre del «derecho a la autodeterminación de los pueblos» exigió, sin embargo, no sólo la completa restitución de Bélgica, de Servia, de Montenegro y de Rumania, sino incluso la reparación de los daños causados por la guerra, la restitución de Alsacia-Lorena a Francia y la creación de un Estado polaco autónomo que comprendiese también las regiones polacas de Prusia. Finalmente, también la concesión de una amplia autonomía a los pueblos danubianos, así como la satisfacción de las pretensiones territoriales de Italia y Rumania. Con argumentos análogos justificó incluso la cesión de las colonias alemanas. Lloyd George proponía además la creación de una organización internacional que garantizase en el futuro la paz mundial y el desarme general. Pocos días más tarde, también Wilson, preocupado porque la propaganda rusa de paz pudiese desbaratar sus intentos de instaurar un orden democrático en Europa, presentó un programa propicio: los llamados Catorce Puntos. Estos preveían la supresión de toda diplomacia secreta, la «libertad

de los mares» y la reorganización de Europa con libre autodeterminación sobre la base del principio de la nacionalidad; para los pueblos de Austria-Hungría y para los pueblos no turcos del imperio otomano, Wilson proponía solamente «más amplias bases para un desarrollo autónomo», una fórmula que, sobre todo, los hombres políticos checos en el exilio consideraron con gran preocupación [123]. Las proposiciones de Wilson, como las de Lloyd George, culminaban en la propuesta de la creación de una Sociedad de las Naciones que garantizase la misma seguridad efectiva tanto a las naciones grandes como a las pequeñas.

Los Catorce Puntos de Wilson no resultaban precisamente agradables a las potencias de la Entente por varios motivos, ya que equivalían a una anulación de los acuerdos de los aliados sobre los objetivos de guerra, comprometiendo también el pleno ejercicio del dominio de Inglaterra sobre los mares. Pero para las potencias centrales aquéllos eran en aquel momento del todo inaceptables, en cuanto que contenían la exigencia explícita de la cesión de la Alsacia-Lorena, de las regiones polacas de Prusia y del Trentino, aparte de que el presidente americano puso la democratización del Reich alemán como primera condición previa para la apertura de conversaciones de paz. La diplomacia de Wilson pretendía en realidad provocar la sublevación de la izquierda política dentro de las potencias centrales contra los regímenes vigentes, una tendencia que en los sucesivos discursos sobre la guerra del presidente se puso de manifiesto con cada vez mayor evidencia. La hegemonía de las élites conservadoras en Europa central seguía aún intacta, aunque ahora tuviesen que hacer algunas concesiones a las grandes masas; al menos en las cuestiones nacionales, aquéllas podían estar seguras del dócil apoyo de amplios estratos de la burguesía. Una aceptación de las exigencias de Wilson hubiese barrido el gobierno de Hertling, que había sucedido en octubre de 1917 al incapaz Michaelis; y el emperador Carlos tampoco estaba dispuesto a renunciar al régimen autoritario-burocrático del Estado austro-húngaro y a hacer depender el futuro de la monarquía de la incierta voluntad de sus pueblos, eslavos en su mayoría.

Para los imperios centrales existía sin embargo la posibilidad de demostrar, con la conclusión de una paz moderada en el Este, la voluntad de paz de Alemania, procurándose así un ventajoso punto de partida para una paz de compromiso en el Oeste, como la que pedían con igual insistencia las izquierdas francesa y británica. Sin embargo, los imperios centrales no pensaban en absoluto en renunciar a la realización de sus ob-

jetivos de guerra en el Este; al contrario, estaban decididos a crear condiciones favorables en el Este y sobre todo a obtener el máximo control posible sobre el potencial económico de los territorios rusos, a fin de poder continuar con nuevas energías la guerra en el Oeste. En las negociaciones de Brest-Litovsk, Kühlmann trató de jugar contra los bolcheviques la carta del «derecho a la autodeterminación de los pueblos», remitiéndose sobre todo a los deseos de los Consejos Regionales *(Landesräte)* creados en Curlandia, Lituania y Polonia (países sometidos al régimen de ocupación alemán) que representaban a lo sumo a una exigua capa superior de la población, con el fin de separar de Rusia a los pueblos limítrofes y de fundar en la Europa centro-oriental un conjunto de Estados nacionales formalmente autónomos, pero estrechamente ligados desde el punto de vista económico, político y militar a los imperios centrales. Igualmente se dispusieron las potencias centrales a concluir una paz por separado con el gobierno fantasma ucraniano, la Rada, constituido bajo la protección alemana, para extender la esfera de influencia de Alemania hasta el Don. La delegación rusa se negó enérgicamente a aceptar estas ambiciosas exigencias, y mucho menos bajo la bandera del derecho de la «autodeterminación de los pueblos», que ambas partes interpretaban de manera radicalmente distinta. Cuando el 10 de enero Alemania dio a entender que en caso de necesidad estaría dispuesta a imponer las condiciones de las potencias centrales por la fuerza, se produjeron dentro del grupo dirigente ruso controversias enconadas sobre la disyuntiva de si había de aceptarse aquella paz impuesta por la fuerza o llevar a cabo una «guerra revolucionaria» contra los imperios centrales. Lenin, que propugnaba una paz a toda costa, porque la revolución en Alemania y en Austria-Hungría no estaba aún madura, sólo pudo convencer a una minoría. Se acordó finalmente aceptar el compromiso propuesto por Trotski de rechazar la firma del tratado de paz pero de declarar al mismo tiempo el fin de la guerra. Como consecuencia, el 10 de febrero de 1918, un día después de la conclusión de la paz con la Rada ucraniana (que se había llevado a cabo a pesar de que la Rada se viera obligada a abandonar precipitadamente Kiev), la delegación rusa interrumpió las negociaciones con una declaración de protesta de Trotski. En el campo de las potencias centrales se reaccionó con sobresalto y preocupación. Kühlmann sugirió aceptar de hecho la propuesta rusa de renunciar a un tratado formal de paz y de contentarse con el dominio efectivo sobre las zonas limítrofes de Rusia, ya que una reanudación de las operaciones hubiese tenido efectos desastrosos sobre el estado de ánimo de la opinión pública ale-

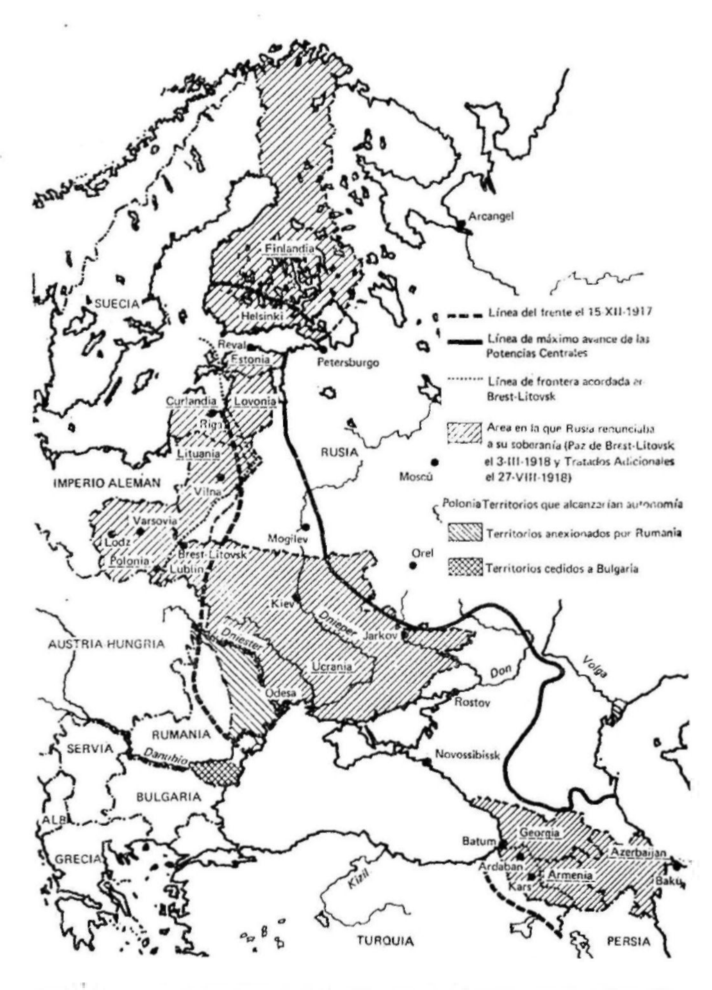


Fig. 14. La evolución del frente oriental y los resultados del tratado de paz para Europa oriental en 1917-1918. La línea acordada por los signatarios del tratado de paz de Brest-Litovsk indica el límite occidental sobre el que Rusia renuncia a cualquier pretensión o dominio.

mana. Czernin era casi del mismo parecer. Pero como de costumbre terminaron por imponerse Hindenburg y Ludendorff y así dio comienzo el 18 de febrero de 1918 un avance por ferrocarril de los ejércitos imperiales. En el curso de pocas semanas cayeron en las manos de los imperios centrales enormes extensiones de territorio ruso, sin que hubiese sido necesario combatir. Ahora pudo imponerse Lenin con su tesis de que todos los discursos sobre el inminente estallido de la revolución mundial no eran más que palabras vanas, y que era absolutamente necesario concluir una paz con las potencias centrales, por humillante que fuese, a fin de garantizar la continuidad del poder soviético. El 3 de marzo de 1918 los bolcheviques firmaban la paz de Brest-Litovsk sin nuevas negociaciones. Ahora las condiciones eran mucho más duras que las previstas en un principio; el dominio soviético quedó reducido al núcleo central de Rusia. Los bolcheviques se vieron obligados a aceptar la cesión definitiva de Polonia, Lituania y Curlandia, así como de los distritos de Kars y Ardahan. Ucrania, Livonia, Estonia, Finlandia y Armenia dejaban de formar parte de la federación de los Estados rusos.

Lenin consideró la paz de Brest-Litovsk como una segunda paz de Tilsit, destinada a proporcionar al régimen soviético el descanso necesario hasta que la revolución hubiese provocado también la caída del imperialismo en Europa central y occidental. Hasta aquel momento era preciso maniobrar, retroceder y al mismo tiempo aprovechar al máximo los antagonismos entre las potencias imperialistas. De momento el principal objetivo consistía en consolidar en el interior el régimen bolchevique y construir lo más pronto posible un «Ejército Rojo». Tschitscherin, el nuevo ministro del Exterior de la joven Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se esforzó por eso en establecer relaciones diplomáticas correctas con las potencias centrales. Al mismo tiempo, Zinóviev realizaba, a la cabeza de la nueva *Tercera Internacional Socialista,* una activa propaganda, que tenía como objeto fomentar los movimientos revolucionarios en Europa central. Por otro lado, los gobiernos de las potencias centrales estaban interesados en mantener el poder de los bolcheviques, ya que de cualquier otro grupo político de Rusia se tenía que esperar la anulación de la paz de Brest-Litovsk y tal vez la apertura de un nuevo frente oriental con la ayuda de los aliados.

Sin embargo, el desarrollo de las negociaciones de Brest-Litovsk había demostrado también con toda claridad que los grupos dominantes en Alemania y en Austria-Hungría estaban aún bien lejos de querer concluir una paz sin importantes ane-

xiones. Así, en la tercera semana de enero de 1918, en Viena, y al final de enero también en Berlín, Leipzig, Magdeburgo y en otras numerosas ciudades alemanas, tuvieron lugar grandes huelgas de masas, que demostraban claramente que la confianza de la opinión pública en la dirección política y militar del país había quedado profundamente afectada. No se podía ignorar ya la debilidad interna de los regímenes burocrático-autoritarios de los gobiernos centrales frente a las democracias del occidente europeo, en los que se conseguía realizar una política de unión nacional bajo una rígida dirección. En Austria-Hungría se añadía el agravante de que las nacionalidades eslavas se colocaron definitivamente en la línea de los políticos en el exilio, rompiendo con la monarquía. La deserción más grave fue la de Polonia, que a causa de la violación de sus pretensiones nacionales sobre Cholm Holm, asignada en Brest-Litovsk a Ucrania, se pasó además a la revuelta abierta.

A pesar de la crítica situación interna, se estaba decidido en Berlín a jugarse todo a una carta y alcanzar aún una paz a través de una victoria que asegurase a Alemania de una vez para siempre su posición de potencia mundial. Después del traslado al frente occidental de las tropas ya no necesarias en el Este, el Alto Mando disponía de un ejército escasamente superior en número a los ejércitos de los aliados. Ludendorff decidió por eso intentar una vez más resolver el conflicto con una nueva gran ofensiva al Oeste, antes de que las tropas americanas tuviesen tiempo de intervenir eficazmente. Fueron desechadas las advertencias de Friedrich Meinecke, Robert Bosch y Alfred Weber, los cuales aconsejaron hacer preceder la ofensiva de una nueva oferta de paz a la Entente, con el fin de fortalecer en las masas cansadas de la guerra la fe en la dirección política del país, y de convencerlas, llegado el caso, de la necesidad de un último gran esfuerzo. El 22 de marzo de 1918 las tropas alemanas atacaron entre Arras y S. Quentin logrando abrir una profunda brecha entre los ejércitos ingleses y franceses y haciendo tambalearse seriamente el frente aliado. París parecía de nuevo en peligro. En el cuartel general aliado reinaba una atmósfera de profunda crisis. Para garantizar en el futuro una mejor coordinación entre las fuerzas armadas aliadas era nombrado un comandante supremo: el general francés Foch. Una semana después del comienzo de la ofensiva alemana estaba claro que las tropas alemanas no tenían ya la fuerza suficiente para obtener resultados estratégicamente decisivos. Tampoco los nuevos grandes ataques de los ejércitos alemanes desencadenados en abril y mayo de 1918 en Flandes y en la región del Marne pudieron ya, a pesar de

considerables éxitos aislados, cambiar radicalmente la situación. Con el fracaso del nuevo ataque en la región del Marne, a mediados de junio de 1918, la ofensiva alemana había pasado su punto culminante. Ante el total agotamiento de las tropas alemanas, tremendamente diezmadas, Ludendorff se vio obligado a pasar a la defensiva. Se iniciaba un cambio de situación.

En la primavera y al principio del verano de 1918 la situación de las fuerzas armadas aliadas en Francia era, sin embargo, tan crítica que los aliados empezaron a pensar en la posibilidad de abrir de nuevo el frente en el Este. Después del fracaso de tímidos intentos de acercarse a los bolcheviques, se consideró en Londres y en París la idea de una intervención militar, ya que se tenían las más aventuradas suposiciones sobre el peligro de una penetración alemana en Siberia. Ya al principio de marzo de 1918 un contingente de tropas británicas desembarcó en Murmansk, con el objeto de impedir que el material bélico allí depositado cayese en manos de los alemanes y para cortar un nuevo avance de las tropas alemanas que operaban en Finlandia. Por las mismas razones el 6 de abril de 1918 unidades japonesas desembarcaron, con el respaldo de ingleses y franceses, en Vladivostok, siendo completadas progresivamente por tropas inglesas, francesas y finalmente americanas. Un papel decisivo en los planes de los aliados desempeñó, sin embargo, la Legión checa, que contaba con 30.000 hombres, y que precisamente en aquellos meses debía de ser trasladada, según un acuerdo entre Masaryk y el gobierno ruso, a través de Vladivostok, al frente occidental. Los checos, que estaban distribuidos a lo largo de todo el ferrocarril transiberiano de Penza hasta Vladivostok, entraron en conflicto con los soviets locales, y cuando Trotski ordenó el 25 de mayo de 1918 su desarme, pasaron a la insurrección armada, adueñándose en el curso de pocas semanas de todo el territorio siberiano. En la caótica situación en que se encontraba Rusia, un ejército de cerca de 30.000 hombres, dirigido con decisión, tenía gran importancia; los aliados decidieron por eso posponer el traslado de la legión a Francia y tratar a cambio de establecer un contacto entre las tropas checas situadas en los Urales y las tropas aliadas del mar Blanco, con el fin de restablecer el frente oriental. Así también los ingleses animaron a los japoneses a una intervención armada, y cuando éstos se negaron a actuar sin el apoyo de los Estados Unidos, Wilson se decidió, muy a pesar suyo, a mediados de julio, a hacer participar también a los USA en aquella acción. Al mismo tiempo, tropas inglesas avanzaban desde Persia hacia Bakú.

Aunque la intervención de los aliados estaba dirigida en primer lugar contra las potencias centrales, terminó por convertirse en una grave amenaza para el poder bolchevique, al favorecer la formación de ejércitos contra-revolucionarios de rusos blancos, como el del general Miller en el mar Blanco o el del general de los cosacos, Krasnov, en la región del Don, que se preparaban a hacer caer a los bolcheviques. Al principio de agosto los soviets se hallaban con el agua al cuello, tanto que Lenin no dudó en pedir la ayuda de los alemanes contra los ingleses en Murmansk. Lenin se decidió a dar este paso a pesar de que ya hacía algún tiempo que el Alto Mando alemán, aunque en gran parte contra la voluntad del ministerio del Exterior, se preparaba a incluir en la esfera del dominio alemán también Georgia y el Cáucaso, hallándose además en contacto con el general de los rusos blancos, Krasnov. En Alemania existían tendencias a intervenir contra el régimen bolchevique, pero aunque tal intervención tenía —sobre todo según Helfferich— óptimas posibilidades de éxito, se decidió en los círculos gubernamentales continuar apoyando a los bolcheviques en el poder. En aquellas circunstancias, y después de varios meses de negociaciones, el 27 de agosto de 1918 se llegó a la conclusión de una serie de acuerdos adicionales del de Brest, en los que se exigía de Rusia, entre otras cosas, el reconocimiento de la independencia de Estonia y de Livonia, así como de Georgia, imponiéndole además nuevas y graves obligaciones económicas, que aquélla difícilmente podía cumplir. Lenin aceptó este precio extremadamente alto a cambio de la renuncia explícita de Alemania a animar de cualquier manera las fuerzas anti-bolcheviques, y de la promesa de retirarse de todas las regiones rusas más allá de las fronteras de Ucrania, cuando se concluyese una paz general. Una nota secreta preveía acciones militares paralelas alemanas y soviéticas contra las tropas inglesas en Murmansk y Bakú. Los acuerdos adicionales representaban, en sí, una gran humillación para Rusia; pero al mismo tiempo pusieron provisionalmente fin a los planes ambiciosos de anexión elaborados sobre todo por el Alto Mando, inspirados en Alejandro Magno, y dieron así una relativa seguridad a los bolcheviques contra una intervención alemana. De esta manera los bolcheviques tuvieron la posibilidad de defenderse con mayor energía de la legión checoslovaca y de las unidades de rusos blancos.

Esta extraña pseudo-alianza entre los bolcheviques y los imperios centrales subsistió hasta los primeros días de noviembre de 1918, a pesar de los objetivos políticos tan opuestos de ambas partes. También ayudó a los bolcheviques a superar su cri-

sis de poder y dio seguridad a las potencias centrales ante la amenaza de un nuevo frente al Este. Las esperanzas de Alemania y de Austria-Hungría de poder mejorar eficazmente la desastrosa situación de los víveres y de las materias primas en el propio país por medio de importaciones de los territorios rusos, no se vieron cumplidas. Para poder realizar los envíos de trigo y de materias primas, relativamente modestos, que tuvieron por fin lugar, y para poder mantener el régimen de ocupación alemán en las vastas regiones del Este, era necesario disponer de un ejército de más de 500.000 hombres.

Por otro lado tampoco estas unidades, de las que se habían retirado las quintas más jóvenes y que por eso carecían casi de fuerza combativa, hubiesen podido cambiar la suerte de la guerra en el Oeste. El 8 de agosto de 1918 un ataque anglo-francés cerca de Amiens, en el que se emplearon por primera vez carros de combate en gran número, abrió una brecha profunda en el frente alemán, que ya no pudo ser cerrada, obligando a las tropas alemanas a la retirada en un amplio frente. Ante la falta total de reservas, por fin también el Alto Mando se convenció finalmente de que no se podía ya «esperar romper la voluntad de lucha de nuestros enemigos con acciones militares», y que sólo quedaba la posibilidad de «paralizarla progresivamente» por medio de una «defensa estratégica»[124]. Sólo a mediados de septiembre se paró nuevamente el frente a la altura de la «línea Sigfrido». Foch, sin embargo, no dio tregua a los soldados alemanes, completamente agotados, y ya el 25 de septiembre de 1918 lanzó una nueva ofensiva aliada de gran envergadura, en la que se emplearon por primera vez más de un millón de hombres de las fuerzas armadas americanas. Aún retrocedían en una encarnizada lucha defensiva los ejércitos alemanes, cuando ya parecía perfilarse una catástrofe militar. Con el fin de salvar al ejército alemán del total aniquilamiento en una batalla campal, Ludendorff decidió el 28 de septiembre dirigir inmediatamente una oferta de armisticio y paz al presidente Wilson y recomendar a las autoridades políticas la inmediata formación de un gobierno parlamentario sobre amplia base nacional. A la adopción de esta grave decisión contribuyó también, naturalmente, la evolución de la situación de los Balcanes. Un ataque de las fuerzas aliadas concentradas en Macedonia, que desde que Grecia había entrado en la guerra al lado de la Entente en junio de 1917, habían conseguido un punto de apoyo firme, condujo al desmoronamiento de Bulgaria; el 24 de septiembre de 1918 el gobierno Malinov, cansado de la guerra, había pedido un armisticio. El flanco sud-oriental de las potencias centrales quedaba así mortalmente

amenazado. Austria-Hungría, que ya el 14 de septiembre había dirigido en vano una oferta de paz a los USA, no podía oponer resistencia.

La opinión pública alemana y los círculos responsables no estaban en modo alguno preparados para la noticia de que Hindenburg y Ludendorff juzgaban ahora inevitable una inmediata oferta de paz. Casi nadie se había dado cuenta de la gravedad de la situación y ahora de un día para otro todo el edificio de grandes espectativas de objetivos de guerra grandiosos, construido sobre una propaganda febril, se venía abajo. El deseo de Ludendorff de que un gobierno parlamentario asumiese la responsabilidad de la ahora necesaria iniciativa de paz coincidía con las aspiraciones de los partidos de la mayoría del *Reichstag* de obtener ahora el paso al régimen parlamentario. El primer gobierno democrático de Alemania se formó el 3 de octubre de 1918 bajo la dirección del príncipe Max von Baden, quien trató en vano de obtener un aplazamiento, a fin de poder preparar diplomáticamente la oferta alemana de paz. El 3 de octubre de 1918 el gobierno alemán dirigía al presidente Wilson una nota en la que solicitaba su mediación para llegar rápidamente a la conclusión de la paz basada en los Catorce Puntos. Siguió un dramático duelo diplomático entre Wilson y el príncipe Max, en el curso del cual el presidente expresó con bastante claridad su parecer de que Alemania sólo podía esperar una paz aceptable rompiendo completamente con su actual régimen político y derribando a los Hohenzollern. Como Guillermo II dudaba en hacer lo inevitable, Wilson alentó la revolución de noviembre, que comenzó el 4 de noviembre con una insurrección de los marineros de Kiel, extendiéndose luego rápidamente a todas las grandes ciudades alemanas. Cuando, el 11 de noviembre de 1918, la delegación alemana, presidida por Erzberger, firmó el tratado de armisticio, sin que —contrariamente a las esperanzas de Ludendorff— sugiera en el interior del país resistencia alguna, la vieja Alemania imperial ya había caído.

La monarquía danubiana, acosada en el frente italiano, se hallaba en plena descomposición. Wilson había dado bruscamente a entender al gobierno austríaco, el cual se había sumado a la oferta alemana de paz, que ahora, después del reconocimiento de Checoslovaquia como nación beligerante, había que desechar la idea de una continuidad del Estado plurinacional. El manifiesto imperial del 17 de octubre de 1918, que prometía en el último momento a los pueblos de la monarquía su libre desarrollo en el marco de una confederación democrática de Estados nacionales, no tuvo ningún eco. Al final de octubre los pueblos de la monarquía tomaron en todas partes el poder

que había escapado a las manos de la burocracia imperial, creando los fundamentos de los Estados nacionales autónomos. La conclusión del armisticio, el 3 de noviembre de 1918, selló el destino de la monarquía habsbúrgica. El triunfo de las democracias de la Europa occidental sobre sus adversarios conservadores era completo; una gran época de la historia europea había hallado su fin.

Conclusiones

Al final de la Primera Guerra Mundial la vieja Europa de las cinco grandes potencias se había transformado tanto que resultaba irreconocible. En toda la Europa central y oriental los tradicionales sistemas de dominio se habían derrumbado, y en el caos político y económico que habían dejado, las fuerzas democráticas, socialistas, comunistas y conservadoras libraban una lucha encarnizada por el futuro orden político de los nuevos Estados nacionales que estaban surgiendo. Mientras la potencia soviética, que tenía que luchar aún por su propia existencia, perdía la ocasión de alcanzar una influencia política determinante en la evolución interna de Europa, los Estados Unidos ascendían a potencia dirigente de Occidente. El triunfo de la idea del Estado democrático parecía casi completo; sólo poco a poco tendría que demostrarse que el «derecho de la autodeterminación de los pueblos» y el principio de nacionalidad no bastaban por sí solos para crear una Europa definitivamente «segura para la democracia»; sobre todo porque Wilson no lograba contener eficazmente las aspiraciones hegemónicas de las potencias occidentales triunfantes.

Europa tuvo, sin embargo, que ceder bien pronto su función hegemónica en el mundo, que hasta entonces había podido ejercer sin discusión, a los dos grandes bloques opuestos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, esta última impotente en aquel momento, pero no por mucho tiempo. El papel histórico de la Gran Bretaña como el mayor banquero del mundo había llegado a su fin; ahora tocaba su turno a los Estados Unidos, que habían concedido grandes créditos a todas las potencias de la Entente. La Corona británica tuvo que aceptar que los *dominions* reivindicasen, también en las cuestiones de política exterior, amplia libertad de acción y que apareciesen independientes sobre la escena internacional.

Pero no sólo las relaciones de política exterior, sino también las estructuras sociales de Europa habían cambiado radicalmente bajo los efectos de la guerra. La necesidad de construir grandes industrias bélicas y de poner todas las energías económicas de los pueblos al servicio de la guerra había determinado una ingerencia cada vez mayor de la burocracia estatal en la

vida social. El régimen del *laissez faire* del siglo XIX y de principios del XX pertenecía definitivamente al pasado. La aceleración, forzada artificialmente, del proceso de industrialización para hacer frente a las crecientes necesidades bélicas, acompañada en todas partes de enormes aumentos en los precios y en los salarios, había provocado además cambios sociales de gran alcance. Tanto la capa superior de la burguesía industrial como la clase trabajadora habían mejorado considerablemente su posición social a costa de las clases medias. Los sindicatos habían conquistado casi en todas partes la igualdad formal de derechos frente a los empresarios. La media y pequeña burguesía habían tenido que soportar, en cambio, notables pérdidas en su situación social y económica. Durante la guerra la agricultura había podido disfrutar de la ventaja de una demanda casi ilimitada sin tener en cuenta los precios; sin embargo, su importancia económica frente a la industria y el comercio había disminuido sustancialmente. Al menos, en la Europa central y occidental la sociedad industrial pluralista había triunfado definitivamente sobre las tradicionales formas de economía orientadas hacia la agricultura aun cuando seguían persistiendo fuertes residuos de las estructuras sociales preindustriales.

Los cambios en las estructuras sociales repercutieron también en la evolución política. A la «pérdida del centro», la debilitación económica de las clases medias, correspondió en el campo político un endurecimiento de las posiciones de los grupos y de los partidos de derecha y una radicalización progresiva de la izquierda socialista. Los desplazamientos sociales acaecidos durante la Primera Guerra Mundial aceleraron de esta forma la caída del liberalismo europeo, promoviendo en todas las partes una polarización de los agrupamientos políticos. En aquellas circunstancias el programa de Wilson para una reorganización de Europa según principios democráticos se encontraba con condiciones sociales extremadamente adversas. Casi todos los Estados europeos carecían de aquel mínimo de homogeneidad social y política que constituye el primer presupuesto del funcionamiento democrático de un Estado. La miseria económica dificultaba en todas partes la reconstrucción, contrastes ideológicos extremos envenenaban la atmósfera política. La guerra había terminado, pero el nacionalismo exasperado que la había originado no había desaparecido en absoluto; por el contrario, éste adoptaba en muchos países formas aún más extremas, aún más fanáticas. Ahora, después de que las viejas élites políticas habían tenido que retirarse, era necesario encontrar nuevas formas de selección de la clase política dirigente, incluso en los

Estados de la Europa occidental, donde las circunstancias excepcionales de la guerra habían llevado a la subordinación de los parlamentos y partidos a algunas grandes personalidades; y esta transición estaba acompañada casi siempre de grandes conmociones sociales. Así entró Europa al final de la Primera Guerra Mundial en una fase de inquietud interna y de inestabilidad política que continúa hasta nuestros días.

Anexo 1

Extracción de carbón en millones de Tm.

Año	Gran Bretaña	Alemania		Francia	Bélgica	Rusia
		Carbón mineral	Lignito			
1880	149,0	47,0	12,1	19,4	16,9	?
1890	184,5	70,2	19,1	26,1	20,4	16,0
1900	228,8	109,3	40,5	33,4	23,5	15,8
1910	268,7	152,8	69,5	38,5	23,9	26,2 (1908)
1913	292,0	191,5	87,5	40,8	22,8	36,3

Población (en millones)

Año	Gran Bretaña	Alemania	Francia	Bélgica	Rusia
1890	34,3	44,2	40,0	6,1	94,3 (1897)
1910	42,1	58,5	41,5	7,4	155,4 (1913)

Producción de hierro fundido en millones de Tm.

Año	Gran Bretaña	Alemania	Francia	Bélgica	Rusia
1880	7,9	2,7	?	0,6	? 0,6 (1887)
1890	8,0	4,7	1,9	0,8	0,9
1900	9,1	8,5	2,7	1,0	2,9
1905			3,0		
1908					2,8
1910	10,2	14,7	4,0	1,9	
1913	7,5 (?)	17,0	5,0		4,5

Producción de acero y hierro dulce en millones de Tm.

Año	Gran Bretaña	Alemania	Francia	Bélgica	Rusia
1880	3,7	1,5	1,3	0,6	? 0,6 (1887)
1890	5,3	3,2	1,4	0,7	0,8
1900	5,9	7,4	1,9	0,9	2,7
1908			2,4	1,9	2,4
1910	7,6	13,1	2,8		4,3
1913					

De J. H. Clapham, *The economic development of France and Germany 1815-1914*, Cambridge, 1951, y *Cambridge Economic History*, vol. IV, parte II, pp. 837, 844 (estos últimos datos reducidos a Tm.). Indices demográficos de *Cambridge Economic History*, vol. IV, parte I, pp. 61 ss.

Anexo 2

Inversiones en el exterior de Gran Bretaña, Francia y el Reich alemán desde 1880 a 1914

Año	Gran Bretaña en millones de esterlinas [1]	Francia		Reich alemán	
		en millones de francos	= millones de esterlinas	en millones de marcos [2]	= millones de esterlinas
1880	1.189	150 [2]	= 595	5	= 245
1890	1.935	2.030 (28) [2]	= 780 (1.110)	10	= 983
1900	2.397	270	= 1.053	—	—
1914	4.004	440 [2,4]	= 1.766	25	= 1.223

[1] De A. H. Imlah, *Economic Elements in the Pax Britannica*, Cambridge (Mass.), 1958, pp. 73 ss.
[2] De H. Frankel, *Capital Investment in Africa*, Londres, 1938, p. 18.
[3] De Ronald E. Cameron, *France and the Economic Development of Europe, 1800-1914*, Princeton, 1961, pp. 534 ss. (según estimación de Théry).
[4] Cameron da para 1912, 400-420 (según estimación de Neymark), o 435 (según estimacin de White).

Anexo 3

Las nacionalidades en el Imperio austro-húngaro en 1910

Alemanes	12.000.000 = 23,9 %
Húngaros	10.100.000 = 20,2 %
Checos	6.550.000 = 12,6 %
Eslovacos	1.950.000 = 3,8 %
Croatas	2.625.000 = 5,3 %
Servios (de religión musulmana)	1.925.000 = 3,8 %
Servocroatas en Bosnia	650.000 = 1,2 %
Polacos	5.000.000 = 10,0 %
Rutenos	4.000.000 = 7,9 %
Rumanos	3.200.000 = 6,4 %
Eslovenos	1.300.000 = 2,6 %
Italianos	1.000.000 = 2,0 %

De Robert A. Kann, *The Multinational Empire*, vol. II, Nueva York, 1950, p. 305.

Notas

[1] RANKE, L. v.: *Über die Epochen der neueren Geschichte*, Darmstadt, 1954, p. 165.

[2] Cit. en TH. P. NEILL: *The Rise and Decline of Liberalism*, Milwaukee, 1953, p. 250.

[3] Cit. en A. W. SALOMONE: *Italy in the Giolittian Era. Italian Democracy in the Making 1900-1914*, Filadelfia, 1960, p. 24.

[4] MALLOCK W. H.: *Social Equality*, Londres, 1894, p. 22.

[5] BURCKHARDT, J.: *Gesammelte Werke*, vol. 4. Weltgeschichtliche Betrachtungen, Darmstadt, 1956, p. 70.

[6] Véase J. CHAMBERLAIN: *Speeches*, ed. por CH. W. BOYD, 2 vols., Londres, 1914; vol. 1, p. 5.

[7] WEBER, M.: *Gesammelte politische Schriften*, 2.ª ed. Tübingen, 1958, p. 23.

[8] El concepto de «jingoism» procede de una canción popular de G. W. HUNDT, compuesta en los años setenta del siglo XIX, la cual se refería a la política exterior expansionista de Disraeli, y que adquirió pronto una extraordinaria popularidad en los music halls.

Su texto es: We don't want to fight/ but, by Jingo, if we do/ We've got the men/ We'we got the ships/ We've got the money too.

De ahí se desarrolló más tarde el concepto inglés de «jingoism» que encuentra aproximadamente su equivalente en el «chauvinisme» francés y en el «Nationalismus» alemán.

[9] Cit. en W. J. MOMMSEN: *Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920*, Tübingen, 1959, p. 87.

[10] Véase el discurso parlamentario de Ferry del 21-VII-1885, cit. en: H. Brunschwig, *French Colonialism 1871-1914, Myths and Realities*, Londres, 1966, p. 80.

[11] LORD ROSEBERY: *Question of Empire*, Londres, 1900, p. 15.

[12] En un discurso al Royal Colonial Institute en el año 1893, cit. en R. Koebner y H. D. Schmidt, *The Story and Significance of Imperialism. A Political Word 1840-1960*, Cambridge, 1964, p. 192 s.

[13] TREITSCHKE, H. v.: *Politik*. Conferencias pronunciadas en la Universidad de Berlín. Ed. por M. Cornicelius. Leipzig, 1911, vol. 2, p. 156.

[14] *Ob. cit.*, vol. I, p. 42.

[15] DE LAVISSEAU, J. L.: *Principes de colonisation*, París, 1897, p. 30, al final de una exposición detallada de la política francesa de la asimilación de los hombres de color.

[16] LEROY-BEAULIEU, A.: *La Révolution et le Liberalisme*, París, 1890, p. 215.

[17] Véanse las resoluciones de Hamburgo del partido social-reformista alemán del año 1899, en W. Mommsen, *Deutsche Parteiprogramme*, Munich, 1960, pp. 83 ss., donde puede leerse: «Gracias al desarrollo de los medios de transporte modernos, es probable que la cuestión de los judíos se convierta en el curso del siglo XX en un problema mundial y que como tal sea resuelta por los otros

pueblos a la vez y de manera definitiva, mediante el total aislamiento y (cuando lo mande la legítima defensa) finalmente la destrucción del pueblo judío.»

[18] Cit. en PH P. POIRER: *The Advent of the Labour Party*, Londres, 1958, p. 139.

[19] MOMMSEN, W.: *Ob. cit.*, p. 350.

[20] *Protokoll des Parteitages der Sozialdemokratische Partei Deutschlands zu Erfurt*, 1891 (Acta del Congreso del Partido socialdemocrático alemán de Erfurt de 1891), Berlín, 1891, p. 172.

[21] *Ibid.*, p. 136.

[22] Cit. en G. LEFRANC: *Histoire des doctrines sociales dans L'Europe contemporaine*, París, 1960, p. 181.

[23] Cit. en J. BRAUNTHAL: *Geschichte der Internazionale*, 2 vols., Braunschweig, 1961-1963, vol. 1, p. 288.

[24] Cit. en V. R. LORWIN: *The French Labour Movement*, Cambridge (Mass.), 1954, pp. 312 ss.

[25] LENIN, V. I.: *Obras completas*, vol. 5, Berlín, 1955, p. 482.

[26] *Ob. cit.*, vol. 5, p. 496.

[27] *Ob. cit.*, vol. 5, p. 474.

[28] Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática (1905), en: *Obras completas*, vol. 9, Berlín, 1957, p. 123.

[29] *Ob. cit.*, p. 122; véase Estado y revolución, en: *Obras completas*, vol. 25, Berlín, 1960, pp. 393 ss.

[30] *Ob. cit.*, pp. 486 s.

[31] Según M. G. MULHALL: *Dictionary of Statistics*, 4.ª ed., Londres, 1909, p. 615.

[32] Este y todos los otros datos demográficos según *The Cambridge Economic History of Europe*, vol. 6, primera parte, Cambridge, 1965, pp. 60 ss.

[33] ROSENBERG, H.: *Grobe Depression und Bismarckzeit.* Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa, Berlín, 1967, p. 129.

[34] Véanse los diagramas, p. 46.

[35] *The Imperialism of British Trade* (anónimo), en: «The Contemporary Review», vol. 76 (1899), p. 294.

[36] *Cambridge Economic History, ob. cit.*, p. 503.

[37] HELFFERICH, K.: *Deutschlands Volkswohlstand*, 1888-1913, 5.ª ed., Berlín, 1915, p. 65.

[38] *Statistiches Jahrbuch für de Preu ischen Staat*, 1915, Berlín, 1916, p. 324.

[39] Cit. en P. I. LYASHCHENKO, *History of the National Economy of Russia*, New York, 1949, p. 543.

[40] SOMBART, W.: *Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert*, Berlín, 1903, pp. 545 ss.

[41] Una desiatina corresponde a 1,0925 ha.

[42] LÜTGE, F.: *Deutsche Sozial-und Wirtschaftsgeschichte*, 2.ª ed., Berlín, Gotinga-Heidelberg, 1960, p. 447.

[43] SOMBART, W.: *Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen*, München-Leipzig, 1913, p. 463.

[44] WEBER, M.: *Gesammelte Politische Schriften*, 2.ª ed., Tübingen, 1958, p. 320; también *ob. cit.*, p. 60, así como *Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, vol. 1, Tübingen, 1920, pp. 202 ss.

[45] Véase W. J. MOMMSEN, *ob. cit.*, pp. 94 ss.

[46] MOMMSEN, W.: *Deutsche Parteiprogramme*, München, 1960, p. 264.

[47] BORN, K. E.: *Der soziale und wirtschaftliche Strukturwandel Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts*, en Moderne Deutsche

Sozialgeschichte, editado por H.-U. Wehler. Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Köln, 1966, p. 279.

[48] Véase también G. BRY: *Wages in Germany 1871-1945*, Princeton, 1960, pp. 73 ss. y p. 270, cuyos estudios confirman en total las tablas de Kuczinsky. Desgraciadamente los diagramas de Bry no se prestan a ser reproducidos aquí.

[49] Desde 1897 un rublo equivalía al valor de 2,16 marcos oro; 200 rublos equivalían a 432 marcos oro. En Alemania los salarios medios se hallaban aproximadamente en 900 marcos oro al año.

[50] En 1913 las dos organizaciones de empresarios se unieron en la «Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände» (Unión de la federación de empresarios alemanes).

[51] El art. 253 del código penal dice: «El que para procurarse para sí o para otros una ventaja patrimonial ilegítima, obligue a una persona por la fuerza o la amenaza a una acción, al consentimiento o a una omisión ,deberá ser castigado por exacción con menos de un mes de reclusión. También el chantaje es punible.»

[52] Cit. en S. MACCOBY, *English Radicalism, 1886-1914*, Londres, 1953, p. 21.

[53] Véase A. W. SALOMONE: *Italy in the Giolittian Era. Italian Democracy in the Making, 1900-1914*, Filadelfia, 1960, p. 30.

[54] FÜRST CHLODWIG ZU HOHENLOHE-SCHILLINGSFÜRST, *Denkwürdigkeiten aus der Reichskanzlerzei*, Stuttgart-Berlín, 1913, p. 475.

[55] Cit. en H. MOMMSEN: *Die Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage im habsburgischen Vielvölkerstaat*, Wien, 1963, p. 298.

[56] *Ob. cit.*, pp. 335 ss.

[57] ANWEILER, O.: *Die Rätebewegung in Rubland 1901-1921*, Leiden, 1958, p. 71.

[58] Bülow a Hatzfeld, 3.4, 1898, en *Die grobe Politik der Euròpäischen Kabinette 1871 a 1914*. ed. por J. Lepsius, A. Mendelssohn-Bartholdy und F. Thimme. 40 vol., Berlín, 1922-1927, vol. 14, I, N. 3.785, p. 207.

[59] Bülow a Hatzfeld, 17.1, 1898; minuta de Holstein. *Die geheimen Papiere Friedrich von Holstein*, ed. por N. Rich y M. H. Fischer, ed. alemana de W. Frauendienst, vol. 4.º, Göttingen, 1963, p. 55.

[60] *Verhandlungen des Reichstages*. Informes estenografiados. IX Legislatura, V Sesión 1897-1898, vol. I, p. 60.

[61] *Grobe Politik*, vol. 16. N. 4.744, p. 250.

[62] Holstein a Radolin, en *Die geheimen Papiere Friedrich von Holstein*, ibíd., p. 230.

[63] *Friedrich von Holstein Lebensbekenntnisse in Briefen an eine Frau*, edit. por H. Rogge, Berlín, 1932, p. 231.

[64] Aunque Inglaterra y Dinamarca no se hallaban en guerra, el 16 de agosto de 1807 la flota británica atacaba de improviso Copenhague y obligaba a los daneses, después de un bombardeo de la capital de tres días y el desembarco de 30.000 hombres, a entregar su flota de guerra. Los ingleses querían eliminar así la eventualidad de que Napoleón I pudiese atraer a Dinamarca de su parte con medios diplomáticos o por la fuerza, para utilizar luego la flota danesa contra ellos. Cit. en A. J. Marder, *From the Dreadnought to Scapa Flow. The Royal Navy in the Fisher Era 1904-1919*, vol. I: *The Road to the War 1904-1914*, London, 1961, pp. 112 ss.

[65] WORMSER, G.: *La rúpublique de Clemenceau*, París, 1961, p. 203.

[66] CHASTENET, J.: *Jours inquiets et jours sanglants 1906-1918*, París, 1957, p. 34.

[67] WEBER, M.: *Gesammelte Politische Schriften*, 1.ª ed., München, 1921, pp. 451 ss.
[68] ESCHENBURG, TH.: *Das aiserreich am Scheidewege*, Berlín, 1929, p. 298.
[69] WEBER, M.: *Ob. cit.*, p. 456.
[70] NAUMANN, F.: *Bülow*, en «Die Hilfe», año XIV, N. 3, del 19-I-1908.
[71] El 9 de diciembre de 1909. *Stenographische Berichte der Verhandlungen des deutschen Reichstages*. Sesión XI, 1909-1910, vol. 258, pp. 166 ss.
[72] Bethmann Hollweg a Eisendecher, fin de 1911. Legado Eisendecher. Archivo político del Ministerio del Exterior. Véase W. J. MOMMSEN, *Die Au enpolitik des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg, 1909-1914 als Problem der Politischen Führung*, München, 1969.
[73] El 16 de febrero de 1912, *Stenographische Berichte der Verhandlunen des deutschen Reichstages*, vol. 283, p. 67.
[74] *Stenographische Berichte der Verhandlungen des deutschen Reichstages*, vol. 291, p. 6155 B.s.
[75] MICHELS, R.: *Storia Critica del Movimiento Socialista Italiano*, Florencia, 1927, p. 404.
[76] KOCHAN, L.: *The Struggle for Germany 1914-1945*, Edinburgh, 1963, p. 123.
[77] LENIN, V. I.: *Obras completas*, vol. 18, Berlín, 1962, p. 99.
[78] *Ob. cit.*, p. 93.
[79] *Grobe Politik*, vol. 24, N. 8217, p. 104.
[80] SIEBERT, B.: *Diplomatische Aktenstücke zur Ententepolitik*, Berlín, 1929, pp. 109 ss.
[81] *Grobe Politik*, vol. 28, N. 10325, p. 213.
[82] *Grobe Politik*, vol. 28, N. 10060, p. 178.
[83] JACKH, E.: *Kiderlen Wächter, der Staatsmann und Mensch*, vol. 2, Stuttgart, 1924, p. 129.
[84] Cit. en G. W. F. Hallgarten: *Imperialismus vor 1914*, 2.ª ed., München, 1963, vol. 2, p. 238.
[85] JACKH, E.: *Ob. cit.*, vol. 2, p. 127.
[86] HAMMANN, O.: *Bilder aus der letzten Kaiserzeit*, Berlín, 1922, p. 88.
[87] *Documents Diplomatiques Français*, ed. por el Ministère des Affaires Etrangères, París, 1929 s., vol. 12, N. 234.
[88] *Schulthess Europäischer Geschichtskalender*, 1911, pp. 204 ss.
[89] *Preubische Jahrbücher*, noviembre 1910, p. 268. Véase L. Dehio, *Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert.*, ed. de bolsillo, Frankfurt am Main, 1961, pp. 66 ss. y pp. 71 ss.
[90] TIRPITZ, A. v.: *Politische Dokumente*, Stuttgart, 1924, vol. 1, pp. 207 ss.
[91] Véase Schebeko a Neratov el 15 (2) de septiembre de 1911: «Una solución pacífica de la actual crisis política, parece ahora muy probable, gracias a la actitud conciliante del Kaiser Guillermo; sin embargo, no pasará sin dejar rastro en Alemania. En el país se tiene cada vez más conciencia de la enemistad que tienen los otros por Alemania, y del peso demasiado grande para sus fuerzas, impuesto por la necesidad de potenciar su potencia militar sin resultados concreto para el país. El deseo de salir de la difícil situación actual y de poder finalmente utilizar el poder al que se dedicaban tantas energías y reservas populares, puede obligar a Alemania a arriesgar en un futuro próximo un encuentro con aquella potencia que considera su enemiga irreconciliable en el presente y en el

futuro.» *Die internationales Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus, 1878-1917*, ed. alemana editada por O. Hoetzsch, serie 3, vol. 1, N. 443, pp. 559 ss.

[92] *Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis*, ed. por F. Stieve, 1924, vol. 2, p. 273.

[93] *Grobe Politik*, vol. 33, N. 12339, p. 295.

[94] *Grobe Politik*, vol. 33, N. 12263, p. 204.

[95] *Grobe Politik*, vol. 39, N. 15612, pp. 119 ss.

[96] Véase *Grobe Politik*, vol. 36, II, anexo al N. 14587, p. 786.

[97] Cit. en E. Weber: *The Nationalist Revival in France*, Berkeley, 1959, p. 108.

[98] Riezler, K.: *Grundzüge der Weltpolitik*, Berlín, 1913, p. 229.

[99] Carta del 19-II-1914 a Eisendecher. Fondo Eisendecher. Archivo político del Ministerio del Exterior. Véase W. J. Mommsen, *Die Aub enpolitik des Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg, 1909-1914, als Problem der politischen Führung.*

[100] *Grobe Politik*, vol. 39, N. 15843, p. 554.

[101] Cit. en E. Zechlin: *Motive und Taktik der Reichsleitung 1914*, en Der Monat, fás. 2·9, 1966, p. 92.

[102] Cit. en A. Vagts, M. M. Warburg & Co.: *Ein Bankhaus in der deutschen Weltpolitik*, en «Vierteljahresschrift für Wirtschafts-und Sozialgeschichte», vol. 45, 1958, p. 353.

[103] *Julikrise und Kriegsausbruch*, introd. de I. Geiss. Hannover, 1963-1964, vol. 1, N. 3.

[104] Cit. en K. D. Erdmann: *Zur Beurteilung Bethmann Hollweg*, en «Geschichte in Wissenschaft und Unterreicht», XV, 1964, p. 536.

[105] Geibs: *Ob. cit.*, N. 135.

[106] Erdmann: *Ob. cit.*, p. 536.

[107] Geiss: *Ob. cit.*, vol. 2, N. 575.

[108] Kriegel, A., y Becker, J. J.: *La guerre et le mouvement ouvrier français*, París, 1964, p. 117.

[109] Moltke, H. v.: *Erinnerungen, Briefe, Dokumente 1877-1916*, Stuttgart, 1922, p. 385.

[110] En W. Basler: *Deutschlands Annexionspolitik in Polen und im Baltikum 1914-1918*, Berlín, 1962, pp. 382 ss.

[111] Scherer, A., y Grunewald, J.: *L'Allemagne et les problèmes de la paix pendant la première guerre mondiale*, vol. 1, París, 1962, p. 17.

[112] Regierte der Kaiser? Kriegstagebücher, Aufzeichnungen und Briefe des Chefs des Marine-Kabinetts Admiral Georg Alexander von Müller, 1914-1918, ed. por W. Görlitz, Göttingen, 1959, p. 206.

[113] Birnbaum, K. E.: *Peace Moves and U-Boot Warfare*, Stockholm, 1958, p. 52.

[114] «Reichsarchivwek Der Weltkrieg», vol. 11, p. 446.

[115] *The Times* del 29 de septiembre de 1916. Véase la exposición del propio Lloyd George en *War Memoirs of Davis Lloyd George*, vol. 2, London, 1933, pp. 853 ss.

[116] «Official Statements of War Aims and Peace Proposals December 1916 to November 1918», ed. por J. Brown Scott, vol. 1, Washington, 1921, p. 35.

[117] «Die Russische Revolution, 1917», *Dokumente*, ed. por M. Hellmann, München, 1964, p. 181.

[118] «Official Statements of War Aims and Peace Proposals», *Ob. cit.*, vol. 1, p. 92.

[119] Steglich, W.: *Die Friedenspolitik der Mittelmächte, 1917-1918*, Wiesbaden, 1964, vol. 1, p. 42.

[120] Lenin, V. I.: *Obras completas*, vol. 26, Berlín, 1961, p. 6.

[121] *Ibidem.*
[122] Deutsch-sowjetische Beziehungen von den Verhandlungen von Brest Litowsk bis zum Abschlub des Rapallovertrages, vol. 1, Berlín, 1967, pp. 194 ss.
[123] Official Statements of War Aims and Peace Proposals, *Ob. cit.*, vol. 1, p. 238.
[124] LUDENDORFF, E.: *Unkunden der Obersten Heeresleitung*, Berlín, 1920, p. 501.

Indice alfabético

Indice de Ilustraciones



impreso en editorial andrómeda, s. a.
av. año de juárez 226-local c/col. granjas san antonio
del. iztapalapa-09070 méxico, d. f.
dos mil ejemplares y sobrantes
24 de abril de 1987

HISTORIA UNIVERSAL

1. ALIMEN, M. H./STEVE, M.J. **Prehistoria**

2. CASSIN, E./BOTTERO, J./VERCOUTTER, J. **Los imperios del Antiguo Oriente. I: Del paleolítico a la mitad del segundo milenio**

3. CASSIN, E./BOTTERO, J./VERCOUTTER, J. **Los imperios del Antiguo Oriente.II: El fin del segundo milenio**

4. CASSIN, E./BOTTERO, J./VERCOUTTER, J. **Los imperios del antiguo Oriente.III: La primera mitad del primer milenio**

5. BENGSTON, H. **El mundo mediterráneo en la Edad Antigua.I: Griegos y persas**

6. GRIMAL, P. **El mundo mediterráneo en la Edad Antigua. II: El helenismo y el auge de Roma**

7. GRIMAL, P. **El mundo mediterráneo en la Edad Antigua. III: La formación del Imperio romano**

8. MILLAR, F. **El mundo mediterráneo en la Edad Antigua. IV: El imperio romano y sus pueblos limítrofes**

9. MAIER, F.G. **Las transformaciones del mundo mediterráneo: siglos iii-viii**

10. DHONDT, J. **La alta Edad Media**

11. LE GOFF, J. **La baja Edad Media**

12. ROMANO, R./TENENTI, A. **Los fundamentos del mundo moderno: Edad Media tardía, Reforma, Renacimiento.**

13. MAIER, F. G. **Bizancio**

14. CAHEN, C. **El Islam. I: Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio otomano**

15. VON GRUNEBAUM, G. E. **El Islam. II: Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días**

16. HAMBLY, G. **Asia central**

17. EMBREE, A./WILHELM, F. **India. Historia del subcontinente desde las culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés**

18. VILLIERS, J. **Asia sudoriental antes de la época colonial**

19. FRANKE, H./TRAUZETTEL, R. **El Imperio chino**

20. HALL, J. W. **El imperio japonés**

21. SÉJOURNÉ, L. **América Latina. I: Antiguas culturas precolombinas**

22. KONETZKE, R. **América Latina. II: La época colonial**

23. BEYHAUT G. **América Latina. III: De la independencia a la crisis del presente**

24. VAN DULMEN. **El periodo de las guerras de religión: 1550-1648**

25. BARUDIO, G. **La época del absolutismo y de la Ilustración. 1648-1779**

26. BERGERON, L./FURET, F./KOSELLECK, R. **La época de las revoluciones europeas. 1780-1848**

27. PALMADE, G. **La época de la burguesía**

28. MOMMSEN, W. J. **La época del imperialismo. Europa, 1885-1918**

29. FIELDHOUSE, D. K. **Los imperios coloniales desde el siglo xviii**

30. ADAMS, W. P./BURCHELL, R./KILLICK, J. R. **Los Estados Unidos de América**

31. GOEHRKE, C./HELLMANN, M./LORENZ, R./SCHEIBERT, P. **Rusia**

32. BERTAUX, P. **África: desde la prehistoria hasta los estados actuales**

33. BIANCO, L. **Asia contemporánea**

34. PARKER, R. A. **El siglo xx: Europa : 1918-1945**

35. BENZ, W./GRAML, W. **Europa después de la segunda guerra mundial**

36. BENZ, W./GRAML, W. **Problemas mundiales entre dos bloques de poder**

COLABORADORES

Akamatsu, P., CNRS, París (Historia del Japón moderno)
Aliman, M.-H., CNRS, París (Laboratorio de Genealogía del Cuaternario, Bellevue, París)
Ankel, C., Dr. phil., Universidad de Bonn (Prehistoria)
Arkell, A. J., D. Litt. (Prehistoria)
Aron, R., Profesor de Sociología, Sorbona

Balout, M. L., Profesor, Museo de Historia Natural e Instituto de Paleontología Humana, París (Prehistoria)
Bechert, H., Profesor de Indología, Universidad de Göttingen
Bengtson, H., Profesor de Historia antigua, Universidad de Munich
Benningsen, A. de, EPHE; París, Profesor de Historia y Sociología del Islam ruso
Berciu, D., Profesor de Arqueología, Universidad de Bucarest
Bergeron, L., CNRS, París (Historia contemporánea)
Berteaux, P., Profesor en la Sorbona (Historia de Africa)
Beyhaut, G., Profesor de Historia latinoamericana, Universidad de Montevideo, y EPHE, París
Bianco, L., EPHE y ENS, París (Historia contemporánea de China)
Bivar, A. D. H., Universidad de Londres (Historia de Asia central)
Bordes, F., Profesor de Prehistoria, Universidad de Burdeos
Bottéro, J., EPHE, París (Historia del Oriente antiguo)
Bresciani, E., Profesora de Egiptología, Universidad de Pisa
Buddruss, G., Profesor de Indología, Universidad de Maguncia

Cahen, Cl., Profesor de Historia islámica, Sorbona
Carrère d'Encausse, H., Fundación Nacional de Ciencias Políticas, París (Historia de Asia Central)
Caskel, W., Profesor de Estudios orientales, Universidad de Colonia
Cassin, E., CNRS, París (Asiriología)
Cerny, J., Profesor de Egiptología, Universidad de Oxford

De Meulenaere, H., Profesor de Egiptología, Museo Real de Arte e Historia, Bruselas
Derchain, Ph., Profesor de Egiptología, Universidad de Estrasburgo.
Dhondt, J., Profesor de Historia medieval, Universidad de Gante
Dupront, A., Profesor de Historia moderna, Sorbona

Edzard, D. O., Profesor de Asiriología, Universidad de Munich
Eissfeldt, O., Profesor de Estudios bíblicos, Universidad de Halle
Elisseeff, V., EPHE, París (Historia del arte y de la cultura del mundo chino-japonés)
Embree, A. T., Profesor de Indología, Universidad de Columbia

Falkenstein, A. †, Profesor de Estudios orientales, Universidad de Heidelberg
Ferembach, D., CNRS, París (Prehistoria)

ENS=École Normale Supérieure
EPHE=École pratique des Hautes Études
CNRS=Centre National de la Recherche Scientifique

Fieldhouse, D. K., Universidad de Oxford (Historia de la Commonwealth)
Finley, M. I., Jesus College, Cambridge (Historia económica y social de la Antigüedad)
Franke, H., Profesor de Sinología, Universidad de Munich
Frye, R. N., Profesor de Estudios iranios, Universidad de Harvard
Furet, F., EPHE, París (Historia moderna y estadística económica)

Gimbutas, M., Profesora de Antropología, Universidad de California, Los Angeles
Grimal, P., Profesor de Filología clásica, Sorbona (Historia de Roma)
Grunebaum, G. E. v., Profesor de Historia del Próximo Oriente y Director del Near Eastern Center, Universidad de California, Los Angeles

Hajianpur, M., Universidad de Cambridge (Historia de Asia Central)
Hall, J. W., Profesor de Historia del Japón, Universidad de Yale
Hambly, G., **British Council**, Nueva Delhi (Historia de Asia Central)
Hait, J.-J., Profesor de Prehistoria, Universidad de Estrasburgo
Houwink Ten Cate, Ph. H. J., Profesor de Historia del Oriente antiguo, Universidad de Amsterdam

Jeannin, P., EPHE, París (Historia moderna y estadística económica)
Jettmar, K., Profesor de Prehistoria, Universidad de Heidelberg

Karageorghis, V., Dr. phil., Departamento de antigüedades, Nicosia (Prehistoria)
Kienitz, F. K., Dr. phil. (Egipto)
Kirkbride, D., Copenhague (Prehistoria)
Koenigswald, G. H. R. v., Profesor de Prehistoria, Universidad de Utrecht
Konetzke, R., Profesor de Historia ibérica y latinoamericana, Universidad de Colonia
Koselleck R., Profesor de Historia moderna, Universidad de Bochum
Kossack, G., Profesor de Prehistoria e Historia antigua, Universidad de Kiel

Labat, R., Profesor en el Collège de France (Historia del Oriente antiguo)
Lamb, A., Universidad australiana de Camberra (Historia de Asia Central)
Laming-Emperaire, A., Sorbona (Prehistoria)
Leakey, L. S. B., Museo Coryndon, Nairobi (Prehistoria)
Le Goff, J., EPHE, París (Historia y Sociología de la Edad Media)
Lemercier-Quelquejay, Ch., EPHE, París (Historia de Asia Central)
Lê Thàn Khôi, Profesor del Instituto de Estudios del Desarrollo Económico y Social, París (Historia del sudeste asiático)

EPHE=École Pratique des Hautes Études

Maier, F. G., Profesor de Historia antigua, Universidad de Constanza
Malamat, A., Profesor en la Universidad hebrea de Jerusalén (Historia del Oriente antiguo)
Mauny, R., Profesor en la Sorbona (Historia y etnología de Africa)
Meuleau, M., CNRS, París (Culturas del Oriente antiguo)
Millar, F. G. B., Queen's College, Oxford (Historia de Roma)
Mommsen, W. J., Dr. phil., Profesor de Historia moderna, Universidad de Colonia

Otten, H., Profesor de orientalismo, Universidad de Marburgo

Palmade, G., ENS, París (Historia económica y social)
Parker, R. A. C., Queen's College, Oxford (Historia moderna)
Pierce, R. A., Profesor, Universidad de Ontario (Historia de Asia Central)
Postan, M. M., Profesor de Historia económica, Universidad de Cambridge

Robert, J., Profesor de Ciencias políticas, co-director de la Casa franco-japonesa, Tokio
Romano, R., Profesor de Historia económica, EPHE, París

Sauter, M. R., Profesor de Prehistoria, Universidad de Ginebra
Saveth, E. N., Profesor de Historia social, New School for Social Research, Nueva York
Séjourné, L., México (Historia y cultura de la América precolombina)
Sevcenko, I., Profesor de estudios bizantinos, Universidad de Harvard
Smith, M., Profesor de Historia judía, Universidad de Columbia, Nueva York
Steve, M.-J., CNRS, París/Niza (Arqueología)

Talbot Rice, T., Edimburgo (Historia de los escitas)
Tenenti, A., EPHE, París (Historia del humanismo)
Trauzettel, R., Dr. phil., Universidad de Munich (Sinología)

Vercoutter, J., Profesor de Egiptología, Universidad de Lille
Vierhaus, R., Profesor de Historia moderna, Universidad de Bochum
Villiers, J., Dr. phil., British Council en Atenas (Historia del sudeste asiático)

Wilhelm, F., Dr. phil., Profesor de Indología y Tibetología, Universidad de Munich.
Willey, G. R., Profesor de Prehistoria, Universidad de Harvard

Yoyotte, J., Profesor de Egiptología, EPHE, París

cole Normale Supérieure
École Pratique des Hautes Études
Centre National de la Recherche Scientifique

HISTORIA DE EUROPA SIGLO XXI

La **HISTORIA DE EUROPA SIGLO XXI** ofrece una interpretación de los acontecimientos vividos en el Continente a partir de la Alta Edad Media y hasta la Segunda Guerra Mundial, sin soslayar los aspectos sociales, económicos y culturales de cada momento histórico.

Los autores, especialistas en el tema que abordan, han tenido en cuenta las últimas aportaciones de la investigación, pero han escrito su obra —que si bien está integrada en una colección tiene unidad propia— con una prosa adecuada, de modo que los datos de la erudición resulten asequibles a un amplio núcleo de lectores.

Volúmenes publicados:

Hale, J. R.: La Europa del Renacimiento (1480-1520).

Elton, G. R.: La Europa de la Reforma (1517-1559).

Elliott, J. H.: La Europa dividida (1559-1598).

Stoye, J.: El despliegue de Europa (1648-1688).

Ogg, D.: La Europa del Antiguo Régimen (1715-1783).

Rudé, G.: La Europa revolucionaria (1783-1815).

Droz, J.: Europa: Restauración y Revolución (1815-1848).

Esta **HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI**, preparada y editada inicialmente por Fischer Verlag (Alemania), sigue un nuevo concepto: exponer la totalidad de los acontecimientos del mundo, dar todo su valor a la historia de los países y pueblos de Asia, Africa y América.

Resalta la cultura y la economía como fuerzas que condicionan la historia.

Saca a la luz el despertar de la humanidad a su propia conciencia.

En la **HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI** han contribuido ochenta destacados especialistas de todo el mundo.

Consta de 34 volúmenes, cada uno de ellos independiente, y abarca desde la prehistoria hasta la actualidad.

